CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA
LA LEY, LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD EN PANAMÁ

Por: Lcdo. Juan A Tejada Mora, M. A.

I

Al tratar sobre la "modernización" del Estado en materia de Ley, Justicia y Seguridad, tengo que incurrir en la vieja distinción entre dos aspectos básicos e íntimamente relacionados entre sí: la cuestión que tiene que ver con los fines y metas a que debiera tender una sociedad para ser justa en una medida aceptable; y la otra que tiene que ver con los medios y acciones eficientes para concretarlos.

Me refiero a fines sobre cuya necesidad existe acuerdo casi unánime: libertad, paz, seguridad, bienestar básico, e igualdades de oportunidades para todos y no sólo para los sectores afluentes.

Como estamos básicamente de acuerdo en cuanto a los fines y metas a que debe propender una sociedad para ser justa, la controversia surge al tratar de identificar valores intermedios, tipos de organización idóneos y vías de acción o instrumentos eficientes para el logro cabal de aquellos fines superiores. Y no solamente su identificación como tales, sino también su funcionalidad práctica; ésto es, su eficacia en dirección a la vigencia real de tales fines. Véase entonces que en este ámbito la cuestión es de naturaleza mayormente técnica por lo que su tratamiento eficaz requiere de recursos económicos y de conocimiento científico adecuados, de los que la mayoría de los países adolecen en altísimo grado.

II

La prevalencia de la Ley, la Justicia y la Seguridad conforma lo que nuestra doctrina democrática clásica ha venido identificando con el concepto de "Estado de Derecho" o sus equivalentes: el "Imperio del Derecho" y la "rule of law" (1). Estas nociones recogen la idea básica de que la ley y las instituciones están por encima de la voluntad del gobernante, y que éste al igual que los gobernados, está sometido a reglas establecidas por aquéllas, cuya vigencia solamente puede asegurarse mediante una estructura jurídica y política, tales como la separación de los órganos del poder público que garantice una administración de justicia independiente y un sistema eficaz en el control de la arbitrariedad estatal.

Al reconocerse el Estado de Derecho como uno de los medios e instrumentos básicos para el desarrollo económico en libertad y el establecimiento de una sociedad justa, me interesa aportar algunas ideas y datos en torno a su viabilidad actual en Panamá.

III

Creo que no es dable hablar de "modernización" en cuanto a fines y metas a que debe propender la sociedad panameña, para ser justa. El largo y duro camino hacia el afianzamiento del Estado de Derecho en Panamá se inició en 1903 y tuvo un desarrollo progresivo desde entonces hasta 1968, cuando fuerzas adversas al mismo dieron rienda suelta al proceso de deterioro del imperio de la ley, que hizo crisis durante la segunda mitad de los años ochenta.

La dictadura militar desembocó en la real y total ignorancia por el Estado de los fines y metas altruistas que motivaron el desarrollo de una sociedad justa e inteligente.

Lo ocurrido a partir de enero de 1990 no constituye en sí una "modernización" de tales fines y metas, sino propiamente una "restauración" institucional de los mismos en la mente y en la conducta del régimen civil que reivindicó el mandato recibido en las urnas.

En 1990 se inició un real proceso de restauración del Estado de Derecho que

quedó consolidado -con todas sus imperfecciones- al cabo de la gestión presidencial del señor Endara, y que de allá para acá no muestra signos categóricos de deterioro.

La diferencia crucial entre el régimen de la restauración y el que le antecedió, estriba en que, en el segundo, el menoscabo del Estado de Derecho se constituyó prácticamente en una política oficial del Gobierno; y, en el primero, los fines del Estado de Derecho orientaron el grueso de las acciones gubernamentales. Y lo que es más importante, las señales de su vigencia se hicieron más notorias, ya que se adoptaron acciones y conductas concretas que -bajo mi percepción personal- fueron cruciales para la restauración del Estado de derecho, a saber:

- Elecciones libres (legislativas parcial, en 1991; referéndum, en 1992; elecciones generales, en 1994).

- Imparcialidad del Órgano Judicial en los procesos políticos-electorales.

- Independencia judicial.

IV

La existencia y consolidación del Estado de Derecho responde a las fuerzas históricas y a la cultura política, que mueven y rigen una sociedad dada. En su promoción y defensa participan los partidos y módulos políticos, los grupos no-gubernamentales organizados para la defensa de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes y las asociaciones gremiales altruistas. Pero la institucional y más directa responsabilidad por la construcción y el cotidiano perfeccionamiento del Estado de Derecho corresponde al Órgano Judicial, al Ministerio Público y a las agencias del orden público; así como a los cuerpos auxiliares de la justicia, a saber, las facultades de derecho y la abogacía. Cabría entonces preguntarse el papel que cada una de estas instituciones ha desempeñado en el camino del perfeccionamiento del Estado de Derecho en Panamá. (2).

V

Los cambios y tendencias que presenciamos hoy en el espectro político, social y económico plantean serios desafíos al Estado de Derecho; ésto es, al sistema que parece asegurar mejor el orden y seguridad legal, en libertad. Desafíos que derivan sobre todo por el crecimiento demográfico, tales como los que plantean el desempleo y la violencia; las crisis en los servicios públicos; el desarrollo industrial y de las poblaciones con sus efectos adversos al medio ambiente y a la ecología. Al lado de estos fenómenos se observa la práctica eliminación de las fronteras en cuanto a la propagación del narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado en materia financiera e industrial, y otros fenómenos que como éstos y aquéllos responden a realidades globales del mundo de hoy, sin que para ello exista distinción entre países pobres y ricos.

En los días que corren, la prensa nacional e internacional nos trae noticias sobre desarreglos críticos en el orden público.

La violencia y el caos generalizado en Liberia mueven a masas humanas a buscar refugio en la embajada norteamericana, en Monrovia, desesperademante. Atacante suicida mata a 16 niños y a una maestra en colegio escocés. Más de 1,000 menores fueron asesinados en Río de Janeiro, en 1994. Masacre de campesinos "sin tierra" en Brasil. Se conmemora el primer aniversario del asesinato terrorista de más de 100 niños y adultos en Oklahoma City, E.U.A.

Se destaca la gravedad de la generalizada corrupción gubernamental en Italia, Méjico, Brasil, Colombia y Venezuela y los esfuerzos locales y regionales que se realizan para tratar de conjurarlo; siendo prominente el hecho de haberse aprobado recientemente el primer intento serio de los países del continente para perseguir este delito multilateralemente al aprobarse la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Grupos radicales en Estados Unidos han promovido una virtual rebelión contra el sistema de justicia, al operar vecinos los llamados "common-law courts" al margen y en desafío del Órgano Judicial norteamericano, con sus propios jueces y funcionarios. Se sostiene que ya operan tribunales de este tipo en 40 estados, que son apoyados por grupos para-militares tales como los "Freemen" que desafían ahora al FBI en Montana (The New York Times, 17 de abril de 1996).

Una treintena de presos mantenían a 18 altos funcionarios(entre ellos al presidente de Tribunal de Justicia estadual) como rehenes, en una cárcel brasileña, para exigir mejor trato. Alrededor de 5 mil detenidos permanecían sublevados en cinco cárceles argentinas.

En una recensión hecha por David Burnham (The New York Times, Book World/18 de febrero de 1996), quien ha escrito sobre justicia criminal y cuestiones regulatorias en E.U.A. por más de 30 años, resume su labor investigativa en afirmaciones como las siguientes: "Claramente, el sistema masivo de justicia penal en Nueva York era un desastre. Un buen número de verdaderamente peligrosos ladrones y narcotraficantes no eran condenados... Jóvenes agentes de policía, inicialmente idealistas, no eran adecuadamente adiestrados y supervisados. La maquinaria política que indirectamente mandaba en los tribunales estaba permitiendo que un número significativo de jueces bien pagados ignoraran sus responsabilidades. Los fiscales de la ciudad estaban abrumados por la lluvia de casos y, en algunos casos, compartían la bandeja de la corrupción con la policía."

Panamá comparte con los otros países un estado de inquietud e incertidumbre derivado de la carencia de recursos materiales y humanos para aliviar las enormes dificultades que confronta en su desarrollo integral.

Es notoria la delincuencia que estremece nuestras calles, afecta seriamente los negocios y, en general, la paz ciudadana.

Funcionarios autorizados de Panamá, señalan los serios problemas de la producción y tráfico de drogas ilegales en la frontera colombo-panameña que ignora por completo las delimitaciones políticas de uno y otro Estado.

En Panamá, el Director Nacional de Corrección explica que en las cárceles panameñas existen siete mil doscientos reclusos para una capacidad en los centros penales de cuatro mil quinientos; y que el ochenta por ciento de la población reclusa no ha sido aún condenada. (LA PRENSA, Plana 2, edición del 21 de abril de 1996).

En cuanto al sistema judicial y al estado de los derechos humanos en Panamá, no cabe, por razón de tiempo, analizar ampliamente la naturaleza y carácter de las críticas que han sido endilgadas a su alrededor. Comentaré, sin embargo, el informe preparado por la Embajada de Estados Unidos de América en Panamá sobre la situación de los derechos humanos (4), que es fuente importante, por razones obvias, para la formación de la imagen de nuestro país y de su confiabilidad ante los inversionista extranjeros.

Entre los aspectos más sobresalientes del informe se cuentan los siguientes:

1. No hubo informes de asesinatos políticos o de carácter extrajudicial.
2 No hay evidencia creíble de que muertes aisladas vinculadas a huelgas laborales fueran atribuibles a acción policial.
3. No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.
4. Hay informes de corrupción a muchos niveles de ambas fuerzas policiales (Policía Nacional y Policía Técnica Judicial). Pero se reconoce que ambas fuerzas tomaron medidas de limpieza internas, con respecto a un número aproximado de 600 miembros. Las acusaciones de conducta inapropiada se comprobaron en un 65%.
5. Si bien la policía, en forma general, desempeña sus deberes en una forma profesional y restricta, hubo varios casos de uso excesivo de la fuerza debido sobre todo a pobreza de liderazgo de parte de oficiales y falta de buena supervisión de parte de los jefes civiles.

6. Se sugiere que la policía todavía usa violencia física para controlar a los detenidos durante la detención e interrogatorios iniciales.
7. El sistema penitenciario continúa siendo deplorable.
8. En la justicia policiva se continúa violando el derecho de defensa y al debido proceso.
9. El sistema de detención preventiva y la demora en los juicios penales sigue siendo un serio problema de derechos humanos.
10. No hubo informe sobre exilios forzosos.
11. El número de casos atendidos por los abogados de oficio sigue creciendo notablemente.
12. La frustración creada por la absolución de los procesados en casos de mucho interés público, ha creado un movimiento en pro de la reforma del sistema de jurados.
13. Ha habido quejas creíble por allanamientos indiscriminados.
14. El Gobierno respeta, en forma general, y en la práctica los derechos de prensa y de expresión.
15. Existe libertad académica.
16. Se respeta el dereho de asociación y el de reunión.
17. No hay barreras legales a la participación pública de las llamadas minorías (mujeres, razas, etc.) pero su participación real no es proporcional a su número.
18. Existe libertad religiosa.

VI

El Informe se refiere a "un ineficiente y frecuentemente corrupto sistema judicial penal". Lo que es materia de críticas originadas en diversas fuentes y motivaciones, unas legítimas y otras no; unas de buena fe y otras no, Sobre esta materia específica, la propia Corte Suprema, ha reconocido la necesidad de emprender un programa en este campo dirigido por la Oficina de Prevención de Conductas Contrarias a la Etica Judicial, creada mediante el Acuerdo N° 6 de 15 de enero de 1996 de la Sala de Negocios Generales.

VII

Agregado a lo anterior hay que señalar la presión que sobre el Estado de Derecho pone el sistema económico de mercado y su globalización. Hay que tener en cuenta, como lo advierte GALBRAITH (4), que la variedad de los servicios y bienes que produce este sistema económico pudiese crear discrepancias más notables entre los que están en posición de beneficiarse de los mismos, y los que no. Está también la amplia banda de actividades y servicios estatales que se hace necesario para el efectivo funcionamiento de la económica privada. Con el desarrollo económico también crece la urgencia de esos servicios públicos. Más comercio requiere más carreteras; más consumo requiere más y mejor disposición de la basura; más transporte aéreo requiere más aeropuertos, y personal y equipo especializado para guardar la seguridad de los vuelos. Mientras mayor el nivel de la actividad económica, la protección del ciudadano y de los negocios deviene más importante. En la medida en que los alimentos han aumentado en variedad, hay más conciencia que se especifique el contenido, que se indique los aditivos, etc., para prevenir una posible contaminación.

Galbraith señala los factores que fuerzan la regulación y la intervención estatal: necesidad de proteger el ambiente frente a la industria y la urbanización; a los trabajadores, ante los efectos adversos de la maquinaria económica; y a los consumidores de los efectos de las prácticas comerciales malsanas, tales como las monopolísticas.

Por todo lo anterior, con el desarrollo económico la acción regulatoria del Estado se hace más importante, en todo sentido. Y es que sin intervención gubernamental la moderna economía no puede asegurar un desempeño económico global que sea satisfactorio y estable. El libre mercado podría resultar en especulación dañosa, peor en época de crisis. La clase de acción gubernamental pudiera ser materia de controversia, pero perece haber poca duda sobre que la acción regulatoria es responsabilidad del Estado.

Frente a esta realidad, el Estado panameño efectúa un programa legislativo

que se parea con las políticas económicas que ha emprendido para establecer una económicas de mercado dentro del marco de la globalización económica y comercial. Me refiero alas leyes en materia de competencia y represión de prácticas monopolísticas; propiedad industrial; "flexibilización" laboral; zonas procesadoras para la exportación; protección a la vida silvestre y el ambiente, etc.

Estas vías de acción adoptadas por el actual Gobierno, ésto es, economía de mercado y apertura al comercio mundial, corresponden al estrato de los medios e instrumentos que el gobierno considera ahora idóneos para alcanzar una económica sostenible; y como tales son sustancia de polémicas entre funcionarios del gobierno y sectores que consideran que tales vías no son las apropiadas. En todo caso la medida del éxito de tales vías de acción será determinada por el eventual alcance que tengan en el logro de los fines y metas fundamentales de una sociedad en la que todos los panameños tengamos igual oportunidad a una vida reconfortante.

VIII

Vale repetir la premisa básica de esta intervención: para que haya desarrollo económico en medio de una sociedad justa y libre, una de las condiciones sine qua non la constituye el hecho de que la misma encuentre apoyo en un Estado de Derecho. Ya dijimos también que es pilar fundamental del Estado de derecho la existencia de un sistema judicial eficiente, idóneo, e independiente. Y que los órganos conducentes a éstos son la judicatura, el Ministerio Público, las facultades de derecho y la abogacía. ¿Qué han hecho estos órganos y que deberán hacer más para cada cual cumplir su misión en este escenario?

En tan corto tiempo, demos un vistazo al primero. Los otros podrían estar comprendido en una conferencia especializada sobre estos temas con el concurso de la APEDE y de representante de la entera comunidad jurídica.

En cuanto a la Corte Suprema de Justicia -cabeza del Órgano Judicial- el momento es propicio para resaltar los serios esfuerzos realizados por ésta con vista a su modernización, tanto en lo relativo al camino hacia el perfeccionamiento de los ideales que propugna el Estado de Derecho como a los medios e instrumentos eficaces para tratar de lograrlos. (5)

La Corte ha sido cuidadosa en hacer respetar el principio de la separación de poderes, consignado en el Artículo 2 de la Constitución. Así, por ejemplo, desde 1991, la Corte ha sostenido que actos administrativos que violaban este principio son nulos.

La Corte amplió la protección de los derechos humanos. Por ejemplo: desde 1991, extendió la aplicación del habeas corpus (tradicionalmente admitida solo cuando la persona estaba físicamente privada de su libertad) a casos en que, dada la orden de detención, la persona no ha sido aún detenida; la Corte sostiene que hay un derecho a la intimidad exigible judicialmente; la Corte reconoció legitimidad a una asociación ambientalista (ANCON) para reclamar reparación de derechos ecológicos.

A instancia de la Corte, se creó un nuevo proceso contencioso-administrativos de protección a los derechos humanos, incluso los previstos en Tratados internacionales.

En cuanto a la modernización de las vías procesales para acelerar la justicia penal, cabe mencionar en 1995, de nuevas instituciones procesales penales (la audiencia preliminar el proceso abreviado y el juicio directo).

Respecto de la modernización en materia de personal es importante destacar que, de acuerdo con estadísticas oficiales desde 1991 hasta fines de 1995, se ha convocado más de 900 concursos para ocupar puestos en el Órgano Judicial, lo que significa que cerca de un 50% de los cargos sujetos a la carrera judicial han sido ocupados mediante concursos públicos de méritos.

En 1995 entraron en funcionamiento el Tribunal Superior de Menores y el Tribunal Superior de Familia; todos los magistrados fueron nombrados con estricto apego a las normas de la carrera judicial.

Desde le punto de vista de la modernización en la tramitación de proceso, la cifras de resultados son interesantes. En 1989, la Corte decidió cerca de 865 casos mientras que en 1994 se resolvieron 2,467 y en 1995 mas de 2,500. En 1994, de 29,227 casos que ingresaron al sistema de justicia penal fueron resueltos 26,099. La Corte ha instalado una red informática de consulta jurisprudencial en materia constitucional. La misma contiene más de 1,700 expedientes, recopilados desde 1975, y está disponible para el uso por abogados y el público en general.

El instituto de la Defensoría de Oficio forma parte del Órgano Judicial desde 1991. Atiende casos penales, de familia, civiles, de menores, agrarios y administrativos. Durante 1994, los 36 defensores de oficio del Instituto participaron en 4, 286 audiencias; y en 1995, en 6,541 audiencias.

El proceso de eliminación de las fronteras, no solo en cuanto al comercio, la económica y el ejercicio soberano, nos conducirá a una integración jurisdiccional acelerada por las necesidades de la asistencia judicial internacional y de la creciente uniformidad de las legislaciones. Lo cual requerirá la formación de jueces y abogados "globales" ésto es, profesionales cuya visión y conocimientos vaya más ala de los ámbitos parroquiales. En esta dirección marchan los propósitos de la Organización de las Cortes Supremas de las Américas, en procesos de estructuración por, como indica su nombre, estará integrada por todas las Cortes Supremas de América, y que tendrán su sede en Panamá. Sus objetivos fundamentales son la promoción y fortalecimiento de la independencia judicial y del Estado de Derecho en el hemisferio. Las actividades específicas que se ha impuesto el actual Presidente de este organismo (que lo es el Dr. Arturo Hoyos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá) es un catálogo de respuestas a los cambios de hoy:

1. Servir como vínculo permanente entre los sistemas judiciales de las Américas y promover la cooperación judicial internacional en el hemisferio.

2. Apoyar programas de educación judicial.

3. Compartir información sobre asuntos judiciales.

4. Promover la asistencia técnica regional para la administración de justicia.

5. Estudiar la administración de los sistemas judiciales del hemisferio y desarrollar procedimientos y estructuras administrativas modelo.

6. Promover la modernización de los tribunales de justicia a través de la automatización y de la tecnología.

7. Promover la modernización de los tribunales de justicia a través de la automatización y de la tecnología.

8. Promover la acceso a la justicia.

9. Promover la adopción y el cumplimiento de normas de ética judicial; y

10. Llevar a cabo reuniones regionales o hemisféricos sobre temas jurídicos especializados de interés para los miembros. (6).

BIBLIOGRAFÍA:

(1) Para una sucinta explicación del origen y naturaleza de estas nociones, véase Arturo Hoyos, Justicia, Democracia y Estado de Derecho, Serie Ensayos y Monografías Judiciales, Corte Suprema de Justicia. Panamá, 1996, páginas 1-2.
(2) Para una extensa presentación de la labor efectuada por la Corte Suprema

de Justicia, véase Memorias del Órgano Judicial, 1994-1995; El Órgano Judicial en Democracia, editado por la Corte Suprema de Justicia, Panamá, 1994; y la obra descrita en la cita anterior. La sección VIII de este documento toma prestado largamente de esas publicaciones.

(3) Esta discusión sigue de cerca la elaboración de John Kenneth Galbraith en The Good Society, The Humane Agenda, Houghton Mifflin Company, Boston, New York. 1996, pág. 18 y ss.

(4) U.S. Embassy Panamá. Country Report on Human Rights Practices for 1995 (Panamá).

(5) Para diagnósticos hecho por los propios personeros del Órgano Judicial, véase las publicaciones a que hacen referencia las publicaciones descritas en las llamadas (1) y (2), anteriores. Además Arturo Hoyos, Desafíos que enfrenta la judicatura en Latinoamérica. cuadernos de Educación Judicial N° 2, Panamá, Julio 1994. Eduardo Molino Mola, La Corte Suprema y la libertad de prensa. Cuadernos de Educación Judicial N° 4, Julio 1994. Carlos H. Cuestas G., Faltas en la Etica Judicial en Panamá, Mayo 1995. Carlos H. Cuestas G., El Habeas Corpus Preventivo, Septiembre 1995. Igualmente, ver el informe presentado por el Comite Panameño de los Derechos Humanos, año 1995.

(6) Ver acuerdo N° 263 adoptado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 28 de diciembre de 1995 (publicado en la gaceta oficial N° 22953 del 17 de enero de 1996), por medio del cual Panamá aprobó el Convenio Constitutivo de la Organización de las Cortes Supremas de las Américas.

ÍNDICE

PONENCIA i

PLENO 1

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AMEGLIO MONCADA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARTÍN FLORES VALLEJOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA ORDEN GENERAL DEL DÍA (#29), DE 12 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDGAR SEGARRA VIVAR, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN AUTOS VARIOS N° 279 de 12 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DUODÉCIMA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR EL LICENCIADO FERNANDO A. SOLORZANO, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALMA DURBY GARCÍA DE JORDÁN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 27 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 6

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ANA DELGADO TORRES, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 47 DE 22 DE JUNIO DE 1995, PROFERIDA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 12

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ALBERTO CHANG EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PATRONATO DE LA FERIA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIA, ARTESANAL, TURÍSTICA Y FOLKLÓRICA DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE 1996, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARINA MORALES SOTO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RENATO RUSSO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 0492 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR BERRÍOS & BERRÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO 86 DEL 15 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 16

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO ROMERO ARAUZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RAFAEL STANZIOLA TORRES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FISTAN, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1842 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO SEGUNDO

DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 18

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GENEVA BERGUIDO DE GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO PABLO CÁCERES CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1861 DE 6 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE FRANCISCO ORCASITA NG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑORAS DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL, LUMY FÁBREGA DE ARIAS Y DE LA SEÑORITA INÉS MARÍA FÁBREGA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 22

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADAMES FRANCESCHI EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROLFO DE OBARRIO, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTA DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR DAMARIS MEDINA DE ÁLVEO Y MELQUIADES ÁLVEO MONTILLA, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 25

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDISÓN GUILLÉN FERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA N° 1 DE 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ERNESTO SANTIAGO SELLES ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE ENOC E. IBARRA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 6 DE 9 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 31

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PROPIEDADES TOKIMI, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 24 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 32

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA, RAMO PENAL, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996). 34

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ARISTIDES B. FIGUEROA G., EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA REPUBLIC NATIONAL BANK, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO CHANG, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA ALDERETE DE ARAUZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FERIA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIA, ARTESANAL, TURÍSTICA Y FOLKLÓRICA DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL RENÉ APARICIO ALBA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 38

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ E. HERRERA CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DE AMADO GONZÁLEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 20 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 39

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA SAQUINA JARAMILLO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AEROLíNEAS PACíFICO ATLÁNTICO, S. A. (AEROPERLAS), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA CJ-9 DEL 28 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9, ASÍ COMO CONTRA LA SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 41

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CID AGUILERA CASTILLO, NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CID AGUILERA AYALA, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 44

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS AMEGLIO MONCADA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON, CONTRA EL PROVEÍDO DEL 14 DE FEBRERO DE 1996, DICTADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 45

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN GERMÁN KAHN KATTENBURG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DENOMINADA AUTOS VARIOS N° 506, DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

. 47

RECURSO DE HABEAS CORPUS 48

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REY HAROL LÓPEZ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 48

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y ENRIQUE DÍAZ PANEZO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 49

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL MILCIADES MENDOZA MENA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SÓSIMO MÁRQUEZ ÁLVEO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS MANUEL PÉREZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS TORRES PALMA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS GABRIEL SAAVEDRA REYNA, CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR SERRANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO LAILA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REX JANSEN ROBERTS, CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL EUGENIO MORALES VILLALOBOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO BLISS EVANS CONTRA LA FISCALÍA

PRIMERA DELEGADA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 76

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO ESTRADA CAMARENA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 78

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ PRESCOTT EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCIANO CASTILLO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL ALEXIS ALVARADO CONTRA EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 86

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS AXEL BUSTO CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 88

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO SÁNCHEZ PINTO CONTRA EL FISCAL SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 92

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARINA MORALES SOTO A FAVOR DE PEDRO RENATO RUSSO Y CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FIDEL ALVAREZ Y MARIANELA SOLÍS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 96

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN ALBERTO CAMARENA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, AGENCIA REGIONAL DE DROGAS DE COCLÉ Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO BROWNE ROSE CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996). 99

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO RÍOS RÍOS CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 101

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE SERRANO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 102

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIBORIO BATISTA CONTRA LA FISCAL CUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEX ENRIQUE ALANDETE Y HÉCTOR JULIO LÓPEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GIL ORTEGA ORTEGA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIN WEI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 109

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO Y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HASSAN HUSSEIN AHMAD CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 112

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDELFIDIA MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 114

HABEAS CORPUS A FAVOR DE OLIVER SERRANO SALDAÑA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 116

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL TOMÁS JIMÉNEZ YANETH CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERACLIO DE LEÓN HERRERA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 118

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR OMAR RONCEVIC CÓRDOBA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE

(19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 119

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILBERTO ABDIEL CEDEÑO GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 122

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL ENRIQUE IBARRA PARRA, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 124

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AZAEL PALMA Y ORLANDO RÍOS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 130

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS FERNANDO PIMIENTA BARRÍA, CONTRA EL FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GERARDO RODRÍGUEZ STERLING CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANDY LUZER PARDO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 133

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE CARLOS CONSTANTINO CISNEROS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARGELIS DEL CARMEN PERALTA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 138

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOE JOHN MEDINA VERNAZA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 139

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLADYS REYES RESTREPO, CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADA GAITÁN ESPINOSA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO ALBERTO AGUILERA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 146

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO G. SÁNCHEZ BARSALLO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996. 147

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ Y BALDOMIR CRISSAJ CONTRA LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 148

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CAMILO BURROWS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 150

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME MANUEL AROSEMENA CHANG, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 151

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR ARROCHA BULTRÓN Y RAMÓN MORALES CONTRA EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA VICTORIA CASTRO C. CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 155

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA DORA ALVENIS LLANOS, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 161

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CABEZA DIXON CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 163

HABEAS CORPUS A FAVOR ANTHONY WILLIAMS ROAD CONTRA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 164

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 165

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS DELGADO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 166

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 168

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ALBERTO PITTY PORTER EN REPRESENTACIÓN DE JORGE CHAVARRÍA, NAPOLEÓN CHAVARRÍA, GEORGINA CHAVARRÍA Y OTROS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DEL DECRETO N° 8, DE 31 DE FEBRERO DE 1972, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 17.041, DE 19 DE FEBRERO DE 1972. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RAMÍREZ & CIGARRUISTA EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 6 DEL DECRETO N° 3, DE 2 DE ENERO DE 1974, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA N° 2377. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 174

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL DELGADO EN REPRESENTACIÓN DE ANIANO PINZÓN, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CONTRA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1066 DEL DECRETO DE GABINETE N° 252, DE 3O DE DICIEMBRE DE 1971. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 183

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. RAFAEL RODRÍGUEZ CONTRA EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE RAMOS LUCÍA, POR EL DELITO DE LESIONES CON RESULTADO DE MUERTE EN PERJUICIO DE HIGINIO CUBILLA MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 186

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS FRANCISCO CHIARI & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOHN MADURO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PUNTA CHAME TURÍSTICA, S. A. CONTRA LA CONCESIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS A LA EMPRESA SERVICIOS DE DRAGADO Y CABOTAJE, S. A. Y SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 188

LOS LICENCIADOS GUILLERMO A. COCHEZ JR. Y RAÚL J. OSSA SOLICITAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 27 DE 25 DE JUNIO DE 1986, DICTADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCH0 (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 193

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO BERMÚDEZ MEANA EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE, INGENIERO GONZALO CÓRDOBA Y POR LOS LICENCIADOS ERIC SINGARES Y JERÓNIMO ADMADÉ, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO LUIS CARLOS ESCALONA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL IDAAN, CONTRA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 42 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1993, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 196

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EMILIO ROYO LINARES CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96, DEL 5 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 201

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICENCIADOS JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ (PRINCIPAL) Y RAFAEL A. RODRÍGUEZ (SUSTITUTO), EN REPRESENTACIÓN DE VICTORIA MOLINA VIUDA DE RODRÍGUEZ, CONTRA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY N° 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 202

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA CHANDECK EN NOMBRE DE SVEN VALDEMAR WAGE CONTRA EL ACTO DE AUTORIDAD S/N DE 13 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 204

TRIBUNAL DE INSTANCIA 209

SUMARIAS SEGUIDAS AL H. L. FRANZ OLMEDO WEBWER Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL SINDICATO ÚNICO DE CONDUCTORES DE TAXIS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

QUERELLA CRIMINAL INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL FREDERICKSON CONTRA LA JUNTA DIRECTIVA, COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 210

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CARLOS CEDEÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS N° 3992, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1995, N° 4036 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, AMBOS EXPEDIDOS POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 212

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO Y PENAL, PROMOVIDO POR QUEJA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN CONTRA LA LICENCIADA DAMARYS CABALLERO DE ALMENGOR, JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 213

QUEJA POR DESACATO INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS DOCTORES ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR Y VICENTA YOUG DE PÉREZ, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 216

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. COCHEZ CONTRA LA LICENCIADA EVA CAL, MAGISTRADA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 218

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN QUE POR EL SUPUESTO DELITO DE USURPACIÓN, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD, EN PERJUICIO DE YACARÉ INTERNACIONAL, S. A. SE LE SIGUE A OLMEDO GUILLÉN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 219

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 22 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 221

IMPEDIMENTO. ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 23 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO WILFREDO SÁENZ F. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 222

IMPEDIMENTO. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SAMUEL QUINTERO MARTÍNEZ EN CONTRA DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY N° 3 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 225

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 226

1JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO, ITZEL VEGA QUINTERO y LUCINDA MORCILLO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE RAQUEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁZQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 226

EURIBIADES MANUEL TORRERO GIL, RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JUAN FALCÓN MONTENEGRO Y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 227

BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

INMOBILIARIA LOS POZOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE M. A. C. INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

ADOLFO ESPINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE SALVADOR SOBENIS A ADOLFO ESPINO Y CESAR MORENO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 235

IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR PATRICIO ANTONIO MERELO E IDALIDES EDIS DE ARJONA DE MERELO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 236

INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A. M. P. M., S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 237

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN QUE PROMOVIERAN ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA ORTEGA DE CORRO, FRANKLIN CORRO ARJONA Y CÉSAR CORRO ARJONA EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

DAVID FERNANDO TORRES SOLÍS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A TRADERS AND BROKERS INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 240

ROBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ Y JEANNETTE MARY MITCHEL RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN POST-MORTEM INCOADO POR DÉBORA GARCÍA DE CARUSONE CONTRA EARL FRANKLIN MITCHELL (Q. E. P. D.). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 243

JEFFREY S. MILOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A TOMERA LYNETTE WINELAND. MAGISTRADO PONENTE. ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 244

BETEL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ROGELAG, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

LUIS R. GALVÁN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CASA CONFORT, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 253

CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ADONIS GIOVANNI MUSMANNO GARCÍA CONTRA LENNIN M. RODRÍGUEZ T. Y CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 255

LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE WEXFORD HOLDING LTD. CORP. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 257

THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIONES PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR CARLOS ARTURO GALÁN MARINE CONTRA THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

HERMANOS HERRERA RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PROMOVIDO POR JAIME GARCÍA GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 259

RODOLFO REINALDO COSSIO ROJAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERNANDO DELANO FIELD IFFILT, SERVICIOS PANAIRE, S. A. Y THE CONTINENTAL INSURANCE CO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 262

EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON R., INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (INCIDENTE DE COBROS DE HONORARIOS DE ABOGADO) INTERPUESTO POR JORGE VILLALOBOS CONTRA AGENCIAS DE SEDAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 263

IMPEDIMENTO 265

JAIME OBREGÓN ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE VIRCA, S. A. (IMPEDIMENTO) MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 265

RECURSO DE HECHO 266

EL LICENCIADO JAIME JOVANÉ INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LEONARDO CIPPONERI MARTINICO CONTRA YAPELO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 266

RECURSO DE REVISIÓN 267

PABLO GORDÓN I., TORIBIA JULIA GORDÓN URRIOLA, OTILIA GORDÓN IBARRA E INÉS GORDÓN DE CASTAÑEDA INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1983 Y 24 DE ENERO DE 1992, PROFERIDAS POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE COCLÉ, EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PROPUESTO POR CONCEPCIÓN CORONADO CONTRA EUGENIO GORDÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ALONSO PINZÓN CORRALES CONTRA LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA Y RADIO SOBERANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 273

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 275

ACUSACIÓN PARTICULAR 276

ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR EL LICENCIADO GONZÁLO MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS MANUEL BOYD SEVILLA DENTRO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL, LICENCIADO CRISTÓBAL ARBOLEDA, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE CALUMNIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 276

AUTO APELADO 276

APELACIÓN DE AUTO QUE DECRETA DETENCIÓN Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROBERTO ANTONIO PINZÓN DÍAZ Y JACINTO JORGE MC DONALD, POR LA MUERTE DE BETSY MARLENE MENDIZÁBAL Y LA DESAPARICIÓN DE JORGE ENRIQUE FALCONETT GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 276

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 279

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MOISÉS ESPINO BRAVO CONTRA EL AUTO ENCAUSATORIO DE TRES (3) DE FEBRERO DE 1994 EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL SUMARIAS SEGUIDAS A RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA O RUBÉN ALEXIS CORTEZ CÓRDOBA POR LOS DELITOS DE ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PEDRO CORTÉS OSORIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 279

SUMARIAS SEGUIDAS A OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO, JUAN PATRICIO DENA KEE, FRANCISCO CUEVAS VALDÉS Y ERBIN HUNT POR LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARCELINO JAÉN MÁRQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 285

APELACIÓN DE AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO PROFERIDO EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 1995 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR SUMARIAS SEGUIDAS A JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS (A) RATÓN RIVAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GILBERTO CUETO DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 287

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUE A ROGER MARTÍN CARLES MATOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 296

SUMARIAS SEGUIDAS A CARLOS ALBERTO MINA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE CONCEPCIÓN CUESTAS GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

SUMARIO SEGUIDO A CARLOS WITTGREEN SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 300

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 316

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN DETRIMENTO DE FÉLIX CÓRDOBA Y DE LESIONES CULPOSAS EN DETRIMENTO DE EDUARDO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 316

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE ALONSO MARTÍNEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 317

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS A. GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ FÉLIX REVELLO FERNÁNDEZ Y ALDO ARTURO FERNÁNDEZ MUÑOZ POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE MARTA DÍAZ DE LINARES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 322

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE AQUILES ESCOBAR, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS SMITH FERNÁNDEZ, JERÓNIMO GUERRA SERRANO, FELIPE OSCAR DOWNIE CEDEÑO Y LUIS CARLOS MONTENEGRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 324

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AMÍLCAR SAMUDIO VEGA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTES FONDOS) EN PERJUICIO DE PRODUCTOS AVÍCOLAS PANARICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 329

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN DETRIMENTO DE FÉLIX CÓRDOBA Y DE LESIONES CULPOSAS EN DETRIMENTO DE EDUARDO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 330

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ANTONIO HERRERA VALIENTE, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN PERJUICIO DE LUZMILA MURILLO Y DOBELUZ TUÑÓN MURILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 332

CONFLICTO DE COMPETENCIA 334

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS DE MUERTE DE JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 334

IMPEDIMENTO 338

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN INCOADO A FAVOR DE ANTONIO JOHNSON BEST. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PROMOVIDA POR LA LICENCIADA EMMA E. ALBA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA LCDA. SONIA F. DE CASTROVERDE, DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO DE JAMES HILARY APOLLO MINOTT CONTRA RUTH HYACINTH THOMPSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 339

QUEJA 340

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO JAVIER ALEXIS QUIROZ CONTRA LA MAGISTRADA ELVIA BATISTA, PRESIDENTA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 340

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 341

INCIDENTE DE OBJECIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ,

CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 341

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE QUIRÓS MURILLO Y ASOCIADOS CONTRA EL AUTO DE 31 DE ENERO DE 1996 PROFERIDO POR LA SALA SEGUNDA, DENTRO DEL TRÁMITE DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PROPUESTA A FAVOR DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 343

RECURSO DE REVISIÓN 344

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROGELIO MANUEL CLOUGH, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 344

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GIL ERNESTO ORTEGA ORTEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

RECURSO DE REVISIÓN INVOCADO POR ANTONIO FERNANDO JOHNSON BEST, CONTRA SENTENCIA DICTADA EN SU CONTRA DENTRO DE PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 347

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ REYES, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO PECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 348

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EUFRACIO GIL ALONSO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO (CHEQUE). MAGISTRADA PONENTE: AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 351

SENTENCIA APELADA 353

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OMAIRA CORREA WEDDENBURN Y SHEWIN JEFFERSON SMITH WRIGTH, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DEL MENOR JONATHAN ATENCIO CÁCERES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 353

PROCESO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL ALMENGOR CONTRERAS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JORGE ISAAC RIVERA MIRANDA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 365

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ARISTÓTELES SANTOS LEMOS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS ALBERTO SALAZAR CASAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 367

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 369

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JOE JOHN MEDINA VERNAZA, SINDICADO POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARÍA EUGENIA SANCHIZ DE SÁNCHEZ, YARITZA SÁNCHEZ Y GABRIEL SÁNCHEZ. MAGISTRADA

PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 369

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL 373

TRIBUNAL DE INSTANCIA 373

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LOS DELITOS EN QUE HUBIESEN INCURRIDO MARCIANO VERGARA, EUCLIDES DELGADO, CARLOS VILLANUEVA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 373

SOLICITUD DE LIBERTAD DENTRO DEL INCIDENTE DE EXTRADICIÓN DEL SEÑOR ANTHONY WILLIAMS ROAD. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 374

SOLICITUD DE DESERCIÓN DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROMOVIDA CONTRA EMILIO DE LEÓN LOKKE, EX FISCAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL POR LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, SEGURIDAD COLECTIVA Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PERJUICIO DE BELARMINO CHÁVEZ MORENO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 375

QUERELLA PRESENTADA POR CARLOS MANUEL BOYD SEVILLA EN CONTRA DEL LICENCIADO CARLOS ARBOLEDA, FISCAL SUPERIOR ESPECIAL, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 376

DENUNCIA CRIMINAL INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GONZALO ANTONIO MONCADA LUNA, CONTRA EL SEÑOR CRISTÓBAL ARBOLEDA, FISCAL ESPECIAL SUPERIOR, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 378

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 380

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN 381

DEMANDA CONTENCIOSA DE INTERPRETACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL GARCÍA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIE SOBRE LA OPINIÓN VERTIDA POR EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN SUPLENTE EN SU NOTA C-43 DEL 9 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 381

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE PLATA, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE LA SALA TERCERA INTERPRETE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA HC032-96, DEL 22 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 382

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN LOCKEE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS IGLESIAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 028 DE 31 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE KIA PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-41-2-95, DICTADA POR EL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INAFORP), EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ARSENIO GARCÍA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL DE GRACIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, AL AUTO N° 157 DE 28 DE ABRIL DE 1995 PROFERIDO POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE COSTUREX INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 241-04-0041 DE 18 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. XIOMARA RÍOS DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE FERMÍN ENRIQUE CASTAÑEDAS ALDEANO (JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PLENO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 387

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 388

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE BERTILO MEJÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 350 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 391

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ T. VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FLOR MIRÓ DE CHASSIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 185-D. G. DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, LA RESOLUCIÓN N° 4 DE 28 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE

DEPORTES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RANGEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO CÉSAR MARTÍNEZ CREDIDÍO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 1 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 395

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE BARCHESTER SHIPPING, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 603-04-07 ALCN DE 5 DE ENERO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VASCO TORRES DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS NOTAS N° VIP-638-95 DE 23 DE JUNIO DE 1995 Y N° VIP-805-95 DE 24 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS, APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU REUNIÓN N° 39-95 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ TEJADA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7397-95 DNP, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 403

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL F., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986 EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LAS RESOLUCIONES N° 10254-95 J. D., DE 23 DE MARZO DE 1995 Y LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA MARTÍN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 95-06-0008 DE 23 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 405

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., PARA QUE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 078, DEL 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES

DÍAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 406

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRA ATHANASÓPULOS DE LIAKÓPULOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 06-95 DE 10 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 407

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. PEDRO PEREIRA EN REPRESENTACIÓN DE QUALITY ASSURANCE CHEMICAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°009-96-D. G. DE 3 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 409

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DEL PATRONATO DEL ENCUENTRO AGROPECUARIO DEL SECTOR ESTE DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, AL NO CONTESTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 0006 DE 12 DE MAYO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 410

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEJANDRO WATSON, EN REPRESENTACIÓN DE VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 8 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN N° 000/93 DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 411

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-95 DE 23 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARRENDAMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 418

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DE 15 DE JUNIO DE 1995, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 419

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO RUIZ EN REPRESENTACIÓN DE ELBA R. DÍAZ VDA. DE RUIZ Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983 DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 421

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR

EL LICENCIADO SIMEÓN GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARCOS SALINAS Y FÉLIX VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CJ-17-95, DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 422

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE GIANELLA DEL CARMEN CARREIRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°24-95-F. DE C. DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 422

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO, SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL VALERO DOMENECH, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3269 DE 27 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 423

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOUTEAU RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 424

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ELIO SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE HOMAB, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6327-94-SUB-DG DE 27 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 91-80-9410 J. D. DE 29 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 425

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GERMÁN ANTONIO NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 36 DE 8 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 429

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR BUFETE ARTURO VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE CORPORACIÓN BIZARRO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO EJECUTIVO N° 349 DE 16 DE AGOSTO DE 1994, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 431

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS C. CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO A. SOTO PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 95 (32010-1830)12, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 438

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO RODRÍGUEZ BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE PORFIRIO ARGUETA CLAROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 30 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 439

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 439

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, SUSCRITO POR LA MINISTRA DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y EL SEÑOR DANIEL K. H. CHAO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. FELIPE C. RANGEL F., EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986 DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOEL C. LUQUE F., EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC), PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 16 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 442

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE JAZMÍN SOTO DE MITROTTI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 60 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 447

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA DOCTORA AURA FERAUD EN REPRESENTACIÓN DE DAVID PÉREZ ALMILLANO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO DE GABINETE N° 17 DE 5 DE JUNIO DE 1991, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MANEJO DE LOS SEGUROS DEL ESTADO". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS (1996). 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LEOPOLDO BENEDETTI, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 12 Y 26 DEL DECRETO N° 272 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 454

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LCDA. NANNETTE DE ROMERO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 508 DE 24 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 459

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE INTERNATIONAL TELEPHONE & FAX-IT&F, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13-92 DE 19 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR EL COMITE EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 464

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARGO TOURS, S. A. Y AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS TRIBUTOS O GRAVÁMENES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL N° 9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TABOGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 470

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD BIENES Y RAÍCES DANNA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2 DEL 21 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 473

IMPEDIMENTO 478

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NANCY PERALTA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN CASTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DEL DECRETO N° 552 DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 478

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA, MELÉNDEZ CRUZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MORITZ SALOMÓN WIEDER, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MORITZ SALOMÓN WIEDER -VS- TEXACO, PANAMÁ, INC. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 479

IMPEDIMENTO EN LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. EDUARDO LOMBANA ACHURRA, EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, PARTE DEL ARTÍCULO 5 Y EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 480

JURISDICCIÓN COACTIVA 481

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE ORLANDO A. BARSALLO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMA NACIONAL ESTEREO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 481

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LCDO. JOAQUÍN ROGER PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE FAPSA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO

AGROPECUARIO A JORGE POLANCO SÁNCHEZ, DORA ENEIDA POLANCO, FREDESVINDA SÁNCHEZ DE POLANCO, FABIO POLANCO, RICAUTER SAUL POLANCO, ADRIANO POLANCO E HIJOS, S. A. Y GUSTAVO POLANCO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 483

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GERMÁN PINEDA PATIÑO, EN REPRESENTACIÓN DE FINANZAS DE BUSES INTERNATIONAL CORPORATION, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN Y BOLNEY RODRÍGUEZ NAVARRO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 486

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO LOAIZA EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA CARIOCA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A INMOBILIARIA CARIOCA, S. A., Y BORIS JAVIER AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 489

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LOLA BLAISDELL NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA EL FARO, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ A INVERSIONES EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 491

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA O FALTA DE IDONEIDAD DEL TÍTULO, INTERPUESTO POR EL LCDO. TARGIDIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN DARÍO BERNALOYES, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA CENTRAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 492

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROGELIO FERNÁNDEZ LARA, EN REPRESENTACIÓN DE MAURICIO HARROUCHE DONOSO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 493

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JUAN BOSCO MARTINO, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO MANUEL RANDINO DATRIS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ A INDUSTRIAS METAL, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 495

EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 498

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. HIPÓLITO MANUEL CONSUEGRA PALMA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ, A ESTEREO CONTINENTAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 499

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ HERRERO VICTORIA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A PEDRO FLORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ,

VEINTISÉIS, (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 501

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL SALVADOR VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL CONDOMINIO NEREYDA, DENTRO DEL PROCESO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A ATILANO ESPINO CARRASQUILLA Y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 502

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DEL CONDOMINIO LILIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A ANGELA OLGA ROLDÁN DE LUZULA Y ARMANDO LUZULA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 505

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CEDEÑO & MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 507

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA CEDEÑO & MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 510

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 512

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. GONZALO LAGUNA POLO, EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS VALDIES HAWKINS, CONTRA LA SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MARCOS VALDIES HAWKINS VS OSCAR GRENALD Y/O ROSA DE GRENALD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 512

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS A. DÍAZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS A. DÍAZ Y OTROS -VS- AVICULTURA NACIONAL, S. A. Y ASESORÍA AVÍCOLA Y ADMINISTRATIVA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 517

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ARISTIDES SERRACÍN JR. CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR. VS XEROX DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 521

TRIBUNAL DE INSTANCIA 531

DEMANDA DE PERJUICIOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN, CONTRA EL MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, LICENCIADO NELSON RUIZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 531

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 533

CARTA ROGATORIA 534

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL, REPÚBLICA DE ARGENTINA, RELATIVO A LOS AUTOS CARATULADOS "STOLTA, FEDERICO S/DENUNCIA FALSIFICACIÓN Y ESTAFA". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 534

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DE LA ALCALDÍA PRIMERA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTICIA ENTABLADO POR LA SEÑORA DORIS FRANCO SÁNCHEZ CONTRA SAYED DUMANI VANEGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 535

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA A CARGO DEL JUZGADO N° 1 DEL FUERO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "NABISCO, INC. CONTRA PRODUCTOS STANI S. AI. C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 536

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° TRES DE MADRID, RELACIONADA A LAS OPERACIONES BANCARIAS REALIZADAS POR JOHN FREDERITZ FITZGIBSON EN EL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 537

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 540

IRMA IBETH ROMERO DE BEST, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR EL CONDADO DE CURRY, ESTADO DE NUEVO MÉJICO, EL 5 DE FEBRERO DE 1991, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR DONALD JOHN BEST. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 540

JUAN CARLOS MORENO CONDASSIN Y GINA TUULANIA MONTEZA MORALES, SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE GWINNETT, ESTADO DE GEORGIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LOS UNÍA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 541

VIOLETA VALENCIA MENA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUEZ DE CIRCUITO, DEL CONDADO DE HENDRY. CORRECCIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 542

ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE G. ELEANOR WAGNER DE EVANS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE BELL TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CUAL SE DETERMINA EL DIVORCIO ENTRE ELANOR WAGNER DE EVANS Y ENRIQUE FLORENTINO EVANS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 543

G. SURVIVOR CREDIT CORP., SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA FECHADA 3 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK, POR MEDIO DEL CUAL SE CONDENA A NESSIM DABAK Y A GYPSY IMPORTS, INC. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. (IMPEDIMENTO). PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 544

RUFINA LAMBRAÑO S. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 78 DEMANDANTES RESIDENTES EN CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA, DECRETADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, PARA EL DISTRITO SUREÑO DE TEXAS, DIVISIÓN DE HOUSTON DE FECHA 11 DE JULIO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 546

GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO, SALA DE SAN JUAN QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO Y GREGORIO H. NIEVES RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 549

EXHORTO 551

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 10, SECRETARIA N° 19 DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, LIBRADO EN LOS AUTOS CARATULADOS "RICCIARDI UBER S/QUIEBRA C/PARAISAN INVESTIMENT, S. A. (DE PANAMÁ) S/ORDINARIO". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 551

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, LIBRADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO N° 400-93 PROMOVIDO POR NICARAGUA QUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA SUR QUÍMICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 552

TRIBUNAL DE INSTANCIA 553

ARIAS FÁBREGA & FÁBREGA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE G. G. SURVIVOR CREDIT CORP. SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA FECHADA 3 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK, POR MEDIO DEL CUAL SE CONDENA A NESSIM DABAH Y A GUPSY IMPORTS, INC. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 553

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA SEÑORITA AURI HERCILIA MORRISON CAMPOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 15-95 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 554

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

MARZO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AMEGLIO MONCADA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MARTÍN FLORES VALLEJOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA ORDEN GENERAL DEL DÍA (#29), DE 12 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS AMEGLIO MONCADA** actuando como apoderado especial de **JOSÉ MARTÍN FLORES VALLEJOS** ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra el Director General de la Policía Nacional para que se revoque la orden de hacer contenida en la orden general del día N° 29, de 12 de febrero de 1995, que ordena la separación del cargo de su mandante.

Cumplidas las reglas de reparto, el Pleno de la Corte debe decidir si admite o no la demanda de amparo a tenor de lo dispuesto en los artículos 2610, 2611 y concordantes del Código Judicial.

En este sentido, el artículo 2610 del Código Judicial establece los requisitos formales necesarios para la admisión de la demanda de amparo. Entre estos están los requisitos comunes a toda demanda establecidos en el artículo 654 ibídem, y además, los requisitos especiales que son:

1. Mención expresa de la orden impugnada;

2. Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió;

3. Los hechos en que se funda la pretensión;

4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido.

Además de las exigencias antes indicadas, la norma preceptúa que la demanda debe presentarse acompañada de "prueba de la orden impartida, si fuere posible manifestación expresa, de no haberla podido obtener".

Este requerimiento implica que si el documento contentivo de la orden es una fotocopia, debe estar autenticada de modo que constituya una prueba idónea, conforme al artículo 820 y concordantes del Código Judicial. De no ser así no se admitirá la demanda. Más aún, sobre el alcance de lo señalado la Corte sostuvo en fallo de 3 de junio de 1992 (amparo contra resoluciones del Procurador General de la Nación) que no basta la excusa para no acompañar la copia autenticada, sino que se debe adjuntar prueba de la solicitud de autenticación o de su gestión no atendida por el funcionario demandado.

Procede la Corte a verificar el cumplimiento de estos presupuestos:

El demandante menciona como la orden de hacer impugnada, la contenida en "ORDEN GENERAL DEL DÍA", calendada el 12 de febrero de 1995, específicamente en el punto N° 15 titulado "INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL", literal c) que expresa:

> `El Director de Recursos Humanos, debidamente autorizado por el Ministro de Gobierno y Justicia, mediante Resuelto N° 2 del 9 de febrero de 1996, resuelve:
>
> Separar de sus labores al Teniente 8164 JOSÉ MARTÍN FLORES V. de servicio en la Zona de Policía Metropolitana (servicio de Policía Motorizado), mientras finalice el trámite de destitución en el

Ministerio de Gobierno y Justicia, a partir del 16 de febrero de 1996.

De los hechos expuestos en el libelo de esta acción de amparo se colige que dentro de esta situación, planteada ante el Pleno de la Corte como un asunto constitucional, se objetan dos puntos:

1- que no se está siguiendo el reglamento disciplinario de la Policía, pues en su artículo 118 se establece la suspensión del cargo como una sanción después de una investigación por la Junta Disciplinaria, "siendo que hasta la fecha al Teniente no se le ha investigado ..."; y,

2- que no se le ha notificado de ninguna resolución que haya ordenado su separación del cargo, sin embargo, ha tenido conocimiento de su separación por tener acceso a la orden del día que expide diariamente el Director General de la Policía y "no como parte integrante de un proceso administrativo".

Por tales motivos alega que se ha violado la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución, pues no se le ha sometido al trámite y proceso investigativo que establece la norma previamente citada de la Ley 20 del 29 de septiembre de 1983. Por tanto, al no existir resolución expedida por funcionario competente porque, según señala, no existe norma que faculte al funcionario demandado a separarlo mientras finalice el trámite de destitución, al demandante-amparista no se le ha notificado ninguna resolución contra la cual "pueda hacer valer sus derechos de defensa y de interposición de los recursos de ley a fin de enervar la eventual separación de su cargo".

En lo previamente reseñado, expuesto por el amparista, el Pleno de la Corte ha podido apreciar varias incongruencias entre los que se pretende impugnar mediante esta acción y el objeto de la misma o lo que con ella verdaderamente se pretende tutelar.

Al respecto el propio demandante cuestiona un trámite legal, lo cual no es un asunto constitucional; señala que aún no existe una resolución que lo destituya, contra la cual pueda utilizar los medios de impugnación que le concede la ley y consecuentemente menos aún se ha conformado un proceso administrativo. Señalamiento este que parece evidenciar que se está adelantando al procedimiento pertinente que le permita actuar conforme lo establece la ley.

Con la demanda de amparo se acompaña fotocopia sin autenticar (fojas 1 a 7) del acto administrativo de carácter general expedido por el servidor público que figura como demandado (Director de la Policía), acto en el cual aparece la orden demandada (foja 6) en la que figura como su emisor el "Director de Recursos Humanos" debidamente autorizado por el "Ministro de Gobierno y Justicia", que está contenida en "Resuelto N° 2 del 9 de febrero de 1996".

En consecuencia la demanda se endereza contra el Director de la Policía, cuando no es dicho funcionario quien expidió la orden atacada. La omisión en la determinación precisa del servidor público demandado que dictó la orden impide la admisión de esta acción, pues este requerimiento guarda relación con la determinación de la competencia para conocer esta demanda, en atención al Artículo 2607 del Código Judicial (Cfr. Sentencia de 7 de septiembre de 1990- Amparo de Garantías Constitucionales, Ernesto Herrera contra el Ministro de Obras Públicas).

Así las cosas, se observan defectos formales tales como la falta de autenticación de la fotocopia del acto atacado, la imprecisión del funcionario demandado y que, contrario a lo que afirma el accionante, sí existe un Resuelto en donde consta la orden impugnada, cuya copia autenticada no fue aportada con la demanda de amparo, sin que se haga alusión al motivo por el cual no se ha podido presentar.

Por añadidura, lo que se ha podido extraer del examen realizado es que se trata, entonces, de un acto que por su naturaleza pudiera ser impugnado por otras vías ordinarias y aún por las extraordinarias previstas en la Constitución, pero

lo cierto es que el amparo no es el camino apropiado en este caso, en atención a la finalidad que le atribuye el artículo 50 de nuestra Carta Política a este instituto constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por JOSÉ MARTÍN FLORES VALLEJOS contra LA ORDEN GENERAL expedida por el Director de la Policía Nacional.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDGAR SEGARRA VIVAR, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN AUTOS VARIOS N° 279 de 12 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DUODÉCIMA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, actuando en representación de Edgar Segarra Vivar, ha presentado recurso de apelación ante esta Corporación, contra la Resolución de 1° de febrero de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante la cual se dispuso no conceder el amparo de garantías constitucionales promovido por la mencionada firma forense contra la Juez Duodécima de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La recurrente fundamenta el recurso de apelación en los siguientes términos:

> "... CUARTO: Dicha violación deviene al impedírsele a nuestro acudido, el derecho a la jurisdicción, es decir,`la facultad que tiene toda persona de acudir al órgano jurisdiccional señalado por el Estado, en demanda de justicia o bien para que se resuelva una pretensión jurídica e igual titular del derecho a la jurisdicción lo es aquél que es llevado a un proceso en su calidad de demandado" (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 8 de mayo de 1986).
>
> "QUINTO: También se violenta el debido proceso legal, al establecer la juzgadora, formalidades no prescritas en nuestra ley procesal, relativas al otorgamiento de poderes ante Notario.
>
> SEXTO: En efecto, en el Auto N° 279 de 12 de mayo de 1995, emitido por la funcionaria Acusada, se establece una exigencia no prevista en norma alguna de nuestra normativa jurídica, al obligarse al otorgante de un poder en una Notaría a justificar el motivo por el cual no acudió ante el Juez competente para conocer de su causa.
>
> SÉPTIMO: La arbitrariedad de la funcionaria acusada, se comete en violación de una norma de procedimiento, es decir, el artículo 614 del Código Judicial. Dicha normativa establece los principios a seguir en los casos de otorgamiento de poderes. Al exigírsele a nuestro poderdante formalidades no contempladas en dicha normativa, la funcionaria acusada impide el acceso a los tribunales a nuestro

acudido."

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, resolvió no conceder la demanda de amparo de garantías constitucionales, toda vez que:

> "... Nuestra Corte Suprema de Justicia ha señalado en forma reiterada que "los errores in iudicando no son revisables en amparo por que (sic) constituyen aspectos de fondo cuya revisión generaría una instancia más del proceso, diferencia de lo que ocurre con los errores in procedendo, que derivan de un vicio de procedimiento, los cuales podrían hacer posible la reposición del trámite de que se trate ..."
>
> En fallo más reciente, de fecha 19 de enero de 1995 ... también se invocaba la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 88 y 89 del Código de Comercio; la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente: `De lo que viene dicho se evidencia que escapa a la noción de debido proceso, cualquier error in iudicando que haya podido cometer el juzgador durante el curso del proceso o al dictar la resolución conclusiva del mismo. Estos significa que son los errores in procedendo graves los que dan lugar a la infracción del principio constitucional bajo examen y, por ende, a las denominadas nulidades procesales . Con la asistencia de la jurisprudencia antes citada, esta Corporación Judicial requiere precisar que los argumentos expuestos por el amparista, referentes a su discrepancia con la interpretación que prestara la Juez Duodécima del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá al contendido (sic) del artículo 614 del Código Judicial, no contienen cargos que encuentre apoyo dentro del concepto del debido proceso.
>
> Es en razón de lo anterior y por el tenor del `material constitucional antes advertido, que a este Tribunal no le queda otra opción que negar la acción de amparo impetrada."

Del estudio del expediente se observa que la pretensión del recurrente consiste en que se revoque la Resolución de 1° de febrero de 1996, mediante la cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, decide no conceder la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesto por Edgar Segarra Vivar en contra de la Juez Duodécima del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Pleno de la Corte Suprema observa que, la pretensión formulada en la demanda se ubica fundamentalmente en el plano de la legalidad. Ello es así, porque si bien es cierto se invoca como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, en el cual se hace referencia al debido proceso, no es menos cierto que la infracción a dicha disposición constitucional, se hace consistir en una violación a una norma legal (artículo 614 del Código Judicial), que no constituye un desarrollo legal de los elementos esenciales de la garantía constitucional mencionada, en cuanto se refiere a la actuación de la juez en este caso concreto.

El Pleno de esta Corporación ha sido reiterativo al señalar que no le es dable a la Corte Suprema entrar a analizar las posibles violaciones a normas legales, sino únicamente a preceptos constitucionales. Ha sido jurisprudencia constante de esta Superioridad que la acción de amparo de garantías constitucionales no constituye un recurso ordinario, en el que se revisa la actuación del juzgador a-quo, en cuanto a la interpretación de la ley. Si la Corte entrara a hacer este tipo de análisis el proceso constitucional de amparo de garantías constitucionales se convertiría en una instancia adicional lo cual desnaturaliza el objeto del proceso de amparo de garantías constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, considera el Pleno de esta Corporación que lo que corresponde es, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia expedida por el

Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial el 1° de febrero de 1996, mediante la cual se dispuso no conceder el amparo de garantías constitucionales promovido por la firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, actuando en representación de Edgar Segarra Vivar contra la Juez Duodécima de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR EL LICENCIADO FERNANDO A. SOLORZANO, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALMA DURBY GARCÍA DE JORDÁN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 27 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FERNANDO A. SOLORZANO A. en su condición de apoderado especial de ALMA GARCÍA DE JORDÁN, presentó ante esta Corporación de Justicia, acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia proferida el 27 de octubre de 1995 por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral por despido injustificado instaurado por su representada contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DE LA COMISIÓN DEL CANAL, R. L. (EDIOACC), para que la misma sea revocada.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

El fundamento del recurso lo hace el postulante en diez (10) hechos que pasamos a transcribir de la siguiente manera:

> **"PRIMERO:** La señora ALMA GARCÍA DE JORDÁN fungió como Gerente de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Empleados de la División de Ingeniería y Oficinas Afiliadas de la Comisión del Canal, R. L. (DIOACC) desde el 24 de agosto de 1994, fecha en que fue despedida injustificadamente.
>
> **SEGUNDO:** La señora ALMA GARCÍA DE JORDÁN, fue nombrada mediante contrato de trabajo fechado el 1° de febrero de 1988, por un período de 3 meses como prueba. Pasados estos tres meses continuó laborando, por lo que la relación de trabajo se convirtió en indefinida.
>
> **TERCERO:** Al momento de ser despedida (24 de agosto de 1994), nuestra representada devengaba como remuneración por sus servicios la suma de B/.1,858.00 mensuales.
>
> **CUARTO:** En la fecha en que se notificó el despido (Carta con fecha de 23 de agosto de 1994 y notificada el 24 de agosto de 1994) nuestra representada se encontraba en uso del derecho de vacaciones, y ya había sido sancionada con suspensión de su puesto de trabajo, por las mismas causas por las que se le despidió.
>
> **QUINTO:** El 21 de octubre de 1994 se presentó demanda de despido

injustificado ante la Junta de Conciliación y Decisión, en Turno.

SEXTO: Mediante Sentencia N° 9-PJ-JCDN°2- Fallo Oral Inmediato, la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, previa consideración y análisis de un incidente por falta de competencia, de distinta jurisdicción y de inexistencia de la relación laboral presentado por la cooperativa demandada, rechazó el incidente y **DECLARÓ INJUSTIFICADO** el Despido, **condenando** a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la División de Ingeniería y Oficinas Afiliadas de la Comisión del Canal, R. L. (EDIOACC) al reintegro en 30 días de la trabajadora ALMA DE JORDÁN, y al pago de los salarios caídos desde la fecha del despido a la ejecutoria de la sentencia. Las costas las fijó en un 0010%.

SÉPTIMO: Al notificarse de esta decisión la cooperativa demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

OCTAVO: Mediante Sentencia de 19 de mayo de 1995, el Tribunal Superior de Trabajo, Previa revocatoria de la Sentencia N° 9 PJ-JCD N° 2 de 6 de diciembre de 1994, DECLARÓ LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en el presente proceso por carecer la Junta de Conciliación y Decisión N° 2 de competencia para resolverlo.

NOVENO: Esta decisión fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia, que mediante Fallo de 19 de julio de 1995 concedió un amparo de garantías constitucionales.

DÉCIMO: El Tribunal Superior de Trabajo volvió a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, y mediante Sentencia de 27 de octubre de 1995 que ahora se impugna, revocó la decisión de primera instancia, y absolvió a la Cooperativa de la pretensiones de la trabajadora".

Estima han sido infringidas por omisión las garantías contempladas en los artículos 32 y 70 de la Constitución Política. Por lo que solicita se conceda el amparo de garantías constitucionales a favor de su representada para que previa revocatoria de la sentencia de 27 de octubre de 1995 el Tribunal Superior de Trabajo, se cumpla la decisión dictada en primera instancia por la Junta de Conciliación y Decisión N° 2 (fs. 19-29).

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

La autoridad demandada mediante Nota N° 1413 de 29 de noviembre de 1995, suscrita por el magistrado CARLOS E. DE ICAZA M., explica:

"El proceso laboral en el que son partes ALMA DE JORDÁN -VS- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO- EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DE LA COMISIÓN DEL CANAL, R. L. (EDIOACC) ingresó nuevamente al Tribunal Superior de Trabajo, luego de haberse presentado un Amparo de Garantías Constitucionales contra el Auto de 19 de Mayo de 1995, proferido por este Tribunal Superior que fuera resuelto mediante Resolución de 19 de Julio de 1995, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, concediendo dicho amparo.

En dicha resolución, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si bien concede el amparo de garantías constitucionales, solicitado contra la resolución del Tribunal Superior de Trabajo que declaraba la nulidad de lo actuado por falta de competencia, señala claramente que "mientras no sea acordado el estatuto especial cuya regulación es necesaria, dado el incremento de las asociaciones cooperativas que ha habido en los últimos años, se requiere que sean las autoridades laborales las que resuelvan las controversias que surjan entre ellas sobre esta materia" y a continuación especifica que al

conceder la acción de amparo de garantías constitucionales lo hizo "sin pretender examinar el fondo del negocio laboral".

En consecuencia, no resulta extraño en forma alguna y si apegado a derecho, que la Junta de Conciliación y Decisión N° 2, luego de resuelto el amparo de garantías constitucionales mencionado, enviara el expediente al Tribunal Superior de Trabajo para lo que fuera procedente y que éste a su vez entrara a conocer el fondo de la controversia laboral, tal como lo hiciera mediante la Sentencia de 27 de Octubre de 1995, teniendo como Magistrado Ponente, al Licdo. Homero A. Rodríguez R. y suscrita igualmente por los Magistrados Haydeé G. Paolo y Alcibiades Rodríguez M. integrantes de la Sala.

Con esta decisión del Tribunal, no se da en modo alguno, un supuesto "reenvío laboral" como señala el amparista y menos aún un doble fallo sobre la misma controversia laboral como se menciona sin fundamento alguno.

El Tribunal Superior, luego de haberse determinado la competencia para este tipo de controversias, según el fallo de la Corte, entró a resolver en el fondo, examinando, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, las pruebas aportadas al proceso por las partes, en su oportunidad y a las cuales se refiere el amparista en el recurso de amparo interpuesto extemporáneamente.

El Tribunal Superior, resolvió la controversia, precisamente en acatamiento de lo dispuesto por esa augusta corporación ..." (Fs. 36-38).

ANÁLISIS DE FONDO

En Nota N° SGP-1776-95 de 1° de diciembre de 1995 la Secretaría General de esta Corporación de Justicia, solicitó a la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 el expediente contentivo del proceso laboral bajo examen, el cual fue recibido el 4 de diciembre de este año (fs. 41-42).

Un examen de las constancias procesales existentes, permite observar que mediante sentencia de 6 de diciembre de 1994, la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 declaró injustificado el despido de la señora GARCÍA DE JORDÁN y condenó a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y OFICINAS AFILIADAS DE LA COMISIÓN DEL CANAL, R. L. (EDIOACC) al reintegro en treinta (30) días de la trabajadora y al pago de los salarios caídos desde la fecha del despido a la ejecutoria de la sentencia (fs. 432-441).

Esa decisión jurisdiccional fue apelada por el apoderado judicial de la parte demandada (f. 442 vt.), quien presentó el escrito respectivo dentro del término concedido para tal efecto (fs. 453-459). También, se presentó escrito de oposición (fs. 460-474).

En esa oportunidad de 19 de mayo de 1995, el Tribunal Superior de Trabajo, luego de ponderar lo planteado, accedió a lo pedido por el apelante y declaró la nulidad de todo lo actuado al considerar que la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 carecía de competencia para resolver el conflicto laboral planteado, a la luz del artículo 12 de la Ley N° 38 de 1980 (fs. 476-486).

Contra esta orden de hacer dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, la señora ALMA GARCÍA DE JORDÁN, representada por el licenciado FERNANDO SOLORZANO, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales, pretensión que se falló el 19 de julio de 1995 concediendo el amparo solicitado (fs. 497-505), por cuanto mientras no se dicte el estatuto que trata el artículo 12 de la Ley N° 38 de 1980, se requiere que las autoridades laborales resuelvan los conflictos que surjan entre las cooperativas y los socios o trabajadores asociados, pues no hacerlo deja sin solución los múltiples casos que surgen entre las empresas cooperativas y sus miembros asociados.

Luego entonces, en ese momento procesal, la resolución de 19 de mayo dictada por el Tribunal Superior de Trabajo al ser revocada, desapareció del mundo jurídico, prevaleciendo así la sentencia dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2.

El Tribunal Superior de Trabajo en el caso en discusión, expuso lo que se transcribe:

"...

Observa el Tribunal Superior que, en el presente caso se trata de una demanda que por despido injustificado ha sido interpuesta ante la Junta de Conciliación, misma que si bien es competente para conocer de demandas por despido injustificado, no lo es cuando se trata de trabajadores asociados a una Cooperativa habida cuenta de que según lo dispone el artículo 12 de la ley 38 de 22 de Octubre de 1980, por la cual se crea el régimen legal de las Asociaciones Cooperativas y se establece una limitación concreta a la jurisdicción de trabajo para el conocimiento de las relaciones de trabajo que se dan entre las Cooperativas y sus asociados.

Así lo han entendido por igual las autoridades administrativas de trabajo, tal como se observa en el Dictamen Nota N° 108/SG-94, de 13 de octubre de 1994, que obra a fojas 42 y 43, suscrita por el Secretario General del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y que es del tenor siguiente:

Tenemos a bien dar respuesta a su nota consulta elevada el 3 de octubre de los corrientes, donde se nos pregunta si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la División de Ingeniería y Oficinas Afiliadas de la Comisión del Canal R. L. (EDIOACC), al momento de atender controversias laborales debe comparecer a la Sección Individual o la asignada para asuntos canaleros.

Como quiera que la Coordinación Laboral del Área del Canal, es una sección que forma parte de la estructura de esta institución, cuya finalidad radica en fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales a los trabajadores que laboren en empresas dedicadas a actividades comerciales canaleras y por ende, al fiel cumplimiento del Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980; por tanto si la Cooperativa en mención no se dedica a actividades comerciales canaleras sino eminentemente mercantil; situación aclarada en Nota N° 94-SG-94 de 23 de septiembre de 1994, es obvio entonces, que cualquier conflicto laboral ante este Ministerio, deberá ventilarse ante la Sección de Conciliación, siempre que los trabajadores afectados estén amparados por la legislación laboral vigente, toda vez que es necesario recordar que en materia de Cooperativas de Ahorro y Crédito rige el Artículo 12 de la Ley 38 del 20 de octubre de 1980 donde solo es aplicable el Código de Trabajo a los empleados que no sean socios de esta agrupación, a diferencia de los trabajadores que ostenten su condición de socios, ya que para ello rigen el estatuto especial que se adopte según el precepto legal citado, siendo excluido del Ordenamiento Laboral Panameño." (La cita es del Tribunal). ...".

Procede en este momento analizar el alcance y las limitaciones del recurso de apelación en materia laboral.

En el derecho laboral, contrariamente a lo regulado por el derecho común, se introducen reglas especiales sobre un número plural de materias. El recurso de apelación es una de esas materias en las cuales en ciertas hipótesis admite la **"reformatio in pejus"** en determinadas materias (artículo 922 del Código de Trabajo) y, en general, con respecto al mismo recurso, ante una apelación interpuesta, el artículo 919 del Código de Trabajo exige lo siguiente:

"Artículo 919. Interpuesta una apelación, el Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del término de interposición del recurso, resolverá si se concede o se niega lo que

proceda.

Concedido el recurso se remitirá el expediente al superior.

Recibido el expediente por el Superior, éste en la misma providencia señalará un término de cuatro días para que, en los dos primeros, alegue el apelante si lo deseare, y en los dos subsiguientes, lo haga el opositor. La falta de sustentación no causa la deserción del recurso." (El subrayado es nuestro).

Veamos entonces, que a juicio de esta Corte, el Tribunal Superior de Trabajo, como consecuencia de la sentencia de amparo procedió a resolver el recurso de apelación que se había interpuesto contra la sentencia dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 2 en referencia, con fundamento, en esta ocasión en las normas del derecho laboral, como debía hacer.

Sobre este último particular resulta oportuno citar al propio Tribunal Superior de Trabajo:

"...
De allí que al resolver este caso, decidiendo en el fondo como lo señala la Honorable Corte Suprema de Justicia al analizar el recurso en la parte motiva de su Sentencia fechada 19 de Julio de 1995, mediante la cual admite el recurso de amparo interpuesto contra el Auto de este Tribunal de fecha 19 de Mayo de 1995, deba aplicarse la ley laboral a falta de Estatuto Especial que señala el artículo 12 de la ley 38 de 1980 vigente, dejando como queda expresado el criterio del Tribunal y por el cual se decide en el fondo ésta controversia. ...".

A juicio de esta Corte, el Tribunal Superior de Trabajo al resolver la apelación a que estaba obligado, lo hizo en los términos que de manera expresa se encuentra en el artículo 919 del Código de Trabajo, el cual ya ha sido reproducido en esta sentencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado FERNANDO A. SOLORZANO A., en representación de ALMA GARCÍA DE JORDÁN.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

Por no compartir el criterio de la mayoría en el presente caso, explico mi voto disidente en los términos siguiente:

El principio procesal de la "reformatio in pejus" es reconocido en todas las disciplinas jurídicas, más aún en las que conforman el Derecho Público y el Derecho Social, donde hay un interés del Estado en garantizar los derechos de los asociados y ofrecer una tutela especial a la parte más débil de las relaciones jurídicas, como lo es en lo laboral la del trabajador.

Como es sabido, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, para el accionante, es una facultad jurídica que le permite acudir al Órgano Jurisdiccional competente solicitando la tutela o reconocimiento de una garantía o derecho mediante el cese o eliminación de la lesión constitucional.

En el caso sub-júdice, el amparista señala que se ha violado por omisión el artículo 32 de la Constitución, norma que consagra el principio del Debido Proceso, porque según su concepto, se incurrió en el doble procesamiento de una etapa procesal al resolver por segunda ocasión el recurso de apelación, sobre puntos no objetados por el recurrente.

El procesalista panameño, Jorge Fábrega P. en su obra Derecho Procesal de Trabajo (Individual o Colectivo) da una definición de lo que se debe entender por recurso de apelación:

> ..." es aquel recurso que concede la Ley a persona agraviada por una resolución de primera instancia, para reclamar de ella y obtener su revocación por un tribunal superior. Tiene como objetivo principal lograr que un tribunal jerárquicamente superior examine la resolución dictada por el inferior" (p. 355).

El Código de Trabajo establece los requisitos de procedencia de este recurso, al igual que la tramitación del mismo y aunque en lo laboral cabe la decisión ultra petita sobre asuntos sustanciales, conforme lo prevé el artículo 535 del Código de Trabajo, y también se pueden añadir aspectos no considerados en la resolución recurrida, cuando se trate de aquellos que establece claramente la ley o cuando tal adición la haya solicitado expresamente la parte afectada dentro del término correspondiente; tal no es la situación del caso que se analiza, pues basta revisar el escrito que obra de fojas 453 a 459 del expediente principal para advertir que el recurrente centró toda su atención en la excepción de falta de jurisdicción y competencia de la junta de Conciliación y Decisión, sin objetar las consideraciones hechas en la parte motiva del fallo proferido en este caso.

Es más, cabe anotar que al momento en que el ad quem decidió la nulidad de lo actuado entró a un examen de fondo de la resolución del a quo.

Siendo ello así, se advierte que en el caso que nos ocupa se ha vulnerado un derecho subjetivo del amparista a que se le garantice un proceso apegado a los trámites legales tal cual lo consagra la Constitución Nacional en el artículo 32 antes mencionado.

Por lo antes expuesto, respetuosamente manifiesto al resto del Pleno de esta Corporación que SALVO EL VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ANA DELGADO TORRES, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 47 DE 22 DE JUNIO DE 1995, PROFERIDA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **BENEDICTO DE LEÓN FUENTES**, en representación de la señora **ANA DELGADO TORRES**, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra "la Sentencia N° 47 proferida por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá de fecha 22 de junio de 1995, reformada y confirmada mediante sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá de 29 de diciembre de 1995, dentro del proceso sumario propuesto por Alicia

Delgado Torres de Castillo y Daniel Delgado Torres -vs- Ana Delgado Torres".

Por cumplidos los trámites de reparto, corresponde analizar el libelo presentado a fin de decidir la admisibilidad in limine de esta acción.

En primer lugar, se observa que la acción de amparo de garantías constitucionales se endilga contra una resolución judicial. Según el enunciado de la pretensión, pareciera que la censura se dirige a la sentencia de primera instancia, reformada y adicionada por la del Tribunal Superior que conoció de la apelación, sin embargo, cuando se individualizan las partes en la demanda (fs. 28), el accionante señala como parte demandada al licenciado Víctor René García, quien funge como Juez Sexto de Circuito de lo Civil y si ello es así, no corresponde al Pleno el conocimiento del caso.

Por otra parte, al constatar si se habían agotado todas las acciones y recursos al alcance del amparista, se advierte que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1149, numeral 6° del Código Judicial, contra los autos sobre declaratorias de heredero o adjudicación de bienes hereditarios, procede el recurso de casación, lo que nos indica que el amparista al momento de presentar la acción no había agotado los medios y trámites que la ley prevé para recurrir contra la resolución judicial que se impugna por esta vía procesal.

Los defectos anotados inciden en el incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 2606 numeral 2°, 2607, numeral 2 y 2610 del Código Judicial, lo que hace inadmisible la acción presentada.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado BENEDICTO DE LEÓN FUENTES contra la orden de hacer contenida en resolución judicial dictada por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ALBERTO CHANG EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PATRONATO DE LA FERIA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIA, ARTESANAL, TURÍSTICA Y FOLKLÓRICA DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE 1996, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Alberto Chang, actuando en nombre y representación del Patronato de la Feria Industrial, Comercial, Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folklórica de Colón, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales en contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 01-96 del 20 de enero de 1996, expedida por la Comisión Nacional de Ferias.

El Pleno pasa a examinar la demanda a fin de determinar si se dan los presupuestos procesales necesarios para que aquélla pueda ser admitida.

El Pleno de esta Corporación observa que, en la presente demanda de amparo de garantías constitucionales, se ha omitido la presentación de la resolución

judicial impugnada, y si bien es cierto que, el apoderado judicial de la parte actora manifiesta expresamente, tal como lo señala el artículo 2610 del Código Judicial, en el renglón denominado PRUEBAS, que "a pesar de las peticiones y gestiones personales realizadas ante la Secretaría Técnica del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en procurar obtener la prueba autenticada de la Resolución 01-96 atacada, la misma nos fue imposible de obtener, por la negativa de sus funcionarios," no es menos cierto que, la Corte ha sido constante en sostener el criterio que este hecho es necesario probarlo mediante la presentación de copia del escrito (preferiblemente anotada con el sello de "recibido"), por el cual se solicitó copia de la resolución judicial que se impugna, a la autoridad que la emite, pero como esto no fue acreditado en el expediente y a la Corte no le es dable suplir esta omisión, lo procedente es no admitir la demanda.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Alberto Chang, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 01-96 del 20 de enero de 1996, expedida por la Comisión Nacional de Ferias.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARINA MORALES SOTO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RENATO RUSSO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 0492 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Marina Morales Soto actuando en nombre y representación del ciudadano peruano PEDRO RENATO RUSSO ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución N° 0492 de 1 de febrero de 1996 dictada por el Director de Migración y Naturalización.

Cumplidas las reglas de reparto el Pleno de la Corte procede a decidir la admisibilidad de la demanda, previo su examen en atención al cumplimiento de los requisitos formales que establece el artículo 2610 del Código Judicial y, a la concurrencia de los presupuestos para su procedencia según lo exige el artículo 2611 del citado Código.

Como se ha podido observar del libelo de demanda la orden atacada está contenida en la resolución de 1 de febrero de 1996 dictada por el Director de Migración que resuelve DEPORTAR del territorio nacional al amparista. La copia de esta resolución consta a foja 5 del expediente, la cual, según el recurrente, no fue posible autenticar.

En los hechos que sirven como fundamento de esta acción se expresa que PEDRO RENATO RUSSO fue detenido por agentes de la policía porque sus documentos de permanencia en el país se encontraban vencidos, por ello se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joya a órdenes del Director de Migración, quien posteriormente ordenó su deportación.

Según el apoderado del ciudadano peruano, presentó recurso de habeas corpus y recurso de reconsideración, argumentando sobre este último: "el cual se han negado a responder".

Finalmente alega que su poderdante convive con una ciudadana panameña con quien tiene una hija.

Para resolver la Corte considera lo siguiente:

En primer término, en reiterados casos la jurisprudencia ha sostenido que cuando se pretende atacar un acto "que conlleva la deportación de personas, ya detenidas," la acción procedente es la de habeas corpus en atención a lo preceptuado por la normativa legal pertinente, es decir los artículos 2565 y numeral 5 del 2566 del Código Judicial, que específicamente incluyen la deportación sin causa legal como uno de los actos susceptibles de dicho recurso. Por este motivo se han considerado manifiestamente improcedentes las demandas de amparo interpuestas para revocar una orden de deportación, "contra la cual opera otro remedio constitucional, que es el Habeas Corpus". (Cfr. Fallo de 7 de abril de 1995, R. Jud. abril-95, p. 13; Fallo de 20 de noviembre de 1995, Amparo propuesto por FRANKLIN HURTADO CÓRDOBA -vs- Director de Migración).

En atención a lo expuesto y como se señaló al referirnos a los hechos de esta demanda, el recurrente alega que presentó recurso de habeas corpus, sin embargo no señala nada más al respecto, ni presenta prueba de haberlo hecho o de que se haya proferido algún tipo de decisión sobre el mismo. Sin embargo, el despacho sustanciador ha podido verificar que, en efecto, el aludido habeas corpus fue presentado ante esta Superioridad, bajo el número de entrada 122-96 y que aún se encuentra pendiente su decisión.

Igual situación ocurre respecto al recurso de reconsideración que argumenta haber presentado ante la autoridad demandada, pues no existe ningún tipo de constancia de que el amparista haya utilizado ese recurso legal.

Contra este tipo de resoluciones proferidas por el Director de Migración y Naturalización, como es sabido, cabe el recurso administrativos de reconsideración y el de apelación ante el Ministro de Gobierno y Justicia, según lo establece el artículo 86 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960. Así, en el caso concreto no resulta acreditado el haberse agotado estas instancias, por lo tanto bajo ningún punto de vista existe posibilidad de acoger esta acción de amparo.

Finalmente, sobre la argumentación relativa a la unión del amparista extranjero con una ciudadana panameña cabe recalcar lo sostenido en el informe al respecto citado en la resolución de 22 de noviembre de 1994 dictada por esta Corporación, que textualmente expresa:

> "... Si bien es cierto, el señor Decena al momento que se ordenó su deportación, estaba unido a la ciudadana panameña Ana Julia Gómez Magallón, esto no lo eximía de cumplir con las normas migratorias que regulan el status de los extranjeros en Panamá. ...
>
> En este sentido es importante señalar, que el artículo 38 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, dispone que "El matrimonio de extranjero o extranjera con nacional panameño no otorga de por sí derecho a la residencia en la República de Panamá. El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública, economía nacional o necesidad social, negar la entrada o la permanencia en el país a los extranjeros casados con nacional," norma esta que está en concordancia con el precepto constitucional contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que establece que "la inmigración será regulada por la ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país."
> ...".
> (Amparo de Garantías propuesto por BOLÍVAR DECENA FERRERA -VS- Director de Migración) (Énfasis de la Corte).

Las consideraciones expuestas evidencian la improcedencia del presente amparo de garantías contra la deportación decretada. Aunado a lo cual, como se tiene dicho, el demandante ya utilizó el medio de impugnación de carácter constitucional idóneo para estos casos, o sea la acción de Habeas Corpus. Por ello se impone un pronunciamiento en el sentido de no acoger esta acción.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por PEDRO RENATO RUSSO contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución N° 0492 de 1 de febrero de 1996 dictada por el Director de Migración y Naturalización.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR BERRÍOS & BERRÍOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO 86 DEL 15 DE ENERO DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Dr. Julio E. Berríos, de la firma forense Berríos & Berríos, ha apelado la resolución emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 2 de febrero de 1996, que negó el amparo de garantías constitucionales interpuesto por él, en representación de **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.**, contra la orden de hacer contenida en el auto N° 86 del 15 de enero de 1996 dictado por el Juez Primero de Circuito de Colón, Ramo Civil.

Dicho auto decretó la inspección ocular dentro de la acción exhibitoria propuesta por el Licdo. Francisco Zaldívar, en representación de **MARIO ADOLFO VLIEG JIMÉNEZ**, de los archivos, facturas, documentos y libros legales contables de la empresa **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.**, con el propósito de asegurar dichas pruebas para utilizarlas en una posible demanda de mayor cuantía, que promoverá **VLIEG JIMÉNEZ** contra la citada empresa, para probar sus derechos como Administrador Judicial, Directivo. Representante Legal, Director y Administrador Judicial del Centro Médico en comento.

El amparista fundamenta su apelación en tres puntos:

En primer lugar, que el fallo del a-quo "desatiende el sentido literal de la solicitud de acción exhibitoria extrajudicial de que habla y de la orden de hacer demandada".

Sobre el particular, aduce el actor que el auto emitido por el Juez Primero de Circuito de Colón, Ramo Civil, señala claramente que recae sobre toda la contabilidad, facturas, documentos y archivos de la sociedad demandada, y no sobre determinados asientos de los libros y documentos respectivos, tal como lo da a entender el fallo del Primer Tribunal Superior.

Dicha entidad "confunde la información especítica (sic) o determinada" que solicitó el petente, así como la orden de hacer, y las mezcla con la materia

objeto de la exhibición.

En segundo lugar, que la excepción contenida en el artículo 89 del Código de Comercio se refiere a determinados asientos de los libros y documentos concernientes, y no sobre toda la contabilidad, facturas, documentos y archivos del demandado.

En este punto, manifiesta el accionante que la norma en comento establece que no puede decretarse la comunicación, entrega o reconocimiento "general" de libros, correspondencia, así como los demás papeles y documentos del comerciante o corredores, y que después, señala el artículo en mención las excepciones del caso.

Y en tercer lugar, señala el amparista que tanto el peticionario como la orden de hacer demandada debieron señalar específicamente los asientos de los libros y documentos objeto de la exhibición, y no incorporar de manera genérica o general la contabilidad, facturas, documentos y archivos de la empresa **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.**, fundamentado en el artículo 88 del Código de Comercio.

Por ello, considera el letrado que la diligencia exhibitoria no cumple los requisitos legales establecidos, infringiéndose por ello, el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En lo referente al primer aspecto apelado, no le asiste la razón al apelante, toda vez que la diligencia exhibitoria sí recayó sobre determinados asientos de los libros y documentos respectivos; lo que hay que tener claro, es cómo se determinan los mismos.

Dicha determinación no se fundamenta en los libros o los documentos solicitados en la diligencia, sino en la relación del Dr. **MARIO VLIEG** con el **CENTRO MÉDICO DEL CARIBE** entre 1980 y 1995, en lo referente a lo que se la empresa le pagó en ese período; las acciones que él suscribió así como su valor, y si están libres y gravadas con garantías; además, el dinero que se le pagó como Administrador Judicial del 31 de julio de 1986 al 3 de enero de 1996, es decir, lo que percibió como Directivo, Representante Legal y Director Médico.

Las determinaciones señaladas, especifican los documentos a exhibir, conforme a la realidad y al desarrollo de las relaciones entre ambas partes.

No es lógico que quien pida la exhibición del documento, señale con antelación qué documento o libro -de manera individual- contiene lo que a él le interesa, porque lo que se pretende es precisamente saber qué aspecto de los libros o de los documentos le interesa a quien solicita la medida.

Es decir, la precisión se encuentra en la información a buscar, no en dónde se encuentra.

Para sustentar este argumento, el artículo 807 del Código Judicial señala lo siguiente:

> "ARTÍCULO 807. Cuando la cosa que deba exhibirse esté confundida con otra u otras, de manera que no pueda hacerse efectiva la acción exhibitoria sin presentar todas esas cosas, puede el tenedor ser obligado a la presentación de todas".

El segundo argumento esgrimido por el amparista referente a la excepción establecida por el artículo 89 del Código de Comercio, en el que sólo se puede ordenar la revisión de determinados asientos de los libros y documentos, se subsume en el criterio ya vertido por el Pleno, que tiene su sustento en la norma ya citada -artículo 807 del Código de Comercio.

El tercer argumento del amparista es la consecuencia del primero y segundo, pues señala que tanto el representante del Sr. **VLIEG JIMÉNEZ** como la orden impugnada, debieron especificar los asientos de los libros y documentos objeto de exhibición, y no abarcar de manera global la contabilidad, facturas,

documentos y archivos de la sociedad CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.

Considera esta Corporación de Justicia, que este último argumento carece de vigencia, pues lo que hace el apelante es señalar lo que debió contener el auto impugnado, y ya se ha demostrado que dicho criterio es erróneo.

En síntesis, considera esta Corporación de Justicia que no se ha violado el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, y por tanto, no prospera la pretensión del amparista.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 2 de febrero de 1996, que confirmó el auto N° 86 del 15 de enero de 1996, dictado por el Juez Primero de Circuito de Colón, Ramo Civil.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO ROMERO ARAUZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RAFAEL STANZIOLA TORRES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FISTAN, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1842 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado LUIS ALBERTO ROMERO ARAUZ, interpuso acción de amparo de garantías constitucionales en nombre y representación de la sociedad FISTAN, S. A., contra la Orden de Hacer contenida en el Auto N° 1842 de 21 de noviembre de 1995, proferida por Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, mediante la cual se admite una demanda ordinaria propuesta por JOSÉ DE JESÚS BALDWIN ARROCHA contra FISTAN, S. A.

El recurrente esgrime como fundamento de su pretensión, que la demanda interpuesta está prescrita, lo que constituye un abuso del derecho, y que, por tanto, la orden de hacer es violatoria a la garantía procesal del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Expresa también el recurrente que el demandante en la demanda civil persigue el pago de una supuesta indemnización en concepto de lucro cesante y daño moral por un accidente de trabajo sufrido el 28 de julio de 1993, en la empresa demandada.

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante resolución de seis (6) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales en el negocio motivo de estudio por esta Superioridad. Para arribar a esa decisión el tribunal ad-quem manifestó lo siguiente:

"...
En el caso que nos ocupa es la opinión de este tribunal que el libelo de demanda en su contenido resulta en efecto manifiestamente improcedente desde el momento en que la resolución atacada por esta vía, más que una orden dirigida en perjuicio del demandante, se constituye en el ejercicio de la función jurisdiccional que se

> espera de los jueces cuando reciben o admiten los casos sometidos a su consideración. Es opinión del tribunal de amparo, que la autoridad jurisdiccional salvo expresa autorización legal (ver por ejemplo, la excepción prevista en el artículo 663 del C. J.), está obligada a acoger y darle el trámite de ley a las peticiones- entiéndase demandas- que las personas debidamente acreditadas para ello, así se lo requieran. Debe agregarse a lo dicho, que la prescripción como excepción de la que puede hacer uso el demandado supone no solamente la admisión de la demanda sino el desarrollo de toda la tramitación propia del proceso propuesto. Lo anterior se desprende de la lectura del artículo 682 del Código Judicial subrogado por el artículo 15 de la Ley N° 15 de 1991 que en lo pertinente se lee así:
>
> "Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en el fallo, una vez surtida la tramitación del proceso y decidir el pleito en consonancia con la excepción reconocida; sin embargo, respecto de las excepciones de prescripción y de compensación, es preciso que se aleguen.
>
> La resolución que decide el incidente de previo y especial pronunciamiento en cualquiera de las materias antes indicadas, tendrá carácter de sentencia". (El subrayado es del tribunal).
>
> A juicio del tribunal, además de que la resolución impugnada no configura una orden propiamente tal cuya gravedad e inminencia del daño amenazado requieren de una revocación inmediata, lo actuado por el funcionario demandado encuentra respaldo en las normas de procedimiento plasmadas en el Código Judicial todo lo cual permite concluir que la acción propuesta no debe ser admitida por resultar manifiestamente improcedente y así debe declararse."

Una vez analizadas las piezas procesales, advierte el Pleno que ciertamente son valederos los argumentos manifestados por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, toda vez que el Tribunal de primera instancia ha acogido la demanda y le ha corrido traslado a la parte demandada, ejerciendo la potestad jurisdiccional que le compete para ese tipo de negocio.

El Pleno considera que no estamos en presencia de una orden que viole los derechos y garantías que consagra la Constitución a cualesquier persona que se vea perjudicada con una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad o inminencia del daño que representa, se requiera de una revocación inmediata. Es más, el acto de admisión de la demanda no constituye siquiera una orden. Dicho acto jurisdiccional admisorio de la demanda, constituye un acto meramente instrumental que admite la misma en la cual se debe, una vez admitida, correrse le traslado lo cual efectivamente ocurrió. Por el contrario, el accionante podrá hacer valer sus derechos dentro del proceso civil, en el cual no solamente debe limitarse a recibir el traslado de la demanda, sino a hacer uso de las excepciones de conformidad con el artículo 677 del Código Judicial así como las alegaciones que estime pertinentes en beneficio de sus intereses. En todo proceso, las pretensiones de las partes, incluyendo la excepción de prescripción, se deciden en la sentencia.

Además, se aprecia que la acción de amparo va dirigida contra un acto procesal que no es de aquellos que concluyen el proceso, sino precisamente que lo inician y en cuyas condiciones, de conformidad con el artículo 2606, numeral 2, se establece la procedencia de la acción de amparo contra procesos judiciales únicamente cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley que compete a los mismos.

Esta norma presupone que el proceso haya concluido con una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, hipótesis que ciertamente no es el caso en que se encuentra el amparista, el cual está impugnando un acto judicial que corresponde a la etapa primaria del proceso instaurado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GENEVA BERGUIDO DE GARRIDO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO PABLO CÁCERES CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 1861 DE 6 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce esta Superioridad, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la licenciada **GENEVA BERGUIDO DE GARRIDO** actuando en su calidad de apoderada judicial del señor **PEDRO PABLO CÁCERES LÓPEZ**, contra la orden de hacer contenida en el auto N° 1861 de 6 de octubre de 1995 dictado por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

La alzada en estudio ha sido dirigida a enervar la resolución fechada 9 de febrero de 1996 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se **negó la admisión** de la acción de amparo presentada por la licenciada **BERGUIDO**, aduciéndose como motivación fundamental, el no haberse comprobado que el amparista había agotado los medios de impugnación que tenía a su haber, antes de presentar la acción que nos ocupa.

En efecto, el Tribunal a-quo, al momento de decidir sobre la admisibilidad de la acción presentada, en la parte pertinente de la resolución de 9 de febrero de 1996 destacó:

> "Sin embargo, advierte esta Superioridad que el amparista no ha acreditado haber agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución objeto de este recurso, requisito indispensable para que pueda proceder la acción de amparo, tal como lo exige el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, según quedó reformado por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990.
>
> De conformidad con el artículo 217 y siguientes del Código Judicial los depositarios judiciales son auxiliares judiciales y de acuerdo con el artículo 1053 ibídem, la resolución que señale, regule o determine los honorarios de los auxiliares del juzgador será apelable en el efecto diferido. Siendo así, el auto que contiene la orden atacada es apelable.
>
> Reiterada es la jurisprudencia de este nivel jurisdiccional y de nuestra más alta Corporación de Justicia en el sentido de que el amparista debe probar que ha agotado los recursos ordinarios y en el sentido de que en la demanda de amparo la prueba es reconstituida.

> Ahora bien, pudiera argumentar la apoderada judicial de la amparista que ella apeló del Auto N° 1861 en mención, tal como consta a fojas 9 del expediente, pero el funcionario demandado le negó el recurso, según se lee en el Auto N° 2422 del 29 de diciembre de 1995, cuya copia autenticada acompañó con la demanda de amparo y que consta a fojas 11.
>
> Sin embargo, debe advertirse a la apoderada judicial de la amparista que como el Auto N° 1861 que contiene la orden atacada es apelable, ella disponía de otro recurso ordinario como lo es el recurso de hecho consagrado en los artículos 1137 y siguientes del Código Judicial, al cual debe acudirse cuando se niega ana apelación que concede la ley, cuando se omita una consulta o cuando se conceda una apelación en un efecto distinto al que corresponda."

ARGUMENTOS DEL APELANTE

La licenciada **BERGUIDO**, al sustentar la alzada, ha insistido en la procedencia de la admisibilidad de la acción, señalando que "el recurso de hecho no es un recurso ordinario que se pudiera ejercer contra la resolución judicial impugnada, toda vez que la doctrina mayoritaria lo califica como un recurso especial". En consecuencia, considera el apelante que el argumento esgrimido por el Tribunal A-quo para negar la admisión de esta acción de amparo resulta inválido.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Esta Máxima Corporación de Justicia, al avocarse al análisis de la resolución apelada y de los argumentos esbozados por la parte actora, debe expresar lo siguiente:

Han sido constantes y reiterados los pronunciamientos que este Tribunal ha vertido, en el sentido de que una de las condiciones de admisibilidad de las Acciones de Amparo de Garantías Constitucionales es que la parte que acude al Tribunal mediante el ejercicio de esta acción constitucional subjetiva haya agotado de manera previa **los medios y trámites previstos en la ley** para la impugnación de la resolución judicial de que se trate, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial.

Justificar que en este caso sí se dio cumplimiento a tal exigencia, como alega el recurrente, por haber presentado el "recurso ordinario" que era procedente (apelación) y que éste no fuere concedido, sería en concepto de esta Superioridad, esgrimir una tesis sumamente restringida y contraria a la amplitud conceptual de la norma legal comentada, toda vez que el texto en examen no utiliza el término "recursos ordinarios" al momento de condicionar la presentación de acciones de Amparo de Garantías al agotamiento de los **medios y trámites** previstos en la **ley**, con el fin de atacar la resolución judicial que supuestamente ocasiona el perjuicio.

En efecto, el presupuesto procesal para la admisión de estas acciones es el agotamiento de "**los trámites de ley y de los medios de impugnación**" para distinguirlo del término "recursos" en vista de es jurídicamente distinto que una resolución sea "recurrible" a que sea "impugnable"

Sería conveniente agregar finalmente, que la naturaleza jurídica del recurso de hecho, si bien puede ser objeto de discusiones a nivel doctrinario, ha sido clasificado a través de pronunciamientos del Pleno de la Corte, cuando lo ha definido como "**parte del recurso de apelación**" (cfr. sentencias de 24 de febrero de 1995 y de 11 de agosto de 1995).

Ello dice relación con la circunstancia concreta de que cuando la ley adjetiva prevé que determinados actos judiciales son susceptibles de ser atacados en una segunda instancia, y el juzgador a-quo le niega **injustificadamente** tal posibilidad al afectado, éste puede hacer uso del recurso de hecho como instrumento que le permita acceder a la segunda instancia (artículo 1141 del

Código Judicial).

Esta Superioridad advierte que el Auto N° 1861 que fijó los honorarios profesionales de la administradora judicial NORA GÓMEZ DE CARCAMO era apelable (artículo 1053 Código Judicial), por lo que el supuesto afectado disponía del recurso de hecho para acceder al Tribunal Superior de Justicia en apelación, y sólo en caso de que este recurso no hubiese procedido, sea porque no se admitiera el recurso de hecho, o sea porque se hubiese surtido la alzada de manera desfavorable para el apelante, podrían considerarse agotados los medios y trámites previstos en la ley para atacar dicha resolución judicial.

Esta exigencia no obedece a un designio caprichoso del Tribunal; descansa en las razones que esta Corporación de Justicia ha venido expresando en reiteradas ocasiones con fines didácticos y de orientación procesal, en el sentido de que el Amparo de Garantías, como recaudo **extraordinario de impugnación** es la vía constitucional instituida con el fin de enervar órdenes de hacer o no hacer que no tengan solución por otra vía judicial, ya que el recurso de amparo no es subsidiario ni sustitutivo de los recursos, trámites y medios de impugnación contemplados por la ley, que por otra parte generalmente son medios procesales más idóneos y garantizan mejor oportunidad de defensa a las partes, sin colocar en situación de desventaja procesal a ninguna de las mismas.

Coincidimos consecuentemente con el criterio externado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que el señor PEDRO PABLO CÁCERES, una vez negado sin aparente justificación el recurso de apelación podía disponer del recurso de hecho para acceder a la segunda instancia, y de esta forma que un Tribunal de alzada examinase su pretensión, actuación procesal que representaba efectivamente el agotamiento de los medios y trámites de impugnación previstos en la ley.

El Tribunal Ad-quem considera por ende que no existe vicio en la resolución recurrida, por lo cual es procedente su confirmación.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 9 de febrero de 1996 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE FRANCISCO ORCASITA NG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑORAS DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL, LUMY FÁBREGA DE ARIAS Y DE LA SEÑORITA INÉS MARÍA FÁBREGA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 5 DE MARZO DE 1996, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Por reunir los requisitos legales reglados en la legislación procesal vigente, **SE ADMITE** la acción de amparo de garantías constitucionales promovida ante esta Corporación de Justicia por el licenciado Jorge Francisco Orcasita Ng, en nombre y representación de las señoras **DELSA LORENA FÁBREGA DE DOWELL, LUMY FÁBREGA DE ARIAS y de la señorita INÉS MARÍA FÁBREGA**, contra la orden de hacer

contenida en la resolución s/n de 5 de marzo de 1996, proferida por el **PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.**

Por tanto, se requiere de la autoridad demandada dentro del término perentorio de la ley, el envío de la actuación correspondiente del caso o en su defecto un informe escrito de los hechos materia de esta acción.

Se tienen a los licenciados **JOSÉ SALVADOR MUÑOZ y JORGE FRANCISCO ORCASITA NG** como apoderados legales principal y suplente respectivamente de las accionantes.

BASE LEGAL: artículos 2609, 2610 y 2611 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADAMES FRANCESCHI EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROLFO DE OBARRIO, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ACTA DE RECIBO DE PROPUESTA DENTRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAÚL ADAMES FRANCESCHI, actuando como apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A,, ha promovido acción de amparo de garantías constitucionales contra el "ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 7-95, celebrada el 7 de noviembre de 1995, expedida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, que reviste la ORDEN DE HACER al adjudicarle provisionalmente a JOSÉ CARTELLONE, CONSTRUCCIONES CIVILES, S. A., vulnerándose los artículos 32 y 41 de la Constitución Política.

La Corte debe expresar que el recurso de amparo constituye un remedio constitucional encaminado a revocar una Orden de Hacer o de No Hacer que viole alguna garantía individual, cuando tal orden puede ocasionar un daño inmediato e inminente que amerite una pronta reparación.

En consecuencia, no procede en todos aquellos casos en los cuales existan los medios de defensa o de impugnación contra actos arbitrarios de las autoridades. En estos casos, el afectado por tales actos debe utilizar los medios de defensa contenidos en el ordenamiento jurídico con respecto a la materia.

Este último supuesto es el aplicable al caso en estudio, por cuanto existen medios de defensa contra actos ocurridos en una licitación pública, como bien le consta al amparista al hacer uso de uno de ellos.

Al examinar la demanda para resolver su admisibilidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, observa que no estamos en presencia de una Orden de Hacer, como lo plantea el amparista, más bien se trata del acto de recepción de propuestas, que al momento en que se celebró estaban vigentes las disposiciones en materia de contratación pública en el Código Fiscal, en que tales conductas no eran objeto de rechazo de las propuestas en el acto de apertura de sobres y la nueva ley tampoco le exige la causal idónea para rechazar una propuesta.

Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo del procedimiento administrativo de la licitación se deban tomar en cuenta todos los aspectos relevantes del

proceso.

Como se observa, en el acto de recepción de propuestas no hay orden de hacer o de no hacer, sino un trámite que integra el procedimiento de licitación y que, por el contrario, no encierra mandato alguno.

Esta Superioridad, en fallo de 12 de febrero de 1994, al referirse a los supuestos en que se está en presencia de Orden de Hacer, indicó lo siguiente:

> "El Pleno de esta corporación de justicia ha reiterado que estamos en presencia de una orden de hacer si un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y de ese acto positivo se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales subjetivos del amparista; es precisamente el cumplimiento de esta exigencia legal lo que confiere la investidura procesal o legitimación activa al amparista." (Registro Judicial de febrero de 1994, págs. 8-9).

Por otra parte, en la existencia de una propuesta supuestamente defectuosa, los proponentes tiene medios de impugnación con arreglo a la legislación que gobierna la licitación pública, y en último extremo, le queda a la parte que se considera agraviada con la decisión, ocurrir a la jurisdicción Contencioso Administrativo.

Puesto en otro giro, existen en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que regulan la materia, recursos y medios de defensa de las anomalías que puedan existir en un procedimiento administrativo de licitación pública, al alcance del amparista.

La Corte en reiterados fallos ha negado el acceso a este recurso extraordinario, cuando en el ordenamiento jurídico existen los cauces para hacer valer los derechos e intereses legítimos que en algún momento se puedan estimar lesionados por algún postor en una licitación pública.

El Pleno de la Corte Suprema, en fallo de 21 de junio de 1995 respecto al punto anterior expresa:

"Siendo este orden de ideas, esta Corporación Judicial ha dejado sentado en copiosos precedentes jurisprudenciales como condición de admisibilidad, que los casos en que la acción de amparo recaiga sobre un acto de naturaleza administrativa susceptible de ser impugnado mediante alguno de los Procesos Contenciosos Administrativos, resulta imprescindible agotar este medio procesal, en lugar de presentar la acción de Amparo de Garantías (v. g. resoluciones de 13 de enero de 1994; 26 y 30 de mayo de 1995 entre otras), conforme a lo dispuesto en el artículo 2606 del Código Judicial, y toda vez que en aquella instancia pueden practicarse las pruebas pertinentes, y examinar con mayor profundidad la actuación del funcionario acusado. Es preciso reiterar que cuando se sigue una vía procesal que no es la adecuada para el caso que se juzga, se puede colocar en una situación de desventaja procesal a una de las partes". (Registro Judicial de junio de 1995, pág 22).

De la lectura del recurso de amparo no se colige que haya un derecho constitucional afectado, el artículo 32 de la Constitución Política.

Sobre el contenido del debido proceso la Corte señala:

> "Con relación al artículo constitucional que se estima infringido, esta Superioridad se ha pronunciado en diversas ocasiones afirmando que consagra la garantía del debido proceso, según la cual todo proceso debe ventilarse ante el tribunal competente, conforme a los trámites previamente establecidos en la Ley y, además, prohíbe el doble juzgamiento o "non bis in idem". En sentencia emitida por el Pleno de esta Corporación de Justicia el 2 de octubre de 1992, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad, se refiere a esta garantía fundamental en los siguientes términos: "'es una

> institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso-legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la Ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas ilícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, motivadas conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (Registro Judicial. Septiembre de 1995. Sentencia de 18 de septiembre de 1995, pág. 21).

Por el contrario, entre la documentación aportada por el amparista, figura copia de recurso de reconsideración, lo que demuestra que tuvo acceso a los medios de impugnación, que constituye uno de los elementos del debido proceso.

Se aprecia, por lo tanto, que el trámite de admisión de propuestas que virtualmente inicia el procedimiento de selección de contratistas, por el hecho de encontrarse supuestamente defectuosa una propuesta, no vulnera los derechos que integran la garantía del debido proceso.

En cuanto al artículo 41 que se estima vulnerado el derecho de petición, el cual estaba contemplado en el artículo 42, de la Constitución Política de 1946, de igual redacción, el Jurista, doctor CÉSAR QUINTERO, en su obra "DERECHO CONSTITUCIONAL", Tomo I, 1967, páginas 239-240, expresa lo siguiente:

> "...
>
> Es preciso distinguir entre el derecho de petición que consagra el artículo 42 en examen, y el derecho, tanto a entablar acción jurisdiccional, como a litigar ante las autoridades administrativas. El término de treinta días que señala el referido artículo se aplica a solicitudes, quejas o consultas unilaterales que una o más personas hagan ante cualquier autoridad o funcionario públicos. Diferente es la situación cuando una persona promueve ante la propia Administración pública cualquiera de los llamados recursos gubernamentales contra un acto administrativo o inicia, ante la misma, un pleito de competencia administrativa contra otro particular. Y distinta es, asimismo, cuando cualquier persona promueve un proceso jurisdiccional entablando una acción, ya sea contencioso-administrativa, laboral, civil o penal.
>
> En estos casos se siguen los trámites y términos especiales establecidos por el Código Judicial o por las respectivas leyes procesales. ...". (El subrayado es del Pleno).

Por consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la sociedad CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S. A., mediante apoderado judicial

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR DAMARIS MEDINA DE ÁLVEO Y MELQUIADES ÁLVEO MONTILLA, CONTRA LA ORDEN DE HACER DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E.

GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Sansón, Torrijos & Asociados, en representación de los ciudadanos **DAMARIS MEDINA DE ÁLVEO y MELQUIADES ÁLVEO MONTILLA**, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución calendada el 5 de febrero de 1996, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Admitida la acción, se solicitó el envío de la actuación correspondiente y en respuesta se recibió el expediente que contiene el proceso de Guarda, Crianza, Educación y Reintegro propuesto por **FANNY ALICIA CAMPAZ CUERO** contra **DAMARIS MEDINA DE ÁLVEO y MELQUIADES ÁLVEO**, que consta de 294 páginas.

La orden de hacer que se impugna y que se considera lesiva a las garantías constitucionales de los accionantes, la expidió el Primer Tribunal Superior de Justicia, al conocer de un recurso de apelación presentado desde el 25 de abril de 1994, contra la decisión de primera instancia, emitida por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores de Panamá.

Como quiera que la acción promovida en este caso, por su propia naturaleza, pretende que el Tribunal de Amparo determine si la orden de hacer contenida en la resolución judicial censurada es violatoria de alguna de las garantías que nuestra Carta Fundamental consagra, se pasa a examinar los hechos en que se funda la pretensión y las disposiciones constitucionales que se consideran violadas con la orden dictada.

Los primeros hechos aluden al agotamiento de los medios de impugnación ordinarios que hacen viable este tipo de acción contra resoluciones judiciales. Los siguientes se refieren a la valoración probatoria de una escritura pública contentiva de un poder, a la nacionalidad de la madre biológica de la menor en disputa y a su status migratorio, al igual que a los principios esenciales del Derecho Minoril Moderno.

Los amparos contra resoluciones judiciales no son una tercera instancia y por tanto, toda referencia al reexamen probatorio es inapropiado. En cuanto a los principios rectores del Derecho de Menores que se invocan, cabe establecer si el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país e incorporada a la legislación interna mediante Ley N° 15 de 1990, tiene rango constitucional conforme a la doctrina del bloque de constitucionalidad.

Sobre este punto el Pleno después de estudiar el caso estima que la protección constitucional de los derechos de los menores, los cuales forman parte de los Derechos Humanos de segunda generación, en nuestra Carta Fundamental se mencionan de manera general en el artículo 52, pero sin llegar a precisar los principios y derechos que les asisten en el ámbito procesal. De allí que el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño representa un complemento del texto constitucional al establecer que en todas las medidas que se adopten institucionalmente, por autoridades o tribunales concernientes a niños, debe prevalecer el interés superior del menor.

En este caso, por el tema de que trata, no debe perderse de vista que a partir de Enero de 1995 entró a regir el Código de la Familia, que en su Libro Segundo regula lo referente a Menores, crea la organización tribunalicia que corresponde a la jurisdicción especial de Menores, quedando así bajo la responsabilidad funcional de un Tribunal Superior de Menores el conocimiento de las apelaciones provenientes de los Juzgados de Menores. En el caso que nos ocupa, a la fecha que entró a regir la nueva legislación minoril, el expediente ya se encontraba desde el año anterior en el Primer Tribunal Superior de Justicia para resolver la alzada y esto explica por qué un tribunal civil ordinario expide a esta fecha un fallo en esta materia, a posteriori de la entrada en vigencia del

Código de la Familia.

Sobre la prevalencia o importancia de los tratados internacionales sobre el derecho interno, existen dos teorías: (la monista y la dualista) además de lo normado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La teoría dualista considera que el Tratado internacional no crea un derecho interno, ambos sistemas (el internacional y el interno) son iguales, independientes y separados, uno rige la conducta de los Estados, mientras el otro regula la de los particulares.

La teoría monista, por su parte, contradice la anterior al considerar que ambos sistemas se entrelazan y complementan como aspectos de un solo ordenamiento jurídico. La Convención de Viena, a su vez señala que la aplicación de los Tratados debe hacerse en el sentido que mejor garanticen la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos.

En el caso que se analiza, el amparista señala como normas constitucionales infringidas varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño, convención que fue aprobada por nuestro país a nivel internacional e incorporada al Derecho interno mediante la Ley Nº 15 de 1990. Esa adopción como ley formal no desvirtúa el rango de convenio que su normativa tiene a nivel internacional. Como se expresó antes, nuestra Constitución en esta materia sólo contiene principios generales, de carácter programático, lo que permite considerar algunas de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño que tienen un rol complementario, en las que se establece el derecho del niño a la protección especial y la primacía de sus intereses. Ese concepto del interés superior del menor lo describe Daniel O'Donnell como "el derecho del niño a una protección especial" (Cfr. Protección Internacional de los derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas, 2ª ed. 1989, pág. 318). Esto explica el texto del artículo 3 de la Convención cuando indica que "en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración que se atenderá será el interés superior del niño".

En este caso se da la particularidad que la Corte ya ha conocido de otra acción de amparo cuando cursaba distinta etapa del proceso, pues el mismo se inició en diciembre de 1991, cuando la niña **CARIDAD DEL CARMEN CAMPAZ** solo tenía de siete a ocho semanas de nacida y a esa fecha ya había sido cedida por su madre a una pareja de posibles adoptantes, en guarda y crianza temporal. El largo proceso al que se ha sometido esta solicitud de reintegro, ha creado un problema complejo que desvirtúa el concepto del niño como sujeto de derechos y lo coloca como objeto de una pugna de intereses de los adultos, sin que el Tribunal que conoció del caso haya asumido el papel que le corresponde en actuar con preminencia y determinar cuál es el interés superior del menor, a fin de que sea éste el que prevalezca. Por ello, se arriba a la conclusión que el Tribunal infringió el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño en relación con el 52 Constitucional.

Respecto a la violación de los artículos 17 y 32 de la Constitución, que anota el amparista, no encuentra la Corte en el fallo contentivo de la orden de hacer impugnada, las infracciones mencionadas, en virtud de que la primera norma citada es de carácter general y no se adecúa al caso sub-júdice y el artículo 32 en cuanto a la valoración de la prueba fue acatado conforme a los criterios que rigen sobre el particular.

Respecto a la infracción del artículo 52 de la Constitución, que trata sobre la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizar el derecho de éstos a la alimentación, la salud y la educación y la seguridad y previsión sociales, cabe anotar que en el presente caso esa obligación estatal está supeditada a determinar previamente cuál es el interés superior del menor, que es precisamente la omisión que se advierte en la orden de hacer que se impugna.

Por lo expuesto la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías

presentado y en consecuencia, REVOCA la resolución de 17 de enero de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
CON SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
CON SALVAMENTO DE VOTO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ.

Salvo respetuosamente el voto porque considero que este caso manifiestamente no es cuestión constitucional.

El proyecto termina sosteniendo que:

> "El largo proceso al que se ha sometido esta solicitud de reintegro, ha creado un problema complejo que desvirtúa el concepto del niño como sujeto de derechos y lo coloca como objeto de una pugna de intereses de adultos..."

Así se concluye que se ha violado el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 15 de 1990):

> "ARTÍCULO 3°: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
>
> 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
>
> 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

Difícilmente se puede concluir en que dejar a la niñita Caridad con la madre o con quienes la han cuidado, viola esta disposición.

No se desconoce la emoción que despierta un conflicto como éste. Es el cariño y el amor que ambas partes sienten por la niña; pero sin capacidad para entenderse armónicamente y sin excluirse; que tanto una parte como la otra pueden brindarle su cariño, ayudarla y protegerla, sin mezclar el egoísmo con el noble sentimiento del amor.

No es cuestión de que la corte tome parte en esto al conocer de amparo de garantías constitucionales, ello que me exime de afirmar con quien debe quedar la niña.

Creo que éste no es un problema constitucional.

Fecha ut Supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Como lo expresé en la fecha en que se discutió el caso en cuestión, Pleno pasado. Coincido con el criterio del Magistrado **RAFAEL GONZÁLEZ** en el sentido de que el problema planteado no tiene visos constitucionales, sino, materia puramente legal, advirtiendo que respeto el proyecto de la distinguida Magistrada Ponente.

Fecha ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EDISÓN GUILLÉN FERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA N° 1 DE 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado José Luis Varela, actuando en nombre y representación de EDISÓN GUILLÉN FERNÁNDEZ, contra la resolución N° 1 de 7 de febrero de 1996, proferida por la Directora Provincial de Educación de la Provincia de Herrera.

La alzada se dirige contra sentencia de 29 de febrero de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se deniega la iniciativa procesal.

Por anunciada la apelación en tiempo oportuno, debe la Corte decidir lo que en derecho corresponda.

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

Silvana Cassino de Crespo interpuso, ante la Dirección Provincial de Educación de la Provincia de Herrera, queja contra el amparista, quien labora como inspector docente en el centro educativo Primer Ciclo de Parita, por supuesta agresión física. Durante el trámite de la queja, la Directora Provincial de Educación de la provincia de Herrera decretó la "suspensión preventiva de Edisón Guillén Fernández ... como inspector docente, asi mismo (sic) la suspensión de los pagos de sus sueldos" (f. 5), medida que ahora se ataca por la vía constitucional del amparo.

A juicio del amparista, la medida acusada fue tomada con infracción del debido proceso legal, "toda vez que el procedimiento ... señala que se debe dar traslado de los cargos que se imputan en un proceso administrativo, para que la contraparte, los conteste y haga valer sus derechos, lo cual lamentablemente no se hizo en el presente negocio" (f. 3).

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante sentencia de 29 de febrero del año que decurre, decidió denegar la acción de amparo propuesta, por considerar no probada la violación del debido proceso, y que "se trata de un

espectáculo público bochornoso que riñe con la moral y buenas costumbres" (f. 16), por lo que "no resulta consecuente resolver la petición conforme a la aspiración del amparista" (f. 17). Según la opinión que externa la sentencia apelada:

> La Ley Orgánica de Educación que está vigente, reformada por la Ley 34 del 6 de julio de 1995, recepta el procedimiento que se debe cumplir administrativamente contra faltas que vulneran disposiciones legales del ramo educativo y en esas hipótesis se le corre traslado al subalterno del pliego de cargos, por el término de ocho (8) días para que se defienda.
>
> Pero como en toda regla hay una excepción: cuando se trata de faltas públicas o escándalo social, que requieran una acción rápida para salvar al Ramo del desprestigio, "el funcionario a quien corresponde, **procederá a suspender de su cargo al inferior**, en falta y a llenar inmediatamente los demás requisitos que en esta Ley se establecen (Artículo 141 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Lo destacado es nuestro)".

DECISIÓN DE LA CORTE

De la lectura del libelo se desprende claramente que el actor pretende enervar un acto individualizado de carácter administrativo, mediante el cual se le suspende del cargo de inspector docente.

Sobre situaciones de esta índole se ha manifestado reiteradamente esta corporación de justicia, para dejar sentado que cuando se trata de la impugnación de actos de naturaleza administrativa, una vez agotada la vía gubernativa debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la utilización de la acción de restablecimiento de derechos subjetivos, en virtud del *principio de preferencia de la vía contencioso-administrativa sobre la vía constitucional*, para la impugnación de actos administrativos individuales, lo que indica que la demanda no debió ser siquiera admitida.

Asuntos concernientes al status de funcionarios dentro de la administración pública, tales como destituciones, suspensiones, traslados, afectación de pagos, deben ser revisados por medio de la acción de plena jurisdicción y no por la vía de esta acción constitucional de carácter extraordinario (Cf. sentencias de amparo de 26 de abril de 1993, de 24 de agosto de 1994, de 26 de septiembre de 1994 y de 18 de agosto de 1995).

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 29 de febrero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y, en su lugar, VIABLE la demanda de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado José Luis Varela, en nombre y representación de Edisón Guillén Fernández.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. ERNESTO SANTIAGO SELLES ALVARADO, EN REPRESENTACIÓN DE ENOC E. IBARRA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 6 DE 9 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el amparo de garantías constitucionales presentado por el Licenciado Ernesto Selles, en representación del señor **ENOC E. IBARRA**, contra la Resolución N° 6 de 9 de febrero de 1996, proferida por la Gobernadora de la Provincia de Herrera, dentro del juicio correccional de policía que se sigue como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido entre la parte recurrente y el señor MANUEL GALLARDO.

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante resolución de 5 de marzo de 1996, denegó la presente acción constitucional por considerar que la orden atacada no es violatoria de la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de nuestra carta magna.

Por su parte, el recurrente en amparo alega, fundamentalmente, lo siguiente:

> "A nuestro juicio la Resolución N° 6 de 9 de febrero de 1996 proferida por la señora **AMINTA DE GUILLÉN, GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE HERRERA** y por la cual ordenó, a petición de MANUEL GALLARDO, la práctica de una Diligencia de Reconstrucción y la recepción de Testimonio no aducidos ni pedidos dentro del término de ley y, por lo tanto, extemporáneos, viola de manera directa, por omisión, el artículo 32 de la Constitución Política, por cuanto dicha actuación de la señora Gobernadora de Herrera ha desconocido y negado la voluntad abstracta de dicha norma fundamental ..." (Foja 29).

En primer lugar, se observa que la resolución atacada consiste en un acto de mejor proveer proferido por la Gobernación de la Provincia de Herrera, dentro de un juicio correccional de Policía (accidente de tránsito), con el objeto de que se practiquen ciertas pruebas allí señaladas. Esta resolución no constituye una orden de hacer o de no hacer sino, más bien, un acto de mero obedecimiento, ya que no contiene un mandato contra la parte que se considera afectada con ella.

Al respecto, esta Corporación Judicial ha señalado reiteradamente que para que la acción de amparo sea viable, es preciso que se dirija contra una orden de hacer o de no hacer, pues no es pertinente enderezarla contra actos de mero trámite, de obedecimiento o de impulso procesal. Consecuentemente, el Tribunal Superior no debió admitir la presente acción, en vista de que la resolución impugnada no impone la ejecución o la no ejecución de un acto que pueda violar alguna garantía fundamental.

En mérito de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 5 de marzo de 1996 y, en su lugar, DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales presentado por el apoderado judicial del señor ENOC E. IBARRA, dentro del juicio correccional de policía que se adelanta como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido entre la parte recurrente y el señor MANUEL GALLARDO.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PROPIEDADES TOKIMI, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 24 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de Apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema la acción de **Amparo de Garantías Constitucionales** propuesta por el licenciado DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA en nombre y representación de **PROPIEDADES TOKIMI, S. A.** cuyo Presidente y Representante Legal, según señala el apoderado judicial, es FLAVIO CORREA. La acción de amparo ha sido interpuesta contra la Orden de Hacer contenida en la resolución de 24 de enero de 1996 proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, mediante la cual se señaló fecha para la venta en pública subasta de una finca propiedad de TOKIMI, S. A.

El Primer Tribunal Superior de Justicia en resolución calendada 4 de marzo de 1996 (fs. 29 a 30) decidió **NO ACOGER** esta acción de amparo en base a dos deficiencia de carácter formal, que son:

1- El proponente de la demanda de amparo no acompañó la respectiva certificación del Registro Público a fin de establecer que ostenta la representación legal de la sociedad anónima, en nombre de quien dice actuar; calificación que es la prueba idónea que debió presentar a tenor de los artículos 582, 585, 626 del Código Judicial y el artículo 296 del Código de Comercio.

2- La resolución judicial atacada no contiene orden de hacer o no hacer, lo que resulta indispensable para la viabilidad del amparo a la luz de lo normado por los artículos 50 del Constitución y 2610 del Código Judicial.

Por su parte, el apoderado del amparista en el recurso de apelación, visible de fojas 32 a 34 del expediente, pretende que el Pleno de la Corte declare:

1- "Que quien otorga poder tiene legitimidad para interponer el Recurso". Sostiene, que el artículo 2606 del Código Judicial legítima a cualquier persona contra la cual se haya dictado una orden para promover amparo; y, que el examen de los poderes y la documentación formal fue cumplido previamente por la Secretaría del Primer Tribunal Superior.

2- Que la resolución de 24 de enero de 1996, contiene orden de hacer consistente en ordenar el remate judicial de la finca 7,493". En tal sentido, argumenta que se trata de una orden de venta judicial que afecta a la sociedad y a su representante legal".

Para resolver, la Corte considera lo siguiente:

Examinado el expediente contentivo de la presente acción de amparo se ha podido apreciar que, previo al libelo de demanda, consta (fs. 1 a 3) el poder otorgado por FABIO MANUEL CORREA ARAÚZ, quien dice actuar en su calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad **PROPIEDADES TOKIMI, S. A.**, a favor del licenciado Carrillo Gomila. Sin embargo, como bien señala la resolución apelada, no figura certificación del Registro Público que acredite que el amparista tiene esa condición, y en consecuencia, la facultad de actuar en nombre de dicha sociedad.

La jurisprudencia ha interpretado el artículo 50 de la Constitución en lo que respecta al tema de **legitimación activa** en el amparo en el entendimiento de que tiene el derecho para solicitar la revocación de la orden arbitraria toda persona (natural o jurídica) **contra la cual** se expida o ejecute el acto, y de que aunque dicha solicitud, además del agraviado, también pueda formularla cualquier otra persona, **se tiene que hacer en nombre y representación del afectado.**

Cuando el agraviado sea una persona jurídica es requisito fundamental que se acredite su existencia legal por los medios probatorios correspondientes y la persona que ostenta su representación está obligada probarlo. La Corte expresó en resolución de 13 de julio de 1991 lo siguiente:

> "... Observa la Corte que el amparo se promueve en representación de la Sociedad denominada CONSTRUCCIONES CASTRO, S. A. Sin embargo, con el libelo de demanda no se acompaña certificado que demuestre la existencia de la misma ni mucho menos que señale en quién recae la representación legal." (R. J. julio -1991-, p. 13).

Adicional a esta exigencia de presentar certificado expedido por el Registro Público que acredite la existencia legal y la representación de la sociedad, se requiere que dicho certificado esté vigente de acuerdo al artículo 626 del Código Judicial, o sea que se presente dentro de un año a partir de la fecha de su expedición. (Ver fallo de la Corte de 11 de marzo de 1992).

Debe quedar claro, para efectos de lo alegado por el apelante sobre el poder y la legitimación para actuar, que no se puede confundir la **legitimación procesal activa** que debe tener el demandante en la acción de amparo (demostrar el interés legítimo en la revocatoria de la orden o bien que se actúa en representación -acreditada- de quien lo tenga), con el hecho de que el demandante no puede presentar el amparo por sí mismo sino que debe nombrar un abogado que lo represente, otorgándole el poder respectivo, según lo prevee el artículo 2609, del Código Judicial con lo cual se alude a la **legitimidad en la representación.**

En consecuencia, no puede afirmarse que quien otorga un poder es el que está legitimado para interponer el amparo, pues si se trata de un caso como el presente en que el agraviado es una persona jurídica, quien lo otorga debe acreditar que es su representante legal con facultades para comparecer y actuar en nombre de la sociedad.

Finalmente, el Pleno de la Corte comparte el criterio del Tribunal Superior de Justicia que concluyó señalando que, en este caso, la resolución atacada no contiene una orden susceptible de ser impugnada en amparo. En efecto, según se observa a fojas 10, a través de dicha resolución se informa la fecha en que se llevará a cabo la venta en pública subasta de una finca, se señala la base del remate y lo que requiere consignar el postor para habilitarse; por tanto, la resolución no reviste la forma de un mandato sino de una actuación de mero trámite.

En consecuencia, la Corte Suprema,PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 4 de marzo de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado EUGENIO CARRILLO GOMILA, en nombre y representación de PROPIEDADES TOKIMI, S. A. contra LA ORDEN DE HACER contenida en la Resolución del 24 de enero de 1996, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA, RAMO PENAL, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JAIME J. JOVANÉ en su condición de apoderado especial de ERNESTO CÓRDOBA LÓPEZ ha interpuesto Recurso de Apelación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que declaró "NO VIABLE" la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el apelante contra la Orden de Hacer contenida en la resolución de 18 de agosto de 1995, dictada por la Juez Décimo Segunda, del Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La resolución apelada expresa que después de admitida la demanda y examinados los antecedentes del caso, se advirtió que la resolución impugnada no contenía una orden de hacer o de no hacer contra la cual fuese procedente la acción de amparo, preceptuada en el artículo 50 de nuestra Carta Fundamental.

La resolución atacada en amparo, que posteriormente fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior, decidió NEGAR el Incidente de Nulidad de previo y especial pronunciamiento, propuesto por el Lic. Jované dentro del proceso seguido a ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA por el delito de Apropiación Indebida en perjuicio de FERNANDO ALONSO GUERRA.

Del contenido de este tipo de acto jurisdiccional no se desprende una orden o mandato, según señaló la resolución apelada, y en tal sentido se ha pronunciado el Pleno de la Corte en diversas oportunidades. Entre la jurisprudencia sentada sobre esta materia, se cita la siguiente:

> "Coincidimos con el criterio expuesto por el primer Tribunal Superior dado que efectivamente el Auto que declara nulo todo lo actuado en el proceso penal propuesto en ese despacho, no trata de una orden de hacer, sino de un acto jurisdiccional de naturaleza formal y declarativa, que se encuentra dentro de las facultades de juzgar, a fin de que se prosiga o no con el aludido proceso penal.
>
> Ya en diversas ocasiones esta Corporación Judicial ha manifestado que `en estricta lógica jurídica estamos en presencia de una orden de hacer cuando un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y que de ese acto positivo se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales objetivos del amparista (Cfr. Resolución de 18 de noviembre de 1993)
>
> Reiteramos que el Auto proferido por la Juez Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, que declara nulo todo lo actuado en el proceso penal antes aludido, es un acto jurisdiccional que no conlleva en sí una orden.
> ..."
> Sent. de 3 de mayo de 1994, Registro Judicial, Mayo, 1994, pág. 2).
> "...
> La Corte ha sido invariable, en el sentido que la negativa de un incidente de nulidad, como es el caso subjúdice, no es una orden hacer. Por tal motivo todo amparo de garantías constitucionales que no se dirija contra una orden de hacer o no hacer debe declararse inadmisible.
> ..."

(Sent. de 16 de mayo de 1994, Registro Judicial, Mayo, 1994, pág. 30-31).

El Pleno de la Corte comparte la decisión del a-quo, pues además de estar fundamentada en los fallos que ha dictado esta Corporación en casos similares al que nos ocupa, resulta evidente que la resolución judicial que NIEGA un Incidente de Nulidad dentro de un proceso penal, por su naturaleza y características, no encierra un mandato de parte del funcionario judicial sino que más bien refleja una actuación que se limita a la emisión de un pronunciamiento negativo sobre una solicitud, sin ordenar que se haga o se deje de hacer algo.

En consecuencia, debido a que el acto impugnado en amparo no cumple con los presupuestos que establece el artículo 50 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2606 del Código Judicial, este remedio constitucional para efectos del presente caso resulta MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE y, a pesar que el Primer Tribunal lo admitió inicialmente, el Pleno de la Corte está de acuerdo con la decisión posterior sobre su no viabilidad.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 6 de marzo de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se "DECLARA NO VIABLE" el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por ERNESTO ENRIQUE CÓRDOBA LÓPEZ contra el Juzgado Décimo Segundo de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ARISTIDES B. FIGUEROA G., EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA REPUBLIC NATIONAL BANK, INC., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 28 DE ABRIL DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ARISTIDES B. FIGUEROA G., actuando en calidad de apoderado general de la entidad bancaria REPUBLIC NATIONAL BANK, INC., ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Auto de 28 de abril de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

La resolución atacada confirma el Auto N° 2103 de 23 de septiembre de 1993, proferido por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se resuelve: "DECLARAR NO PROBADA la Tercería Coadyuvante interpuesta por REPUBLIC NATIONAL BANK, INC., en el presente proceso ordinario en ejecución incoado ante este Despacho por TRANSPORTE Y EQUIPO, S. A. y EQUIPOS Y MOTORES INDUSTRIALES, S. A. contra CORPORACIÓN FINANCIERA CONTINENTAL, S. A. ALFREDO ESCOBAR BRAVO y JEANETTE MARURI DE ESCOBAR".

De acuerdo con lo expuesto por el amparista, la autoridad demandada, al emitir la referida resolución, ha vulnerado el principio del debido proceso que consagra el artículo 32 de la Constitución Política de la República, por haber desconocido la regulación contenida en el párrafo final del artículo 1677 del

Código Judicial. Además señala la violación del artículo 17 de nuestra Carta Magna.

El Pleno entra al estudio de la presente iniciativa procesal, a objeto de determinar si se cumplen las exigencias contenidas en los artículos 2606 y 2610 del Código Judicial.

De conformidad con la norma señalada, esta es, artículo 2606, del Libro Cuarto que regula las Instituciones de Garantías, la acción de amparo puede ejercerse contra toda clase de actos "que revistan la forma de una orden de hacer o de no hacer, cuando por la gravedad o inminencia del daño que representan requieren de una revocatoria inmediata". (Subraya la Corte).

Observa el Pleno que el acto que se censura mediante esta acción constitucional, fue dictada el 23 de septiembre de 1993 (fs. 3-8). Contra esta resolución, el licenciado ARISTIDES FIGUEROA anunció apelación y, una vez surtida la misma ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, fue confirmada mediante resolución de fecha 28 de abril de 1995, visible de fojas 9 a 20 del cuaderno que contiene el presente negocio. Se aprecia, además, al final de la página 20 antes indicada, y la cual forma parte de la resolución proferida por el Tribunal Superior, el informe de la Secretaria del Primer Tribunal Superior de Justicia, en las que hace constar que el día 3 de mayo de 1995, "se entregó copias a los apoderados legales de las partes, según fojas 79 y 80 del libro respectivo de copias". Por último se aprecia al reverso de la citada página 20 la certificación en cuanto a la fijación del edicto N° 928 de 4 de mayo de ese mismo año. Como consecuencia de ello, la resolución quedó notificada el 10 de mayo de 1995, fecha cuando quedaron agotados los medios ordinarios de impugnación susceptibles de ser utilizados en la causa civil.

Con la relación de los datos cronológicos y del ejercicio de los remedios procesales, se hace incomprensible el hecho de que el amparista haya demorado hasta ahora la utilización de esta vía procesal extraordinaria. Ello es así, debido a que la acción de amparo de garantías constitucionales fue presentada ante esta Superioridad el 15 de marzo de 1996, luego de transcurridos diez (10) meses y cinco (5) días.

El amparo es un recurso extraordinario al que se recurre cuando se vulneran algunas de las garantías constitucionales y que representen un daño inminente que requieran de la revocación inmediata del mismo.

La inminencia del daño no aparece acreditada en el recurso, sino todo lo contrario, ya que el accionante ha dejado de transcurrir diez (10) meses y cinco (5) días, antes de recurrir a esta acción constitucional, de donde se desprende, por sus propios actos, que la urgencia e inminencia no existe.

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido que la demora en la interposición de la acción de amparo de garantías constitucionales, no satisface plenamente el requisito legal atinente a la comprobación de la existencia de un daño grave o inminente, que la ley exige como componente de procedibilidad de la acción.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado ARISTIDES B. FIGUEROA G.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO CHANG, EN REPRESENTACIÓN DE YADIRA ALDERETE DE ARAUZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA FERIA INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIA, ARTESANAL, TURÍSTICA Y FOLKLÓRICA DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DEL 20 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE FERIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora YADIRA ALDERETE DE ARAUZ ha presentado, mediante su apoderado judicial especial, demanda de amparo de garantías constitucionales contra la Comisión Nacional de Ferias.

En la demanda se pide a la Corte que se revoque una orden de hacer proferida por la Comisión Nacional de Ferias del Ministerio de Hacienda y Tesoro mediante Resolución N° 01-96 del 20 de enero de 1996 que reconoce como ente representativo por el Patronato de la Feria Nacional de Colón a la Junta Directiva presidida por el Ingeniero Henry Simmons Quiroz y establece que la señora Yadira Alderete de Araúz y cualquier otro ciudadano puede organizar eventos feriales pero sin que el mismo esté reconocido por la Comisión Nacional de Ferias.

Considera el Pleno que estamos en presencia de un acto administrativo el cual es impugnable en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, previo agotamiento de la vía gubernativa. En este sentido, no es el amparo de garantías constitucionales la vía procesal adecuada para impugnar el mencionado acto administrativo, criterio que ha sentado la Corte en numerosas ocasiones.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, por ser manifiestamente improcedente, la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por la señora YADIRA ALDERETE DE ARAUZ contra la Comisión Nacional de Ferias del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL RENÉ APARICIO ALBA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Raúl René Aparicio Alba, actuando en su propio nombre, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales contra orden de hacer contenida en la sentencia PJ-4 de 25 de septiembre de 1995, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 de la

Provincia de Panamá. El peticionario considera como infringidos los artículos 19 y 32 de la Constitución Nacional, consagratorios del principio de igualdad y la garantía del debido proceso, respectivamente.

Con el objeto de decidir sobre la admisibilidad del recurso, se procede a examinar si el libelo de amparo cumple con los requisitos formales que establecen tanto el Código Judicial como la jurisprudencia de esta Corporación.

Observa la Corte que el libelo adolece de defectos formales que lo hacen inadmisible a la luz del ordenamiento procesal constitucional vigente. En primer lugar, en lo que a la parte demandante respecta, se señala que está constituida por las sociedades Consultores Asociados, S. A. y Mantenimiento Preventivo, S. A., "cuyas generales y las de sus respectivos representantes legales constan arriba" (f. 26); sin embargo, quien concurre ante la Corte Suprema es el licenciado Raúl René Aparicio Alba, "actuando en mi propio nombre y de (sic) representación" (f. 26). En cuanto a las empresas mencionadas como demandantes, no aparecen indicadas sus generales, requisito exigido por el artículo 654 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2610 de dicho cuerpo normativo.

En el mismo orden de las formalidades, además de lo anterior se observa que no aparece en el expediente poder otorgado por las empresas Consultores Asociados, S. A. y Mantenimiento Preventivo S. A. al licenciado Aparicio, de donde se deriva la infracción directa del artículo 2609 del Código Judicial, el que, a los fines del ejercicio de esta acción, preceptúa textualmente:

> "Las partes deberán nombrar abogados que las representen" (Subraya la Corte).

Finalmente, se advierte que la demanda se encuentra dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, en la parte relativa al objeto de la demanda, el licenciado Aparicio solicita a "los Honorables Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia" le concedan el amparo que impetra (f. 27), lo que es visiblemente incorrecto.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado Raúl René Aparicio Alba contra orden de hacer contenida en la sentencia PJ-4 de 25 de septiembre de 1995, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 4 de la Provincia de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ E. HERRERA CRUZ, EN REPRESENTACIÓN DE AMADO GONZÁLEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 20 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, ha ingresado en grado de apelación, al Pleno de la Honorable Corte

Suprema, la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licdo. José E. Herrera Cruz, en representación de **AMADO GONZÁLEZ**, contra las órdenes de hacer contenidas en la providencia proferida el 5 de octubre de 1995 por la Juez Segunda de Trabajo de la Primera Sección, y la resolución del 20 de octubre del mismo año, dictada por su Suplente.

La primera resolución ordenó subsanar el poder conferido por el amparista al Licdo. Herrera Cruz, por demanda laboral planteada contra la empresa **ACE DE PANAMÁ CORPORATION, S. A.** (propietaria de Do It Center-Río Abajo).

La segunda orden impugnada, ordenó el archivo del expediente, por no practicarse la corrección ordenada.

El accionante interpuso la acción de amparo de garantías constitucionales contra la Juez Segunda de Trabajo y su Suplente, ante el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Dicha Corporación dictaminó en su fallo del 1° de marzo de 1996, que no había mérito para admitir la acción propuesta, toda vez que no cumple con lo normado en los numerales 1 y 2 del artículo 2610 del Código Judicial, es decir, que el amparista trata de impugnar dos órdenes de hacer emitidas, una por la Juez Titular, y otra de su Suplente.

Que el amparista no estableció con precisión contra cuál de las órdenes va dirigida la acción, situación que dificulta su estudio, y la hace inadmisible.

En otro sentido, manifiesta el a-quo que "... el actor no ha demostrado haber agotado los medios y trámites previstos por la ley, que indiquen que ambas órdenes de hacer fueron impugnadas en la jurisdicción laboral, ni que hayan sido rechazadas por el funcionario ahora demandado; requisito éste de imperativo cumplimiento, según lo exige el numeral 2 de la norma 2606 del Código Judicial."

En consecuencia, el Licdo. Herrera Cruz apeló oportunamente la decisión expuesta, fundamentando su recurso en los siguientes argumentos:

Que el a-quo se excedió en la interpretación del artículo 2610 del Código Judicial, toda vez que la misma no establece que la acción se tenga que interponer contra una sola orden de hacer o no hacer, ni tampoco señala que no se puede interponer contra varios funcionarios a la vez, más si "... estos FORMAN un MISMO ENTE como un Juez Suplente que sigue el procedimiento en 'un caso' por una orden anterior la cual es secuencia de la última."

En cuanto al archivo del expediente, señala el letrado que el mismo "se suscitó con agravante", al no notificar -la juez suplente- la resolución que lo ordenó. Esa resolución es apelable, en virtud de lo normado por el artículo 914 del Código de Trabajo y por lo tanto, tiene que ser notificada a las partes, por edicto o personalmente. No aceptó la secretaria del juzgado la apelación presentada por escrito, ni siquiera quiso recibirla por insistencia.

Por ello -señala el amparista- no hay constancia de esa circunstancia.

Manifiesta el actor que se violó el artículo 32 de la Constitución Nacional a través del artículo 914 del Código de Trabajo, pues dicha norma ordena la notificación a las partes y admite el recurso de apelación.

Hubo terminación del proceso y la vía estaba agotada, pero esa situación fue erróneamente analizada -a juicio del Licdo. Herrera Cruz- por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Expuestos los principales elementos del presente negocio, se avoca el Pleno a emitir su decisión, no sin antes exponer las siguientes consideraciones.

Considera esta Corporación de Justicia que no le asiste la razón al Primer Tribunal Superior, en relación a la impugnación de las órdenes, pues si bien es cierto que la acción se interpuso contra dos órdenes distintas, las mismas están

sumamente relacionadas, y la segunda fue consecuencia de la primera; por lo tanto, se consideran en una misma acción.

Pero le cabe un reproche a la presente acción, y es que su contenido no tiene rango constitucional.

Ello es así, por cuanto se mandó a corregir el poder otorgado al Licdo. Herrera Cruz en proceso laboral contra **DO IT CENTER, S. A.** según el poder para precisar que se le facultara para demandar a **ACE DE PANAMÁ CORPORATION, S. A.**

Por lo tanto, el asunto ventilado en este negocio no alcanza índole constitucional.

En vista de lo ya ventilado, considera esta Corporación de Justicia que no es dable conceder la presente apelación, y que se debe confirmar la resolución impugnada, pero por otros motivos.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución del 1° de marzo de 1996, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licdo. José E. Herrera Cruz.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICENCIADA SAQUINA JARAMILLO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AEROLíNEAS PACíFICO ATLÁNTICO, S. A. (AEROPERLAS), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA CJ-9 DEL 28 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9, ASÍ COMO CONTRA LA SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Saquina Jaramillo, actuando en nombre y representación de **AEROLÍNEAS ATLÁNTICO PACÍFICO, S. A. (AEROPERLAS)**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Sentencia CJ-9, del 28 de febrero de 1992, expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 y contra la Sentencia del 30 de enero de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

Mediante el primero de los actos acusados, la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 declaró injustificado el despido del señor Alexis Ramos y, en consecuencia, condenó a la amparista al pago de cuatrocientos quince balboas con setenta y un centésimos, en concepto de nueve (9) semanas de indemnización, más salarios vencidos desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia de primera instancia. Dicha sentencia fue modificada por el Tribunal Superior de Trabajo mediante la Sentencia del 30 de enero de 1996 en el sentido de que los salarios caídos corren desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación.

II. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

A juicio de la demandante, las sentencias acusadas violan los artículos 32, 70 y 19 de la Constitución Política, normas que, en el mismo orden, expresan lo siguiente:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."
>
> "Artículo 70. Ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente."
>
> "Artículo 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

A juicio de la apoderada de la actora, el artículo 32 se violó en forma directa "por cuanto no se ha aplicado debida y correctamente el espíritu legal contenido en el artículo 212 del Código de Trabajo, como tampoco se ha observado el espíritu legal contenido en la Ley 8 de 1981 cuando modifica el sentido de aplicación del Artículo 218 del Código de Trabajo. La correcta aplicación de dichas normas legales no dá (sic) margen a reconocer salarios caídos a los trabajadores que, habiendo sido despedidos injustificadamente, no tienen la estabilidad en el empleo; bien harto y sabido es que la estabilidad se adquiere al alcanzar dos (2) años de permanencia ininterrumpida en el empleo".

Con respecto al artículo 70 de la Carta Fundamental, la actora estima que esta norma es clara y precisa, pues, al señalar que la Ley establecerá las excepciones especiales que regirán para los despidos, así como la clase de indemnización que corresponderá a cada caso en particular, tal como lo hace la Ley N° 8 de 1981 cuando modifica el artículo 218 del Código de Trabajo, dándole sentido complementario al artículo 212 del mismo cuerpo normativo, en el sentido de que no hay cabida para el reconocimiento de salarios caídos a los trabajadores despedidos que no gozan de estabilidad en el empleo, por no contar con dos o más años de servicios.

Finalmente, la amparista considera que el artículo 19 de la Carta Constitucional se infringió porque la Sentencia acusada reconoce salarios caídos al señor Alexis Ramos, a pesar de que existen numerosos precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal Superior de Trabajo en los cuales se niega este derecho a otros trabajadores que han pretendido lo mismo que el señor Ramos (fs. 36-39).

III. DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

La primera norma constitucional que se dice infringida es el artículo 32, el cual consagra el principio del debido proceso. De acuerdo con esta norma, el debido proceso comprende tres aspectos o garantías fundamentales, a saber: el derecho a ser juzgado por la autoridad competente; el derecho a que ese juzgamiento se realice con apego a los trámites legales y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

La demandante estima que la citada norma se violó porque no se aplicó debida y correctamente el espíritu legal de los artículos 212 y 218 del Código de Trabajo, es decir, la infracción se dio porque no se aplicó en forma correcta una norma. A juicio del Pleno de la Corte, no le asiste la razón a la amparista, pues, como ha indicado esta Corporación de Justicia en oportunidades anteriores, los errores de juicio en que incurran los juzgadores en su tarea de interpretar y aplicar las disposiciones jurídicas no constituyen violaciones al debido proceso, ya que éstas sólo se configuran cuando se pretermiten o desconocen "**trámites esenciales del procedimiento establecido en la Ley**" (Cfr. Sentencia del

3 de mayo de 1994, Registro Judicial de mayo de 1994, págs. 109-111).

La garantía constitucional del debido proceso tiene un carácter instrumental "en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a Derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (Estudios de Derecho Constitucional Panameño, compilación del Dr. Jorge Fábrega P. Editora Jurídica Panameña. Panamá. 1987. pág. 388).

La violación del debido proceso se da cuando se omiten los trámites esenciales del procedimiento establecido en la Ley, tendientes a garantizar la más efectiva y amplia defensa de los derechos subjetivos de quienes recurren a los tribunales de justicia. En el presente caso, consta que el proceso por despido injustificado instaurado por Alexis Ramos contra la amparista se llevó a cabo ante autoridad competente, que las partes tuvieron la oportunidad de ser oídas, de aportar pruebas y de obtener una sentencia conclusiva de dicho proceso, lo que se desprende no sólo del expediente contentivo del mismo, sino que también lo admite la propia amparista cuando cita como única infracción del debido proceso, la incorrecta interpretación y aplicación de normas del Código de Trabajo. Por estas razones, el Pleno debe desestimar el primero de los cargos.

La segunda norma constitucional que se cita como violada es el artículo 70. Se aprecia en este sentido, que la amparista alude en forma genérica a la violación de la citada norma, a pesar de que en la exposición de los cargos únicamente se refiere a las a las excepciones especiales de los despidos por causas justificadas y a la indemnización correspondiente.

En el mencionado artículo se afirma que "ningún trabajador puede ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la Ley" y se deja a cargo de la Ley el establecimiento de las causas justas de despido, sus excepciones y la indemnización que corresponda en cada caso. La parte de la norma que la amparista estima infringida contiene una reserva legal, un mandato imperativo que obliga al legislador a desarrollar, mediante ley, las materias allí señaladas. Dicha norma tiene como destinatario al Órgano Legislativo y una de las formas en que podría resultar vulnerada sería estableciendo las causas justas de despido, las excepciones a las mismas o las indemnizaciones mediante instrumentos normativos distintos de la Ley formal.

El Pleno de la Corte considera que la infracción al citado precepto constitucional no se ha dado, pues, la parte de la norma que se estima infringida no consagra derechos subjetivos susceptibles de ser vulnerados, sino que indica al legislador ciertos aspectos que deben desarrollarse mediante Ley. Cabe señalar, que este criterio ha sido expuesto por esta Corporación de Justicia en diversos pronunciamientos, entre ellos, los fallos del 8 de mayo de 1990, de 12 de septiembre de 1986, de 26 de febrero de 1986 y 26 de mayo de 1986.

Con respecto a la violación del artículo 19 de la Constitución Política, el Pleno considera que ésta tampoco se dio, ya que el reconocimiento de los salarios caídos en las sentencias acusadas se hizo en función de la interpretación de preceptos del Código de Trabajo, de las alegaciones de las partes y de los elementos probatorios existentes en el proceso y no de un fuero o privilegio personal a favor del trabajador Alexis Ramos. En la propia Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo se indica que **"como existe despido injustificado"**, a dicho trabajador **"le corresponde la indemnización y los salarios caídos"** (f. 20).

El apoderado de la amparista dedica las 11 hojas del escrito en que sustenta la apelación contra la sentencia de primera instancia a tratar de probar que el despido del señor Ramos fue por causa justificada, lo que lleva al Pleno

de la Corte Suprema de Justicia a concluir que, en realidad, la demandante pretende convertir la presente acción de amparo de garantías constitucionales en una tercera instancia. Tal como ha expresado el Pleno de la Corte en oportunidades anteriores, el tribunal de amparo no puede convertirse en un tribunal de instancia para revisar **errores in iudicando**, valorar las pruebas o corregir las omisiones de los apoderados de las partes, todo lo cual debe hacerse en la instancia procesal respectiva. La función del Pleno de la Corte como tribunal constitucional se limita a confrontar la orden impugnada con las normas constitucionales que se consideran infringidas y valorar si, en efecto, aquélla conculca o no garantías constitucionales.

Por las razones anotadas, esta Corporación de Justicia estima que no se han producido las infracciones constitucionales que se alegan, por lo cual debe negarse el amparo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la licenciada Saquina Jaramillo, en nombre y representación de la empresa AEROLÍNEAS PACÍFICO ATLÁNTICO, S. A. (AEROPERLAS), contra la Sentencia CJ-9 del 28 de febrero de 1992, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 y la Sentencia del 30 de enero de 1996, expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CID AGUILERA CASTILLO, NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CID AGUILERA AYALA, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Cid Aguilera Castillo, en representación de Cid Aguilera Ayala, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra el procedimiento de investigación realizado por la oficina de Responsabilidad Profesional y la recomendación que en consecuencia hace la Junta Disciplinaria Superior de "BAJA" de la Institución de la Policía Nacional del Sub-Teniente CID AGUILERA AYALA.

Considera el apoderado judicial del demandante que dicha orden viola los artículos 18, 22 y 32 de la Constitución Nacional.

La acción de amparo presentada no debe admitirse porque el amparista no ha presentado prueba de la orden de hacer impartida, tal como lo ordena el artículo 2610 del Código Judicial, para que el Tribunal de Amparo compruebe la existencia de la orden que se pretende revocar y pueda determinar si es de aquellas impugnables mediante la acción de amparo.

Además, el amparo de garantías constitucionales es una acción de naturaleza extraordinaria, y no procede si existen otros remedios jurídicos consagrados en el ordenamiento legal para tutelar el derecho que se considera conculcado. Los actos administrativos que contienen acciones de personal son impugnables en la

vía gubernativa con los recursos de reconsideración ante el funcionario que expidió el acto y cuando sea procedente, con el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Una vez agotada esta vía, los acto o resoluciones administrativos que tienen el carácter de definitivos o las providencias de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto de modo que pongan término o hagan imposible su continuación, son acusables, **excepto en los casos expresamente prohibidos por la ley,** ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al respecto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha expresado reiteradamente que tratándose de despidos en el sector público su impugnación, mediante amparo de garantías constitucionales, solo procede, "en los despidos de mujeres en estado de gravidez, en que se haya violado el fuero de maternidad". (Sentencia de 25 de junio de 1993).

En mérito de lo expuesto, la demanda es inadmisible.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Cid Aguilera Castillo en representación de CID AGUILERA AYALA contra el procedimiento de investigación realizado por la oficina de Responsabilidad Profesional y la Recomendación que en consecuencia hace la Junta Disciplinaria Superior de "BAJA" de la Institución de la Policía Nacional contra del Sub-Teniente CID AGUILERA AYALA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS AMEGLIO MONCADA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON, CONTRA EL PROVEÍDO DEL 14 DE FEBRERO DE 1996, DICTADO POR EL JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ameglio Moncada, actuando en nombre y representación de la señora ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Resolución del 28 de febrero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual no se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta contra el Proveído del 14 de febrero de 1996, expedido por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá.

I. LA ORDEN IMPUGNADA

Mediante la orden impugnada con la acción de amparo de garantías constitucionales, la juez demandada negó la solicitud hecha por el licenciado Carlos Ameglio Moncada de que se suspendiera la audiencia programada para el día 15 de febrero de 1996 dentro del proceso de divorcio que el señor Salvador Robinson Pulice le sigue a la señora Rosa Fernández de Robinson (f. 12).

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

En la Resolución recurrida, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 28 de febrero de 1996, no se admitió la referida acción constitucional propuesta por el licenciado Carlos Ameglio Moncada por considerar que el proveído, del 14 de febrero de 1996, objeto del amparo, no constituye una orden de hacer, sino que en el mismo "la Juez demandada se limita a negar una solicitud de posposición de la audiencia oral que le fuera formulada por el Licenciado CARLOS AMEGLIO MONCADA, apoderado judicial de la señora ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON en dicho proceso de divorcio, lo cual constituye un asunto de mero trámite, que no cabe ser impugnado por vía del amparo que, como se deja anotado, requiere de la expedición de una verdadera orden de hacer en contra de su proponente" (f. 25).

III. LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

En el libelo en que se sustenta la alzada, el apoderado de la amparista sostiene que la resolución impugnada sí contiene una orden de hacer, ya que con ella no se niega la solicitud de suspensión de la referida audiencia, sino que se "ordena que la audiencia se celebre el día y hora previamente fijados, con cualquiera de las partes que concurra y es precisamente esta orden de hacer la que requiere de una inmediata revocatoria, por la inminencia del daño, obvio a todas luces, si se toma en cuenta que dejó en total indefensión a una de las partes, a pesar de que se había solicitado la suspensión de la audiencia, por justo motivo" (fs. 31-33).

IV. DECISIÓN DE LA CORTE

El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, "**una orden de hacer o no hacer**", que viole los derechos y garantías consagradas en ese cuerpo normativo, tiene derecho a que la misma sea revocada a petición suya o de cualquiera persona. El texto de esta norma es igual al párrafo inicial del artículo 2606 del Código Judicial.

Ambas excertas legales aluden a una "**orden de hacer o de no hacer**", es decir, aquella que contiene un mandato imperativo en el que la autoridad impone al gobernado la obligación de hacer o no hacer algo y del cual se deriva un virtual o actual desconocimiento de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El recurrente estima que el Primer Tribunal Superior de Justicia incurrió en un error al considerar que el proveído de mero obedecimiento impugnado se limita a negar una solicitud de posposición de la audiencia oral, ya que la misma "ordena que la audiencia se celebre el día y la hora previamente fijados".

A juicio del Pleno de la Corte, es evidente que la resolución impugnada niega la solicitud hecha por el licenciado Ameglio Moncada ante la Juez Primera del Circuito, ramo civil, de San Miguelito, para que se suspendiera la audiencia que dicha juzgadora había fijado previamente dentro del proceso de divorcio en el que son partes ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON y Salvador Robinson Pulice. El Proveído del 14 de febrero de 1996 se dictó en respuesta a la petición que el referido letrado hizo al tribunal en los siguientes términos:

> "En mi condición de apoderado especial de la señora **ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON**, por este medio comparezco ante Usted con mi habitual respeto **con el fin de solicitarle se sirva suspender la audiencia programada para el día 15 de febrero de 1996**, habida cuenta que en la actualidad me encuentro padeciendo quebrantos de salud; a tal punto de que necesito practicarme una resonancia magnética para establecer origen (sic) de mi dolencia a nivel cervical. Adjúntole certificado médico." (F. 10) (El subrayado es del Pleno).

Además, no le asiste la razón al demandante cuando afirma que la resolución impugnada ordena que la audiencia se celebre el día y la hora previamente fijados. Considera el Pleno que tal apreciación no se ajusta a la realidad de los

hechos, pues, tal como lo acepta el propio apoderado de la amparista en los hechos segundo y tercero de su libelo, la Juez demandada fijó el 15 de febrero de 1996 como fecha para la celebración de la referida audiencia y, con posterioridad a ello, dicho letrado solicitó la suspensión de la misma. Si para la fecha en que se dictó el Proveído del 14 de febrero de 1996 ya se había fijado la fecha de audiencia, resulta inadmisible que se sostenga que esta última resolución ordena que ese acto procesal se celebre en la fecha y hora previamente ordenada. La resolución que se recurre en el presente caso, como ya se ha dicho, niega una petición del apoderado del amparista y, por esta razón, como afirma el tribunal a-quo, no constituye una orden de hacer y no es susceptible, por tanto, de ser impugnada por medio de la acción de amparo de garantías constitucionales.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución del 28 de febrero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por la cual no se admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Carlos Ameglio Moncada en nombre y representación de la señora ROSA FERNÁNDEZ DE ROBINSON.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DOCTOR CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN GERMÁN KAHN KATTENBURG, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DENOMINADA AUTOS VARIOS N° 506, DE 16 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR LA JUEZ DÉCIMO SEGUNDA DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a esta Corporación de Justicia la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia de 18 de enero de 1996, mediante la cual NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por JUAN GERMÁN KAHN KATTENBURG contra la Juez Décima Segunda del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El caso se encuentra en estado de decidir la alzada sin más trámite, a lo que se procede seguidamente, previas las consideraciones siguientes:

La actuación remitida por el Tribunal a-quo como antecedente da cuenta la Orden de Hacer impugnada, se trata de una resolución denominada "AUTOS VARIOS N° 506" de 16 de octubre de 1995, dictada por la Juez Décima Segunda del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se "ORDENA LA AMPLIACIÓN SUMARIAL en la forma expuesta en la parte motiva de la presente resolución y FACULTA al funcionario de instrucción para la práctica de cualesquiera otras diligencias derivadas de la anterior y tendientes al esclarecimiento de los hechos".

La defensa técnica del señor JUAN GERMÁN KHAN KATTENBURG alega, entre otras cosas, que la Juez Décimo Segunda del Primer Circuito Judicial de Panamá, al decretar la ampliación del sumario ordenó la indagatoria de su defendido, desconociendo el contenido del artículo 2115 del Código Judicial, en el sentido de que no indicó qué delito justificaba tal diligencia, por tanto se ha incurrido en una violación al debido proceso, debiendo ser reparado por la vía del amparo

de garantías constitucionales.

El Tribunal Superior en la sentencia apelada, consideró que la orden de hacer no puede ser impugnada por el amparista, en virtud de que la misma está dirigida al funcionario de instrucción, produciéndose la falta de legitimidad activa. Por otra parte, señala la referida resolución que, en innumerables fallos dictados por esta Corporación de Justicia, se ha mantenido que la ampliación sumarial es irrecurrible, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 2205 del Código Judicial.

El Pleno comparte la opinión del Tribunal Superior, en virtud de que la ampliación del sumario tiene como finalidad dar impulso procesal al caso investigado, por tanto, no es susceptible de la acción de amparo de garantías constitucionales.

Con respecto a ello, en el Registro Judicial de Septiembre de 1995, p. iv, bajo la ponencia "LOS ACTOS SUJETOS A LA ACCIÓN DE AMPARO" del Magistrado doctor EDGARDO MOLINO MOLA se expresa:

> "...
> B. Determinación de si un acto contiene o no una orden por parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema.
>
> Este aspecto de determinar si existe orden o no, ha sido uno de los más importantes en la jurisprudencia, que se ha pronunciado en los siguientes casos, sosteniendo que no estamos en presencia de una orden o que los requisitos que debe cumplir la orden no se dan:
> ...
> 4) Ampliación del sumario. "En primer lugar que la ampliación del sumario no es una orden dada a la sociedad Aseguradora Mundial de Panamá, S. A., sino dirigida al agente del Ministerio Público para que complete la investigación, por lo que carece de legitimación activa en el presente proceso de amparo. Además, la resolución que decreta la ampliación del sumario es irrecurrible por disponerlo así el artículo 2205 del Código Judicial y se remite sin más trámite al funcionario de instrucción; y ello en razón de la libertad de evaluación que tiene el Juez de la causa para considerar incompleta la etapa sumarial y solicitar a su libre opinión las pesquisas y averiguaciones que considere pertinentes para la correcta calificación de la fase instructoria". (Sentencia de 27 de enero de 1993. Ponente, Molino Mola. Orlando Sánchez VS Juez Primero del Circuito de Colón)".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no admite la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por JUAN GERMÁN KHAN KATTENBURG contra la Juez Décimo Segunda de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS SUCRE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REY HAROL LÓPEZ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Teresa E. López de Barrios, se apersonó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de presentar acción de Habeas Corpus a favor del señor **REY HAROL LÓPEZ**, y contra el **DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL**, el día 16 de febrero de 1996.

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada quien, mediante escrito N° A. L.-0236-96, de fecha 22 de febrero de 1996 (f. 4), manifestó:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **REY HAROL LÓPEZ**.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor **REY HAROL LÓPEZ**. Tenemos conocimiento que el mismo fue puesto en libertad, por orden de la Fiscalía Auxiliar de la República el día 19 de febrero de 1996."

Del informe transcrito se observa que contra el señor **REY HAROL LÓPEZ**, no hay orden de detención y el mismo se encuentra en pleno goce de su libertad ambulatoria, por la cual no hay razón para continuar la actividad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y ENRIQUE DÍAZ PANEZO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, mediante cuatro (4) acciones de habeas corpus, bajo las entradas N° 050-96, 071-96, 118-96 y 138-96 presentadas contra el **Director de la Policía Nacional y el Director de la Policía Técnica Judicial**, indistintamente y a favor de **JESÚS HOQUE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y ENRIQUE DÍAZ PANEZO** colectiva e individualmente, pretende que se suspendan supuestas órdenes de detención de hecho, que afirma existen contra sus representados "instruidas a las diversas dependencias de la Policía Nacional".

Al examinar el texto de los libelos se puede apreciar que se trata de la

misma matriz, que solo varían los nombres de las personas a favor de quien o quienes se presenta la acción.

El letrado accionante conoce previamente los informes suministrados por el Director de la Policía Técnica Judicial y por el Fiscal Auxiliar de la República, en los que reiteran que no han cursado orden verbal o escrita contra sus representados, a pesar de que el sumario relacionado con el caso versa sobre un delito de robo a mano armada contra la empresa WAKED, S. A. por más de medio millón de balboas.

En su Oficio N° 2699-FAR de 14 de febrero de 1996, el Fiscal Auxiliar de la República expresa:

> "Por medio de la presente damos respuesta al mandamiento de Habeas Corpus librado a favor de los señores JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ y ENRIQUE DÍAZ PANEZO, investigados por el delito CONTRA LA PROPIEDAD (Robo a Mano Armada), en perjuicio de la Empresa WAKED, S. A., según denuncia suscrita por el señor ARISTIDES ARNOLDO ARROYO, en contra del suscrito Fiscal Auxiliar de la República y para lo cual el informamos que relacionados con estos señores y delito mencionado, este despacho ha contestado en dos (2) ocasiones seguidas, durante el presente año, Mandamiento de Habeas Corpus.
>
> Ante nuestras contestaciones, reposan en nuestros archivos, copias del cuadernillo calendado el 31 de enero del año en curso, en la que esa Máxima Corporación de Justicia ha emitido concepto relacionado con el presente recurso, el cual ha su vez es de entero conocimiento de los abogados defensores de los recurrentes, por lo cual deduce esta Agencia de Instrucción que esta actuación de la defensa Técnica, aparenta una falta de Buena Fe Procesal tendiente a dilatar la instrucción del sumario.
>
> Adjuntamos a la presente copia de la reciente contestación emitida por esa Autoridad y relacionada con la presente".

El Pleno participa de las apreciaciones del Agente del Ministerio Público, antes transcrita, ya que el licenciado Vásquez Atencio lejos de hacer gala de una ejemplificante acuciosidad a favor de sus clientes, ha evidenciado una falta de buena fe procesal muy distante de las obligaciones que impone el artículo 215 del Código Judicial a las partes y sus apoderados.

Ninguna de las personas a favor de quienes se han presentado las cuatro acciones de habeas corpus están privadas de libertad, ni cursa contra ellas una orden escrita en ese sentido. No se trata, pues, de un habeas corpus reparador ni de un habeas corpus preventivo, sino de acciones aparentemente destinadas a saturar la disponibilidad de tiempo de los Tribunales, obstaculizar y entorpecer la fase instructoria del caso que se investiga y distraer de manera caprichosa la atención de los servidores judiciales en una pluralidad de acciones improcedentes, reiterativas y dilatorias.

El Pleno advierte al abogado defensor que su comportamiento colinda con las prohibiciones expresamente señaladas por la Ley (arts. 215, 199 numeral 15 y 462 del Código Judicial) y lo insta para que encause sus acciones dentro de la corrección, lealtad y buena fe que deben matizar el ejercicio profesional de la abogacía.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA la acción presentada por cuanto ya se han registrado dos pronunciamientos recientes sobre los mismos hechos.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL MILCIADES MENDOZA MENA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **MANUEL MILCIADES MENDOZA** ha presentado acción de habeas corpus a su favor, contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 8 de febrero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante oficio N° 1532-96, recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema el día 13 de febrero del año en curso, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "Los hechos se dieron el día 13 de diciembre de 1995, a las 07:05 Hrs. cuando Unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) de la Policía Nacional, mediante Diligencia de Allanamiento, realizada en conjunto con la Corregidora de Curundú, procedieron a revisar el cuarto #855 de la Barraca #9, propiedad del señor **MILCIADES MENDOZA** con cédula N° 5-12-1529, a quien le encontraron debajo de la cómoda, en una esquina, detrás de varios pares de zapatos, una bolsita de cuero, que en su interior contiene treinta y un (31) sobres medianos contentivos de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presume sea **COCAÍNA**, además se encontró catorce (14) sobrecitos más pequeños contentivos en su interior de una sustancia en forma de polvo blanco que se presume **COCAÍNA**. Por último se le pudo detectar también, la cantidad de once balboas con setenta y cinco centésimos (B/.11.75) en monedas fraccionadas.
>
> ...
> La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) las sustancias ilícitas encontradas en poder del sindicado, para su análisis y peso, el cual resultó POSITIVA la misma, para la determinación de **COCAÍNA**, en la cantidad de **10.19 gramos.**"

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **MENDOZA MENA** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva.

Tal como se desprende del informe de actuación que antecede, la encuesta penal que mantiene privado de libertad al ciudadano **MANUEL M. MENDOZA** tiene su origen en la diligencia de allanamiento efectuada por autoridades policiales bajo la responsabilidad de la Corregidora de Curundú el día 13 de diciembre de 1995 (visible a folios 2-5 del cuaderno sumarial). En dicha diligencia se dejó constancia del hallazgo dentro de la vivienda del señor **MENDOZA** de cierta cantidad de sustancia que se presumió ilícita, distribuida en 31 sobres grandes y 14 sobrecitos pequeños, así como dinero fraccionado. La prueba de campo

efectuada a la sustancia incautada, visible a folio 7 de las sumarias, resultó positiva para la determinación de la sustancia ilícita conocida como **Cocaína.**

En estas circunstancias, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas dispone el inicio la instrucción sumarial por tratarse de un presunto ilícito contra la salud pública (cfr. folio 6 del legajo sumarial), siendo llamado a rendir declaración indagatoria el señor **MANUEL MENDOZA**, propietario de la vivienda en que se incautaron las sustancias, y presente al momento del allanamiento.

En dicha diligencia (fs. 10-13), el prenombrado negó su vinculación con las sustancias incautadas, indicando que las mismas, o habían sido encontradas en otra vivienda o llegaron a la suya sin su consentimiento o conocimiento, pero aceptó ser adicto al consumos de narcóticos.

Reposan en el legajo sumarial (cfr. fojas 27-31) las declaraciones juradas rendidas por los agentes policiales JANE ALVAREZ y ARMANDO GUEVARA que incautaron la sustancias y efectuaron la aprehensión de **MANUEL MENDOZA** en presencia de la Corregidora de Curundú, mismas que han ratificado en su totalidad el contenido del informe de novedad suscrito al momento de realizar el allanamiento, en el sentido de que los sobres contentivos de las sustancias que se presumía ilícitas fueron encontrados dentro de la barraca N° 9 cuarto 855 propiedad del señor **MENDOZA "debajo de la cómoda en una cartera de color negra de cámara fotográfica, que contenía (31) envoltorios medianos y catorce (14) envoltorios pequeños) que se presumía sea droga"**. Esta información es igualmente confirmada por la Corregidora de Curundú ANA LORENA BRENES (f. 47-48).

Por otra parte, a foja 34 del cuaderno sumarial reposa el resultado del examen pericial de la sustancia incautada efectuado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, mismo que arrojó un resultado positivo en cuanto a que las muestras analizadas: 31 sobrecitos plásticos transparentes contentivos de un polvo blanco y 14 sobrecitos más pequeños contentivos de polvo blanco resultaron positivas para la determinación de **COCAÍNA** en la cantidad de **10.19 gramos.**

El Fiscal Especial en Delitos relacionados con Drogas, con sustento en los elementos probatorios allegados a la instrucción, profirió la resolución de 14 de diciembre de 1995, en la cual ordenó la detención preventiva de MANUEL MILCIADES MENDOZA MENA, al considerar que existe vinculación entre el prenombrado, y el hecho punible que se investiga.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Máxima Corporación Judicial una vez realizada una minuciosa disquisición de las piezas que componen esta encuesta penal, y de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean la detención preventiva del señor **MANUEL MENDOZA** considera que la misma se verificó con ajuste a las formalidades contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, puesto que constan en las sumarias, elementos indiciarios de **presencia** y **oportunidad** que apuntan hacia la persona del señor **MENDOZA MENA** como responsable de las sustancias incautadas dentro de su vivienda: **COCAÍNA** en la cantidad de **10,19 gramos**, distribuidos en 45 sobres o envoltorios.

Por ende, existen en la instrucción, las piezas que legitiman la medida cautelar adoptada, al haberse comprobado:

1. **la existencia del hecho punible**: hallazgo de 45 sobres de cocaína que arrojan un total global de 10,19 gramos de sustancia ilícita, lo que permite deslindar, tal como el Pleno de la Corte ha señalado en ocasiones anteriores, que el destino de la sustancia no es el consumo, por razón de la presentación y distribución de las sustancias.

Cabe acotar que aunque el letrado que asumió la defensa técnica del imputado ha señalado que en la ampliación de indagatoria el detenido manifestara de manera voluntaria que las drogas incautadas sí le pertenecían pero estaban

destinadas a su consumo, la dosis **posológica** de Cocaína, de conformidad con lo expresado por el Médico Forense General del Instituto de Medicina Legal oscila entre los **0.2** y **0.4 gramos**, por lo que la proporción de sustancias incautadas rebasa ampliamente la dosis de consumo.

No puede soslayarse el hecho de que también se incautó una cantidad apreciable de dinero fraccionado, elemento indiciario de que el imputado podría dedicarse a la venta de sustancias ilícitas.

De las constancias de autos puede inferirse efectivamente, que la pretensión del imputado podía ser la de suministrar en venta dichas sustancias, situación que se adecua al segundo párrafo del tipo penal descrito en el artículo 260 del Código Penal para calificar el delito de Posesión de Drogas con fines de tráfico (venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal), y cuya punibilidad oscila entre 5 y 10 años de prisión.

2. **la vinculación del imputado con el hecho punible**: los informes policiales y de la Corregidora de Curundú que realizó el allanamiento son enfáticos, en el sentido de que las sustancias ilícitas se incautaron en la residencia de **MANUEL MENDOZA**. Este por su parte, si bien en principio negó rotundamente su vinculación con las sustancias, posteriormente acepta que le pertenecían, pero que estaban destinadas a su consumo.

Por consiguiente, esta Corporación es del criterio de que los indicios de presencia y oportunidad en este negocio son irrefutables, lo que en asocio con la aceptación parcial de los cargos por parte del detenido, permite concluir que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que la detención preventiva se ajusta a las exigencias constitucionales y legales correspondientes.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor MANUEL MILCIADES MENDOZA MENA, y ordena que sea nuevamente puesto a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SÓSIMO MÁRQUEZ ÁLVEO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **SÓSIMO MÁRQUEZ ÁLVEO** interpuso en su propio nombre y representación Acción de Habeas Corpus a su favor desde la Cárcel La Joya contra el Director Nacional de Corrección.

Por librado el mandamiento de Habeas Corpus el Director Nacional de Corrección mediante Nota N° 771-DNC, que corre a foja 7 rindió el siguiente informe:

"DOCTOR
ELIGIO A. SALAS
Magistrado Ponente
Corte Suprema de Justicia
E. S. D.

Honorable Magistrado:

Con el debido respeto, elevo a la consideración del Pleno de la Corte, por su digno conducto, el informe sobre la demanda de Habeas Corpus, promovida a favor del señor SÓSIMO MÁRQUEZ ÁLVEO, panameño, con céd. de i. p. N° 2-79-889.

A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor SÓSIMO MÁRQUEZ ÁLVEO, ni verbalmente, ni por escrito.

B. No podemos hacer referencia a los motivos o fundamentos de la detención en referencia toda vez que no la hemos ordenado.

C. El recurrente no está a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección. Se encuentra bajo la custodia del Director de la Cárcel La Joya, en el precitado Centro.

El mismo se encuentra a órdenes del Juzgado 1° del Circuito Ramo Penal, de San Miguelito.

Del Honorable Magistrado Sustanciador,

(fdo.) LIC. ENRIQUE MON PINZÓN
Director Nacional de Corrección."

Del informe que antecede se colige que la persona privada de la libertad corporal se encuentra a órdenes del Juzgado Primero del Circuito, Ramo Penal, de San Miguelito, por lo que el conocimiento de la presente acción de Habeas Corpus corresponde, en consecuencia al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por razón de la competencia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento del caso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Cúmplace.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS MANUEL PÉREZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Badillo Paz ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de CARLOS MANUEL PÉREZ, quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la presente iniciativa procesal constitucional, se libró

mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada quien, mediante oficio N° 1841 de 15 de febrero del año en curso, aceptó haber decretado la detención preventiva de Pérez, mediante resolución de 16 de enero del año que decurre. En el informe de rigor se detallan las circunstancias de hecho y de derecho que originaron la medida que se impugna en esta vía constitucional.

Corresponde, entonces, a la Corte determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los presupuestos formales que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo normado por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

De acuerdo con la resolución que ordena la detención preventiva de Pérez, la medida cautelar aplicada está fundamentada en la presunta comisión de delito contra la salud pública.

Consta como elemento de prueba en las sumarias para la comprobación del hecho punible, la incautación de una carterita plástica de color crema con diseños de color gris, contentiva de 16 carrizos de una sustancia en forma de polvo blanco, la que, sometida a las pruebas técnicas de rigor, ésta resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA**, en la cantidad de **1.20 gramos**.

Respecto a los elementos probatorios que obran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena, consta el informe policial fechado 13 de enero de 1996 (fs. 3 y 4 del cuaderno de antecedentes), que da cuenta de que Pérez trató de esconder la droga al momento de su detención.

La Corte observa que la cantidad incautada de cocaína (**1.20 gramos**) no sobrepasa la dosis mínima de consumo que establece la tabla posológica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, según la cual "En los adictos la dosis por ingestión es de 1 a 1.5 gramos". En concordancia con lo anterior, el agraviado acepta en su declaración indagatoria (fs. 11-17, antecedentes) ser consumidor de droga, específicamente de cocaína, todo lo cual conduce a la conclusión de que se trata de un caso de posesión para consumo de sustancias ilícitas.

Como quiera que la conducta delictiva indicada se sanciona con una pena mínima menor a los dos años de prisión, es preciso considerar infundada la medida cautelar de detención preventiva impuesta a Pérez.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva que pesa sobre Carlos Manuel Pérez y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otras causas pendientes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS TORRES PALMA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado Darío Morrice Carrillo, a favor del señor **JOSÉ LUIS TORRES PALMA**, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

El apoderado judicial del recurrente alega que la detención de su defendido es ilegal, ya que la sustancia ilícita incautada se encontró en un lugar público y no en poder del señor TORRES PALMA; razón por la cual se han violado las garantías fundamentales contenidas en los artículos 22 y 23 de la Constitución Nacional.

Ingresado el negocio a la Corte, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien respondió mediante Oficio N° 1504 de 7 de febrero de 1996, en los siguientes términos:

> "A- La orden de detención preventiva del señor JOSÉ LUIS TORRES PALMA, fue decretada por este despacho el ocho (8) de enero de 1996.
>
> B- Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de José Luis Torres Palma, se centran en que el día 4 de enero del presente año, en un operativo de profilaxis social, del área B de Bethania, se dirigieron al Bar y discoteca TORREMOLINOS, ubicado en Vía Fernández de Córdoba, al llegar al lugar se procedió a solicitar la cédula de identidad a todos los presentes. Cuando el Cabo J. Garrido procedió a entrar al mencionado establecimiento, encontró en una mesa lateral al ciudadano, JOSÉ LUIS TORRES PALMA, a solas, ciudadano de 54 años de edad, cédula N° 8-104-547, el cual reside en P. Nuevo calle 4ta. casa N° 4342, el cual mantiene un Alias TALI TORRES, el mismo se levantó de su asiento en la mesa y en actitud poco usual, se dirigió hacia los efectivos policiales para saludarlos por lo cual los mismos notaron cierto nerviosismo en su persona, y se procedió a neutralizarlo y enviarlo hacia la parte de afuera de las instalaciones, donde procedieron a revisar la mesa donde se encontraba sentado el prenombrado, detectándose en la misma, un cigarrillo encendido, un vaso, y a un lado de la mesa, en el piso pegado al muro de cemento, una cajetilla de medio paquete, marca VICEROY, la cual contenía 33 envoltorios individuales en papel cera que contenía un polvo de color blanco que se presume sea droga y tres (3) sustancias sólidas de color amarillento que se presume sea droga, y una Gillette de exacto de aproximadamente 2 pulgadas de largo.
>
> La sustancia en cuestión al efectuársele la prueba de campo, arrojó resultado positivo para la sustancia conocida como COCAÍNA." (Fojas 6 y 7).

El informe anteriormente transcrito pone de manifiesto que la detención del recurrente no tiene vicios de ilegalidad, ya que cumple con los requisitos que exige el artículo 2159 del Código Judicial.

Así, en primer lugar, se advierte que la orden de detención fue dictada por autoridad competente, en este caso, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante providencia fechada 8 de enero de 1996, consultable a fojas 13 y 14 del cuadernillo principal.

En segundo lugar, en relación con el hecho imputado, a foja 5 de ese mismo cuaderno se encuentra la diligencia de prueba de campo en la que se determina que la evidencia incautada, "consistente en treinta y tres (33) envoltorios confeccionados con papel de cera contentivos en su interior de cierta cantidad de sustancia de color blanca, que se presume sea droga y tres (3) sustancias compactas en forma de piedra", resultó positiva para la determinación de cocaína.

En tercer lugar, en cuanto a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra el señor JOSÉ LUIS TORRES PALMA, existe la declaración jurada

rendida por el Cabo Segundo, Javier Garrido, en la cual ratifica el informe de novedad suscrito por él, en el que señala al recurrente como la persona que se encontraba sentada a la mesa, junto a la cual se detectó la sustancia ilícita incautada.

Por último, la existencia de treinta y tres paquetes con droga hace pensar que la misma no se tenía con fines de consumo y, consecuentemente, la pena mínima de prisión que acarrea el delito investigado es superior a los dos años que exige el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor JOSÉ LUIS TORRES PALMA y ORDENA que sea puesto, de inmediato, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS GABRIEL SAAVEDRA REYNA, CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, (ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS HERRERA MORÁN**, defensor de **LUIS GABRIEL SAAVEDRA REYNA**, presentó y sustentó recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 8 de febrero del año en curso al resolver una acción de habeas corpus promovida a su favor, medio de impugnación que fue concedido en el efecto suspensivo y que dio lugar a su ingreso a esta Corporación Judicial.

Al revisar el texto de la resolución impugnada se puede constatar que la declaración de legalidad de la detención preventiva adoptada contra SAAVEDRA REYNA, se sustenta en que el vehículo que operaba en la madrugada del día 3 de diciembre de 1995 fue utilizado en el asalto a la estación de gasolina Texaco, Alfa 2000, el cual fue perseguido por la policía y abandonado por sus ocupantes en la escuela Motores Diesel Muñoz, lugar donde se le recuperó posteriormente. También señala el Tribunal de habeas corpus que el accionante no ha probado la excepción alegada, en el sentido de que ese vehículo le fue hurtado durante el lapso que consumía licor en una parrillada y la denuncia presentada sobre ese hurto fue hecha después de cometido el delito contra el patrimonio.

El apelante sustenta su discrepancia con la sentencia de primera instancia en la desvinculación de su patrocinado al delito investigado, pues la denuncia presentada personalmente ante la Policía Técnica de San Miguelito, tan pronto se percató del hurto del automóvil de su padre, que él conducía porque se lo había dado en préstamo el día anterior, es un indicador claro de que una persona que comete un asalto a mano armada y es perseguido por la policía no va a concurrir a una agencia de la Policía Técnica Judicial para denunciar el hurto de su auto.

En los antecedentes remitidos y la documentación adjunta al cuaderno

contentivo de esta acción, aparecen varios informativos de la policía de Parque Lefevre que relatan las "novedades" ocurridas en su sector el 4 de diciembre de 1995 y señalan que a la 1:45 a. m. recibieron una llamada sobre el asalto a la gasolinera Texaco y al llegar al lugar vieron una camioneta Nissan Sunny, con matrícula 086491 que se dio a la fuga, la cual persiguieron por la calle que conduce al Hospital Psiquiátrico, luego frente a la Plaza Carolina, siguieron por la Vía Tocumen, luego por la calle del Colegio Motores Diesel Muñoz, donde finalmente encontraron el vehículo abandonado.

Al principio de la investigación fueron detenidas tres personas: el encargado del expendio de gasolina, el dueño del auto abandonado y su hijo, éste último porque era quien había usado el auto y aunque se reportó como hurtado, no presentaba marca alguna de violencia y su sistema de encendido tenía las dos llaves con sus respectivos llaveros.

En el expediente no aparecen las declaraciones de APOLONIDES ARIAS ni de su esposa BIENVENIDA, mencionados por LUIS GABRIEL SAAVEDRA REYNA desde el momento que presentó la denuncia en la P. T. J. de San Miguelito y que se indican como las personas que le acompañaban cuando se percató del hurto del automóvil de su padre.

La presentación de la denuncia por el sindicado es un elemento de juicio que debe ser considerado en su oportunidad procesal para determinar la presunta responsabilidad del sindicado, pero en la fase inicial del sumario no opera por sí solo como desvinculante del hecho que se le imputa.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR SERRANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor VÍCTOR SERRANO BRYAN, actuando en su nombre, ha promovido acción de habeas corpus a su favor, para que se declare ilegal la detención decretada en su contra por el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

En el escrito el accionante expresa que está detenido desde el 24 de enero de 1996, en virtud de que se encontraba visitando una amiga llamada Lupe, en la residencia donde se hizo un allanamiento y, según manifiesta, se encontraron "26 piedras".

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente, se solicitó un informe al Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial. Mediante nota de fecha 9 de febrero de 1996, el funcionario acusado rindió el siguiente informe:

"Honorable Magistrado:

En atención al mandamiento de Habeas Corpus que esa Augusta

Corporación de Justicia ha librado en mi contra y en favor de VÍCTOR SERRANO, de fecha 9 de febrero del presente año; tengo a bien rendir, dentro del término de Ley el informe correspondiente:

PRIMERO: Esta Agencia de instrucción ordenó la detención preventiva del ahora demandante de la acción que nos ocupa. Dicha medida procesal fue adoptada mediante resolución de fecha 25 de enero del año en curso, la cual es consultable a fojas 46-49 del sumario.

SEGUNDO: Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la detención de VÍCTOR SERRANO, están consignados en la resolución de fecha 25 de enero del año que decurre, dictada por este Despacho cuyo contenido transcribimos a continuación:

"FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. David, veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).

La División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de Chiriquí, obtuvo información de que en la residencia de KATHIA LORENA CASTILLO ubicada en la Barriada San José, la prenombrada CASTILLO en compañía de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) MEMÍN y VÍCTOR SERRANO BRYAN, se están dedicando a la Venta y Distribución de sustancias ilícitas o drogas (CRACK) ... A fin de corroborar la información suministrada, solicitaron ordenar la práctica de una operación encubierta (compra controlada de drogas), para lo cual serían destinados nueve (9) billetes de un balboa (B/.1.00) distinguidos con series B05317197D, I46585298I, F93539447B, F02717439C, F07364453E, K12960515E, F19827342D, H70828601A y F19230754D. ... Mediante providencia de fecha 24 de los corrientes se ordena la práctica de la operación encubierta descrita en líneas anteriores, lográndose obtener mediante compra controlada tres (3) fragmentos de sustancias sólidas color cremoso que fueron vendidos por KATHIA LORENA CASTILLO y al ser sometidos a la Prueba de Campo Preliminar resultaron POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK); por lo que seguidamente la División de Estupefacientes solicitó practicar diligencia de Allanamiento y Registro al citado inmueble lográndose recuperar mediante dicha diligencia los nueve (9) billetes de un balboa (B/.1.00) que fueron utilizados en la operación encubierta. Los billetes en mención fueron encontrados en el cuarto de KATHIA LORENA CASTILLO específicamente sobre la mesa habían treinta y seis balboas (B/.36.00) en billetes de denominación de un balboa (B/.1.00) dentro de los cuales estaban seis (6) de los billetes utilizados en la operación encubierta y los otros tres (3) billetes de un balboa (B/1.00) fueron encontrados en el espaldar de la cama de KATHYA LORENA CASTILLO. La suma total de dinero encontrada en distintos puntos del inmueble fue de cien balboas con veinticinco centavos (B/.100.25) dinero que se presume sea producto de la comisión de delitos relacionados con drogas.

Cabe señalar, que al percatarse de nuestra presencia en la citada residencia, KATYA LORENA CASTILLO introdujo su mano derecha en el suéter que cargaba lanzando al piso una (1) cajetilla de fósforos marca El Gavilán conteniendo en su interior veintidós (22) fragmentos de sustancia sólida color cremoso y residuos que al ser sometidos a la prueba de campo preliminar dieron resultados POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK). De igual manera, se encontró sobre el lavaplatos ubicado en la parte trasera de la residencia, lugar donde estaba LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMÍN" cuando nos apersonamos al inmueble, un (1) envase de material plástico de color blanco con tapa que en su interior contiene un (1) fragmento de sustancia sólida color cremoso que al someterse a la prueba de campo preliminar arrojó resultado POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK).

Además podemos indicar, que al llevarse a cabo la diligencia de Allanamiento y Registro al inmueble en mención, se encontraba en el

lugar VÍCTOR SERRANO BRYAN a quien los informes de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial vinculan con el ilícito investigado.

Al momento de rendir indagatoria KATYA LORENA CASTILLO acepta dedicarse a la venta de sustancias ilícitas (CRACK) y señala a un sujeto de nombre OLIVER SERRANO como la persona que le provee las mencionadas sustancias para la venta. También señala que OLIVER SERRANO vive en Panamá y que fue éste quién le presentó a VICTOR SERRANO BRYAN que también reside en la capital. Además, la prenombrada CASTILLO se responsabiliza de la sustancia ilícita incautada.

Por su parte VICTOR SERRANO BRYAN y LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMÍN" al rendir declaración indagatoria niegan el hecho que se les imputa, sin embargo pesan en su contra los informes de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial que los vinculan con el ilícito que se venía desplegando en la residencia antes mencionada.

Oportunamente se le recibió declaración jurada a KATYA LORENA CASTILLO quien se afirma y ratifica de los señalamientos hechos en contra de OLIVER SERRANO.

Emergen de la investigación suficientes elementos que vinculan a KATYA LORENA CASTILLO, VICTOR SERRANO BRYAN y LUIS ANTONIO CEDEÑO (a) "MEMÍN" con el ilícito investigado y ello ha quedado establecido con los informes de la División de Estupefacientes en relación a la información obtenida de que en la residencia de KATYA LORENA CASTILLO se estaban dedicando a la venta y distribución de sustancias ilícitas, el Informe de Compra Controlada, los informes de vigilancias y estacionarias, los informes de comisión, las pruebas de campo preliminar practicadas a las sustancias ilícitas obtenidas mediante compra controlada y a las incautadas en la residencia, y la diligencia de allanamiento y registro con la que se recuperaron la totalidad de los billetes utilizados en la operación encubierta; y en la misma también se encontraron cien balboas con veinticinco centavos (B/.100.25) que se presumen guardan relación con el delito que nos ocupa.

En virtud de lo anterior, el suscitado FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, DISPONE: Ordenar la inmediata detención preventiva de KATYA LORENA CASTILLO, VICTOR SERRANO BRYAN y LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO por encontrarse sindicados por delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Póngaseles en conocimiento de la medida cautelar ordenada en su contra, así como de los derechos y garantías que los asisten.

Ofíciese al Director de la Cárcel Pública de David y a la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación de Chiriquí para que los reciban en esas instalaciones y los mantengan filiado a nuestra orden hasta nueva comunicación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2147A, 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial.

CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.

EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL,

LIC. FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ

LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL.

LICDA. LOURDES V. ESPINOSA DE CHAN.

En adición a los hechos en referencia, tengo a bien señalar que de la lectura de las sumaras se infiere que el prenombrado BRYAN se encontraba vinculado a la actividad ilícita que se venía realizando en la residencia de KATYA LORENA CASTILLO. Igualmente se puede advertir que también se tenía información de que ANEL CHAVERRA era uno de los que suministraban sustancias ilícitas o drogas para la venta; y que su hermano BRYAN (a) "CHOCHO" también tenía participación en dicha actividad.

Por otro lado, ha quedado comprobado con la confesión y con los señalamientos directos que hace KATYA LORENA CASTILLO a OLIVER SERRANO de haberle proporcionado para la venta la sustancia ilícita incautada en su residencia el día 24 de enero del presente año.

Si bien es cierto, que KATYA LORENA CASTILLO manifestó en su indagatoria que OLIVER SERRANO quien reside en VISTA ALEGRE EN ARRAIJÁN, es quien le distribuía drogas ilícitas para la venta, no es menos cierto que tanto KATYA LORENA CASTILLO como VICTOR SERRANO BRYAN afirmaron haberse conocido por intermedio de OLIVER SERRANO quien a todas luces se advierte que se estaba beneficiando económicamente con la citada actividad ilícita, y además el hecho de que al momento de su detención se le encontró la suma de setecientos noventa y tres balboas (B/.793.00) dentro de la cual se encontraron cuatrocientos trece billetes (413) de un balboa (B/.1.00) y tomando en consideración la baja denominación de los mismos evidencian la posible venta y distribución de drogas en pequeñas dosis. Además el hecho de que por segunda vez se haya negado a participar en diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos en la que participó como reconocedora KATYA LORENA CASTILLO quien oportunamente se afirmó y ratificó de los señalamientos que hace en su indagatoria en contra de OLIVER SERRANO.

OLIVER SERRANO y VICTOR SERRANO BRYAN eran parte de la cadena de distribución de sustancias ilícitas que hacían llegar a KATYA LORENA CASTILLO para la venta y distribución local de estupefacientes en la Barriada San José en esta ciudad.

TERCERO: En la actualidad VICTOR SERRANO BRYAN se encuentra recluido en la Cárcel Pública de esta ciudad, a órdenes de nuestro Despacho y desde ya se han impartido las instrucciones pertinentes para que sea filiado a órdenes del Tribunal del Habeas Corpus, mediante Oficio N° SDCH-89/96 de esta misma fecha. Oportunamente serán remitidas copias debidamente autenticadas del sumario en referencia, a fin de ofrecerles mayores mayores (sic) elementos de juicio para la vital decisión que se va a dictar en la presente acción constitucional.

David, 9 de febrero de 1996.

Del Honorable Magistrado,

(Fdo.)
Lic. FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ
FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL".

Estamos en presencia de un proceso que se inicia por el Delito contra la Salud Pública, relacionado con drogas, al realizarse un allanamiento a la residencia de la señora KATHIA LORENA CASTILLO, ubicada en la Barriada San José, de la Provincia de Chiriquí. Este allanamiento se hizo después de efectuarse una operación encubierta, es decir, la compra controlada de droga, en la cual se utilizaron 9 billetes de B/.1.00 cada uno, que aparecen en el cuaderno que contiene las sumarias (foja 2). Consta también en este cuaderno (foja 27 y siguiente) el informe de comisión expedido por los Agentes DUAY C. LIZONDRO y LUCINIO PITTÍ, ambos miembros de la Policía Técnica Judicial, División de Estupefacientes, Sección de Chiriquí, en el cual se señala lo siguiente:

"Señor Inspector:

Con el debido respeto, nos dirigimos a usted, para hacer de su conocimiento, todo lo acontecido en la Diligencia de Allanamiento y Registro, realizada a la residencia de una joven de nombre KATHIA CASTILLO, ubicada en la Barriada, San José.

Siendo aproximadamente las nueve y cuarenta de la noche (9:40 P. M.), de hoy miércoles veinticuatro (24) de enero del presente año, los detectives abajo firmantes, nos dirigimos en asocio con la Licda. Lourdes E. de Chan, (Secretaria de Drogas), sus secretarios Lesly Miranda, Luis Castrellón y Santana Espinosa, además de los detectives Mario Samudio y Emigdio Marcucci, de servicio en la P. T. J., Agencia de David; hacia la Barriada San José, de esta ciudad, con el propósito de realizar una Diligencia de Allanamiento y Registro, en la residencia de KATHIA CASTILLO, ya que unas horas antes, se había efectuado una compra controlada de drogas (Operación Encubierta); en la citada residencia, de la cual se obtuvieron resultados positivos, por lo que luego de dicha operación se procedió a realizar el Allanamiento y Registro del citado inmueble.

Al llegar a la residencia antes mencionada, fuimos recibidos por la señora MAIRA ESTELA CASTILLO, a quien nos identificamos como miembros de la Policía Técnica Judicial y la Secretaría de Drogas, a lo que posteriormente la Lic. Chan procedió a dar lectura al Acta de Allanamiento, manifestando la señora MARÍA, que iba a colaborar con dicha diligencia.

Cabe señalar, que al momento de nuestra llegada, en dicho inmueble se encontraba una joven sentada en la sala, la cual identificamos como KATHIA CASTILLO, la misma al percatarse de nuestra presencia en el lugar, se metió la mano dentro del sweter que cargaba, y sacó del mismo una cajetilla de fósforos que dejó caer en el piso. Luego por instrucciones de la Lic. Chan, se dio inicio al registro del inmueble, procediendo el detective Lizondro a recoger la cajetilla de fósforos que KATHIA CASTILLO había dejado caer, y al abrir la misma, en su interior contenía la cantidad de veintidós (22) fragmentos sólidos de color cremoso, los cuales al efectuarseles la Prueba de Campo, dieron un resultado positivo para la determinación de la COCAÍNA (CRACK).

De igual forma, en dicho inmueble se encontraban las siguientes personas: NICOLÁS ANTONIO BATISTA CASTILLO, menor de edad, hijo de KATHIA CASTILLO, IRINA LORENA QUIROZ, menor de edad, LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (A) MEMÍN, cedulado 4-281-892 y VICTOR SERRANO BRYAN, cedulado 3-114-92, además la joven LISBETTE ITZEL BARRÍA ORTIZ, cedulada 4-281-892, quienes fueron debidamente registrados, **no encontrándoseles encima sustancia ilícita alguna**. Al continuar con el registro, se logró encontrar en la parte trasera de la casa, específicamente en el fregadero, un frasco pequeño de plástico color blanco, el cual en su interior contenía un (1) fragmento de sustancia sólida color cremoso, presumiblemente CRACK, la que al momento de efectuarsele la Prueba de Campo, dio un resultado Positivo para la determinación de COCAÍNA; cabe señalar que en el lugar donde se encontró el frasco con la sustancia, es el mismo donde se encontraba LUIS CASTILLO (A) MEMÍN, al momento de nuestra llegada, por lo que se presume que dicho frasco fue dejado en el citado lugar por el prenombrado LUIS.

Posteriormente, al continuar con el registro, se encontró en uno de los cuartos la suma de cien balboas con veinticinco centavos (B/.100.25), dentro de los cuales se detectaron los billetes que habían sido utilizados para efectuar la Operación Encubierta (Compra Controlada de Drogas). Seguidamente se continuó con el registro al resto del inmueble, tanto su interior como exterior del mismo, no

encontrándose alguna otra evidencia o sustancia ilícita.

Cabe destacar, que al momento de efectuarse el registro, se apersonó al lugar el Licdo. Fernando Fabián Gutiérrez (Fiscal Segundo Superior), quien nos acompañó en el registro que se hacía en el lugar.

Al finalizar con el Allanamiento y Registro, por instrucciones de el Licdo. Gutiérrez, se procedió al traslado de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (A) MEMÍN, VICTOR SERRANO BRYAN y KATHIA LORENA CASTILLO, hacia nuestras oficinas, donde se continuarían las investigaciones". (Lo subrayado es nuestro).

Por otro lado, la Corte observa una orden de detención escrita, visible a foja 46 del expediente contentivo de las sumarias, expedida por el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Al analizar el informe de comisión transcrito anteriormente y el informe de la Prueba de Campo N° 005, visible a foja 29, los mismos constituyen hechos probatorios suficientes para la calificación del delito contra la salud pública, el cual tiene pena de prisión por más de dos años. Por tanto, el Pleno debe determinar si existe vinculación entre el beneficiado con la acción de habeas corpus y el ilícito investigado. Veamos:

En la declaración indagatoria, el señor VICTOR SERRANO BRYAN (fs. 39-41), manifestó que se encontraba en la casa de la joven KATYA LORENA CASTILLO, y que "fui detenido porque en la casa que yo estaba se encontró sustancia ilícita", adicionando que es primo de la mencionada señora CASTILLO:

Se desprende también de esta declaración indagatoria que el sindicado acepta que consume droga desde hace aproximadamente dos años, y que fue detenido y encarcelado por siete meses, por este delito, pero que no se dedica a la venta.

Observa el Pleno, por otro lado, que en la declaración indagatoria de la señora KATYA LORENA CASTILLO (fs. 35-38), la misma se responsabiliza por la sustancia ilícita encontrada en su residencia con motivo del allanamiento y confiesa, además, que se dedica a la venta de la droga denominada "CRACK". Pero, es importante destacar que la señora CASTILLO desmiente lo aseverado por SERRANO BRYAN, en el sentido de que no reconoce el parentesco de "primo", que según SERRANO BRYAN les une.

Esta Corporación de Justicia, no puede desatender el señalamiento que también hace la señora CASTILLO, con respecto a VICTOR SERRANO, como conocido de ella y que "lo conocía en mi casa me lo presentó OLIVER SERRANO", y es a este señor (OLIVER SERRANO). a quien le compra la droga, según lo declarado por la señora KATYA LORENA CASTILLO.

Surge también de la lectura de las sumarias (f. 28), que en el inmueble allanado se encontraban las siguientes personas: NICOLÁS ANTONIO BATISTA CASTILLO, menor de edad, hijo de KATHIA CASTILLO, IRINA LORENA QUIRÓS, menor de edad, LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (A) MEMÍN, VICTOR SERRANO BRYAN y LISARTE ITZEL BARRÍA ORTIZ, "quienes fueron registrados, no encontrándoseles encima sustancia ilícita alguna".

Pese a ello, no podemos pasar por alto los informes de Investigación, específicamente el de fecha 24 de enero de 1996, visible a foja 21, en el cual el Agente I. RONALDO REINA, expresa lo siguiente: "También nos manifiesta el informante que el señor VICTOR BRYAN, es uno de los sujetos que surten de Droga a la joven KATHIA, ya que el mismo viaja hacia la Ciudad de Panamá, a buscar la Droga ..."

El Pleno concluye que existen graves indicios de responsabilidad contra del señor VICTOR SERRANO BRYAN, que justifican su detención preventiva con el ilícito investigado, lo que ha quedado establecido en los informes de la División de Estupefacientes, previos al allanamiento realizado a la residencia de KATYA LORENA CASTILLO, y una vez realizado el mismo se comprobó, y así lo confesó la

señora CASTILLO, que en esa residencia se dedican a la venta y distribución de drogas. Además, de que se recuperó en la diligencia de allanamiento la totalidad de los billetes utilizados en la operación encubierta, también constan las pruebas de campo practicadas sobre la sustancia incautada, determinaron que se trata de la droga conocida como "CRACK".

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de VICTOR SERRANO BRYAN, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO LAILA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado César Guardia, actuando en representación de **ALBERT LAILA**, ha presentado acción de habeas corpus en contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, dicho funcionario dio respuesta al mismo mediante el Oficio N° 1854 de 22 de febrero de 1996, en los siguientes términos:

> "1° Si es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor ALBERTO LAILA o ALBERT LAILA. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución fechada quince (15) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> 2° Los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la actuación atacada los exponemos a continuación.
>
> A. FUNDAMENTOS DE HECHO:
>
> El gobierno de los Estados Unidos, a través de las vías diplomáticas acreditadas en nuestro país promovió proceso de extradición del señor ALBERTO LAILA o ALBERT LAILA (a) Bertie en razón de que el mismo había violado disposiciones legales de dicho país.
>
> Para tal efecto, se adjuntó a dicha solicitud todos los documentos referentes a los cargos que le imputan en esa jurisdicción, contra LABERTO (Sic) LAILA.
>
> En o alrededor de 1988, con la solicitud de encausamiento criminal formulada por la Fiscalía ante la Corte Distrital para el Distrito del Sur de Nueva York, Estados Unidos, surgen las investigaciones contra ISRAEL MORDOK (A) Isaac Mordok y Alberto Laila (A) Bertie.
>
> En la solicitud de encausamiento criminal 92 Cr, los cargos consistieron esencialmente en que los acusados "... con conocimiento

de causa, se pusieron en combinación, conspiración, se aliaron y acordaron, juntos y entre sí ... violar disposiciones contenidas en el Código de los Estados Unidos.

Las violaciones se hacían por estructurar transacciones con una o más instituciones financieras para evadir elaborar los informes que exige el artículo 31, Sección 5313 (a), del Código de dicho país.

De igual forma, la organización constituida por las personas antes mencionadas tenía como fin transportar dinero desde Nueva York a Panamá; lo que se hacía mediante la conversión del efectivo por cheques girados por empresas ubicadas en Nueva York y luego éstos eran enviados hacia Zona Libre de Colón, Panamá.

En el desarrollo de las investigaciones adelantadas por las autoridades del Estado de Nueva York, Distrito Sur, se le formulan cargos a ALBERTO LAILA (a) Bertie, los cuales se plasmaron mediante escrito acusatorio distinguido como S-2 92, Cr 643 (MBM), presentado por la Fiscalía ante el Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Bajo este nuevo pliego de cargos hechos ante el Gran Jurado se le imputa a ALBERTO LAILA (a) Bertie, haber convertido o participado en asocio con otras personas en los Estados Unidos (Nueva York) en el transporte, trasmisión, etc., de instrumentos monetarios y fondos desde los Estados Unidos, indicándose, además, que la finalidad de esta actividad era el ocultar, disfrazar la naturaleza, origen, ubicación, fuente, control propiedad de dinero producto de actividades ilícitas específicas, es decir, tráfico de drogas.

De acuerdo con el pliego de cargo presentado ante el gran jurado la actividad ilícita realizada por ALBERTO LAILA (A) Bertie, se concretó de la siguiente manera:

(a) El acusado y sus co-conspiradores recibieron dinero de los Estados Unidos de América en la ciudad de Nueva York en cantidades totalizando aproximadamente $113,000,000 de parte de numerosos mensajeros.

(b) El acusado y sus co-conspiradores intercambiaron dinero de los Estados Unidos de América en cantidades que totalizaban aproximadamente $50,000,00 por cheques de parte de una refinería de oro y otros metales preciosos en la ciudad de Nueva York.

(c) El acusado y sus co-conspiradores intercambiaron dinero de los Estados Unidos en cantidades que sumaban aproximadamente $40,000,000 por cheques de una supuesta institución religiosa en la ciudad de Nueva York.

(d) El acusado y sus co-conspiradores intercambiaron dinero en los Estados Unidos de América en cantidades que totalizaban aproximadamente $11,000,000 por cheques de parte de un vendedor de oro, plata, joyería y bienes y raíces de la ciudad de Nueva York.

(e) El acusado y sus co-conspiradores intercambiaron dinero de los Estados Unidos de América en cantidades que totalizaban aproximadamente $300,000,000 por cheques de parte de un vendedor de oro y plata en la ciudad de Nueva York.

(f) El demandado y sus co-conspiradores intercambiaron dinero de los Estados Unidos de América en cantidades que sumaban aproximadamente $4,000,000 por cheques de parte de un pequeño negocio que operaba en la ciudad de Nueva York.

(f) El acusado y sus co-conspiradores transportaron, transmitieron y transfirieron de cheques negociables en cantidades que totalizaban

aproximadamente $105,000,000 a Colón, Panamá.

(h) El acusado y sus co-conspiradores transportaron, transmitieron dinero de los Estados Unidos en cantidades que totalizaban aproximadamente $8,000,000 de la ciudad de Nueva York a Colón, Panamá.

(i) Los co-conspiradores del acusado transportaron, transmitieron, y transfirieron oro, dinero y otros efectos de valor en cantidades que totalizaban aproximadamente $100,000,00 desde Colón Panamá hasta Cali, Colombia."

También se le imputa al señor ALBERO LAILA (a) Bertie el haber tratado de transportar, transferir o transmitir instrumentos monetarios, o sea, 24 cheques negociable de terceras partes, endosados sin restricción, totalizando aproximadamente $189,000., desde los Estados Unidos, Nueva York, hacia Panamá, Zona Libre de Colón, con el conocimiento que esos dineros eran producto del tráfico de estupefacientes y con ello lo que se pretendía era disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente o propiedad de estos dineros.

Del material probatorio acopiado a las sumarias tenemos que resaltar dos aspectos fundamentales de la investigación, ellos son, las pruebas incorporadas que acreditan la existencia del hecho punible y las que acreditan la vinculación del inculpado con la comisión del delito.

A. 1. PRUEBAS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE

Consta en autos que los señores ISRAEL MORDOK y ALBERT LAILa se asociaron para diseñar y estructurar una serie de estratagemas tendientes a viabilizar la conversión de varios millones de dólares americanos, procedentes de la comercialización de drogas, a otros instrumentos financieros que finalmente serían introducidos en el comercio de Zona Libre de Colón, ocultando así el origen o procedencia real, naturaleza y propiedad de estos dineros.

De esta forma, se encuentra acopiado al expediente la declaración rendida por ISRAEL MORDOK, quien bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de la imputación en su contra por estar vinculado al delito de lavado de dinero, por un monto aproximado de 113 millones de dólares, aceptó y afirmó ante "El Gran Jurado" que él tenía conocimiento que el dinero recibido era producto de la venta de drogas (Viene de la traducción de la declaración de ISRAEL MORDOK, de 13 de diciembre de 1995, pág. 4 y 10 y ss).

MORDOK expresó también que dicho dinero fue entregado a otras personas, quienes a cambio le entregaron los cheques que fueron enviados a Panamá.

De igual forma MORDOK reconoció algunos de los cheques que le fueron entregados a cambio del dinero procedente de actividades ilícitas, los cuales fueron incautados por las autoridades de Aduanas de dicho país y cuyo destino final eran empresas ubicadas en Zona Libre de Colón.

También se cuenta con las declaraciones juradas de los Agentes de Aduanas que participaron y reconocieron que los cheques que se les puso de presente a MORDOK y que éste afirmó que le fueron entregados a cambio de dinero de procedencia ilícita, producto del narcotráfico, fueron incautados cuando eran remitidos a Panamá.

La confesión realizada por ISRAEL MORDOK fue corroborada por sus colaboradores (Co-conspiradores) quienes manifestaron, luego de

haber sido juramentados, que éste y ALBERTO LAILA les entregaron efectivo por cheques.

A. 2. Pruebas que acreditan la vinculación de ALBERT LAILA con la comisión del hecho punible:

Se cuenta con la declaración jurada de ISRAEL MORDOK quien de manera expresa dijo que ALBERTO LAILA era su socio, que él tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita del dinero que ellos recibieron.

En ese sentido, ISRAEL MORDOK al ser cuestionado acerca de la procedencia del dinero dijo: "R. Explico. Es dinero de droga. Así que yo lo sabía. ALBERTO, estaba ya estaba trabajando en Colón también. Así que el sabía eso también a través de la información que el consiguió de la compañía."

De igual forma a pregunta formulada en relación al hecho punible de que si ALBERTO LAILA tenía conocimiento de la fuente o procedencia del dinero, MORDOK dijo que éste habló con las personas que traían el efectivo y que mientras que él estaba en Panamá tenía conocimiento de ello.

Se cuenta también con las declaraciones juradas rendidas por MYUNG KOH y SOMENDAR GAUTAN, quienes manifestaron que ALBERTO LAILA, en reiteradas ocasiones les llevó efectivo para ser cambiado por cheques (Pág. 28 y 52 de las respectivas traducciones). Cheques que como se puede observar de autos fueron girados por compañías pertenecientes a los KOH Y GAUTAN y a beneficio de empresas relacionadas con MORDOK y el prenombrado LAILA y los que a su vez fueron ingresados a otras empresas ubicadas en Zona Libre de Colón.

Acopiado al sumario se encuentran también las declaraciones de los Agentes de Aduanas, JOHN J. DIVANEY y JAMES MÓDICO, quienes incautaron parte de los cheques que fueron intercambiados por dineros entregados por M0RDOK y LAILA, los cuales eran enviados en sobre con dobles fondos a Panamá.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

Los hechos arriba citados constituyen violaciones a nuestro ordenamiento penal, ello es así, toda vez que nuestra legislación, en cuanto a la aplicación de la ley penal en el espacio, establece que las conductas ilícitas,. CONTRA LA SALUD PÚBLICA o relacionadas con ésta, realizadas en otra jurisdicción constituyen delito (Art. 8 del Código Penal).

Aunado a lo antes expuesto nuestra legislación de manera expresa impone al funcionario de instrucción, "que por cualquier medio" tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible, el deber de iniciar y de manera inmediata, la investigación sumarial correspondiente (Art. 20008 del Código Judicial). En ese sentido y acatando lo dispuesto, se iniciaron las presentes investigaciones.

Las conductas desplegadas se encuentran subsumidas en tipos penales previamente establecidos en nuestra legislación, específicamente en el Capítulo V, Título VII, Libro Segundo del Código Penal, conforme fue reformado por la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986 y la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, y 20 A, de la Ley N° 13 de julio de 1994, adoptamos la decisión que pretende invalidar el accionista.

3° El señor ALBERTO LAILA o ALBERT LAILA, desde este momento se

encuentra a órdenes de vuestro tribunal en razón de la acción presentada."

Por su parte, el Lcdo. César Guardia estima que la detención preventiva de la cual es objeto el señor Albert Laila es ilegal, toda vez que a la fecha la extradición no ha sido negada y su representado estaba en libertad bajo fianza, aunado a que el día 8 de febrero de 1996, vencía el término para que el Estado requiriente aportara la documentación necesaria para que el ejecutivo resolviera si se concedía o no la extradición. A ello añade que mientras no se niegue la petición de extradición, no se le puede abrir ningún proceso en nuestro país, pues, afirma que el artículo 31 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, es claro al señalar que cuando la extradición sea negada, procederá el proceso en el país, como si el delito se hubiese cometido en el territorio nacional.

Observa el Pleno, que se trata de un proceso iniciado en virtud de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición hecha por la Embajada de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal N° 852 de 27 de octubre de 1995, contra el señor ALBERT LAILA, alias ALBERTO LAILA, alias BERTIE, dado que dicha persona es requerida para comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de Nueva York. En atención a la anterior solicitud, el señor Procurador General de la Nación ordenó la detención preventiva del señor Albert Laila (a) Bertie, mediante resolución fechada el 27 de octubre de 1995, fundamentada en lo dispuesto en el artículo IV del Tratado de Extradición vigente entre los Estados Unidos y Panamá firmado el 25 de mayo de 1904, conjuntamente con lo estipulado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 25 de marzo de 1972, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y lo dispuesto en la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 reformada, modificada y adicionada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994. Posterior a ello, los licenciados César Guardia y Ramón Malca Beraha interpusieron acción de habeas corpus contra la detención preventiva de la que fuera objeto el señor Albert Laila en esa ocasión, y el Pleno de esta Corporación estimó en resolución de 17 de noviembre de 1995, que dicha detención era legal con fundamento en lo dispuesto en los artículo 263 B) y 263 C) del Código Penal tal como quedaron modificados por los artículos 10 y 11 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, que es la ley sustancial aplicable.

No obstante lo anterior, la Sala Segunda, Penal, en resolución de 22 de noviembre de 1995 concedió fianza de excarcelación al señor ALBERT LAILA, ante solicitud formulada dentro de la solicitud de extradición que se le sigue a ALBERT LAILA por el Gobierno de los Estados Unidos. La Sala Segunda de lo Penal, fundamentó su decisión en que hasta ese momento, los delitos que se le imputaban al señor ALBERT LAILA son los que guardan relación con el lavado o blanqueo de dinero, que están previstos en los artículos 263 B), 263 C), 263 CH) y 263 E) del Código Penal, tal como fueron introducidos por la Ley 23 de 1986, sin tomar en consideración la reforma introducida mediante la Ley 13 de 1994 y el Estado requiriente aún no había aportado pruebas de las cargos que se le imputaban a esa fecha. Estimó la Sala, que los delitos tipificados en los anteriores artículos, tienen previstas penas que oscilan entre dos y ocho años de prisión, y lo que se pretende es la extradición una persona por delitos que en Panamá no tienen pena mínima de cinco años de prisión, por lo que en ese estado del proceso se estimó cabía la fianza de excarcelación, pues así lo prevé el artículo 2516 del Código Judicial vigente.

Observa el Pleno, que dentro del expediente figura de fojas 1295 a 1304 la orden de detención escrita expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Especial en Delito Relacionados con Drogas en resolución fechada el 15 de febrero de 1996. Igualmente, figura dentro del expediente y a solicitud de este despacho, la Resolución N° 5 de 23 de febrero de 1996 expedida por el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores en la que se resuelve negar la extradición del ciudadano panameño ALBERTO LAILA, alias BERTIE LAILA, alias ALBERT LAILA con fundamento en lo dispuesto en el artículo V del Tratado de Extradición celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, en la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986, tal como fue reformada y modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, el Pleno de esta alta Corporación de Justicia concluye que la detención preventiva de la cual es objeto el señor ALBERT LAILA (a) Bertie no es ilegal por la razones que exponemos a continuación. Estima el Pleno, que si bien es cierto al momento en que se decretó la detención preventiva del señor LAILA no había pronunciamiento por parte del Órgano Ejecutivo con relación a la solicitud de extradición de dicho señor, y, por ende, no podía abrirse un proceso penal según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986 a fin de que sea juzgado como si el delito se hubiese cometido en Panamá, no es menos cierto que en la documentación allegada al proceso por los conductos diplomáticos que corresponden, figuran nuevos cargos contra el señor LAILA que constituyen igualmente otras conductas tipificadas como delito en nuestro ordenamiento penal y además la extradición fue ya negada por lo que, en todo caso, se subsanó esa deficiencia. De la lectura de la documentación allegada al proceso, se infiere que se prueba claramente la existencia de un hecho ilícito como lo es la Asociación Ilícita que forma parte de los llamados delitos Contra la Seguridad Colectiva, previsto en el artículo 242 del Capítulo III del Título VII del Código Penal, reformado por el artículo 1 de la Ley 23 de 1986. Lo anterior es así, a juicio del Pleno, toda vez que el artículo 2073 del Código Judicial, preceptúa los medios idóneos a través de los cuales se acredita la existencia de un hecho punible entre los que figuran, "... deposiciones de testigos que hayan visto o sepan de otro modo, la perpetración del mismo hecho ...". Efectivamente, dentro de los cargos que obran en la solicitud de encausamiento criminal se señala que los acusados, entre ellos ALBERT LAILA "con conocimiento de causa, se pusieron en combinación, conspiración, se aliaron y acordaron, juntos y entre si ..." violar disposiciones legales contenidas en el Código de los Estados Unidos (Ver foja 152). También se señala dentro del pliego de cargos presentado por la autoridades de Nueva York, Distrito Sur, ante el Gran Jurado, que la organización constituida por los acusados tenía como fin transportar dinero desde Nueva York a Panamá. Esta operación se hacía mediante la conversión del efectivo por cheques girados por empresas ubicadas en Nueva York y luego estos cheques eran enviados hacia Zona Libre de Colón, Panamá. Lo anterior lo corrobora la declaración vertida por ISRAEL MORDOK a quien igualmente se le imputa estar vinculado al delito de lavado de dinero y que bajo la gravedad de juramento, afirmó en todo momento que ALBERTO LAILA (a) BERTIE, tenía pleno conocimiento de la procedencia del dinero y de todo el manejo de la operación. También figuran las declaraciones de los señores MYUNG KOH visibles de fojas 195 a 219 y de 247 a 267 y las declaraciones de SOMEDAR GAUTAN que obran de fojas 178 a 193 del expediente, quienes manifestaron que ALBERTO LAILA en varias ocasiones les llevó dinero en efectivo para ser cambiado por cheques. Igualmente, constan las declaraciones de los agentes de aduanas JOHN J. DIVANEY visibles de fojas 221 a 231 y JAMES MÓDICO visibles de fojas 173 a 177 y de fojas 234 a 245, en las que revelan que incautaron parte de los cheques que fueron intercambiados por dineros entregados por MORDOK y LAILA que eran enviados en sobres de doble fondo a Panamá.

En virtud lo antes expuesto, el Pleno concluye, pues, que los hechos antes planteados constituyen fuertes indicios que vinculan al señor ALBERTO LAILA (a) BERTIE LAILA no sólo a las conductas que guardan relación con el llamado lavado o blanqueo de dinero que están previstas en los artículos 263 B), 263 C), 263 CH) y 263 E) del Código Penal, tal como fueron reformadas por la Ley 23 de 1986 y que forman parte de los Delitos Contra la Salud Pública sino que, igualmente, su conducta se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 1° de la Ley 23 de 1986 como Asociación Ilícita, que tiene prevista pena mínima de prisión de 2 años. Finalmente, estima el Pleno, que la actuación del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas se ajusta a derecho, toda vez que decretó dicha medida según la facultad concedida por el artículo 2008 del Código Judicial, que impone al funcionario de instrucción el deber de iniciar de oficio y de manera inmediata la investigación sumarial que corresponde cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible por cualquier medio.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ALBERTO LAILA y dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, para que se continúe con el trámite que corresponda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La ciudadana MAYRA ESTELA CASTILLO ACOSTA, ha presentado recurso de habeas corpus a favor de su hijo LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO contra el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, por considerar que es ilegal la privación de la libertad que sufre CEDEÑO CASTILLO.

En el escrito la accionante expresa que el 23 de enero de 1996, se efectuó un allanamiento en su residencia ubicada en la Barriada San José, entre Calle 10 y 11, casa N° 3214, de la Ciudad de David, y fueron detenidos sus hijos KATIA CASTILLO y LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO, a quienes se "les vincula como posibles poseedores de una sustancia identificada como droga que fue encontrada en el piso y fregador de mi residencia".

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente, se solicitó un informe al Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial. Mediante nota de fecha 14 de febrero de 1996, el funcionario acusado rindió el siguiente informe:

"Honorable Magistrado:

En atención al mandamiento de Habeas Corpus que esa Augusta Corporación de Justicia ha librado en mi contra y en favor de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO, de fecha 13 de febrero del presente año; tengo a bien rendir, dentro del término de Ley el informe correspondiente:

PRIMERO: Esta Agencia de instrucción ordenó la detención preventiva del ahora demandante de la acción que nos ocupa. Dicha medida procesal fue adoptada mediante resolución de fecha 25 de enero del año en curso, la cual es consultable a fojas 46 a 49 de las sumarias.

SEGUNDO: Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la detención de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO, están consignados en la resolución de fecha 25 de enero del año que decurre, dictada por este Despacho cuyo contenido transcribimos a continuación:

"FISCALÍA SEGUNDA SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. David, veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).

La División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de Chiriquí, obtuvo información de que en la residencia de KATHIA LORENA CASTILLO ubicada en la Barriada San José, la prenombrada CASTILLO en compañía de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMÍN" y VÍCTOR SERRANO BRYAN, se están dedicando a la Venta y Distribución de sustancias ilícitas o drogas (CRACK). ... A fin de corroborar la

información suministrada, solicitaron ordenar la práctica de una operación encubierta (compra controlada de droga), para lo cual serían destinados nueve (9) billetes de un balboa (B/.1.00) distinguidos con series B05317197D, I46585298I, F93539447B, F02717439C, F07364453E, K12960515E, F19827342D, H70828601A y F19230754D. ... Mediante providencia de fecha veinticuatro (24) de los corrientes se ordena la práctica de la operación encubierta descrita en líneas anteriores, lográndose obtener mediante compra controlada tres (3) fragmentos de sustancias sólidas color cremosa que fueron vendidos por KATIA LORENA CASTILLO y al ser sometidos a la Prueba de Campo Preliminar resultaron POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK); por lo que seguidamente la División de Estupefacientes solicitó practicar diligencia de Allanamiento y Registro al citado inmueble lográndose recuperar mediante dicha diligencia los nueve (9) billetes de un balboa (B/.1.00) que fueron utilizados en la operación encubierta. Los billetes en mención fueron encontrados en el cuarto de KATIA LORENA CASTILLO específicamente sobre la mesa habían treinta y seis balboas (B/.36.00) en billetes de denominación de un balboa (B/.1.00) dentro de los cuales estaban seis (6) de los billetes utilizados en la operación encubierta y los otros tres (3) billetes de un balboa (B/1.00) fueron encontrados en el espaldar de la cama de KATYA LORENA CASTILLO. La suma total de dinero encontrada en distintos puntos del inmueble fue de cien balboas con veinticinco centavos (B/.100.25) dinero que se presume sea producto de la comisión de delitos relacionados con drogas. ... Cabe señalar, que al percatarse de nuestra presencia en la citada residencia, KATYA LORENA CASTILLO introdujo su mano derecha en el suéter que cargaba lanzando al piso una (1) cajetilla de fósforos marca El Gavilán conteniendo en su interior veintidós (22) fragmentos de sustancia sólida color cremosa y residuos que al ser sometidos a la prueba de campo preliminar dieron resultados POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK). De igual manera, se encontró sobre el lavaplatos ubicado en la parte trasera de la residencia, lugar donde estaba LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMIN" cuando nos apersonamos al inmueble, un (1) envase de material plástico de color blanco con tapa que en su interior contiene un (1) fragmento de sustancia sólida color cremosa que al someterse a la prueba de campo preliminar arrojó resultado POSITIVOS para la determinación de COCAÍNA (CRACK). ... Además podemos indicar, que al llevarse a cabo la diligencia de allanamiento y Registro al inmueble en mención, se encontraba en el lugar VICTOR SERRANO BRYAN a quien los informes de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial vinculan con el ilícito investigado. ... Al momento de rendir indagatoria KATYA LORENA CASTILLO acepta dedicarse a la venta de sustancias ilícitas (CRACK) y señala a un sujeto de nombre OLIVAR SERRANO como la persona que le provee las mencionadas sustancias para la venta. También señala que OLIVAR SERRANO vive en Panamá y que fue éste quién le presentó a VICTOR SERRANO BRYAN que también reside en la capital. Además, la prenombrada CASTILLO se responsabiliza de la sustancia ilícita incautada. ... Por su parte VICTOR SERRANO BRYAN Y LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMIN" al rendir declaración indagatoria niegan el hecho que se les imputa, sin embargo pesan en su contra los informes de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial que los vinculan con el ilícito que se venía desplegando en la residencia antes mencionada. ... Oportunamente se le recibió declaración jurada a KATYA LORENA CASTILLO quien se afirma y ratifica de los señalamientos hechos en contra de OLIVER SERRANO. ... Emergen de la investigación suficientes elementos que vincula a KATYA LORENA CASTILLO, VICTOR SERRANO BRYAN y LUIS ANTONIO CEDEÑO (a) "MEMIN" con el ilícito investigado y ello ha quedado establecido con los informes de la División de Estupefacientes en relación a la información obtenida de que en la residencia de KATYA LORENA CASTILLO se estaban dedicando a la venta y distribución de sustancias ilícitas, el Informe de Compra Controlada, Los informes de vigilancias y estacionarias, los

informes de comisión, las pruebas de campo preliminar practicadas a las sustancias ilícitas obtenidas mediante compra controlada y a las incautadas en la residencia, y la (sic) diligencia de allanamiento y registro con la que se recuperaron la totalidad de los billetes utilizados en la operación encubierta; y en la misma también se encontraron cien balboas con veinticinco centavos (B/.100.25) que se presumen guardan relación con el delito que nos ocupa. ... En virtud de lo anterior, el suscrito FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, DISPONE: Ordenar la inmediata detención preventiva de KATYA LORENA CASTILLO, VICTOR SERRANO BRYAN y LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO por encontrarse sindicados por delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Póngaseles en conocimiento de la medida cautelar ordenada en su contra, así como de los derechos y garantías que lo asisten. ... Ofíciese al Director de la Cárcel Pública de David y a la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación de Chiriquí para que los reciban en esas instalaciones y los mantengan filiado a nuestra orden hasta nueva comunicación. ... FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 2147A, 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial."

En adición a los hechos en referencia, tengo a bien señalar que del contenido del sumario se infiere ANEL CHAVERRA era uno de los que suministraba sustancias ilícitas o droga para la venta y que su hermano Bryan (a) "Chocho" también participaba en la distribución de sustancias ilícitas.

En cuanto a la relación de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO con ANEL CHAVERRA quien los abastecía de sustancias ilícitas o drogas ha quedado debidamente demostrado en autos con el registro de la Terminal de Transporte David-Panamá de fecha 18 de julio del presente año, valija N° 99 de las 12:00 horas, Bus 29, encomienda N° 196683 enviada por EUCLIDES CHAVERRA a LUIS ANTONIO CEDEÑO, quien firmó en forma legible en señal de recibido conforme y anotando el 4-240-520 como números de documento de identidad personal.

Además, pesa en contra de LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO, el hecho de que la noche del 24 de enero del presente año, cuando se llegó a su residencia a fin de practicar diligencia de allanamiento y registro el mismo se encontraba en ese momento en la parte posterior cerca a la tina de fregar y sobre la misma se encontró un envase de material plástico, color blanco con tapa conteniendo en su interior un (1) fragmento de sustancia sólida color cremosa (CRACK), por lo que presumimos que dicha evidencia estaba detinada a la venta pero que al advertir nuestra presencia en el lugar se despojó de la misma a fin de evadir responsabilidades.

TERCERO: En la actualidad LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMÍN" se encuentra recluido en la Cárcel Pública de esta ciudad, a órdenes de nuestro Despacho y desde ya se han impartido las instrucciones pertinentes para que sea filiado a órdenes del Tribunal del Habeas Corpus, mediante Oficio N° SDCH-108-96 de esta misma fecha. Las copias de las sumarias se encuentran en la Corte Suprema de Justicia, a fin de resolver recurso de Habeas Corpus a favor de VICTOR SERRANO BRYAN.

Del Honorable Magistrado.

(Fdo.)
Lic. FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ
FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL".

Se desprende del informe rendido por el agente del Ministerio Público que se ordenó la detención del señor LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO, KATIA LORENA CASTILLO y VICTOR SERRANO BRYAN, el día 25 de enero de 1966. Se señala en dicho informe que el día 24 de enero de 1996, se practicó un allanamiento a la residencia de KATIA LORENA CASTILLO, ubicada en la Barriada San José, de la Ciudad de David, con motivo de la información que se le dio a la División de

Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial de Chiriquí, de que en la citada residencia se están dedicando a la venta y distribución de sustancias ilícitas o drogas.

En la residencia allanada de propiedad de la familia CASTILLO, los miembros de la Policía Técnica Judicial y de la agencia del Ministerio Público, lograron incautar: una cajetilla de fósforos marca el Gavilán conteniendo en su interior veintidós (22) fragmentos de sustancia sólida color cremosa y residuos. "De igual manera, se encontró sobre el lavaplatos ubicado en la parte trasera de la residencia, lugar donde estaba LUIS ANTONIO CEDEÑO CASTILLO (a) "MEMIN", cuando nos apersonamos al inmueble, un (1) envase de material plástico de color blanco con tapa que en su interior contiene un (1) fragmento de sustancia sólida color cremosa ..." Consta también en dicho informe que lograron recuperar nueve (9) billetes de UN BALBOA (B/.1.00) que fueron utilizados en la operación encubierta: y la suma total del dinero encontrado en distintos puntos del inmueble fue de CIEN BALBOAS CON VEINTICINCO CENTÉSIMOS (B/.100.25) en billetes de denominación de UN BALBOA (B/.1.00).

Procede la Corte a examinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención de CEDEÑO CASTILLO, el hecho imputado constituye delito contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), el cual lleva aparejada pena mínima de cinco (5) años de prisión, según lo dispuesto por el artículo 260 del Código Penal.

Como elementos de pruebas allegados a las sumarias para la comprobación del hecho punible, se tiene la diligencia de allanamiento del inmueble de la familia CASTILLO, en la que se comprobó, por una parte, la operación encubierta: la incautación de dinero fraccionado por un monto total de CIEN BALBOAS CON VEINTICINCO CENTÉSIMOS (B/.100.25), y la aprehensión de una sustancia cremosa que se presume sea droga. Sometida la sustancia cremosa encontrada en la diligencia de allanamiento a las pruebas de laboratorio, resultó positivo para la determinación de COCAÍNA (CRACK).

Como elementos que vinculan a CEDEÑO CASTILLO con el ilícito, figuran en las sumarias el acta de allanamiento de la residencia que él habita con su familia y que se encontraba presente en el lugar de los hechos, más aún, "se encontraba en ese momento en la parte posterior cerca de la tina de fregar y sobre la misma se encontró un envase de material plástico, color blanco con tape conteniendo en su interior un (1) fragmento de sustancia sólida ..." Por último, el informe de los agentes captores, donde se hacen señalamientos directos contra el imputado.

Tanto la diligencia de 24 de enero de 1996, como el resto de las pruebas recabadas hasta ahora, cumplen cabalmente las exigencias de nuestro ordenamiento procesal penal a estos efectos, por lo que resulta evidente la legalidad de la medida cautelar acusada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor LUIS ALBERTO CEDEÑO CASTILLO y, en consecuencia, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE REX JANSEN ROBERTS, CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Renato Pereira en nombre y representación del señor **REX JANSEN ROBERTS**, interpuso acción de Habeas Corpus contra el **FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN**, el día 14 de febrero de 1996.

Encontrándose el expediente para la lectura del proyecto que resuelve la acción interpuesta a favor del señor **REX JANSEN ROBERTS**, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, recibió el 5 de marzo de 1996, escrito de desistimiento de la acción de Habeas Corpus presentada por el doctor Renato Pereira.

La Corte en reiterados pronunciamientos ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen el detenido o su apoderado legal, como es el caso que nos ocupa, es por ello que esta Corporación Judicial no tiene nada que objetar en cuanto al escrito de desistimiento presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el doctor Renato Pereira, en la acción de Habeas Corpus promovida a favor del señor REX JANSEN ROBERTS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL EUGENIO MORALES VILLALOBOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Manuela del Carmen Morales, presentó acción de habeas corpus a favor de su hijo el señor **Ariel Eugenio Morales Villalobos** y en contra del Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director General de la Policía Técnica Judicial, dicho funcionario, contestó mediante Oficio N° A. L. 0312-96, lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **ARIEL EUGENIO MORALES VILLALOBOS.**
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor **ARIEL EUGENIO MORALES VILLALOBOS**. Tenemos conocimiento que el mismo se encuentra en libertad."

Dado que de lo antes anotado se colige claramente que el señor ARIEL EUGENIO MORALES VILLALOBOS goza de libertad, el Pleno de esta Corporación considera que debe procederse entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO BLISS EVANS CONTRA LA FISCALÍA PRIMERA DELEGADA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Roberto Bliss Evans, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra la Fiscalía Primera Delegada.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la Fiscal Primera Delegada, dicha funcionaria dio respuesta al mismo mediante el Oficio N° 229 de 7 de febrero de 1996, en los siguientes términos:

> "PRIMERO: No fue este Despacho quien ordenó la detención de ROBERTO BLISS EVANS, sino la Fiscalía Auxiliar de la República tal y como se aprecia del documento calendado 16 de junio de 1995, visible a fojas 58 a 61 del cuaderno penal.
>
> SEGUNDO: Su detención obedeció, a que el mismo fue detenido mediante un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional del Área A de San Felipe, donde fue visualizado cargando unas sillas.
>
> TERCERO: A este fecha sí mantengo a nuestra disposición al señor ROBERTO BLISS EVANS, tal como se aprecia a fojas 127 del sumario."

El Pleno observa, a foja 44 del expediente contentivo de las sumarias, el informe remitido por el Sargento Primero 619, Gustavo Watson al Capitán Alvis Santana, Jefe del Área "A" de San Felipe de la Policía Nacional, en el cual señaló lo siguiente:

> "Por medio de la presente, me dirijo a Ud., para hacer de su conocimiento de la siguiente novedad ocurrida en el turno de las 22:00 a las 6:00 horas del día 14 de junio de 1995.
>
> Siendo aproximadamente las 00:00 horas nos encontrábamos de servicio en operativo de profilaxis social en el policía 8372, cuando mediante información de uno de los sujetos capturados en la Avenida Ancón, que la refrigeradora que había sustraído en la madrugada del día 13-6-95, la misma era una refrigeradora de color blanco, marca Kelvinator, modelo MFU17M23BW1, serie WB43507620, la podíamos recuperar en el área de Barrio Lindo. Procedimos al lugar y al llegar la encontramos y procedimos a la base con la misma para los trámites correspondientes y esta pertenece a la Junta Comunal de

Santa Ana, propiedad del Estado y también dos sillas de metal de color amarillo. Los mismos responden a ROBERTO BLISS y LUIS GUSTAVO MARTÍNEZ, ambos sin documentos, el H. R. MARTÍN ALVARADO, interpuso una formal Den. N° I-521-95. Sin más que agregar de usted."

Se trata de un proceso iniciado en virtud de una denuncia de hurto interpuesta por el H. R. del Corregimiento de Santa Ana, MARTÍN ALVARADO CABALLERO. El informe antes transcrito se apoya en la declaración jurada rendida por Gustavo Watson Maynard y la denuncia presentada visible de fojas 1 a 4 del expediente contentivo de las sumarias.

Consta de fojas 58 a 61 de las sumarias, una orden de detención escrita, expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Auxiliar de la República en la cual se ordena la detención preventiva, entre otros, del señor ROBERTO BLISS en base a la denuncia presentada por el H. R. Martín Alvarado Caballero y la declaración jurada del señor Martín Alvarado Caballero, miembro de la Policía Nacional, quien sorprendió al señor Roberto Bliss in fraganti en la comisión del hecho delictivo que se le imputa.

Vale señalar, que en sentencia fechada el 6 de octubre de 1995, esta alta Corporación de Justicia se pronunció respecto a una acción de habeas corpus interpuesta por el señor Roberto Bliss Evans y, se concluyó, que dadas las pruebas, indagatorias y declaraciones que aparecen en el expediente constituían indicios suficientes que lo vinculan al delito de hurto con la agravante contenida en el numeral 3 del artículo 184 del Código Penal que tiene pena de prisión de 30 meses a 6 años, razón por la cual en la detención preventiva no se infringió el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República.

En virtud de lo antes expuesto, y dado que fue sorprendido in fraganti en la comisión del hecho delictivo no ve, pues, el Pleno razón alguna para variar el criterio antes señalado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de ROBERTO BLISS EVANS y, por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO ESTRADA CAMARENA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Rodolfo Estrada Camarena, en su propio nombre y representación, presentó acción de habeas corpus a su favor y en contra del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Magistrado Wilfredo Sáenz F., Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Oficio N° 51-SF fechado el 23 de febrero de 1996, señaló que

no se había ordenado la detención preventiva del señor Rodolfo Estrada Camarena, pero que "esa medida cautelar personal fue decretada por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial." Además, se señala que debido a que existen "dudas razonables favorables al señor RODOLFO ESTRADA CAMARENA, ha sido favorecido con un sobreseimiento provisional," con relación al homicidio perpetrado en perjuicio de VALENTINA ROSA SMALL LU, por lo que, se decretó su libertad inmediata.

Dado que del informe presentado por el Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, se colige claramente que el señor Rodolfo Estrada Camarena, ciudadano a favor del cual se ha presentado esta acción de habeas corpus, ha recuperado su libertad, debe procederse entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **CÉSAR CHANDECK** ha presentado ante esta Superioridad, Acción de Habeas Corpus a favor de **EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ** contra el Director Nacional de Corrección, por considerar que la privación de libertad que sufre el prenombrado, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia calendada 14 de febrero de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, que fue contestado por el funcionario acusado mediante Nota N° 636-DNC. 96. S de 16 de febrero de los corrientes, en los siguientes términos:

> "En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ, ni verbal ni por escrito.
>
> No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.
>
> El recurrente, señor EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ, con cédula de identidad personal N° 8-151-772 se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, guardando detención en el Centro de Rehabilitación El Renacer, toda vez que se encuentra condenado por dos delitos a saber:
>
> 1. Delito de Falsedad y Estafa en perjuicio de Empresas Gago, Importadora Ricamar, S. A. (Super 99) y Venecalzados, S. A. respectivamente. Condenado por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante sentencia de fecha 29 de julio de 1993, a la pena de tres (3) años, seis (6)

meses y cincuenta (50) días multa.

De conformidad al Mandamiento N° 886-DNC comenzó a cumplir dicha pena el día 17 de agosto de 1994, fecha en la cual se le concedió una rebaja de pena mediante Decreto Ejecutivo N° 410 de 17 de agosto de 1994 con relación al mandamiento N° 330 del 24 de mayo de 1993; y cumplirá el total de dicha pena el día 17 de febrero de 1998.

2. Delito de Estafa en perjuicio de Raenco, S. A. condenado por el Juzgado Décimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de 11 de mayo de 1993, a la pena de tres (3) años de prisión y ciento cincuenta (150) días multa. La misma fue confirmada por el Segundo Tribunal de Justicia mediante resolución de fecha 27 de diciembre 1993.

De conformidad al Mandamiento N° 890-DNC comenzará a cumplir dicha pena el día 17 de noviembre de 1998, cuando cumpla el total del Mandamiento N° 886-DNC, y cumplirá el total el día 17 de noviembre del año 2,001."

FUNDAMENTO LEGAL DE LA DETENCIÓN DE EDUARDO CHANDECK

Esta Superioridad, al adentrarse en el examen de la acción presentada, advierte que la detención que sufre el señor **CHANDECK ALVARADO** obedece, según lo expresado por el proponente de la acción y de conformidad con el informe que reposa a folios 9-10 del expediente remitido por la Dirección Nacional de Corrección, a que el mismo se encuentra cumpliendo penas impuestas por sentencias condenatorias proferidas por distintos despachos judiciales a saber:

1. El Juzgado Primero de Circuito Penal, mediante sentencia de 29 de julio de 1993 le condenó a cumplir la pena de 3 años, 6 meses y 50 días-multa por delitos de Estafa, Falsedad y Estafa. El cómputo de esta pena comenzó a correr el día 17 de agosto de 1994, fecha en que terminó de cumplir una sanción impuesta previamente, y cumplirá el total de la pena el día 17 de febrero de 1998.

2. El Juzgado Décimo de Circuito Penal le condenó por delito de estafa mediante sentencia de 11 de mayo de 1993 a la pena de 3 años de prisión y 150 días-multa, sanción que comenzará a cumplir el día 17 de noviembre de 1998 y cumplirá en su totalidad el día 17 de noviembre del año 2,001.

Como se desprende del informe remitido, antes de estas dos condenas, el señor **CHANDECK** se encontraba cumpliendo otra pena con reclusión carcelaria.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Conforme a los argumentos del recurrente, su disconformidad con la privación de libertad del señor **CHANDECK** se sustenta en dos puntos esenciales:

a) aduce que la Dirección Nacional de Corrección ha procedido de manera incorrecta al computar la sanción impuesta por la **Juez Cuarta de Circuito** a partir del día 17 de agosto de 1994, siendo que en el Oficio N° 2546 de 4 de octubre de 1993 (visible a foja 1 del expediente) la citada funcionaria reconocía que éste ya había cumplido la pena de 9 meses de prisión, y debía ser puesto en libertad si no tenía otra causa pendiente; y

b) acompaña una **opinión** vertida por la Procuraduría de la Administración con fecha de 29 de agosto de 1995 en un caso específico, distinto al del señor **EDUARDO CHANDECK**, pero que es utilizado por el proponente de la acción en este caso para fundar su pretensión. En el referido dictamen, la señora Procuradora de la Administración recoge el criterio de que cuando un detenido se encuentre cumpliendo pena, y se le condena por otro delito, tiene derecho a que se le compute la segunda pena desde el momento en que el juez del segundo proceso lo señale, con independencia del hecho que ello conlleve el cómputo simultáneo de penas para varios delitos.

Sustenta tal juicio de valor la funcionaria en cuestión, en el principio "in dubio pro reo" interpretando que conforme a tal principio debe aplicarse a la situación de un detenido el cómputo más favorable.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Corrección, con base a los procedimientos inveteradamente aplicados con respecto a la ejecución de sentencias condenatorias, ha certificado que en el caso del señor **EDUARDO CHANDECK** el cómputo de la condena de tres años, 6 meses y 50 días-multa que se inició el 17 de agosto de 1994 es consecuencia de la sanción impuesta por **el Juzgado Primero** de Circuito penal el 29 de julio de 1993, **no del Juzgado Cuarto de Circuito** como alegaba la parte actora, y se inició el 17 de agosto de 1994 porque en esa fecha cumplió una condena anterior según mandamiento de 24 de mayo de 1993.

De la misma forma, el cómputo de la pena impuesta por sentencia del Juzgado Décimo de Circuito Penal se iniciará al cumplir en su totalidad la sentencia anterior, esto es, el día 17 de noviembre de 1998.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Este Tribunal, al entrar a resolver la controversia planteada debe aclarar, en primer término, que el actor lamentablemente ha confundido la situación del señor **CHANDECK**, puesto que la condena que comenzó a cumplir el 17 de agosto de 1994 no se relaciona con la condena impuesta por el Juzgado Cuarto de Circuito Penal, sino con la del Juzgado Primero de Circuito del mismo Ramo.

De cualquier forma, cabe señalar que esta Superioridad en casos anteriores, ha venido realizando una interpretación sistemática de los artículos 58 del Código Penal y 2415 del Código Judicial, destacando que la correcta interpretación del artículo 58 nos conduce a que la detención preventiva se descuenta del cómputo de la pena impuesta en la sentencia, lo que se conoce como "abono a pena", pero se **limita** al caso específico que motiva la detención, y que el artículo 2415 del Código Judicial prevé claramente que en toda sentencia se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique al imputado, **el tiempo que haya estado detenido por ese delito**.

Así, en sentencia de 17 de febrero de 1995, el Pleno de la Corte, al examinar una acción de habeas corpus de una persona que cumplía sentencias condenatorias externó lo siguiente:

> "Conforme a los argumentos del recurrente, si se hace un cómputo simultáneo de las penas impuestas, el señor **HERAZO** ya cumplió las mismas, en virtud de su prolongada detención preventiva. Sin embargo, la correcta interpretación del artículo 58 del Código Penal nos conduce a señalar que la detención preventiva se descuenta del cómputo de la pena impuesta en la sentencia, lo que se conoce como "abono a pena", pero se limita al caso específico que motiva la detención.
>
> Como quiera que en este punto se produce el fenómeno de la pluralidad delictiva, en la que no ha sido posible la acumulación por cuanto no había identidad de delito, ni identidad de propósitos, ni identidad de sujetos pasivos, el procesado tiene derecho, sin embargo, a que se le considere autor de un concurso real del delito y a la unificación de las penas, especialmente porque las tres sentencias condenatorias dictadas en su contra se dieron en el mismo Juzgado Municipal Penal y en el Tribunal Circuital que tenía conocimiento de los otros procesos, por lo tanto le eran aplicables los artículos 64 y 65 del Código Penal, que especifican el procedimiento a seguir para computar correctamente la sanción imponible, ya sea que se trate de la misma clase de pena o de penas diferentes.
>
> Sin embargo, debemos indicar que la vía procesal para corregir la omisión en que se incurrió no es la seleccionada por el recurrente,

> toda vez que la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas cautelares personales que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos para garantizar la libertad individual, y en este caso no puede aducirse que la detención del señor **HERAZO** fue decretada al margen de la Ley, puesto que en su momento, la medida cautelar personal de privación de libertad fue ordenada por la autoridad competente, dentro de instrucciones sumariales que así lo ameritaban y con ajuste a las disposiciones legales que regentan la materia. Por ende, la vía adecuada para corregir la situación del detenido, es solicitar al juez del Juzgado Segundo de Circuito Penal de Chitré, que profirió la última condena en relación a **MARXIO HERAZO**, que se proceda a la unificación de las penas impuestas al prenombrado."

Las consideraciones esgrimidas en la resolución judicial precitada tienen válida incidencia en el negocio que nos ocupa, puesto que evidentemente la privación de libertad que sufre el señor **EDUARDO CHANDECK** se justifica en la medida que cumple condenas impuestas, y que según el cómputo realizado le mantendrá bajo reclusión carcelaria hasta el año 2,001.

No puede aducirse en consecuencia que se presenta la situación de una privación de libertad corporal ilegal por haberse cumplido el tiempo de condena, lo que hubiese podido ser enmendado a través de la figura del habeas corpus correctivo, en vista de que palmariamente se advierte que el señor **EDUARDO CHANDECK** aún le queda pendiente el cumplimiento de dos sanciones que involucran pena de prisión.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención que sufre el señor EDUARDO ENRIQUE CHANDECK ALVAREZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ PRESCOTT EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ PRESCOTT** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a su favor, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 22 de febrero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante oficio N° 1941-96 de 26 de febrero de 1996, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "Los fundamentos de hecho para ordenar la detención del ciudadano CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ PRESCOTT, se reflejan en que el día 30 de

octubre de 1995, en el momento en que unidades del área "F", de Don Bosco, se encontraban de recorrido por la vía principal de Concepción, retuvieron a un ciudadano para identificarlo y efectuarle un registro de rutina, se le pudo detectar en la mano izquierda una cajetilla de fósforos, contentiva de veinte (20) pequeños fragmentos sólidos de una sustancia de color crema que se presume sea Crack o Piedra, también se le encontró debajo del brazo, dentro de una bolsa, una cajeta de color rojo vino con negro que contenía una balanza o pesa identificada como "BALANCE DE CUISINE" DIET SCALE, además se le encontró en el bolsillo delantero derecho del pantalón, la suma de B/.14.35 en diferentes denominaciones."

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **CARLOS JIMÉNEZ** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al prenombrado ciudadano, tiene su origen en el informe fechado 30 de octubre de 1995 (visible a folios 3-5 del sumario), suscrito por dos miembros de la Policía Nacional, mediante el cual se deja constancia de que encontrándose en ronda policial el Cabo 2° BOLÍVAR NIETO y la Agente PEDROZA en horas de la noche por el sector de Juan Díaz, fue visualizado un sujeto en actitud sospechosa por lo que fue retenido por los miembros de la Policía, detectándose en su mano izquierda una cajetilla de fósforos contentiva en su interior de 20 pequeñas sustancias sólidas de color crema que se presumió droga, así como una bolsa plástica contentiva de una pesa. De igual forma, en el bolsillo izquierdo de su pantalón se detectó una cantidad indeterminada de dinero fraccionado.

El ciudadano **JIMÉNEZ PRESCOTT** fue puesto de inmediato a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por tratarse de un presunto ilícito contra la Salud Pública. Esta Agencia dispuso el inicio la instrucción sumarial una vez que se realizara la prueba de campo respectiva a la sustancia incautada, que arrojó un resultado positivo para la determinación de sustancia ilícita: **Cocaína**, **CRACK** (cfr. foja 6 del sumario).

Al rendir declaración indagatoria (cfr. fojas 10-13 del cuaderno sumarial), el señor **JIMÉNEZ** negó su vinculación con el ilícito, manifestando en su favor que la sustancia ilícita fue encontrada por los miembros de la Policía Nacional en otro sitio, y que se le ha vinculado sin ningún fundamento al hecho punible.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas consideró, una vez adelantadas las diligencias pertinentes, que existían suficientes elementos que incriminaban al señor **CARLOS JIMÉNEZ** con la presunta comisión de un delito contra la salud pública que amerita pena privativa de libertad, razón por la cual ordenó la detención preventiva del imputado mediante providencia razonada de 1° de noviembre de 1995, visible a fojas 14-15 del expediente sumarial.

El examen del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, visible a folio 24 del cuaderno sumarial, arrojó un resultado positivo en cuanto a que la sustancia analizada: **20 fragmentos de color crema**, era **COCAÍNA (CRACK)** en la cantidad de **2,52 gramos**.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Este Tribunal Colegiado conceptúa que de las piezas probatorias que reposan en el expediente se desprenden indicios de presencia y oportunidad que vinculan al señor CARLOS JIMÉNEZ PRESCOTT con la posesión de sustancia ilícita, hecho punible que amerita la detención preventiva del imputado en este caso.

En efecto, además de la proporción de sustancia ilícita que según los agentes captores fue incautada en poder del imputado, existen otros elementos que debe ser considerados por la autoridad jurisdiccional. Así, se advierte que la sustancia ilícita se encontraba presentada o distribuida en **20 fragmentos separados**,, por lo que se desprende que el fin de la misma no es el consumo personal, sino la intención de suministrarla en venta o traspaso ilegal. Cabe acotar en este punto, que la dosis posológica de **COCAÍNA**, de conformidad con lo expresado por el Médico Forense General del Instituto de Medicina Legal oscila entre los **0.2** y **0.4** gramos de cocaína, y en los adictos alcanza **el gramo** de sustancia.

Por otra parte, se encontró en poder del imputado una báscula o pesa, y dinero notoriamente fraccionado cuya procedencia no ha podido aclarar.

La presencia de estos elementos justifican, al menos en esta etapa aún incipiente de la investigación, la medida de detención preventiva ordenada contra el prenombrado, por tratarse de elementos que pueden perfectamente ser indicativos del propósito de traspasar ilegalmente la sustancia incautada en su poder.

Finalmente, es importante destacar que los agentes captores han ratificado en su totalidad el informe presentado al realizar la aprehensión del señor **JIMÉNEZ**. El Cabo NIETO, en su declaración jurada (f. 32-36 del sumario) ha señalado además que al momento del hallazgo de la sustancia en poder de **CARLOS JIMÉNEZ**, cuestionó verbalmente al referido ciudadano en relación a las sustancias incautadas, la pesa y el dinero fraccionado que tenía en su poder, a lo que el prenombrado contesto: **"que eso no es na', en cuanto al dinero aceptó que era producto de la venta y aceptó ser distribuidor de sustancias ilícitas ... me manifestó que eso era de él y para la venta"**.

La Agente PEDROZA en su declaración igualmente destacó que: ... **"sí el Cabo le preguntó de quién era, de dónde lo había sacado y respondió que eso era de él para la venta, que el dinero era suyo producto de la venta y que eso no era nada, refiriéndose al dinero, pero no precisó de dónde lo había obtenido"**.

Esta Superioridad considera por ende, que aunque el sindicado niegue su vinculación con el hecho punible investigado, el Informe Policial y las declaraciones juradas suscritas por dos servidores públicos, miembros de la Policía Nacional, constituyen al menos en esta fase de la instrucción, un indicio que le compromete de manera directa con el ilícito investigado.

Se concluye del examen minucioso de las piezas que componen la encuesta penal en estudio, que la detención del señor **CARLOS JIMÉNEZ** se ajusta a las formalidades constitucionales y legales que regulan la medida cautelar personal: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, al haberse comprobado:

1. **la existencia del hecho punible**: pues se produce el hallazgo de sustancia ilícita en poder del señor **JIMÉNEZ**;

2. **la vinculación de la imputado con el hecho punible**: según los informes y declaraciones policiales que reposan en el cuaderno sumarial, el imputado fue detenido en horas de la noche en actitud sospechosa, en posesión de sustancias ilícitas, y portando dinero en las condiciones antes expuestas, por lo que pesan sobre el mismo los señalamientos específicos de la **tenencia de la droga su en poder**.

Nada impide sin embargo, que en transcurso de la investigación sumarial surjan nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, pero tal calificación corresponderá al Tribunal de la causa y en la etapa correspondiente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva

de CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ PRESCOTT y dispone que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCIANO CASTILLO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **LUCIANO CASTILLO** ha presentado ante esta Superioridad, Acción de Habeas Corpus a su favor, contra el Director Nacional de Corrección por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 12 de febrero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo el cual fue contestado por el señor Director Nacional de Corrección en los siguientes términos:

> "En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor **LUCIANO CASTILLO CABALLERO**, ni verbalmente, ni por escrito.
> ...
> El recurrente se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección bajo la custodia del Director de la Cárcel de David, en el precitado centro, cumpliendo la pena de 45 meses de prisión por el delito de violación carnal en perjuicio de Oneida Aguilar Araúz, mediante sentencia del 30 de diciembre proferida por el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí, confirmada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de David, el 25 de marzo de 1994.
>
> El interno en mención inició el cumplimiento de la pena impuesta el 8 de julio de 1993, de manera que cumplirá las 2/3 partes de la pena impuesta el 8 de enero de 1996 y de no ser aprobada la libertad condicional cumplirá la totalidad de la pena el 8 de abril de 1997."

Este Máximo Tribunal de Justicia, al examinar el escrito presentado por el señor **CASTILLO**, así como el informe remitido por el funcionario demandado, advierte que la privación de libertad que sufre el prenombrado tiene sustento en una sentencia judicial condenatoria proferida por un Juzgado Circuital de la Provincia de Chiriquí y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, que le impuso la pena de 45 meses de prisión por delito de violación carnal. A ello obedece su reclusión carcelaria en el Centro Penitenciario de la ciudad de David, siendo que la sanción impuesta al señor **LUCIANO CASTILLO** se cumplirá en su totalidad en el mes de abril del año **1997**.

Esta Superioridad constata que en el negocio sub-júdice no se ha argumentado que el sancionado ya haya cumplido la pena impuesta manteniéndose ilegalmente su detención, lo que hubiese permitido aplicar la figura del habeas corpus correctivo, sino que mediante el ejercicio de esta acción se pretende obtener la libertad de un condenado a pena de prisión alegando el derecho a que se le reconozca **ipso iure** el beneficio de libertad condicional, por haber cumplido las dos terceras partes de la condena.

En efecto, el proponente de la acción insistentemente señala en su escrito que su actual privación de libertad debe cesar, en vista de que ha cumplido las **dos terceras partes de la pena** y cumple con los condicionamientos de ley para ser beneficiado con **libertad condicional**, solicitando al Tribunal de Habeas Corpus que acceda a tal petición.

El Pleno debe recurrir a una interpretación sistemática de dos normas de nuestro ordenamiento jurídico que rigen la materia, esto es, los artículos 85 del Código Penal y 179 de la Constitución Nacional para aclarar la situación debatida. Los textos en comento se reproducen a continuación:

> "Artículo 85. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional."
>
> "Artículo 179. Son atribuciones que ejerce el presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> ...
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder **libertad condicional** a los reos de los delitos comunes".

De las normas transcritas se desprende que la **libertad condicional** es un **beneficio** que puede ser otorgado al sancionado con pena de prisión, previa satisfacción, por una parte de los requisitos de: **a)** cumplimiento de dos tercios de la pena y **b)** la comprobación hecha por el Departamento de Corrección en el sentido de que el internamiento se cumplió con un adecuado índice de readaptación, buena conducta y acatamiento a los reglamentos carcelarios; y establece la concesión de tal beneficio a través del **Órgano Ejecutivo** mediante resolución, por ser una atribución que ejerce el Presidente de la República con el Ministro respectivo.

En consecuencia, este Tribunal debe indicar que **una vez cumplidos los condicionamientos de ley**, y no **ipso iure** por el sólo transcurso del tiempo, es viable el otorgamiento del beneficio, pero esta tutela legal debe realizarse por la **vía administrativa correspondiente**.

Ello hace imperativo indicar que la solicitud del actor para que a través de la acción de habeas corpus se le otorgue el beneficio de libertad condicional resulta por completo improcedente, puesto que la institución del Habeas Corpus está encaminada a proteger al ciudadano de la adopción de medidas restrictivas de la libertad corporal que desconozcan los parámetros y formalidades constitucionales y legales establecidos, y el Tribunal sólo puede concretarse a determinar si la privación de libertad tiene o no fundamento legal.

En este orden de ideas el Tribunal de Habeas Corpus ha podido constatar que la detención preventiva y reclusión carcelaria del señor **LUCIANO CASTILLO** tiene plena legitimidad y sustento legal: fue condenado a cumplir pena de prisión por la comisión de un hecho punible en un proceso legalmente instaurado, sanción que aún no ha cumplido en su totalidad.

Por ende, la **vía idónea** para encaminar la petición de libertad condicional del señor **LUCIANO CASTILLO** no es la seleccionada por el recurrente, circunstancia que impide al Tribunal un pronunciamiento de mérito en este caso.

También sería conveniente aclarar que como el beneficio en cuestión es una atribución del Ejecutivo y no del Departamento de Corrección, la autoridad demandada no tiene en estos casos responsabilidad directa en la concesión de la medida liberatoria o en la demora en la adopción de la misma.

Sobre este particular es consultable el pronunciamiento proferido por este mismo Tribunal mediante sentencia de 12 de diciembre de 1995, cuando el Pleno de la Corte indicó:

> "Es imperativo entonces acreditar que se encuentran satisfechos los

> **dos** requisitos exigidos por ley, lo que indica que no basta el mero transcurso del plazo de las dos terceras partes de la pena impuesta para que opere **ipso jure**, como es la pretensión del demandante, la consecuencia de la libertad condicional, sin la verificación que corresponda a los otros factores condicionantes del beneficio penal. Con el objeto de hacer eficaz esta modalidad concreta de la tutela legal, se plantea la necesidad de que por vía administrativa se implementen con suficiente antelación los medios para que, al vencimiento del plazo que señala la ley, se pueda resolver de inmediato sobre el reconocimiento de la medida liberatoria.
>
> De cualquier modo, no se puede desconocer que se trata de una atribución presidencial, que no del Departamento de Corrección, por lo que este último tramo de la gestión administrativa no tiene fecha cierta de cumplimiento. Así las cosas, mal se puede, entonces, imputar a la autoridad demandada en esta acción responsabilidad alguna por la alegada demora en conceder la libertad condicional al detenido."

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus propuesta por el señor LUCIANO CASTILLO contra el Director Nacional de Corrección.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL ALEXIS ALVARADO CONTRA EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado AGAPITO GUERRERO VEGA, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **ARIEL ALEXIS ALVARADO**, contra el Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial, **"por encontrarse supuestamente involucrado en la muerte del menor CARLOS E. JESSY VÁSQUEZ, ...".**

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado envió a esta Corporación el informe de rigor (fs. 8) que explica lo siguiente:

> **"Esta agencia del Ministerio Público ha recibido Recurso de Habeas Corpus a favor de ARIEL ALEXIS ALVARADO y contra la suscrita, motivo por lo que procedemos a contestar el mismo en los siguientes términos:**
>
> **A. La Personería Primera Municipal del Distrito de Colón ordenó la detención preventiva de ALEXIS ALVARADO, mediante Proveído calendado 21 de marzo de 1995, visible a fojas 47-48 del infolio.**
>
> **B. Para dicha detención se fundamentó en la declaración jurada rendida por Dayanara Vanesa Antioco, visible a fojas 7-9; en la declaración jurada rendida por Jarienca Maritza Givans, visible a**

fojas 10-12, y en el informativo que rindiera Basilio Molinar (A) Masa el día 21 de marzo de 1995 ante la Policía Técnica Judicial, Agencia de Cristóbal, visible a fojas 36-40; y en derecho con los artículos 2148 y 2149 del Código Judicial.

C. En la actualidad ARIEL ALEXIS ALVARADO se encuentra a órdenes de este despacho, toda vez que mediante Proveído fechado 8 de agosto de 1995 se mantuvo la detención preventiva de éste por el Delito Contra la Vida e Integridad personal en perjuicio de Carlos Enrique Jessie Vásquez, y mediante Oficio N° SP-1950/95 de 16 de agosto de 1995 el Director de la Cárcel de Colón puso al prenombrado ALVARADO a disposición de este despacho, cfr. fojas 254 y 255. ...".

El caso se encuentra, por tanto, en estado de decidir sobre la legalidad de la detención del sumariado a lo que se procede seguidamente.

Como se ha podido apreciar de las constancias sumariales, el delito que se investiga es contra la vida e integridad personal, o sea, el homicidio de CARLOS ENRIQUE JESSIE VÁSQUEZ. El hecho ocurrió a consecuencia de una balacera entre bandas en Puerto Escondido, Colón, en la que participaron varios sujetos, siendo que entre los sospechosos de la comisión del delito se encuentra el favorecido con esta acción de habeas corpus, ALEXIS ALVARADO (a) DIDI.

La detención preventiva de ALVARADO y otro de los imputados se decretó mediante resolución de 21 de marzo de 1995, proferida por la Personería Municipal del Distrito de Colón, fundamentada en diversas declaraciones de testigos que los vieron disparar.(fs. 47-48). Posteriormente, la Fiscalía Tercera Superior mantuvo la detención por considerar que contra los imputados "existen elementos incriminatorios que los vinculan como autores en la ejecución del acto criminoso ...", conforme a lo dispuesto por el artículo 2148 del Código Judicial.

La demanda de habeas corpus, en síntesis, se basa en que, aunque el delito que se atribuye a ARIEL ALEXIS ALVARADO sea el de HOMICIDIO, no se trata de homicidio doloso y que, en todo caso, si se llegara a probar que de su arma salió el disparo "necesariamente deberá ser juzgado por HOMICIDIO CULPOSO, el cual tiene pena de prisión mínima de seis meses".

En atención a lo que se deja expuesto la detención preventiva del sindicado ARIEL ALEXIS ALVARADO OROZCO es legal, pues hasta el momento los elementos probatorios allegados a la investigación que adelanta el Ministerio Público lo vinculan al delito de homicidio. El funcionario de instrucción actuó siguiendo los presupuestos que exigen los artículos 2148 y 2159, tomando en cuenta la pena de prisión que conlleva el hecho punible y decretando la detención por medio de diligencia en la que expresa:

1. El hecho imputado;

2. Los elementos probatorios para la comprobación del hecho; y,

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

La Corte como tribunal constitucional, de habeas corpus, no puede entrar a determinar si el delito debe ser calificado como homicidio doloso o culposo, pues dicha labor compete a la respectiva autoridad jurisdiccional al momento de juzgar al imputado. La actuación del Pleno, en estos casos, debe limitarse a comprobar si la detención preventiva tal cual ha sido decretada por el funcionario de instrucción está legalmente fundamentada, al tenor de los dispuesto y ordenado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ARIEL ALEXIS ALVARADO y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS A. CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS AXEL BUSTO CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de Habeas Corpus interpuesta contra la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN** a favor de **ALEXIS AXEL BUSTO**, detenido en la Cárcel Pública de David.

Acogido la presente acción, se libró el mandamiento de rigor contra el Director Nacional de Corrección, Licenciado **ENRIQUE MON PINZÓN**, razón por la cual éste, mediante oficio N° 567-DNC de 13 de febrero de 1996, rinde su informe de conducta en los siguientes términos:

> "...
> C. El recurrente se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección bajo la custodia del Director de la Cárcel de David, en el precitado centro, cumpliendo la pena de 45 meses de prisión por el delito de Hurto en perjuicio de Nicolás Alvarez Osorio y Alba Abadís de Sousa, condena esta impuesta por el Juzgado Tercero de Circuito de Chiriquí mediante sentencia del 15 de septiembre de 1994, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.
>
> Este interno inicia el cumplimiento de la condena impuesta el 12 de enero de 1991, egresa el 5 de febrero de 1991; reingresa el 24 de agosto de 1991, egresó el 6 de diciembre de 1991; reingresa nuevamente el 13 de septiembre de 1993, según oficio N° 398 del 11 de agosto de 1995 enviado por el señor Eduardo Gómez, Director de la Cárcel de David. Cumplió las 2/3 partes de su condena el 7 de noviembre de 1995, y de no ser aprobada la misma, cumplirá la totalidad de la misma el 7 de febrero de 1997". (Fs. 9 y 10).

Por su parte el recurrente **ALEXIS AXEL BUSTO**, alega en su escrito de habeas corpus, que tiene derecho a que se le otorgue el beneficio de la libertad condicional consagrada en el artículo 85 del Código Penal. Considera **BUSTOS**, que reúne todos los requisitos señalados por dicho artículo; -haber cumplido dos tercios (2/3) de la pena impuesta; y -haber observado buena conducta, índices de readaptación y cumplimiento de los reglamentos carcelarios.

Observa esta Corporación, que si bien es cierto, **ALEXIS AXEL BUSTOS** ha cumplido los dos tercios (2/3) de la pena impuesta, no podemos por ello afirmar que su detención es ilegal, puesto que la libertad condicional, como lo señala el artículo 86 del Código Penal, es otorgada por el Órgano Ejecutivo mediante Resolución, luego de estudiar cada caso y determinar si cumple o no con los requisitos de buena conducta, readaptación, etc, que ya mencionamos.

Sobre este tema se ha pronunciado la Corte con anterioridad, veamos un fallo de 12 de diciembre de 1995:

"...
Es imperativo entonces acreditar que se encuentran satisfechos los dos requisitos exigidos por ley, lo que indica que no basta el mero transcurso del plazo de las dos terceras partes de la pena impuesta para que opere ipso jure, como es la pretensión del demandante, la consecuencia de la libertad condicional, sin la verificación que corresponde a los otros pactrores condicionantes del beneficio penal. Con el objeto de hacer eficaz esta modalidad concreta de la tutela legal, instituida en respeto del bien jurídico de la libertad individual, se plantea la necesidad de que por la vía administrativa se implementen con suficiente antelación los medios para que, al vencimiento del plazo que señala la ley, se pueda resolver de inmediato sobre el reconocimiento de la medida liberatoria.

De cualquier modo, no se puede desconocer que se trata de una atribución presidencial, que no del Departamento de Corrección, por lo que este último tramo de la gestión administrativa no tiene fecha cierta de cumplimiento. Así las cosas, mal se puede, entonces, imputar a la autoridad demandada en esta acción responsabilidad alguna por al alegada demora en conceder la libertad condicional al detenido." (...)

M. P. FABIÁN A. ECHEVERS. HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LADIMIR CASTRELLÓN DELGADO A FAVOR DE DIONISIO ALBERTO CASTRELLÓN. 12 DE DICIEMBRE DE 1995.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus presentada a favor de ALEXIS AXEL BUSTO; y por consiguiente, ORDENA que sea nuevamente filiado en la Cárcel Pública de David, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema la acción de habeas corpus promovida por el Licenciado **JOAQUÍN ROGER PÉREZ** a favor de **ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE** contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el Fiscal **ROSENDO MIRANDA** rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

"...
PRIMERO: Si es cierto que ordenamos la detención del señor **ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE.** Dicha detención fue emitida mediante Resolución de fecha veinticinco (25) de enero de 1996, la cual se encuentra acopiada a fojas 18 y 19 del Sumario.
SEGUNDO: ...

A. FUNDAMENTO DE HECHO:

Los hechos se dieron el día 22 de enero del año en curso, a las 3:30 p. m., cuando Unidades de la Policía Metropolitana del Área "D" de Parque Lefevre, encontrándose de recorrido por el sector de Río Abajo, a la altura de la Calle 10ª final, los uniformados visualizaron a un sujeto que conducía un bicicleta tipo montañera, quién (sic) al notar la presencia de la policía trató de darse la vuelta, abandonando la bicicleta, por lo que se le persiguió, logrando atraparlo cuando sufre una caída, sometiéndolo a registro físico, como también se le efectúa un registro a la bicicleta, logrando encontrar dentro de un envase del agua de color negro, una (1) servilleta blanca, la cual contenía envueltos doce (12) pequeños fragmentos sólidos de una sustancia color crema que se presume sea la droga conocida como **Crack o Piedra**. ...

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

...
PRIMERO: La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.) las sustancias ilícitas encontrada en poder del sindicado, certificando que las muestras analizadas resultaron **POSITIVA**, para la determinación de **COCAÍNA (CRACK)**, en la cantidad de **2.50 gramos**.
SEGUNDO: Al rendir Declaración Indagatoria, el ciudadano **ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE**, Aceptó la tenencia y procedencia de dichas sustancias ilícitas y manifestó ser consumidor de dichas sustancias ilícitas.

Con todos estos elementos expuesto se dan los presupuesto legales que establece el Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención del prenombrado". (Fs. 9 y 10).

Tenemos, pues, que **ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE** fue detenido mientras portaba 2.5 gramos de cocaína (crack), cantidad que excede la dosis por ingestión de los adictos a esta droga, tal como se observa a foja 32 del cuaderno principal la certificación del Instituto de Medicina Legal.

También observa esta Corporación que, al momento de ser incautarle la droga a **BENÍTEZ**, ésta se encontraba dividida en doce (12) fragmentos sólidos, lo cual hace presumir que no era únicamente para su consumo personal como alega, sino que se trata de tráfico ilícito de drogas.

El argumento del recurrente, en el sentido de que la determinación de la cantidad personal debe hacerse en cada caso concreto por los peritos médicos de acuerdo al estudio de cada paciente, estimamos que hasta el momento, no se encuentra plenamente demostrado que el señor BENÍTEZ haya adquirido esa cantidad de droga para su uso personal, pues la cantidad incautada excede en el doble la dosis de adictos, como ya hemos visto. Lo anterior sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación sumarial se pueda establecer sin dudas que se trata de una dosis de adictos por la especial situación de adicción en que se encuentre el detenido.

El artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se trate de delitos que tengan señalada pena mínima de dos (2) años, se podrá decretar la detención preventiva de los sindicados, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en dicho cuerpo de leyes.

Hasta el momento tenemos que el delito por el cual se encuentra detenido **ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE** es de aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, específicamente el de tráfico tipificado en el artículo 258, Libro II, Título VII, Capítulo V del Código Penal, en el que se establece una pena mayor de dos (2) años de prisión. De modo tal que se encuentran

cumplidos los requisitos para decretar legalmente la detención preventiva del prenombrado **BENÍTEZ BOURNE.**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra ADRIÁN ANTONIO BENÍTEZ BOURNE y en consecuencia, ORDENA sea filiado nuevamente en la Cárcel Modelo a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El licenciado Roberto Enrique Fuentes ha interpuesto acción de habeas Corpus Preventivo a favor de JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO, y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

El apoderado judicial parte actora manifestó que el señor Alberte es objeto de una investigación penal por parte de la Policía Técnica Judicial, agencia de San Miguelito por el delito de hurto cometido en perjuicio del señor Luis García.

Mediante auto de 4 de marzo de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió al funcionario demandado que informara sí había ordenado o no la detención del señor José Luis Alberte, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o ha sido transferido a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante la Nota N° A.L-0280 de 4 de marzo de 1996, en la cual informó a esta Corporación lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO". (FS. 10).

Esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que en las acciones de habeas corpus preventivas, es necesario la existencia de una orden de detención. En el presente caso, se ha comprobado plenamente que la autoridad demandada no ha emitido ninguna orden de detención contra el señor Alberte. Por lo tanto, no existe uno de los presupuestos esenciales que dan vida a este tipo de acción y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que el proceso debe cesar.

Cabe señalar también, que en sentencia de 15 de enero de 1996, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró el Cese de Procedimiento en el recurso de

habeas Corpus Preventivo interpuesto por las mismas partes que intervienen en la presente acción.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Roberto Enrique Fuentes, en representación de JOSÉ LUIS ALBERTE, y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO SÁNCHEZ PINTO CONTRA EL FISCAL SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la acción de Habeas Corpus promovida por el licenciado Eduardo Badillo Paz a favor de PEDRO SÁNCHEZ PINTO, y contra el Fiscal Séptimo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Mediante sentencia de 2 de febrero de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de PEDRO SÁNCHEZ PINTO.

El Tribunal a-quo fundamentó su fallo en las siguientes razones:

"Al valorar las probanzas que conforman este proceso, la Sala sostiene que las mismas justifican la detención preventiva que pesa contra PEDRO SÁNCHEZ PINTO, pues la propia querellante, Benita Arenas Rodríguez, manifestó que el sindicado abusó sexualmente de ella, previo a haberla engañado diciéndole que había sido denunciada por una señora. Así, empleando su cargo de policía le pidió que lo acompañara para luego ultrajarla. Agregó, que pudo reconocer a este policía quien respondía al nombre de PEDRO SÁNCHEZ PINTO.

GABRIEL ENRIQUE MARTÍNEZ ARENAS (fs. 214) depuso que tenía conocimiento de que el cabo Pedro Sánchez Pinto tenía este **modus operandi**, ya que lo había sorprendido con antelación con otras dos jóvenes.

El empleador de la joven Benita Arenas, señor Ricardo Garibaldo Figueroa, externó que el día de autos ella llegó llorando a su casa y que le contó a su esposa que había sido violada por un guardia que la conminó a acompañarla y en el área de Panamá viejo abusó de ella, por lo que él la acompañó a distintas agencias de policía.

Además, Gino Orlando Gibbs Stevenson, quien manifestó dedicarse a lavar autos en la Plaza 5 de Mayo acotó, que vio cuando un policía conversaba con una joven y después se fue con ella en el carro en que llegó (fs. 6-7).

> Aunque el dictamen médico legal no haya reflejado que se ejerciera violencia en la persona de Benita Arenas, de la deposición de la querellante se colige, que el Cabo Sánchez Pinto utilizó su cargo para compeler a la ofendida a abordar su vehículo, es decir, que la afectada se vio intimidada ante la autoridad que el acusado detentaba". (fs. 10-13)

El funcionario demandado, al rendir el informe que se le requirió acerca de su actuación, manifestó que la detención del sindicado se fundamenta en una orden escrita suscrita por el señor Fiscal Auxiliar de la República calendada 22 de septiembre de 1995.

En el sumario consta como elemento de prueba contra el imputado, la querella suscrita por la señora Benita Arenas Rodríguez, visible de fojas 1 a 3, en la cual declara que fue violada sexualmente por un policía debidamente uniformado, al cual reconoció posteriormente en la Agencia de la Policía Nacional de Parque Lefevre donde labora el imputado. Consta también en el sumario la declaración del señor Gino Orlando Gibbs Stevenson, quien señaló que "yo me gano la vida como lava autos en la Plaza 5 de mayo fuera del Club de Leones, pude ayer 14 de septiembre, un carro rojo vino, desconozco el némro (sic) de placa de la placa (sic), pero era MUSTANG de dos puertas; yo parquié el carro, cuando vi que se bajó el miembro de la policía sólo; desconozco donde iba; al rato que regresó con una muchacha y se fueron" (fs. 6). A su vez, el señor Ricardo Figueroa, empleador de la ofendida, en declaración jurada rendida en la División de Delitos de Contra el Pudor y la Libertad Sexual de la Policía Técnica Judicial, manifestó que la joven Benita Arenas había sido ultrajada por un agente de la Policía Nacional, al cual pudieron reconocer como "PEDRO SÁNCHEZ PINTO, con Placa No. 5328, Cabo 1° de facción en la Sub-Estación de Parque Lefevre" (Cfr. foja 13 del sumario).

Se puede constatar también como elemento probatorio del hecho punible, el examen médico legal practicado a la joven Benita Arenas, en el cual consta la presencia positiva de espermatozoides (fs. 69 del sumario).

Además, el Pleno de esta Corporación observa también, que en la declaración Jurada rendida ante la Fiscal Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá, el señor Gabriel Enrique Martínez manifestó conocer al imputado, al cual sorprendió en dos ocasiones distintas con jóvenes menores de edad, a las cuales acusaba de haberse robado una cartera en un bus. Señala también el señor Martínez que el **modus operandi** del señor Pedro Sánchez Pinto es el siguiente "El visualiza a una persona que baja de un bus, una menor con cara de inocente y la sigue, la para mas adelante para decirle que hay una señora que la acusa de robarle algo de valor, la persona niega los cargos y él le pide que lo acompañe a la Policía Técnica Judicial en el camino utiliza un teléfono público haciéndole ver a la persona que él la está ayudando y entonces le solicita un favor a cambio de darle la libertad, pero quiero dejar constancia que en los dos casos anteriores no se llegó a dar la violación ya que fue impedida por mi persona y que además las versiones que me dieron las menores eran las mismas, en ambas ocasiones". (Cfr. Fojas 214-215 del sumario).

Por lo tanto, como en el sumario instruido se investiga la comisión de un delito Contra el Pudor y la Libertad Sexual, tipificado en el artículo 216 del Código Penal y sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años, y los elementos probatorios hasta ahora allegados al sumario vinculan al detenido PEDRO SÁNCHEZ PINTO con la comisión de este delito, el Pleno considera que la detención preventiva decretada en contra del imputado, mediante providencia 22 de septiembre de 1995, no viola en ningún modo las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El Pleno de esta Corporación de Justicia quiere también resaltar el hecho de que al imputado Pedro Sánchez Pinto, se le ha instruido sumarias en la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito de Violación Carnal en perjuicio de Angela González Lorenzo.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 2 de febrero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se declara LEGAL la detención preventiva del señor PEDRO SÁNCHEZ PINTO ordenada por el Fiscal Auxiliar de la República y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Séptima de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARINA MORALES SOTO A FAVOR DE PEDRO RENATO RUSSO Y CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Marina Morales Soto interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de Habeas Corpus a favor del señor PEDRO RENATO RUSSO y contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

La apoderada del señor RUSSO fundamentó su acción en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El señor PEDRO RENATO RUSSO es casado con panameña.

SEGUNDO: El señor PEDRO RENATO RUSSO convive con ciudadana panameña con la cual tiene una hija y cuya constancia de nacimiento adjuntamos al expediente que reposa en el Departamento de Migración.

TERCERO: Igualmente la madre de la niña se encuentra en estado de preñez.

CUARTO: El Presidente de la Asociación de Peruanos en Panamá se hizo responsable de la solvencia económica del señor PEDRO RENATO RUSSO.

Se presentó poder solicitando la libertad del mismo, a lo que el señor Director del Departamento de Migración se ha negado."(F. 1).

Acogido el recurso y librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado rindió el informe solicitado mediante el Oficio Nº DNMYN 054-96, del 13 de febrero de 1996. En dicho informe, el Director Nacional de Migración y Naturalización indicó que el señor PEDRO RENATO RUSSO, de nacionalidad peruana, fue detenido por unidades de la Policía Nacional del Área "D" y puesto a órdenes de su despacho mediante nota fechada el 31 de enero de 1996. Agregó, que su detención se debió al hecho de que el mismo no portaba documentos válidos que acreditarán su permanencia legal en el país y que a pesar de estar casado con una ciudadana de nacionalidad panameña, tampoco aportó la documentación correspondiente a su residencia de casado con panameña (fs. 4-5).

A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la detención del señor PEDRO RENATO RUSSO es legal, ya que siendo un ciudadano extranjero no acreditó, mediante la presentación de los documentos respectivos, la legalidad de su permanencia en nuestro país. Sobre el punto es necesario señalar, que señor RUSSO ingresó al país el 25 de junio de 1991 en calidad de turista, con el propósito

de visitar a sus familiares y, posteriormente, contrajo matrimonio con la ciudadana panameña María De Los Ángeles Cádiz Hurtado.

Si bien este hecho le habría posibilitado al actor su residencia en el país, previo cumplimiento de los requisitos legales, el mismo no realizó ningún trámite para legalizar su status de extranjero casado con panameña, a pesar de las oportunidades que, con tal propósito, le brindaron las autoridades de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización. Así consta a foja 7 del expediente, en la que se aprecia que al señor RUSSO se le concedió la Citación N° 1610, válida hasta el 20 de febrero de 1992 y la Citación N° 3297, hasta el 9 de junio de 1994, para que, en ambos casos, tramitara sus documentos de residencia o abandonara el territorio nacional, sin que a la fecha en que se ordenó su detención (31 de enero de 1996), hubiese cumplido con los requerimientos del funcionario demandado.

Es necesario aclarar, que aun cuando el actor contrajo matrimonio con la ciudadana panameña María De Los Ángeles Cádiz Hurtado, esta circunstancia no le otorgaba por si sola el derecho de residir en el territorio de la República de Panamá, tal como establece la parte inicial del artículo 38 del Decreto-Ley N° 16 del 30 de junio de 1960. Además, resulta obvio, que para adquirir el status de extranjero casado con nacional y el derecho a residir en el país, el señor PEDRO RENATO RUSSO debió cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes, al igual que con la tramitación de la documentación respectiva ante la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, tal como le fue requerido desde mucho antes de que se ordenara su detención.

Por las razones indicadas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la detención del señor PEDRO RENATO RUSSO es legal y así debe declararlo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención del señor PEDRO RENATO RUSSO, ordenada por el Director Nacional de Migración y Naturalización, mediante nota fechada el 31 de enero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FIDEL ALVAREZ Y MARIANELA SOLÍS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense MUÑOZ Y ASOCIADOS, presentó acción de habeas corpus a favor de los señores FIDEL ALVAREZ y MARIANELA SOLÍS FLORES, contra el Juez Segundo Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial acogió la demanda y libró mandamiento contra el funcionario demandado, quien oportunamente contestó.

Al resolver la acción ese tribunal declaró legal la orden de detención preventiva contra los señores FIDEL ALVAREZ y MARIANELA SOLÍS FLORES. Contra esa decisión la firma forense MUÑOZ y ASOCIADOS apeló.

Procede la Corte a resolver sobre la apelación.

El accionante en su escrito de apelación pretende que la Corte Suprema de Justicia haga valer un fallo pronunciado por esta Corporación en 1990, donde se ordenaba la libertad del señor FIDEL ALVAREZ.

En cuanto a la pretensión formulada, el Pleno observa que el habeas corpus resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 1990, y por medio del cual decretó ilegal la detención del sindicado ALVAREZ, fue pronunciado cuando las sumarias estaban en su etapa inicial. En ese momento no existían los elementos probatorios suficientes para justificar la detención del señor FIDEL ALVAREZ. Por ejemplo, los informativos no contenían las firmas del agente que la recibió, así como tampoco no constaba que se había detenido a FIDEL ALVAREZ en flagrante delito.

Actualmente nos encontramos frente a un proceso que después de haber concluido con su fase investigativa se dictó una resolución de fecha 12 de junio de 1991, por medio del cual se abre causa criminal contra los señores MARIANELA SOLÍS y FIDEL ALVAREZ. (Fs. 169-177).

Es obvio que con ello fueron subsanados los defectos y que originó la declaratoria de ilegalidad en ese momento y sobre las cuales actualmente hace alusión el accionante en forma reiterativa.

Al respecto, se observa claramente en el expediente que reposan las declaraciones de los señores MIGUEL A. WONG y JHON E. STRAZZO (Fs. 81-88) y (Fs. 118-123). respectivamente, donde se ratifican del informe rendido inicialmente y ambos coinciden que el señor FIDEL ALVAREZ era la persona que conducía el vehículo que se utilizó en el ilícito y sabía que la señora MARIANELA SOLÍS iba a comprar droga. Así lo expresa el agente MIGUEL WONG en parte de la declaración rendida a fs. 81-88 del expediente:

> "..., la joven al momento que se presentó el taxista le dijo al agente que ese muchacho era amigo de ella y que le hablaría para que lo llevara a buscar dicha droga, que ella podría conseguirle droga más rápido, la joven en mención le dijo al taxista que el americano era amigo de ella, el taxista de nombre FIDEL ALVAREZ aceptó y se montaron al taxi el agente Strasso y la joven MARIANELA además del Sr. ALVAREZ que era el conductor, ..."

Por su parte, el agente encubierto, STRAZZO expresa lo siguiente:

> "... yo le contesté que esperaba a un amigo y ya entrando en confianza de intercambios de palabra yo le dije que si podía tener confianza en ella y me contestó que diciéndole yo que esperaba un taxista que me iba a entregar una cocaína y ella me dijo que en el pasado ella se dedicaba a la venta de drogas (...) en esos momentos llegó el taxi que yo esperaba como a eso de las nueve y veinte de la noche el cual tenía la matrícula 8T-2365 marca Toyota, entonces esta joven me manifestó yo conozco el taxista y corrió hacia el, posteriormente ella me llamó y me dijo en inglés que nos montáramos y le dijo al taxista que yo era de confianza, montando el taxi nos dirigimos a Howard a la Avenida A en el Chorrillo a comprar cocaína ..."

Más aún, en el citado auto de llamamiento a juicio, se lee a fojas 175-176, lo siguiente:

> "Al revisar las constancias procesales, somos de la opinión que se han cumplido los extremos del artículo 2222 del Código Judicial, contra los prenombrados, pues el cuerpo del delito se comprobó con la droga examinada, mientras que el aspecto subjetivo se ha visto acreditado con el señalamiento de los agentes captores que participaron en el operativo, los cuales fueron ratificados de su informativo, involucrando al señor ALVAREZ pues según el agente Strazzo, este tenía pleno conocimiento de la transacción".

En la petición de habeas corpus que formulara la firma forense MUÑOZ Y ASOCIADOS, ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, esta corporación establece en la parte medular de su resolución lo siguiente:

> "...
> No obstante esa realidad, también lo es el hecho de que luego de haberse emitido esa resolución por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se continuó con el trámite investigativo y una vez concluido esto se emitió el auto de enjuiciamiento el cual fue confirmado por el ad-quem, donde sí se expresan de manera detallada cuáles son los elementos de juicio que vinculan a los imputados con el ilícito de marras; ...".

La Corte comparte el criterio expresado por el Segundo Tribunal Superior, dado que existen suficientes elementos probatorios conforme a las constancias procesales, para que se mantenga la detención de los señores FIDEL ALVAREZ y MARIANELA SOLÍS FLORES, por el Delito Contra la Salud Pública.

En consideración a lo anterior, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 26 de enero de 1996, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta por los señores FIDEL ALVAREZ y MARIANELA SOLÍS FLORES, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN ALBERTO CAMARENA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, AGENCIA REGIONAL DE DROGAS DE COCLÉ Y VERAGUAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada MARINA MORALES SOTO, ha presentado ante esta Superioridad acción de habeas corpus a favor de IVÁN ALBERTO CAMARENA, contra el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, Agencia Regional de Drogas de Coclé y Veraguas, por considerar que es ilegal la detención preventiva que sufre su representado.

Acogida la acción, se libró mandamiento de habeas corpus, mediante providencia de 1° de marzo de 1996. El funcionario acusado contestó mediante nota de fecha 5 de marzo de 1996, lo siguiente:

> "Con nuestro acostumbrado respeto, acudimos a esa Superioridad, a fin de comunicar que se ha recibido mandamiento de Habeas Corpus, en contra de esta Agencia de Instrucción y a favor del imputado IVÁN ALBERTO CAMARENA; sindicado por el delito Contra la Salud Pública.
>
> En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que las sumarias fueron remitidas al Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé, para resolver solicitud de Medida Cautelar, mediante Oficio N° 66 del 18 de enero de 1996, siendo el imputado puesto a órdenes de esa esfera Circuital mediante oficio N° 65 de la misma fecha.
>
> Atentamente,

(Fdo.)
VITELIO BARRERA FLORES
SECRETARIO DE DROGAS
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL".

De conformidad con el informe transcrito, la persona beneficiada con la acción constitucional presentada, se encuentra a órdenes del Juzgado Segundo del Circuito Judicial de Coclé, funcionario con mando y jurisdicción en una Provincia. En consecuencia, se procede enviar el negocio subjúdice al Tribunal competente para conocer de esta acción, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2° del artículo 2602 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, la acción de habeas corpus presentada a favor del señor IVÁN ALBERTO CAMARENA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO BROWNE ROSE CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano EDUARDO BROWNE ROSE, actuando en su propio nombre ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor contra el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por encontrarse detenido por el delito de homicidio, alegando que no tiene ninguna vinculación con el hecho punible.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, se recibió mediante Oficio N° 43-A. C. de 23 de febrero de 1996, la siguiente contestación:

"Honorable Magistrado:

Con todo respeto, procedo a rendirle el informe solicitado en el Mandamiento de Habeas Corpus librado contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el día 16 de febrero del año en curso, y que guarda relación con la acción propuesta por el detenido EDUARDO BROWNE ROSE:

A) No es cierto que haya dispuesto la detención del recurrente.

B) Tampoco puedo exponerle los motivos o fundamentos de hecho y de derecho de la detención por la razón indicada en el punto anterior.

C) Es cierto que tengo bajo mis órdenes al detenido, en razón que por vías de reparto ingresó a este despacho para su calificación desde el día 28 de diciembre de 1994, fundamentalmente porque la Fiscalía Tercera Superior así lo dispuso solicitando a esta Cámara Judicial en su Vista del 30 de noviembre de 1994 que calificara el sumario respectivo con llamamiento a juicio en su contra por el delito de Homicidio en perjuicio de JULIÁN ELOY HARDING CÁCERES.

> Finalmente, me permito aclararle que en la actualidad esta preparado un proyecto para poner en circulación ante el resto de la Sala para los efectos legales consiguientes. En realidad fue la Fiscalía Tercera Superior la que ordenó la detención de BROWNE ROSE, tal como se observa en la providencia del 8 de julio de 1994, (fs. 84 del expediente principal).
>
> Acompañándole los antecedentes para su debida ilustración y a partir de este momento disponiendo que al detenido se le ponga bajo órdenes de la máxima Corporación de Justicia.
>
> Con toda consideración y respeto,
>
> (Fdo.)
> LCDO. ANDRÉS A. ALMENDRAL C.
> MAGISTRADO SUSTANCIADOR".

A continuación, la Corte procede a decidir si la detención decretada a consecuencia del sumario que se instruye contra el beneficiado con esta acción, está legalmente fundamentado de acuerdo a la actuación enviada con el informe por el funcionario demandado, tal como lo dispone el artículo 2590 del Código Judicial.

La instrucción sumarial se inició con la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver de JULIÁN ELOY HARDING CÁCERES, en el Parque de Santa Ana de la Ciudad de Panamá, a las 5:50 p. m. del día 4 de noviembre de 1993, por el Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República, actuando en funciones de Agente Especial, en asocio con los testigos actuarios designados para ese acto. Fueron recibidos por un miembro de la Policía Nacional del Área A, quien les informó que había recibido una llamada que en dicho lugar se encontraba una persona en el piso, que había recibido varios impactos de bala. También informó que la esposa del occiso manifestó que la persona que había matado a su esposo se llama EDUARDO BROWN (A) "OREJITA".

En el presente caso el hecho delictivo que se investiga está sancionado con pena mínima superior a dos (2) años de prisión, y el señor Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial a foja 85 del expediente que contiene las sumarias, manifiesta que el 17 de junio de 1994, ingresó a ese Despacho el proceso penal seguido a EDUARDO BROWNE ROSE por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de JULIÁN ELOY HARDING CÁCERES, encontrándose prófugo el mencionado BROWNE ROSE, y que fue detenido el 27 de junio de ese mismo año, por lo que se ordenó fuese puesto a órdenes de ese Despacho. Se expresa en dicha providencia la existencia del hecho punible acreditado en el proceso con las fotografías visibles de fojas 7 a 14; la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver (fs. 2 y 3): el protocolo de la necropsia (fs. 47 a 69); certificado de defunción a foja 72; así como también la declaración jurada de la esposa y del padre del occiso quienes señalan a EDUARDO BROWNE ROSE como el autor material del homicidio, por lo que procedió el representante del Ministerio Público a ordenar la indagatoria del sindicado, en base a lo preceptuado en el artículo 2115 del Código Judicial.

En autos constan las declaraciones de dos testigos presenciales de los hechos, señores AMÉRICO CAICEDO MINEROS y FERNANDO RICARDO DEAN, quienes se encontraban en el Parque de Santa Ana y ambos coinciden en las versiones que a continuación se comentan:

A foja 117 y siguientes, el señor CAICEDO MINEROS expresa que se encontraba leyendo periódico en el Parque de Santa Ana, cerca de un árbol que tiene una isleta y:

> "... cuando miro para adentro del parque vi un muchacho que viene caminando por la Central y se mete al parque como para cortar camino y entonces yo vi un señor que estaba sentado allí en una Isleta que tiene el mismo kiosco del Parque, se le fue encima y se fueron a la lucha, el hoy occiso cayó al suelo y el otro le puso la rodilla en el pecho, sacó el arma de fuego de su cintura y le disparó al otro

> con la rodilla encima, creo que fueron como de cuatro a cinco disparos. Allí vi a una niña llorando que fue donde el sujeto que disparó y el asesino con la mano la hizo a un lado."

Más adelante señala que:

> "... si lo puedo reconocer si lo veo nuevamente, ya que luego del hecho él corrió cerca de mí, pero como se encontró con una cerca que está para salir a la Calle 13 Oeste, se regresó y pasó por la puerta de la iglesia con el arma de fuego en la mano me parece que era una escuadra de esas que usan cargadores".

Se lee a foja 120 y siguientes la declaración rendida por el señor FERNANDO RICARDO DEAN:

> "... El hoy difunto venía caminando con una niña supongo que era su hija y más detrás venía el homicida y se le abalanzó al muchacho, hubo un cruece (sic) de palabras, el hoy difunto cogió a la niña y la apartó a un lado, se agarraron a los puños y en eso salió a relucir un arma de fuego que poseía el homicida, escuché varias detonaciones ..."

Seguidamente expresa que si reconocería a la persona que disparó y que dicho sujeto "salió corriendo con la pistola en la mano".

Se observa a foja 145 del expediente, la diligencia de reconocimiento fotográfico, en que participó la menor hija del occiso y quien señaló la foto que correspondía al sindicado como la persona que ejecutó la acción delictiva.

En la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos practicada el día 7 de noviembre de 1994 (foja 163), y en la cual aparecían seis personas más el detenido, con rasgos similares, se le pregunta al reconocedor, FERNANDO RICARDO DEAN, si está el sujeto que el día 4 de noviembre de 1993, le ocasionara la muerte a JULIÁN ELOY HARDING CÁCERES, a la cual contestó: "que el # 7 para lo cual que (sic) el detenido # 7 da un paso de adelante y dijo su nombre: EDUARDO BROWN".

A juicio de esta Corporación de Justicia, el cúmulo de elementos probatorios que dan cuenta de las constancias del sumario, allegados a la investigación justifican legalmente la privación de la libertad de EDUARDO BROWNE ROSE, tal como lo ordena el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención decretada contra EDUARDO BROWNE ROSE, y ORDENA sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO RÍOS RÍOS CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor del señor **FRANCISCO RÍOS RÍOS**, contra el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° A. L.-0265-96, fechado 29 de febrero de 1996, en el que expresa lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor FRANCISCO RÍOS RÍOS.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor FRANCISCO RÍOS RÍOS. El mismo se encuentra a órdenes del Juez Nocturno de Policía de San Miguelito desde el 16 de febrero de 1996 y bajo custodia de la Cárcel Modelo." (Foja 6).

Además, según el informe secretarial que consta a foja 8, suscrito por la licenciada Yanixsa Yuen de Díaz, el señor **FRANCISCO RÍOS RÍOS** ingresó a la Cárcel Modelo mediante oficio N° 054-96 de 14 de febrero de 1996, suscrito por el licenciado BENITO A. MÓJICA, Juez Nocturno de Policía de San Miguelito. Del informe mencionado se colige que el señor **FRANCISCO RÍOS RÍOS** se encuentra a órdenes del Juez Nocturno de San Miguelito, por lo que la Corte carece de competencia para conocer de la presente acción constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de habeas corpus, en la esfera de Circuito, Ramo Penal, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) JORGE FÁBREGA
(fdo.) EDGARDO MOLINA MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICENTE SERRANO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **JOAQUÍN ROER PÉREZ**, a favor del señor **VICENTE GUERRERO SERRANO**, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio del señor **FRANK E. STUART H.**

El actor motiva su pretensión alegando que la detención del señor **GUERRERO SERRANO** es ilegal, ya que se hizo sin orden emanada de autoridad competente, sin que fuera informado de los cargos, se le mantuvo 24 horas incomunicado y que no existe ningún indicio, ni siquiera leve, que lo vincule con el hecho punible.

Ingresado el presente negocio constitucional a la Corte, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada.

Mediante Oficio N° 2953-FAR de 16 de febrero de 1996, consultable de fojas 9 a 14, el Fiscal Auxiliar de la República informó lo siguiente:

> "a) Sí es cierto que este despacho ordenó la detención del señor **VICENTE GUERRERO SERRANO** y la misma se hizo por escrito, mediante providencia calendada diez (10) del mes y año que decurre, visible a fojas 362 a 365 del negocio de marras.
>
> b) En cuanto a los fundamentos de hecho que se dieron para tal medida, los mismos radican en los acontecimientos acaecidos para la fecha del veinticinco (25) de enero del año en curso, en horas de la noche entre las 8:00 p. m. a 9:00 p. m., por los predios de la Urbanización Industrial de Bethania y en la cual se encontró en el interior de un vehículo marca Nissan Sunny, con matrícula 657025 color claro, el cuerpo inerte de quien en vida se llamó **FRANK ERNEST STUARD HILTON**, quien presentaba heridas múltiples en su cuerpo ocasionadas presumiblemente con arma de fuego y punzo cortante.
> ...
> Siendo así las cosas, observamos acreditadas en el sumario mediante las declaraciones vertidas por los testigos, estos han manifestado que referente a la matrícula oficial que portara el vehículo en el cual se desplazaran los sujetos correspondía a la distinguida con la numeración 000409, matrícula ésta que a su vez se ha identificado corresponde a la numeración dada a los Casinos Nacionales, logrando a su vez identificarse que referente al vehículo que porta dicha matrícula, corresponde al asignado a la oficina de seguridad de la citada dependencia estatal, motivo por el cual se evacuaron diligencias tendientes a esclarecer la utilidad que se le dio el día de los hechos al equipo distinguido con la citada matrícula al igual sobre las personas que para esta fecha hicieran uso de dicha unidad.
>
> De lo antes expuesto, se logra establecer que referente a la unidad con la matrícula 000409, la misma fue utilizada el día de los hechos por los señores **MANUEL ROBINSON; LUIS PEÑA y VICENTE GUERRERO**, motivo por el cual este despacho dispuso la recepción de indagatorias a los prenombrados ciudadanos.
> ...
> Expone en su declaración, el señor **VICENTE GUERRERO** que referente a la unidad con matrícula 000409, él la estuvo utilizando en horas de la tarde del día veinticinco (25) de enero del año que decurre, que entre las 6:00 p. m. a 7: 00 p. m., salió en compañía del señor **PEÑA**, a comprar panes en el lugar conocido como Lucianito, que luego de ésto regresó a las instalaciones principales de los Casinos Nacionales.
>
> Ahora bien, escuchadas las versiones dadas por los declarantes, tenemos que en cuanto al señor de apellido PEÑA, éste ha negado haber salido el día 25 de enero del año en curso, en compañía del señor **GUERRERO** y mucho menos a comprar pan. Que ellos salieron en la unidad terminada con la matrícula terminada 409, después de las nueve de la noche y fue precisamente a prestar el apoyo para el cierre del Casino de Bolerama ubicado en el parque industrial de Bethania a pocos metros del lugar del crimen ...
>
> Por otro lado, expone el supervisor de turno de apellido **ATENCIO MORENO** que el día 25 de enero al efectuar el relevo respectivo la unidad vehicular distinguida con la matrícula 000409 no estaba en los estacionamientos y que este relevo lo efectuó él a las nueve y cuarenta y cinco p. m. aproximadamente. Y que en cuanto a la mencionada unidad vehicular, ésta estaba siendo utilizada por el prenombrado **GUERRERO**; así mismo, tenemos acreditado en el sumario declaración jurada que rindiera el supervisor de apellido **JURADO**, persona ésta que señalara el señor **GUERRERO**, le había entregado las llaves luego de comprar el pan, situación que ha negado el declarante manifestando que para fecha y hora en que supuestamente

> se le hiciera entrega de las referidas llaves de la unidad vehicular 000409, él no se encontraba de turno, motivo por el cual no ha podido recibir las llaves de parte del señor **GUERRERO.**
>
> Siendo así las cosas, y ante las contradicciones declaradas por el señor **VICENTE GUERRERO SERRANO**, al no poder explicar dónde estuvo y que hacía con la unidad vehicular distinguida con la matrícula 000409 entre las seis de la tarde a nueve de la noche del 25 de enero, este despacho dispuso la detención preventiva del prenombrado
> ...
> ...
> c) Sí mantenemos a órdenes de este despacho al señor **VICENTE GUERRERO SERRANO**, el cual se transfirió a la Cárcel Modelo mediante oficio 2558-FAR, calendado 12 de febrero del año en cuero ..." (fs. 9-14).

Igualmente, remitió copia del expediente que contiene las sumarias seguidas al recurrente y otros por el presente delito.

En cuanto a la solicitud formulada por el actor de 27 de febrero de 1996 y el recorte de periódico adjunto, el Pleno de la Corte considera que en virtud de la naturaleza del recurso de habeas corpus en el que no procede la práctica de pruebas, debe negarse dicha solicitud y proceder a resolver el recurso con el material allegado al proceso al momento de la presentación del habeas corpus.

Al revisar el expediente de la investigación se ha podido constatar que de fojas 362 a 365 consta providencia fechada 10 de febrero de 1996, mediante la cual la Fiscalía Auxiliar de la República ordenó la detención preventiva de **GUERRERO SERRANO.** En dicha diligencia se hace mención expresa del hecho imputado, consistente en el homicidio del señor FRANK STUART, y, además, se expresa que existen fuertes indicios que vinculan al recurrente con el mismo.

Así, en el informe rendido por la Fiscalía Auxiliar de la República se hace constar las contradicciones (fs. 320-324, 325-328, 354-358) en lo declarado por el señor **GUERRERO SERRANO**, quien para la fecha del 25 de enero del año en curso, y en horas de la noche, entre las 6:00 p. m. a 10:00 p. m., fue la única persona que tuvo acceso al Hyundai Excell, vehículo color blanco con placa oficial distinguido con la matrícula 000409, numeración ésta que se ha señalado portara el vehículo utilizado por los sujetos que ultimaron esa noche al señor FRANK STUART (fs. 364).

En cuanto a la alegación del licenciado Joaquín Roer Pérez, que alude al hecho de que el señor **GUERRERO** fue detenido por la Policía Técnica Judicial y el D. I. I. P. de la Fuerza Pública el día 8 de febrero, sin que al momento de la detención fuera informado de los cargos y sin orden emanada de autoridad competente, el Pleno de la Corte observa que el señor **GUERRERO** fue detenido el 8 de febrero de 1996 (fs. 345), puesto a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República mediante oficio 0301 de 9 de febrero de 1996 (fs. 13 del expediente de habeas corpus) y de fojas 348 a 353 consta la declaración indagatoria rendida por **GUERRERO SERRANO** el día 10 de febrero de 1996, después de la cual fue ordenada su detención. Por tanto, la orden fue dictada el 10 de febrero de 1996 (fs. 362), dentro de las 48 horas siguientes a la detención, por la autoridad competente para el caso y dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2158 del Código Judicial. El artículo comentado dispone que, "Cuando una persona haya sido capturada como sindicada de un delito, sin que medie orden del funcionario de instrucción, deberá ser puesta a órdenes de éste, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su detención. El funcionario de instrucción examinará el caso, y si resulta procedente la detención dispondrá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, que ésta se mantenga comunicándolo así al Jefe o Director de la cárcel."

De lo anteriormente señalado se evidencia que la detención preventiva del señor **VICENTE GUERRERO SERRANO** dictada mediante providencia fechada 10 de febrero de 1996, cumple con lo establecido por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y fue dictada por autoridad competente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor VICENTE GUERRERO SERRANO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIBORIO BATISTA CONTRA LA FISCAL CUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia habeas corpus interpuesto por el licenciado Humberto Mosquera a favor de LIBORIO BATISTA, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, sindicado por la supuesta comisión de delito contra el pudor y la libertad sexual, y contra la Fiscal Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia conoció de este proceso constitucional en primera instancia y resolvió declarar legal la detención del sindicado, mediante sentencia de 30 de enero de 1996, tras comprobar que "la medida cautelar personal cuestionada satisface las exigencias legales" (f. 15, cuaderno de habeas corpus).

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

Las sumarias se iniciaron a raíz de diligencia cabeza de proceso de 12 de enero del año que decurre, proferida por el Fiscal Auxiliar de la República, agente de instrucción que ordenó, mediante resolución de igual fecha, recibir declaración indagatoria al investigado, en virtud de querella que presentara Eulalia Jiménez Ortega, ante la Policía Técnica Judicial, por la comisión del delito de violación carnal cometido en perjuicio de su menor hija Susana Ábrego. El mencionado funcionario del Ministerio Público dispuso decretar la detención preventiva del prenombrado Batista, mediante resolución de 15 de enero de 1996, medida que fuera mantenida por la Fiscalía Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial, mediante resolución de 19 de enero del año en curso.

DECISIÓN DE LA CORTE

Le corresponde a la Corte determinar si la medida cautelar de carácter personal acusada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Nacional.

A tales efectos, se comprueba que el hecho imputado lo constituye delito contra el pudor y la libertad sexual, concretamente el de violación carnal, que lleva aparejada pena mínima de 3 años de prisión (a. 216 Código Penal).

Como elemento de prueba allegado a las sumarias para la comprobación del hecho punible se tiene copia debidamente autenticada del informe proveniente del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, rendido mediante oficio de 1° de agosto de 1995, en el cual se hace constar el estado de la menor, cuyo útero se encontró como "aumentado de volumen compatible con embarazo de cinco (5)

meses de gestación" (f. 36 de los antecedentes).

De igual manera, figuran en la encuesta penal suficientes elementos probatorios que vinculan al detenido con el hecho punible imputado. Así, se observan la querella presentada por la madre de la víctima (fs. 3-7 de los antecedentes) y la declaración de la menor (fs. 8-10 de las sumarias), en las cuales se afirma que la persona que cometió la conducta criminosa es Liborio Batista.

Como quiera que la diligencia que ordena la detención cumple fielmente con los requisitos que establece la ley, procede mantener la medida cautelar aplicada mediante la correspondiente confirmación de la resolución recurrida.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 30 de enero de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEX ENRIQUE ALANDETE Y HÉCTOR JULIO LÓPEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ALBERTO LÁZARO R., en su condición de apoderado especial, ha interpuesto recurso de habeas corpus a favor de **ALEX ENRIQUE ALANDETE** y **HÉCTOR JULIO LÓPEZ**, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, en su contestación del informe requerido, entre otras cosas señala que:

"...
1. No es cierto que nuestro Despacho haya ordenado la detención preventiva de los señores ALEX ENRIQUE ALANDETE y HÉCTOR JULIO LÓPEZ.
...
Los señores ALEX ENRIQUE ALANDETE y HÉCTOR JULIO LÓPEZ no se encuentran recluidos en ningún centro penitenciario del país, ni a órdenes de este Despacho, gozando de completa libertad".
..."

El Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas contra quien se libró el mandamiento de habeas corpus expresa que no ha ordenado la detención de los ciudadanos que recurren en este caso y que no los tiene bajo custodia, ya que no existen fundamentos de hecho o derecho para la aprehensión de los mismos, expresado así en la resolución de 22 de febrero del presente año.

La Corte ha podido verificar que la mencionada resolución se encuentra en el cuadernillo adjunto a este expediente, en la que se expresa que los proponentes de esta acción se encontraban con PABLO ALANDETE VILLARREAL cuando fue detenido por poseer droga, sin embargo, este último aceptó que la misma era de su propiedad y para su consumo, indicando que sus acompañantes (ALEX ENRIQUE

ALANDETE y HÉCTOR JULIO LÓPEZ) no tenían conocimiento de la droga. Así, la decisión del agente de instrucción en ese caso fue NO ORDENAR LA DETENCIÓN PREVENTIVA pues la cantidad no llegaba siquiera a un gramo.

En ese sentido, el Pleno de la Corte estima que lo procedente es ordenar el cese del procedimiento en virtud de la acción de habeas corpus, pues con lo expuesto se reafirma lo expresado por el funcionario demandado de no haber ordenado la supuesta detención.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENE el CESE y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GIL ORTEGA ORTEGA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA presentó acción de habeas corpus a favor de GIL ORTEGA ORTEGA, quien se encuentra detenido a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas. Admitida la demanda se libró el mandamiento en contra del funcionario demandado, a quien se le solicitó el envío del informe prescrito por el artículo 2582 del Código Judicial. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas remitió la actuación, además dicho informe establece en términos generales que los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de GIL ORTEGA ORTEGA, se basan en que el día 26 de diciembre de 1995, se efectuó diligencia de allanamiento en la casa del sindicado, encontrándose en la misma cuatro (4) carrizos de sustancia en forma de polvo de color blanco que al ser analizada resultó ser COCAÍNA y cuya medida posológica resultó ser de 0.74 gramos, también fue encontrado en el lugar un pedazo de vela, una cajeta de carrizos plásticos transparentes varios partidos y gran cantidad de bolsitas de plásticos transparentes, estos enseres se presumen son utilizados para la elaboración, preparación y venta de sustancias ilícitas. Aunado a lo anterior se pudo detectar en la residencia del señor ORTEGA la suma de QUINCE BALBOAS (B/.15.00); además, de una bolsa de plástico contentivo de hierba seca.

Además el informe del Fiscal Especial de Drogas nos dice que en el sumario constan las acusaciones de los agentes captores, los cuales señalan de manera contundente la persona del señor ORTEGA como vinculado al ilícito investigado.

Finalmente señala el fiscal que el señor JORGE LUIS MORALES VÁSQUEZ solicitó ante el Juez Décimo Segundo del Circuito de lo Penal, fianza de excarcelación a favor del sindicado ORTEGA, la cual fue negada por la señora Juez.

Después de señalar los puntos más importantes de este informe procede el Pleno de la Corte a resolver sobre la acción de habeas corpus interpuesto a favor del señor GIL ORTEGA ORTEGA.

En base a las copias remitidas de las sumarias que se le siguen al sindicado ORTEGA nos encontramos con varios puntos interesantes; la declaración

jurada del propio sindicado donde niega su participación y en términos concretos explica que los cuatro (4) carrizos con droga encontrados en su casa son para el consumo personal. Con referencia al dinero y a la hierba seca encontradas el mismo expresa:

> Señor Fiscal, esos quince dólares pertenece a mi señora madre, que me los había dejado allí para llevar a mi hija a la clínica ...". "Señor Fiscal esa hierba la tenía mi padrastro para no se qué enfermedad"

El informe del médico forense psiquiatra, contenido a fs. 33 del expediente, establece que en efecto el señor ORTEGA es consumidor de drogas, pero no depende de las mismas.

"...
Luego de lo anterior, Psiquiatra Forense establece que:

1- No presenta trastorno mental tipo psicótico en la actualidad.

2- Se observa un cuadro de consumo eventual de cocaína, pero no no (sic) de dependencia de la misma."

Con respecto a la bolsa que contenía hierba seca, el análisis del laboratorio técnico especializado en drogas (fs. 37) establece en su parte final:

> "CONCLUSIONES: Certificamos, que las muestras analizadas resultaron POSITIVAS, para la determinación de la COCAÍNA, en la cantidad de 0.74 Gramos.
>
> NEGATIVO POR DROGAS ILÍCITAS, resultó la sustancia vegetal".

Por otro lado la madre del señor GIL ORTEGA ORTEGA, la señora GRISELDA ORTEGA BERNAL declaró que había dejado QUINCE BALBOAS (B/.15.00) en la residencia de su hijo para que éste llevara a su hija al médico.

La señora GRISELDA ORTEGA BERNAL, dice en parte de su declaración:

> "... Diga la declarante, si es cierto que el dinero encontrado en su residencia, usted lo había dejado para sufragar los gastos médicos de su nieta, o sea la hija de Gil Ortega CONTESTO: Señor Fiscal, si es cierto. PREGUNTADO: Diga el declarante cuánto fue la cantidad que usted dejó en la residencia para este propósito. CONTESTO: Señor Fiscal, fueron quince dólares ($15.00)".

En base a las constancia procesales que reposan actualmente en el expediente, esta Corporación observa que aún no se han recabado pruebas determinantes que comprueben el ilícito investigado.

Si bien es cierto que en la casa del señor GIL ORTEGA se encontró cuatro (4) carrizos con una sustancia blanca, lo que después resultó ser COCAÍNA, también es cierto que la medida posológica de tal sustancia es de 0.74 gramos, cantidad insuficiente para determinar la venta y elaboración de la misma.

El doctor HUMBERTO MAS Director General del Instituto de Medicina Legal, en oficio N° 51-2031 indicó que la dosis vía oral que produce efectos es de 0.2 a 0.4 gramos; la dosis media que produce efectos con cocaína es de 0.2 a 0.3 gramos; la dosis por inhalación que produce efectos es de 0.03 a 0.05 gramos. Además mencionó que la dosis en los adictos por ingestión es de 1 a 1.5 gramos.

Por otra parte la hierba seca encontrada en una bolsa, y la cual se presumía sustancia ilícita, resultó no ser tal, así lo advierte el informe del laboratorio. Aunado a esto en las copias remitidas a esta Corporación no se encuentran las declaraciones de los agentes captores, de las cuales dice el Fiscal de Drogas ROSENDO MIRANDA: "señalan de manera contundente la persona del señor GIL ERNESTO ORTEGA ORTEGA, como vinculado al hecho ilícito investigado".

Definitivamente que en estos momentos no existen los elementos suficientes

para justificar la detención del señor ORTEGA, por lo que se procederá a decretar la ilegalidad de la misma. Sin embargo este hecho no impide que de encontrarse nuevos elementos que justifiquen su detención la misma se produzca, tal como lo contempla el artículo 2595 del Código Judicial.

> "ARTÍCULO 2595: Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandamiento de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten".

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL, la detención preventiva de GIL ERNESTO ORTEGA ORTEGA y ordena su inmediata libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIN WEI CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Lorenzo Isaac Camarena interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de LIN WEI y contra el Director Nacional de Migración y Naturalización.

Por admitida la iniciativa procesal constitucional, se libró, mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante nota N° DNMYN: D62/96 de 28 de febrero de 1996. En el informe de rigor el funcionario demandado acepta haber ordenado la detención de Wei, la que fuera cumplida por agentes de esa entidad gubernamental de servicio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 24 de enero del año en curso, cuando el agraviado se disponía a partir hacia los Estados Unidos de Norteamérica haciendo uso de un pasaporte falso "a nombre de YU, CHING-HSIA, de nacionalidad Taiwanesa" (f. 33).

Es oportuno recordad que esta Corporación profirió sentencia de 16 de febrero de 1996, mediante la cual resolvió sobre la situación procesal de Wei, declarando legal su detención, por iniciativa judicial de la misma persona, Lorenzo Isaac Camarena.

Es importante destacar que, a pesar de que Camarena acude por segunda vez ante esta Corporación para proponer la misma acción ya resuelta, lo hace sin aportar nuevos hechos o pruebas que acreditan la modificación el status procesal del detenido, que ya fuera examinado. Este comportamiento es contrario al deber de lealtad procesal que se debe observar cuando se acude a la administración de justicia en procura de que se resuelvan pretensiones jurídicas (artículo 462 del Código Judicial), deber de cuyo cumplimiento no escapan las personas que no son abogados, pero que proponen la acción.

El artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus, con el siguiente tener:

> "ARTÍCULO 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento

> de un mandato de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hecho o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten".

A pesar de ello, la jurisprudencia reserva el beneficio de la revisión a los casos en los que surjan nuevos elementos de convicción, con eficacia para variar el status procesal del agraviado, situación que, como se anotó en párrafos anteriores, no es la de este caso, tal como se desprende del examen del libelo, del informe de la autoridad demandada y de la documentación allegada al cuaderno de habeas corpus.

Lo que el acto realmente persigue es una reconsideración de la decisión adoptada por el tribunal de habeas corpus, según se colige de la siguiente manifestación:

> "Los artículos citados en el fallo emitido por el Honorable Magistrado que conoció del primer Habeas Corpus que se interpusiera a favor del Señor LIN WEI, no son aplicables si (sic) se ajustan a la realidad jurídica a la que se encuentra sujeto el precitado WEI" (f. 4).

Valga recordarle que las resoluciones dictada por la Corte Suprema de Justicia como tribunal de habeas corpus no admiten recurso alguno, toda vez que actúa como juez de instancia única. (la pretensión del gestor oficioso en este sentido es, entonces, a todas luces, improcedente.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Lin Wei y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Con fundamento en el artículo 199, numeral 9, del Código Judicial, AMONESTA a Lorenzo ISAAC CAMARENA por incurrir en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal que consagra el artículo 462 de esa excerta procesal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO Y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **NEMESIO FAJARDO ANGULO**, con conocimiento de las diversas acciones de habeas corpus presentadas anteriormente por sus colegas **DANIEL RAMÍREZ LASSO** y **EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO** en representación de los señores **ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, presentó en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de febrero del año en curso, una nueva acción de habeas corpus en representación de las mismas personas y contra las órdenes

de detención que dice fueron emitidas por el Director de la Policía Técnica Judicial y el Jefe de la Agencia de San Miguelito.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, se recibió el oficio N° AL-0282-96, de 5 de marzo del año en curso, mediante el cual el licenciado ANÍBAL RAMOS a nombre del Director General de la Policía Técnica Judicial, señala que no es cierto que esa institución ha ordenado la detención de los accionantes y que no los tienen bajo su custodia y por el contrario tienen conocimiento de que los mismos se encuentran en libertad.

En el punto cuarto de las consideraciones contenidas en el libelo presentado por el licenciado FAJARDO ANGULO se indica que la Fiscalía Auxiliar de la República "en reiteradas acciones de habeas corpus" ha manifestado la inexistencia de las órdenes de detención preventiva, pero que los funcionarios policivos acusados, mediante órdenes de naturaleza verbal "pretenden hacer efectiva la detención" de sus patrocinados.

No cabe la menor duda de que la conducta del accionante se subsume en uno de los supuestos contenidos en los artículos 462 y 199 numeral 15 del Código Judicial, por cuanto esta es la quinta vez que el Pleno de la Corte conoce de los mismos hechos a favor de las mismas personas, por distintos abogados que tienen conocimiento previo de la inexistencia de la orden de detención emitida por las autoridades acusadas, en virtud de que así lo han reiterado al presentar los informes correspondientes en cada caso. Por lo tanto, se trata de un comportamiento de un auxiliar de la administración de justicia apartado de la lealtad y buena fe, que implica dilación manifiesta e ineficacia de las acciones presentadas ante el Tribunal de habeas corpus.

En los distintos procesos de los que ha conocido el Pleno de la Corte con motivo de las acciones de habeas corpus presentadas, hay constancia de que se trata de supuestas órdenes verbales que no se han acreditado por los medios probatorios que establece la ley y que con conocimiento de ello, los accionantes han insistido en hacer uso de esta vía, por lo que se impone aplicar la sanción prevista por el artículo 199 numeral 15 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA de plano la acción de habeas corpus presentada a favor de los señores ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en virtud de que los mismos se encuentran gozando de libertad y no se ha comprobado que exista orden de ninguna naturaleza que ordene la detención de los mismos. A su vez impone al licenciado NEMESIO FAJARDO ANGULO, abogado en ejercicio, con cédula N° 5-14-1607 y oficinas en el edificio Arboix, tercer piso, oficina N° 18, ubicado en la avenida Perú y calle 36 de esta ciudad, multa por la suma de B/.100.00 (cien balboas).

Ofíciese al Ministerio de Hacienda y Tesoro y envíese copia de esta resolución para que proceda al cobro de la multa impuesta.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HASSAN HUSSEIN AHMAD CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Félix Humberto Antinori, actuando en representación de HASSAN HUSSEIN AHMAD, ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 6 de febrero de 1996, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de la cual fue objeto el señor Hassan Hussein Ahmad.

El señor Hassan Hussein Ahmad, fue detenido el día 3 de enero de 1996, por el supuesto delito de posesión de una tarjeta de crédito expedida a favor de una tercera persona.

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, decretó legal la detención preventiva del señor ya que "HASSAN HUSSEIN se encuentra vinculado al traspaso, en compra-venta, de una tarjeta de crédito expedida a favor de otra persona, delito tipificado por el numeral 3 del artículo 271-A ..., que conlleva pena de 3 a 6 años de prisión."

El licenciado Antinori en el escrito de apelación se opone a los argumentos expuestos en la resolución expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de la siguiente manera:

"...

SEGUNDO: El señor **HASSAN HUSSEIN AHMAD**, al momento de ser detenido no utilizó la tarjeta de crédito a él incautada, es más no existe evidencias ni mucho menos pruebas que involucren a mi poderdante con la utilización de esta tarjeta de crédito ...

CUARTO: No fue sino hasta el día miércoles 10 de enero de 1996, que se le tomó declaración indagatoria por parte de la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá a mi poderdante **HASSAN HUSSEIN AHMAD.**

El hecho de que mi poderdante **HASSAN HUSSEIN AHMAD**, fue privado de su libertad sin mandamiento escrito de autoridad competente, transgrede lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Panamá.

QUINTO: Posteriormente la Fiscalía Auxiliar de la República ordenó la detención de mi poderdante **HASSAN HUSSEIN AHMAD**, esta detención está fundamentada en los informes expedidos por los agentes encubiertos de la Policía Técnica Judicial.

SEXTO: La actuación de los Agentes encubiertos de la Policía Técnica Judicial no está autorizada por ningún funcionario de mayor jerarquía, llámese Director General o Procurador; ni mucho menos está fundamentada mediante resolución motivada ...

...

OCTAVO: ...

Del análisis del artículo 25 de la Ley 13 de 1994, se puede apreciar que este artículo ha sido mal citado. Sin embargo coincidimos totalmente en que lo que no debe el agente encubierto es proponer la comisión de un delito; consta en autos, como citamos anteriormente, el informe policía (sic) suscrito por el inspector MARCO ANTONIO BRACHO en donde da a conocer que a solicitud de la Dirección General de la Policía Técnica Judicial la Procuraduría General de la Nación autorizó a esa agencia de investigación la utilización de OCHOCIENTOS BALBOAS **para proponer la comisión de un acto ilícito** el cual consistió en la compra simulada de dos tarjetas de crédito.

No se puede tener una doble moral, o es lícita o es ilícita una prueba, o se acepta que cumplió las formalidades legales la acción encubierta y que se ofreció dinero para proponer la comisión de un acto ilícito, o se declara ilegal la acción encubierta porque no reúne las formalidades legales sin observar que en el fondo esta

operación encubierta estaba viciada de nulidad toda vez que se propuso un acto ilícito y se ofreció y dio dinero para la comisión del acto ilícito.

NOVENO: La Actuación de los Agentes encubiertos de la Policía Técnica Judicial suponen una violación al debido proceso y son inadmisibles para demostrar la culpabilidad del imputado toda vez que esta prueba es ilícita ya que nuestra legislación procesal no permite la demostración del hecho punible y culpabilidad del procesado a través de medios probatorios prohibidos por la Ley, violatorios de derechos humanos o contrarios a la moral o al orden públicos (Artículo 2073 del Código Judicial). La actuación de los Agentes encubiertos de acuerdo a la doctrina de ilustres jurisconsultos, no son más que incitaciones de los agentes de instrucción o investigación para que una persona cometa un acto ilícito, ya que incluso le ofrecen, prometen, o dan dinero para celebrar actos contrarios a la Ley, a la moral y al orden público ..."

La Corte observa que a foja 10 de las sumarias, obra el informe de comisión de captura emitido por el Jefe de la Sección Unidad Forense de Explosivos, Detective IV Ignacio Taylor, en el que se señala que al señor Hussein Ahmad se le detuvo cuando entraba a la Joyería Manhattan, puesto que, es el "lugar donde hace la transacción de las tarjetas de créditos que son fraudolentas (sic)." Aunado a ello, obra a foja 11 del expediente administrativo, el Informe emitido también por el Jefe de la Sección Unidad Forense de Explosivos en la que se señala que al realizar una revisión total del automóvil del imputado, se encontró otra tarjeta de crédito que no correspondía al mencionado Hassan Hussein Ahmad.

Adicionalmente, consta a foja 14 de las sumarias la Declaración Jurada rendida por Ignacio Manuel Taylor Andrade, en la que señala que conversando con el señor Hassan Hussein Ahmad, éste "admitió que había realizado un negocio," con alguna de las tarjetas de crédito fraudulentas. Igualmente se aprecia a foja 17 del expediente administrativo, la certificación emitida el 5 de enero de 1996, por el señor Martín Salazar, encargado de Control Interno del Chase Manhattan Bank, N. A., en la que señala que dos de las tarjetas de créditos eran fraudulentas o falsificadas y que la última, aunque auténtica en cuanto al plastificado, existía una orden de no aceptar ningún tipo de transacción con dicha tarjeta.

El Pleno de la Corte observa, además, que a foja 55 de las sumarias, la resolución expedida por el Fiscal Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, el 15 de enero de 1996, mediante la cual se mantiene la detención preventiva de HASSAN HUSSEIN AHMAD.

Finalmente, el Pleno de esta Corporación observa que el delito que se le imputa al señor Hussein Ahmad tiene fijada pena de 3 a 6 años de prisión, tal como lo señala la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial 22,931 de 15 de diciembre de 1995 y, además, existe orden de detención escrita expedida por la autoridad competente, que aunado el informe de captura y la diligencia de revisión del automóvil del imputado, son hechos que constituyen fuertes indicios en su contra.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que en la detención preventiva del señor Hassan Hussein Ahmad, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas que regulan la detención preventiva que fue ordenada por autoridad competente, razón por la cual lo procedente, es, confirmar la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 6 de febrero de 1996, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva del

señor HASSAN HUSSEIN AHMAD.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(Con Salvamento de Voto) (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

En el presente recurso de habeas corpus, como lo expresé en la lectura, opino y reitero, que la detención ordenada en contra del recurrente no fue por autoridad competente y por escrito, como contempla la ley; no consta igualmente que la tarjeta de crédito que se refiere el caso, en ningún momento fue usada para efectos de obtener mercancía u otra ventajas.

Todo lo expuesto aparece en el negocio en cuestión.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDELFIDIA MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus interpuesta por Teófila Pereira a favor de EDELFIA MARTÍNEZ, quien se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación de Chiriquí, a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Por acogida la iniciativa procesal constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien contestó mediante nota calendada 28 de febrero del año que decurre. Según informa el agente del Ministerio Público, la detención de Martínez fue ordenada por el Personero Municipal del Distrito de Renacimiento, mediante resolución de 21 de julio de 1995.

De conformidad con la diligencia que decreta la detención, Martínez se encuentra acusada por el homicidio de Alfredo Velázquez Avilés, delito que tiene asignada pena mínima de 5 años de prisión, según lo dispone el artículo 131 del Código Penal.

Como elemento de prueba allegado a las sumarias para la comprobación del hecho punible consta la diligencia de inspección ocular y reconocimiento del cadáver (fs. 3-7).

En lo que concierne a los elementos de prueba que vinculan a la detenida con el ilícito, se tiene la declaración indagatoria rendida por su hijo Alfredo Avilés, en la que se formulan cargos directos en su contra (fs. 46-50).

La peticionaria fundamenta la acción de habeas corpus en el hecho de que la agraviada sufre de trastornos mentales y "Ataques Epilépticos (sic) y desde

el tiempo de su detención ha estado hospitalizada" en varias ocasiones (f. 1, hechos segundo y tercero de la demanda). Aunado a lo anterior, consta en el expediente solicitud de libertad formulada por la defensora de oficio de la detenida, licenciada Micaela Morales, fundamentada en informes de la medicatura forense que dan cuenta de que la agraviada: a) presenta alteración de sus facultades mentales de antigua data (f. 233); b) "no tiene discernimiento de los actos que ejecutó y ejecuta, y tampoco capacidad de comprender la naturaleza de los mismos" (f. 234); c) no es imputable por sus actos (f. 234), y d) "Siendo su padecimiento de antigua data, crónico e invalidante, sumado a su analfabetismo y nivel cultural, es necesario la presencia de terceros que se hagan cargo de su atención en cuanto a tratamiento" (fs. 234-235).

El Instituto de Medicina Legal, mediante oficio PSIQ. N° 216-95 de 22 de diciembre de 1995 (f. 253), también dictaminó que Martínez:

> "puede recibir su tratamiento en forma ambulatoria, puesto que su condición actual así lo amerita. Pero dada la circunstancia que rodea a la citada señora, quien no cuenta con ayuda de ningún familiar resulta una situación compleja, puesto que dejada a su libre albedrío, no existe la seguridad de que por sus propios medios mantenga la continuidad de su tratamiento.
>
> SE (sic) trata como observamos, de un caso social, puesto que en su momento actual recibe el tratamiento médico indicado, junto con la alimentación y al ser puesta en libertad todo ello se alterará" (Subraya la Corte).

El agente de instrucción, mediante resolución de 26 de diciembre de 1995, dispuso "mantener provisionalmente a la imputada EDELFIA MARTÍNEZ BEITÍA, recluida en el lugar donde se encuentra", medida que a juicio de la Corte es la que de momento corresponde a la situación de salud y familiar de la detenida, en virtud de lo normado en el artículo 2039 del Código Judicial, cuyo tenor es el que sigue:

> "ARTÍCULO 2039. Cuando sobreviene enfermedad mental del imputado que excluya su capacidad de entender o querer se ordenará, por auto, la suspensión del trámite respecto del imputado enfermo. Esta circunstancia no impide que se investigue el hecho y continúe el procedimiento con los coimputados.
>
> Si no existe peligro de que el imputado enfermo se dañe o cause daño a los demás, podrá ordenarse su libertad, si estuviere detenido, y entregarse a sus padres o tutores. Igual procedimiento se seguirá en los casos de enfermedad científicamente comprobada" (Subraya la Corte).

La solicitud de libertad no se apoya en la acreditación de que, una vez concedida la medida, no existe peligro alguno tanto para la propia Martínez como para la comunidad en general, como lo exige la norma transcrita. Junto a esa comprobación corre otra, cual es la de que la resolución que ordena la detención preventiva cumple cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Edelfia Martínez y, en consecuencia, ORDENA que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE OLIVER SERRANO SALDAÑA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Ubaldino Rodríguez Botello, en representación del señor **OLIVER SERRANO SALDAÑA**, presentó acción de habeas corpus a su favor y contra la orden de detención preventiva dictada por el **Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial**.

Librado el mandamiento que ordena la ley, se recibió por telefax el informe correspondiente en el cual el funcionario acusado acepta haber ordenado la privación de libertad del accionante mediante resolución de 25 de enero de 1996 (fs. 53-55), en la cual se detallan los elementos de juicio, acorde a los recaudos normativos previstos en los artículos 2159 y 2148 del Código Judicial, y que sustentan la medida cautelar personal adoptada en este caso.

Con relación a los motivos de hecho, transcribe la resolución mencionada en el párrafo precedente y relata que como consecuencia de una vigilancia previa y de un allanamiento posterior producto de una compra controlada, se estableció la existencia del delito de tráfico de drogas y al mismo se vincularon no sólo las personas que estuvieron presentes en esa diligencia, sino también otras a quienes se les individualizó, sindicándolos como proveedores o colaboradores en ese ilícito negocio.

Al revisar los antecedentes del caso, que ya eran conocidos por el Pleno al resolver una acción similar a favor de otro de los coacusados, se ha podido constatar que en autos aparece la confesión reiterada de la joven KATIA LORENA CASTILLO, quien acepta la propiedad de la droga decomisada, que se dedica a la venta de estas sustancias ilícitas desde hace varios meses. En su declaración señala a Oliver Serrano, residente en Arraiján, como una de las personas que la proveía de la droga que se daba en venta. Ese cargo lo reiteró posteriormente en declaración jurada, lo cual reviste su acusación de fuerza probatoria para identificar la persona del sindicado. Tal como lo anota el Señor Fiscal Superior, la medida cautelar personal adoptada contra el accionante tiene fundamento de hecho y de derecho, en virtud de que se ha acreditado la existencia del hecho punible y obra contra el señor Serrano el señalamiento claro que le hace la joven Katya Lorena Castillo quien lo describe como una de las personas que desde Arraiján le suministraba la "mercancía" para el tráfico de drogas en la barriada donde reside.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra OLIVER SERRANO SALDAÑA y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en David, Provincia de Chiriquí.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL TOMÁS JIMÉNEZ YANETH CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus interpuesta por Horacio Ramsey Morales a favor de **ORIEL TOMAS JIMÉNEZ YANETH**, y en contra del Director de la Policía Técnica Judicial.

Una vez recibido el presente negocio, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad encargada, quien respondió mediante el informe A. L.-0284-96 de 5 de marzo de 1996 que tenían al señor **ORIEL JIMÉNEZ** bajo custodia, pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República. En vista de esta situación, se libró mandamiento contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien mediante el oficio N° 3684 de 6 de marzo de 1996, informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **ORIEL TOMAS JIMÉNEZ YANETH**.
>
> 2. No tiente razón de ser en base a la respuesta anterior.
>
> 3. El día 2 de marzo del año en curso, fue remitido a este despacho el sumario seguido contra **ORIEL TOMAS JIMÉNEZ YANETH**, **OCTAVIO JOSÉ CARRASQUILLA Y DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO**, imputados por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO en perjuicio del Centro Comercial EL FUERTE, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 2158 del Código Judicial se procedió a examinar el expediente concluyendo que existen suficientes elementos vinculantes contra los señores OCTAVIO JOSÉ CARRASQUILLA Y DIOMEDES ARIEL MONTENEGRO, más no así contra **ORIEL TOMAS JIMÉNEZ YANETH**. En consecuencia se decretó la detención preventiva de los primeros y del señor **ORIEL JIMÉNEZ** se dispuso dejarlo si aprehensión, mediante el oficio No. 3489 fechado 2 de marzo de 1996, cuya copia autenticada se les adjunta al presente informe como constancia." (Fs. 8).

Tal como lo señala la autoridad demandada, consta a foja 9 del expediente, el oficio N° 3489-FAR de 2 de marzo de 1996, en el cual el Fiscal Auxiliar de la República solicita al Director General de la Policía Técnica Judicial que deje sin efecto la aprehensión de **ORIEL TOMÁS JEANNETE JIMÉNEZ**, dentro del proceso según denuncia de Tomás Gabriel Pérez Lara, por el delito de hurto contra el Centro Comercial El Fuerte, S. A.

En mérito de lo anterior, la Corte observa que se ha producido el fenómeno jurídico de sustracción de materia, y de acuerdo con el artículo 2572 del Código Judicial procede ordenar el cese del procedimiento.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERACLIO DE LEÓN HERRERA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus interpuesta por José Axel Almanza Salcedo a favor de **HERACLIO ANTONIO DE LEÓN HERRERA**, y en contra del Fiscal Auxiliar de la República.

Una vez recibido el presente negocio, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad encargada, quien respondió mediante el Oficio N° 3817 de 8 de marzo de 1996 lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **HERACLIO DE LEÓN HERRERA**.
>
> 2. No tiente razón de ser en base a la respuesta anterior.
>
> 3. Según información obtenida por esta oficina del Ministerio Público, el señor DE LEÓN HERRERA fue detenido por efectivos policiales el día 4 de marzo, el día 5 de marzo fue enviado a la Policía Técnica Judicial de Panamá, División de Delitos Contra el Patrimonio, en donde fue puesto en libertad" (fs. 5).

En virtud del informe rendido por el Fiscal Auxiliar de la República, el Pleno de esta Corporación de Justicia tiene conocimiento de que el señor **HERACLIO DE LEÓN HERRERA** fue puesto en libertad. Por consiguiente, como el motivo de la acción de Habeas Corpus es examinar la legalidad de la detención del sindicado, es ostensible que la presente acción perdió su objeto, por lo que se verifica el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y de acuerdo a lo normado por el artículo 2572 del Código Judicial corresponde ordenar el archivo del expediente.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR OMAR RONCEVIC CÓRDOBA EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Digna Córdoba ha interpuesto Acción de Habeas Corpus a favor de

su hijo **OMAR RONCEVIC CÓRDOBA**, cuyos argumentos medulares se reproducen a continuación para mayor ilustración:

> "Mi hijo Omar Roncevic Córdoba (sic), quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo, fue detenido con el señor Cunninghan, porque éste confesó ser el dueño de cierta cantidad de droga, con un peso de 2.82 gramos, cuando se encontraban en el Corregimiento de Pueblo Nuevo.
>
> El funcionario instructor ha desconocido la confesión espontánea de Cunninghan en la comisión del delito; por lo que aún mantiene detenido a mi hijo en forma preventiva y sin tomar en consideración la escasa cantidad de la mencionada droga, cuya propiedad ha sido aceptada por el señor Cunninghan.
>
> Por ello pido la declaratoria de ilegalidad de la detención de Omar Roncevic Córdoba (sic) y se le concede libertad provisional."

Posteriormente el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus en contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante resolución de 1° de marzo de 1996 quien mediante oficio N° 2271 de 4 de marzo de 1996 expresó sucintamente lo siguiente:

> "A. La orden de detención preventiva del señor OMAR RONCEVIC fue decretada por este despacho el DIECIOCHO (18) de diciembre de 1995.
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de OMAR RONCEVIC CÓRDOBA, se centran en que el día 18 de diciembre de 1995, unidades de policía del área "B" de Bethania, se encontraban de recorrido por la Vía Fernández (sic) de Córdoba (sic), cuando a la altura de la antigua Mambo, donde pudieron visualizar a dos sujetos en actitud sospechosa, momento en el cual los agentes, observan que uno de los mismos, arroja un objeto que tenía en la mano derecha, el cual al ser verificado resultó ser un envase de plástico color blanco, que en su interior contenía veinte (20) carricitos de plástico transparente, contentivo de una sustancia en forma de polvo color blanco que el mismo al ser analizado resultó ser COCAÍNA, en la cantidad de 2.84 gramos, según análisis efectuado por el Laboratorio de ciencias forenses de la Policía Técnica Judicial.
>
> Al rendir declaración indagatoria el señor FERNANDO ALBERTO CUNNINGHAM, este (sic) manifestó que la sustancia incautada no era de su propiedad y que no sabía a quien pertenecia (sic), igual declaración rindió el señor OMAR ESTEBAN RONCEVIC, en el cual manifestó desconocer la procedencia de la sustancia ilícita. Posteriormente el día 19 de diciembre de 1995, el señor FERNANDO ALBERTO CUNNINGHAM, en ampliación de indagatoria, reconoce que la sustancia ilícita detectada, era de su propiedad y que las iba a vender a diferentes personas.
>
> ... a fojas 2 del sumario, reposa informe de novedad suscrito por el agente captor en el cual se hace un señalamiento directo, en contra del señor OMAR ESTEBAN RONCEVIC CÓRDOBA, como la persona que arrojó la sustancia ilícita al suelo. De esta forma se observa que se da la complicidad, por parte del prenombrado en la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, lo cual es suficiente razón para mantener la detención preventiva del prenombrado."

Efectivamente a fojas 2 y 3 del sumario de la causa que nos ocupa se observa el informe del agente José Magallón de 18 de diciembre de 1995, en el sentido de que identifica al señor RONCEVIC CÓRDOBA como el portador de los 20 carrizos de plásticos de los cuales trató de deshacerse al percatarse de la presencia del auto patrulla. El agente Magallón se encontraba en dichos momentos en la compañía del cabo W. Jiménez.

Seguidamente se observa que la división de estupefacientes del Ministerio Público al efectuar la diligencia de campo concluyó que los 20 carrizos en comento contenían la droga denominada cocaína y, además, a foja 29 del sumario bajo estudio reposa el dictamen del Departamento de Criminalística el cual a través del Laboratorio Técnico Especializado en drogas certificó que la cantidad de droga encontrada en los 20 carrizos de plástico transparente en forma de polvos color blanco ascendían a 2.84 gramos; identificando nuevamente este estupefaciente de manera positiva como cocaína.

De igual manera se pone de relieve que el señor Fernando Alberto Cunningham a través de la diligencia de ampliación de la indagatoria que se le practicara acepta ser el propietario de la droga incautada que pretendía vender a diversas personas, agregando que el señor OMAR RONCEVIC no está involucrado en el ilícito. Este último, por su parte, al practicársele la indagatoria correspondiente declaró desconocer el dueño de la droga. Más adelante, a foja 43, el señor Cunningham asegura haber sido inclusive quien trató de deshacerse de la sustancia ilícita y no su cuñado el señor RONCEVIC CÓRDOBA.

Cabe destacar que el mismo 18 de diciembre de 1995 el señor Fiscal especializado en delitos con drogas decretó la detención preventiva del señor **OMAR ESTEBAN RONCEVIC CÓRDOBA** y Fernando Alberto Cunningham Concepción, por considerar que existían suficientes elementos incriminatorios en su contra. Es importante recordar que la dosis posológica máxima que puede admitirse en casos de adictos es de 1.5 gramos de cocaína, tal como lo ilustra a foja 31 del presente negocio el Médico Forense General del Instituto de Medicina legal. Así mismo, se destaca que del examen médico psiquiátrico practicado al sindicado por parte del Dr. Alejandro Pérez, el señor **RONCEVIC CÓRDOBA** no presenta evidencia de dependencia a droga alguna. (Cfr. foja 34).

Por otro lado se aprecia, a fojas 48-54 las ratificaciones del subteniente Magallón y el Cabo Jiménez, en el sentido de que identifican al señor **Ronsevic Córdoba** como el sujeto que intentó deshacerse de la droga en cuestión, y por lo tanto, el portador o poseedor de la sustancia psicotrópica.

Frente a los hechos expuestos, esta Superioridad es del concepto, una vez examinadas las piezas remitidas por el agente instructor, que en este caso en particular se verifican suficientes indicios incriminatorios que vinculan al señor **RONCEVIC CÓRDOBA** con la posesión de sustancia ilícita con la pretensión de participar en su suministro o venta, situación ésta que se adecua al segundo párrafo del tipo penal descrito en el artículo 260 del Código Penal para calificar el delito de Posesión de Drogas con fines de venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, cuya sanción penal oscila entre 5 y 10 años de prisión.

En estas circunstancias, el Pleno de la Corte es de la opinión de que corresponderá al juzgador de la causa, cuando cuente con mayores y mejores elementos de convicción, deslindar la responsabilidad del señor **RONCEVIC CÓRDOBA.**

Debemos concluir y subrayar en consecuencia, que del examen íntegro del caso subjúdice se advierte que la medida cuya ilegalidad se acusa fue ordenada atendiendo a las exigencias legales establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, ya que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman, al haberse comprobado: 1. **la** existencia del hecho punible: pues se produce el hallazgo de 20 carrizos contentivos de 2.84 gramos de COCAÍNA; y 2. **la vinculación del imputado con el hecho punible:** pues los informes policiales identifican positivamente a **OMAR ESTEBAN RONCEVIC CÓRDOBA** como la persona que tenía en su poder la sustancia ilícita.

Resulta palmario, además, que **la cantidad global de la sustancia ilícita (2.84 gramos) y su forma de presentación antes descrita** (20 carrizos plásticos transparentes), permite deslindar que el destino de la sustancia no es el consumo, (cuya dosis posológica de conformidad con lo expresado por el Médico Forense General del Instituto de Medicina Legal oscila entre los **0.2 y 0.4 gramos de cocaína)**, sino la pretensión de suministrarla en venta, cuya sanción penal

oscila entre 5 y 10 años de prisión, como mencionáramos en párrafos anteriores.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor OMAR ESTEBAN RONCEVIC CÓRDOBA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Anayansi Esther Díaz Córdoba presentó ante esta augusta corporación de Justicia, acción de Habeas Corpus, en representación del señor FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Seguidamente se libró el mandamiento de Habeas Corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial y dicho funcionario contestó mediante oficio N° A. L. 0252-96 de 27 de febrero de 1996, en los siguientes términos:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA. Tenemos conocimiento que el mismo fue puesto en libertad el día 23 de febrero de 1996 ..."

Del informe presentado por el Director de la Policía Técnica Judicial, se colige claramente que el señor FREDY ANÍBAL DÍAZ ha recuperado su libertad, por lo que debe procederse entonces con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de Habeas Corpus interpuesta en este caso a favor del ciudadano FREDY ANÍBAL DÍAZ CÓRDOBA, y dispone el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILBERTO ABDIEL CEDEÑO GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rigoberto A. Vergara interpuso ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de EDILBERTO ABDIEL CEDEÑO GARCÍA y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, para explicar que la detención de Cedeño García fue decretada mediante resolución fechada 27 de febrero del año en curso, con indicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar atacada cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Cedeño, la medida restrictiva de la libertad se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de allanamiento realizada el 7 de febrero del año que decurre en la residencia de Emma Del Cid Allard, ubicada en Calle A, Altos de Nuevo Hipódromo, Juan Díaz (fs. 3 y 4, sumarias), lugar donde se incautó **un paquete** color transparente, forrado con cinta adhesiva, contentivo de polvo blanco. Sometida la referida sustancia a la prueba de campo, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA** (f. 15 del cuaderno de antecedentes).

Respecto a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra el imputado, consta la ampliación de la declaración indagatoria rendida por Emma Del Cid, en la que hace señalamientos directos contra Cedeño, en el sentido de que éste recibió 23 kilos de droga de manos de Jaime Avalos, también sindicado por tráfico de drogas (fs. 119 y 120, sumarias). Aunado a lo anterior, en su declaración indagatoria visible a folios 129-133 del cuaderno de antecedentes, Cedeño manifiesta conocer que Ema Del Cid se dedica al tráfico de sustancias ilícitas.

Por otra parte, la resolución que decreta la detención preventiva, de 27 de febrero de 1996, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que corresponde resolver de conformidad.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Edilberto Abdiel Cedeño García y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL ENRIQUE IBARRA PARRA, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

ORIEL ENRIQUE IBARRA PARRA, mediante manuscrito remitido desde la cárcel de David, provincia de Chiriquí, presentó acción de habeas corpus a su favor y contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, aduciendo el cumplimiento en exceso de los dos tercios de la pena impuesta, sin que se le confiera el beneficio de libertad condicional.

Librado el mandamiento de habeas corpus, se recibió en la Secretaría General de Corte Suprema de Justicia, el informe remitido por la Directora encargada de la Dirección Nacional de Corrección en el que señala que no ordenó la detención de IBARRA PARRA, por lo tanto desconoce las razones o motivos de hecho o de derecho que se tuvo para ello. Anota, que el señor ORIEL ENRIQUE IBARRA PARRA se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, cumpliendo pena de prisión en la Cárcel Pública de David, impuesta mediante sentencia condenatoria expedida por el Juzgado Sexto de Circuito de Chiriquí, por un lapso de cuarenta meses, que comenzó el 21 de septiembre de 1993.

El accionante adjunta copia de dos documentos que informan que durante la fase de ejecución penal, aprobó un curso de ebanistería en el Instituto de Formación Profesional y copia de un artículo que comenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 20 de diciembre de 1995, que aborda el tema de la libertad condicional y orienta sobre la recta interpretación del artículo 85 del Código Penal.

La argumentación del accionante se centra en el hecho cierto de que ya cumplió dos tercios de la pena impuesta, que al aprobar un curso de superación en materia laboral, por 300 horas crédito, dio muestras de readaptación y que ha acatado el régimen disciplinario interno de la cárcel en la que cumple la pena privativa de libertad, todo lo cual satisface cada una de las exigencias que la Ley señala y que por lo tanto, se ha hecho acreedor a disfrutar de una libertad condicional, sin necesidad de extender su estadía en prisión hasta el 21 de enero de 1997, cuando se cumplan cuarenta meses en las condiciones infrahumanas en que se desenvuelven nuestros centros penitenciarios.

Si bien es cierto que el Pleno de la Corte se ha pronunciado sobre el mismo tema, indicando que por tratarse de una potestad otorgada al Órgano Ejecutivo, es indispensable que la institución correspondiente examine cada caso en particular y determine si la persona que cumplió los dos tercios de la pena de prisión impuesta y reúne los otros requisitos descritos en la Ley, es acreedor a dicho beneficio; se ha sostenido también que no se trata de un derecho al que se accede ipso facto, porque es menester que le anteceda una resolución motivada de la autoridad, en la que se describan las condiciones a que debe someterse el beneficiado. No obstante, dadas las condiciones actuales del sistema penitenciario panameño y la necesidad de crear incentivos al buen comportamiento, a los propósitos claros de readaptación y de arrepentimiento del interno, urge la elaboración de la ley penitenciaria y la aprobación de reglamentos internos de las cárceles que permitan agilizar el otorgamiento de los derechos, beneficios y garantías que la Constitución y la Ley conceden al reo en el Derecho Penitenciario moderno. Tal reglamentación es necesaria frente al progresivo crecimiento demográfico de los Centros Penitenciarios donde periódicamente pueden cumplirse parte de las penas que ameritan el otorgamiento de una libertad condicional.

La privación de libertad que sufre en estos momentos el accionante está apoyada en una sentencia condenatoria, expedida en un proceso penal debidamente ejecutoriado, por lo que esta vía procesal no es la adecuada para impeler al

Ejecutivo a que conceda un beneficio que es de su potestad legal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la privación de libertad que, en calidad de pena prisión por sentencia condenatoria, cumple el señor ORIEL ENRIQUE IBARRA PARRA en la cárcel de David. Cúrsese la nota correspondiente para poner a órdenes del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia al recurrente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor RENATO PEREIRA ha interpuesto ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, acción de **Habeas Corpus** a favor de **FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ** contra el **Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas**.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado contestó dentro del término legal, mediante Oficio N° 1486 de 7 de febrero de 1996 (visible de fojas 57 a 60) que en síntesis, con respecto al proponente de esta acción, expresa lo siguiente:

PRIMERO: El señor Francisco Rodríguez fue detenido por orden escrita dictada por esa Fiscalía de fecha 20 de julio de 1995.

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho de la detención se originan por la información telefónica anónima que recibe el Centro de Inteligencia de la Policía Técnica Judicial sobre la existencia de un taller ubicado en calle P) de San Miguelito dedicado a ocultar sustancias ilícitas en autos y otros artículos. El informante indicó que dicho local es frecuentado por sujetos colombianos en un vehículo blanco que se entrevistan con su propietario.

El día 19 de julio de 1995 el informante denuncia la presencia de dos sujetos "quienes aparentemente" custodian el lugar, por lo cual se manda un equipo de vigilancia la local. Así, luego de 45 minutos de estar en el lugar, observan que llega el vehículo blanco, del cual se bajan tres personas que se entrevistan con los dos que se encontraban ahí y luego se retiran. Se procede, entonces, a practicar el allanamiento del inmueble, en el que se encuentra un vehículo Chevrolet Blazer Silverado cuyos interiores (alterados) contenían 22 paquetes forrados con cinta adhesiva con polvo blanco; además, se capturan a los sujetos que **"aún se mantenían en el lugar"** que respondían a los nombres de **FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ** y FRANCISCO LIGUAS BATISTA.

Uno de los sujetos capturados dijo conocer al dueño del taller y lo identificó como ROBERTO PIMENTEL CÓRDOBA e indicó dónde residía, por lo que también se allanó su residencia en la que se encontró evidencia.

Posteriormente, el Fiscal relata que en base a la matricula del vehículo

que se vio acercarse al taller, se pudo allanar el apartamento donde residían tres sujetos de nacionalidad colombiana, quienes fueron detenidos (HIPÓLITO MARTÍNEZ, ELIGIO MARTÍNEZ y JULIO JALLER). A raíz y en virtud de éstas detenciones fueron recabadas nuevas evidencias.

TERCERO: Por lo antes referido, FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ fue llevado al despacho del Fiscal y se le tomó declaración indagatoria, en la cual negó toda vinculación con la sustancia y alegó que no estaba custodiando el taller sino que se encontraba merodeando a fin de conseguir un trabajo.

CUARTO: Sobre la sustancia incautada el Laboratorio Especializado en Drogas de la P. T. J. determinó que se trataba de COCAÍNA con un peso de 22.630.00 Gramos.

QUINTO: Debido a solicitud de la defensa del detenido RODRÍGUEZ comparecieron a declarar los hermanos Gregorio y Doris Valderrama, quienes afirman haberse "encontrado en el mismo lugar" presenciando los hechos y la detención, la cual se llevó a cabo a cierta distancia del taller. Sin embargo en su declaración a fojas 437 del sumario la señora VALDERRAMA sostiene que el día de la detención no vio a su hermano Gregorio.

Como fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención el agente del Ministerio Público invoca los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Con el informe, el funcionario ha enviado copias autenticadas de las sumarias instruidas (508 fojas útiles).

El apoderado judicial proponente de la presente acción de habeas corpus, en escrito que consta de foja 32 a 36 de este expediente, solicita al Pleno que resuelva que no es fundada la detención de FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA por las siguientes razones:

1- FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA no tiene antecedentes penales ni policivos.

2- La misma resolución de la Fiscalía fechada 20 de julio de 1995, al referirse a los sujetos capturados por estar vigilando el taller, indica que FRANCISCO LIGUAS BATISTA se mantenía a la entrada del taller y el otro, FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ, esta ubicado en una de la veredas del frente.

3- La única justificación que aduce la resolución que ordena la detención de FRANCISCO RODRÍGUEZ es que se sospecha que era uno de los vigilantes del depósito de la droga. Dicha sospecha no ha sido corroborada, ni existe en el expediente prueba sumarial, indicio grave o declaración que la confirme.

4- Constan los testimonios de GREGORIO VALDERRAMA, DORIS VALDERRAMA y ERNESTO LARA, vecinos del lugar que fueron testigos presenciales del arresto y que aseguran que Francisco Rodríguez se encontraba a unos 200 metros del taller.

5- El favorecido con esta acción en su declaración indagatoria proclama su inocencia y afirma ser un hombre humilde pero trabajador y ajeno a actividades delictivas.

6- Finalmente se alega que ninguno de los imputados en este caso vincula a FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA con la ejecución del delito que se está investigando; los colombianos acusados no le conocen; no ha sido demostrado en el expediente que fuera empleado del taller donde encontraron la droga, ni que tiene amistad ni relación particular con el dueño del mismo; el otro sospechoso de actuar como "**vigilante**" del taller, **FRANCISCO LIGUAS BATISTA**, afirma en su declaración indagatoria que del joven **RODRÍGUEZ GARCÍA** solo sabe que es electricista.

Por lo expuesto, el recurrente acusa al funcionario demandado de violar el artículo 2147-A- del Código Judicial por haber decretado la detención preventiva de Francisco Rodríguez sin que existan "**graves indicios de responsabilidad en su contra**", según lo exige la norma.

Luego de las consideraciones que anteceden la Corte pasa a realizar el examen de este caso a la luz de lo que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En la primera de estas normas se establece, a cargo del funcionario de instrucción, el deber de ordenar la detención preventiva del sindicado en los casos en que "el delito tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito".

Así, tanto el libelo presentado como el informe de conducta indican que la acusación (de oficio) que se hace contra FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ señala su vinculación con el delito **"CONTRA LA SALUD PUBLICA"**, el que, en el tipo penal que describe el Fiscal de Drogas como tráfico internacional de drogas y contrabando de armas, tiene aparejada pena de prisión superior a los dos años como mínimo. Bajo esta perspectiva se desprende el cumplimiento de la exigencia del artículo 2148 antes citado.

El artículo 2159 del Código Judicial, por su parte, requiere que la detención preventiva sea decretada por medio de diligencia, en la que se exprese:

1- El hecho imputado;
2- Los elementos probatorios para la comprobación del hecho punible;
3- Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

De folios 216 a 224 de las sumarias (40-48 expediente principal) corre la diligencia suscrita por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, que exige el artículo 2159 ibidem. En ella se da cuenta de la existencia del hecho punible y de los elementos para su comprobación de conformidad con los incisos 1º y 2º del citado precepto. Sin embargo, a juicio de la Corte, dicha diligencia no satisface el tercer numeral del aludido artículo en lo que respecta a FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ, pues no fija con precisión la existencia de suficientes elementos probatorios en su contra que figuren en la investigación, en el sentido de vincularlo de modo indubitable con el hecho imputado.

Sobre el particular se ha podido constatar del examen del expediente antecedente lo siguiente:

En primer informe de novedad de 14 de julio de 1995 (fs. 1) suscrito por detectives de la P. T. J., en que relatan la información recibida sobre actividades relacionadas con drogas que se llevaban a cabo en un taller de San Miguelito, sólo hace referencia al propietario del taller "señor **PIMENTEL**", a los vehículos que se encuentran dentro del mismo con doble fondo para transportar drogas y a los colombianos que siempre llegan y se entrevistan con el dueño del taller, describiendo el automóvil que utilizan y su número de matrícula.

Posteriormente, dichos agentes emiten un informe de vigilancia (fs. 3-4), el 19 de julio de 1995, manifestando que al llegar al taller vieron a dos sujetos en la parte de afuera (uno en bermudas y sweter de rayas y el otro en jeans y sin camisa). Añaden que, luego de 45 minutos, llegó un auto del que bajaron tres sujetos conversaron con los primeros y se fueron. Según se relata a fojas 6, en el Acta de Diligencia de Allanamiento, se alude a que durante una hora fueron observados dos sujetos en la acera de enfrente al taller, se realiza la diligencia de allanamiento deteniéndose a **FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ** ("quien dice no conocer nada de lo que sucede dentro del taller") y a Francisco Liguas Batista quien se encontraba cuidando un zinc en la parte de afuera de ese local.

La Corte ha podido observar en estos informes que no hay un señalamiento o identificación directa sobre FRANCISCO RODRÍGUEZ en cuanto que fuera una de las personas que custodiaban el taller. Ni siquiera la fuente anónima que denunció el ilícito que se perpetraba en el mismo mencionó a personas que vigilaran el lugar, lo que no quiere decir que no existieran, pero es importante destacar que no se precisan elementos de identificación que sirvan para cerciorar que el prenombrado RODRÍGUEZ era uno de los individuos mencionados en un principio y que hablaron con los tres sospechosos (presuntamente colombianos) que llegaron al

taller en el automóvil.

Así las cosas, en base a lo anterior se ordena la detención preventiva del favorecido con esta acción, junto con un número plural de personas, mediante la resolución de 20 de julio de 1995 (fs. 216) y, en la misma se dispone tomarles declaración indagatoria a todos ellos.

Entre fojas 230 y 231 se encuentra la declaración indagatoria de FRANCISCO RODRÍGUEZ, en la que expresa que fue al Supermercado HAU donde se estaba construyendo un garaje, a fin de realizar trabajos eléctricos pues el "chino" casi siempre que realizaba esos trabajos lo llamaba; como aún no se había montado una viga decidió ir a su casa a desayunar. Indica que después del supermercado hay una casa donde se encontraba un muchacho tomando un trago, al que le dijo que si el *chino* preguntaba por el gordito que se encontraba afuera le dijera que él había ido a desayunar. Después de haber estado en su casa, al regresar subiendo por la vereda frente de la casa verde, lo detuvieron los detectives. En tal sentido sostiene que no lo detuvieron ni dentro ni fuera del referido taller sino como a unos 200 metros.

Por su parte, el otro detenido FRANCISCO LIGUAS BATISTA, a quien también se le acusa de custodio del taller, al rendir indagatoria (fs. 231 a 236) indica que se encontraba en el lugar cuidando un zinc (como a la 9:15), luego se fue a la casa de al lado a tomarse unos tragos y "al poco rato llegó el señor FRANCISCO y me estaba comentando que él iba a hacer un camarón donde un chino, **al poco rato se fue el señor FRANCISCO RODRÍGUEZ** ...", "posteriormente llegó un carro blanco se estacionó al frente y se bajaron tres (3) personas ... y me saludaron diciéndome buenos días hay alguien en el taller y yo le dije yo no se, yo solamente estoy cuidando el zinc y entonces ellos se asomaron por una rendija y se fueron" (énfasis subrayado de la Corte). Acerca de la detención manifiesta que, cuando se dirigió a la parte de enfrente del taller, los agentes lo agarraron y esposaron, preguntándole dónde estaba su compañero y dónde vivía, pero al darse vuelta vieron a FRANCISCO y también lo arrestaron.

En la ampliación de declaración indagatoria rendida por el ciudadano colombiano ELIGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, según se aprecia a fojas 319, al preguntársele quiénes se encontraban en el taller cuando llegaron y qué conversaron, el indagado respondió "nosotros le preguntamos **a una persona que estaba allí**, pero afuera y el cual recuerdo que **tenía aliento alcohólico** ya que él se acercó al vehículo al nosotros preguntarle sobre el señor JULIO ...". (Énfasis subrayado de la Corte).

Igualmente, a fojas 326 (antecedentes), el otro colombiano HIPÓLITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, sobre la pregunta que le hiciera el Fiscal de lo que hizo el miércoles 19 de julio de 1995 en horas de la mañana, respondió que llegaron a la dirección del **taller cerca de un "Mini-super** que había en la esquina", "al llegar al taller **había un sujeto** y le preguntamos por el señor o dueño del taller, entonces el señor que estaba allí en la parte de afuera **que estaba tomando licor**, ... nos dijo ...". (Énfasis subrayado es de la Corte).

Las citadas declaraciones y otras que constan en las sumarias, en igual sentido, desvirtúan la sospecha que pudiera recaer sobre el proponente de este habeas corpus respecto a su condición de guardián del taller allanado por el simple hecho de estar transitando por los alrededores durante la mañana en que se efectuó el allanamiento.

Por otro lado, el Pleno de la Corte no deja de considerar las declaraciones del Detective RICARDO GUTIÉRREZ (fs. 452) y del Inspector RAMÓN FERNÁNDEZ (fs. 472) como elementos que podrían implicar al señor FRANCISCO A. RODRÍGUEZ con el hecho a él imputado. Sin embargo, del informe de vigilancia que obra a fs. 3 y del Acta de Diligencia de Allanamiento de fs. 6, claramente se desprende que esos dos agentes no eran los que se encontraban vigilando los alrededores del taller antes del allanamiento, sino que llegaron posteriormente para realizarlo. Quienes describen los acontecimientos (previos) sobre el automóvil blanco que llegó y del que se bajaron tres sujetos que se dirigieron al taller, etc., fueron los detectives FEDERICO HAZLEWOOD y DOMINGO SÁNCHEZ, que son los que firman el

aludido informe de vigilancia.

Por ello, surgen dudas sobre la precisión de lo sostenido por el personal que llegó al lugar posteriormente para participar en el allanamiento, pues lógicamente no pueden asegurar sucesos que no presenciaron.

Adicionalmente, cabe destacar que el documento contentivo de la **EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA FORENSE** del señor FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA expresa que: ha sido criado en una familia nuclear, vive con sus padres, se graduó en el ITAE de mecánica automotríz diesel, le daba mantenimiento de electricidad a Telemetro Panamá, Discovery Center y otros negocios, no ha consumido drogas ilegales y **no tiene antecedentes delictivos**. (Fs. 504).

La Corte, por consiguiente en este caso, luego de examinar con la debida objetividad los elementos probatorios allegados hasta el momento para la comprobación de alguna forma de participación de FRANCISCO RODRÍGUEZ en el hecho punible, debe concluir señalando que no existen ni siquiera indicios graves que justifiquen legal ni constitucionalmente la privación preventiva de la libertad ambulatoria decretada contra el mismo.

Para concluir, hay que reiterar que aunque la resolución que ordena la detención preventiva pudiera cumplir con el tercer presupuesto exigido en el artículo 2159 respecto al resto de los imputados, no puede aplicarse o extenderse dicha consideración en lo que atañe a RODRÍGUEZ GARCÍA, sólo porque el tipo de delito que se investiga está relacionado con drogas, manteniéndosele detenido sin que existan pruebas en su contra.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA y ORDENA su inmediata libertad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (Con Salvamento de Voto)
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (Con Salvamento de Voto)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ARTURO HOYOS Y MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

Con todo respeto, manifestamos que disentimos de la sentencia mediante la cual se declara ilegal la detención de Francisco Antonio Rodríguez García.

El sumario en el cual se ordenó la detención preventiva del señor Francisco Antonio Rodríguez García, fue iniciado de oficio por tratarse de un delito contra la salud pública relacionado con drogas. Visible a foja 358 del expediente contentivo de las sumarias, obra el dictamen pericial realizado por la Sección de Sustancias Controladas del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, en el que se señala que después de realizar los análisis de la sustancia en polvo de color blanco incautada en el lugar de los hechos arriba descritos, la misma dio como resultado positivo para cocaína en la cantidad de 22,630.0 gramos.

Por otro lado, consideramos que el informe de diligencia de allanamiento aunado a la dictamen pericial rendido por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, así como también, las declaraciones juradas rendidas por los señores Ricardo Gutiérrez, Detective IV de la Policía Técnica Judicial, visible a foja 452 del expediente contentivo de las sumarias y Ramón Fernández Rodríguez, Inspector I de la Policía Técnica Judicial, visible a foja 472 de las sumarias, constituyen hechos probatorios suficientes para vincular al señor Francisco Antonio Rodríguez García con los hechos a él

imputados. Además, según la Ley 23 de 1986, el delito de tráfico de drogas tiene fijada pena de prisión superior a dos años, razón por la cual, en la detención del señor Rodríguez García no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

Por todo lo antes expuesto, respetuosamente, SALVAMOS EL VOTO.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AZAEL PALMA Y ORLANDO RÍOS CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Eduardo Badillo Paz, abogado de la localidad, a nombre de los señores **HÉCTOR AZAEL PALMA GONZÁLEZ y ORLANDO HUMBERTO RÍOS**, presentó ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, escrito contentivo de una acción de habeas corpus contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, quien expidió la orden de detención que, desde el 12 de enero del año en curso, mantiene privados de libertad a sus representados.

Librado el mandamiento respectivo, el licenciado Rosendo Miranda, Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, a través del Oficio N° 2329 de 7 de marzo emitió el informe correspondiente, mediante el cual acepta que ordenó la medida cautelar personal contra los señores PALMA y RÍOS, a través de la resolución motivada, calendada el 14 de enero de 1996 y que aparece a folios 24 y 25 del sumario. Al explicar los fundamentos de hecho, relata que en el Valle de San Isidro dos agentes de la Policía durante su recorrido regular en el sector, apreciaron cuando dos sujetos de manera sospechosa, conversaban detrás de un autobús dañado y al proceder a la requisa usual en estos casos, encontraron en el bolsillo derecho del pantalón de AZAEL ELÍAS PALMA GONZÁLEZ una bolsita plástica transparente que contenía la cantidad de 14 paquetitos transparentes con una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presumía era cocaína. En cuanto a su compañero, ORLANDO HUMBERTO RÍOS, se le encontró dentro de la media del pie derecho, dos bolsitas transparentes que contenían sustancias similares a las que llevaba consigo PALMA GONZÁLEZ.

Con relación a la fundamentación legal de la medida cautelar adoptada, el licenciado Miranda señala que el laboratorio técnico especializado de la Policía Técnica Judicial, al analizar la sustancia incautada, mediante certificación que aparece a folios 48 del expediente, indica que se trata de la sustancia conocida como cocaína en la cantidad de 5.27 gramos. Informa además, que en el caso de HUMBERTO RÍOS, quien niega la tenencia y pertenencia de la droga al igual que su adicción a sustancias ilícitas, el médico psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, indica a fojas 36-37 de los antecedentes, que se trata de un cuadro evidente de consumo de drogas.

Al revisar la copia de los antecedentes remitidos, aparecen elementos de juicio suficientes que sustentan la medida adoptada, por tratarse de un caso de flagrancia, en virtud de que tanto a PALMA GONZÁLEZ como a RÍOS se le encontró en su poder una cantidad determinada de sobrecitos plásticos conteniendo una de las variedades de las sustancias ilícitas conocidas como cocaína. Sin embargo, al cuantificar la posesión de la droga en cada una de las personas, tanto del

informe procedente de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con Drogas como de la copia de los antecedente que recoge la fase instructoria del presente caso, se advierte con claridad que mientras que al señor ELÍAS PALMA GONZÁLEZ le encontraron una bolsa con 14 sobrecitos en el bolsillo derecho de su pantalón, a ORLANDO HUMBERTO RÍOS sólo le encontraron en la media que usaba en el pie derecho una bolsa con dos sobrecitos similares a los que tenía PALMA GONZÁLEZ. Tal como se dijo antes, ambos sindicados fueron debidamente examinados por el médico psiquiatra y en el caso de HUMBERTO RÍOS, se especificó que se trataba de un cuadro de abuso de clorhidrato de cocaína, iniciado desde los doce años de edad.

Ante la situación descrita, es necesario distinguir la conducta de posesión de droga imputada a ELÍAS PALMA GONZÁLEZ de la asumida por HUMBERTO RÍOS, quien no sólo tenía una cantidad inferior al primero, sino que se trata de un adicto de 19 años de edad, con un cuadro de abuso de drogas por varios años. La situación procesal de HUMBERTO RÍOS al tenor de lo que establece el artículo 260 en relación con el 263F del Código Penal, permite sustituir la medida cautelar por la de un tratamiento ambulatorio en un centro de salud del Estado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención provisional contra HÉCTOR AZAEL ELÍAS PALMA GONZÁLEZ y ORDENA la libertad de ORLANDO HUMBERTO RÍOS, a quien se le sustituye la medida cautelar de privación de libertad por una medida de seguridad curativa, de atención ambulatoria, en un Centro de Salud del Estado.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS FERNANDO PIMIENTA BARRÍA, CONTRA EL FISCAL QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán, actuando en representación de **ALEXIS FERNANDO PIMIENTA**, ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial el 28 de febrero de 1996, mediante la cual se declara legal la detención preventiva de la cual es objeto el señor antes mencionado.

Encontrándose en estado de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 28 de febrero de 1996, el licenciado Carlos Herrera Morán presentó, el día 14 de marzo de 1996, escrito mediante el cual desiste del recurso de apelación interpuesto. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento del presente recurso de apelación.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 28 de febrero de 1996 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GERARDO RODRÍGUEZ STERLING CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Arnulfo Antonio Peñalba Rodríguez ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **GERARDO RODRÍGUEZ STERLING**, quien se encuentra detenido por la supuesta comisión de delito contra la salud pública, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El apoderado judicial del beneficiario del presente recurso de habeas corpus alega que la detención preventiva de su representado es ilegal, ya que no existe ninguna prueba que lo vincule al delito del cual se le acusa.

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Mediante Oficio N° 2019 de 5 de marzo de 1996, consultable de foja 6 a 9, el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas expresó los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a ordenar la detención preventiva de GERARDO RODRÍGUEZ STERLING, en los siguientes términos:

> "A. Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLIN, la misma fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, calendada 22 de enero de 1996.
>
> B. Los fundamentos de hecho que tuvimos para ordenar la detención preventiva del señor LEONARDO RODRÍGUEZ STERLIN (sic), se basan en la detención de las señoras LORENA ISABEL ALVARADO y ELENA PÉREZ GRUESO, a quienes se les incautó cierta cantidad de sustancia ilícita, manifestando éstas que la misma era para su consumo. Las prenombradas en forma inmediata y voluntaria manifestaron su interés en cooperar con los estamentos de investigación policial para llevar a cabo una compra controlada y poder descubrir y arrestar a los presuntos distribuidores o vendedores de sustancias ilícitas.
>
> Con esa finalidad es organizada una operación a realizar en la noche del día 16 de enero en la residencia de un sujeto conocido como TITO STERLING y mediante micrófonos ocultos en el cuerpo de la señora LORENA ALVARADO, quien se acerca al sospechoso para efectuarle una compra, los agentes operativos acompañados de los funcionarios de este Despacho, pueden escuchar cuando el sospechoso se negaba a venderle sustancias, aduciendo que ella había sido detenida después de él haberle vendido y que la habían enviado a la Fiscalía de Drogas, por lo que la joven decide retirarse debido a la negativa de venderle del sujeto sospechoso.
>
> En vista de estos acontecimientos, como es el haber escuchado en propia voz del sospechoso, que el día anterior le había vendido a la

joven y que él se había enterado de que se la habían llevado a la Fiscalía, adicionándole múltiples informes de los estamentos investigativos del área, en los que ponen en conocimiento de las autoridades, que el sujeto conocido como TITO STERLING se dedica al tráfico de estupefacientes, y es señalado en varios expedientes como vendedor de sustancias ilícitas, es por lo que se procede a realizarse el allanamiento a la residencia del mismo, ubicada en San Francisco, Avenida 3ra. L Sur, casa Nº 29, en donde al proceder al registro se pudo constatar que en el área del baño, había una gran cantidad de agua regada y un cubo de 5 galones, por lo que se puede presumir que el sospechoso logró botar y desaparecer evidencias que lo comprometían con el tráfico de sustancias ilícitas. De igual forma se pudo encontrar en la residencia dinero en billetes de diferentes denominaciones y en monedas fraccionadas, que motivan la presunción de que sea producto del ilícito investigado.

Al momento de ser sometido a los rigores de la indagatoria el sujeto GERARDO RODRÍGUEZ STERLING (A) TITO STERLING, acepta ser consumidor, sin embargo niega ser vendedor de sustancias ilícitas, manifestando su deseo de cooperar para que se lograra la captura de su abastecedor, por lo que le pidió cierta cantidad de droga a su distribuidor, arreglando la forma de entrega." ...

El informe transcrito y las constancias procesales remitidas junto con el mismo, ponen de manifiesto que la detención preventiva que sufre el señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLING no tiene vicios de ilegalidad.

En primer lugar, de fojas 60 a 66 del cuaderno principal se encuentra providencia proferida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de 22 de enero de 1996, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva del recurrente.

En segundo lugar, consta el señalamiento directo de la señora LORENA ISABEL ALVARADO, quien al momento de ser detenida por la supuesta comisión de delito contra la salud pública, indica que el señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLING es la persona que le suministró la droga que tenía en su poder. Igualmente, de foja 31 a 33 de ese mismo cuaderno, se encuentra declaración jurada rendida por el señor HÉCTOR VALDÉS MAUAD, en la que señala que es consumidor de sustancias ilícitas y que el imputado es la persona que se la vende desde hace un año, aproximadamente.

En tercer lugar, según se desprende del acta levantada en la diligencia de allanamiento practicada en la residencia del recurrente, consultable de foja 11 a 12 del cuaderno principal, fue encontrado en poder del recurrente gran cantidad de bolsitas de plástico transparente, 2 cajas adicionales de dichas bolsas, dinero fraccionado y otros objetos que se asocian con la venta y distribución de estupefacientes.

De todo lo anteriormente señalado se concluye que existen suficientes elementos probatorios que vinculan al señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLING con el ilícito investigado; razón por la cual la detención preventiva que sufre es legal, ya que cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor GERARDO RODRÍGUEZ STERLING y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANDY LUZER PARDO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **GILBERTO DACOSTA**, a favor del señor **SANDY LUZER PARDO**, quien fue detenido por el Fiscal Auxiliar de la República, por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de la joven **ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA**.

El actor motiva su pretensión alegando que la detención del señor **SANDY LUZER PARDO** es ilegal, porque fue detenido en la provincia de Los Santos sin orden emanada de autoridad competente, fue trasladado a Panamá sin su consentimiento, se le mantiene detenido desde el 16 de febrero de 1996 sin que exista un señalamiento directo por parte de familiares o testigos del hecho, sin prueba que lo incrimine y sin haber sido sorprendido en la ejecución del hecho punible. (Fs. 1-3).

Ingresado el presente negocio constitucional a la Corte, previo reparto de rigor, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien informó que el detenido se encuentra a órdenes del Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, por lo que se libró nuevo mandamiento de habeas corpus contra esta autoridad (fs. 6-8).

Mediante Oficio N° 95 de 1 de marzo de 1996, consultable de fojas 16 a 22, el Fiscal Primero Superior Interino del Cuarto Distrito Judicial informó lo siguiente:

> "a) No es cierto que este Despacho ordenó la detención del señor **SANDY PATRICK LUZER PARDO**; toda vez, que la misma fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá, el día 23 de febrero del presente año, mediante providencia de esa misma fecha, consultable a fojas 1,035 a 1041 del proceso.
>
> b) Tal como se aprecia en los infolios 1,035-1,041; el Fiscal Auxiliar de la República, fundamentó la detención preventiva del precitado **LUZER PARDO** en los siguientes hechos:
>
> Primeramente la investigación con la Diligencia de Inspección Ocular, Reconocimiento, Levantamiento y Traslado de un cadáver, de sexo femenino encontrado en el sector de El Ejido, corregimiento de Santa Ana del Distrito de Los Santos; cuerpo este que presentaba heridas múltiples, las cuales posteriormente fueron descritas en el Protocolo de Necropsia ostensible a fs. 105-120, ilustradas además mediante las respectivas fotografías a fs. 121-136.
>
> Aunado a ésto, se cuenta con elementos subjetivos contra el precitado **LUZER PARDO**, como lo son los testimonios recabados a JOSÉ ESPINO BARBA (fs. 685-ss. 759-ss); AMARILIS ACEVEDO GONZÁLEZ (fs. 779-ss); MASIEL GUTIÉRREZ SAMANIEGO (fs. 805-ss); quienes ubican al imputado **SANDY PATRICK LUZER PARDO**, en el área circundante a la discoteca de donde salió la occisa **BATISTA BARBA**, en dirección a su casa y que fuera vista seguida por un varón sobre una bicicleta que vestía coincidentalmente con la ropa que esa noche usaba **SANDY PATRICK LUZER PARDO**.

Por otro lado, la propia CARMEN MORENO, en declaración jurada manifestó que la noche del 7 de diciembre partió del baile a eso de las 11:30 a 11:40 de la noche en compañía de Sandy, describiendo la ropa que éste vestía como zapatillas, jeans y suéter color blanco.

Otro de los testimonios que sirvió como base para ordenar esta medida, lo fue el de NIEVES PÉREZ BERNAL, quien colocó el tiquete de baile a **SANDY PATRICK LUZER PARDO**, en la discoteca, informando que trató de colocárselo en el cuello del suéter blanco con rayas rojas, pero éste se negó. Por su parte, Rita Cortez señaló en declaración jurada, que "CHOLIN" Y "SANDY" se retiraron del baile en mención en bicicleta como a las once a "once y algo" de esa noche; hora coincidente con la que se retiró la infortunada **ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA.**

Se contó además, con el examen médico legal practicado al cuerpo de **SANDY PATRICK LUZER PARDOK**, por el Médico del Instituto de Medicina Legal, Dr. Klever De Lora, quien indica que el examinado presentaba "excoriaciones lineales en lado izquierdo del cuello compatibles con "estigmas ungueales oblícuas"; y de acuerdo al galeno, aparentan tener menos de 8 días de evolución; además de las excoriaciones en la rodilla derecha de igual tiempo; ilustrado este peritaje con las fotografías que constan a fs. 736 a 739. Obsérvese que el tiempo de evolución dado a los arañazos y excoriaciones del examinado LUZER PARDO, se encuentra dentro del período en que se ubica la fecha del deceso de ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA.

Tal como lo describe el Perito Forense, las lesiones ocasionadas en el cuerpo de la víctima, fueron inferidas por arma blanca y en el expediente consta la declaración de GUILLERMO ALONSO DÍAZ, quien manifestó que SANDY tiene una cuchilla, pues se la vio en la bodega de Los Ángeles; pero después del homicidio éste le pidió que si las autoridades lo cuestionaban al respecto, que negara sobre lo de la cuchilla; empero, posteriormente en indagatoria que rindiera este ante la Fiscalía Auxiliar de la República, Sandy Patrick Luzer Pardo, confesó que tenía una cuchilla, pero que la botó en el Río Santa María (fs. 1,025 a 1,033)

En ampliación de declaración recibida a Carmen Gisela Moreno, señala que escuchó una conversación entre su concubino SANDY y su hermano FRANK, en donde éste último le dijo a su hermano lo siguiente "... quieres que haga ver como que fui yo ...". Todos estos indicios que militan en su contra.

Consideramos que para mayor ilustración de esta Honorable Corte, debemos anotar que a fs. 894-895 aparece una nota procedente de la Oficina Central Nacional de Interpol-Panamá y otra con su respectiva traducción, en donde se plasma el Historial de SANDY PATRICK LUZER PARDO, de acuerdo a lo enviado por IP-Washington; y cabe señalar que en la indagatoria rendida ante el Fiscal Auxiliar, éste acepta ser el autor del Homicidio a que hace referencia la nota antes citada.

También se acopiaron a la investigación los perfiles psicológicos (fs. 745-746) y psiquiátrico (fs. 1,101-1,102) del posible autor de este homicidio.

El imputado SANDY PATRICK LUZER PARDO, fue evaluado por la Perito Psiquiatra del Instituto de Medicina Legal, quien a fojas 1,082 a 1,094 hace una amplia explicación sobre la conducta del examinado; igualmente fue atendido por los Doctores JOSÉ KALED, Psiquiatra Forense con funciones en la P. T. J., y el Dr. CARLOS M. MALGRAT, quienes se entrevistaron con el imputado y dieron su diagnóstico a fs. 1,001-1,002 y 1,003-1,004-1,005 respectivamente.
...
Contamos en esta investigación con pruebas documentales del presunto

> imputado, Sr. SANDY PATRICK LUZER PARDO, por los delitos de: Violación Carnal en Grado de Tentativa y Otros (ver fs. 1183-ss) De esta manera colegimos la peligrosidad y la proclividad al delito.
>
> c) Actualmente la investigación en donde se sindica a SANDY PATRICK LUZER PARDO, se encuentra en este Despacho, mediante Oficio No. 3136 de la Fiscalía Auxiliar de la República, en donde se nos adjudica la encuesta penal por razón de jurisdicción y competencia.
>
> Después de evaluadas todas las piezas procesales, concluimos en que debe mantenerse la detención del prenombrado SANDY PATRICK LUZER PARDO por las razones antes expuestas ...
>
> Ahora bien, tenemos los indicios de presencia física en el lugar de los hechos; de capacidad; de oportunidad; y el interés de faltar a la verdad, esto se desprende de las contradicciones que emergen de los testimonios anteriormente anotados y la reiteración por parte de SANDY LUZER PARDO de negar circunstancias y hechos probados en el transcurso de la investigación criminal; todos estos elementos confirmados con la conducta ilícita y antisocial, acreditada en este cuaderno penal; amen de los peritajes médicos con que contamos hasta el momento, en donde se indica la personalidad anómala del presunto imputado y la recomendación de que se le sigan practicando dichas evaluaciones médicas. (ver fojas 457)" (fs. 17-22).

Observa la Corte que la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial sustentó las razones por las cuales considera, debe mantenerse detenido a **SANDY LUZER PARDO (fs. 21) y** además remitió copia del expediente, dividido en dos tomos, que contiene las sumarias seguidas al recurrente por el presente delito.

Al revisar el expediente de la investigación se ha podido constatar que de fojas 1,035 a 1,041 consta providencia fechada 23 de febrero de 1996, mediante la cual la Fiscalía Auxiliar de la República ordenó la detención preventiva de **SANDY PATRICK LUZER PARDO**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial y ordenó ponerlo a órdenes del Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, por corresponderle a esta autoridad el conocimiento de dicho negocio penal.

En la diligencia contentiva de la orden de detención se hace mención expresa del hecho imputado, consistente en el homicidio de la joven ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA, y, además, se expresa que existen fuertes indicios que vinculan al recurrente con el mismo. Se hace constar también la existencia de declaraciones que vinculan a **SANDY LUZER** con el delito investigado (fs. 685-ss., 759-ss, 779-ss., 805-ss., 1,025-1,033, 150-ss., 161-163, 382 y 1,030, 65-ss., 691-695); informes confeccionados por miembros de la Policía Técnica Judicial que guardan relación con el informe médico de observación en el cuerpo del sospechoso SANDY LUZER calendado 15 de enero de 1996, y el practicado el 13 de febrero del mismo año, en el que se observan arañazos en la anatomía de LUZER (fs. 799); fotografías de SANDY LUZER que destacan marcas borrosas en los nudillos de la mano izquierda (fs. 736-739); además de las contradicciones en la declaración indagatoria de **SANDY LUZER** (fs. 382 y 1,030).

De todo lo expuesto se evidencia que la detención preventiva del señor **SANDY LUZER PARDO**, dictada mediante providencia fechada 23 de febrero de 1996 (fs. 1,035 a 1,041), cumple con lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y fue dictada por autoridad competente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor SANDY PATRICK LUZER PARDO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes del Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE CARLOS CONSTANTINO CISNEROS CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Acción de Habeas Corpus interpuesta por el licenciado **Humberto Mosquera Bethancourt** actuando en nombre del señor **CARLOS CONSTANTINO CISNEROS** con la finalidad de que esta Superioridad determine la ilegalidad de la detención del señor CISNEROS y en consecuencia, decrete su inmediata libertad.

No obstante, se observa que el petente no sustenta el recurso de apelación promovido contra la Sentencia de 14 de febrero de 1996. Ahora bien, ello no le impide a esta Superioridad entrar a conocer y decidir la alzada propuesta, en atención a que dicha prohibición solamente opera para la apelación de autos o providencia cuyo recurso no haya sido sustentado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1121 del Código Judicial.

Ante esta circunstancias procede la revisión integral del expediente contentivo de la Acción de Habeas Corpus y por consiguiente de la detención del señor CISNEROS.

En este sentido, el licenciado Mosquera esgrime básicamente los argumentos que se ponen de relieve a continuación, como los puntos medulares en los cuales fundamenta su posición:

"La demandante no se presentó al reconocimiento de fotos, no se dio el reconocimiento en rueda de detenidos, no hace una descripción precisa del sujeto que corresponda a mi defendido y existen tres declaraciones juradas a favor de mi representado ..." Dichas declaraciones juradas de acuerdo con lo que se expone, aseguran que el sindicado se encontraba en una fiesta en la urbanización Villa Lucre al momento de cometerse el ilícito. Frente a lo reseñado, el actor insiste en que no hay prueba vinculante contra el señor CISNEROS que lo involucre en el delito de robo a mano armada del automóvil de la denunciante, motivo por el cual se está presumiendo la culpa de su representado, máxime cuando tres personas atestiguan que el imputado se encontraba en una reunión en Villa Lucre al Momento de cometerse el ilícito.

A su vez, el Segundo Tribunal Superior de Justicia al motivar en la Sentencia de 14 de febrero de 1996 la decisión de decretar legal la detención preventiva de señor CARLOS CISNEROS, indicó que la denunciante reconoció al detenido como el asaltante de su auto que iba con ella en la parte de atrás amenazándola con un arma, y además, resaltando que el imputado conducía el auto al momento de ser recuperado, y que en su interior se encontró una máscara o pasa montaña y un revólver.

Sobre el particular se observa en el expediente contentivo de las sumarias adelantadas por el Ministerio Público diversos elementos que a pesar de los tres testimonios a favor del imputado (su padre, la novia de su padre (Gladis Cañarte) y un amigo de su padre (Maximiliano Álveo), indican la vinculación del mismo en la comisión del delito que se investiga, tal como lo expresa el Segundo Tribunal

de Justicia en la Sentencia de 14 de febrero de 1995. Ello se desprende del reconocimiento por parte de la denunciante a través de un vidrio en la PTJ de Ancón, del sindicado como el sujeto que iba en la parte de atrás de automóvil con ella apuntándole con un arma, (cfr. foja 51) y de la curiosa incongruencia de las declaraciones del acusado en lo concerniente a la propiedad del auto robado que conducía al momento de ser detenido por las autoridades, ya que al agente Rafael Antonio Sánchez Soberón, el señor **CISNEROS** le insistió que el auto robado era de su tía (cfr. foja 75) y en la indagatoria que se le practicara asegura que el carro se lo prestó un señor Orlando cuyo paradero se desconoce. (Cfr. 66).

A estos efectos es necesario aclarar que a la Corte no le corresponde deslindar las responsabilidades que se deriven de cada caso en particular de los cuales tenga conocimiento a través de la Acción de Habeas Corpus, puesto que ello es función privativa del funcionario competente que esté ventilando el caso en su instancia correspondiente.

La Corte únicamente puede verificar que se haya cumplido con los requisitos legales y constitucionales indispensables que deben respetarse al efectuar una detención.

En el caso que nos ocupa, se colige del examen íntegro de las constancias que constituyen contenido, que la medida cuya ilegalidad se acusa fue ordenada atendiendo las exigencias legales establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman, al haberse comprobado: 1. la existencia del hecho punible y 2. la vinculación del imputado con el hecho punible.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia de 14 de febrero de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARGELIS DEL CARMEN PERALTA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Sabina María Rose de Quijada interpuso acción de habeas corpus verbal a favor de ARGELIS DEL CARMEN PERALTA, y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifiesta la parte actora, en lo medular, que la señora Peralta está detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación desde el 27 de septiembre de 1995, porque supuestamente se encontró en su poder tres carrizos con una sustancia ilícita, cuya posesión niega la señora Peralta.

Una vez ingresado el negocio a este despacho se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente, para que el funcionario demandado rindiera informe de conducta acerca de la orden de detención preventiva. Oportunamente este

funcionario contestó el mandamiento e informó que ordenó la detención de la señora Peralta mediante providencia de 28 de septiembre de 1995, porque esta imputada está relacionada con la comisión de delito contra la Salud Pública.

En el sumario consta como elemento de prueba de la comisión del hecho punible el informe de allanamiento de los agentes de la Policía Técnica Judicial, quienes en compañía del licenciado César Martínez de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas (fs. 10 y 11 del sumario), allanó el cuarto N° 4 de la casa 2364, ubicada en la calle 23 del sector de Calidonia, habitación en la cual, después de realizada una compra simulada de sustancias ilícitas en la misma, se logró incautar en posesión de la sindicada, billetes marcados por la Fiscalía de Drogas que fueron utilizados en dicha compra. Se expresa en el informe comentado que era la segunda vez que se hacían compras simuladas en dicha residencia, y en ambas ocasiones la señora Argelia Peralta Rose fue la vendedora. En la primera ocasión se encontró en el lugar carrizos plásticos que contenían COCAÍNA, de acuerdo con prueba de campo practicada a la sustancia ilícita incautada.

Entre los elementos probatorios que obran en el proceso contra la señora Peralta se lee en el sumario, el resultado de las pruebas practicadas a la sustancia incautada por peritos del Departamento de Criminalística del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, en el cual se expresa que se trata de **COCAÍNA**, con un peso de **0,88 gramos**.

En el sumario instruido se investiga la comisión de un delito contra la Salud Pública, el cual está tipificado en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal y está sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. La existencia del delito se ha comprobado y la detenida ARGELIS DEL CARMEN PERALTA ROSE está vinculada con la comisión de este delito. Esto es así, porque en la diligencia de allanamiento de su apartamento se encontró sustancias ilícitas para la venta y además tenía en su poder los billetes marcados utilizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas para la compra simulada de sustancias ilícitas.

Por consiguiente, el Pleno considera que la detención preventiva decretada en su contra, mediante la providencia dictada el 28 de septiembre de 1995, no viola las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de la señora ARGELIS DEL CARMEN PERALTA ROSE decretada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante providencia de 28 de febrero de 1995, por el delito contra la Salud Pública que se investiga, y ORDENA que la misma sea puesta nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JORGE A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOE JOHN MEDINA VERNAZA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce por segunda vez de una acción de habeas corpus instaurada a favor de JOE JOHN MEDINA VERNAZA contra el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Admitida la demanda se libró mandamiento contra el funcionario acusado, el 16 de febrero de 1996. A foja 10 de expediente consta el telegrama remitido por el Fiscal Superior del Segundo Circuito Judicial, Coclé y Veraguas, que es del tenor siguiente:

"...
INFÓRMOLE ACTUALMENTE ESTE DESPACHO NO RECIBÍOSE MANDAMIENTO HABEAS CORPUS FAVOR JOE JHON MEDINA VERNAZA, EQUIPO FAX ENCUÉNTRASE DAÑADO, CONFORME NUESTROS REGISTROS ESTE EXPEDIENTE ENCUÉNTRASE ESA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR RECURSO DE APELACIÓN FIANZA EXCARCELARIA. ..."

De acuerdo al telegrama transcrito, se procedió por intermedio de la Secretaría de esta Corporación de Justicia a solicitar el expediente contentivo de la sumarias que se le siguen al beneficiado con esta acción, a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, siendo recibido el mismo, mediante Oficio N° 63-P, el 4 de marzo de 1996.

El apoderado judicial del sindicado señala como uno de los nuevos elementos que supuestamente desvinculan a su defendido de las sumarias que se siguen en su contra, el "ROLL DE SERVICIO GRUPO B-1 ÁREA "A" PENONOMÉ, TURNO DE LAS 2400 HASTA LAS 0600 HRS. DEL DÍA 30 DE SETIEMBRE DE 1995".

A petición del Magistrado Sustanciador, la Secretaría de la Corte solicitó al Jefe de la Zona de Policía Nacional de la Provincia de Coclé, Mayor SATURNINO FLORES CHECA, mediante Nota SGP-355-96 DE 5 de marzo de 1996, que se sirva certificar detalladamente cuál fue el turno de servicio que le fue asignado a JOE JOHN MEDINA VERNAZA el día 30 de septiembre de 1996 y las funciones desempeñadas por éste.

El día 11 de marzo de 1996, esta Superioridad recibió contestación de la petición antes indicada, en los siguientes términos:

"Ciudadano
Dr. CARLOS H. CUESTAS
Secretario General de la
Corte Suprema de Justicia
E. S. D.

Doctor Cuestas:

En atención a su Nota SPG-355-96, calendada 5 de marzo de 1996, donde solicita explicar detalladamente el turno y funciones desempeñadas por el Cabo 2° Joe John Medina Vernaza, para el día 30 de septiembre de 1995, era de las 24:00 horas. a las 06:00 horas, como Centinela en el Balcón del Patio, parte posterior de esta instalación.

Adjunto a la presente, Copia del Rol de Servicio.

Sin otro particular al respecto, me suscribo de usted, muy atentamente,

(fdo.)
Mayor SATURNINO FLORES CHECA
Director"

Cumplidos los trámites de ley, la acción de habeas corpus se encuentra en estado de decidir sobre la legalidad de la detención preventiva decretada en el caso subjúdice, por lo que a ello procede esta Corporación de Justicia, previas las consideraciones siguientes:

El Pleno de esta alta Corporación de Justicia, en la aludida acción de habeas corpus, al decidir sobre la legalidad de la detención preventiva de JOE JOHN MEDINA VERNAZA, el 24 de noviembre de 1995, se pronunció en el sentido de DECLARAR LEGAL LA DETENCIÓN PREVENTIVA decretada por el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial Coclé y Veraguas.

A esa conclusión arribó la Corte en el fallo de referencia, luego de un minucioso análisis de las sumarias instruidas contra el hoy nuevamente beneficiado con la presente acción, en el hecho criminal que emerge de la inspección ocular realizada por el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial y del examen médico legal realizado a la señora MARÍA EUGENIA DE SÁNCHEZ, GABRIEL SÁNCHEZ HIJO y YARITZA SÁNCHEZ, visible de fojas 70-72 y las fotos de los lesionados que constan de fojas 93 a 103 del expediente.

Esta Superioridad se basó en los informes rendidos por el Sargento Eugenio Vergara, visibles de fojas 136 a 141, y quien fuera designado como Investigador por el Ministerio Público, debido a que éste había recibido una llamada de una persona el día 16 de octubre de 1995, y con la que posteriormente se entrevistara, indicándole que se trataba de un agente de la policía el que estaba involucrado. Los informes del Investigador por parte del Ministerio Público constan de fojas 136 a 141, y, efectivamente, vinculan a JOE JOHN MEDINA VERNAZA con el hecho sangriento ocurrido el 30 de septiembre de 1995. Más aún en la diligencia de allanamiento que se hiciera a la residencia de MEDINA VERNAZA con el señor Personero de Aguadulce, se encontró una media panty house con una parte cortada, y en el bolsillo tenía una libreta o agenda, en donde aparecían los dibujos que acepta haber hecho de "silueta sin brazos y con la cara cortada", en las fechas de 29 y 30 de septiembre (foja 369). En el comentado fallo de 24 de noviembre de 1995. También se hace alusión a las contradicciones en que incurre MEDINA VERNAZA, en el informe entrevista que rindiera ante la Policía Técnica Judicial, los Detectives ERIC DE LEÓN, MARÍO A. NÚÑEZ, acompañados por el Sgto. EUGENIO VERGARA.

El licenciado WALDO SUÁREZ ROBLES, proponente de la acción de habeas corpus, señala que el Sargento EUGENIO VERGARA, quien fuera designado por el Ministerio Público para realizar las investigaciones contra su representado, ha sido dado de baja, pero ello resulta irrelevante en el caso investigado.

Como segundo nuevo elemento aduce el "ROLL DE SERVICIO GRUPO B-1 ÁREA "A" PENONOMÉ, TURNO DE LAS 2400 HASTA LAS 0600 HRS. DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995". Manifiesta el peticionario que en el referido documento se comprueba que el CABO 15397 MEDINA estaba de servicio dentro del Cuartel de la Policía Nacional en la Ciudad de Penonomé, en el período en que se cometió el hecho criminal.

Como lo señalamos anteriormente, el Magistrado Sustanciador consideró conveniente solicitar al Jefe de la Zona de Policía de la Provincia de Coclé que explicara detalladamente el turno y el servicio que prestaba el prenombrado MEDINA VERNAZA el día de 30 de septiembre de 1995, cuya respuesta fue de que laboró de las 24:00 a las 06:00 horas como Centinela en el balcón del patio, parte posterior de las instalaciones del Cuartel.

Llama la atención del Pleno que en la declaración rendida por JOE JOHN MEDINA VERNAZA, que consta de fojas 358 a 372, quien declaró en presencia de su abogado, Lcdo. ALCIBIADES CAJAR, a pregunta que se le formulara sobre el turno que le correspondió trabajar el fin de semana, del viernes 29 de septiembre a lunes 2 de octubre de 1995, contestó textualmente, lo siguiente:

> "El día viernes 29 me tocó el turno de 18 a 24 horas, en la caseta que está la lado (sic) de la garita de la Gobernación, si nome (sic) equivoco ahí, salí de turno a las 12 de la noche entregué la escopeta, nos reportamos en la sala de guardia todas las unidades que estábamos de servicio y después dieron parte de novedad, se dio parte sin novedad nos mandaron a retirar, después yo subí por la escalera para cambiarme de ropa, dejar el equipo, luego procedí a buscar una cama limpiarla y acostarme a dormir, después entré de turno a las 5 de la mañana cuando prendieron las luces desayunamos y nos dirigimos nuevamente al puesto donde estábamos relevando la

> unidad que estaba amaneciendo, después hice mi turno de seis de la mañana a doce del día, después entregué la escopeta nuevamente a la unidad que estaba de turno, luego procedí a almorzar, guarde mi equipo nuevamente y me acosté a descansar, después entré nuevamente de turno a las cinco y media de la tarde donde nos leyeron el turno y me tocó el balcón del patio. Después salí de turno a las doce de la noche ..."

Resulta contradictorio la declaración antes transcrita frente al Roll de Servicios del Grupo B-1 que consta a foja 454 del expediente, en donde se señala que el Cabo MEDINA VERNAZA laboró de las 24:00 a las 06:00 horas del día 30 de septiembre de 1995. Aunado a lo anterior, existe un informe a foja 317 del expediente del Sargento Eugenio Vergara, del 22 de octubre de 1996, que dice lo siguiente:

> "Aproximadamente a las cinco y quince (5:15) de la tarde del día veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), al estar revisando conjuntamente con el Mayor Saturnino Flores y el Teniente Francisco Justiniani la hoja de los turnos del Grupo
>
> B-1 Al cual pertenece el Cabo **MEDINA**, nos pudimos percatar que en dicha hoja existe un borrón, el cual estaba sobre el turno de veinticuatro (24) a cero seis (06), el día treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), exactamente en el turno opuesto de la parte de atrás del cuartel de Penonomé donde supuestamente debió encontrarse el Cabo Segundo 13608 Marío Charris, según las marcas que se pueden observar.
>
> Penonomé, 22 de octubre de 1995
>
> (fdo.)
> EUGENIO VERGARA
> Sgto. 4781."

Se corrobora lo anterior con la declaración de ERNESTO JAVIER ROSARIO GÓNDOLA, (f. 330) quien es el encargado del Área A de Penonomé. y al referirse al documento antes indicado, manifestó: "Yo no se si está alterado o no, pero en el día de ayer fue (sic) llamado por mi Mayor Flores, cuando me llamó él fue que me informó sobre la anomalía que presentaba el documento ...". Se desprende de la declaración de ROSARIO GÓNDOLA que no tenía conocimiento sobre dicho documento y expresa más adelante que giró nota a la Sala de Guardia certificando que todos los días deben enviar el servicio policivo a su despacho, ya que esta a cargo está del mismo. Como consecuencia de ello no existe una explicación con respecto a la anomalía comentada.

El Pleno considera conveniente hacer una relación en cuanto a las declaraciones rendidas por el Oficial de Policía, Teniente ISMAEL ARGÜELLES MARTÍNEZ, quien era el encargado del Grupo B-1, durante los días 29 y 30 de septiembre y el Sargento Primero Rafael Beltrán, que es el responsable de la asignación de los turnos. Veamos:

Manifiesta el Subteniente ARGÜELLES que el Cabo Medina y Samaniego estaban en "el balcón del patio" y que visitó el puesto del balcón, la puerta principal y la puerta lateral, (f. 300). Por su parte el Sargento Primero BELTRÁN expresó a foja 308 del expediente que: "... no le pasó revista al personal interno de la base, ya que "estaba realizando la revista al personal externo, tribunal, hospital y aeropuerto". Más adelante (f. 309) expresa que utiliza un formato para asignarle el puesto de servicio a cada unidad policial, lo hace a lápiz y dicho formato lo pasa al secretario para ser pasado a máquina. Agrega que a él le devuelven el borrador y que no revisa el que se pasa a máquina.

Más adelante manifiesta (f. 310) "... el Cabo Medina si no recuerdo el puesto que se le asignó".

A pregunta que se le formulara al Subteniente Argüelles sobre si había

vigilancia en la parte de atrás del Cuartel, (f. 299) manifestó que:

> "El viernes amanecer sábado o sea la madrugada del sábado no tenía unidad disponible por lo tanto ese puesto no se cubrió".

Vale la pena destacar, por último, que en la declaración indagatoria rendida por JOE JOHN MEDINA VERNAZA expresa que tiene "readiestramiento de infantería, viene siendo como buscar un punto o objetivo en el monte, lectura de cartas, como contrarrestar el enemigo, arrastrarse en el monte". Además, acepta que en el tiempo que tiene de laborar en la policía ha sido sancionado en varias ocasiones. Al analizar la "Hoja de Vida" (fs. 505-508) del prenombrado MEDINA VERNAZA se puede comprobar, entre otras cosas, las sanciones por abandonar el puesto a él asignado, situación en que ha sido reincidente; así como por darse a libar licor estando de servicio, por fomentar la discordia en su residencia, al extremo de golpear a su esposa y otros.

En la referida diligencia indagatoria (fs. 367-368), al señalarle el Despacho de Instrucción "... porqué (sic) si siendo parte del Grupo B-1, todos sus compañeros incluyendo al Subteniente Argüelles, Sargento Beltrán, Sargento Samaniego, Cabo Moreno, y los demás expresan que para ese fin de semana su turno eran de las veinticuatro al cero seis, y usted en respuesta anterior dice que era de las dieciocho a la veinticuatro", el referido MEDINA VERNAZA CONTESTO: "Si el turno como explica el Subteniente Argüelles y los compañeros era del veinticuatro al cero seis horas del día treinta (30) de septiembre de madrugada, yo exactamente esteré (sic) equivocado en la entrada de turno ...". Tal parece que el prenombrado MEDINA VERNAZA acepta lo que dice su superior, pero, es obvio que se contradice con lo que ha declarado anteriormente. Esta situación impide al juzgador analizar con objetividad la vinculación o no del sindicado en este hecho criminal.

Todo lo anteriormente expuesto nos conduce a la incuestionable conclusión de que, de conformidad con la realidad probatoria acreditada hasta el momento en la fase inicial del indicado proceso penal, la situación procesal del prenombrado JOE JOHN MEDINA VERNAZA y su presunta vinculación con los ilícitos que se investigan no ha variado.

Por tanto, resulta evidente, además, que a la luz de los presupuestos contemplados en los artículos 2148 y 2159 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva decretada por el señor Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial está legalmente justificada, en el caso del señor JOE JOHN MEDINA VERNAZA.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de JOE JOHN MEDINA VERNAZA y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLADYS REYES RESTREPO, CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Pérez S., promovió acción de Habeas Corpus en favor de la señora **GLADYS REYES RESTREPO**, y contra el señor **FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, el día 8 de marzo de 1996.

Librado el correspondiente mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad demandada el día 11 de marzo de 1996.

Encontrándose el expediente en espera de la respuesta del mandamiento de Habeas Corpus desde el día 11 de marzo de 1996, el licenciado Alejandro Pérez S., presentó escrito desistiendo de la acción el día 18 de marzo de 1996 (f. 4). En su escrito el licenciado Pérez S., expresó lo siguiente:

> "... ya que desde el 8 de marzo de 1996, fue librado el mandamiento de Habeas Corpus a la autoridad, y a pesar de lo dispuesto por el artículo 2580 del Código Judicial (2 horas), a la fecha nada a (sic) pasado.
>
> Mi conclusión es que el Recurso de Habeas Corpus ante el Pleno de la Corte es parte del pasado jurídico del país."

Sobre el comentario final, el Pleno estima que si bien es cierto que la carga laboral de la autoridad demandada no le permite presentar en término el informe que se le solicita en un proceso sumarísimo como el Habeas Corpus, es necesario que se adopten las medidas adecuadas para no incurrir en dilaciones reprochables u optar por la comparecencia en estrados de la persona a favor de quien se instaura la acción.

La Corte en reiterados pronunciamientos ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen el detenido o su apoderado legal, como es el caso que nos ocupa, es por ello que esta Corporación Judicial no tiene nada que objetar en cuanto al escrito de desistimiento presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Alejandro Pérez S., en la acción de Habeas Corpus promovida a favor de la señora GLADYS REYES RESTREPO y DISPONE que se remita copia de esta decisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADA GAITÁN ESPINOSA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de **Habeas Corpus** propuesta por **TEÓFILA PEREIRA** a favor de **AMANDA GAITÁN ESPINOZA** contra el **Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial**.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, esta contestó mediante escrito que consta de fojas 11 a 12, informando lo siguiente:

La detención de **Amada Gaitán Espinoza** fue ordenada por la Personería Segunda Municipal del Distrito de Barú, quien adoptó tal decisión en base a los motivos de hecho y de derecho que constan en la instrucción sumarial que se le sigue por el delito de **HOMICIDIO** en perjuicio de **FAUSTINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** (fs. 37-38). Destaca en especial las declaraciones de Carmen Santamaría Espinoza y Digna Santamaría de Samudio que concuerdan en señalar a la imputada como la responsable de las lesiones mortales que sufrió la víctima.

La sindicada se encuentra recluida en el **Centro de Rehabilitación Femenino de la Provincia de Chiriquí**, a órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Dicha Agencia de Instrucción expresa haber dispuesto (fs. 76) que la imputada fuera sometida a examen psiquiátrico, oficiando a la Psiquiatra Forense del Ministerio Público (fs. 133), pero hasta el momento no ha recibido la experticia que defina la inimputabilidad o no de la sindicada.

Se refiere, además, a "la forma injustificada y atroz como se cometió el hecho bajo investigación" por lo que considera conveniente que la imputada permanezca confinada en el centro de penitenciario hasta que se resuelva definitivamente su situación jurídica.

Finalmente, como el delito tiene pena superior a los dos años de prisión opina que debe mantenerse la detención preventiva ordenada.

Por otra parte mediante la acción de habeas corpus se acusa a la autoridad competente de no haber enviado la orden al **Centro Femenino de Rehabilitación** para que la detenida Gaitán sea evaluada por Peritos Oficiales debido a la grave perturbación de conciencia que sufre. En tal sentido agrega que dicho Centro no tiene área de aislamiento, ni servicios médicos, lo que pone en peligro la integridad física de la prenombrada reclusa y de las otras detenidas.

Así recomienda la accionante que "los detenidos de alta peligrosidad por perturbación de la conciencia o trastornos mentales, sean recluidos en un Hospital Psiquiátrico.

La Corte procede a resolver previas las siguientes consideraciones:

Del libelo de habeas corpus, que obra a foja 1, claramente se desprende que no se cuestiona la legalidad de la detención decretada contra **AMADA GAITÁN ESPINOZA**, sino que la misma no haya sido evaluada psiquiátricamente, que esté detenida en un Centro Penitenciario y no en una Institución para enfermemos mentales.

En ese sentido, conforme a lo expresado por el funcionario demandado en el informe que envió por razón de este recurso, se ha podido verificar en el expediente antecedente (fs. 77) el oficio N° 133 de 13 de febrero de 1996 mediante el cual se solicitó al Médico Forense Psiquiatra de la Provincia de Chiriquí la evaluación de la imputada para determinar diversos aspectos, como: su estado mental en la actualidad, si debe ser sometida a tratamiento psiquiátrico u hospitalización en un centro especializado o si puede recibir tratamiento estando detenida.

También se observa en las fojas siguientes el requerimiento de otras diligencias e informes relacionados con la comprobación del estado mental de la favorecida con esta acción.

De lo que se deja expuesto se concluye que el Agente del Ministerio Público ha actuado conforme al procedimiento legal establecido para estos casos, y aún está en espera de la información necesaria para continuar el trámite pertinente de conformidad con los artículos 2093 del Código Judicial y 26, 27 del Código Penal.

En este caso en particular, como se señaló anteriormente, no se está impugnando alguna forma de conculcación de la libertad personal sino que se cuestiona la atención de un recluso que padece un trastorno mental; en consecuencia, hay que concluir indicando que el habeas corpus no es la vía idónea para resolver este tipo de situaciones. Lo procedente sería el uso de los canales ordinarios previstos en la ley, mediante la presentación de escritos o peticiones al custodio, al funcionario de instrucción o al juez de la causa.

El propósito del habeas corpus según los artículos 23 de la Constitución y artículo 2565 del Código Judicial, a la luz del concepto de la eficacia de su tutela jurídica, no corresponde a que el detenido preventivamente sea trasladado a un Hospital Psiquiátrico.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus propuesta por Teófila Pereira a favor de AMADA GAITÁN ESPINOZA contra EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO ALBERTO AGUILERA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Manuel Aguilera interpuso ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de ARMANDO ALBERTO AGUILERA y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por admitida la iniciativa procesal, se libró mandamiento de habeas corpus que fue contestado por la autoridad demandada, mediante oficio N° 1587 de 13 de febrero de 1996. En el informe de conducta se expresa que la detención de Aguilera fue decretada mediante resolución fechada 9 de febrero del año en curso y se indican las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que establecen la Carta Fundamental y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Aguilera, la medida restrictiva de la libertad se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de allanamiento realizada el 6 de febrero del año que decurre en la residencia de Luz Ángel Molina Díaz, ubicada en Calle 17, Santa Ana, Edificio Hortensia, apartamento N° 33 (fs. 8-10, sumarias), lugar donde se incautó un cartucho plástico de color blanco contentivo de tres sobres plásticos transparentes que contienen polvo blanco y un sobre de plástico transparente contentivo de aproximadamente treinta gramos de polvo blanco. Sometida la referida sustancia a la prueba técnica de rigor, resultó positiva

para la determinación de **COCAÍNA** en la cantidad de **54.69 gramos** (f. 17 del cuaderno de habeas corpus).

Respecto a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra el imputado, consta la declaración indagatoria rendida por Eliseo Vega Benavides, en la que hace señalamientos directos contra Aguilera, en el sentido de que éste le suministró droga (fs. 50-54, sumarias). Aunado a lo anterior, pesan sobre el imputado circunstancias de presencia y oportunidad dado que se encontraba presente en el lugar donde se incautó la sustancia ilícita.

La resolución de 9 de febrero de 1996, mediante la cual se decreta la detención preventiva de Aguilera, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que corresponde mantener la medida atacada.

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Armando Alberto Aguilera y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO G. SÁNCHEZ BARSALLO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Rosario Granda de Brandao interpuso ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus con el objeto de que se declare la ilegalidad de la detención preventiva que sufre RIGOBERTO G. SÁNCHEZ BARSALLO, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por admitida la iniciativa procesal constitucional, se concedió el mandamiento de habeas corpus que fue contestado por la autoridad demandada, mediante oficio N° 2107 de 7 de marzo del año en curso. En el informe de conducta se señala que la detención de Sánchez Barsallo fue decretada mediante resolución de 2 de febrero del año que decurre y se detallan las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar atacada cumple con los requisitos que establecen tanto la Constitución como el Código Judicial.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Sánchez, la medida se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública, relacionados con drogas.

Como elemento probatorio allegado a la comprobación del hecho punible consta la incautación de un envoltorio de papel contentivo de hierba seca.

Sometida la referida sustancia al análisis técnico que señala la ley, resultó positiva para la determinación de **MARIHUANA**, en la cantidad de **9.59 gramos** (Dictamen del Laboratorio Técnico especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, f. 19 del cuaderno de antecedentes).

Respecto a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra el individuo cuya detención se ordena, consta el informe de los agentes captores, que da cuenta de que la droga fue encontrada en lugar donde transitaba el imputado luego de que éste la arrojara al suelo, por lo que pesan sobre el mismo graves circunstancias de **presencia y oportunidad**.

Observa la Corte que la cantidad de **marihuana** incautada (9.59 gramos) sobrepasa la dosis mínima de consumo que establece el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Los 9.59 gramos representan poco más de noventa veces una dosis de marihuana, lo que indica que no estamos en presencia de un caso típico de consumo de sustancias ilícitas.

La orden de detención preventiva, dictada mediante resolución razonada 2 de febrero de 1996, cumple con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo tanto, corresponde resolver de conformidad.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Rigoberto G. Sánchez Barsallo y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ Y BALDOMIR CRISSAJ CONTRA LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El abogado de esta localidad, Darío Eugenio Carrillo Gomila, en representación de los señores **FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ y BALDOMIR KRIZAJ**, presentó acción de habeas corpus contra la orden restrictiva de la libertad emitida por el Juzgado Octavo del Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial, ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Este Tribunal declaró legal la orden de detención en fallo de 29 de febrero de 1996 y contra tal decisión se presentó recurso de apelación, lo que motiva el ingreso al Pleno de la Corte de este expediente.

El Tribunal de primera instancia fundamentó su decisión en el auto de llamamiento a juicio dictado por el Juzgado Octavo, reformado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en la que se mantiene la orden de detención decretada. Considera además, que el delito que se les imputa se subsume en lo previsto por los artículos 269 en relación con el 265 del Código Penal, que establecen pena de prisión de 2 a 5 años y la Juez al dictar la orden de detención lo hizo con base a lo normado por el artículo 2147-A del Código Judicial y después de que el negocio reingresó a su despacho para su ejecución.

El apelante sustenta su oposición al fallo del a quo en cuanto a la calificación del delito que se les imputa a los señores Solís y Krizaj, pues su conducta, tal como la describe el Tribunal, pareciera adecuarse a otro tipo penal, como lo es el descrito por el artículo 388 del Código punitivo que se refiere a la simulación del crédito y que tiene una penalidad de 6 meses a dos años de prisión.

Recientemente, en sentencia de 23 de febrero del año en curso, el Pleno resolvió otra acción de habeas corpus promovida por el mismo abogado a favor de Baldomir Krizaj y Edith Calvera de Krizaj contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia en otro proceso que se le siguen a las mismas personas y expresó:

> "La acción de Habeas Corpus, como es del conocimiento de los estudiosos de las ciencias jurídicas, está destinada a tutelar dos derechos fundamentales de la mayor importancia en cualquier estado de Derecho: la libertad personal y la libertad ambulatoria. Su razón ontológica, como lo anota Castro Loría, es "prevenir y reprimir cualquier restricción ilegítima a su libertad, sin importar su origen" (Cfr. Castro Loría, Juan Carlos. Recursos de Amparo y Habeas Corpus. Edit. Juritexto, San José, C. R. 1993, p-19). Lo expresado significa que a través de esta acción no es posible suplir una diligencia de acumulación de procesos, ni revisar el basamento jurídico de la valoración del sumario, menos aún, cuando el expediente que sirve de antecedente a esta acción recoge una diversidad de incidentes, solicitudes y medios de impugnación presentados por las partes, que son un claro indicador de que en el mismo se le han otorgado todas las garantías procesales que la Constitución y la ley reconocen.
>
> La orden de detención surge como consecuencia del auto encausatorio dictado por supuestas infracciones a la ley penal que conllevan tal medida cautelar personal. A su vez, la privación de libertad decretada emana de autoridad competente, por lo que los vicios de ilegalidad imputados no tienen apoyo en la realidad procesal examinada".

Los hechos que sirven de fundamento al presente recurso de apelación, cuestionan la calificación del delito que se les imputa a sus representados a través de dos instancias, mientras que la acción de habeas corpus se dirige a reparar de inmediato la lesión causada a la libertad de las personas ilegalmente privadas de la misma, por lo que la pretensión no es coherente con la vía procesal adoptada.

El fallo que se revisa es jurídico, se ajusta a la ley y pondera correctamente la realidad procesal en la que se dictó la orden de detención cuya revocatoria se solicita por este medio.

Por tanto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia calendada el 29 de febrero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el presente caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CAMILO BURROWS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ,

VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Nemesio Fajardo Angulo ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **CAMILO BURROWS TUÑÓN**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° A. L.-0388-96 de 20 de marzo de 1996, en el cual informa lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **CAMILO BURROWS**.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia, ni a nuestras órdenes al señor **BURROWS**." (Foja 6).

Del informe transcrito se colige que el señor CAMILO BURROWS no se encuentra detenido ni hay evidencias de que exista orden de detención en su contra; razón por la cual debe ordenarse el cese del procedimiento de la presente acción de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAIME MANUEL AROSEMENA CHANG, CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Maira del C. Prados de Serrano, Jueza Primera de Circuito de lo Penal, del Segundo Circuito Judicial de Panamá, se inhibió de conocer de la acción de Habeas Corpus a favor del señor **JAIME MANUEL AROSEMENA CHANG**, ya que éste se encontraba a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República, situación que motivó la remisión de esta acción ante la Corte Suprema de Justicia.

Cumplidas las normas del reparto, y una vez recibida esta acción se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio N° 4620 de 27 de marzo de 1996 (f. 12), informó que el expediente del señor **JAIME MANUEL AROSEMENA CHANG**, fue enviado a la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial.

Como quiera que el señor **JAIME MANUEL AROSEMENA CHANG**, no se encuentra a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República sino a órdenes del Fiscal Tercero de

Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Corte carece de competencia para conocer de la acción impetrada por lo que debe declinarse el conocimiento de esta al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, tal como lo preceptúa el artículo 2588 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA esta acción de Habeas Corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia para que asuma la competencia y decida lo que corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAR ARROCHA BULTRÓN Y RAMÓN MORALES CONTRA EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Habeas Corpus propuesta por la firma forense Arrocha, Blandón, Castro y Young a favor de **OMAR ARROCHA BULTRÓN Y RAMÓN MORALES** contra el Juez Décimo Cuarto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA:

Los representantes legales de los detenidos alegan en el escrito de su pretensión, básicamente que los agentes de la P. T. J. conculcaron el principio constitucional elemental que se refiriera a que todo detenido debe ser puesto a órdenes de la autoridad competente en el término de 24 horas (art. 21 de la Constitución Nacional); y en el caso que nos ocupa, se aduce que injustificadamente los sindicados fueron puestos a órdenes de el señor Fiscal Auxiliar días después de la detención in examine. Sobre este particular, la firma apoderada de los detenidos en forma ambivalente señala primero 4 días de retraso en el cumplimiento del aludido término de 24 y posteriormente indica que el retraso fue de tres días. A estos efectos se puntualiza que "la Policía Técnica Judicial de Arraiján extendió en demasía la privación de libertad más allá de los límites establecidos en el artículo 21 de la Constitución Nacional."

Aunado a lo expresado, sostienen los proponentes de la presente Acción de Habeas Corpus que Ramón Morales se encontraba laborando a la hora y fecha del robo del auto de Rina María Pimentel y que Omar Arrocha Bultrón no fue reconocido en rueda de detenidos como uno de los sujetos que cometió el ilícito.

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA:

En la Sentencia de 28 de febrero de 1996 el Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió y decretó la legalidad de la medida de detención preventiva de los señores Omar Iván Arrocha Bultrón y Ramón Antonio Morales Martínez, con fundamento en los planteamientos que se enuncian a continuación:

1. El hecho de que los imputados fueron sorprendidos en el automóvil reportado como robado por la señora Rina María Pimentel Arrocha.

2. El hecho de que en el informe de comisión de los detectives Alejandro Medina y Fabricio González se indica que en el auto en comento se encontró una cartera de cuero chocolate con los documentos a nombre de Omar Arrocha y Carlos Arrocha. Se hace alusión igualmente de que en la casa del Omar Arrocha se recuperó un arma calibre 9mm.

3. El hecho de que el delito que se imputa acarrea una pena mínima de 5 años de prisión tal cual lo preceptúa el artículo 186 del Código Penal, de lo cual se deduce la procedencia de la detención preventiva impuesta como medida cautelar, a tenor del artículo 2148 del Código Judicial.

DECISIÓN DE LA ALZADA:

Sobre el particular se destaca del análisis del sumario contentivo del negocio que nos ocupa, que de acuerdo al informe de novedad de los detectives Herminio Villarreal, Camilo Fernández, Ronaldo Román y Alejandro Medina fechado 12 de junio de 1995 (cfr. foja 14-15), se logró recuperar el auto de la señora Rina María Pimentel reportado como robado, y en cuya posesión fueron sorprendidos los imputados en este proceso. Se resalta seguidamente del informe bajo estudio, que inicialmente al tratar los agentes de detener sin mayores percances a los cuatro ocupantes del auto en controversia, éstos se dieron a la fuga, propiciando que el automóvil en cuestión se volcara, y un posterior intercambio de tiros que culminó con la fuga de dos de dichos sujetos y la herida en uno de los antebrazos del señor Ramón Morales. Dada esta circunstancia, el señor Morales estuvo en el Hospital Nicolás Solano del 13 al 20 de junio de 1995 hospitalizado. (Cfr. foja 153). Por otro lado se observa que en dicha diligencia se consigna que el auto de la señora Pimentel fue encontrado con una placa o matrícula que no le pertenecía. (Cfr. foja 14-15).

A foja 25 del expediente de la instrucción reposa el reporte efectuado por el inspector Jesús Escala Vásquez en el cual se indica que en el auto robado se encontró documentación perteneciente a Omar Arrocha y Ramón Morales, un arma 9mm, 15 balas vivas, un proveedor 9mm y un radio portátil CNB584 el cual fue denunciado como robado el día del ilícito por la señora Pimentel. Aunque debe anotarse que con anterioridad los detectives Herminio Villarreal, Camilo Fernández y Fabricio González aseveraron en su informe de comisión legible a fojas 8-9, que un arma de fuego 9mm les fue entregada voluntariamente por Omar Arrocha en su casa.

A estos efectos el señor Omar Arrocha en la diligencia indagatoria (cfr. 39-43) alega que el día en que se perpetró el delito se encontraba en su casa con su esposa y un vecino, y que un conocido le pidió que le cuidara el auto. Más adelante en la ampliación de dicha diligencia explica que el motivo por el cual utilizó el carro motivo de la controversia, fue para ir a la panadería y posteriormente a la casa de una amiga en Vista Alegre, ya que desconocía su procedencia ilegal; y que en el camino recogió a Ramón Morales.

Ahora bien, debe señalarse que en cuanto a lo que a Omar Arrocha se refiere, el mismo tiene antecedentes policivos por el delito de hurto, de acuerdo a lo señalado en el record que para tales efectos expide el Ministerio Público a través de la Policía Técnica Judicial (cfr. foja 109); y, en lo concerniente a el señor Ramón Morales consta a foja 185 de la sumarias que el mismo no ha brindado los nombres de las personas que pudieran dar fe de que al momento de perpetrarse el delito, el imputado Morales estaba laborando. En otras palabras, no reposa en el expediente diligencia de ratificación o reconocimiento de la firma y el contenido del documento que alude a que el señor Morales estaba laborando a la hora de cometerse el ilícito.

De los planteamientos expuestos se deduce que las sumarias adelantadas por el Ministerio Público contienen diversos elementos de juicio que conllevan a colegir la vinculación de los imputados en la comisión del delito que se investiga, tal como lo expresa el Segundo Tribunal de Justicia en la Sentencia impugnada de 28 de febrero de 1996.

A estos efectos es necesario aclarar que a la Corte no le corresponde deslindar las responsabilidades que se deriven de cada caso en particular de los

cuales tenga conocimiento a través de la Acción de Habeas Corpus, puesto que ello es función privativa del funcionario competente que esté ventilando el caso en su instancia correspondiente.

La Corte únicamente puede verificar que se hayan cumplido con los requisitos legales y constitucionales indispensables que deben respetarse al efectuarse una detención.

En el caso que nos ocupa, se colige del examen íntegro del caso subjúdice que la medida cuya ilegalidad se acusa fue ordenada atendiendo las exigencias legales establecidas a los fines de decretar una detención preventiva, contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman, al haberse comprobado: 1. **la existencia del hecho punible** tipificado en el artículo 186 del Código Penal con una punibilidad de 5 a 7 años y 2. **la vinculación del imputado con el hecho punible.**

Finalmente se advierte que si bien es cierto, la orden de detención preventiva fue decretada por funcionario competente el 16 de junio de 1995, y el arresto de los sindicados por el delito de robo se verificó el 12 de junio del mismo año (período en el cual se recibían los informes y evidencias del caso), la Corte no puede obviar que existen en el expediente los suficientes elementos que permiten establecer la efectiva vinculación de los acusados con el delito que se les imputa, (robo agravado) cuya sanción penal oscila entre 5 a 7 años de prisión. Por otro lado cabe destacar que al remitírsele al Fiscal Auxiliar el negocio de marras, el mismo practicó las diligencias pertinentes a estos procesos y seguidamente, el mismo, 6 de junio de 1995, decretó la detención preventiva de los acusados.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia de 28 de febrero de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA VICTORIA CASTRO C. CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO JUDICIAL DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, proveniente del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) ha ingresado a este Despacho recurso de habeas corpus propuesto por el licenciado **Bernardino González** a favor de **MARÍA VICTORIA CASTRO**, y contra el Juez Segundo de Circuito por considerar que la detención es ilegal.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

El apoderado judicial de la señora **CASTRO** al sustentar el referido recurso, indicó que la detención obedeció a una diligencia de allanamiento en donde se encontró una sustancia ilícita cuyo peso fue de 0.24 gramos. Que esta cantidad, según lo manifestado por la propia Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal

Superior del Segundo Distrito Judicial, la cantidad antes enunciada no amerita detención preventiva. Que además de todo lo anterior, la afectada padece de asma crónica bronquial y que la medida cautelar que le fue impuesta por el juzgador de mantenerse recluida en su residencia, tuvo que ser violada porque ella y los suyos iban a morir de hambre.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial declaró legal la detención bajo el fundamento de que a la señora **MARÍA VICTORIA CASTRO** le fue impuesta la medida cautelar de mantenerse recluida en su residencia con la atención médica del médico forense del Circuito de Coclé, dado el estado de salud, que para el momento de la detención, padecía. Que esta situación dejó en suspenso de manera provisional la detención carcelaria decretada contra la precitada por la Fiscalía Superior de ese Distrito Judicial. Que en dicha Resolución se le advirtió a la imputada que de incumplir la medida cautelar impuesta, es decir de mantenerse recluida en su casa, ésta se dejaría sin efectos, decisión que fue aprobada por el Tribunal Superior el 18 de mayo de 1995.

POSICIÓN DEL PLENO

Frente a los antecedentes que caracterizan este recurso de habeas corpus, este Tribunal Colegiado comparte el argumento del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el sentido de que la detención de que fue objeto **MARÍA VICTORIA CASTRO** se enmarca dentro de los parámetros de la ley, y esto lo decimos por lo siguiente:

En primer lugar, si bien es cierto la cantidad de sustancia ilícita encontrada en la residencia de la detenida era de 0.24 gramos, no es menos cierto que en los antecedentes de este recurso reposa la declaración de señor Alexis Chavarría, que la comprometen seriamente, entre otras personas, como distribuidores de dichas sustancias. Además, que antes del allanamiento se le estaba dando seguimiento a las personas que se apersonaban a la residencia de la señora **CASTRO** en actitud sospechosa y también a los que habitaban en dicha casa. Esta situación, por razones obvias, no circunscribió la detención por posesión ilícita de drogas, sino muy por el contrario, por el delito contra la salud pública, que la pena mínima de prisión es de cinco (5) años.

El haberse encontrado una cantidad mínima de droga en posesión de la acusada, no es el único elemento que influyó en su detención, sino también el hecho, tal como lo mencionáramos anteriormente, de que el señor Oscar Alexis Chavarría la señaló directamente como una de las que se dedicaba a la venta de sustancia ilícita.

Por otro lado, en lo que respecta a la medida cautelar de casa por cárcel por razones de salud, fehacientemente la acusada violó el privilegio que le concedió el juzgador. Lo argüido por el apoderado judicial de la señora **MARÍA VICTORIA CASTRO**, de que ésta tuvo que salir de su residencia para traer la comida a su casa, no es excusa para transgredir daciones jurisdiccionales, además de que la propia señora **CASTRO** manifestó de que ella tenía un ingreso mensual de B/.900.00, que provenían del manejo de un taxi de su propiedad, aquí en la ciudad, y adicionalmente un amigo suyo también corría con los gastos de su hogar.

Definitivamente, la detención que se llevó a cabo en la persona de la señora **CASTRO**, se ha ejecutado de acuerdo a la ley, por lo que la aprehensión es legal.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 29 de febrero de 1996 dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **Nicolás Acosta Herrera** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor del señor **HIPÓLITO QUINTANAR**, en contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que es ilegal la privación de libertad que sufre el precitado.

MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante oficio N° 10271-95, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "1. Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ, la misma fue decretada mediante providencia razonada de este Despacho, fechada 25 de septiembre de 1995 (fs. 11-12).
>
> 2. La orden decretada contra el señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ, surge de los señalamientos formulados en su contra por parte de las unidades captoras de la Policía Nacional, de la Unidad de Control de Multitudes, mediante informe de novedad, fechado de septiembre(sic) del presente año, de fojas dos (2) del expediente.
>
> Narra el informe de novedad, que el día de los hechos, siendo aproximadamente las seis de la tarde (6:00 p. m.), se encontraban los agentes 16059 A. CENTENO y 12366 E. GUTIÉRREZ en los alrededores de la Barraca el Triángulo de Curundú, cuando observaron a un sujeto sospechoso, por el cual procedieron a identificarse como miembros de la Policía Nacional, luego le solicitaron la cédula de identidad personal y no la portaba. Al efectuarle el registro de rigor, se le encontró en la parte de la espalda, en la pretina del pantalón un (1) envoltorio de papel periódico una hierba seca que se presume sea droga (marihuana).
>
> Al rendir declaración indagatoria el señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ, se acoge al artículo 22 de la Constitución Nacional, y pide se le nombre un defensor de oficio.
>
> Como elemento probatorio que acredita la existencia del hecho punible que nos ocupa, consta de fojas 16-17 del expediente, el resultado del análisis de la droga incautada, emitida por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, el cual arrojó resultado positivo para la determinación de MARIHUANA en la cantidad de 12.68 gramos.
>
> Por otro lado consta de fojas 23-28 del expediente, las declaraciones juradas rendidas por los señores AURELIO CENTENO

RODRÍGUEZ y ERIC CORNELIO GUTIÉRREZ quienes se afirman y ratifican del contenido del informe antes descrito, y coincidiendo en manifestar que los motivos por los cuales se detuvo al señor QUINTANAR GÁLVEZ con la comisión del ilícito investigado.

Cabe señalar que además de acreditarse la comisión de un hecho punible, existen dentro de las piezas procesales que conforman el presente cuaderno penal, elementos tales como los señalamientos directos por parte de los agentes captores, que nos llevan a establecer una vinculación directa por parte del señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ con la comisión del ilícito investigado.

Los fundamentos de derecho sobre los cuales se ha fundamentado la detención preventiva del señor QUINTANAR GÁLVEZ se encuentra consagrado en el contenido del artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, aunado a los señalamientos que existen en su contra por parte de los agentes captores.

También es importante mencionar que para la fecha del primero (1°) de noviembre pasado, se contestó mediante oficio N° 0217 un cuadernillo de Habeas Corpus a favor del señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ, remitido por el Magistrado JUAN ANTONIO TEJADA MORA, el cual declaró LEGAL la detención corporal del señor QUINTANAR GÁLVEZ.

3. El señor HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ se encuentra recluido en la Cárcel Modelo de esta ciudad respectivamente, a órdenes de este Despacho, quien a partir de este momento es puesto a disposición de esta Alta Corporación de Justicia".

ANTECEDENTES

La privación de libertad de que es objeto el señor **QUINTANAR GÁLVEZ**, tiene su origen en el Informe de Novedad suscrito por dos miembros de la Policía Nacional, visible en la copia del cuaderno sumarial (sin numero de foja), en el cual se deja constancia de los hechos acaecidos el día 22 de septiembre de 1995, en momentos en que se encontraban las unidades policiales en su ronda de patrullaje, y detectaron a un individuo en actitud sospechosa, razón por la cual procedieron a su registro corporal. Como resultado del registro, en la pretina de la parte trasera de su pantalón un envoltorio de papel contentivo de hierba seca, la cual se presumió sustancia ilícita. La prueba de campo efectuada a la sustancia incautada, visible a folio 8 de las sumarias, resultó positiva para la determinación de la sustancia ilícita conocida como Marihuana.

De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas dispone el inicio la instrucción sumarial por tratarse de un presunto ilícito contra la salud pública, y mediante providencia razonada fechada 25 de septiembre del año que decurre, fue llamado a rendir declaración indagatoria el señor **QUINTANAR** por la presunta comisión de un delito contra la salud pública que amerita pena privativa de libertad.

Al momento de que **QUINTANAR** fue llamado para rendir indagatoria, se acogió al derecho consagrado en el artículo 22 de la Constitución Nacional, razón por la cual no consta en el sumario la versión de los hechos narrada por el detenido.

Sin embargo, sí reposan en el legajo sumarial las declaraciones juradas rendidas por los Miembros de la Policía Nacional: AURELIO CENTENO y ERIC GUTIÉRREZ, en las que ratifican en su totalidad el contenido del Informe de Novedad suscrito el día 22 de septiembre de 1995.

El resultado del examen pericial de la sustancia incautada efectuado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, dio como resultado positivo de que se trataba de CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) en la cantidad de **12,68 gramos**.

En estas circunstancias, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados

con Drogas, mediante providencia razonada de 25 de septiembre de 1995 ordena la detención preventiva del señor **QUINTANAR** por considerar que existen en el cuaderno sumarial elementos probatorios que le vinculan con la comisión de un ilícito contra la salud pública que tiene prevista pena mínima de prisión superior a los dos años de cárcel.

Por último, luego de la detención a que hemos hecho referencia, se interpuso ante esta Superioridad recurso de habeas corpus a favor del acusado, que fue resuelto en Sentencia de 27 de diciembre de 1995 y en la cual se declaró legal la detención.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Advierte el Pleno de la Corte, que una vez más se ha incoado recurso de habeas corpus a favor de **HIPÓLITO QUINTANAR** y considera, como ya se manifestó en tiempo anterior, que la misma se verificó con ajuste a las formalidades contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, puesto que constan en las sumarias elementos indiciarios que apuntan de manera clara hacia la persona del señor **QUINTANAR** como el responsable de la sustancia incautada: **MARIHUANA**, en la cantidad de **12,68 gramos**, que fuera encontrada en la pretina de su pantalón al momento de ser aprehendido.

Sin embargo, la razón fundamental que alega el proponente de este recurso constitucional, que excusa al imputado del delito que se le atribuye y que por ende debe cesar la privación de libertad, es que el mismo presenta retraso mental, con un coeficiente intelectual (C. I.) de 45, y que fue alumno del programa de retardo mental desde 1974 a 1981, tal como lo certifica el Instituto Panameño de Habilitación Especial (adjunta dicha certificación, la cual no está debidamente autenticada). Al respecto este Máximo Tribunal, frente a la misma pretensión, indicó en Sentencia de 27 de diciembre de 1995, lo siguiente:

> "Sin embargo, esta Superioridad debe indicar con respecto a la aludida condición especial del detenido, que la copia simple de certificación proveniente del **IPHE**, si bien hace alusión a la participación del señor **QUINTANAR** en un programa de retardo mental hasta el año 1981, tal documento no reviste la forma de un examen médico que ponga en conocimiento del Tribunal cuál es el estado o grado real de retraso que padece el señor **QUINTANAR**, lo cual resulta importante para los Tribunales correspondientes en vías de deslindar la condición del detenido, y determinar la posible inimputabilidad del mismo o la existencia de circunstancias atenuantes, al momento de decidir sobre la responsabilidad en la comisión de un ilícito por parte del ahora detenido.
>
> No compete al Tribunal de Habeas Corpus entrar a deslindar estas circunstancias, propias de la actividad jurisdiccional del Tribunal de la causa penal. Sin embargo, consideramos que en atención a la situación invocada por la promotora de la acción y madre del detenido, lo pertinente es que se diligencie **de inmediato** el examen médico-psiquiátrico de **HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ** pendiente desde el mes de septiembre, para que de resultar cierto lo esgrimido por la parte actora, el Tribunal jurisdiccional correspondiente evalúe el informe médico y considere si ello se amerita, la posibilidad de sustituir la medida cautelar aplicada al prenombrado por una menos severa, o de trasladar al detenido de la Cárcel Modelo a un centro más acorde con su condición especial.
>
> Del examen realizado esta Corporación Judicial concluye, que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman, al ser ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial".

Por ende, al no presentarse nuevos elementos probatorios que acrediten

fehacientemente que el detenido es minusválido, y que esta circunstancia atenuante lo releva de responsabilidad, este Tribunal de Habeas Corpus considera que subsisten todas las condiciones para que se mantenga la medida cautelarde detención, tales como la existencia del hecho punible y la vinculación del detenido con dicho hecho.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de HIPÓLITO QUINTANAR GÁLVEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

Cuando se pasó en lectura el proyecto de resolución que decide la acción de habeas corpus presentada por el señor Nicolás Acosta Herrera a favor de HIPÓLITO QUINTANAR, observé que si el imputado fue pupilo del Instituto Panameño de Habilitación Especial durante seis años en un programa de retardo mental porque presentaba un cuociente de inteligencia de 45, había razones suficientes para considerar que es un discapacitado mental en la categoría de inimputable, a pesar de que cursara algunos grados de la educación elemental.

Todo indica, pues, que es un caso de oligofrenia severa, con capacidad de realizar algunos actos bajo inducción, aunque manifiesta que se desempeña como carretillero. Soy de opinión que Quintanar no debiera continuar en Centro Penitenciario común de alto hacinamiento como la Cárcel Modelo, porque se presta a que sea victimizado por la población que se mantiene interna en esos lugares.

Al revisar el antecedente, se advierte que el funcionario no ha llevado a cabo diligencia alguna desde octubre de 1995 y no aparece constancia de que haya sido examinado por el Instituto de Medicina Legal para determinar su sanidad mental y capacidad de comprender la licitación de su comportamiento.

Esas omisiones no deben operar en perjuicio del sindicado.

Considero que cabe la sustitución de la medida privativa de libertad por una de atención ambulatoria en un Centro de Salud especializado del Estado.

Por lo anotado, Salvo el voto.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El señor Sócrates Gutiérrez Flores, residente en el Guabo, Distrito de Chagres, provincia de Colón, ha presentado acción de habeas corpus a favor de su hijo, **ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ** y contra la orden expedida por el **FISCAL CUARTO SUPERIOR** que lo mantiene privado de libertad desde el 13 de diciembre de 1995.

Librado el mandamiento correspondiente se recibió el Oficio N° 1089 de 25 de marzo, cuya parte pertinente reza así:

> "Con la finalidad de dar contestación a la Acción de Habeas Corpus, me permito informarles lo siguiente:
>
> **a**. Este Despacho no ordenó la detención del sumariado **ALBERTO ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**, la misma fue ordenada por parte del Personero Municipal del Distrito de Donoso, a través de la resolución de 13 de noviembre de 1995.
>
> **b**. En cuanto a los motivos y fundamento de hecho y de derecho que tuvo para ello, refirió el Personero en su orden de detención que el que se le endilga al imputado ALBERTO ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, se encuentra previsto en el Título I°, Capítulo I° del Libro Segundo del Código Penal, esto es "De los delitos Contra la Vida e Integridad Personal" y los cargos que militan en contra de éste surgen de la Diligencia de Careo habido entre los señores HÉCTOR GORDÓN MADRID y ALEXIS GORDÓN MADRID, en donde el primero refiere señalar que el señor ALBERTO ALCIDES, era una de las personas que agarraba y empujaba al difunto al momento en que era cortado con un cuchillo.
>
> Otro de los fundamentos de hecho para mantener la detención o privación de libertad, se basa en la declaración jurada de María Gómez Zúñiga, quien refiere que transcurrido cuatro (4) minutos, antes de aparecer herido el hoy occiso, observó cuando el hoy difunto MARÍO VALDÉS RODRÍGUEZ le propició 2 tajonazos al sindicado ALCIDES, quien al caer al suelo y levantarse le vio en la mano derecha un cuchillo y seguidamente se retiraron hacia la oscuridad.
>
> En cuanto al Fundamento de Derecho que tuvo para ordenar dicha detención, lo hizo en base a los artículos 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial (véase fs. 283-284).
>
> **c**. En la actualidad mantenemos detenido bajo nuestras órdenes, tanto al sumariado ALBERTO ALCIDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, así como a HÉCTOR GORDÓN MADRID (a) PEPO quienes figuran como presuntos implicados en el hecho; cuya detención también se mantuvo mediante providencia de 15 de marzo del presente año, visible a fojas 366.
>
> Dicho sindicado a través del Oficio 1090 de esta misma fecha, está siendo puesto a órdenes de esa Superioridad".

Adjunto al oficio transcrito, se remitió copia auténtica del expediente contentivo de la investigación realizada con motivo del homicidio de MARÍO VALDÉS RODRÍGUEZ, con 366 fojas útiles.

Al revisar los elementos de juicio incorporados a los autos, se advierte que este hecho delictivo tuvo lugar el 3 de septiembre de 1995, en la comunidad de Nuevo San Juan, jurisdicción del Distrito de Donoso, durante la celebración de un baile con venta de bebidas alcohólicas, sin vigilancia policiva, patrocinado por el Club de Padres de Familia de ese lugar, al que acudieron personas de las comunidades aledañas, en el que se suscitaron varias riñas, en una de las cuales Marío Valdés Rodríguez (q. e. p. d.), agredió a otras personas con su tajona y fue herido con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo que segaron su vida. El funcionario de instrucción le recibió declaración a un número crecido de personas, la mayoría de ellas indicaron que no estaban presentes cuando se produjeron los hechos que se investigan o expresaron que se encontraban en el lugar, pero realizando otras actividades y no vieron lo que pasó o se

limitaron a escuchar o repetir la versión de otras personas. En lo que respecta a la vinculación que se hace de Alberto Alcides Gutiérrez, en autos solamente aparece la declaración de María Gómez Zúñiga, quien manifestó que el muerto era pariente de su esposo y que a Alcides Gutiérrez lo conoció ese día de la fiesta y aunque presenció desde la ventana de la cocina el momento en que el difunto agredía varias veces a Alcides Gutiérrez con un garrotillo, cuando el Agente del Ministerio Público le preguntó quién era el autor de la muerte de Marío Valdés, contestó que no sabía porque no estaba presente cuando lo hirieron (fs. 204-205). Tanto el Personero como el Fiscal estimaron esta declaración como suficiente para vincular a Alberto Alcides Gutiérrez Hernández como autor del hecho investigado (fs. 366).

Tal como lo expresa el padre del detenido, en autos consta la confesión y auto-inculpación que hace Héctor Gordón, quien señala que encontrándose en la fiesta, al salir al patio, sin que mediara provocación o motivo alguno, fue agredido a garrotazos por una persona que no pudo identificar en la oscuridad y que al incorporarse del suelo sacó un cuchillo para defenderse, con el que hirió el cuerpo de su atacante y que posteriormente se dio cuenta que era Marío Valdés Gutiérrez.

Los antecedentes acopiados durante la fase instructoria demuestran que salvo la identificación de Héctor Gordón como autor de las heridas con arma blanca que le produjeron la muerte a Valdés Rodríguez, la vinculación que se hace de Alberto Alcides Gutiérrez sólo tiene el apoyo de la declaración de una persona que lo conoció ese día y que según su propia versión, no presenció el momento en que fue herido el hoy occiso -quien era pariente de su marido-, porque ambos se fueron a la parte oscura del lugar, donde no tenía alcance visual.

Si bien es cierto, que la naturaleza procesal y finalidad del habeas corpus, no conlleva la valoración probatoria con miras a la calificación delictiva y la determinación del grado de participación de las personas vinculadas al hecho punible investigado, una vez acreditada la existencia del delito basta con la aportación de algún elemento indiciario de cierta gravedad o imputación individual contra una persona para sustentar una medida cautelar personal de privación de libertad.

La etapa procesal del caso, permite al investigador o a la autoridad jurisdiccional calificadora incorporar los elementos probatorios sobre las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza probatoria de las declaraciones confusas y contradictorias que aparecen hasta el presente en el expediente, que constituye el antecedente de la presenta acción.

Por las razones anotadas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la orden de detención contra Alberto Alcides Gutiérrez Hernández y ORDENA su libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA DORA ALVENIS LLANOS, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MARINA MORALES SOTO**, en representación de la señora **DORA ALVENIS LLANOS**, presentó acción de habeas corpus contra el Director Nacional de Corrección, mediante la cual solicita que la sanción de prisión que cumple en el Centro Femenino de Rehabilitación, sea reemplazada por medidas cautelares, dado el estado actual de preñez de su representada.

Librado el mandamiento de habeas corpus la Directora Nacional de Corrección a. i. remitió su informe a través de la nota 831-DNC de 5 de marzo del presente año, mediante el cual explica que esa Dirección no ha ordenado la detención de la señora DORA ALVENIS LLANOS, ni en forma verbal ni por escrito, que ignora los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que concurrieron para su detención y que la accionante está a órdenes de ese departamento bajo custodia en el Centro Femenino de Rehabilitación, cumpliendo sentencia condenatoria impuesta por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal de Panamá, por delito contra la salud pública. Añade que el inicio del cumplimiento de dicha pena, se registró el 1° de octubre de 1993 y que la totalidad de la misma tendrá lugar el 1° de febrero de 1997.

Sostiene la licenciada Morales Soto en los hechos y consideraciones que fundamentan el libelo, que su representada cumplió los dos tercios de la pena y que en el proceso penal seguido en su contra se declaró confesa y arrepentida, pero que el Departamento de Corrección le ha negado su libertad por tratarse de un delito contra la salud pública. Además, estima que no se ha tomado en consideración el embarazo de la señora ALVENIS LLANOS, de conformidad como lo señala el artículo 52 de la Constitución. Cabe anotar que con el escrito contentivo de la acción de habeas corpus se adjuntó copia autenticada del fallo de 27 de julio de 1995, en virtud del cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la detención preventiva contra MAYRA VANESSA ANDERSON CARRERA y, tomando en cuenta su avanzado estado de embarazo, la reemplazó por medidas cautelares alternas a la detención.

El Pleno considera que las disposiciones vigentes en materia de medidas cautelares personales no son extensivas a la fase de ejecución penal, porque no participan de la misma naturaleza jurídica, ni tienen el mismo propósito. En otros países en donde se han incorporado de manera expresa alternativas a la prisión, cabe invocar su aplicación cuando se dan las condiciones y circunstancias que la ley señala.

En Panamá, son medidas alternas dentro de la ejecución penal a las penas privativas de libertad las siguientes:

a. El aplazamiento de la ejecución de la pena;

b. El reemplazo de penas cortas privativas de libertad por la amonestación y días multa;

c. La suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando se reúnan los requisitos que la ley establece;

d. El perdón del ofendido en los casos de delitos contra el honor y que se sustituye por la publicación de la sentencia condenatoria en un medio de comunicación social; y

e. La libertad condicional que ha sido regulada en Panamá como una potestad del Órgano Ejecutivo y no como un derecho que se cumple automáticamente una vez se den los requisitos establecidos en la normativa correspondiente.

En el presente caso nos encontramos ante el cumplimiento de una sentencia condenatoria que impuso como sanción la única pena privativa de libertad establecida por nuestro ordenamiento jurídico penal, o sea, la pena de prisión, la cual de acuerdo con el artículo 47 del Código Penal vigente debe cumplirse en los lugares que la ley determine.

Si bien es cierto que el artículo 85 de la excerta citada prevé el beneficio de la libertad condicional cuando se han cumplido dos tercios de la

condena impuesta y el reo dé muestras claras de buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, corresponde al Órgano Ejecutivo otorgar dicha libertad mediante resolución en la que establezca las obligaciones que debe cumplir durante ese lapso de libertad vigilada o condicionada. La ley penal en relación con el cumplimiento de las penas por mujeres embarazadas, según el artículo 75 numeral 2 del Código Penal, señala que debe diferirse hasta cuando el recién nacido cumpla seis meses, de allí que corresponda a los reglamentos internos de los centros penitenciarios adoptar las medidas más convenientes para asegurar que el nuevo ser al momento de su nacimiento tenga el soporte médico adecuado en un ambiente digno, sin peligro que asegure su viabilidad.

Como quiera que la acción de habeas corpus como tutela de la libertad personal ambulatoria, se encamina a que el tribunal correspondiente revise si la privación de libertad del accionante se ajusta a la ley, en el caso que nos ocupa, dicha detención es consecuencia de un proceso penal que culminó con una sentencia condenatoria de privación de libertad, la cual ha venido cumpliéndose y los beneficios de libertad condicional que se esgrimen corresponde decidirlo, al Órgano Ejecutivo y no al Órgano Judicial.

No obstante como en este caso se produce una causal sobreviniente de embarazo durante el proceso de ejecución de la pena, es necesario tomar en cuenta las previsiones de la ley para proteger la vida del nasciturus.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora DORA ALVENIS LLANOS y ORDENA aplazamiento de la pena hasta que la criatura haya cumplido seis meses de edad.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FELIPE CABEZA DIXON CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación, proveniente del Segundo Tribunal Superior, ha ingresado a este Despacho recurso de Habeas Corpus propuesto por la firma **Gavidia y Guerrero**, **Abogados** a favor de FELIPE CABEZA DIXON, y en contra del Fiscal Primero de Circuito de Colón, por considerar que la detención es ilegal.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

El apoderado judicial del señor **CABEZA DIXON** sustentó su pretensión bajo el argumento de que los señores Ricardo González Robles y Alcibiades González Robles fueron detenidos y conducidos a las oficinas del D. I. I. P. de la Policía de Colón, en donde fueron indagados por funcionarios de la Secretaría de Droga de Colón. Que al ser sometidos al interrogatorio ambos hermanos confiesan la comisión del delito de posesión ilícita de drogas. Que en las indagatorias, los precitados hermanos, formulan cargos contra el señor **FELIPE CABEZA DIXON**, indicando de manera contradictoria que le entregaron cinco (5) paquetes contentivos de cocaína para que supuestamente las vendiera en la ciudad de Colón.

Sigue manifestando la parte afectada, que **FELIPE CABEZA DIXON**, niega rotundamente la comisión del delito, ya que según su versión, jamás los hermanos González Robles le entregaron dichos paquetes de droga, además de que su relación con los mismos es poco amigable. Que posteriormente, carearon a los hermanos González Robles con el señor **CABEZA DIXON** y salió a relucir que las imputaciones declaradas por los señores González Robles, en perjuicio de **CABEZA**, se dieron según los careados, por razón de que fueron obligados a declarar como lo hicieron, a raíz de la manera brutal de como fueron golpeados por la Policía Nacional de Colón al momento de los interrogatorios extraoficiales.

DECISIÓN DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención indicando que al momento de ser careados los hermanos González Robles con el señor **CABEZA DIXON** proceden a retractarse de las afirmaciones que formularon contra este último, bajo el pretexto de que fueron torturados salvajemente, señalamiento éste que contradice las constancias sumariales, en las que consta que declararon libre y sin presiones ante el Ministerio Público. Que de acuerdo con lo anterior existen suficientes indicios de que **CABEZA DIXON** está vinculado al delito contra la salud pública.

DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

Este Tribunal Colegiado comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior, plasmado en la Resolución de 27 de febrero de 1996, en el sentido de que declara legal la detención del señor **FELIPE CABEZA DIXON**.

Las declaraciones rendidas por los hermanos González Robles, se verificaron de manera libre y sin presión, tal como consta en las indagatorias efectuadas ante el Ministerio Público **(ver de fojas 135 a 145 y 149 a 150)**, además de que se cumplieron las formalidades legales para tales efectos.

También salta a la vista, que existe una relación entre los hermanos González Robles y **FELIPE CABEZA DIXON**, si no es de amistad, sí se conocen. En este mismo sentido, obsérvese que el único que hace alusión, de una manera extensa y detallada **(ver fojas de 236 a 245)**, de que entre ellos las relaciones no son cordiales, es **CABEZA DIXON**, sin que se llegara a comprobar esta afirmación.

Pesa mucho el hecho de que la cantidad de droga incautada por las autoridades, es de setenta y cinco kilos, y hasta tanto no se deslinden responsabilidades y se aclaren ciertas circunstancias que debieran ser aclaradas en el proceso penal.

Por último, la Corte sugiere, sin perjuicio de la legalidad de la detención, que con respecto a los cargos de tortura y golpes efectuados por los señores **Ricardo González Robles y Alcibiades González Robles**, se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad o no de dichos cargos.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la Resolución de 27 de febrero de 1996 la cual DECLARA legal la detención de FELIPE CABEZA DIXON.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR ANTHONY WILLIAMS ROAD CONTRA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Raúl Alfredo Sejas Quintero interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus en favor de Anthony Williams Road, quien se encuentra detenido a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, con ocasión de trámite de extradición.

Cuando ya se encontraba finalizada la etapa de circulación del proyecto de sentencia, por Secretaría General se recibió escrito de desistimiento de la pretensión constitucional.

El artículo 1073 del Código Judicial reconoce al demandante el derecho a desistir de su iniciativa procesal, expresa o tácitamente, de donde resulta como consecuencia inevitable la suspensión del trámite.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada por Raúl Alfredo Sejas Quintero y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de habeas corpus propuesta por el licenciado Juan Bosco Martino a favor de GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la iniciativa procesal constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien contestó mediante oficio N° 2102-96 de 29 de febrero de 1996. En su informe de conducta, el Fiscal acepta haber ordenado la detención de Owen Billingslea, mediante resolución de 23 de noviembre de 1995 y, a renglón seguido, explica las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la medida restrictiva de la libertad corporal.

La detención de Owen guarda relación con el cargo de que el imputado, luego de recobrar su libertad tras estar recluido en la Cárcel Modelo, colaboró en la evasión de los ciudadanos colombianos Eduardo Alberto Jaramillo Torres y José Guillermo López Gómez, quienes se encuentran sindicados por la comisión de delitos relacionados con drogas, confeccionando las boletas de libertad y luego,

haciéndose pasar por abogado, los trasladó a las instalaciones de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, de donde se evadieron el 11 de noviembre de 1995.

Corresponde en este momento procesal determinar si la medida cautelar de carácter personal decretada contra Owen cumple con los requisitos que se establecen tanto en la Carta Fundamental como en el Código Judicial.

Como fundamento de derecho, el funcionario de instrucción invoca, tanto en su informe de conducta como en la resolución atacada, el artículo 263-G del Código Penal, que preceptúa lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 263 G.** *El servidor público* que tenga a su cargo la investigación, juzgamiento o custodia de las personas vinculadas con los delitos tipificados en esta Ley y que oculte, altere, sustraiga o destruya rastros, pruebas o instrumentos del delito, o *procure la evasión de la persona capturada, detenida o condenada*, será sancionado de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años" (cursivas de la Corte).

La norma transcrita incrimina la conducta de funcionarios públicos responsables por la investigación, juzgamiento o custodia de personas involucradas en la comisión de delitos relacionados con sustancias ilícitas, situación que, a todas luces, no es la del sindicado Owen.

La conducta desplegada por el imputado, al prestar su colaboración para que, sin violencia, se produjera la evasión de los ciudadanos colombianos López Gómez y Jaramillo Torres, usurpando funciones públicas, puede ser encuadrada en dos tipos penales (arts. 343 y 366 del Código Penal), y en ambos lleva aparejada pena mínima de 6 meses de prisión, por lo que la detención preventiva se produce en violación del mandato expreso del artículo 2148 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de Gilberto Owen Billingslea Dorati y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS DELGADO CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Euldarin Asprilla ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de LUIS CARLOS DELGADO y contra el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Manifiesta la parte actora que el señor Delgado fue detenido el 25 de enero de 1996, por agentes de la división de narcóticos de la Policía Nacional, en su residencia ubicada en San Joaquín. Señala también, que desde el momento de su

detención el señor Delgado declaró ser propietario de la droga incautada, y aceptó ser consumidor de Cocaína desde hace más de seis años.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

> "A. La orden de detención del ciudadano LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de fecha veintiséis (26) de enero de 1996. (Fs. 23-25)
>
> B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, se reflejan en que el día 25 de enero de 1996, se recibió llamada telefónica anónima en el Departamento de Anti Drogas de la Policía Nacional (D. I. I. P.) de que se estaba efectuando una entrega de sustancia ilícita (droga) en el Sector de San Joaquín, procediendo a solicitar a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas un Secretario y trasladarse a la residencia N° D-55, ubicada en la Calle Principal de San Joaquín. Al llegar al inmueble mencionado se encontraban presentes la señora LUCILA HURTADO TORRES, quien se identificó como la dueña de la residencia, la señora Luzmila Judith Hurtado Torres, el señor FRANCISCO AMAGUE CAMARENA, un menor de edad quien se identificó como ROLANDO ZUÑIGA y que posteriormente se verificó que era mayor de edad y que respondía al nombre de ALBERTO BOLÍVAR HURTADO y LUIS CARLOS DELGADO.
>
> Al efectuar el registro a la residencia se pudo encontrar en la Sala de la residencia, en una esquina debajo de un aire acondicionado, un sobre o envoltorio de plástico transparente, que contenía en su interior una sustancia en forma de polvo de color blanco, que se presume sea droga (cocaína) y que estaba encima de la cédula del señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO y que al momento en que se le solicitó la cédula, dijo que se le había extraviado.
>
> Al momento de rendir declaración indagatoria LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, aceptó la responsabilidad de la droga incautada, dice ser consumidor desde hace aproximadamente cinco años, Manifiesta que la sustancia se la regaló un muchacho que conoce por "CHOLO". Expresó también que se encontraba en esa casa desde fines del mes de noviembre tratando de conseguir trabajo y no ha sido penado ni investigado por delito alguno.
>
> El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> El resultado de las muestras analizadas resultaron POSITIVAS, para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 2,31 Gramos. (Fs. 35).
>
> C. El señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Cárcel Modelo, a órdenes de este Despacho, mediante el Oficio 1130 de 29 de enero de 1996, quien a partir de este momento es puesto a disposición de ese Augusto Tribunal, mediante el Oficio 2486-96 de 7 de marzo de 1996". (Fs. 5-6).

Tal como lo afirma el funcionario instructor, mediante providencia de 26 de enero de 1996 se dispuso recibirle declaración indagatoria a LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, diligencia en la cual el imputado aceptó la posesión de la sustancia ilícita pero agregó que tenía la droga en su poder porque un amigo se la había regalado, ya que él es consumidor desde hace varios años. (fs. 17-18 del sumario).

A fojas 35 del sumario se lee el Dictamen Pericial del Laboratorio Técnico

Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual se afirma que la droga incautada es **COCAÍNA** y pesa 2.31 gramos.

También consta en las sumarias que el Instituto de Medicina Legal, Departamento de Psiquiatría Forense, dictaminó que el sindicado no posee evidencia médica de dependencia a droga alguna (fs. 43).

Los hechos investigados vinculan al señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO con el delito contra la Salud Pública, y las circunstancias que rodearon la incautación de la droga y su peso, configuran el delito tipificado en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Estas afirmaciones se hacen en esta etapa incipiente de la investigación sin perjuicio de que sean posteriormente desvirtuadas con nuevas pruebas que se alleguen a los autos.

Por lo expuesto, estima el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que la orden de detención decretada contra el señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad ambulatoria y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor LUIS CARLOS DELGADO CASTILLO, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante diligencia fechada el 26 de enero de 1996 por delito contra la Salud Pública, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUSTAVO ALBERTO PITTY PORTER EN REPRESENTACIÓN DE JORGE CHAVARRÍA, NAPOLEÓN CHAVARRÍA, GEORGINA CHAVARRÍA Y OTROS, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° DEL DECRETO N° 8, DE 31 DE FEBRERO DE 1972, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N° 17.041, DE 19 DE FEBRERO DE 1972. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gustavo Alberto Pitty Porter, ha interpuesto ante el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia, en nombre y representación de los señores JORGE CHAVARRÍA, NAPOLEÓN CHAVARRÍA, GEORGINA CHAVARRÍA y OTROS, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4° y 6° del Decreto N° 8, de 31 de enero de 1972, expedido por medio del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del cual se "ordena la expropiación para los fines de la Reforma Agraria de la Finca N° 2483, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, al Tomo 50, Folio 102, Sección de Panamá", y que fuera publicado en la G. O. N° 17.041, de 19 de febrero del mismo año. Dicho Decreto fue modificado, posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo N° 114, de 24 de octubre de 1974, tal como consta en la G. O. N°, 17.723, de 18 de noviembre de 1974.

Cumplidos los trámites establecidos en los artículos 2554 y concordantes del Código Judicial, el proceso está listo para resolver, y a ello se procede previas las siguientes consideraciones.

I. LA NORMA ACUSADA

A través de su demanda el actor afirma la inconstitucionalidad de los artículos 4° y 6° del Decreto Ejecutivo N° 8 de 1972 antes mencionado, cuyo texto se copia a continuación:

"ARTÍCULO 4°

> Ordénase pagar en bonos agrarios a los que aparecen inscritos como propietarios o acrediten derechos como tales, en la proporción correspondiente, en concepto de indemnización, la suma que resulte una vez se haya medido la finca, y en consecuencia se conozca la superficie exacta de la misma y se pueda calcular el valor catastral promedio de la finca comprendido entre el 27 de Diciembre de 1956 y el 12 de agosto de 1971".

"ARTÍCULO 6°

> Encárguese a la Contraloría General de la República para que cancele el valor de la indemnización tan pronto se realize (sic) la medición de la finca y se conozca la superficie resultante".

II. LA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El apoderado judicial de los demandantes asegura que los preceptos transcritos son violatorios de los artículos 17 y 31 de la "Constitución originaria de 1972", que corresponden actualmente a los artículos 17 y 32 después de las reformas introducidas a la Carta Fundamental.

El actor comienza explicando la pretendida infracción cometida por el artículo 6° del Decreto N° 8 de 1972 contra el artículo 32 de la Constitución que contiene la garantía fundamental del debido proceso, y al respecto expresa de la norma impugnada que cuando el Estado expropia por razón de **interés social urgente** puede ocupar inmediatamente la propiedad, pero que la indemnización "no puede ser fijada ni unilateral ni arbitrariamente por medio de un Decreto, tal como se fijó en el Acto ahora acusado de inconstitucional"; sino que el aspecto de la indemnización tiene que ser ventilada en un juicio ante un tribunal en el que la persona afectada con la medida sea parte y tenga la oportunidad de oponerse, y de presentar las pruebas pertinentes para determinar el justo y real valor de su propiedad. Se ha violado, pues, el trámite de la "decisión judicial de la indemnización", y para fundamentar su dicho se refiere al artículo 3° de la Ley 57, de 30 de septiembre de 1946, que desarrolla el artículo 46 y también el 49 de la Constitución de 1946, que tratan, en su orden, de la expropiación ordinaria y la extraordinaria.

En cuanto a la infracción del artículo 17 constitucional señala el demandante que esta violación se ha producido vinculada a la transgresión del artículo 31 sobre el debido proceso, ya que no obstante el contenido programático del primero, esta Corporación de Justicia ha expresado que esa norma puede ser transgredida si es relacionada con otra norma de la Carta Fundamental que haya sido violada. Añade extractos de un fallo emitido por el Pleno fechado el 23 de noviembre de 1992, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la firma forense Galindo, Arias y López en representación de José Antonio Ruiz y otros, que declara inconstitucional un decreto semejante al impugnado por determinar la indemnización por causa de una expropiación; al igual que otros precedentes de esta Corporación de 19 de noviembre de 1993 y 31 de enero de 1994.

III. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista N° 45, de 31 de enero de 1994, que corre de fojas 19 hasta la 31 inclusive del expediente, emitió su dictamen en torno a este negocio constitucional expresando su conformidad con la pretensión del demandante, por lo que solicita respetuosamente al Pleno que acceda a la declaración impetrada.

En efecto, la funcionaria del Ministerio Público opina que se ha demostrado la infracción cometida por el Decreto impugnado contra los artículos 17 y 32 de la Carta Fundamental, porque, con respecto a este último sobre el debido proceso, el Órgano Ejecutivo sólo está facultado por la Ley para ocupar el bien expropiado, pero no para fijar de manera unilateral la indemnización correspondiente, lo cual "requiere de un proceso judicial en el cual el Juez establecerá la cantidad que deberá pagarse en concepto de indemnización". Respecto del artículo 17 dice la enunciada funcionaria que la autoridad al haber fijado unilateralmente el monto de la indemnización en forma diferente a la establecida en la Ley 57 de 1947, desconoció su deber de cumplir la Constitución y la Ley.

IV. DECISIÓN DEL PLENO

Es importante acotar antes de analizar los cargos de violación invocados contra los artículos 32 y 17 de la Carta Política, que la presente demanda de inconstitucionalidad está dirigida contra dos artículos contenidos en el Decreto Ejecutivo N° 8, de 31 de enero de 1972, o sea, un acto administrativo proferido antes que la actual constitución fuera reformada; sin embargo, la doctrina del bloque de constitucionalidad permite que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos expedidos durante la vigencia de normas constitucionales anteriores, sobre todo cuando los preceptos pertinentes no han sufrido alteraciones sustanciales, por ejemplo, el presente caso en que los artículos 17 y 31 del texto original de la Constitución de 1972 sólo han variado su numeración pero no su tenor literal y contenido.

De la lectura de la demanda se desprende que el actor cuestiona la constitucionalidad de los artículos 4° y 6° del Decreto Ejecutivo mencionado, porque fijan de forma unilateral el monto de la indemnización en concepto de la expropiación extraordinaria efectuada para los fines de la Reforma Agraria de la finca N° 2483, inscrita en el Registro Público, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, al tomo 50, folio 102, que era propiedad de los demandantes.

Cabe recordar, que el Pleno se ha pronunciado en varias ocasiones en torno a Decretos de expropiación como el ahora impugnado, y ha declarado inconstitucionales algunos artículos de los mismos, por infringir la garantía fundamental del debido proceso, contenida en el artículo 32 de la Carta Magna. Vale, pues, en este sentido, reiterar el criterio externado en la sentencia de 19 de noviembre de 1993, en la que previa exposición minuciosa de los antecedentes constitucionales y legales que han regido sobre la figura de la expropiación en nuestro derecho, se expuso lo siguiente, acerca de las particularidades jurídicas y procedimiento a seguir en caso de una expropiación extraordinaria establecido en la Ley:

> "... para que la expropiación extraordinaria tenga lugar, no se requiere que una Ley fije los motivos de utilidad pública que deban satisfacerse, **sino que el Ejecutivo está facultado para decretarla en caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente que exija medidas rápidas.** En este caso y a diferencia de la expropiación ordinaria, el Ejecutivo puede ocuparla inmediatamente el bien expropiado sin siquiera haber pagado la indemnización, pues ésta puede ser pagada con posterioridad al acto de expropiación y ocupación del bien.
>
> ... Ahora bien, estando vigente la Constitución de 1946, la Asamblea Nacional de Panamá expidió la Ley 57 de 30 de septiembre de 1946, a través de la cual se desarrollaba el artículo 46 de la Constitución Nacional, que regulaba la expropiación ordinaria. Sin embargo, aun cuando la mencionada ley estaba dirigida a desarrollar el artículo

> 46 de esa Constitución, lo cierto es que en el articulo 3 no sólo estableció el procedimiento que debía seguirse para la expropiación ordinaria, sino que también desarrolló la expropiación extraordinaria que figuraba en el artículo 49 de la Constitución de 1946. El texto del referido artículo 3 es del siguiente tenor:
>
> 'Artículo 3. Cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma. Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la nación o el municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda ...' (la subraya es del Pleno).
>
> Al analizar el texto anterior, se deduce que en caso de que fuese necesario decretar una expropiación extraordinaria (por el hecho de que se presentaba alguna de las condiciones que daban lugar a la adopción de una medida como esta), el Ejecutivo estaba facultado para expedir el decreto de expropiación, y si no había pagarle en concepto de indemnización, el gobierno estaba facultado para proceder a ocupar el bien expropiado, pero debía entablar un juicio para que un juez fijara el monto de la indemnización. ...
>
> En otras palabras, el Ejecutivo podía expropiar el bien de la sociedad Desarrollo de Cermeño, S. A., pero no podía fijar unilateralmente el monto de la indemnización que debía recibir el expropiado, toda vez que, al no haber mediado acuerdo sobre este extremo entre el gobierno y el dueño del bien expropiado, **era imprescindible que se entablara un proceso con el propósito de que un juez estableciera el monto de la indemnización**".

En efecto, siendo consecuente con tal pronunciamiento, en el caso bajo examen se evidencia que tampoco hubo falta de acuerdo entre los propietarios del bien expropiado y el Gobierno, sobre el monto de la indemnización, por lo que ante la ocurrencia de tal hecho previsto en la Ley, lo correcto era someter esa diferencia, a instancia del Gobierno o autoridad que solicita la medida expropiatoria por causa de interés social urgente, a un tribunal ordinario para que mediante un proceso fijara el monto de la compensación razonable que debe recibir el dueño del bien por la compraventa forzosa.

Este procedimiento, en caso de desacuerdo entre las partes, está claramente determinado en el artículo 3 ya visto de la Ley 57 de 1946, que desarrolla a la sazón los artículos 46 y 49 de la Constitución de 1946, y también los de la actual Constitución referentes en su orden a la expropiación ordinaria y extraordinaria, porque como ya ha señalado esta Máxima Corporación, no existen diferencias normativas sustanciales entre aquellos artículos de la Constitución de 1946 y los de la actual después de haber sido modificada, que tratan esas materias (45 y 47 respectivamente), y "al no haber perdido vigor el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 por la entrada en vigencia de la Constitución de 1972, dicho artículo ... también desarrolló los artículos 44 y 47 de la Constitución originaria de 1972 y, desde este punto de vista, había que tomarlo en consideración al momento en que se expidió el Decreto de expropiación parcialmente impugnado" (Sentencia de 19 de noviembre de 1993).

A juicio del Pleno, las normas acusadas han violado el debido proceso, porque a través de un Decreto el Órgano Ejecutivo en ejercicio de la facultad constitucional incuestionable que tiene para expropiar bienes de propiedad privada, ya sea en forma ordinaria o extraordinaria, en la ejecución de la

expropiación extraordinaria para los fines señalados, no cumplió el trámite delimitado en la Ley para estos casos, privando a los antiguos propietarios de acudir a los tribunales para ser escuchados a raíz del diferendo derivado de la falta de acuerdo en la fijación del monto de la indemnización.

En otras palabras, la determinación por el acto impugnado de la fijación, con exclusión de otra voluntad distinta a la del ente público, de la indemnización equivalente a bonos agrarios en la "proporción correspondiente" (art. 4° de decreto) y la forma de pago de dicho precio (art. 6 ibídem), es violatorio del debido trámite establecido en el artículo 3° de la Ley 57 de 1946, y garantizado por la Carta Magna en su artículo 31 de la Constitución originaria de 1972, que corresponde al artículo 32 de la Constitución vigente..

También procede el cargo de inconstitucionalidad por violación del artículo 17 constitucional, pues a pesar de ser una norma programática, su violación ha sido vinculada a la infracción del artículo 32 de la Constitución Política que consagra derechos susceptibles de ser conculcados por las autoridades de la República quienes, de conformidad con esta norma constitucional, han sido instituidas para asegurar los derechos individuales y sociales a los ciudadanos.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONALES los artículos 4° y 6° del Decreto Ejecutivo N° 8, de 31 de enero de 1972, tal cual fue modificado por el Decreto Ejecutivo N° 114, de 18 de noviembre de 1974, emitido por el denominado en aquella época Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ELIGIO A. SALAS Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Salvamos respetuosamente el voto.

Nos referimos a las particularidades del caso:

1. Los demandantes en este proceso de inconstitucionalidad comparecen como personas afectadas por razón de expropiación de la Finca 2483, inscrita al Tomo 50, Folio 102, Provincia de Panamá, del Registro Público.

2. Afirman ser herederos de José Nicolás Chavarría, aún cuando no hay constancia de ello en autos. Como tampoco de que el señor Chavarría fuera propietario de la finca.

3. A la expropiación se refieren los Decretos N° 8 de 31 de enero de 1972, y N° 114, de 24 de octubre de 1974, ambos del Ejecutivo, integrado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que luego se llamó Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

4. Es decir, la expropiación ocurrió en 1974.

5. La inconstitucionalidad se pide porque "nunca se dio el juicio de expropiación", lo que los demandantes califican como violación del principio constitucional del debido proceso (f.6, hecho 4° de la demanda).

6. La presente demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 9 de

noviembre de 1974; o sea 20 años después.

7. La tesis de la sentencia, que accede a la declaración de inconstitucionalidad, es que el monto de la indemnización se fijó de forma unilateral (Págs. 4 y 5), lo que viola el artículo 32 de la Constitución.

8. Que en casos de interés social urgente que exija medida rápida, el Ejecutivo puede ocupar inmediatamente el bien expropiado sin haber pagado la indemnización, la que se puede pagar después (cita, pág. 5).

9. Que la situación se rige por la Ley 57 de 1946, de acuerdo con la cual, en casos de interés social urgente, si no se convenía el precio entre el dueño del bien expropiado y el Ejecutivo, el Gobierno "debía entablar un juicio para que el Juez fijara el monto de la indemnización" (cita, pág. 6).

10. La disposición legal en que esta tesis se basa dice textualmente en su parte pertinente: "ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según procede..." (Subraya la Corte).

11. En autos no consta cuanto se pagó, ni siquiera si se pagó o no. Tampoco si hubo o no acuerdo. Nada se afirma en los hechos de la demanda.

12. La disposición del Decreto N° 8 cuya declaración de inconstitucionalidad se pide no estableció precio. Ordena "pagar en bonos agrarios ... en la proporción correspondiente, en concepto de indemnización, la suma que resulte una vez que se haya medido la finca ... y se pueda calcular el valor catastral promedio de la finca" en los últimos 15 años.

Discrepamos del criterio expuesto en el proyecto de sentencia, que decreta la inconstitucionalidad de los artículos 4° y 6° de los Decretos de expropiación. El primero es el que se acaba de transcribir en el párrafo anterior; y el segundo el que ordena a la Contraloría cancelar el valor de la indemnización "tan pronto se realice la medición de la finca y se conozca la superficie resultante".

La vía de los juicios de inconstitucionalidad en nuestro criterio no son para ventilar intereses particulares patrimoniales mientras no se hayan agotado las vías de la jurisdicción ordinaria o especial como la contencioso administrativa, que el sistema jurídico pone a la disposición de los particulares.

En el presente caso, no se está frente a desconocimiento de las garantías procesales. La situación es de ausencia del proceso porque los interesados no han acudido a los tribunales de justicia.

La piedra angular de todo el sistema judicial es que la persona que se crea titular de un derecho debe iniciar el proceso correspondiente (artículo 459 del Código Judicial).

En 1974, haciendo caso omiso de si el Ejecutivo debía presentar la demanda para que un tribunal fijara el precio; es evidentemente cierto que el o los propietarios de la finca podían ejercitar la acción correspondiente. No es el momento para resolver si por la jurisdicción civil ordinaria o por la contencioso administrativa. Y del hecho de su omisión se derivan importantes consecuencias jurídicas por el transcurso del tiempo.

Se llama la atención de que la disposición legal de la Ley 57 de 1946, habla de sentencia, pero no de quien es la iniciativa del proceso en el cual se dicte.

Por lo demás, como lo consagra expresamente el Código Judicial actual, los procesos sólo pueden iniciarse a petición de parte (Art. 457). Esto, aunque no declarado, era igual durante la vigencia del Código anterior. Y sucede lo mismo con el artículo 459 ibídem que abre las puertas de los tribunales a toda persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión.

Esta realidad jurídica pone en juego una serie de mecanismos o instituciones que atienden las complejidades de las relaciones en sociedad. Por ello se hace indispensable que los interesados acudan a las vías que la jurisdicción ordinaria o especial la administración de justicia pone a su disposición para ventilar intereses particulares. Los procesos de inconstitucionalidad no son propios para considerar el juego de intereses en las relaciones económicas de la sociedad actual.

Excepcionalmente, sólo cuando entran en juego garantías procesales que la Constitución consagra, puede plantearse un asunto con ese carácter, en la jurisdicción constitucional.

No es lo que ocurre en esta oportunidad, cuando se trata de que los interesados no acuden a los tribunales por la vía ordinaria, y pretenden después de 20 años reclamar mediante demanda constitucional.

Por estas razones salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RAMÍREZ & CIGARRUISTA EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL, CONTRA LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 6 DEL DECRETO N° 3, DE 2 DE ENERO DE 1974, EMITIDO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA N° 2377. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Ramírez & Cigarruista, en nombre y representación de ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 3, de 2 de enero de 1974, emitido por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante el cual se ordena la expropiación de la finca N° 2377, de la cual era dueño el demandante.

Practicados los trámites que establecen los artículos 2554 y concordantes del Código Judicial, el negocio está en el término para resolver, y a ello procede el Pleno previas las siguientes consideraciones.

I. LA NORMA ACUSADA

El actor acusa en su demanda de inconstitucionales los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 3, de 2 de enero de 1974, publicado en la Gaceta Oficial N° 17.514, de 17 de enero de dicho año, cuyo texto se transcribe a continuación:

> "ARTÍCULO 4° Ordénase pagar en Bonos Agrarios al 1% de interés anual y redimibles en plazo máximo de 40 años, en concepto de indemnización, en la proporción correspondiente, a los que aparecen inscritos como propietarios o acrediten derechos como tales la suma de B/.8,075.00.
>
> ARTÍCULO 5° Ordénase descontar a favor del Tesoro Nacional, del monto de la indemnización, las sumas que se adeuden al Fisco en concepto de impuestos atrasados sobre el inmueble expropiado.
>
> ARTÍCULO 6° Ordénase citar al Representante Legal del Banco de Desarrollo Agropecuario, a fin de que haga efectivo su crédito,

> hasta el monto de la obligación. En caso de quedar algún remanente, el mismo debe ser entregado a los que aparecen inscritos como propietarios o acrediten derechos como tales".

II. LA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La firma Forense Ramírez & Cigarruista afirma que los artículos transcritos son violatorios del artículo 46 del la Constitución de 1972 antes de ser modificada por los actos reformatorios de 1978 y subsiguientes, el cual establece la figura conocida como expropiación extraordinaria. El texto de dicha norma corresponde al del artículo 47 de la Constitución vigente y preceptúa lo siguiente:

> "ARTÍCULO 46. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.
>
> Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será solo por el tiempo que duren las circunstancias que las hubieren causado.
>
> El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo y por los daños y perjuicios causados por la expropiación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación".

Antes de entrar a exponer el concepto de la violación, el actor niega que los reales motivos de la expropiación que lo afectara hubiese sido el interés social urgente, ya que afirma que de las 152 hectáreas que tenía la finca 2377 al consultar el Registro Público se verifica que se han hecho varias segregaciones, de las cuales anota un número de siete y comenta que en el año de 1989, durante la crisis política y económica que vivió la República, se titularon más de 53 hectáreas a la sociedad HATO GRANDE, S. A., es decir, "que a una sociedad anónima le entregan, 15 años después de la expropiación, más de un tercio de la finca expropiada en 1974, por razones de interés social urgente, como lo era la ocupación precaria de las tierras privadas" (foja 16). De ahí que el demandante se pregunta: dónde estaba el interés social urgente para expropiar una finca de 150 hectáreas, si transcurridos 21 años desde entonces únicamente se ha entregado menos de un tercio a quienes podrían calificar como precaristas, más de un tercio a una sociedad anónima y 8,573.45 metros cuadrados a una entidad pública de investigación agropecuaria?

No obstante, como el objeto de la demanda no es cuestionar la potestad del Ejecutivo para decretar una expropiación por interés social urgente, se aboca al análisis de la constitucionalidad de que dicho Órgano del Estado pueda fijar unilateralmente el monto de la indemnización como consecuencia de ese tipo de expropiación, refiriéndose a un fallo emitido por esta Máxima Corporación de Justicia Constitucional el 26 de noviembre de 1993, que cita el artículo 3 de la Ley 57, de 30 de septiembre de 1946, por el cual se desarrolla el artículo 49 de la Constitución promulgada en ese año en torno a la expropiación.

Afirma el demandante que las normas impugnadas infringen los artículos 32, 44, 287 y 17 de la Constitución, que corresponden a los artículos 31, 43, 251 y 17 del texto original antes de las reformas introducidas a la Constitución Política de 1972.

Con respecto a la violación del artículo 32, que consagra el principio del debido proceso legal, manifiesta el actor que la expropiación fundada en el artículo 46 de la Constitución de 1972 (correspondiente al 47 en la actualidad), esto es, por causa de un interés social urgente, debió efectuarse de acuerdo con el procedimiento normado en el artículo 3 de la referida Ley 57 de 30 de septiembre de 1946, por lo que el gobierno debió ajustarse a los trámites del artículo mencionado, observando, según conceptúa, los pasos siguientes:

1. La entidad que necesitaba la finca, debía llamar al propietario para notificarle de su propósito;

2. Las partes, el Ejecutivo y el propietario, debían de mutuo acuerdo señalar el precio razonable de la finca;

3. Si el gobierno y el propietario, no llegaban a convenir en el valor de la propiedad, la Nación podía ocupar inmediatamente la propiedad, y promover el juicio de expropiación;

4. Ocupado el bien, el Ejecutivo debía pagar en los términos de la sentencia.

Conforme lo anterior manifiesta el demandante que no hubo acuerdo entre las partes sobre el valor de la finca 2377 expropiada, y el Ejecutivo omitió dar cumplimiento a lo prescrito por la norma (Art. 3 de la Ley 57), que se refiere a la instauración del respectivo proceso expropiatorio, que por estar vigente en aquella fecha el Código Judicial de 1917, le era aplicable de esta excerta las disposiciones contenidas en su Libro II, Título VII, Capítulo IV.

Concluye el apoderado judicial del actor que los artículos 4 y 6 del Decreto N° 3 de 1974 impugnados, al fijar de forma unilateral el monto de la indemnización (B/.4,051.50) en concepto de la expropiación de la finca N° 2377 y la forma de pagarla (bonos a un interés de 1% anual redimibles en 40 años), violan en forma directa por omisión el artículo 32 de la Constitución Política, equivalente al 31 del texto original de la Constitución de 1972.

Además, la omisión del debido trámite se configura, según el accionante, porque él no tuvo la oportunidad de ser oído en juicio por la autoridad competente, ni la ocasión de obtener la tutela de su derecho de propiedad, ni de producir prueba en abono de su defensa; a colación de lo que cita sendas sentencias proferidas por esta Corporación el 19 y 26 de noviembre de 1993, mediante las cuales el Pleno estimó violado el debido proceso en casos similares al ahora ventilado, en que el Ejecutivo, por medio de Decreto, fijó unilateralmente el monto de la indemnización dentro de una expropiación extraordinaria.

El demandante también alega la infracción del artículo 43 constitucional (hoy 44), esta norma establece que se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales. Su violación se ha producido en forma directa por omisión, ya que la autoridad al llevar a cabo la medida de expropiación de la finca antes identificada, incumplió su obligación de "garantizar la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley" (foja 22).

Con relación a la alegada infracción del artículo 287 de la Constitución que prohíbe la intransferibilidad de los bienes y las obligaciones irredimibles por más de 20 años (excepción hecha del patrimonio familiar y tierras destinadas a la reserva indígena), alega el impugnante que cuando el artículo 4 del Decreto N° 3 de 1974 dispone que se pagará la indemnización del bien expropiado mediante bonos agrarios redimibles en plazo máximo de 40 años, se desconoce, por omisión, el precepto constitucional indicado, porque el término señalado excede del límite de 20 años establecido en la Constitución para la redención de las obligaciones.

Según el actor el artículo 4 del Decreto N° 3 también se relaciona con el 5 y el 6 de dicho Decreto, pues el uno señala la deducción que debe hacerse al monto de la indemnización, y el otro, la entidad pública a la cual debe pagarse; y es el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 el que norma el procedimiento a seguir en estos casos, con la particularidad de que no hubo acuerdo entre las partes en cuanto a la indemnización ni tampoco se instauró el juicio expropiatorio ante el tribunal competente para que dilucidara la controversia.

Por último, afirma el demandante que se ha violado en forma directa por comisión el artículo 17 de la Carta Magna, el cual atribuye a las autoridades de la República el deber de proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo jurisdicción; asegurar la efectividad de los deberes y derechos individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Según él la transgresión de

esta norma se ha producido desde el momento en que el Órgano Ejecutivo dictó el Decreto N° 3 de 1974 en violación de los artículos 32, 44 y 287 de la Carta Política, con el que "no protegió los bienes de nuestro representado; no le aseguró la efectividad de sus derechos individuales, como lo son: la propiedad privada, el debido proceso de Ley y que las obligaciones son redimibles en un plazo no mayor de 20 años; y, no cumplió ni con la Constitución ni con la Ley".

III. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 469, de 2 de noviembre de 1995, la Procuradora de la Administración emitió concepto en sentido favorable a la pretensión del demandante, salvo en lo que respecta al argumento esbozado por el impugnante en cuanto a la violación de los artículos 43 y 46 de la Constitución (hoy 44 y 47), porque en su concepto los derechos que tiene el dueño de un bien no pueden ejercerse de forma absoluta, debido a que la propiedad está llamada a cumplir principalmente una función social, de allí que el Estado pueda proceder a hacer suya coactivamente ésta "para que prevalezca la utilidad pública o el beneficio social". Sin embargo, la funcionaria solicita respetuosamente al Pleno que acceda a la declaratoria de inconstitucionalidad impetrada.

IV. DECISIÓN DEL PLENO

Observa el Pleno que el demandante invoca en su demanda la violación de normas jurídicas contenidas en la Constitución Política de 1972 antes de ser modificada en los años 1978, 1983 y 1994. Estos artículos son, en el orden en que han sido señalados, el 31, 43, 251 y 17 que equivalen actualmente al 32, 44, 287 y 17, respectivamente.

En casos similares al presente el Pleno ha afirmado que si bien las normas impugnadas fueron emitidas cuando la actual Constitución no había sido reformada, la doctrina del bloque de constitucionalidad permite que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos expedidos durante la vigencia de otras normas constitucionales, sobre todo cuando el contenido de los preceptos constitucionales pertinentes no han sufrido alteraciones sustanciales, como ocurre en el caso que nos ocupa (Cfr. Sentencia de 12 de agosto de 1994, R.J., p. 104. Igualmente, Sentencia de 31 de enero de 1994, R.J., p. 95; Sentencias de 19 y 26 de noviembre de 1993, R.J., p. 64 y 67, respectivamente).

Con fundamento en dicha doctrina jurisprudencial procede el Pleno a analizar las infracciones invocadas contra aquellos textos constitucionales.

Con respecto al primer cargo de violación a la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución vigente, a juicio del Pleno sí se ha configurado la conculcación de la norma superior habida cuenta que no se siguió en este asunto el procedimiento contemplado en la Ley 57, de 30 de noviembre de 1946, dictada en desarrollo de los artículos 46 y 49 de la Constitución de 1946 referentes, en su orden, a la expropiación ordinaria y extraordinaria. El artículo 3 de esa Ley dispone lo siguiente en materia de procedimiento expropiatorio:

> "Artículo 3°. Cuando el Estado necesite en todo o en parte una finca de propiedad particular para una obra de utilidad pública o de beneficio social, llamará al propietario y le notificará el propósito del gobierno, a fin de señalar, de mutuo acuerdo, el precio razonable de la misma. Si el propietario y el representante del gobierno no llegasen a convenir en el valor de la propiedad, la Nación promoverá el juicio de expropiación correspondiente. En caso de necesidad urgente al tenor del artículo 49 de la Constitución el gobierno procederá a tomar posesión del bien inmediatamente.
>
> Ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la nación o el municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia, según proceda.
>
> En caso de acción judicial, el Ministro de Gobierno y Justicia impartirá instrucciones a los representantes de la Nación a fin de

> que gestione ante el tribunal donde sea instaurada la demanda, que en la sentencia respectiva se declare, también el aumento del valor adquirido por la propiedad beneficiada por razón de la vía pública o de la obra ejecutada o en proyecto (plus valía).
>
> Parágrafo: En todos los casos de indemnización por expropiación se establecerán las compensaciones a que haya lugar al tenor del artículo".

Como se observa este precepto no sólo se refiere a la expropiación ordinaria o común que contemplaba el artículo 46 de la Constitución de 1946, sino también a la expropiación extraordinaria o de urgencia incluida en el artículo 49 de aquella Carta Fundamental, las cuales están actualmente consagradas en los artículos 45 y 47 de la Constitución vigente.

Entre las razones de la expropiación extraordinaria que afectó a los señores ALEJANDRO ANTONIO DUQUE y ROSARIO INÉS SOUSA JUSTINIANI, quienes eran los propietarios de la finca N° 2377, inscrita en el Registro Público al tomo 289, folio 132, Sección del Propiedad, Provincia de Coclé, tal como consta al reverso de fojas 9 del expediente en certificación expedida por el Registro Público, se consigna en la parte motiva del Decreto N° 3 de 1974 el grave problema que representaba en aquel tiempo la "ocupación precaria de tierras". De ahí que según el artículo 1° del mencionado decreto se dispuso la expropiación a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la ocupación inmediata para los fines de la Reforma Agraria, "por motivo de interés social urgente definidos en los artículos 46 de la Constitución Nacional y 32 del Código Agrario, del globo de terreno que al día 24 de septiembre de 1973, aparece como Finca N° 2377 ..."

Vale sobre este aspecto del debido proceso reiterar los conceptos vertidos por esta Máxima Corporación de Justicia en la Sentencia de 12 de agosto ya reseñada, cuando analizó precisamente el artículo 3 de la Ley 57 de 1946. Dijo el Pleno literalmente:

> "... se deduce de que en caso de que fuese necesario decretar una expropiación extraordinaria (por el hecho de que se presentaba alguna de las condiciones que daban lugar a la adopción de una medida como ésta), el Ejecutivo estaba facultado para expedir el decreto de expropiación, y si no había convenido previamente con el expropiado sobre la suma a pagar en concepto de indemnización, podía procederse a ocupar el bien expropiado, pero debía entablar un juicio para que un juez fijara el monto de la indemnización.
>
> Lo anotado tiene vital relevancia, toda vez que los artículos 46 y 49 de la Constitución de 1946 corresponden, respectivamente, a los artículos 44 y 46 de la Constitución originaria de 1972, es decir al texto de la Constitución que estaba vigente en abril de 1974 cuando se dictó el decreto parcialmente impugnado.
>
> En atención a que entre los citados preceptos de la Constitución de 1946 y los de la Constitución originaria de 1972 no existen diferencias normativas sustanciales, esta Corporación Judicial concluye que, al no haber perdido vigor el artículo 3 de la Ley 57 de 1946 por la entrada en vigencia de la Constitución de 1972, dicho artículo también desarrolló los artículo 44 y 46 de la Constitución originaria de 1972 y, debió ser atendido al momento en que se expidió el Decreto de Expropiación parcialmente impugnado.
>
> Esta superioridad es del criterio que en este caso se justificaron las razones para proceder a decretar una expropiación extraordinaria. No entra en discusión que el Ejecutivo podía ordenar tanto la expropiación como la ocupación inmediata del terreno, como hizo, sin necesidad de que en un juicio previo se decretara la expropiación, como de alguna manera ha sugerido el demandante.
>
> **Sin embargo, lo que no podía hacer el ejecutivo era fijar**

unilateralmente la suma que correspondía al expropiado en concepto de indemnización, como hizo en el artículo 4° del Decreto impugnado.

Recientemente esta Corporación Judicial, al atender una iniciativa procesal constitucional de esta misma naturaleza, y examinar la figura de la expropiación extraordinaria, en sentencia de 19 de noviembre de 1993, adelantó los siguientes conceptos:

'En otras palabras, el Ejecutivo podía expropiar el bien de la sociedad Desarrollo de Cermeño, S. A., pero no podía fijar unilateralmente el monto de la indemnización que debía recibir el expropiado, toda vez que, al no haber mediado acuerdo sobre este extremo entre el gobierno y el dueño del bien expropiado, era imprescindible que se entablara un proceso con el propósito de que un juez estableciera el monto de la indemnización'.

Este enjuiciamiento jurídico de la normativa analizada nos permite señalar que la empresa **INVERSIONES CRESPO, S. A.** se vio afectada al momento de fijarse el monto de la indemnización correspondiente a la expropiación de la finca 1183 de la cual era propietaria, dado que en ningún momento fue fijada la cuantía que representa la sustitución del bien objeto de la expropiación dándose oportunidad a los propietarios de convenir en cuanto a ella, o mediante un procedimiento judicial al respecto, trámites éstos, que como ha quedado expuesto, constituyen el procedimiento legal correspondiente para que la figura de la expropiación responda a su verdadera naturaleza jurídico-social, o de alguna manera al planteamiento del ilustre procesalista Eduardo Couture quien la visualiza como una acción de privar a sus propietarios, por causa de necesidad o utilidad públicas de sus bienes, mediante justa compensación.

En atención a este pormenorizado estudio concluye este Máximo Tribunal de Justicia, que resultó infringido el artículo 31 de la Constitución originaria de 1972 que consagraba el principio del debido proceso legal" (Registro Judicial de agosto de 1994, pp. 105 y 106).

Resulta evidente, como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades el Pleno en negocios constitucionales como el ahora ventilado, que la Nación tiene la facultad constitucional y legal de decretar este tipo de expropiación (extraordinaria); empero, de surgir discrepancias en cuanto al precio entre el Gobierno y el expropiado, la Ley señala el procedimiento a seguir, cual es el sometimiento de esa diferencia ante la jurisdicción ordinaria, a instancia de la Nación o entidad pública a través de la cual se pide la expropiación, con la finalidad de solucionar el conflicto y de esa manera se fije un precio razonable como indemnización. En el presente caso tal trámite no fue observado por la autoridad pública quien procedió a señalar unilateralmente la cuantía para compensar la expropiación de la finca 2377, tal como se desprende del texto del artículo 4 del Decreto N° 3 de 1974 objeto de la presente demanda extraordinaria de inconstitucionalidad. De allí que se ha transgredido en forma directa por omisión el artículo de la Constitución invocado que establece el debido proceso que debe cumplirse en estos casos.

En cuanto al cargo de violación del artículo 43 (actual 44) de la Carta Política, el Pleno es del criterio de que el mismo no ha sido vulnerado como afirma el demandante porque la Constitución Nacional al tiempo que protege la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por las personas, también señala, en el artículo 45, que esta propiedad implica obligaciones para su dueño por causa de la función social que ésta debe cumplir. De allí que cuando existan motivos de utilidad pública e interés social puede el Estado a través de los órganos autorizados proceder a la expropiación ordinaria o extraordinaria de la propiedad privada. La primera, prevista en el segundo párrafo del artículo 44 de la Constitución vigente que se invoca como violado, y la segunda, en el artículo 47 de la misma. No es entonces cuestionable la potestad constitucional del Estado de expropiar fundado en una de las causas delimitadas en los artículos

constitucionales antes citados y la Ley. En este último supuesto está la Ley 57 de 1946 que enuncia algunos casos de utilidad pública y de interés social (Arts. 1° y 2°), así como el Código Agrario que en su artículo 32 considera como de interés social urgente la ocupación de tierras rurales por precaristas, lo cual sirvió de fundamento para la **expropiación extraordinaria** decretada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la finca 2377 que era propiedad del demandante.

El jurista César Quintero, en su obra "Derecho Constitucional", comenta el artículo 49 de la Constitución de 1946, que equivale al 47 de la actual, referente a este tipo de expropiación, y dice: "El interés social urgente puede ser, por ejemplo, como en efecto lo ha sido, la circunstancia de que un grupo apreciable de campesinos que ocupa y labra tierras no utilizadas por su propietario reciban de éste la orden de desalojarlas. El desalojo coloca inmediatamente a dichos agricultores en una desesperada situación. Quedan de pronto sin tierra donde trabajar y condenados, por tanto, a la miseria y al hambre inminentes. El Ejecutivo Nacional interviene, en virtud de la facultad que le concede el artículo 49, y por decreto expropia las tierras del caso para darlas, bajo algún título, a los agricultores que las han venido trabajando" (Op. Cit. p. 210).

Por los motivos expuestos, a juicio del Pleno, no se ha dado la violación del artículo 44 de la Constitución.

Con relación a la violación del artículo 251 de la Constitución (actual 287), endilgada al artículo 4° del Decreto N° 3 de 1974 que señala un plazo de 40 años para la redención de los bonos agrarios en concepto de indemnización por la expropiación ordenada de la finca N° 2377, el Pleno es de la opinión de que la norma constitucional invocada no ha podido ser transgredida por el acto demandado, ya que según reiterada jurisprudencia la norma constitucional que establece un límite de 20 años para la intransferibilidad de los bienes y el mismo término como máximo para la redención de las obligaciones, no es aplicable a los bienes del Estado.

Efectivamente, en reciente fallo proferido el 30 de mayo último esta Corporación de Justicia, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra frases de artículos contenidos en la Ley 8 de 1994, por la cual se promueven las actividades turísticas en la República de Panamá, siguiendo doctrina ya sentada, expuso lo siguiente:

> "Ahora bien, en relación con el segundo cargo de que se acusa también al artículo 35 de la comentada Ley 8 de 14 de junio de 1994, consiste en la frase '... **los contratos de concesión podrán celebrarse hasta por un término de cuarenta (40) años**' fundado en la violación del artículo 287 de la Carta Política, el Pleno de la Corte estima oportuno reiterar, una vez más, que la jurisprudencia constitucional sentada por esta Corporación en relación con la prohibición presentada en dicha norma de la Carta Política la cual ha sido adoptada por todas las constituciones de la República, no comprende los bienes del Estado y demás entidades públicas que están destinadas al uso o servicio público (13/52. Fallo de 27 de mayo de 1952, Jurisprudencia Constitucional, Universidad de Panamá, Centro de Investigación Jurídica, pág. 167, Tomo I).
>
> De igual manera en lo referente a la parte final de la excerta constitucional en comento, la jurisprudencia de la corte también de vieja data tiene sentado que ésta'... **tiene aplicación exclusivamente, en obligaciones de carácter privado; es decir, entre particulares, y que no puede ser aplicado en las obligaciones entre el Estado y un particular, porque en el segundo caso rige el principio universal de que el Estado tiene dominio inminente sobre todos los bienes que existen dentro de sus confines y puede expropiarlo en cualquier momento. Por tanto la comentada parte final de la disposición constitucional referida no puede aplicarse a los contratos o concesiones que haga el Estado**'" (Fallo de 12 de

noviembre de 1954, subrayas del Pleno. Ibídem, p. 230).

En el presente asunto no existe razón jurídica para variar dicho criterio, por lo cual el plazo de cuarenta (40) años preceptuado en el artículo 4 del Decreto N° 3, de 2 de enero de 1974 objeto de impugnación, no es inconstitucional, al no ser aplicables a los bienes y contratos públicos, las normas contenidas en el artículo 287 de la Constitución Política en relación con el término de las modalidades que los particulares pueden pactar para la redención de las obligaciones y la prohibición de enajenar dispuesta más allá del límite de 20 años, preceptuado por dicha norma superior para ambos casos.

Por último, con relación a la violación del artículo 17 constitucional, procede la declaración pedida, porque a pesar de ser esta norma del tipo de las programáticas, su violación está vinculada a la violación de otras normas constitucionales que contienen derechos o garantías fundamentales, como el artículo 32 de la Constitución que el Pleno considera que ha sido violado por el acto impugnado.

La violación del artículo 17, que corresponde de manera idéntica al de la Constitución vigente antes de ser modificada, ha sido relacionada directamente con el artículo 31 de la Constitución de 1972 (actual 32), que a juicio de esta Corporación sí ha sido conculcado, porque el Estado no puede a su voluntad y unilateralmente fijar el monto de la indemnización y la forma en que ésta debe ser pagada, en el supuesto de existir discrepancia entre él y el particular por causa de una expropiación extraordinaria, porque está obligado por Ley a someter esa diferencia a los tribunales ordinarios para que la diriman.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONALES los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto Ejecutivo N° 3, de 2 de enero de 1974, emitido por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por violar los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS ELIGIO A SALAS
Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Salvamos respetuoamento del voto.

Nos referimos a las particularidades del caso:

1. El demandante en este proceso de inconstitucionalidad comparece como persona afectada por razón de la expropiación de la Finca 2377, inscrita al tomo 289, Folio 132, Provincia de coclé, Sección de la Propiedad del Registro Público.

2. A la expropiación se refieren los Decretos N° 3 de 2 de enero de 1974, del Ejecutivo integrado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que luego se llamó Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

3. Es decir, la expropiación ocurrió en 1974.

4. La inconstitucionalidad se pide porque "no se promovió el juicio de expropiación", lo que el demandante califica como violación del principio constitucional del debido proceso (f. 13, hecho 3° de la demanda).

5. La presente demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 15 de octubre de 1995; o sea 20 años después.

6. La tesis de la sentencia, que accede a la declaración de inconstitucionalidad, es que el monto de la indemnización se fijó de forma unilateral (Pág. 12 de la sentencia), lo que viola el artículo 32 de la Constitución.

7. Que en casos de interés social urgente que exija medida rápida, el Ejecutivo puede ocupar inmediatamente el bien expropiado sin haber pagado la indemnización, la que se puede pagar después (Pág. 12).

8. Que la situación se rige por la Ley 57 de 1946, de acuerdo con la cual, en casos de interés social urgente, si no se convenía el precio entre el dueño del bien expropiado y el Ejecutivo, el Estado debía proceder al "sometimiento de esa diferencia ante la jurisdicción ordinaria, a instancia de la Nación o entidad pública a través de la cual se pide la expropiación" (Pág. 12).

9. La disposición legal en que esta tesis se basa dice textualmente en su parte pertinente: "ocupado ya el bien y convenido el precio con el propietario, la Nación o el Municipio, según el caso, efectuarán los pagos en los términos del convenio o sentencia según procede..." (Subraya la Corte).

Discrepamos del criterio expuesto en el proyecto de sentencia, que decreta la inconstitucionalidad de los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto de expropiación.

La vía de los juicios de inconstitucionalidad en nuestro criterio no son para ventilar intereses particulares patrimoniales mientras no se hayan agotado las vías de la jurisdicción ordinaria o especial como la contencioso administrativa, que el sistema jurídico pone a la disposición de los particulares.

En el presente caso, no se está frente a desconocimiento de las garantías procesales. La situación es de ausencia del proceso porque los interesados no han acudido a los tribunales de justicia.

La piedra angular de todo el sistema judicial es que la persona que se crea titular de un derecho debe iniciar el proceso correspondiente (artículo 459 del Código Judicial).

En 1974, haciendo caso omiso de si el Ejecutivo presentaba la demanda para que un tribunal fijara el precio, es evidentemente cierto que el o los propietarios de la finca podían ejercitar la acción correspondiente. No es el momento para resolver si por la jurisdicción civil ordinaria o por la contencioso administrativa. Y del hecho de su omisión se derivan importantes consecuencias jurídicas por el transcurso del tiempo.

Se llama la atención de que la disposición legal de la Ley 57 de 1946, habla de sentencia, pero no de quien es la iniciativa del proceso en el cual se dicte.

Por lo demás, como lo consagra expresamente el Código Judicial actual, los procesos sólo pueden iniciarse a petición de parte (Art. 457). Esto, aunque no declarado, era igual durante la vigencia del Código anterior. Y sucede lo mismo con el artículo 459 ibídem que abre las puertas de los tribunales a toda persona que pretenda hacer efectivo algún derecho o pretensión.

Esta realidad jurídica pone en juego una serie de mecanismos o instituciones que atienden las complejidades de las relaciones en sociedad. Por ello se hace indispensable que los interesados acudan a las vías que la jurisdicción ordinaria o especial de la administración de justicia pone a su disposición para ventilar intereses particulares. Los procesos de inconstitucionalidad no son propios para considerar el juego de intereses en las relaciones económicas de la sociedad actual.

Excepcionalmente, sólo cuando entran en juego garantías procesales que la Constitución consagra, puede plantearse un asunto con ese carácter, en la

jurisdicción constitucional.

No es lo que ocurre en esta oportunidad, cuando se trata de que el interesado no acude a los tribunales por la vía ordinaria, y pretenden después de 20 años reclamar mediante demanda constitucional.

Por estas razones salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL DELGADO EN REPRESENTACIÓN DE ANIANO PINZÓN, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, CONTRA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1066 DEL DECRETO DE GABINETE N° 252, DE 3O DE DICIEMBRE DE 1971. MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Delgado, actuando en nombre y representación del señor ANIANO PINZÓN, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo del artículo 1066 del Decreto de Gabinete N° 252, de 30 de diciembre de 1971, mediante el cual se aprobó el Código de Trabajo.

Practicados los trámites de que tratan los artículos 2554 y concordantes del Código Judicial, la causa está lista para resolver, y a ello se procede, previas las siguientes consideraciones.

I. LA NORMA ACUSADA

El actor, en su demanda, acusa la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 1066 del Decreto de Gabinete N° 252, de 30 de diciembre de 1971, por el cual se aprueba el Código de Trabajo, cuyo texto transcribimos a continuación:

"Artículo 1066 ...

El Consejo Nacional de Trabajadores elaborará las ternas de las cuales se designarán los delegados obreros a la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo y a cualesquiera otros congresos o conferencias para los cuales el Estado deba enviar representación de los trabajadores. También elaborará ternas para el nombramiento de los trabajadores en los organismos oficiales. ..."

II. LA NORMA CONSTITUCIONAL VIOLADA Y EL EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El licenciado Delgado manifiesta que la norma acusada infringe el artículo 4 de la Constitución Política, el cual establece que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. Dicha norma se estima infringida en relación con el artículo 3, ordinal 5°, de la Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consagra el procedimiento a seguir para el escogimiento de los delegados a la Conferencia Internacional de dicha Organización.

El actor opina que la norma acusada contradice el procedimiento para escoger a los delegados de los trabajadores a la mencionada conferencia

internacional, procedimiento que, como ya fue señalado, está consagrado en el artículo 3, ordinal 5°, de la Carta Constitutiva de la OIT.

III. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Correspondió al Procurador General de la Nación el turno para emitir concepto dentro de este negocio constitucional, lo cual hizo a través de la Vista N° 56, de 13 de diciembre de 1994, manifestando su conformidad con la pretensión del demandante, según se aprecia de fojas 28 a la 32.

Dentro del término de lista presentó argumentos la señora Norma Cano, mediante su apoderado judicial, licenciado César Acosta, quien estima que la norma acusada no viola el artículo 4 de la Constitución citado porque al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados solo le corresponde elaborar las ternas de las cuales el Estado, como miembro de la OIT, designa a los delegados de la reunión anual de este organismo, con base en las exigencias del mismo; y agrega que hasta la fecha este procedimiento se ha cumplido.

Para el licenciado Acosta la referida norma de la Carta Constitutiva de la OIT aspira a que los delegados de los trabajadores sean representativos del sector laboral. Dicha disposición no es rígida sino que constituye una guía de selección, destinada a los Estados miembros, y como dicho estatuto constitutivo no define lo que debe entenderse por organizaciones profesionales más representativas, entonces, debemos acudir a una interpretación racional, según la cual, esta organización es el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), que está integrado por centrales y confederaciones de trabajadores, así como las federaciones que no estén afiliadas a centrales o confederaciones (fojas 39-45).

IV. DECISIÓN DEL PLENO

Observa el Pleno que se ha invocado como violado el artículo 4 de la Constitución Nacional, el cual preceptúa que: "La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional". Alega el actor que esta infracción se da porque el artículo 1066 de Código de Trabajo transcrito, infringe el artículo 3, ordinal 5, de la Carta Constitutiva de la Organización del Trabajo, --organismo de derecho internacional de la que Panamá es parte-- que es una disposición incluida en un tratado internacional suscrito por el Estado panameño.

El artículo 3, ordinal 5, de la Carta Constitutiva de la OIT establece el procedimiento para la designación de los delegados obreros y empresariales a la Conferencia Internacional del Trabajo, escogencia que debe recaer en el gremio sindical o patronal "más representativo". El texto de dicha norma es el siguiente:

> "Los miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país que se trate".

Esta norma no puede ser confrontada con el párrafo impugnado del artículo 1066 del Código de Trabajo, en un proceso de constitucionalidad, porque como lo tiene dicho esta Corporación de Justicia "dichos pactos formalmente solo tienen valor de Ley; carecen pues de jerarquía constitucional". Si el mencionado artículo 1066 del Código de Trabajo violara la Carta Constitutiva de la OIT lo procedente no es impugnarlo mediante una acción de inconstitucionalidad sino que correspondería al Estado panameño cumplir "la obligación de Panamá de adecuar su legislación interna a lo dispuesto en dichos convenios internacionales, tal como lo señalan éstos". (Cfr. Sentencia de 23 de mayo de 1991, R.J., p. 85).

También expresó el Pleno en la sentencia de 12 de agosto de 1994, que declaró inexequible el Proyecto de Ley mediante el cual se dictan medidas sobre la importación de productos agropecuarios y se protege la producción agropecuaria, en relación con la interpretación del artículo 4 constitucional, lo siguiente:

> "Esta norma, que preceptúa que la República de Panamá acatará las normas de Derecho Internacional, ha sido interpretada ... en el sentido de que si bien los tratados internacionales aprobados por leyes de la República son de obligante cumplimiento, la consecuencia jurídica de esa obligación es la de adecuar la legislación interna a lo dispuesto en dichos convenios internacionales, porque éstos solo tienen formalmente valor de ley y carecen de jerarquía constitucional.
>
> También ha expresado el Pleno ... al interpretar esta norma, que si bien las normas internacionales ratificadas por Panamá, como regla general carecen de jerarquía constitucional, excepcionalmente podrían integrar el bloque de constitucionalidad convenios internacionales que consagran derechos fundamentales. En sentencia de 19 de marzo de 1991, bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos, el Pleno expresó que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos integra un bloque de constitucionalidad convenios internacionales que consagran derechos fundamentales. En sentencia de 19 de marzo de 1991, bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos, el Pleno expresó que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con el artículo 32 de la Constitución, en cuanto se refiere a la garantía constitucional del debido proceso, con el fin de ampliar un derecho fundamental que es esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
>
> De acuerdo con estas interpretaciones, el proyecto de ley objetado no viola el artículo 4 de la Constitución, porque los tratados internacionales de libre comercio celebrados por la República de Panamá no tienen el rango de normas constitucionales y si bien constituyen normas de Derecho Internacional que el Estado debe acatar, 'la consecuencia jurídica de esa obligación es la de adecuar la legislación interna a lo dispuesto en dichos convenios internacionales'".

En el presente caso estamos ante un supuesto similar al resuelto por la sentencia transcrita. El artículo 3, ordinal 5, de los Estatutos de la OIT, invocado como infringido por el actor, no tiene jerarquía constitucional, por lo que el artículo 1066 del Código de Trabajo no puede ser acusado como inconstitucional por violar una norma que, si bien está contenida en un convenio internacional que la República se obliga a respetar y cumplir, no tiene jerarquía constitucional y no forma parte del bloque de constitucionalidad. Esa norma internacional una vez integrada a nuestro derecho positivo a través de los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, adquiere jerarquía igual a la de una ley formal.

Una norma contenida en una ley, no puede ser acusada de inconstitucional por ser presuntamente conculcatoria de otra disposición de igual jerarquía, a pesar de que ésta última sea una disposición consagrada en un convenio o tratado internacional del cual la República es parte, como en el caso analizado.

Sólo por vía de excepción puede un precepto contenido en un Tratado Internacional integrar el bloque de constitucionalidad, como fue antes explicado. El artículo 4 del Estatuto Fundamental se limita a compeler al Estado panameño a cumplir su obligación de que la legislación interna se ajuste o adecue a lo acordado en tales pactos internacionales libremente adoptados por él como sujeto de Derecho Internacional.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el segundo párrafo del artículo 1066 del Decreto N° 252, de 30 de diciembre de 1971, por el cual se aprueba el Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. RAFAEL RODRÍGUEZ CONTRA EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE RAMOS LUCÍA, POR EL DELITO DE LESIONES CON RESULTADO DE MUERTE EN PERJUICIO DE HIGINIO CUBILLA MÉNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Juez Segundo de Circuito, Ramo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, ha elevado al Pleno de esta Máxima Corporación Judicial la advertencia de inconstitucionalidad que contra el artículo 138 del Código Penal formulara el licenciado **Rafael Rodríguez** en nombre y representación de **ENRIQUE RAMOS LUCÍA,** dentro del proceso penal seguido a este último por el delito de lesiones con resultado de muerte en perjuicio de **Higinio Cubilla Méndez.**

Esta incidencia reposa en escrito que se presentó ante el Despacho del Juez Segundo de Circuito, en virtud de Sentencia Condenatoria N° 102 de 22 de noviembre de 1995 (ver foja 307 de los antecedentes).

Esta Superioridad procede en primer término, al análisis del escrito contentivo de la advertencia presentada, en vías de determinar si el mismo cumple con los requerimientos formales exigidos por el Tribunal, que condicionan la viabilidad de la misma.

En este punto se percata el Tribunal que no le es dable entrar a conocer de la inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Penal, dado que la norma ya fue aplicada en primera instancia. El artículo 203 de la Constitución dispone que cuando en un proceso se advirtiere, ya sea por parte del funcionario público encargado de impartir justicia o por las partes del proceso, que una norma legal o reglamentaria aplicable es inconstitucional, someterá el asunto al conocimiento del Pleno de la Corte.

Lo anterior confirma el hecho, de que la disposición no puede haber sido aplicada para que proceda este Tribunal al cotejo de dicho artículo con la Constitución.

Efectivamente, el Juez Segundo de Circuito, Ramo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, profirió Sentencia Condenatoria contra **ELÍAS ENRIQUE RAMOS LUCÍA** por el delito de lesiones personales agravadas en perjuicio de **Higinio Cubillas**, bajo el fundamento legal recogido en el artículo 138 del Código Penal, entre otros (ver foja 321 y 322 de los antecedentes).

La conclusión a que ha arribado el Pleno, y que en líneas anteriores ha externado, tiene su fundamento en que el contenido del artículo 138 del Código Penal está dirigido a sancionar a la personas, con 3 a 5 años de prisión, que causen lesiones personales en la víctima y que ulteriormente le sobrevenga la muerte a esta última. Esta disposición es del tenor siguiente:

> "Artículo 138: Si las lesiones descritas en los artículos anteriores causan la muerte de la persona, la sanción será de 3 a 5 años de prisión".

De acuerdo con el último párrafo del numeral 1° del artículo 203 de la Constitución, "Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez

por instancia", por lo que el advirtiente debió advertir al Segundo Tribunal Superior de Justicia, antes de que éste aplique la norma en segunda instancia y no al Juez Segundo de Circuito, Ramo Penal, de primera instancia que ya aplicó la norma.

En estas circunstancias, y en virtud de todo lo expuesto, esta Corporación Judicial debe negarle curso legal a la advertencia de inconstitucionalidad presentada.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Advertencia de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Rafael Rodríguez en nombre y representación de ENRIQUE RAMOS LUCÍA dentro del proceso penal seguido a este último por el delito de lesiones con resultado de muerte en perjuicio de Higinio Cubilla Méndez.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS FRANCISCO CHIARI & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JOHN MADURO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PUNTA CHAME TURÍSTICA, S. A. CONTRA LA CONCESIÓN OTORGADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS A LA EMPRESA SERVICIOS DE DRAGADO Y CABOTAJE, S. A. Y SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

FRANCISCO CHIARI & ASOCIADOS mediante poder especial otorgado por el señor **JOHN MADURO**, en su condición de Presidente y Representante Legal de la Sociedad PUNTA CHAME TURÍSTICA, S. A. ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se declare nula por inconstitucional la Concesión otorgada por el Ministro de Comercio e Industrias a la Empresa SERVICIOS DE DRAGADO Y CABOTAJE, S. A., y se hagan otras declaraciones.

Por admitida la demanda se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien devolvió el expediente con Vista que corre a fojas 44 a 52, en la que aparece expresada su opinión sobre el acto acusado.

Por su parte, la firma **GRIMALDO Y TEJEIRA**, en virtud de poder especial conferido por **PAUL A. GAMBOTTI** en su condición de Tesorero y Representante Legal (en ausencia del Presidente) de la Sociedad DRAGARENA, S. A., presentó argumentos por escrito para desvirtuar la petición de inconstitucionalidad señalando, que el Contrato N° 75 de 14 de junio de 1974, cuya nulidad se solicita, fue prorrogado por Resolución N° 9 de 31 de mayo de 1993 del Ministerio de Comercio. Alegando, que para obtener dicha prórroga de la concesión se adjuntó entre las pruebas exigidas por el Ministerio, un informe de estudio ambiental específico sobre dicha zona (60 a 66).

El negocio constitucional sometido al control del Pleno de la Corte se encuentra, por tanto, en estado de decidir y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se exponen:

CONSIDERACIONES DE LA DEMANDA:

La demandante solicita al Pleno que declare:

"a) Que es nula por inconstitucional, la mencionada concesión pues viola lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que por virtud de la concesión contenida en el mismo no se garantiza la debida utilización y aprovechamiento del recurso de la arena en el área de la Bahía de Punta Chame.

b) Que es nula por inconstitucional, la mencionada concesión pues viola lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que por virtud de la concesión contenida en el mismo se están derivando perjuicios sociales, económicos (tanto a particulares como a terceros) y ambientales de mucha gravedad.

c) Que es nula por inconstitucional, la mencionada concesión por ir en contravención a lo establecido en el artículo 256 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que por virtud de la concesión contenida en el mismo no se está pensando en el bienestar social y el interés público, sino todo lo contrario, pues es sólo un particular el que se beneficia causando daños materiales a terceros y al medio ambiente; es decir ni se adhiere al interés de lo público sino de lo privado.

d) Que como consecuencia de la inconstitucionalidad de la concesión anterior, se declare además.

i) Que por violatoria del artículo 256 de la Constitución Política se suspenda y cese de inmediato en todos sus efectos el contrato contentivo de la misma.

ii) Que de no declararse inconstitucional, se suspenda en sus efectos, hasta tanto el concesionario sea obligado a elevar la suma de la Fianza de Garantía a US$6,000,000.00; para cubrir con ello los daños casi irreparables causados al medio ambiente y a los particulares y vecinos del área."

La Sociedad Punta Chame Turística, S. A. en su calidad de demandante fundamenta la presente acción de inconstitucionalidad en los siguientes hechos:

Por razón de la concesión para extracción de arena otorgada a la empresa Servicios de Dragado y Cabotaje, S. A. mediante el Contrato N° 135 de 26 de mayo celebrado entre dicha empresa y el Ministerio de Comercio e Industrias se han venido causando daños al medio ambiente (erosión) en el área de la Bahía de Punta Chame. Igualmente ha causado daños a las propiedades de particulares y vecinos del lugar, que han ocasionado reclamos contra desarrollistas del área.

Las normas constitucionales invocadas como infringidas son los artículos 116, 117 y 256.

VISTA DE LA PROCURADURÍA.

Así las cosas, el Procurador de la Nación, por su parte al expresar su opinión en la indicada Vista de Traslado de la demanda en comento, en síntesis expresa:

Los artículos 116 y 117 de la Constitución como puede apreciarse de su relación, contienen fórmulas o expresiones que indican que la propia Constitución sujeta o condiciona los principios contenidos en dichos preceptos a lo que la doctrina constitucional denomina cláusula de reserva legal. De manera que al ser dichas disposiciones, eminentemente, programáticas no pueden ser fundamento de una acción de inconstitucionalidad y, además de que contienen un

mandato dirigido al legislador, para que desarrolle mediante ley formal, la que, a su vez, puede ser objeto de reglamentación.

Igual acontece con el artículo 256 de la Constitución ya que, al señalar que: "las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo ... se inspirarán en el bienestar social y el interés público" (lo subrayado es nuestro), lo que establece es una aspiración que, obviamente, debe materializarse a través de la función legislativa, pues éste órgano es el que debe definir, mediante ley, los conceptos de bienestar social e interés público en los casos que se requieran de contrato de concesión para la explotación de estos recursos.

Visto lo anterior, resulta claro que las normas constitucionales invocadas como sustento de la presente demanda son, en su totalidad, de naturaleza programática ya que su sentido permite establecer que dichos preceptos no consagran derechos ni garantías individuales o sociales, de manera que no pueden ser fundamento para demostrar la inconstitucionalidad de una norma de inferior jerarquía, pues, reiteramos, no están dotadas de contenido normativo. Mediante fallo de 2 de julio de 1991, la Corte Suprema declaró lo siguiente:
...
En consecuencia, esta Procuraduría estima, por todo lo expuesto que deben declararse no viable las presentes demandas de inconstitucionalidad; en especial por estar fundamentadas solamente en normas constitucionales carentes de contenido preceptivo, es decir, de índole o naturaleza programática o declarativa.

Renuncio al resto del término. ..."

CRITERIO DE LA CORTE

La Corte comparte parcialmente la Vista del Ministerio Público, pues si bien coincide con la conclusión recomendada de declarar NO VIABLE la presente acción de inconstitucionalidad, no es precisamente por los planteamientos allí expresados. Veamos:

En esencia, la conclusión de la Procuraduría sobre la no viabilidad de la demanda obedece al hecho de encontrarse fundamentada en normas carentes de contenido preceptivo, es decir, por tratarse de normas de naturaleza programática o declarativa.

A juicio de la Corte, no se puede generalizar, como razón para no considerar el fondo de la controversia constitucional, el hecho de que las normas invocadas como violadas contienen fórmulas condicionantes de los principios en ellas dispuestos; "a lo que la doctrina constitucional denomina cláusula de reserva legal". En otras palabras, sólo por la consideración de que las disposiciones citadas como fundamento de la demanda son programáticas y le señalan un mandato al legislador para ser desarrolladas mediante ley formal.

Sobre el particular, esta Corporación debe aclarar que en ciertos casos puede generarse la infracción de preceptos programáticos como consecuencia de haberse establecido previamente la violación de otra u otras normas fundamentales que contengan un mandato autónomo o sustantivo, susceptible de conculcación directa o que contengan derechos y garantías individuales y sociales. Así, por ejemplo en sentencia de 24 de junio de 1992 la Corte señaló:

"La violación del artículo 17 deviene, entonces, de la omisión en que incurriera la autoridad de aeronáutica del deber de cumplir la Constitución y la leyes de la República, al reconocer el atributo de exclusividad al concesionario, en franco desconocimiento de la prohibición contenida en el artículo 290; la interpretación que en estos casos admite la violación concomitante del artículo 17 viene consignada en la sentencia de 22 de octubre de 1985, en la que se acentúa que `las funciones del servidor público, sea cual fuere su jerarquía, se limitan a cumplir y hacer cumplir la Ley y la

Constitución' ...". (Ver Reg. Jud. junio 1992, pp. 219).

Cabe agregar que la definición que pueda hacer la ley sobre diversas materias o conceptos que le remita o encomiende la propia Constitución no es garantía de que en casos específicos, a través de ciertos actos (resoluciones, decretos, acuerdos), incluso por sus consecuencias o efectos, no se transgreda el orden constitucional. Por ello la fiscalización de la integridad constitucional también implica desentrañar las incongruencias o contradicciones que pudieran presentarse entre los preceptos de la Constitución y los actos de autoridad pública (o entre aquella y la normativa de rango inferior), lo cual podría suponer la desaparición de los últimos del ordenamiento jurídico.

También es importante recordar que el ejercicio del control constitucional no se limita a la confrontación y estudio del acto acusado solamente a la luz de los preceptos constitucionales citados en el recurso como violados, sino que impone su examen en función de toda la normativa constitucional.

El contrato impugnado, que consta de fojas 16 a 21 del expediente, fue suscrito por el titular del Ministerio de Comercio en representación del Estado y el Presidente y Representante Legal de la sociedad **SERVICIOS DE DRAGADO Y CABOTAJE, S. A.**, para otorgar a esta empresa en su calidad de concesionaria "derechos exclusivos de extracción de arena de mar, en cinco (5) zonas ubicadas en el Corregimiento de Punta Chame ..." demarcadas en planos aprobados por la Dirección General de Recursos Minerales, descritos en el contrato. Según expresa dicho documento de celebró de conformidad con la Ley 109 de 8 de octubre de 1973 y el Código de Recursos Minerales aprobado por el Decreto Ley N° 23 de 22 de agosto de 1963, modificado por el Decreto de Gabinete N° 264 de 21 de agosto de 1969, por la Ley 70 de 22 de agosto de 1973 y por la Ley 89 de 4 de octubre de 1973.

Se ha podido comprobar que el contrato demandado como inconstitucional es una prórroga, con algunas modificaciones, del Contrato N° 75 de 14 de junio de 1974 suscrito entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la misma empresa DRAGARENA, S. A. para la extracción de arena en tres zonas del territorio nacional. La sociedad demandante en el presente caso, **PUNTA CHAME TURÍSTICA, S. A.** también demandó la inconstitucionalidad de este último contrato solicitando a esta Corporación "se declare nula por inconstitucional la Concesión otorgada por el Ministerio de Comercio e Industria a la empresa **DRAGARENA, S. A.** y se hagan otras declaraciones".

El Pleno se pronunció en dicho caso, mediante sentencia de 13 de junio de 1995, en los siguientes términos:

"...
Opinión del Pleno de la Corte Suprema.

Hecho el estudio de la demanda de inconstitucionalidad, el Pleno observa que efectivamente, tal como lo menciona el Procurador General de la Nación, los artículos que se dicen infringidos por el Contrato N° 75 de 14 de junio de 1974, es decir, el 116, el 117 y el 256 de la Constitución Nacional, son de contenido programático.

Lo anterior significa que dichas normas per se no pueden ser objeto de violación, ya que de sus textos se desprende claramente que las materias que consagran deben ser reguladas o desarrolladas por la ley.

En el caso específico de la extracción de arena, esta materia ha sido regulada por la ley 109 de 8 de octubre de 1973, por la cual se reglamenta la exploración y explotación de minerales no metálicos utilizados como materiales de construcción, cerámicos, refractorios y metalúrgicos.

Esa ley contempla los mecanismos a través de los cuales se concederán las concesiones de la clase a que se refiere la presente

demanda de inconstitucionalidad. De igual forma, en su normativa, entre otras cosas, dispone que cuando las actividades de los contratistas causen graves daños al ambiente, a los terrenos o a las mejoras construidas sobre esto, El Ejecutivo podría decretar la cancelación del contrato, para lo cual se establece como primera regla que se presente denuncia de oficio o de parte interesada ante la Dirección General de Recursos Minerales (a. 26).

La ley 109 de 8 de octubre de 1973, fue dictada atendiendo a la cláusula de reserva legal contenida en los artículos constitucionales que el demandante considera violados. Dado que estos no pueden ser objeto de violación, sino solamente las normas legales que desarrollan las materias contempladas en la Constitución, lógicamente la violación, en todo caso, debe recaer sobre las normas legales y no sobre las constitucionales.

En otro aspecto, tal como lo afirma el demandante, ciertamente nos encontramos ante la presencia de derechos difusos, los cuales han sido reconocidos por la Sala Tercera de esta Corte en resoluciones de 12 de marzo de 1993 y 22 de junio de 1994.
...

El Pleno comprende la preocupación demostrada por el demandante, sin embargo, tal como hemos planteado, no es la vía de la constitucionalidad el medio a través del cual puede lograrse la cancelación del Contrato N° 75 de 14 de junio de 1974, ni mucho menos la indemnización por los graves perjuicios que -según el demandante- se están causando al medio ambiente y a los particulares del área de Punta Chame, por razón de la ejecución del referido contrato.

Por razón de lo anterior el contrato impugnado por inconstitucional no violenta las normas señaladas como infringidas, ni ninguna otra del contexto de nuestra Carta Fundamental.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que el contrato N° 75 de 14 de junio de 1974 suscrito entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la empresa DRAGARENA, S. A., NO ES INCONSTITUCIONAL."

Resulta evidente que la situación analizada en la sentencia antes transcrita es similar a la examinada en esta oportunidad, en la que incluso figuran las mismas partes y se citan las mismas normas como infringidas. Aquella vez la Corte sentenció que no es el contenido programático de la norma lo que impide declarar la inconstitucionalidad, dejando bien claro que el motivo central por el que no se accedió a declarar opuesto a la Carta Fundamental el contrato de concesión demandado fue la consideración de que "no es la vía de la constitucionalidad el medio a través del cual puede lograrse la cancelación del Contrato N° 75 de 14 de junio de 1974, ni mucho menos la indemnización de los graves perjuicios que -según el demandante- se están causando al medio ambiente y a los particulares del área de Punta Chame, por razón de la ejecución del referido contrato".

En consecuencia, como quiera que la Corte anteriormente conoció y se pronunció sobre una situación jurídica igual a la planteada en esta acción de inconstitucionalidad, no es viable decidir nuevamente sobre el mismo tema.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad propuesta por la sociedad PUNTA CHAME TURÍSTICA contra la Concesión otorgada por el Ministerio de COMERCIO E INDUSTRIAS a la empresa SERVICIOS DE DRAGADOS Y CABOTAJE, S. A.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS A. CERVANTES DÍAZ
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

LOS LICENCIADOS GUILLERMO A. COCHEZ JR. Y RAÚL J. OSSA SOLICITAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCIÓN N° 27 DE 25 DE JUNIO DE 1986, DICTADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, OCH0 (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los Licenciados GUILLERMO A. COCHEZ y RAÚL J. OSSA, Legisladores de la República al momento de interponer la demanda, presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 27 de 25 de junio de 1986, "por la cual se rechazan las publicaciones del New York Times y otros medios de comunicación social tendientes a desestabilizar el País", dictada por la Asamblea Legislativa de Panamá.

La demanda fue presentada el 4 de julio de 1986 y se pide que la Resolución sea declarada inconstitucional.

El acto acusado de inconstitucionalidad, en su parte resolutiva, es del siguiente tenor:

"RESOLUCIÓN N° 27
(de 25 de junio de 1986)

"Por la cual se rechazan las publicaciones del New York Times y otros medios de comunicación social tendientes a desestabilizar al País."

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PANAMÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,

CONSIDERANDO:

RESUELVE

1. RECHAZAR enérgicamente, por falsas y calumniosas, las publicaciones del New York Times y de los otros medios de comunicación social de los Estados Unidos que se le han unido en la oprobiosa campaña contra el Comandante Noriega y la Nación panameña.

2. DENUNCIAR ante Panamá y el resto del mundo, la campaña contra el General Manuel Antonio Noriega como altamente perniciosa y peligrosa para las buenas relaciones que deben prevalecer entre los Estados Unidos y Panamá.

3. Considerar que tales ataques van dirigidos contra Panamá, por lo que esperamos aclaraciones por parte del gobierno norteamericano.

4. DECLARAR que en la gloriosa lucha que libra el pueblo panameño por su soberanía sobre todo el territorio nacional y sus derechos sobre el Canal de Panamá, nada ni nadie nos hará dar ni un solo paso atrás.

5. RESPALDAR totalmente y con entusiasmo, la participación saludable y encomiable del General Noriega y de las Fuerzas de Defensa de

Panamá en la vida nacional y en el esfuerzo democratizador que realiza el gobierno panameño junto a su pueblo.

6. CONDENAR la traición de I. Roberto Eisenman y del resto del grupo sedicioso narcotraficante y lavadores de dinero, metidos a politiqueros golpistas.

7. ASEGURAR a Centroamérica y al mundo que seguiremos luchando por la vida y por la paz a través de Contadora.

8. LEVANTAR la bandera de la lucha nacionalista por encima de todos los obstáculos de adentro y de afuera, por encima de la maledicencia, la calumnia y la diatriba enconada y enfermiza de los que son verdugos de sus propias existencias, para que la inmensa sombra que aquella proyecta, termine sepultándolos para siempre en la oscuridad de sus innobles almas.

9. GARANTIZAR a todos los panameños el triunfo de la Nueva Democracia en Panamá, ahora y rumbo al año 2000.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco días del mes de junio de mil novecientos ochenta y seis.

H. L. CAMILO GOZAINE G.
Presidente de la Asamblea Legislativa

ERASMO PINILLA C.
Secretario General"

Los cargos que se le formulan son los de violar el artículo 157, números ordinales 2 y 4 de la Constitución Nacional, cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 157: Es prohibido a la Asamblea Legislativa:
...
2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de otros Órganos del Estado.
...
4. Decretar actos de proscripción o de persecución contra personas o corporaciones."

El sentido de la violación de esta disposición constitucional, consiste en los asuntos de que trata la Resolución son de competencia del Órgano Judicial.

También se dice violado el artículo 32 constitucional cuando establece que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

De acuerdo con los demandantes, la Asamblea Legislativa se abroga derechos que no le han sido concedidos constitucionalmente, de condenar a personas cuya decisión de condena o absolución pertenece al Órgano Judicial. En síntesis, como en ocasión anterior, se trata de que la Resolución N° 27 de 25 de junio de 1986, se ocupa de asuntos que no son de su competencia, sino del Órgano Judicial.

Y, por último, se dice violado el artículo 17 de la Constitución, en el mismo sentido en que se han dicho violados los dos artículos constitucionales anteriores.

Acogida la demanda, se le dio traslado al Procurador General de la Administración, quien expresó concepto mediante Vista N° 96 de 12 de agosto de 1986.

En primer término se refirió a la violación del número ordinal 4 del artículo 157 de la Constitución, que establece la prohibición a la Asamblea Legislativa de decretar actos de proscripción o de persecución contra personas o corporaciones. Al respecto, señala que la Resolución impugnada no impone sanción alguna; que se tata de una declaración con fines de naturaleza política.

Por otra parte y en segundo término, el Procurador de la Administración se refiere a la invocada violación del número ordinal 2° del artículo 157 de la Constitución, que establece la prohibición para la Asamblea Legislativa de inmiscuirse por medio de resoluciones, en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado.

En este punto, el Procurador de la Administración expresa que para que la resolución se inmiscuyera en asuntos privativos del Órgano Judicial, como sostienen los demandantes, debería producir efectos jurídicos concretos; que la acción de inconstitucionalidad tiende a la preservación del ordenamiento jurídico fundamental del Estado; y que no está para reparar derechos subjetivos afectados. Agrega que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 46 de 1956, los actos que son objeto de control constitucional son aquellos emitidos por el Estado, de carácter público, que por sus consecuencias jurídicas infringen las normas constitucionales. Añade que meras declaraciones públicas sin consecuencias jurídicas concretas, no pueden ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. En concepto del señor Procurador de la Administración, el contenido y finalidad de resoluciones como la demandada de inconstitucionalidad son de naturaleza política. Y sostiene que a los Tribunales de Justicia les compete la instrucción y decisión de los procesos que tienen por objeto deslindar una controversia de interés jurídico, a los efectos de que se produzca el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva.

En tercer lugar, se refiere el Procurador a la invocada violación del artículo 32 de la Constitución:

> "Respecto de este cargo de inconstitucionalidad, nos parece que conservan vigencia las consideraciones que hemos expuesto con antelación en el sentido de que en el artículo 6° de la Resolución impugnada, la honorable Asamblea Legislativa no ha emitido una condena respecto de las personas allí señaladas. La medida que allí se adopta, desde el punto de vista netamente jurídico, no implica la imposición de una sanción o pena en estricta legalidad, sino una declaración que formula la Asamblea para rechazar lo que ella considera una conducta censurable."

Finalmente, el Procurador de la Administración señala que en vista "que las medidas impugnadas, por su naturaleza y finalidad, tenían efectos temporales, que ya se cumplieron", "se ha producido el fenómeno de la sustracción de materia, lo cual amerita una decisión inhibitoria."

El Pleno considera que, efectivamente, se ha producido sustracción de materia en la presente demanda de inconstitucionalidad. En relación con este punto, el Doctor Jorge Fábrega, en su obra "Estudios Procesales", Tomo II, establece que "la jurisprudencia ha denominado 'sustracción de materia' el fenómeno mediante el cual el proceso deviene sin objeto." (Pág. 1195).

En el caso en estudio han cesado los efectos de la Resolución N° 27 de 25 de junio de 1986, desapareciendo, igualmente, las pretendidas infracciones constitucionales. Consecuentemente, resulta improcedente que el Pleno dicte una decisión de fondo que carecería de relevancia jurídica.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los Licenciados GUILLERMO A. COCHEZ y RAÚL J. OSSA, contra la Resolución N° 27 de 25 de junio de 1986, proferida por la Asamblea Legislativa de Panamá y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO BERMÚDEZ MEANA EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL IRHE, INGENIERO GONZALO CÓRDOBA Y POR LOS LICENCIADOS ERIC SINGARES Y JERÓNIMO ADMADÉ, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO LUIS CARLOS ESCALONA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL IDAAN, CONTRA EL ACUERDO MUNICIPAL N° 42 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1993, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Bermúdez Meana, en representación del ingeniero GONZALO CÓRDOBA, Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y los licenciados Eric Singares y Jerónimo Admadé, en representación del ingeniero LUIS CARLOS ESCALONA, Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia contra el Acuerdo N° 42 de 16 de diciembre de 1993, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera.

Mediante Auto del 29 de mayo de 1995, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los licenciados Singares y Admadé fue acumulada a la demanda interpuesta por el licenciado Bermúdez Meana, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 709, 710 y 711 del Código Judicial.

Cumplidos los trámites a que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, los negocios se encuentran en estado de resolver y a ello se procede de acuerdo con las consideraciones siguientes.

I. EL ACTO ACUSADO

En la demanda se acusa de inconstitucional el Acuerdo Municipal N° 42 de 16 de diciembre de 1993, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera, por medio del cual esa corporación edilicia dispuso cobrar derechos y tasas por la prestación de los servicios al IRHE y al IDAAN. El mencionado acuerdo municipal establece lo siguiente:

"ACUERDO NUMERO 42 DE 1993
(DEL 16 DE DICIEMBRE)

Por medio del cual se cobra derechos y tasa sobre la prestación de los servicios al IRHE e IDAAN."

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE REPRESENTANTES DE CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE L

en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO:

Que es competencia de este Honorable Consejo Municipal cumplir con lo instituido en la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 52 del 12 de diciembre de 1984, "Sobre Régimen Municipal".

Que el Capítulo IV de la precitada Ley en su Artículo 76, establece el cobro de derechos y tasas sobre la prestación de servicios siguientes: Numeral 6 "pesas, medidas y aparatos para medir energía, gas y otras especies".

Que la Constitución Política de Panamá, en el Capítulo 2, sobre el

Régimen Municipal en su Artículo 245, dice textualmente ...

"EL ESTADO NO PODRÁ CONCEDER EXCEPCIONES DE DERECHOS, TASAS O IMPUESTOS MUNICIPALES. LOS MUNICIPIOS SOLO PODRÁN HACERLO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL". El subrayado es nuestro.

Que es necesario el cumplimiento de las Leyes y el desarrollo de las municipalidades con los recursos que le otorga el ordenamiento jurídico existente.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el cobro al IRHE e IDAAN de derechos y tasas, en base a lo normado en la Constitución Nacional y la Ley 106 de 1973.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los medidores de energía eléctrica del IRHE pagará (sic) por cada uno de ellos la suma de un balboa (B/.1.00) mensual.

ARTÍCULO TERCERO: Los medidores de líquido del IDAAN, pagará (sic) por cada uno de ellos la suma de un balboa (B/.1.00) mensual.

ARTÍCULO CUARTO: En caso de tres meses de morosidad en el pago de la tasa por parte del IRHE e IDAAN, el Tesorero Municipal, comunicará al Consejo Mpal (sic) y al Alcalde Municipal respectivamente.

El Tesorero Municipal, adoptará las medidas para el cobro de la tasa en concordancia con lo establecido en el Capítulo V, Artículo 95 de la Ley 106 de 1973.

ARTÍCULO QUINTO: El Municipio tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos en concepto de morosidad de las contribuciones, impuestos y tasas de contribuyentes.

ARTÍCULO SEXTO: Este Acuerdo rige a partir de su aprobación, sanción y promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE:

Dado en el salón de Actos del Honorable Consejo Municipal "H.C. LUIS E. VECES B." del Distrito de La Chorrera, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

EL PRESIDENTE (fdo.) H.R. LUIS DOMÍNGUEZ
EL VICE-PRESIDENTE: (fdo.) H.R. ALAÍN CORTEZ
LA SECRETARIA: (fdo.) SRA. ANNELIA V. DOMÍNGUEZ.

II. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

Como quiera que el texto de ambas demandas es idéntico el Pleno se referirá a ellas de manera conjunta. Los demandantes consideran que el acto acusado viola los artículos 48, 231, 242 y 243, numeral 2°, de la Constitución Nacional.

Estas normas constitucionales expresan, en el orden en que fueron mencionadas, lo siguiente:

"Artículo 48: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por la Ley."

"Artículo 231: Las autoriades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa."

"Artículo 242: Son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del Distrito, pero la Ley podrá establecer excepciones para que determinados impuestos sean municipales a pesar de tener esa incidencia. Partiendo de esa base, la Ley establecerá con la debida separación las rentas y gastos nacionales y los municipales."

"Artículo 243: Serán fuentes de ingreso municipal, además de las que señale la Ley conforme al artículo anterior, las siguientes, las siguientes:
...
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. ...".

En cuanto a la primera de estas normas, los demandantes estiman que la misma ha sido violada en forma directa por omisión, ya que el Acuerdo Municipal acusado pretende que el IRHE y el IDAAN paguen una tasa o derecho que no ha sido legalmente establecida, en detrimento del Estado y de sus asociados, sin considerar que el artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 235 de 1969 y el artículo 36 de la Ley Orgánica del IDAAN, respectivamente, exoneran a ambas instituciones públicas del pago de impuestos, contribuciones, derechos o tasas.

En opinión de los apoderados de los actores, el artículo 231 de la Constitución Política ha sido infringido en forma directa por omisión, dado que esta norma obliga a las autoridades municipales a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, razón por la cual, los Representantes de Corregimientos de La Chorrera no debieron dejar de cumplir con lo establecido en el artículo 243 de la Carta Fundamental, que dispone el cobro de tasas y derechos por el uso de bienes de propiedad del municipio y de sus servicios prestados, situación distinta a la planteada en este caso, ya que los bienes y los servicios prestados pertenecen al IRHE y al IDAAN, respectivamente. Agrega también, que al pretender el cobro de una tasa al IRHE y al IDAAN se dejó de cumplir con el artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 235 de 1969 y el artículo 36 de la Ley Orgánica del IDAAN, las cuales exoneran a estas entidades del pago de impuestos, tasas, gravámenes o derechos de cualquier índole o denominación, ya sean nacionales o de cualquier otra clase.

En cuanto al artículo 242 constitucional, los demandantes manifiestan que el mismo se ha violado en forma directa por omisión dado que no fue aplicado al caso bajo estudio. La norma en comento expresa que son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del Distrito. Luego, si un impuesto, derecho, tasa o contribución tiene incidencia fuera de un distrito no es municipal y, por tanto, no puede entenderse un cobro impositivo en tal calidad, puesto que se violaría directamente esta norma constitucional. La incidencia de la tasa o derecho que pretende imponer el acuerdo acusado causa un efecto a nivel nacional por lo que, conforme al artículo 242 de la Constitución Nacional, no puede ser objeto de un cobro impositivo de carácter municipal.

La última disposición constitucional que se cita como violada es el artículo 243. En opinión de los demandantes, esta norma constitucional ha sido infringida directamente por indebida aplicación, pues, cuando el Consejo Municipal de La Chorrera grava con una tasa a los medidores y servicios del IRHE y del IDAAN, lo hace como si estos bienes fueran propiedad de ese Municipio y el servicio de energía eléctrica y agua, respectivamente, fuera prestado por éste. La norma en referencia sólo autoriza gravar los bienes y servicios de su propiedad.

III. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 22 de 10 de junio de 1994, el Procurador General de la Nación emitió concepto. El representante del Ministerio Público estima que el artículo 48 constitucional fue violado por el Acuerdo Municipal impugnado porque la tasa impositiva sobre los medidores de luz y agua no fue establecida mediante ley formal expedida por el Órgano Legislativo, en la que también debió establecerse la forma de recaudarla. De allí que la creación de la jurisdicción coactiva mediante el artículo 5° del acuerdo impugnado viola flagrantemente la referida norma supralegal.

El Procurador General de la Nación considera que el artículo 231 de la Carta Magna también se violó porque al dictar el acuerdo en mención, el Consejo Municipal de La Chorrera no tomó en consideración que tanto el IRHE como el IDAAN son entidades autónomas reguladas por leyes especiales, las cuales exoneran a dichas instituciones del pago de cualquier clase de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes o derechos. El Consejo Municipal chorrerano estaba, pues, obligado a acatar lo dispuesto en esas leyes especiales y, como no lo hizo, violó el artículo 231 constitucional.

A juicio del Procurador General de la Nación, el artículo 242 no fue violado porque esta disposición establece como principio general que los impuestos son municipales cuando no tienen incidencia fuera de los límites de la respectiva circunscripción distrital y el Acuerdo Municipal acusado lo que pretende es gravar los medidores de luz y agua ubicados en el Distrito de La Chorrera y no la energía eléctrica ni el agua potable que suministran el IRHE y el IDAAN a nivel nacional.

Finalmente, el mencionado agente del Ministerio Público considera que tampoco ocurre la violación del artículo 243 de la Constitución Política porque esta dispo- sición establece cuáles son las fuentes mínimas, actividades y recursos que pueden ser sujetos de gravámenes. No significa esto, como indica el propio precepto constitucional, que sean las únicas, pues dicho artículo contiene una reserva de ley, al igual que lo hace el artículo 242 de la Carta Fundamental.

IV. DECISIÓN DE LA CORTE

Tal como se ha visto, los artículos 1, 2 y 3 del acuerdo municipal demandado por ser inconstitucional imponen al IRHE y al IDAAN una tasa de un balboa (B/.1.00) mensual sobre los medidores de energía eléctrica y de agua, respectivamente, y su artículo 4°, señala el procedimiento que debe seguir el Tesorero Municipal del Distrito de La Chorrera para hacer efectivo el cobro del mismo en caso de morosidad. Asimismo, su artículo 5° dispone que el Municipio tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos en concepto de morosidad de las contribuciones, impuestos y tasas de contribuyentes.

El artículo 48 de la Constitución Política establece que nadie está obligado a pagar contribuciones ni impuestos que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita en la Ley. Esta norma consagra el principio de legalidad de las contribuciones e impuestos, en virtud del cual, éstos sólo pueden establecerse mediante una ley formal, al igual que la forma en que su cobro debe de hacerse efectivo.

En el caso de los impuestos municipales, el artículo 243 de la Constitución Política enumera las fuentes de los ingresos municipales y deja a cargo de la ley la posibilidad de establecer otras. Esta norma constitucional está desarrollada por los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley N° 106 del 8 de octubre de 1973, en los cuales se enuncian las actividades, negocios, explotaciones, servicios y aprovechamiento especiales **que pueden ser gravadas** con impuestos municipales.

De lo anterior se desprende, entonces, que la potestad tributaria de los municipios es derivada, en la medida en que se origina fundamentalmente en la Ley, por lo cual los municipios no pueden crear tributos no previstos en el texto de aquélla (Cfr. Sentencias del 8 de febrero de 1994 y 15 de junio de 1993). Siendo lo anterior así, resulta lógico que la ley también pueda establecer límites a la potestad tributaria municipal, es decir, señalar las actividades que no pueden ser gravadas por los Municipios, sin que ello represente una infracción al ordenamiento constitucional.

Tal criterio fue expuesto por esta Corporación de Justicia en su fallo del 15 de junio de 1993, cuya parte pertinente dice:

> "Siendo que la potestad tributaria de los Municipios es derivada, esto es, que resulta imprescindible que la ley establezca los rubros que pueden ser gravados mediante Acuerdos Municipales, parece lógico que la ley pueda establecer límites a la potestad tributaria de los

> Municipios, sin que ello represente una lesión al principio consagrado en el artículo 243 (sic) de la Carta Magna.
>
> Desde este punto de vista, el Estado puede limitar, mediante ley, la potestad tributaria de los Municipios, es decir, que el legislador puede señalar las actividades que no pueden ser gravadas por éstos. Pero lo que no puede hacer el Estado es conceder exoneraciones de impuestos, tasas o contribuciones debidamente establecidas por un Acuerdo Municipal. Este es el sentir del artículo 243 (sic) de la Constitución Nacional". (Registro Judicial de junio de 1993, pág. 88).

En el caso bajo estudio, el artículo 36 de la Ley N° 98 del 29 de diciembre de 1961 y el artículo 4 del Decreto de Gabinete N° 235 del 30 julio de 1969 exoneran al IDAAN y al IRHE, respectivamente, del pago de impuestos de cualquier clase, entre ellos, los municipales. Estas disposiciones, lejos de materializar una infracción a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, constituyen una **limitación a la potestad tributaria de los municipios**, en virtud de la cual éstos no pueden gravar con cargas impositivas a ninguna de las entidades públicas mencionadas.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que el establecimiento de una tasa sobre los medidores de energía eléctrica propiedad del IRHE y del IDAAN, viola el artículo 48 de la Constitución Política, ya que esta norma exige que todo impuesto o contribución, al igual que su forma de cobranza, esté previamente establecido mediante Ley. El artículo 76 de la Ley N° 106 de 1973, que se cita como fundamento legal del acto impugnado, preceptúa que los Municipios podrán fijar y cobrar derechos y tasas sobre la prestación de los servicios municipales que allí se listan En su párrafo final este artículo señala que la Nación está exenta de los derechos y tasas que en él se establecen y el producto de la prestación de los servicios nacionales del IRHE e IDAAN es parte del Tesoro Nacional, de acuerdo con el artículo 40 del Código Fiscal. Además, normas orgánicas de ambas instituciones las exoneran de pagar impuestos o tasas nacionales y municipales.

Así como el Estado no puede conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales por prohibición expresa del artículo 245 de la Constitución Política, los Municipios sólo pueden fijar y cobrar los impuestos señalados en la Ley y esto no ocurre en el presente caso.

Con base en los razonamientos expuestos, esta Corporación de Justicia estima que las tasas que establecen los artículos 1, 2 y 3, del Acuerdo Municipal impugnado, así como el procedimiento de cobro consignado en el artículo 4, no son el resultado de una previsión normativa legal, razón por la cual infringen el artículo 48 constitucional antes mencionado.

Con respecto al artículo 5 del Acuerdo impugnado, esta norma, a simple vista no parece contrastar con el ordenamiento constitucional, pues el texto de la misma es igual a la parte inicial del inciso segundo del artículo 80 de la Ley N° 106 de 1973, modificado por el artículo 40 de la Ley N° 52 de 1984, el cual dispone que el Municipio tendrá jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos en concepto de morosidad de las contribuciones, impuestos y tasas de los contribuyentes.

Si bien esta norma no alude a ningún contribuyente en particular, del examen minucioso de la misma, relacionándola con el resto de la estructura normativa del Acuerdo impugnado, se desprende que el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos morosos a que alude dicha norma, se refiere al IRHE y al IDAAN, ya que los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo demandado, convierten a ambas entidades en contribuyentes del fisco municipal, y el artículo 4, faculta al Tesorero Municipal para adoptar las medidas para el cobro de la referida tasa. En otras palabras, el Acuerdo N° 42 de 1993 del Consejo Municipal chorrerano pretende, a través de su artículo 5, cobrar por vía de la jurisdicción coactiva los créditos morosos que tengan el IRHE y el IDAAN a favor de ese Municipio por razón de las tasas allí señaladas, lo que obviamente contrasta con el mencionado

artículo 48 de la Constitución Política, tal como se ha visto antes.

El Pleno de la Corte debe concluir, pues, en que el Acuerdo Municipal demandando infringe, en su conjunto, el artículo 48 de la Carta Fundamental.

Como del estudio del primero de los cargos se desprende que el acto acusado infringe el artículo 48 de la Constitución Política, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima, por razones de economía procesal, que no es necesario examinar el resto de los cargos de inconstitucionalidad que contra el mismo se formulan.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el Acuerdo Municipal N° 42 del 16 de diciembre de 1993, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de La Chorrera.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO EMILIO ROYO LINARES CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96, DEL 5 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 4 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Emilio Royo Linares, actuando en nombre y representación de la señora **DARMA GLORIA RAYMORES**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia advertencia de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 01-96 del 5 de enero de 1996, dictada por la Comisión de Vivienda N° 4 del Ministerio de Vivienda.

Al decidir sobre la admisibilidad de la citada advertencia de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima necesario examinar, por razones de economía procesal, si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En este sentido, se observa que la misma se interpuso contra la Resolución N° 01-96, del 5 de enero de 1996 y no contra una norma legal o reglamentaria aplicable al caso, tal como exige el artículo 2549 del Código Judicial que es del tenor siguiente:

> "Artículo 2549. Cuando alguna de las partes en un proceso advierta que la **disposición legal o reglamentaria** es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en el término de dos días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para los efectos del artículo anterior."

Como en el presente caso, la referida advertencia de inconstitucionalidad no se presentó contra una disposición legal o reglamentaria aplicable al caso, tampoco se ha cumplido con el presupuesto consagrado en la transcrita norma, razón por la cual dicha advertencia no puede admitirse.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Emilio Royo Linares contra la Resolución N° 01-96, del 5 de enero de 1996, dictada por la Comisión de Vivienda N° 4 del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICENCIADOS JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ (PRINCIPAL) Y RAFAEL A. RODRÍGUEZ (SUSTITUTO), EN REPRESENTACIÓN DE VICTORIA MOLINA VIUDA DE RODRÍGUEZ, CONTRA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY N° 15 DE 8 DE AGOSTO DE 1994. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Directora Nacional de Derecho de Autor, por medio de Nota N° DNDA/24 de 8 de marzo de 1996 remitió a esta Corporación de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad formulada por el licenciado JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ, en representación de la sociedad LUCKY CENTER, INC.

La nota de remisión textualmente expresa:

"Honorable Señor Magistrado:

En cumplimiento del mandato contenido en el inciso segundo del numeral 1 del Artículo 203 de la Constitución Política Nacional y el Artículo 2549 del Código Judicial, remitimos por vuestro digno conducto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, memorial contentivo de la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada el día 6 de marzo del año en curso por el Licenciado JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ, miembro de la firma forense PADILLA Y ASOCIADOS, apoderado judicial de VICTORIA MOLINA VDA. DE RODRÍGUEZ, representante legal de la sociedad LUCKY CENTER, INC., dentro del proceso que se le sigue en este Despacho.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra alta estima y consideración.

(Fdo.) KATHYA L. GARCÍA VARELA
Directora Nacional de Derecho de Autor".

El advertidor señala que el párrafo primero del artículo 113 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor, viola el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Es deber de la Corte analizar, en primer término, si la advertencia o consulta de inconstitucionalidad cumple los requisitos que se exigen para esta acción constitucional. En primer término, esta Corporación de Justicia, ha señalado que la advertencia debe revestir la forma de una demanda, es decir, los requisitos establecidos en el artículo 654 y, además, la norma legal o reglamentaria que se considera que lesiona el ordenamiento constitucional y las normas constitucionales específicas que considera que ha sido infringidas dentro del proceso respectivo, y que la norma acusada de inconstitucional no haya sido

aplicada, para lo que resulta indispensable que en el cuerpo de la demanda se haga referencia al proceso dentro del cual se promueve la acción constitucional y si la disposición legal cuestionada ha sido o no ha sido aplicada. De otra suerte, el Pleno carece de elementos de juicio para pronunciarse, ante su desconocimiento del proceso de que se trate y, también, si la norma legal o reglamentaria no ha sido aplicada, única oportunidad en la que procede la acción constitucional.

Ya el Pleno ha tenido ocasión de referirse, en reiteradas ocasiones, a los extremos mencionados. Vale la ocasión para traer a colación, a modo de ejemplo, la resolución de 8 de febrero de 1994:

> "...
> Jurisprudencia del Pleno de esta Corporación de Justicia ha reiterado la necesidad de que el peticionario cumpla con la exigencia que establece el citado artículo 2551 de la excerta procesal, concerniente a "los requisitos comunes a toda demanda". Entre tales requisitos figura la expresión de los hechos, debidamente numerados, los que deberán contener una narración o descripción de la secuencia del proceso jurisdiccional que origina la iniciativa constitucional ...". (Registro Judicial. Febrero de 1994. Pág. 50).

En sentido similar, puede consultarse, además, la resolución de 26 de septiembre de 1994.

En consecuencia, al adolecer de defectos que le impiden a la Corte entrar a analizar la advertencia formulada, no puede hacer otra cosa que no admitir esta acción constitucional.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el licenciado JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ en representación de la empresa LUCKY CENTER, INC., contra el primer párrafo del artículo 113 de la Ley N° 15 de 8 de agosto de 1994.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA CHANDECK EN NOMBRE DE SVEN VALDEMAR WAGE CONTRA EL ACTO DE AUTORIDAD S/N DE 13 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor SVEN VALDEMAR WAGE, mediante poder especial otorgado a la licenciada ELISA M. CHANDECK S. ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de inconstitucionalidad a fin de que declare que es inconstitucional el "Acto de Autoridad S/N de 13 de julio de 1994 expedido por la Gobernación de la Provincia de Panamá, que admite un recurso extraordinario de revisión administrativa ...", cuya copia autenticada de fojas 1° expresa:

> "REPÚBLICA DE PANAMÁ, GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTOS:

Acójase el presente **RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA** presentado por la Licda. **Zina Constantakis** en representación del sr. **CECILIO VARGAS DE LEÓN** contra la Resolución N° 674-S. J. de 13 de abril de 1994, dictada por la Alcaldía del Distrito de Panamá, que **CONFIRMA** la Resolución N° 4749 de 25 de octubre de 1993, proferida por el Juzgado Segundo de Tránsito del Distrito de Panamá.

Désele traslado del presente caso a el sr. **SVEN VALDEMAR WAGE** y concédase tres (3) días para que conteste el recurso presentado.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
(fdo.) **DAPHNE DE CLEMENT,**
Gobernadora de la Provincia de Panamá.
(fdo.) **SONIA DE GUINARD,**
Secretaria General. ..."

El negocio constitucional, luego de cumplidos los trámites de la admisibilidad se encuentra en estado de decidir sobre el fondo de la inconstitucionalidad demandada, por lo que a ello se procede seguidamente:

CONTENIDO DE LA DEMANDA

El previo examen del contenido de la demanda propuesta por la accionante revela, sin la menor duda, que el vicio de inconstitucionalidad propiamente dicho radica en que la Gobernación de la Provincia de Panamá, acogió un Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra la Resolución N° 674 S. J. de 13 de abril de 1994 proferida en segunda instancia por la Alcaldía de Panamá. De esa manera, según el libelo en estudio, el acto que acoge el mencionado recurso extraordinario de Revisión Administrativo, viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, que consagra el debido proceso legal, en cuanto al derecho a ser juzgado por autoridad competente, derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales y derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa policiva.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN.

La señora Procuradora de la Administración, luego de habérsele corrido traslado de la demanda, emitió su opinión en la vista consultable a fojas 18-29, arribando a la conclusión que, el "... acto administrativo S/N de 13 de julio de 1994, expedido por la Gobernación de la Provincia de Panamá, no es inconstitucional". Se basa en razones doctrinales y jurisprudenciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, sobre la naturaleza jurídica y el significado del acto atacado, en cuanto al aspecto relacionado con "juicios de policía de carácter correccional, comprendidos en el Libro III del Código Administrativo y también en aquellos previstos en la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974, que regula la justicia administrativa policial en los distritos de Panamá, San Miguelito y Colón". En este sentido, al no coincidir con el criterio jurídico de la demandante, en la comentada vista de traslado sostiene que en el "Decreto Ley N° 18 de 21 de noviembre de 1989 se instituyó el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa, que posteriormente fue regulado por la Ley N° 19 de 3 de agosto de 1992, el cual en los artículos 8 y 9, numeral 23, preceptúa: "..."

De conformidad con las normativas de los artículos de la precitada ley, alude la titular de la Procuraduría de la Administración, se infiere que el Recurso de Revisión Administrativa ha sido establecido con la finalidad de que los Gobernadores de Provincias conozcan decisiones expedidas por autoridades municipales en segunda instancia en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que tratan el Libro III del Código Administrativo y la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974.

Más adelante, la Vista en mención hace referencia a la definición del

término policía y las clasificaciones que establece el Código Administrativo , al igual que otros conceptos establecidos en el ámbito doctrinal sobre esta materia.

Finalmente, concluye sosteniendo que la competencia que tienen los Gobernadores para conocer de los procesos de tránsito en grado de revisión administrativa, obedece a que el Decreto de Gabinete N° 160 de 7 de junio de 1993, que expide el Reglamento de Tránsito, señala:

> "ARTÍCULO 113. Los procesos administrativos sobre accidentes de tránsito en cualquiera de sus formas se tramitarán en dos instancias: la primera ante el Juzgado de Tránsito y la segunda ante el Municipio Correspondiente."

Considera, entonces, que debido a que se cumple lo enunciado en el artículo antes transcrito en concordancia con el artículo 8 y el numeral 23 del artículo 9 de la Ley 19 de 1992 "el Gobernador si tiene la facultad para conocer del recurso extraordinario de revisión administrativa".

Consecuentemente, el Ministerio Público es de la opinión que no se produce la violación del debido proceso, ya que "las normas referentes al tránsito están incluidas dentro de la noción de policía, presupuesto jurídico a través del cual se puede acceder ante el gobernador, quien es la autoridad competente para conocer del Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa.

DECISIÓN DE LA CORTE

Como se ha expresado anteriormente el acto demandado de inconstitucional es la resolución dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, fechada 13 de julio de 1994, por medio de la cual se ACOGE un Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra la Resolución N° 674-S. J. dictada por la Alcaldía de Panamá el 13 de abril de 1994, que CONFIRMO la proferida por el Juzgado Segundo de Tránsito del Distrito de Panamá, de fecha 25 de octubre de 1993.

El vicio que se atribuye a la aludida resolución de la Gobernación se fundamenta en la infracción del artículo de 32 de la Constitución, en tres aspectos, que analizaremos a continuación:

Sostiene la censura que el acto demandado fue dictado en 1994, desconociendo la regulación específica sobre competencia y recursos en materia del proceso de tránsito, establecida en la Norma Reglamentaria de Policía de Tránsito para la República de Panamá que fija taxativamente la competencia en dos autoridades: para la primera instancia en los juzgados de tránsito y, para la segunda vía, recurso de apelación en las autoridades municipales. Así, se expresa que la resolución es inconstitucional pues hizo una interpretación extensiva y analógica sobre las funciones jurisdiccionales del Gobernador, cuando las normas sobre recursos y la competencia para resolverlos son de estricto derecho.

A juicio de la Corte, el cargo que expresa el demandante, atribuyéndole al acto de autoridad impugnado una violación del derecho a ser juzgado por juez competente, está justificado, toda vez que el Gobernador no era de las autoridades que determina específicamente la regulación especial sobre procesos administrativos por accidentes de tránsito.

Igualmente, el acto impugnado, al admitir el recurso de revisión administrativa en relación con el proceso de tránsito, se está apartando y excediendo del debido trámite legal que, al efecto, establece la reglamentación especial sobre la materia.

Esto es así, pues lo que regula el reglamento de Tránsito Vehicular, mediante el Decreto Ejecutivo N° 160 de 7 de junio de 1993, no es igual a lo preceptuado por la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, en base a la cual se dictó la resolución atacada.

En tal sentido, la norma **REGLAMENTARIA** contenida en el citado Decreto, en

cuanto a la competencia dentro del proceso de tránsito, determina claramente, en su artículo 113, las dos autoridades a quienes corresponderá el conocimiento de la primera y segunda instancia, al igual que del Recurso de **Apelación**. Siendo éstas los Jueces de Tránsito y el Municipio correspondiente.

Mientras lo que crea y regula Ley 19 de 1992 es otro medio de impugnación, éste de carácter extraordinario, cuyo conocimiento es atribuido a una autoridad distinta a las que menciona el citado reglamento y, para los supuestos taxativamente enumerados en dicha ley.

Veamos lo que preceptúan los artículos 8 y 9 de la Ley 19 de 1992:

"Artículo 8. Se instituye el recurso extraordinario de revisión administrativa, del que conocerán los gobernadores de provincias para revocar decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley N° 112 de 30 de diciembre de 1974.

El recurso extraordinario de revisión administrativa sólo procederá cuando:

1. La decisión recurrida hubiese sido dictada por órganos o autoridad sin competencia para ello;

2. La decisión recurrida se fundamente en declaraciones falsas o en pruebas insuficientes;

3. No se hubiesen cumplido los trámites esenciales del procedimiento establecido por la ley aplicable;

4. Así se disponga en una ley especial;

5. Al dictarse la decisión se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho, que resulte de los documentos incorporados al expediente y que haya afectado en forma directa la decisión recurrida; y

6. La decisión se hubiere dictado como consecuencia e los hechos tipificados en los Capítulos II y III de l Título X del Libro II del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 9. El artículo 4 de la Ley N° 2 de 2 de junio de 1987 queda así:

Artículo 4. Los gobernadores tendrán las siguientes atribuciones:

...
23. Conocer del recurso extraordinario de revisión administrativa que se interponga contra decisiones de autoridades municipales, proferidas en segunda instancia; ..."

No hay duda que la ley crea el Recurso extraordinario de Revisión Administrativa contra decisiones que en segunda instancia haya dictado una autoridad municipal, pero cuando recaigan sobre materia **"correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley N° 112 de 30 de diciembre de 1974"**.

El Pleno aprecia que lo dispuesto por la ley no revela un contenido o expresiones que den lugar a algún tipo de interpretación por analogía, ya que el texto de ambos artículos es muy claro. Sin embargo, la duda sobre lo expresado en el citado artículo 8 con relación a este caso, manifestada en el libelo del presente recurso de inconstitucionalidad, parece recaer fundamentalmente en si el proceso por accidente de tránsito puede considerarse incluido en los llamados "juicios de policía" a que alude el Libro III del Código Administrativo y la Ley

N° 112 de 30 de diciembre de 1974.

La Corte coincide con la opinión de la Procuradora de la Administración cuando concluye que las "normas referentes al tránsito están incluidas dentro de la noción de policía". Por ello resulta oportuno citar la jurisprudencia aludida en la Vista del Ministerio Público, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la resolución de 12 de febrero de 1947, que se refiere a la materia denominada de policía, en los siguientes términos:

> "JUICIOS DE POLICÍA. Las faltas que por motivo de tránsito cometan las personas se hallan castigadas en el Código Administrativo y en el Decreto N° 159, de 19 de septiembre de 1941 (Reglamento de Tránsito). El Código que se menciona divide las cuestiones a que la doctrina jurídica y el derecho positivo dan al nombre de policía moral y policía material, y en los Parágrafos III (Vías públicas urbanas), IV (Tranvías), (Vehículos de rueda en general), del Capítulo I y en el Capítulo III, Parágrafo IX (Vías Públicas), contiene una serie de disposiciones sobre tránsito, que se hallan colocadas bajo el epígrafe genérico de policía material. La anunciación anterior se ha hecho con el simple propósito de advertir que las infracciones relativas al tránsito forman parte de la materia denominada de policía, por lo cual las causas que con relación a ellos se sigan son juicios típicos de policía, en los cuales se profieren condenas de carácter penal o civil.
>
> El artículo 28 de la Ley 135 de 1943 y el 17 de la Ley 33 de 1946 han excluido de la jurisdicción contenciosa "las resoluciones que se dicten en los juicios de policías de naturaleza penal o civil", norma que es aplicable al caso de una resolución dictada para castigar una infracción del reglamento de tránsito (Auto del Magistrado Sustanciador, Febrero 12 de 1947). (DÍAZ E., Manuel Antonio. "Jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo". Imprenta Nacional. Panamá. Panamá. 956. pp. 35 y 36).

Conforme a la citada jurisprudencia, en concordancia con el Código Administrativo y el Reglamento de Tránsito vigente en ese tiempo, las causas que se sigan con relación a infracciones de tránsito son **juicios típicos de policía.** Igualmente, se puede apreciar la equiparación que se hace de las resoluciones que se dicten en juicios de policía de naturaleza penal o civil, con las resoluciones proferidas para castigar una infracción del reglamento de tránsito, como actos no acusables ante lo Contencioso Administrativo, según el alcance que se atribuye al contenido del numeral 2 del artículo 28 de la Ley 135 de 1943 y 17 de la Ley 33 de 1946.

Aunque el Reglamento de Tránsito que rige en la actualidad utilice el término "procesos administrativos sobre accidentes de tránsito", ello no implica que no se consideren juicios de policía conforme al criterio jurisprudencial al cual hemos hecho referencia.

Es cierto, y parece no haber margen a divergencias, que los procesos ante los jueces de tránsito son actos policivos, no susceptibles de conocimiento por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Sin embargo, desde 1941, cuando se dicta el primer decreto ejecutivo regulando el tránsito vehicular, y hasta ahora, cuando rige el Decreto 160 de 1993, los procesos administrativos sobre accidentes de tránsito (artículos 113 a 125), han sido procesos distintos de los procesos correccionales que regula el Código Administrativo en el Título V bajo la denominación de PROCEDIMIENTOS, que comprende los artículos 1708 a 1745, aún cuando no dejan de tener, algunas particularidades en común.

Esta realidad nos plantea la exigencia de determinar si, al crear la Ley 19 de 1992 el recurso extraordinario de revisión administrativa, se está refiriendo a los procesos sobre accidentes de tránsito.

El artículo 8° de la Ley en referencia establece el recurso contra "decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley 112 de 1974".

Se aprecia que este texto se refiere: (1) a los procesos antes mencionados, regulados por los artículos 1708 a 1745 del Código Administrativo y (2) a los procesos regulados en la Ley 112 de 1974, de cuyo texto se deduce claramente que no se refiere a los procesos por accidentes de tránsito.

No obstante el carácter policivo que se atribuya a los procesos por accidentes de tránsito, hay que señalar que son ESPECIALES, por lo que debe concluirse que el recurso de revisión administrativa no se ha creado para esos procesos.

Por lo que se deja expuesto, el Pleno de la Corte considera que la Resolución acusada de inconstitucional, de 13 de julio de 1994 dictada por la Gobernación de la Provincia de Panamá, si vulnera el artículo 32 de nuestra Carta Fundamental.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el acto de autoridad s/n del 13 de julio de 1994, expedido por la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS SEGUIDAS AL H. L. FRANZ OLMEDO WEBWER Y OTROS POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DEL SINDICATO ÚNICO DE CONDUCTORES DE TAXIS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Juzgado Décimo Tercero de Circuito ingresó a esta máxima Corporación de Justicia el expediente contentivo de las Sumarias seguida contra **FRANZ OLMEDO WEBER y Otros**, por haberse inhibido dicho juzgador del conocimiento por razones de competencia, debido al cargo de legislador de la República de uno de los demandados.

El Pleno de la Corte corrió traslado del presente negocio a la Procuraduría General de la Nación para que emitiera concepto, quien respondió en la Vista N° 7 de 2 de febrero de 1996 (fs. 256 a 259) expresando que no consideraba necesario solicitar que se "remita nuevamente el sumario respectivo al Pleno de la Asamblea Legislativa, pues no nos queda más que esperar que dicho organismos (sic) parlamentarios (sic), oportunamente se pronuncie en lo tocante al señor FRANZ WEVER". Y, por otra parte, considera que es de lugar "devolver el sumario al Juzgado Décimo Tercero de Circuito Judicial, para que resuelva la situación legal de las demás personas que fueron denunciadas, según ... posterior desistimiento de la pretensión punitiva (fs. 239) ...".

En la Vista parcialmente transcrita en el párrafo que antecede se hace un recuento de lo acontecido en este caso indicando que el juzgado de circuito ha replanteado una cuestión sin fundamento legal en lo que respecta al legislador (omitiendo pronunciarse sobre los otros denunciados), debido a que no tomó en cuenta que la Fiscalía ante quien se interpuso la denuncia ya había remitido copias autenticadas de las sumarias al Procurador General de la Nación para que ejerciera la acción penal con respecto al Legislador que figuraba entre los denunciados.

En tal sentido, dicha Procuraduría remitió todo lo concerniente al caso en estudio a la Asamblea Legislativa con el Oficio DPG-811-95- de 22 de mayo de 1995 (en cumplimiento del artículo 154, numeral 2 de la Constitución y 203 de su reglamento interno) para que determinara si había lugar a formación de causa y consiguiente enjuiciamiento del legislador.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público recomienda a esta Corporación esperar el pronunciamiento de la Asamblea.

La Corte ha podido verificar en este expediente:

1- La denuncia presentada (fs. 1 a 4) por ESPÍRITU RESTREPO BATISTA en su condición de Representante Legal y Secretario General del Sindicato Único de Conductores de Taxis de Panamá contra FRANZ WEBER y otras personas por los delitos de Apropiación Indebida, Estafa y Hurto;

2- La resolución mediante la cual la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá asume el conocimiento del sumario (fs. 75) y, la resolución que dispone remitir copia del sumario al Procurador General de la Nación (fs. 76).

3- Diligencia realizada ante dicha agencia de instrucción en que el denunciante Espíritu Restrepo manifiesta su desistimiento de la pretensión punitiva contra todos los imputados, por haber llegado a un arreglo para la reparación del daño ocasionado (fs. 239 y 239 vlt.).

4- A fs. 240 a 241 se lee la Vista de la mencionada Fiscalía en que solicita al órgano jurisdiccional el archivo del expediente, con fundamento en el artículo 1984 del Código de procedimiento Penal, en virtud que en la presente causa nadie ha sido sometido a indagatoria y que el desistimiento cumple con los requisitos de la norma citada; por lo que dispuso remitir el sumario al Juzgado correspondiente. (Fs. 243).

Posteriormente, como se tiene dicho, el mencionado juzgado envió el expediente sumarial a la Corte.

A juicio de esta Corporación, a pesar del señalamiento del Procurador de haber enviado copias de las sumarias a la Asamblea Legislativa, no es necesario esperar un pronunciamiento de dicho Órgano del Estado sobre el posible encausamiento y juzgamiento del legislador denunciado, pues resulta evidente que el desistimiento de la pretensión trae como consecuencia la inexistencia del objeto de tal pronunciamiento.

Es así, porque el Pleno de la Corte estima que es procedente el desistimiento de la pretensión punitiva, luego de haber examinado directamente la diligencia en la cual el denunciante manifiesta dicho desistimiento en relación con los delitos imputados (Estafa, Apropiación Indebida y Hurto), los que se encuentran entre los previstos en el artículo 1984 del Código Judicial, que permiten acceder a este medio de terminación del proceso y ordenar el archivo del expediente.

En consecuencia, compete al Juzgado Décimo Tercero del Circuito Penal pronunciarse sobre la situación jurídica de los otros denunciados en virtud del aludido desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el Desistimiento de la

pretensión punitiva manifestado por ESPÍRITU RESTREPO BATISTA, en su calidad de Representante Legal y Secretario General del Sindicato Único de Conductores de Taxis de Panamá, en relación con el H.L. FRANZ OLMEDO WEBER; y, DISPONE devolver las sumarias al Juzgado Décimo Tercero del Primer Circuito Judicial, Penal, para que resuelva lo de lugar respecto a los otros denunciados.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA CRIMINAL INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL FREDERICKSON CONTRA LA JUNTA DIRECTIVA, COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Felipe C. Rangel Frederickson, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado querella criminal contra los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y sus suplentes, por los supuestos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, contemplados en los artículos 336 y 338 del Código Penal y por el supuesto delito de encubrimiento.

La parte demandante sostiene que la presente querella criminal se basa en el hecho de que mediante Resolución N° 13,004-86 de 1 de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, se ordenó suspender los efectos de las Resoluciones N° 5134-77 de 3 de enero de 1978 y 6623-78 de 20 de julio de 1978 mediante las cuales el actor fue pensionado por invalidez con carácter definitivo.

El Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 8 de 15 de febrero de 1996, solicita a esta Corporación de Justicia se dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, conforme al artículo 2210 del Código Judicial, en cuanto a los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde a esta Superioridad y por ende se archive la presente querella.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia procede al estudio de la presente querella criminal a fin de determinar lo correspondiente.

Se observa, pues, que la querella criminal que nos ocupa adolece de serios defectos, e incluso podría sostenerse que en el fondo se trata de una denuncia.

Por otro lado, tal como lo señala el Procurador General de la Nación en su Vista, el demandante incumple con lo normado en el artículo 2471 del Código Judicial que exige que el que promueva acusación por delito o denuncia contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, deberán acompañar la prueba sumaria de su relato. Añade dicha norma que en caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. En este orden de ideas, se observa que el demandante presenta como pruebas sumarias copia autenticada de la Resolución N° 13,004-86 de 1° de octubre de 1986, mediante la cual se suspende los efectos de las Resoluciones N° 5134-77 de 3 de enero de 1978 y 6623-78 de 20 de julio de 1978, en la cual se reconoció al señor Felipe Camilo Rangel Frederickson una pensión por el riesgo de invalidez, la cual, por sí sola

no acredita la existencia de delito alguno. A su vez, también fueron presentadas como pruebas, copias no autenticadas de la Resolución N° 10,254-95-J. D. de 23 de marzo de 1995, de la Resolución N° 5134-77 de 3 de enero de 1978, de la Resolución N° 6623 -78 de 20 de julio de 1978, de la Nota fechada el 25 de abril de 1985, de la Nota fechada el día 24 de julio de 1995 y el 9 de diciembre de 1994 las cuales, por carecer de la formalidad de la autenticación, no constituyen prueba sumaria. Además esos documentos no prueban la comisión de delito alguno.

En estas circunstancias, considera la Corte que es certera la opinión vertida por el Jefe del Ministerio Público, por lo que lo procedente es, pues, cerrar el proceso con un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal, sólo en lo relativo a la Dra. AIDA DE RIVERA, Ministra de Salud, el señor ARISTIDES ROMERO, Contralor General de la República, el Lcdo. GUILLERMO CHAPMAN, Ministro de Planificación y Política Económica, a quienes les corresponde ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, por razón de su cargo, tal como lo estipula el artículo 87, numeral 2, literal b) del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE de manera objetiva e impersonal a la Dra. AIDA DE RIVERA, Ministra de Salud, al señor ARISTIDES ROMERO, Contralor General de la Nación, y al Lcdo. GUILLERMO CHAPMAN, Ministro de Planificación y Política Económica, ORDENA el archivo del expediente, y que se compulse copias de este negocio a la autoridad competente para que se resuelva lo concerniente al resto de los denunciados.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CARLOS CEDEÑO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LOS AUTOS N° 3992, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1995, N° 4036 DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, AMBOS EXPEDIDOS POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito calendado el 22 de febrero de 1996, el Honorable Magistrado **EDGARDO MOLINO MOLA**, manifiesta impedimento para conocer la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Lic. LUIS CARLOS CEDEÑO en representación del Lic. CARLOS ALFREDO LÓPEZ GUEVARA, contra la órdenes de hacer contenidas en los autos N° 3992, de 19 de diciembre de 1995 y N° 4036 de 26 de diciembre de 1995, ambos expedidos por el Juez Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, en apelación.

La manifestación de impedimento está concebida en los siguientes términos:
"...
En efecto, se somete a decisión del Pleno de la Corte en grado de apelación, la admisibilidad de una acción de amparo que ha sido instaurada contra dos autos expedidos por el Juez Tercero de Circuito Civil de Panamá, dentro de un proceso de rendición de cuentas instaurado contra el licenciado LÓPEZ GUEVARA por los abogados PEDRO A. BARSALLO, EDUARDO A. MOLINO PAZ, y otros siendo que el licenciado MOLINO PAZ es mi sobrino, por lo que podría

considerarse tengo interés en las resultas del negocio.

Por ende, en vías de que no sobrevengan dudas en lo referente a la absoluta imparcialidad de la decisión judicial por razón del grado de parentesco que me vincula a una de las partes interesadas en el negocio, solicito respetuosamente a mis colegas del Pleno de la Corte, se me declare impedido para conocer de la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales. ..."

Examinada la circunstancia anotada por el Magistrado Molino Mola, el Pleno considera conveniente acceder a su solicitud y separarlo del conocimiento de este negocio, toda vez que es evidente el vínculo existente entre el juzgador y una de las partes interesadas.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento de la presente acción de amparo y DISPONE llamar en su reemplazo a su suplente licenciado JUAN A. TEJADA MORA para que conozca del caso.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO Y PENAL, PROMOVIDO POR QUEJA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN CONTRA LA LICENCIADA DAMARYS CABALLERO DE ALMENGOR, JUEZ CUARTA DEL CIRCUITO, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado TEÓFANES LÓPEZ AVILA actuando en nombre y representación de la licenciada **DAMARIS CABALLERO DE ALMENGOR** ha interpuesto **Recurso de Hecho** "por la negativa tácita" del recurso de apelación anunciado contra la resolución de 17 de julio de 1995, confirmada por la de 1° de agosto de 1995, ambas emitidas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del Proceso Disciplinario, Administrativo, Ético y Penal promovido por Queja del Procurador General de la Nación contra la recurrente en su calidad de Juez Cuarta del Circuito, Ramo Penal.

El recurso de hecho fue presentado ante la Sala de lo Penal de esta Corporación, sin embargo, al observar que el respectivo proceso trata sobre asunto disciplinario, se decidió que la competencia privativa correspondía al PLENO de la Corte. Por tanto, la Sala Penal mediante resolución de 10 de octubre de 1995 DECLINÓ en ese sentido el conocimiento del presente negocio (Fs. 67-69).

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que alegaran las partes, presentando sólo la parte recurrente el respectivo escrito, según consta de foja 74 a 103. Así, agotado dicho término corresponde a la Corte decidir sobre este medio de impugnación, a la luz de lo normado por el artículo 1141 del Código Judicial.

Las pautas que consagra la norma citada para la admisión del recurso de hecho son:

1- Que la resolución contra la cual se interpuso el recurso sea recurrible;

2- Que el recurso haya sido interpuesto oportunamente;

3- Que el recurso haya sido negado expresa o tácitamente por el Tribunal;

4- Que las copias se hayan pedido y retirado en los términos señalados; y,

Sobre el primer aspecto vemos que la resolución impugnada mediante Recurso de Hecho es la de 17 de julio de 1995, que fue CONFIRMADA por la de 1 de agosto de 1995, ambas dictadas por el Segundo Tribunal Superior, declarando que "hay lugar a corrección disciplinaria" contra la Juez Cuarta de Circuito Penal, **"DECRETA LA DESTITUCIÓN"** y ordena compulsar copias al Ministerio Público por algún delito contra la Administración de Justicia u otro bien jurídico. Como fundamentos de derecho de la decisión se invoca: Artículos 199 (ordinales 8°, 9° y 12°), 200, 271, 278, 279, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 440 (ordinales 1°, 3° y 21°) y 2026 del Código Judicial. Resolución de 29 de agosto de 1994 (G. O. 22,628). Artículos 24A y 25B de la Ley 13 de 1994.

Como se puede apreciar a fojas 26 vuelta en la notificación de la aludida resolución de 17 de julio de 1995 (consta de fs. 9-26), la funcionaria anunció los recursos de Reconsideración con Apelación en subsidio. El primero fue resuelto mediante la resolución de 1 de agosto de 1995 y respecto al segundo no hubo pronunciamiento, lo que conlleva una negativa tácita del mismo, según alega el recurrente.

Alega el recurrente que, entre las normas que fundamentaron la decisión atacada figuran los artículos 200 y 294 del Código Judicial que reconocen la posibilidad de impugnar la decisión a través del recurso de Apelación y Reconsideración.

En el recurso de hecho también se sostiene en cuanto al anuncio de los dos medios de impugnación (reconsideración y apelación en subsidio) que están fundamentados en la Ley 33 de 1946 alegando que en este caso se combinaron el procedimiento disciplinario con el administrativo; y, además normas del procedimiento de ética, siendo que éstas últimas también establecen el recurso de apelación.

A primera vista, el Pleno de la Corte ha percibido cierta confusión en cuanto a la naturaleza de la resolución dictada en este Proceso y consecuentemente en las diferentes normas que se invocan indistintamente para apoyar la utilización del recurso de apelación contra dicho pronunciamiento.

Sobre este primer aspecto a pesar que el recurrente invoca el artículo 200 del Código Judicial que, en efecto, da lugar al recurso de apelación, su aplicación no es pertinente en este caso, pues el mismo se refiere a la resolución que se dicte por razón de la responsabilidad que pueda caber al funcionario por daños y perjuicios que cause a las partes, pronunciamiento que se dictará en un proceso distinto de aquel que le imponga, al respectivo juez, sanciones penales y disciplinarias.

El artículo 294 ibídem si es pertinente debido a que se refiere a materia disciplinaria, limitando el medio de impugnación contra la respectiva resolución al recurso de reconsideración que, en el caso subjúdice, utilizó la parte afectada.

Aunado a lo expuesto, cabe advertir que el Pleno de la Corte se pronunció sobre el asunto planteado en el presente recurso de hecho, es decir, sobre los medios de impugnación procedentes en este tipo de proceso disciplinario, ético, administrativo y penal, al resolver la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la Lcda. Damaris de Almengor contra la orden expedida por el Segundo Tribunal Superior, consistente en ejecutar la Resolución de Destitución de 17 de julio de 1995. Así, mediante resolución de 27 de julio de 1995 que decidió dicho amparo, la Corte expresó:

"Que se trata de un procedimiento disciplinario-administrativo contra un funcionario del Órgano Judicial, seguido conforme a la normativa del Código Judicial en materia disciplinaria. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 294 ibídem, contra las resoluciones dictadas en dichos procedimientos, sólo procede el recurso de reconsideración, siendo que una vez resuelto "queda agotada la vía gubernativa para recurrir, así, a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo".

En ese fallo el Pleno también consideró que, si la sanción y la pena disciplinaria contenidas en la resolución proferida por la autoridad nominadora constituye un acto administrativo susceptible de ser recurrido por la jurisdicción contencioso administrativo, "la ejecución de dicho acto administrativo para los efectos de su cumplimiento también es impugnable por esa vía", sobre todo en casos como este, en donde el acto administrativo disciplinario por su naturaleza jurídica y las repercusiones en la esfera estatal en que se ha emitido requiere de su ejecución inmediata.

De lo que se deja expuesto resulta claro que contra las resoluciones dictadas en procedimiento disciplinario-administrativo, como lo ha calificado esta Superioridad, únicamente cabe el recurso de reconsideración (art. 294 C. J.) y el que corresponda utilizar en la vía Contencioso Administrativa.

En el presente caso se resolvió la reconsideración propuesta por la funcionaria destituida y en la Sala Tercera se encuentra pendiente la resolución de la demanda interpuesta por la ex-juez para que se declare nula por ilegal la Resolución de 17 de julio de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior, como se lee en la certificación de esa Sala dada el 7 de febrero de 1996.

Al no verificarse el cumplimiento de la primera exigencia del artículo 1141, antes citado, resulta improcedente la admisión del recurso de hecho.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Recurso de Hecho interpuesto por el Licenciado TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA dentro del Proceso DISCIPLINARIO, ADMINISTRATIVO, ÉTICO y PENAL seguido contra la Licenciada DAMARYS CABALLERO DE ALMENGOR.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (Con salvamento de voto)
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

Con todo respeto a las decisiones de la mayoría de este cuerpo colegiado judicial, expreso que no comparto las consideraciones vertidas en la parte motiva ni la resolutiva de este fallo, por lo que salvo el voto y explico así:

1° Contra la resolución calendada el 17 de julio de 1995, la parte afectada presentó dos medios de impugnación: reconsideración y apelación en subsidio.

2° El Segundo Tribunal Superior de Justicia al resolver el primer recurso se limitó a dictar su resolución de 1° de agosto del mismo año, mediante la cual confirma la anterior, pero se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de apelación subsidiario.

3° La parte motiva y resolutiva de la decisión contenida en la resolución de 17 de julio de 1995, dilucida asuntos de orden disciplinario, de carácter ético y de naturaleza penal, por lo que deja de ser una decisión estrictamente

"administrativa-disciplinaria".

4° Al desbordar el Tribunal sus funciones netamente disciplinarias y considerar asuntos de carácter penal, debe otorgarse, por mandato legal, la oportunidad de la doble instancia, en virtud de que aspiramos poner en práctica un proceso garantista y no radicalmente inquisitivo.

Como quiera que la resolución de la cual disiento opta por no admitir el recurso de hecho que permitía al pleno conocer a fondo sobre este caso, **SALVO EL VOTO**.

Fecha Ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA POR DESACATO INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ GUERRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS DOCTORES ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR Y VICENTA YOUG DE PÉREZ, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, actuando en representación de los Doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, ha promovido ante esta Corporación de Justicia, una QUEJA POR DESACATO contra el Director General de la Caja de Seguro Social.

El escrito contentivo de la queja fue presentado en los siguientes términos:

"...

Primero: El 30 de noviembre de 1995, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia DECLARÓ INCONSTITUCIONAL en su totalidad, el reglamento Interno de personal del Ministerio de Salud.

Segundo: Que el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud es en su totalidad, el mismo reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social.

Tercero: Que mediante las Resoluciones 0386-95 DNP de 10 de enero de 1996 y las 0648-DNP y 0644 del 15 de enero de 1996, la Dirección General de la Caja de Seguro Social suspendió a los Doctores Roberto Medina, Blanca Aguilar y Vicenta Young de Pérez, aplicando sanciones contenidas en el Reglamento Interno de Personal.

Cuarto: Que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado por medio de diversos Fallos, que un reglamento declarado inconstitucional no puede ser aplicado para regular efectos jurídicos futuros, ni siquiera de hechos acaecidos cuando dicho Reglamento tenía vigencia.

Quinto: Que en una interpretación que no le es dada hacer a la Administración de la Caja de Seguro Social, ésta sostiene que a pesar de que el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud es el mismo que el de la Caja del Seguro Social, el hecho de que se hubiera declarado inconstitucional ese documento, no significa que siendo el mismo texto, para ellos ya no tenga aplicación.

Sexto: Que la declaratoria de inconstitucionalidad produce en Panamá

la nulidad ex-nunc (nula con efectos generales) de la norma reglamentaria impugnada, por lo cual al ser el mismo texto y contenido, no tiene vigencia el reglamento Interno de personal aludido.

Séptimo: Que siendo las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en materia de inconstitucionalidad, finales, definitivas y obligatorias, corresponde al Pleno aplicar las sanciones ante el abierto desacato al Fallo proferido el 30 de noviembre de 1995.

PRUEBAS:

1- Nota N° 8/96 del 17 de enero de 1996 donde se solicita a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social que autentique las copias de las resoluciones 0386-95 DNP, 0648-DNP y 0644, todas dictadas por la Administración de esa institución.

2- Copias de las Resoluciones 0386-95 DNP del 10 de enero de 1996 y las 0644 DNP del 15 de enero de 1996, expedidas por la Dirección de la Caja de Seguro Social.

DERECHO:

Artículos 2561, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 y 1962 del Código Judicial".

Procede la Corte Suprema de Justicia a examinar el presente negocio, a fin de determinar si el mismo cumple con los requisitos formales necesarios para su admisión.

De acuerdo a las constancias que reposan en el expediente, se observa que el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante Resoluciones N° 0386-95 DNP, del 10 de enero de 1996; N° 0648-96 D. N. P. del 15 de enero de 1996 y la N° 0644 del 15 de enero de 1996, sancionó a los Doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, respectivamente. Las referidas resoluciones tienen su fundamento en la potestad sancionadora que le atribuye el artículo 22, literal e), del Decreto-Ley N° 14 del 27 de agosto de 1954, tal como se encuentra vigente en la actualidad.

Observa el Pleno que los afectados por los actos administrativos de contenido sancionador, propusieron denuncia por desacato contra el Director de la Caja de Seguro Social, con fundamento en que dichas sanciones fueron impuestas con basamento a un Reglamento Interno del Ministerio de Salud, el cual había sido declarado inconstitucional por la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 30 de noviembre de 1995, argumentando el quejoso que la aplicación de un reglamento previamente declarado inconstitucional, constituía un desacato por parte del Director de la Caja de Seguro Social, tal como se puede apreciar en la queja antes transcrita.

El Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social fue adoptado por la Junta Directiva de esa entidad autónoma del Estado, mediante Resolución N° 768 de 16 de marzo de 1977. Sin embargo, el acto declarado inconstitucional por el fallo de 30 de noviembre de 1995, lo constituye el Resuelto N° 767 del 1° de julio de 1970, expedido por el Ministro de Salud. Se trata evidentemente de dos actos de naturaleza reglamentaria, dictados por autoridades distintas. El primero, por el más alto organismo de una entidad descentralizada y, el segundo, por parte de un Ministro de Estado en ejercicio de funciones administrativas, con independencia de su contenido.

Resulta, por lo anterior, que el acto que se está aplicando en la entidad pública que motiva el desacato, no es ni siquiera la entidad que expidió el acto, y no se trata, por lo tanto, de la aplicación de un acto por la misma entidad cuya actuación fue declarada inconstitucional, sino un acto distinto, el cual no ha sido, hasta la fecha, declarado inconstitucional. Caso distinto hubiere sido si el propio Ministro de Salud, aún a pesar del fallo de inconstitucionalidad señalado, hubiese insistido en aplicarlo, a pesar de haber sido erradicado del

ordenamiento jurídico patrio, en razón de la sentencia de inconstitucionalidad mencionada.

Debe traerse a colación que el artículo 2561, en cuyo segundo párrafo se encuentra el fundamento para la condena por desacato, lo condiciona a que sea la misma autoridad que ha dictado el acto declarado inconstitucional, a cuyos efectos, la Corte Suprema de Justicia debe suministrarle copia de la decisión que afecta un acto administrativo dictado por ella. Es, por lo tanto, claramente inconducente la denuncia dirigida a un servidor público que no es el funcionario que dictó el acto censurado por la Corte, por ser violatorio a la Constitución, con respecto a un acto que tampoco es aquél que fue objeto del fallo de inconstitucionalidad.

Finalmente, se observa que dichos acto administrativos dictados por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, son susceptibles de ser impugnados por vía gubernativa y, de no ser revocados, por las acciones que corresponden en proceso contencioso administrativo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la QUEJA POR DESACATO interpuesta por el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, en representación de los Doctores ROBERTO MEDINA, BLANCA EUGENIA AGUILAR y VICENTA YOUNG DE PÉREZ, contra el Director General de la Caja de Seguro Social, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO GUILLERMO A. COCHEZ CONTRA LA LICENCIADA EVA CAL, MAGISTRADA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **GUILLERMO A. COCHEZ** formuló queja contra la licenciada **EVA CAL**, Magistrada del Primer Tribunal Superior de Justicia. Realizado el reparto correspondiente, el Pleno se avoca a decidir sobre su admisibilidad.

En reiteradas ocasiones ha indicado la Corte que, para poder admitir cualquier queja formulada contra un funcionario judicial, es indispensable acompañar con ella un principio de prueba. En el caso en estudio, el quejoso relata que fue objeto de una amenaza por parte de la Magistrada EVA CAL que atiende el caso de YAKIMA INTERNACIONAL, S. A., Sociedad a la cual representó hasta hace cinco meses. Sin embargo, no aporta ninguna prueba referente a la situación que plantea. Ello sería suficiente para desestimar la queja.

El Pleno de la Corte debe señalar que, de conformidad con las normativas contempladas en el nuevo Código Judicial, la conducta sobre la ética judicial de todos los servidores de este Órgano del Estado está expresamente regulada en el Libro Primero de dicho Ordenamiento Procedimental Civil, sobre "Organización Judicial".

De allí que cualquier persona, sea o no parte en un determinado proceso

judicial, tiene derecho a promover queja o acusación contra cualquier funcionario y empleado del Órgano Judicial por falta a la ética judicial. No obstante, el citado Código también establece que para iniciar un procedimiento relacionado con la ética judicial, originado en la conducta que la viole, es necesario que la Queja o Acusación se formalice cumpliendo ciertos requisitos mínimos, como son: el nombre y generales del acusador; el nombre del acusado, el cargo que ejerce; la falta cuya ejecución se le imputa; expresión del hecho que constituye la falta; y, disposiciones violadas o impugnadas. Además, también exige que con la queja se acompañen las pruebas en que se funda la acusación; pues, en caso contrario, se Rechazará de Plano (Artículos 442 y 443 del Código Judicial).

El Pleno de la Corte advierte, sin desconocer el derecho que faculta al licenciado COCHEZ para interponer acusación contra cualquier Magistrado supuestamente responsable por faltas a la ética judicial, que el examen de la nota donde se consignan los cargos revela que la misma no contiene los requisitos mínimos exigidos por la ley procedimental que le permitan a esta Superioridad iniciar las investigaciones solicitadas.

En efecto, los hechos denunciados por licenciado GUILLERMO COCHEZ, en síntesis, se reducen a lo siguiente:

> "...
> Al salir de misa de 6:30 p. m. de ayer 28 en el Santuario Nacional, al momento de abandonar el templo, la Magistrada Eva Cal me increpó públicamente por la denuncia criminal que desde julio pasado se tramita en la Fiscalía Segunda Delegada de la Procuraduría General de la Nación, llegando hasta decirme "Me las vas a pagar por todo lo que me estás haciendo", amenaza que lograron escuchar quienes me acompañaban y otras personas que al mismo tiempo salían de la Iglesia. ...".

Resulta evidente que la acusación, en este caso, no expresa "la falta cuya ejecución se le imputa" a la Magistrada acusada, ni "la expresión del hecho que constituye la falta", ni se citan las disposiciones violadas o infringidas que definen las faltas a la ética judicial, fuera de que, como queda dicho, ningún elememto probatorio se aporta o se aduce en respaldo de la denuncia formulada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO la queja presentada por el licenciado GUILLERMO A. COCHEZ contra la licenciada EVA CAL, Magistrada del Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN QUE POR EL SUPUESTO DELITO DE USURPACIÓN, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD, EN PERJUICIO DE YACARÉ INTERNACIONAL, S. A. SE LE SIGUE A OLMEDO GUILLÉN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Juzgado Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, ingresó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el

expediente contentivo de las Sumarias incoadas contra **OLMEDO GUILLÉN** por el supuesto delito **"DE ABUSO DE AUTORIDAD, USURPACIÓN Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES** en perjuicio de **YACARÉ INTERNACIONAL, S. A.",** en virtud de que mediante resolución de 9 de marzo de 1995, legible a fojas 90-92, el mencionado Juzgado se **"SE INHIBE** de conocer el presente negocio" y remite el expediente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87 del Código Judicial.

Por cumplidas las reglas de reparto, el expediente contentivo en las indicadas sumarias se corrió en traslado al Señor Procurador General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 347 del Código Judicial, para que emitiera concepto. Como es de rigor, el alto funcionario del Ministerio Público emitió concepto como se observa a fojas 98 a 100 del respectivo cuadernillo del expediente.

El Procurador General de la Nación al emitir concepto en lo medular de la Vista en comento expresa lo siguiente:

> "...
> El licenciado JORGE FRANCISCO ORCASITA NG, en su calidad de representante legal del señor SALVADOR MUÑOZ,instauró denuncia criminal contra los señores OLMEDO GUILLÉN Y DANIEL A. VÁSQUEZ, por la supuesta comisión de los delitos de USURPACIÓN, EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la empresa YACARÉ INTERNACIONAL, S. A.
>
> Con el fin de que emitamos concepto, respecto a la situación del Olmedo Guillén, se nos ha corrido traslado del negocio, por lo que, en tiempo oportuno, procedemos a ello.
>
> El libelo de la denuncia destaca que la compañía YACARÉ INTERNACIONAL, S. A. es dueña de las fincas 57540, Tomo 1268, Folio 488 y 9823, Tomo 311, Folio 303, del Registro Público, ubicadas en el Corregimiento de Juan Díaz, Distrito y Provincia de Panamá; las cuales fueron invadidas por la empresa TOYOPAN Y TESA y MARIO GUARDIA, al extraer de las mismas gran cantidad de tierra para ser usada como relleno en un predio de propiedad de este último.
>
> Se indica, asimismo, que al hacer los reclamos respecto a tal situación, la respuesta que se obtuvo fue que tal autorización provenía del entonces Representante de esa circunscripción, señor OLMEDO GUILLÉN, a través de la resolución No.6171 de 8 de febrero de 1993.
>
> La legalidad de tal medida y la constante negativa de querer subsanar dichas anomalías, provocaron que los afectados interpusieran los recursos legales ante las instancias respectivas, dando al traste con una orden de paralización de los trabajos de extracción de tierras de los fundos aludidos; a la vez que una sanción contra el señor OLMEDO GUILLÉN, a pagar la suma de B/.100.00 por desacato a la sentencia emitida por la autoridad judicial. (fs. 14-16).

Ahora bien, las constancias procesales que motivan esta investigación, ponen en evidencia que a raíz de los comicios populares celebrados el 8 de mayo de 1994, resultó electo por el Circuito 8-9, como Legislador Principal el señor OLMEDO GUILLÉN, lo que demuestra que el mismo en estos instantes goza de inmunidad parlamentaria. (fs. 88-92).

> Por ello, es necesario que, previa la decisión que asuma el órgano jurisdiccional competente para imponer o no una sanción al imputado, acorde con su delito, se dé el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. En otras palabras, que siendo el señor OLMEDO GUILLÉN, Legislador; es cierto que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer de las causas por delitos comunes o

> faltas cometidas por miembros de la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 2, literal b. del artículo 87 del Código Judicial.
>
> Sin embargo, es obligante considerar el hecho de que es un mandato constitucional que la Honorable Asamblea Legislativa conozca de las acusaciones y denuncias que se presenten contra sus miembros y determinen, en consecuencia, si hay lugar a formación de causa (artículo 154, ordinal 2) y, además que el artículo 203 de su reglamento interno prevé la nulidad del proceso en el que no conste su autorización o la renuncia del Legislador a su inmunidad parlamentaria antes de dictarse el auto de enjuiciamiento. ...". (Fs. 98-100).

Luego de examinar las constancias que obran en el expediente en estudio, el Pleno de la Corte comparte el criterio del Jefe del Ministerio Público, anteriormente transcrito, y, por tanto, estima que lo procedente es el envío de la actuación a la Honorable Asamblea Legislativa en los términos que dispone el artículo 154 numeral 2 de la Constitución Política , en concordancia con el artículo 203 del Reglamente Interno de dicho Órgano del Estado.

Por lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE ENVIAR esta actuación a la Honorable Asamblea Legislativa a fin de que se pronuncie de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional arriba indicada y el señalado Artículo de su Reglamento Interno.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ EN LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 22 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado ROLANDO VILLALAZ, contra la Orden de No Hacer impartida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Auto de 22 de febrero de 1996, la Honorable Magistrado AURA E. GUERRA DE VILLALAZ solicita al resto de los miembros del Pleno se le separe del conocimiento del presente caso.

Dicha solicitud se lee así:

> "Para su correspondiente lectura, ha ingresado a este Despacho el proyecto presentado por el Magistrado Sustanciador que resuelve la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, contra la orden de no hacer impartida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 22 de febrero de 1996, que niega el incidente de recusación propuesta por la firma forense VILLALAZ y ASOCIADOS contra la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

> Como quiera que el abogado en este caso es el doctor ROLANDO VILLALAZ GUERRA, a quien me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, solicito al resto de los Magistrados que conforman al Pleno de esta Corporación Judicial, me separen del conocimiento del presente caso.

Ahora bien, considera el Pleno que es del caso acceder a lo solicitado por el Magistrado manifestante puesto que, la circunstancia invocada constituye causal de impedimento al tenor de lo dispuesto en el artículo 2619 del Libro IV (Instituciones de Garantía), del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Honorable Magistrado AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, la separa del conocimiento del presente recurso de amparo de garantías constitucionales, y DISPONE que aprehenda el conocimiento del mismo el doctor CARLOS E. MUÑOZ POPE en su calidad de Suplente Personal del titular impedido.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO. ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 23 DE ENERO DE 1996, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DEL MAGISTRADO WILFREDO SÁENZ F. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada **AURA E. GUERRA DE VILLALAZ** ha solicitado que se le separe del conocimiento de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la Licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, contra la orden contenida en la Resolución de 23 de enero de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acusación particular propuesta por la recurrente en amparo contra la Licenciada **AIDELENA PEREIRA**.

La Magistrada GUERRA DE VILLALAZ fundamenta su solicitud en lo siguiente:

> "Aunque no me encuentro vinculada a la amparista al tenor de las causales de impedimento previstos en el artículo 2619 del Código Judicial, debo señalar que ella funge como acusadora en una denuncia presentada contra mi persona y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Credenciales y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
>
> Dada la transparencia e imparcialidad que debe caracterizar todas y cada una de nuestras actuaciones en esta Corporación Judicial, ruego a los colegas del Pleno, me separen del conocimiento de esta acción constitucional."

En relación con los amparos de garantías constitucionales, el artículo 2619 del Código Judicial limita las causales de impedimento de los Magistrados y Jueces que conozcan de ellas, al parentesco dentro del segundo grado de

consanguinidad o primero de afinidad con alguna de las partes o sus apoderados o el haber participado en la expedición del acto.

En opinión de los suscritos, la situación descrita por la Magistrada GUERRA DE VILLALAZ no está comprendida en los supuestos contenidos en la citada norma y, consecuentemente, no debe ser declarado legal el impedimento por ella solicitado.

Por tanto, los suscritos Magistrados del PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ y DISPONEN que continúe conociendo del presente negocio constitucional.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SAMUEL QUINTERO MARTÍNEZ EN CONTRA DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY N° 3 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La honorable Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz ha manifestado que está impedida para conocer de la demanda de inconstitucionalidad formulada por el licenciado MANUEL QUINTERO MARTÍNEZ en contra de los numerales 3 y 4 del artículo 217 de la Ley N° 3 de 17 de mayo de 1994.

En su escrito de 11 de marzo de 1996 la honorable Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz expresa:

> "... Como quiera fui miembro de la comisión codificadora del Código de la Familia y del Menor, participando en la elaboración del texto del anteproyecto que se presentó a la Asamblea Legislativa para su consideración, me encuentro impedida para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad. Fundamento esta manifestación de impedimento en el artículo 2562 numeral 2 del Código Judicial."

El numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial establece como una de las causales de impedimento para conocer de demandas de inconstitucionalidad, la de "haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición."

Como los hechos planteados por la Honorable Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz configuran la causal invocada, el impedimento manifestado debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL EL IMPEDIMENTO manifestado por la Magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz y la separa del conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Samuel Quintero Martínez y procede a llamar al Magistrado suplente para que conozca del negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

MARZO 1996

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

1JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO, ITZEL VEGA QUINTERO y LUCINDA MORCILLO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE RAQUEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁZQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ROGELIO EDUARDO PERALTA MARCIAGA, apoderado especial de los señores JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO, JOSÉ VEGA QUINTERO, ITZEL VEGA QUINTERO y LUCINDA MORCILLO, en el proceso ordinario que le sigue RAQUEL VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, en representación de su menor hijo EDUARDO ARISTIDES VEGA VELÁZQUEZ, ha impugnado a través de recurso extraordinario de casación, en el fondo, la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 30 de noviembre de 1995. Consta a fojas 518-519 del expediente, que el Tribunal Superior, previo examen de rigor, ordenó remitir el negocio a esta alta Corporación de Justicia.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, dicho término sólo fue aprovechado por el recurrente.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior en un proceso ordinario donde se ventilan intereses entre particulares con una cuantía superior a la señalada en el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

El casacionista invoca dos causales de fondo, en cuanto a la primera de ellas, la misma es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está previsto como tal en la ley.

La Sala observa en el primer y único motivo que el recurrente hace referencia que el Tribunal tomó en cuenta una prueba que, según él no existe, cual es, la partición judicial. Sin embargo, cuando realiza la explicación de las normas infringidas menciona una prueba que fue aducida por él y que no fue incorporada al expediente (Auto del 26 de febrero de 1992), esto no es congruente con el planteamiento que trata de esbozar.

Por otro lado el casacionista en la explicación de las normas infringidas cita como violado el artículo 770 del Código Judicial, no existe relación entre la norma aducida y la causal planteada, toda vez que la causal invocada es infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Por lo tanto la primera causal resulta ininteligible.

En lo referente a la segunda causal invocada, la misma es "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está prevista como tal en la ley.

Los motivos deben ser más concretos al señalar en que consiste la violación por parte del tribunal ad-quem. El tribunal le recuerda al recurrente que en los motivos no se deben mencionar normas de derecho, éstas deben ser debidamente

enunciadas y explicadas en el tercer requisito. Se debe subsanar estos defectos.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE, la primera causal y ORDENA LA CORRECCIÓN de la segunda causal, en el fondo, propuesto por JOSÉ DEL CARMEN VEGA MORCILLO y OTROS, mediante apoderado judicial, para lo cual concede el término de cinco días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

EURIBIADES MANUEL TORRERO GIL, RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JUAN FALCÓN MONTENEGRO Y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ISAÍAS BARRERA ROJAS, en su condición de apoderado judicial de EURIBIADES M. TORRERO, dentro del proceso ordinario que le sigue a JUAN FALCÓN y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A., ha interpuesto recurso de casación, en el fondo, en contra de la resolución fechada el 7 de junio de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

La Corte, luego de vencido el término de lista a los efectos de que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, mediante resolución de 16 de noviembre de 1995, admitió el recurso de casación corregido, en cuanto a las dos causales invocadas.

Encontrándose el negocio en estado de decidir, es tarea de la Sala pronunciarse sobre el mismo, previas las siguientes consideraciones:

SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES

De conformidad con las constancias de autos, el demandante interpuso demanda ordinaria contra JUAN E. FALCÓN MONTENEGRO y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A., hasta la concurrencia de la suma de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE BALBOAS CON NOVENTA CENTÉSIMOS (B/.51,427.90), en concepto de capital, más las costas, los gastos y los intereses respectivos, originándose la supuesta obligación del accidente de tránsito ocurrido el 17 de junio de 1991, entre los señores JUAN E. FALCÓN MONTENEGRO y AARÓN A. RÍOS. Consta también en el libelo de demanda, que el vehículo conducido por FALCÓN MONTENEGRO, cuyo propietario lo era al momento del accidente de tránsito, la sociedad ALQUILERES ADAPTABLES, S. A. y cuyo conductor fuera condenado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al vehículo conducido por AARÓN A. RÍOS, cuyo propietario lo es el señor EURIBIADES MANUEL TORRERO GIL, parte recurrente en el presente negocio.

La referida demanda quedó radicada en el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y una vez que fuera admitida se le corrió traslado a los demamdados, JUAN E. FALCÓN MONTENEGRO y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A., quienes dieron contestación mediante sus respectivos apoderados judiciales, oponiéndose a la pretensión del demandante. La firma forense FÁBREGA, LÓPEZ Y BARSALLO, quienes representan los intereses de ALQUILERES ADAPTABLES, S. A. solicitaron al Tribunal, el "Llamamiento de Terceros al Proceso" (fs. 31 a 36), específicamente a la sociedad INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL, S. A., por existir un contrato de arrendamiento con la sociedad ALQUILERES

ADAPTABLES, S. A., sobre el vehículo antes mencionado, y en el cual se exonera a la sociedad INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL, S. A. de toda responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados a terceros, así como también se solicita llamamiento de la COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. (CONASE) en carácter de aseguradora del vehículo Camión Marca Hino FF175SALK, Año 1988, Motor N° EH-700185229. Además, el demandado ALQUILERES ADAPTABLES, S. A., en el escrito de contestación de demanda formuló Excepción de Inexistencia de la Obligación.

El Tribunal de primera instancia, al concluir los trámites de procedimiento señalado en la ley, profirió la sentencia N° 62 de 27 de septiembre de 1994, en la cual: "DECLARA NO PROBADA las Excepciones de Inexistencia de la obligación, falta de legitimidad pasiva y de prescripción alegada por el demandado ALQUILERES ADAPTABLES, S. A."

Al apelar las partes demandadas de la referida sentencia de primera instancia, el negocio ingresó al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que decidiera la alzada, lo que hizo mediante sentencia de 7 de junio de 1995, consultable de fojas 297 a 318 del expediente, la cual "DECLARA PROBADA la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN alegada por la sociedad ALQUILERES ADAPTABLES, S. A.; y, en consecuencia NIEGA la pretensión del actor, por lo que ABSUELVE a las demandadas, y NIEGA la pretensión de ALQUILERES ADAPTABLES S. A. en relación con INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL, S. A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A., por lo que absuelve a INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL, S. A. y a COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A."

Contra la sentencia de segunda instancia, es que se ha interpuesto el recurso de casación por parte del actor, por tanto, es tarea de esta Sala pronunciarse por haberse admitido las dos causales de fondo invocadas por el casacionista.

CONTENIDO DEL RECURSO EN CUANTO A LA PRIMERA CAUSAL ADMITIDA

La causal invocada es "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de interpretación errónea de la norma sustantiva de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido".

En los motivos que sirven de fundamento a la causal, básicamente se acusa al tribunal que interpretó erróneamente las normas sustantivas de derecho que regulan la prescripción de la acción civil para reclamar daños y perjuicios basados en la responsabilidad extracontractual derivada de la culpa o negligencia. Señala también el recurrente que el Tribunal erróneamente consideró que debió contarse el término de la prescripción desde el día en que pudo ejercitarse el derecho, es decir, el 17 de julio de 1991, fecha en que ocurrió el accidente y, más bien debió computarse el período, desde el momento en que quedó ejecutoriada la resolución administrativa, cuya fecha lo fue el 1 de junio de 1992. Como consecuencia de ello, el Tribunal concluyó que había prescrito la pretensión dado que la demanda "no fue notificada dentro del año en que pudo ejercerse la acción", por tanto, absolvió a los demandados de la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que sufrió su representado, señor EURIBIADES MANUEL TORRERO GIL.

Por otro lado, señala en las disposiciones infringidas que el artículo 1706 ha sido violado por omisión, dado que su representado ejerció la acción a partir de la ejecutoria de la resolución administrativa, refiriéndose a la resolución de tránsito N° 2814 de 29 de mayo de 1992, la cual quedó en firme el 1° de junio de 1992.

El casacionista arguye además, que el derecho para accionar es la fecha de ejecutoria de la resolución y no la fecha en que lo supo el agraviado, como lo interpreta el Tribunal Superior.

Es importante reiterar, antes del examen de fondo, que la interpretación errónea se presenta cuando se aplica al caso concreto la norma que lo regula, pero, con un alcance o sentido de que carece, haciéndola derivar consecuencias que no resultan de su contenido.

Con respecto a ello, esta Superioridad ha mantenido que "se trata de un error acerca del contenido de una norma y no sobre su existencia".

La interpretación errónea la ubica el recurrente en que el Tribunal ad-quem le dio una interpretación distinta de la que se desprende del tenor del artículo en mención. Conviene, para dilucidar esta controversia, reproducir la norma supuestamente interpretada en forma indebida. Para ello resulta indispensable reproducir el artículo 1706 en la forma que tenía antes de la fecha del accidente, la que tenía como consecuencia de la modificación que le introdujo el artículo 13 de la Ley 1 de 1988, y la redacción que tiene en la actualidad, tal como fue reformada mediante Ley N° 18 de 31 de julio de 1992:

> "Art. 1706. Prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o difamación, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1644, desde que lo supo el agraviado".
>
> "Artículo 1706: Prescribe por el transcurso de un año, la acción para exigir la responsabilidad civil por delitos contra el honor y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia penal".
>
> "Artículo 1706. La acción civil para reclamar indemnización por calumnia o injuria o para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el Artículo 1644 del Código Civil, prescribe en el término de un (1) año, contado a partir de que lo supo el agraviado.
>
> Si se iniciare oportunamente acción penal o administrativa por los hechos previstos en el inciso anterior, la prescripción de la acción civil se contará a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o de la resolución administrativa, según fuere el caso.
>
> Para el reconocimiento de la pretensión civil, en ningún caso es indispensable la intervención de la jurisdicción penal".

No cabe duda que el cómputo para iniciar procesos de indemnización con fundamento en el artículo 1644 del Código Civil, se iniciaba desde que la persona lo supo, para ambos supuestos. La confusión se origina con el artículo 1706, en la forma como la reforma de 1988 lo dejó, y dicho cómputo lo fijó a partir de la sentencia penal condenatoria. De donde se desprende que la norma no ofreció un tratamiento uniforme para los dos supuestos que regula el artículo 1706, sino sólo para uno de ellos, el que se refiere a los delitos contra el honor, cuyo año se inicia a partir de la declaratoria penal correspondiente. Esto es así por la elemental consideración de que la responsabilidad extracontractual, previsto en el artículo 1644 del Código Civil, viene declarada una vez culmina un proceso civil encaminado a obtener tal declaración, nunca por conducto de un proceso penal que culmine con una sentencia de tal género, por la elemental consideración de que quien cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia no quebranta la ley penal; o, puesto en otro giro, la comisión de actos ilícitos en donde se derive culpa o negligencia para su autor no constituye necesariamente una entidad delictiva. Esta situación ha provocado que uno de los supuestos de responsabilidad extracontractual, el derivado el artículo 1644 del Código civil, carezca de una regla que norma el inicio del cómputo, por lo que resulta de aplicación la norma contenida en el artículo 1707 del Código Civil, que se reproduce:

> "Art. 1707. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse".

Esta interpretación, y no otra, es la que se desprende de la reforma como viene redactada por imperio del artículo 18 de 1992, cuya reforma cubre las reglas del cómputo para el término que se dispone para proponer el proceso indemnizatorio, como regla general, desde que lo supo el agraviado, y solamente

ante la existencia de un proceso penal o de un proceso administrativo, es a partir de la sentencia penal o administrativa en que tal cómputo debe iniciarse. Si el legislador hubiese querido asimilar, dentro de la sentencia penal, la dictada en un proceso administrativo, resultaba inocua la última modificación al tantas veces citado artículo 1706. El Tribunal Superior, en estimación de esta Corte, interpretó correctamente el artículo 1706, conforme a la redacción de la Ley 1 de 1988, que era de que debía aplicarse para determinar si existía no prescripción de la acción (pretensión) de resarcimiento. No prospera, por lo tanto, el cargo.

La Corte considera que el Tribunal Superior no ha incurrido en la alegada interpretación errónea de la norma de derecho sustantiva, por tal motivo, al no prosperar el cargo, la causal invocada no está justificada.

Por otra parte, no procede entrar al estudio de la segunda causal, dado que se ha demostrado la prescripción de la acción.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 7 de junio de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Las obligantes costas de casación, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Con todo respeto discrepo de la mayoría.

Se sostiene en el fallo que la acción y los derechos para reclamar indemnización por un accidente automovilístico del cual conoció un juzgador de tránsito, prescriben en un año contado a partir del día en que pudieron ejercitarse esos derechos; por oposición a contarlo a partir del día en que se dictó la resolución del juez de tránsito.

El accidente ocurrió cuando estaba en vigencia la reforma hecha por la Ley 1ª de 1988 al artículo 1706 del Código Civil, que así modificado establecía:

> "Artículo 1706: Prescribe por el transcurso de un año, la acción para exigir la responsabilidad civil por delitos contra el honor y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia penal".

La consecuencia de la sentencia aprobada por mayoría será que cuando un accidente de tránsito sea del conocimiento del juzgado de tránsito, el término de prescripción vencerá en una fecha; y cuando sea del conocimiento de la jurisdicción penal la prescripción vencerá en otra fecha distinta.

No creo que esto se justifique.

Tampoco creo justo que la interpretación del artículo 1706 del Código Civil, modificado por la Ley 1ª de 1988, se interprete con el efecto de que venza más tempranamente el término de prescripción, que es corto (1 año).

Por último no creo que se deba desconocer el hecho de que ordinaria o comúnmente (aunque no sea así técnicamente) se le llama sentencia a la resolución que dicta el juez de tránsito; y que el orden práctico de las cosas tiende a que

se espere que el Juez de tránsito decida para luego reclamar indemnización.

Sabemos que actualmente, por razón del volumen de casos, las decisiones en los juzgados de tránsito demoran hasta 6 meses, con lo cual en la práctica se reduce más aún el término de prescripción.

Procedo a fundamentar el criterio con el cual creo que se debe resolver el problema.

Antes, no obstante, quiero hacer reconocimiento de que la interpretación del artículo 1706 modificado por la Ley 1ª de 1988, constituye una muestra muy calificada de disposiciones legales susceptibles de variadas interpretaciones.

Con ello implícitamente se reconoce que la interpretación de la mayoría tiene su lógica y estructura interna. Además que las razones que pasaré a exponer son relativas y no absolutas.

En este punto quiero expresar que por la misma relatividad con que se fundamenta una u otra interpretación, se debe tomar partido por la que produce menos consecuencias gravosas a quien sufre la prescripción.

Repito que el problema consiste en establecer a partir de cuando se empieza a contar el año de prescripción que establece el artículo 1706 del Código Civil en la forma como quedó modificado por la Ley 1ª de 1988, tratándose de accidentes automovilísticos de los cuales conoció, para establecer la responsabilidad, un juzgador de tránsito.

La disposición legal (modificada en 1988) expresa que se contará "a partir de la ejecutoria de la sentencia penal". La disposición se está refiriendo por igual a las obligaciones que nacen (a) de delitos contra el honor (b) de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 del Código Civil.

Estas últimas obligaciones representan un conjunto diverso. Entre ellas hay (1) obligaciones que no suponen la intervención de ninguna autoridad (como juez de tránsito o tribunal penal); (2) otras que suponen la intervención de un juez de tránsito por tratarse de accidentes de esa naturaleza; y, (3) por último, un tercer grupo que siendo accidentes de tránsito son de conocimiento de los tribunales penales (caso de lesiones graves o muerte por motivo del accidente).

Pues bien, de todos estos casos el artículo 1706 modificado en 1988 expresa, porque así lo dice el texto, que el año de prescripción se cuenta "a partir de la ejecutoria de la sentencia penal".

Estas últimas obligaciones (cuando hay sentencia penal, propiamente tal) cuentan con el supuesto de la sentencia penal; a partir de la cual, sin ninguna dificultad, se cuenta el año de prescripción.

Problemáticas son las obligaciones del segundo grupo; que surgen de un accidente automovilístico del cual conoce un juez de tránsito; y, las del tercer grupo, o sea las que no suponen la intervención de autoridad alguna, y por lo tanto no hay sentencia penal alguna para contar a partir de ella el año de prescripción.

Nos ocupa ahora el caso del accidente de automóvil que sea del conocimiento de un juez de tránsito. En relación con ellas surge el problema de que no hay sentencia penal propiamente dicho; porque la resolución de un Juez de tránsito es un acto administrativo policivo.

Luego entonces, la disyuntiva es, si el año se cuenta, a pesar de esta falla técnica, desde la resolución del juez de tránsito, o si, por el contrario, se recurre al principio general del artículo 1707 de Código Civil, o sea desde el momento de la obligación se hace exigible.

La mayoría de la Sala está por lo último. Yo favoresco la primera solución, porque en mi concepto, responde más a la realidad de la vida social, establece una práctica más uniforme, y parte de la presunción objetiva de que se trata de

una deficiencia de la redacción de la norma, por falta de conciencia de la complejidad de la situación, que de haberse tenido en cuenta se hubiera dispuesto con precisión que en las obligaciones que surgen de los accidentes automovilísticos de los cuales conoce un juez de tránsito, el término de prescripción (de 1 año) se cuenta a partir de la resolución dictada por el juez de tránsito.

La mayoría favorece la otra solución: el año se cuenta de acuerdo con el principio general que establece el artículo 1707 del Código Civil; es decir, a partir del momento que la acción puede ejercitarse.

Soy de opinión que esto se debe hacer únicamente en relación con las obligaciones nacidas acordes con el artículo 1644 que no cuenten ni con sentencia penal ni con resolución de Juez de tránsito. En cuanto a este grupo de obligaciones, si se hace necesario que término de prescripción se inicie en el momento que la acción puede ejercitarse.

La circunstancia de que en 1992, cuando se reforma nuevamente el artículo 1706 del Código Civil, por razón de su deficiente redacción, se dispone que es término de prescripción se cuente en la forma como propicio la interpretación de la disposición legal.

Por pensar y sentir como dejo expresado, salvo, con todo respeto, el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, apoderados especiales de los señores BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE, ha impugnado a través de recurso extraordinario de casación, en el fondo, la sentencia de segunda instancia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 11 de mayo de 1995, en el proceso ordinario que BOLÍVAR RACINES PEARCE Y JAVIER BOLÍVAR RACINES le siguen a la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. El Tribunal Superior, previo examen de rigor, ordenó remitir el negocio a esta alta Corporación de Justicia.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia dictada por un Tribunal Superior en un proceso ordinario donde se ventilan intereses entre particulares con una cuantía superior a la señalada en el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

La causal invocada, es: "Infracción de normas sustantivas en concepto de error de derecho, en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en el fallo.", la misma está prevista en la ley.

En cuanto a los cinco motivos, que sirven de fundamento a la causal, la Sala considera que deben ser corregidos, el casacionista debe ser claro y preciso en sus señalamientos, indicando cuales son las pruebas que valoró mal el Tribunal Superior y en qué consistió la mala valoración. El recurrente no debe hacer alegaciones y recuentos procesales no propios de la técnica del recurso de casación. Salta a la vista que el recurrente ha incumplido, en la exposición de los motivos, de manera precisa sobre el fundamento de la causal tal como lo exige el artículo 1160 del Código Judicial, por lo que corresponde al recurrente subsanar ese defecto.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por BOLÍVAR RACINES PEARCE y JAVIER BOLÍVAR RACINES PEARCE, mediante apoderados especiales, para lo cual concede el término de cinco días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INMOBILIARIA LOS POZOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE M. A. C. INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, en su condición de apoderados especiales de la sociedad INMOBILIARIA LOS POZOS, S. A., oportunamente formalizaron recurso de casación contra la sentencia de 27 de diciembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso de ordinario que le sigue M. A. C. INTERNACIONAL, S. A.

Después de fijado el término para que las partes aleguen sobre la admisibilidad del recurso, período que sólo utiliza la parte opositora, procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

En cuanto a la causal invocada la Sala advierte que la misma está invocada inadecuadamente, el recurrente expresa: "Infracción de normas sustantivas de derecho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", de lo anterior se observa claramente que el casacionista ha omitido cuál de los conceptos del artículo 1154 del código judicial es el que desea presentar ante la sala. El artículo citado anteriormente establece:

> "ARTÍCULO 1154: El recurso de casación en el fondo, tiene lugar respecto a las resoluciones de que trata el artículo 1149 al haberse incurrido en la causal de infracción de normas sustantivas de derecho, por cualquiera de los conceptos siguientes: violación directa, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de la prueba y de derecho en cuanto ala apreciación de la misma. ..."

Para que la Sala pueda aceptar el recurso de casación es necesario e imprescindible que el recurrente invoque con la causal uno de los conceptos del

artículo anteriormente citado, de lo contrario la Sala no puede determinar a cual de ellos se refiere.

El recurso de casación, siendo como es un recurso extraordinario; solamente es procedente por las causas que específicamente establece la ley. De otra parte, debe existir una situación orgánica y sistemática entre la causal invocada, los motivos en que ha incurrido la sentencia censurada y las disposiciones legales que han resultado infringidas con la sentencia.

Por lo tanto, para analizar la coherencia y la congruencia de los motivos éstos deben encontrarse íntimamente vinculados con la naturaleza de la causal que se le atribuye a la sentencia.

En cuanto a la infracción de normas sustantivas de derecho, es precisamente la ausencia del concepto bajo el cual se ha violado la ley lo que explica cómo en un caso se alega interpretación errónea del artículo 1324 del Código Civil. A renglón seguido, considera infringido el artículo 34-D del Código Civil, en concepto de violación directa y finalmente en el artículo 1112 del Código Civil al explicar la infracción dice que "la sentencia desconoce", es decir, no la aplicó al caso, siendo que en opinión del recurrente era pertinente.

Todas estas discrepancias en cuanto a la naturaleza de la infracción de cada una de las normas consideradas infringidas, es una consecuencia de la ausencia del concepto bajo el cual se ha infringido la ley. Esta situación hace incongruente el recurso y por lo tanto ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por INMOBILIARIA LOS POZOS, S. A., contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 27 de diciembre de 1995.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADOLFO ESPINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE SALVADOR SOBENIS A ADOLFO ESPINO Y CESAR MORENO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RAÚL A. CÁRDENAS V., en su condición de apoderado especial del señor ADOLFO ESPINO, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 7 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en el proceso ordinario declarativo propuesto por SALVADOR SOBENIS en contra de ADOLFO ESPINO Y CESAR MORENO.

Se fijó el término del negocio para alegar acerca de la admisibilidad, el cual no aprovechó ninguna de las partes. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si se admite el recurso.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo se aparta totalmente de la técnica exigida en este recurso extraordinario de casación.

La causal invocada: "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en el fallo", está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

El casacionista presenta ocho motivos que sirven de fundamento a la causal invocada. La Sala observa que los motivos no son congruentes con la misma. Esta Corporación ha manifestado reiteradamente que si se invoca la causal probatoria de error de hecho en la existencia de la prueba, el casacionista tiene que señalar una prueba que estando en el expediente no fue tomada en cuenta, o por el contrario una prueba que no existe en el expediente, el tribunal la haya tomado en cuenta. Ello significa que el recurrente debe señalar cuál es la prueba, lo cual no se hace en el presente proceso, siendo esto indispensable para sustentar la causal invocada.

Por otro lado, el casacionista en el conjunto de motivos hace alusión a una prueba (sentencia penal del 23 de marzo de 1995), que según él ha sido mal valorada por parte del Tribunal Superior, específicamente en el motivo sexto señala: "La sentencia impugnada para reformar la primera instancia ha dado pleno valor probatorio a la sentencia penal, incorporada en autos, en donde se condena a CESAR MORENO por el delito de estafa, sin tener en cuenta que el Artículo 466 del código judicial los faculta para tomar en consideración el fallo penal sin vincularlos a darle valor de plena prueba." De la afirmación anterior, se colige que se ha invocado mal la causal probatoria de error de hecho en la existencia de la prueba, pareciera más que la situación planteada por el recurrente es el error de derecho en la apreciación de la misma.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que el recurrente en los motivos señala normas de derecho, lo cual no es compatible con la formalidad que reviste el recurso extraordinario de casación.

En consecuencia, se dan los presupuestos que señala el artículo 1167 del Código de Procedimiento Civil, para declarar la inadmisibilidad del recurso, el cual resulta ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en la fondo, propuesto por ADOLFO ESPINO contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el día 7 de diciembre de 1995.

Las obligantes costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR PATRICIO ANTONIO MERELO E IDALIDES EDIS DE ARJONA DE MERELO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta Sala, de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), se ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO, mediante apoderado judicial, dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento incoado por PATRICIO ANTONIO MERELO E IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO. La Secretaría de la Sala de lo Civil, ha remitido a este Despacho el recurso de casación corregido dentro del término que establece la ley, razón por la cual precisa ahora que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución impugnada es susceptible del recurso de casación y el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno. Sin embargo, se indicó la existencia de algunos defectos formales que deberían subsanarse.

La Sala considera que el casacionista cumplió con el mandato de corrección, por lo cual procede a aceptar este recurso y, en términos generales, reúne los requisitos que exige la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por IDALIDES EDIS ARJONA DE MERELO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A. M. P. M., S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario propuesto por A. M. P. M., S. A. contra INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A., la parte demandada presentó recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 15 de junio de 1995, que MODIFICA la sentencia dictada el 14 de febrero de 1992 por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil.

Recibido el expediente se le dio el trámite que establece el Código de Procedimiento Civil, admitiéndose la primera causal de fondo invocada; se ordenó la corrección de la segunda causal de fondo propuesta por INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. Al cumplir el casacionista con lo ordenado, se declaró admisible la segunda causal, por tanto se dispuso escuchar a las partes, concediéndoles tres días para el recurrente y tres días al opositor para que presentaran sus alegatos, oportunidad que fue aprovechada por ambas partes. Corresponde a la Sala resolver el recurso de casación promovido.

El escrito que se ha presentado ante la Corte Suprema contiene la impugnación de la sentencia mediante el recurso de casación en el fondo invocándose dos causales, por lo que se pasa a resolver la primera de ellas.

Se invoca como primera causal de fondo "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la pruebas, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Esta causal la fundamenta en cinco motivos. En el primero de ellos, se dice que la sentencia condenó a la recurrente al pago de la suma de OCHO MIL VEINTISÉIS BALBOAS CON SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.8,026.65), en concepto de daños y

perjuicios ocasionados a la empresa A. M. P. M., S. A., por un empleado de INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A., al alterar facturas durante el período comprendido de enero de 1986 a mayo de 1987. En los otros motivos expresa que la sentencia impugnada se basó erróneamente en dictámenes periciales realizados sobre cálculos de ventas efectuadas en años anteriores, para determinar el valor de las facturas alteradas, lo que no constituye un material de hecho.

Se consideran violados los artículos 967 733 del Código Judicial y el artículo 1644 del Código Civil.

En su alegato el casacionista mantiene su posición de que se le dio valor a una prueba pericial que se fundamentó en una hipótesis, que no constituyó material de hecho. Concluye que, el demandante, A. M. P. M., S. A. no pudo comprobar la alteración de las facturas, ni que las supuestas pérdidas fuesen como consecuencia de dicha alteración.

En sentido contrario, los apoderados judiciales de la parte demandante sostienen que, efectivamente la sentencia recurrida se basa en dictamen pericial pero que éste a su vez, se realizó sobre material de hecho. Es decir, que la cuantificación de la demanda se realizó haciendo proyección de compras y ventas frente al inventario, lo cual reflejó efectivamente la mercancía faltante de los Productos Estrella Azul. Aún más, manifiesta a foja 495 del expediente que "El hecho delictivo está totalmente acreditado y fue precisamente la sociedad demandada la que presentó la denuncia correspondiente. La acción delictiva que consistía en la adulteración de las facturas para agregarle mayor cantidad de productos a los realmente entregados, también está demostrado y la responsabilidad objetiva de INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A., como patrono, está reconocida en la Ley".

El cargo que se le atribuye al fallo cuestionado, consiste en un error de valoración del Juzgador sobre la prueba pericial solicitada por la demandante, sobre la base de que dicho peritaje no se había valorado en la forma prevista por el artículo 967 del Código Judicial, particularmente por no basarse en materia de hecho, sino en proyecciones de ventas por parte de la demandada a la demandante. Se aprecia de la lectura del peritaje que "el procedimiento consistió en revisar cada una de las facturas según compras mensuales". El peritaje se hizo acompañar de cuadros que contenían el detalle del aspecto analizado. En el cuadro N°3, denominado "CUANTÍAS DE DAÑOS MATERIALES EN FACTURAS ALTERADAS VISIBLEMENTE. ENERO 1986 A MAYO 1987",los peritos señalaron que los daños materiales ocasionados por las facturas alteradas ascendían a la suma de OCHO MIL VEINTISÉIS BALBOAS CON SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.8.026.65), que constituye la base para la condena por parte del Tribunal Superior, adjuntándose fotocopia de las facturas respectivas. Se aprecia, por lo tanto, que el peritaje se hizo sobre la base de material de hecho, representado por las facturas de venta, y el análisis de aquéllas facturas alteradas arrojó, como daño material, dicha suma. Estima la Sala, por lo tanto, que el peritaje cumplió con la regla que, para la valoración del peritaje, señala el Código Judicial, en su artículo 967, reproducido por el recurrente. Por su parte, en el interrogatorio formulado a los peritos, éstos reiteran que tomaron en cuenta la metodología indicada en el informe, es decir, verificar todas las facturas de venta. El punto señalado en el Cuadro N° 3, que se refiere precisamente a la cuantificación de los daños derivados de las alteraciones a las facturas no fueron objeto de cuestionamiento por parte del apoderado de INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

El criterio para la determinación de los daños, contenido en el citado cuadro N° 3, y que arroja en concepto de daños la suma por la cual se condenó a la recurrente en este recurso de casación, la señala el Tribunal Superior de la siguiente manera:

> "...
> Ahora bien, con dicho informe se acompañó un anexo identificado como cuadro # 3 que señala la cuantía de los daños materiales en facturas alteradas visiblemente de enero 1986 a mayo 1987, en la suma de B/.8,026.25. (Ver fojas 137). Dicho cuadro está debidamente respaldado con copias fotostáticas de las facturas alteradas y un resumen mensual de las mismas. ...".

La sentencia, por otra parte, señala las razones de su preferencia al dictamen pericial de la demandante, que, tomado a la luz de las constancias procesales, fue una decisión, en apreciación de esta Sala, correcta. No prospera, por lo tanto, este cargo y se desestima.

La segunda y última causal de fondo ha sido determinada en los siguientes términos: "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida de la norma de derecho, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido".

La violación alegada es que la responsabilidad que la cabría en todo caso a Industrias Lácteas era la de responsabilidad contractual, y no extracontractual. Para llegar a dicha conclusión se basa en el hecho, no acreditado en autos, de que existía una relación contractual. En esta materia, de ser cierta la hipótesis, lo que procedía era, naturalmente, pedir la resolución del contrato o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios en ambos casos. No obstante, en este proceso no se ventila el cumplimiento o incumplimiento de una supuesta relación crediticia, que se desprende de las constancias procesales por razón de los efectos de tal relación, es decir, las ventas de productos lácteos, sino los daños que se ha causado por un dependiente de INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A. con motivo de las ventas realizadas, sin que aparezca acreditado que las pretensiones van dirigidas a obtener indemnización por razón de la responsabilidad contractual de las partes. Las pretensiones, por el contrario, van dirigidas a que el tribunal declare que Industrias Lácteas es responsable por las acciones de un dependiente suyo, que, además, admitió en declaración indagatoria su culpabilidad, es decir, por el artículo 1645 del Código Civil. Es, pues, evidente que el proceso que se adelanta lo es como consecuencia de daños que se producen a una parte, por un dependiente de la otra parte, cuya responsabilidad le corresponde en razón de la **culpa in vigilando**.

Advierta el Tribunal Superior la responsabilidad por hecho ajeno en este supuesto es una suerte de responsabilidad objetiva, ya que la empresa responde en todo caso por las acciones de sus dependendientes, a menos que acredita el empleo de una especial vigilancia en su labor.

La cita de ESPÍN CÁNOVAS por parte del Tribunal Superior de Justicia, es particularmente oportuna, porque, como es sabido, tales normas provienen del Derecho Español, concretamente, del artículo 1902 del Código Civil de ese país.

Como quiera que lo que se ventilaba en este proceso sujeto al recurso de casación era un supuesto de responsabilidad extracontractual, y concretamente la responsabilidad civil derivada de la culpa in vigilando de la empresa en la cual laboraba el trabajador que produjo el daño, no prospera el cargo.

Por ello la Sala de la Corte comparte el criterio del sentenciador colegiado, y considera que el cargo no prospera, por lo que esta segunda causal de fondo tampoco está justificada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 15 de junio de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario incoado por A. M. P. M., S. A. contra INDUSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte demandada recurrente, se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN QUE PROMOVIERAN ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA ORTEGA DE CORRO, FRANKLIN CORRO ARJONA Y CÉSAR CORRO ARJONA EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS, apoderados especiales de la parte demandante, dentro del proceso ordinario incoado por ZOBEIDA EUSEBIA ARJONA DE CORRO, FRANKLIN CORRO y CESAR CORRO contra la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS DE VIDA, S. A., solicita a esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, aclaración de la Resolución del 27 de febrero de 1995, dictada por esta Sala y por medio de la cual NO ADMITE el recurso de casación propuesto por los demandantes.

En el presente caso, no cabe recurso alguno, tal como lo preceptúa el artículo 1168 del Código Judicial y así lo manifiesta el propio peticionario en su escrito visible a foja 361 del expediente. Como consecuencia de ello, procede la Sala a rechazar de plano la solicitud de aclaración formulada por la firma forense BERRÍOS Y BERRÍOS.

Por tal razón, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de la resolución dictada por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia el 27 de febrero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DAVID FERNANDO TORRES SOLÍS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A TRADERS AND BROKERS INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el licenciado JOSÉ LUIS VARELA como apoderado judicial de DAVID FERNANDO TORRES SOLÍS, parte demandante en el proceso ordinario que le sigue a TRADERS AND BROKERS INTERNACIONAL, S. A., contra la resolución de 21 de noviembre de 1994, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Cumplidos los trámites de ley, el recurso de casación en el fondo se encuentra en estado de decidir, y a ello se procede previas las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES DEL CASO.

Mediante apoderado judicial, DAVID FERNANDO TORRES SOLÍS presentó demanda ordinaria contra la empresa TRADERS AND BROKERS INTERNACIONAL, S. A., representada por THELMA MIRIAM YOLANDA PINILLA, a efecto que se le condenara a cancelarle la suma de B/.12,505.55 que le debe en concepto de venta de embarques de bienes muebles efectuados por dicha empresa, a solicitud del demandante (fs. 58-59, demanda corregida).

La empresa demandada en su escrito de contestación señala que nunca existió el aludido contrato de venta de embarques de bienes muebles; que lo que celebró con el demandante fue un contrato de empaque de sandías para exportación, por lo que sólo se limitaba a prestar el servicio, recibir, empacar y exportar el producto a una determinada empresa en Estados Unidos, debido a lo cual el demandante le pagaba por cada caja; una vez colocada la mercancía en su destino correspondía a un intermediario la venta y el pago al proveedor (o sea al demandante). (Fs. 68).

El Juzgado Primero del Circuito de Herrera decidió el proceso en sentencia de 23 de mayo de 1994, negando las pretensiones de la parte actora y condenando en costas por la suma de B/.500.00. (fs. 133 a 135).

Por apelada dicha resolución, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial resolvió REFORMAR la sentencia de primer grado, en cuanto a las costas fijando la suma de B/.1,800.00 para ambas instancias y CONFIRMÁNDOLA en todo lo demás.

Contra esta última resolución de 21 de noviembre de 1994 (visible de fojas 163 a 168) el demandante presentó el recurso de casación, que a continuación se procede a analizar:

EXAMEN DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CRITERIO DE LA CORTE.

Como única causal de fondo se invoca la "Infracción de normas sustantivas por error de hecho, sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los fundamentos de la causal se exponen en cuatro motivos de los cuales tres se refieren al mismo cargo probatorio y, el último, a la consecuente infracción de carácter sustantivo.

Como se tiene dicho, se trata de un sólo cargo de injuricidad, consistente en que la sentencia de segunda instancia ignoró y ni siquiera hizo alusión a la prueba documental visible a foja 15 que corresponde al contrato de guía de empaque contentivo del pago demandado, refrendado por la representante legal de la empresa demandada donde "acepta la obligación" y el cual no objetó. Ese error condujo al sentenciador colegiado a no condenar a la empresa demandada al pago reclamado.

El casacionista acusa al fallo impugnado de haber violado el artículo 843 del Código Judicial y el 1109 del Código Civil.

La norma de carácter procesal citada en este recurso se refiere a los casos en que se considerará auténtico un documento privado, disposición que, según la censura, se violó de manera directa por omisión al no haber sido aplicado al caso, sobre lo cual destaca que el contrato de guía de empaque (fs. 15) no fue tomado en consideración a pesar de haber sido suscrito por la representante legal de la demandada quien nunca lo ha redargüido de falso y en que reconoce la obligación que se demanda.

De lo expuesto se infiere que la infracción de dicha norma (art. 843) está centrada en su tercer caso, disponiendo que el documento privado será auténtico cuando ha sido aportado al proceso sin que haya sido tachado u objetado en los términos del artículo 848 del Código Judicial.

Al confrontar el cargo de injuricidad con los planteamientos del fallo impugnado, la Sala ha podido observar:

En primer lugar, que dicha resolución sí hace alusión al documento de fojas 15, que el recurrente en casación ahora califica como "contrato de guía de empaque" al expresar (fs. 164) que accedió a evacuar la prueba de segunda instancia requerida por el apelante (casacionista) consistente en la declaración y reconocimiento de firma en el **"contrato de embarque"** por parte de la representante legal de la empresa demandada, pero el término venció sin poder

evacuarla.

También, alude a dicha prueba cuando se refiere al alegato del apoderado del actor en relación específicamente al documento privado en que supuestamente aparece la firma de la demandada y que, según el apelante, por el hecho de no haber sido objetado tiene pleno valor siendo, por ello, la prueba por excelencia en que fundamenta su acción y la consecuente condena de la demandada.

Posteriormente el Tribunal de Segunda Instancia se refiere a los hechos de la demanda y a la contestación indicando que en este último escrito el demandado negó los hechos, el derecho y las pruebas y que, por lo tanto, correspondía al actor la carga probatoria.

En ese orden de ideas, el Tribunal Superior citó las pruebas que presentó el demandante para acreditar su pretensión, entre las que figura la que se alega ignorada en este recurso de casación, con lo que obviamente desvirtúa el cargo imputado y se hace más clara la evidencia de que dicha prueba (doc. visible fs. 15) sí fue tomada en cuenta por el juzgador de segunda instancia cuando se aprecia lo que se dejó expresado en los siguientes términos:

> "El licenciado José Luis Varela alega que el documento privado en que aparece la firma de la demandada, en ningún momento ha sido objetado por ésta, lo que significa que conserva todo el valor requerido y por ello constituye la prueba por excelencia por la que se ha presentado la acción para hacer el reclamo que con justa razón solicita su representado y por ello solicita se revoque la sentencia apelada y se accede a la petición contenida en el libelo, con la condena en costas para la demandada. (Subraya la Corte).
> ...
> A pesar de que el hecho primero alude a un contrado de embarque, la fotocopia del contrato aportado por el demandante, alude a una relación jurídica distinta, pues este documento se refiere a un "contrato de empaque" (ver fs. 17-22), produciéndose una evidente confusión entre el hecho primero con la prueba aducida. De otra forma se han aportado fotocopias de documentos privados, que carecen de valor probatorio a tenor del artículo 844 del Código Judicial. Subraya la Corte.

Lo anteriormente expuesto demuestra que las pruebas que adujo el demandante fueron consideradas en su totalidad por la resolución acusada pero se estimó que, la que supuestamente contenía la relación o acto generador de la obligación, no acreditaba ese hecho pues era incongruente con la pretensión y el resto de los documentos privados carecían de valor probatorio.

En cuanto al varias veces aludido documento visible a fojas 15 del expediente que el casacionista ha denominado "contrato de guía de embarque" y sobre el cual centra lo medular de este recurso extraordinario, la Sala aprecia que técnicamente hablando no se trata, en verdad, de un contrato sino más bien de un documento que refleja una supuesta cuenta por pagar, en donde no aparecen reflejados los requisitos esenciales de los contratos (objeto, causa y acuerdo de voluntades). También llama la atención que la suma pretendidamente adeudada según la cuantía establecida en la demanda no coincida con la que aparece en el documento que se asegura no fue valorado por el Tribunal Superior, fuera de lo ya dicho respecto a la falta de reconocimiento del mismo por la contraparte.

Por otro lado, la parte actora sostuvo en su demanda haber celebrado con TRADERS AND BROKERS INTERNATIONAL, S. A. un contrato de venta de embarques de bienes muebles, sin que a juicio de la Sala haya logrado acreditar la existencia de ese contrato, así por él denominado, siendo que el onus probandi era de su exclusiva responsabilidad en este caso.

El examen del caso que ocupa a la Corte revela que el Tribunal Superior al considerar no acreditado el hecho principal de la demanda, consistente en lo adeudado en virtud de un contrato de embarque, contrariamente a lo sostenido en los motivos por el recurrente, evidencia que sí se tomó en cuenta la prueba señalada como ignorada. Para la Sala resulta claro, en consecuencia, que el error

de hecho en cuanto a la existencia de la prueba no se ha producido.

La realidad procesal de la presente litis, indica que la sentencia acusada no ha violado el artículo 843 del Código Judicial y no incurrió en el error de desconocer la existencia de la prueba, por lo que mal pudo, entonces, infringir la norma sustantiva que cita el recurrente. Por consiguiente la causal invocada no está justificada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 21 de noviembre de 1994, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que DAVID FERNANDO TORRES SOLÍS le sigue a TRADERS AND BROKERS INTERNACIONAL, S. A.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ Y JEANNETTE MARY MITCHEL RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN POST-MORTEM INCOADO POR DÉBORA GARCÍA DE CARUSONE CONTRA EARL FRANKLIN MITCHELL (Q. E. P. D.). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante Resolución de 16 de enero de 1996 (Fs. 166-170) la Corte ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por **ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ y JEANNETTE MARY MITCHELL RODRÍGUEZ** contra la sentencia de 30 de agosto de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso de Filiación Post-Mortem instaurado por **DÉBORA GARCÍA DE CARUSONE** contra EARL FRANKLIN MITCHELL (q. e. p. d.).

Cumplido el término de la corrección, el recurso ingresa nuevamente a la Sala de la Corte, para decidir sobre la admisibilidad de la casación, en atención a la forma como el recurrente ha realizado la corrección ordenada.

La Sala observa que en el nuevo escrito de casación (fs. 172-177) aún se incurre en las deficiencias señaladas previamente al recurrente, pues se vuelven a citar los artículos 1 y 11 de la Ley 100 de 30 de diciembre de 1974 como normas de carácter sustantivo, cuando la Sala precisamente ordenó la corrección del recurso por considerar que dichas disposiciones no tenían carácter material.

La única norma que se incorpora, en esta oportunidad, que pudiera tener dicho carácter es el artículo 278 del nuevo Código de Familia, que no es aplicable en este caso pues al tiempo en que se inició el proceso (22 de febrero de 1994) dicho Código no estaba vigente ya que entró a regir el 3 de enero de 1995. En tal sentido, las normas procedentes serían las establecidas en el Código Civil bajo el Título IX "DE LA PATERNIDAD Y DE LA FILIACIÓN" (Artículos 140 y 148).

En consecuencia, no obstante haberse presentado un nuevo escrito de casación según lo ordenado por la Corte, el recurso no ha sido debidamente corregido por lo que la Sala está imposibilitada de declarar que lo admite.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ y JEANNETTE MARY MITCHELL RODRÍGUEZ contra la sentencia de 30 de agosto de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior, dentro del proceso de Filiación Post-Mortem instaurado por DÉBORA GARCÍA DE CARUSONE contra EARL FRANKLIN MITCHELL (q. e. p. d.).

Notifíquese.

(fdo.)ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.)SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JEFFREY S. MILOS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A TOMERA LYNETTE WINELAND. MAGISTRADO PONENTE. ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del juicio de divorcio incoado por el señor **JEFFREY S. MILOS** contra la señora **TOMERA LYNETTE WINELAND**, la apoderada judicial de la parte actora interpuso recurso extraordinario de casación en el fondo; medio de impugnación debidamente admitido por esta Sala de Casación Civil, luego de cumplidas las ritualidades procesales inherentes a esta clase de recurso y una vez que el señor Procurador General de la Nación emitió la vista de rigor en estos casos.

Peticiona la recurrente que la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 13 de septiembre de 1994, sea casada, revocando la externada por el Juzgado Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de este proceso de Divorcio. La Sala, en cumplimiento de la labor de decidir el recurso interpuesto, procede a hacerlo en los términos que de inmediato se adelantan.

ANTECEDENTES.

Los autos de la litis ilustran que la demanda de divorcio interpuesta por el señor JEFFREY S. MILOS contra su esposa quedó radicada en el Juzgado Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá. La parte demandante solicitó la disolución del vínculo matrimonial que lo une a la señora TOMERA L. WINELAND desde el 9 de octubre de 1991, cuando contrajeron nupcias en el Condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos de América, invocando la causal contemplada en el ordinal 7 del artículo 114 del Código Civil (abandono absoluto de los deberes de esposa) y como fundamento fáctico señaló que desde hacía más de dos años, contados a partir del 31 de octubre de 1991, cuando fijó su domicilio en la Base Militar de Corozal, en la Ciudad de Panamá, vive separado de su esposa de quien desconoce en la actualidad el paradero, ya que su cónyuge negose a acompañarlo al nuevo sitio en el cual estableció su residencia.

Para surtir el trámite de traslado de la demanda, la señora TOMERA L. WINELAND fue emplazada mediante edicto publicado en un diario de la localidad y siguiósele el juicio en ausencia, previo el nombramiento del defensor designado por el Tribunal. El defensor de ausente designado contestó la demanda oponiéndose a la pretensión y negando los hechos, el derecho y las pruebas en que la parte actora basó su solicitud de divorcio.

Con la finalidad de probar la causal de divorcio invocada, la apoderada del señor MILOS presentó como pruebas el testimonio de YESENNIA ITZEL VALDÉS GUERRA y el testimonio de ILIANA YAMILETH NAVAS PEÑA. Ambas, en sus declaraciones, manifestaron conocer al señor MILOS pero no a su esposa, la señora TOMERA L.

WINELAND. Dijeron tener conocimiento de la separación de la pareja matrimonial por ser amigas del señor MILOS y porque éste, o sea la parte demandante, les contó que su esposa no quiso venir a Panamá a acompañarlo cuando fijó en este país su residencia. En torno al paradero de la esposa y la ausencia de hijos en el matrimonio manifestaron que sus conocimientos derivaban y se limitaban a lo que el señor JEFFREY MILOS les había informado.

La juzgadora de primera instancia dictó sentencia de divorcio el 28 de junio de 1994 y apoyó su decisión en los dos testimonios comentados, a los que les confirió valor de plena prueba, con suficiente capacidad de demostrar el abandono de sus deberes por parte de la esposa. La decisión de la Juez Décimo del Circuito considera que la parte demandada dejó de cumplir con la obligación de seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia, tal como lo prevé el artículo 112a de nuestro Código Civil.

Correspondíole al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en consulta el expediente, cumpliendo lo indicado por el artículo 1210 del Código Judicial y, en abierta contradicción con la decisión de la Juez de instancia, estimó esa Corporación que en juicio no ha logrado demostrarse que la culpa por la separación de los cónyuges pueda hacerse recaer sobre la señora TOMERA L. WINELAND **"pues los testigos presentados por el actor no han dado fe del abandono, toda vez que de sus declaraciones se infiere que su conocimiento de lo acontecido entre los esposos MILOS-WINELAND ha sido adquirido por referencia del actor"**. Agrega la sentencia que **"Según lo manifestado en el proceso, esta superioridad concluye que la separación del matrimonio MILOS-WINNELAND se dio a raíz del traslado del señor MILOS a nuestro país, pero no existe evidencia que demuestre que ha sido la señora WINNELAND la que abandonó el hogar"**. (fs. 42).

Vemos que, en opinión del Tribunal Superior, al no lograrse demostrar la culpabilidad de la esposa ausente por no existir pruebas de que ella hubiese abandonado sus deberes de esposa, no hay mérito para aprobar la sentencia dictada por la Juez de instancia, razón por la cual procedió a revocarla.

RECURSO DE CASACIÓN.

La causal única de fondo invocada por la recurrente consiste en el **"error de derecho en la Apreciación de la Prueba, que implica Violación de la Ley Sustantiva" lo que "ha influido sustancialmente el lo dispositivo del fallo"**. Los motivos son aquellos que a continuación se transcriben:

> "1. El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 13 de setiembre de 1994, revocó el pronunciamiento consultado, errando en la valoración de la prueba pese a que el actor logró evacuar durante el proceso un cúmulo de pruebas que lograron demostrar el abandono de los deberes de esposa en que incurrió Tomara (sic) Lynette WINELAND.
>
> 2. La sentencia censurada no valoró como lo prescribe la ley, los testimonios de Ileana Yamileth NAVAS Peña y Jessenia Itzel VALDÉS Guerra (Fs. 20-25 del expediente), a pesar de que en el cuaderno se acreditó que se había comprobado la causal de divorcio, es decir el abandono en que incurrió la esposa de la parte actora.
>
> 3. El error probatorio en que incurrió el Primer Tribunal Superior, al no tomar en cuenta las normas del ordenamiento procesal, relativas a la valoración de la prueba testimonial, infringe disposiciones que obligan al juzgador a apreciar el caudal probatorio de acuerdo con la reglas de la Sana Crítica, que consagra el Código Judicial.
>
> 4. El error de derecho incurrido en la sentencia impugnada en cuanto a la apreciación de la prueba ha incidido substancialmente en la parte dispositiva de la sentencia impugnada, ya que el Primer Tribunal Superior de Justicia, infringió la norma sustantiva que autoriza la disolución del vínculo matrimonial en el proceso en que

se ha comprobado el abandono de los deberes de esposa".

Seguidamente se acusa a la sentencia de infringir los artículos 904 y 770 del Código Judicial y los artículos 112a y 114 ordinal 7 del Código Civil.

EXAMEN DE LA CAUSAL.

La Sala procederá a examinar la causal invocada en este recurso con el propósito de establecer si los cargos formulados contra la sentencia están justificados o no y en esta tarea se le pondrá debida atención a la opinión externada por el Procurador General de la Nación.

La impugnación es muy concreta y se reduce a la censura de la decisión adoptada a causa de la supuesta apreciación errónea de la prueba testimonial aportada por la parte actora en este juicio de divorcio. El medio de prueba utilizado, como ya queda dicho, consistió en el interrogatorio a que fueron sometidas las señoras ILEANA YAMILETH NAVAS PEÑA y YESENNIA ITZEL VALDÉS GUERRA. De acuerdo a la recurrente, la prueba testimonial fue apreciada por el Tribunal sin valorarla según las reglas de la Sana Crítica, produciéndose la violación del artículo 904 del Código Judicial que obliga al Juez a tomar en cuenta, conforme al método de la apreciación razonada, las circunstancias en que se ha tenido conocimiento de lo que se declara, la objetividad de las deposiciones y la condición de los testigos en cuanto a su capacidad para declarar. El fallo es cuestionado, además, por no haber observado lo dispuesto en el artículo 770 del Código Judicial que consagra el principio de que las pruebas en general tendrán que analizarse según el ya mencionado sistema de valoración conocido como el de la Sana Crítica. Producto de las infracciones de las normas de procedimiento mencionadas, la recurrente estima que el fallo violó el artículo 112a del Código Civil, norma que le impone a la mujer la obligación de seguir al marido donde quiera que éste fije su domicilio; y el artículo 114, ordinal 7 del Código Civil que consagra como causal de divorcio el abandono absoluto por parte de la mujer de sus deberes de esposa y madre.

La Sala decide poner atención especial a la opinión del Ministerio Público quien consigna, mediante Vista del Procurador General de la Nación, su oposición a lo solicitado por la recurrente en los términos que se reproducen a continuación:

> "A juicio del recurrente, se vulnera el artículo 904 del Código Judicial por considerar que en la sentencia el ad quem no valoró adecuadamente las declaraciones testimoniales, desconociéndose con ello el principio de la sana crítica que la aludida disposición establece. No obstante esta argumentación, su redacción es carente de toda precisión que conlleve a producir un análisis que determine el error de apreciación de la prueba. Debemos explicar que el principio de la sana crítica regula la actividad intelectual del juzgador con relación al análisis de las pruebas. Son pues, los elementos que integran el correcto entendimiento humano; en suma, la lógica y la experiencia. Por tanto, el casacionista debió especificar, claramente, en qué consistió el error del juzgador que, supuestamente, motivó un juicio ilógico y, consecuentemente, causó la violación de la norma sustantiva.
>
> La licenciada AROSEMENA no señala ningún razonamiento ilógico o contradictorio del juzgador, lo que trae como consecuencia la imposibilidad de ilustrar el error que ocasiona la violación de este principio procesal, razón por la cual este cargo no prospera.
> ...
> Sobre el particular, observamos que las declaraciones testimoniales que se aducen mal valoradas son esencialmente referenciales (cfr. fs 23 y 25) pues ambos testigos señalan que el propio señor MILOS les refirió que anteriormente estaba casado pero que su esposa no le acompañó a Panamá, y actualmente él desconoce su paradero.
>
> En el caso que nos ocupa, los señalamientos anteriores demuestran que no fue infringido por parte del tribunal de segunda instancia el

principio de la sana crítica toda vez que el tribunal expuso con un adecuado razonamiento el examen y mérito de los elementos probatorios que se aportaron al proceso, pues, como se ha visto, dichos testimonios no son producto de la percepción directa de las personas que rindieron declaración en el proceso; con lo cual no se ha contravenido la lógica ni las reglas de la experiencia que son los principios en que se sustenta la sana crítica.

Lo mismo puede expresarse con relación al artículo 770 del Código Judicial, para descartar el cargo formulado, ya que el recurrente no ha demostrado el error de apreciación probatoria aducido. Este artículo establece que el juzgador debe apreciar las pruebas, en general, bajo principio de la sana crítica y señala, también, las solemnidades que deben observarse para determinar la existencia y validez de determinados actos documentales.

Nos corresponde ahora el análisis de las normas sustantivas, supuestamente, infringidas. A este respecto, es importante señalar que la correcta interpretación del artículo 112a. del Código Civil debe circunscribirse a que la mujer casada está en la obligación de seguir a su marido a la residencia que éste fije como domicilio conyugal, pero la ausencia de la esposa del lugar donde se ha fijado el asiento del matrimonio no constituye por sí sólo motivo suficiente para comprobar la violación de esta norma.
...
En el presente caso no se produce el desconocimiento de la disposición cuestionada porque el prenombrado señor MILOS aduce que su esposa se negó a acompañarlo a Panamá. Sin embargo, no se establece en el expediente quién abandonó el domicilio conyugal originalmente ubicado en los Estados Unidos de América o el motivo que dio causa a tal acción.

De modo que se desconoce si la señora TOMERA WINELAND permanece en el domicilio conyugal y si la residencia del señor MILOS es distinta a la de ella por razones de su trabajo o cualquier otra causa.

Debe probarse fehacientemente en el expediente la culpabilidad de la esposa del señor MILOS para poder configurarse el divorcio por la causal de abandono.

Además, la sola ausencia de uno de los cónyuges del mismo no implica abandono absoluto de los deberes de esposo, esposa o padres. Para ello, como veremos, se requieren requisitos adicionales para que se perfeccione la causal contenida en el ordinal séptimo del artículo 114 del Código Civil. Así vemos que la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia ha explicado, diáfanamente, que el abandono de los deberes matrimoniales y la simple partida de uno de los cónyuges no son conceptos asimilables. Veamos.

"Reitera la Sala lo que dijo en sentencia de 8 de marzo de 1947; "que siempre que un cónyuge se va del hogar y abandona sus deberes como tal, se produce una separación de hecho; pero esta es distinta de la que trata el ordinal 7° del Artículo 114 del Código Civil, porque entonces la causal que se produce es la de ABANDONO, LA CUAL SOLAMENTE PUEDE SER ALEGADA POR EL CÓNYUGE INOCENTE". (Corte Suprema de Justicia, Pleno, Sentencia de 10 de julio de 1961. Repertorio Jurídico N° 7, julio 1961, pp. 316 a 323)."

Para acceder al divorcio por la causal de abandono, contenida en el artículo 114 (numeral 7°) del Código Civil, es necesario que se demuestre, como hemos mencionado, el "animus abandonis" de uno de los cónyuges, es decir, la naturaleza de las conductas desplegadas por los cónyuges, ya que el acto de abandono debe surgir de manera unilateral y volitiva del culpable y que el cónyuge inocente no haya sido el causante de tal determinación. Del mismo modo, la persona inocente debe tener la disposición de reconciliación y comunicar a

> su contraparte el cambio de residencia cuando ocurra por motivos de trabajo, negocios o cualesquiera otra actividad que obligue a realizar dicho cambio. Además, el abandono absoluto de los deberes matrimoniales, así como los de padre o madre se comprueba si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis meses desde que se originó la causal. En el presente caso se ha demostrado que no se encuentran acreditados todos los requisitos que se requieren para la comprobación de esta causal."

El estudio de los antecedentes del caso, el examen del recurso extraordinario de casación interpuesto y la opinión de la Procuraduría General de la Nación le permiten a la Sala ubicar con claridad el punto central de la controversia jurídica planteada, que no es otro diferente a la necesidad de discernir si la sentencia impugnada valoró o no en forma apropiada los testimonios usados, para tratar de probar la causal del divorcio, de acuerdo con las reglas del sistema de valoración de las pruebas conocido como de la Sana Crítica.

Ante todo, la Sala estima saludable recordar que la Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba consiste en un método que, lejos de estar librado a la arbitrariedad caprichosa del juzgador, por el contrario, opera sujeto siempre a ciertas reglas y principios de los cuales el Juez no está autorizado a apartarse. Esas reglas y principios importan, pues del respeto a ellos guardados depende el que se decante con precisión el contenido y el alcance de los medios de prueba utilizados al momento en que el Juez entra a otorgarles validez y eficacia probatoria, en aplicación de lo que sobre el particular establecen nuestras normas de procedimiento. El autor argentino HUGO ALSINA en su Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial, nos recuerda que "Las reglas, ..., de la Sana Crítica, no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas variables en el tiempo y en el espacio. El Juez, en efecto, no sólo debe tener en cuenta las limitaciones impuestas por la ley a la admisibilidad de la prueba testimonial, su forma de recepción y las circunstancias que influyen en la eficacia de su testimonio, sino la persona del testigo, el contenido de la declaración, etc.".

La obligación de aplicar el sistema de la Sana Crítica no implica que las partes están relevadas de la responsabilidad de suministrar en el juicio los datos procesales exactos capaces de producir en el ánimo del juzgador la convicción y la certeza que le permitan fallar ajustándose a la verdad de los hechos. Tampoco el sistema autoriza al Juez para decidir, con abstracción de los elementos y omisiones que configuran o dejan sin respaldo los hechos y la pretensión correspondientes. El sistema de la apreciación razonada de la prueba o de la Sana Crítica exige que, en el curso de su aplicación, el sentenciador combine y mezcle, con la debida prudencia, los factores que emanan del análisis razonado y de la experiencia en los términos advertidos por el autor que hemos citado.

En el presente caso, sobre la parte demandante, o sea, sobre el señor JEFFREY MILOS, recae la carga de probar que su cónyuge TOMERA L. WINNELAND es culpable de incurrir en el abandono absoluto de sus deberes de esposa. Nótese que en el juicio no estaba exclusivamente en juego dejar establecido, como pareciera pretenderse a nivel de este recurso extraordinario, que la esposa se hubiese negado a cumplir con su deber de radicar su residencia en el lugar escogido por su marido. El divorcio se demandó por una causa que, en opinión de la Sala, constituye un cargo mucho más grave que la mera y simple cuestión de determinar cuál es la residencia de los cónyuges. Haber demostrado en forma aislada que la parte demandada no vive en el domicilio del marido, sin aportar elementos que expliquen las razones generadoras de ese evento, no autoriza a nadie para que infiera que la mujer fue culpable del abandono de sus deberes de esposa. Como acertadamente lo señala el Procurador General de la Nación, muchos y variados pueden ser los motivos responsables de que esa situación esté ocurriendo y no hay tampoco argumento que sirva para sustentar que debe presumirse que lo acontecido se produjo por culpa de la mujer y no por culpa del marido, fuera de que no hay certidumbre acerca de si la demandada permanece en el verdadero domicilio conyugal o si los esposos residen en lugares distintos por simples razones de

trabajo o de cualquier otra índole, no necesariamente imputables a alguno de ellos como causales de divorcio. Si el señor MILOS aspiraba a obtener el divorcio porque su esposa era culpable de incurrir en la causal contemplada en el ordinal 7 del artículo 114 del Código Civil, a él le correspondía probar la culpabilidad de su esposa. Al intentarlo mediante el uso del testimonio de YESENIA ITZEL VALDÉS GUERRA e ILIANA YAMILETH NAVAS PEÑA, no lo consiguió. Las dos testigos aceptan que lo que saben sobre la renuencia de la esposa, en acompañar a su marido en su nuevo lugar de residencia, les ha sido contado por la parte actora; es decir, son testigos de referencia. Admiten, además, que no conocen a la señora TOMERA L. WINNELAND, realidad que no se puede pasar por alto a la hora de valorar sus testimonios. La precariedad del medio de prueba utilizado por la parte demandante se ve acentuada y confirmada por lo dispuesto en el artículo 909 del Código Judicial cuando consigna que **"no hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones", añadido a lo que dispone el artículo 907 de ese cuerpo legal que se encarga de eliminarle eficacia a "la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otros".**

Los medios de prueba deben servir para convencer al Juez de la existencia de un dato procesal determinado y, a diferencia de lo sostenido por la impugnante, la Sala es del parecer que el Tribunal Superior, al valorar la prueba testimonial, sometíola precisamente a las reglas de la Sana Crítica en los términos ordenados por el Código de Procedimiento Civil, dándole al medio de prueba usado en el expediente el exacto valor que le correspondía como base y asiento de la decisión judicial que fuera proferida.

Al no prosperar los cargos de injuricidad alegados por la recurrente, la causal única de fondo invocada en el recurso no está justificada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA, la sentencia de 13 de septiembre de 1994.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BETEL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ROGELAG, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 14 de diciembre de 1995, dentro del proceso sumario propuesto por BETEL, S. A. contra RODELAG, S. A., la parte actora ha propuesto en tiempo oportuno recurso de casación, en el fondo.

Al analizar el recurso admitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, la Sala advierte que no existe constancia de la cuantía del proceso, para determinar si resulta o no procedente el recurso extraordinario interpuesto.

Le corresponde a la Sala, por lo tanto, verificar si se desprende un interés económico en los dos procesos sumarios tratados. Uno, el de convocatoria de la Junta de Accionistas de RODELAG, S. A. y el otro, un proceso de nombramiento de revisores al amparo del artículo 425 del Código de Comercio.

Siguiendo las normas procedimentales en estos casos, se concedió el término

para que alegasen y se opusiesen las partes, término éste que fue aprovechado por ambas partes.

El apoderado del recurrente manifestó en escrito visible a foja 601, lo siguiente:

"...
En algunas ocasiones, aunque en la demanda no se haya puesto la cuantía para el propósito del recurso de casación, en la misma existen con claridad los medios para darse cuenta de cuál es la cantidad entendida en ella, tal como lo enseña expresamente el último párrafo del artículo 1148 del Código Judicial.

Obviamente que en este juicio, por su naturaleza, no se está reclamando el pago de determinada suma de dinero; pero sí se sabe con certeza su cuantía. Sólo basta, para conocerla, ver a cuánto asciende el valor de las acciones del accionista minutario que es mi poderdante. O, sino, lo que corresponde al capital social de Rodelag, S. A., o del resto de las acciones que no posee aquél.

No hay duda de que en este proceso está de por medio un patrimonio, como ese conjunto de bienes representados en acciones de la demanda.
...".

La demandada RODELAG, S. A., por conducto de su apoderado judicial, manifiesta en escrito visible a foja 598 y 599 del expediente, fundamentando su oposición al recurso, en las siguientes razones:

"...
PRIMERO: El artículo 1148, numeral 2°, del Código Judicial exige que la resolución impugnada verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de B/.5,000.00. En la demanda no se especificó la cuantía y en consecuencia no existe el elemento formal para establecer que la cuantía de la misma excede de B/.5,000.00, conforme lo requiere la norma antes mencionada.

Según el Art. 1148, para que el recurso de casación pueda ser interpuesto es indispensable que concurran las siguientes circunstancias:
...
"2. Que la resolución verse sobre intereses particulares, siempre que la cuantía del proceso respectivo no sea menor de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00), o que verse sobre intereses nacionales, municipales o de instituciones autónomas o semiautónomas, o sobre hechos relativos al estado civil de las personas o que haya sido dictada en proceso de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de matrimonio, o en proceso de oposición a título de dominio, sin atenerse en estos casos a la cuantía. En caso de que no se haya fijado la cuantía en la demanda pero hubiere suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso, si excediere de la suma antes prevista".

SEGUNDO: Tampoco surge del proceso "Suficiente elemento para determinar" la cuantía segundo inciso del ordinal 2 ya que lo que se está discutiendo es meramente la convocatoria de una junta de accionistas en la cual se acordó un nombramiento de revisores. En ningún momento se estableció el carácter patrimonial de las (sic) pretensión del demandante. De ahí pues, que no exista, como lo sugiere el último inciso del artículo 1148 del Código Judicial, "Suficientes elementos para determinar la cuantía". Por esta razón no se da el supuesto previsto en el numeral 2° del artículo 1148 del Código Judicial, dentro del contexto de este procedimiento.

TERCERO: En cuanto a la naturaleza de la resolución no se encuentran dentro de las previstas en el Art.1149 del Código Judicial. Basta examinar la lista mencionada numerus clausus consignada en el

artículo 1149 que establece los únicos casos admisibles en casación.

CUARTO: Y no se argumente que se trata de una sentencia en un proceso sumario, porque los procesos sumarios aparecen expresamente tipificados en el artículo 1335 del Código Judicial. Si bien el numeral 13 del mismo artículo habla de "Impugnación de actos o decisiones generales" no es el caso presente, porque la demanda no pretende impugnar ninguna Asamblea General, sino se limita a solicitar la designación de Junta de Revisores y a constituir una Junta de Accionistas, lo cual es totalmente distinto.

QUINTO: Como es sabido el Recurso de Casación solo es admisible en casos expresamente previstos en la Ley, y no en supuestos generales. El carácter extraordinario del recurso exige y exigió tal solución. En el presente caso se trata de un mero procedimiento y no un proceso y mucho menos de conocimiento a que se refiere el Código Judicial en el ordinal 1 del artículo 1149. Por lo anterior es manifiestamente inadmisible el recurso de casación temerariamente interpuesto por BETEL, S. A.".

Este Tribunal considera que existe un interés patrimonial que excede la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), sobre todo en el segundo de los procesos, el de designación de los revisores, dado que la conclusión de sus libros puede tener efectos desfavorables sea para el recurrente, sea para RODELAG, S. A.

En cuanto a los motivos en que se fundamenta la causal están debidamente señaladas.

No sucede lo mismo cuando menciona las normas de derecho infringidas y expone como han sido violadas. La técnica de casación señala que la explicación de las normas violadas deben realizarse de manera clara. La Sala observa que el casacionista, tanto en la explicación del artículo 427 del Código de Comercio, como en la del artículo 9 del Código Civil, no es claro en señalar como han sido infringidos los mismos, por el contrario su explicación es confusa, el recurrente debe plantear el concepto de manera más categórica.

Debe corregirse el recurso respecto a esta anomalía.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por BETEL, S. A., mediante apoderado judicial, para lo cual se concede el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ORLANDO CARRASCO GUZMAN en su condición de apoderado judicial de AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 4 de agosto de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de

Justicia dentro del proceso ordinario propuesto por el recurrente contra ASSICURAZIONI GENERALI, S. P. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambos, según se observa en los escritos que constan de fs. 394 a 395 (opositor) y de fs. 396 a 397 (recurrente).

El examen del escrito de formalización del recurso atendiendo a los requerimientos contenidos en el artículo 1165 en concordancia con el 1160 ambos del Código Judicial, pertinentes para resolver la admisibilidad del recurso de casación, la Sala llega a la conclusión siguiente:

1) La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley, pues se trata de una resolución dictada por un Tribunal Superior, en un proceso ordinario cuya cuantía sobrepasa los cinco mil balboas, que por su naturaleza, se trata de una sentencia que pone fin al proceso (artículos 1148 y 1149 del Código Judicial).

2) el recurso se interpuso dentro del término que establece la Ley. 3) El escrito de formalización cumple con las exigencias contenidas en el artículo 1160 ibíem, pues se invocan dos causales de fondo determinadas correctamente según lo indica el art. 1154 idem; ambos precedidos de los motivos que les sirven de fundamento; finalizando con las respectivas normas de derecho y el concepto de su infracción. Observándose además, el contenido de los apartados que mantienen la debida congruencia entre si.

4) Las causales expresadas son de las señaladas por la Ley.

No obstante las consideraciones expuestas, la Sala ha podido observar, al examinar lo expresado en los apartados de ambas causales que la primera tiende a excluir a la segunda.

En ese sentido, el recurrente en casación invoca dos causales:

La primera es la violación directa de la ley (normas sobre prescripción), y dicha violación según expresa la censura se debe a que la resolución estimó, equivocadamente, que se había producido la prescripción de la acción; y, cita como infringidos, entre otros, los artículos 195, 977 y 1650 del Código de Comercio.

La segunda causal es la de violación de normas sustantivas por error de hecho sobre la existencia de la prueba, conforme a la cual alega que la resolución no consideró un número plural de pruebas y por ello violó los artículos 195 y 977 del Código de Comercio.

Según se ha podido apreciar del concepto de infracción que desarrolla el casacionista sobre las dos normas sustantivas que cita nuevamente, ahora en la causal probatoria, no refleja que hayan sido violadas a consecuencia del aludido yerro probatorio.

Aunado a lo expuesto, resulta un contrasentido que la resolución hubiera considerado diversas pruebas si, según se infiere de la primera causal, se declaró prescrita la acción, pues en virtud de tal pronunciamiento no había necesidad de considerarlas.

Por tanto, a juicio de la Corte el recurrente en casación debe escoger cuál causal invocará puesto que las dos situaciones no son compatibles; al menos no pueden influir simultáneamente en lo dispositivo de la sentencia.

En virtud de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación propuesto por AERO SERVICIOS TEMPONE, S. A. contra la Sentencia de 4 de agosto de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SOCIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS R. GALVÁN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CASA CONFORT, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de la Corte admitió el recurso de casación, en el fondo, interpuesto por el Licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ, apoderado judicial del señor LUIS R. GALVÁN parte actora en el proceso ordinario que le sigue a CASA CONFORT, S. A., contra la sentencia de 24 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Encontrándose el recurso en la fase de decidir en cuanto al fondo, procede la Sala a hacerlo, previas las consideraciones pertinentes:

De conformidad con las constancias de autos, dan cuenta que dentro del proceso ordinario seguido por el señor LUIS R. GALVÁN contra la sociedad CASA CONFORT, S. A., el licenciado BRAÚLIO CARRERA, en su condición de °apoderado judicial de la parte demandada, promovió Excepción de Prescripción de la Acción instaurada por LUIS R. GALVÁN.

El Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por surtida la sustanciación del Incidente de Excepción, mediante sentencia de 4 de octubre de 1993, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción alegada por la parte demandada dentro del juicio ordinario que le sigue LUIS R. GALVÁN.

Posteriormente la parte demandante, interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia proferida por el a-quo. Surtidos los trámites de segunda instancia, el Primer Tribunal Superior de Justicia CONFIRMA la resolución recurrida mediante sentencia de 24 de mayo de 1995, sobre el cual se ha interpuesto el recurso de casación, de que conoce la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, procediéndose al examen de fondo del recurso de casación propuesto por el recurrente. Veamos:

La causal invocada por el recurrente es por infracción de las normas sustantivas de derecho en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha incidido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la causal invocada. Así, por ejemplo, en la sentencia de 5 de febrero de 1993, reproducida parcialmente por el Profesor JORGE FÁBREGA PONCE en su conocida monografía sobre CASACIÓN, en los siguientes términos:

"...
"El error de hecho sobre la existencia de la prueba, puede producirse cuando el tribunal reconoce como existente en el proceso un elemento o conoce como existente en el proceso un elemento o prueba que no obra en el expediente (suposición de prueba), o ignora o no da por existente en el profeso una prueba que obra en él (preterición de prueba). Si se trata de la adición-imputarle al medio probatorio evidencia que no surge de él- o cercamiento-mutilar el contenido del medio probatorio.

No que en estos dos últimos supuestos el probatorios ha sido examinado. (S. 10 de enero de 1969, R. J. N° 1, 1969, pág 19)".

Sobre la misma materia, puede consultarse la sentencia de 18 de febrero de 1991, reproducida parcialmente en la página 76 y 77 de la obra "JURISPRUDENCIA CIVIL AL DÍA", de JAIME J. JOVANÉ y JOSÉ MARTÍN RODRÍGUEZ, en los siguientes términos:

> "Antes de analizar los motivos que sirven de fundamento a la causal invocada conviene tener en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia entienden por error de hecho sobre la existencia de la prueba. Al respecto nos parece oportuno transcribir los conceptos que sobre el particular aparecen consignados en la obra Casación Civil de Jorge Fábrega, pág 453.
>
> El error de hecho sobre la existencia de la prueba puede producirse cuando el tribunal reconoce como existente en el proceso un elemento o prueba que no obra en el expediente (suposición de prueba), o ignora o no da por existente en el proceso una prueba que obra en él (preterición de prueba). Si se trata de la adición -imputarlo al medio probatorio evidencia que no surgen de él- cercenamiento - mutilar el contenido de medio probatorio- no constituyen error de hecho. Sino de derecho, ya que estos dos últimos supuestos el elemento probatorio ha sido examinado. Como ha expresado la Corte (S. de 10 de enero de 1969. R. J. N° 1 1969. pág 19)".

Las pruebas que, según el recurrente, no fueron tomadas en cuenta por al Tribunal ad-quem fueron documentales que hacen referencia a la existencia de la denuncia penal y el sobreseimiento definitivo e impersonal del denunciado, que hacen referencia a documentos que acreditan la compra de un aparato de radio y la factura de dicha compra. Adicionalmente, considera que una prueba, la pericial, tampoco se tomó en cuenta por el Tribunal Superior.

La sentencia que es objeto de censura, en su parte resolutiva, confirmó la sentencia del tribunal a-quo, la cual reconoció una excepción, la de prescripción, sobre cuyo aspecto no versa el recurso de casación.

Las pruebas documentales, por otra parte, a juicio de esta Sala, sí fueron ponderadas por la sentencia de segunda instancia. Veamos:

1. La prueba documental fue analizada al determinar el Tribunal Superior, la naturaleza de la pretensión del demandante en el proceso ordinario propuesto por LUIS R. GALVÁN, de responsabilidad extracontractual y no de responsabilidad contractual. Es más, el análisis del Tribunal hace referencia a la existencia de dichos documentos, desde el momento en que la sentencia confirmatoria es por prescripción en una demanda de daños y perjuicios derivados de una denuncia penal, que culminó, como se dijo, en sobreseimiento objetivo e impersonal, sentencia que constituía la base en que se fundamentaba el demandante para su pretensión indemnizatoria, reconociendo que dicha pretensión se basaba en la actuación en la esfera penal.

El error en cuanto a la existencia de la prueba, en aquellos casos que se refieren a la cuestión de la relación contractual, no constituía un elemento relevante, derivado de la naturaleza de la pretensión indemnizatoria del ahora recurrente, que era por responsabilidad extracontractual, y no se discutía, por lo tanto, la responsabilidad sobreviniente por el supuesto incumplimiento de un contrato de venta con retención de dominio.

Finalmente, el error de hecho en la existencia de una prueba pericial, se encuentra implícita cuando la sentencia del Tribunal Superior reconoce que la demandante no probó daños materiales, y presumió que la pretensión indemnizatoria era derivada, como en efecto lo era, de daños morales. Dicha prueba, por lo demás, señala la inexistencia de daños morales.

Sin embargo, pese a las consideraciones anteriores, resulta ser que dichas pruebas, aún en la circunstancia de no haberse tomado en cuenta, ninguna relación guardan con la sentencia recurrida, la cual confirma sentencia mediante la cual reconoce excepción de prescripción, por lo que la infracción endilgada contra la sentencia de segundo grado, en concepto de error de hecho en cuanto a la

existencia de la prueba, incluso de tener algún mérito, no ha incidido para nada en la parte resolutiva, cuya decisión fue confirmar la existencia de una excepción, alegada en la primera instancia por el apoderado de CASA CONFORT, S. A. Llama poderosamente la atención, de que la decisión del reconocimiento de la excepción de prescripción, no fue cuestionada en casación.

El artículo 1154 señala de manera diáfana que para que prospere el recurso de casación, es necesario que la causal haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, aún cuando esa circunstancia no se exprese literalmente en el recurso, lo que no ha ocurrido en este caso.

En virtud de lo expuesto, mal puede haberse infringido los artículos 749, 819 del Código Judicial y los artículos 1644, 1644a y 1706 del Código Civil, citados por el recurrente.

En consecuencia, la examinada causal única invocada por el casacionista, no está justificada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 24 de mayo de 1995 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el proceso ordinario propuesto por LUIS R. GALVÁN contra CASA CONFORT, S. A.

Las obligantes costas de casación, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ADONIS GIOVANNI MUSMANNO GARCÍA CONTRA LENNIN M. RODRÍGUEZ T. Y CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Jaime J. Jované, actuando en nombre y representación de la sociedad **CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A.**, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 14 de noviembre de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor **ADONIS GIOVANNI MUSMANNO GARCÍA** contra **LENIN M. RODRÍGUEZ T. y CORTAGRAMAS Y REPUESTOS, S. A.**

Cumplida la tramitación correspondiente a esta clase de negocio, debe la Sala determinar si el presente recurso de casación debe ser admitido.

Se advierte que la sentencia atacada es susceptible de impugnación por este medio, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

Consta en el expediente que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por la parte agraviada en segunda instancia.

En relación con el escrito de formalización del recurso, se observa que se trata de recurso de casación en la forma y en el fondo, razón por la cual la Sala procede a examinarlos separadamente.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

Se invoca como única causal de forma, "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las excepciones del demandado, porque se condene a más de lo pedido", la cual corresponde a uno de los supuestos contenidos en el artículo 1155 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento han sido planteados correctamente y son congruentes con la causal utilizada. No obstante, en cuanto a las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto de dichas infracciones, el recurrente se refiere a los artículos 614 y 643 del Código Judicial, que no guardan relación con la citada causal. Además, incluye una serie de citas doctrinales y de la sentencia, al igual que extensas alegaciones que no corresponden a esta etapa del recurso de casación. Consecuentemente, el recurso de casación en la forma debe ser corregido.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

Se invocan tres causales de fondo. La primera consiste en "Infracción de Normas Sustantivas de Derecho, en Concepto de Violación Directa". El recurrente omitió señalar que esta situación influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución de segunda instancia.

El único motivo que le sirve de fundamento no plantea una situación concreta, sino un problema teórico que trae como consecuencia que no pueda saberse en qué circunstancias se pronunció la sentencia de segundo grado, contra la cual se pretende recurrir.

En cuanto a las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto de dichas infracciones, se observa que el recurrente comete el mismo error que se le señaló en relación con la causal de forma, en el sentido de que incluye alegaciones extensas y citas que no corresponden a este apartado del recurso de casación.

En virtud de lo anteriormente señalado, la primera causal de fondo también debe ser corregida.

La segunda causal de fondo invocada es "Infracción de Normas Sustantivas de Derecho, en concepto de Interpretación Errónea de la norma de Derecho", texto que corresponde al del artículo 1154 del Código Judicial, aunque se omitió que esta situación influyó en lo dispositivo de la resolución impugnada.

Tanto los motivos como las disposiciones legales que se estiman han sido violadas y la explicación de esas violaciones, resultan adecuados luego de un primer examen formal y, en consecuencia, esta causal debe ser admitida.

Por último, en relación con la tercera causal de fondo, se advierte que ha sido enunciada correctamente y los motivos que la sustentan son congruentes con ella. Sin embargo, en vista de que se trata de una causal probatoria, el recurrente debió señalar la norma sustantiva correspondiente, que considera ha sido infringida por la sentencia impugnada. Por tanto, debe ordenarse la corrección de esta tercera causal de fondo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en la forma y de la primera y tercera causal de fondo, para lo cual le concede al recurrente el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial y ADMITE la segunda causal del recurso de casación en el fondo.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE LE SIGUE WEXFORD HOLDING LTD. CORP. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Fábrega, actuando en nombre y representación de la sociedad **LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA)**, ha presentado recurso de casación contra el auto de 31 de octubre de 1995, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por **WEXFORD HOLDINGS LTD. CORP.** contra la sociedad recurrente.

En vista de que se ha cumplido con los trámites correspondientes, procede la Sala a revisar el presente negocio con el objeto de determinar si el recurso de casación debe ser admitido.

En primer lugar, se observa que la resolución atacada es susceptible de impugnación por este medio, tanto por su naturaleza como por su cuantía.

En segundo lugar, consta en autos que el recurso fue anunciado y formalizado dentro del término que la ley exige y por persona hábil.

En tercer lugar, en cuanto al libelo contentivo del recurso, se advierte que se trata de recurso de casación en la forma y en el fondo, por lo cual deben revisarse separadamente.

La lectura de los motivos de las dos causales que contiene el recurso de casación en la forma, pone de manifiesto que las faltas que el recurrente le imputa a la sentencia de segunda instancia, tuvieron lugar en la primera instancia del proceso. No obstante, no fueron reclamadas durante ella. El artículo 1179 del Código Judicial señala que "el recurso de casación en cuanto a la forma no será admisible si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido", razón por la cual el presente recurso de casación en la forma debe ser rechazado.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, se observa que se ha invocado como única causal "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa", la cual ha sido enunciada en los términos que establece el artículo 1154 del Código Judicial. Tanto los motivos, como las disposiciones legales que se estiman infringidas y el concepto de dichas infracciones, son congruentes con la causal y resultan adecuados en su aspecto formal, por lo que debe ser admitido.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma y ADMITE el recurso de casación en el fondo, presentado por la sociedad LATINO AMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA).

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIONES PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR CARLOS ARTURO GALÁN MARINE CONTRA THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO

A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados **"FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO"**, apoderados especiales de **THE CHASE MANHATTAN, N. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 26 de octubre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en la Excepción de Inexistencia de la Obligación presentada por **THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.** dentro del Proceso Ejecutivo incoado por **CARLOS ARTURO GALÁN MARINE.**

Cumplidas las reglas de reparto conforme lo establece el artículo 1164 del Código Judicial, se fijó el negocio en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto la admisibilidad del recurso, oportunidad que fue aprovechada por ambos procuradores, según se lee de fs. 118-124 opositor y 125-135 el recurrente.

Así las cosas, la Corte procede a determinar si el recurso cumple con los requisitos señalados por el artículo 1165, para decidir sobre la admisibilidad del mismo.

Luego del examen de rigor, la Sala concluye que, en términos generales, el presente recurso cumple con los requisitos del citado artículo, es decir:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la Ley;
2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;
3. El escrito del mismo reúne los requisitos que ordena el artículo 1160; y,
4. La causal que se expresa es de las señaladas por la Ley.

Finalmente, en relación con el señalamiento de los apoderados de **CARLOS ARTURO GALÁN MARINE** -parte ejecutante- (f. 18) en el sentido de que "EL PRESUNTO CASACIONISTA O SEA LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO NO TIENE EN EL EXPEDIENTE PODER PARA ACTUAR", esta Sala de la Corte observa que dicha firma de abogados sí tiene facultad legal para representar a **THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.** dentro del proceso; de lo que se trata en este caso es de un cambio de nombre de la sociedad civil de abogados, quienes anteriormente habían recibido el poder otorgado por la parte excepcionante (recurrente en casación). A juicio de la Corte, la aludida circunstancia está acreditada en el expediente a fojas 73 en que consta el memorial mediante el cual se notifica al Tribunal del cambio de nombre y dirección.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. contra la Sentencia de 26 de octubre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia para decidir la Excepción de Inexistencia de la Obligación propuesta dentro del Proceso Ejecutivo incoado por CARLOS ARTURO GALÁN MARINE contra THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HERMANOS HERRERA RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO PROMOVIDO POR JAIME GARCÍA GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El doctor ROLANDO MURGAS TORRAZA, presentó recurso de casación en la forma y en el fondo, contra la sentencia de 16 de mayo de 1995 dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, por medio de la cual REVOCA la sentencia N° 108 de 30 de noviembre de 1994, dictada por el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, dentro del proceso de deslinde y amojonamiento propuesto por JAIME GARCÍA GARCÍA contra la SOCIEDAD HERMANOS HERRERA, S. A., parte recurrente en el recurso extraordinario de casación.

Por resolución de 3 de octubre de 1995, se admitió el recurso de casación en la forma, y se ordenó la corrección de la causal en el fondo, la cual fue admitida posteriormente, mediante resolución de 16 de noviembre de 1995. De conformidad con lo que establece la ley, se concedió término para que las partes alegaran en cuanto al fondo, pero ninguna de ellas hizo uso de este derecho.

La Sala entra al estudio del recurso promovido, previas las consideraciones que a continuación se expresan:

ANTECEDENTES

Las constancias de autos informan que el señor JAIME GARCÍA GARCÍA promovió proceso de deslinde y amojonamiento de la Finca N° 9954, inscrita al folio 492 del tomo 1412 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Veraguas, con audiencia de los colindantes JULIO LÓPEZ y HERMANOS HERRERA RODRÍGUEZ, S. A.

Cumplidos los trámites del proceso, el Juzgador de primera instancia dictó sentencia N° 108 de 30 de noviembre de 1994, mediante la cual "DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, alegada por la Sociedad HERMANOS HERRERA RODRÍGUEZ, S. A., DETERMINA como línea divisoria entre las fincas 9954, inscritas al folio 492, Tomo 1412 y la Finca 5842, inscrita al folio 162, Tomo 592, ambas de la Sección de Propiedad, Provincia de Veraguas, la actual división existentes, o sea. por donde pasa el muro de concreto semi-destruido ..."

Apelada la sentencia antes indicada por el apoderado judicial de JAIME GARCÍA GARCÍA, el Tribunal del Segundo Distrito Judicial, REVOCA la sentencia N° 108 de 30 de noviembre de 1994, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas y ORDENA al referido funcionario se realice el deslinde de la totalidad de la Finca N° 9954, "tomando como base para ello los datos y medidas recabadas en la diligencia de deslinde que realizó en los días 19 de enero de 1993 y 12 de mayo de 1993".

CONTENIDO DEL RECURSO
(PRIMERA CAUSAL)

La causal, es en la forma, concretamente no estar la sentencia en consonancia con las excepciones del demandado, al omitir fallar sobre la excepción alegada.

El recurrente afirma que la excepción se encuentra alegada ("configurada", en terminología del recurrente) por la manifestación que hace el demandante-opositor, señalando que ha ocupado el inmueble por un término que excede el término que la ley exige para la prescripción adquisitiva.

El tribunal, por su parte, señala que dichas referencias al tiempo de ocupación de parte de la finca 5842 en forma ininterrumpida por un término que excede el legal, no constituye una alegación de prescripción.

El Tribunal Superior señala:
"...
En adición, el Tribunal considera que tampoco es cierto que la sociedad demandante haya alegado la pretendida prescripción. Todo lo

> que dicha parte manifestó fue que "... la construcción que ostenta mi mandante tiene un tiempo de más o menos cuarenta años de haberse establecido." (sic), tal como puede verse en el escrito de objeción presentada por dicha sociedad respecto a la diligencia de deslinde realizada por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, sobre la finca número 9954 de propiedad del demandado Jaime García García (folio 59). Dicho escrito, sin embargo, fue rechazado de plano por el citado Juzgado por medio del auto número 303 de 12 de julio de 1993, por considerar que no reunía los requisitos propios de las demandas civiles, por una parte, y porque no indicaba la línea que pretendía fuera establecida para dividir los dos predios, por la otra, exigencias que trae el artículo 1499 del Código de Procedimiento Civil para el trámite de esta clase de negocios ...".

La Sala comparte esta posición del tribunal ad-quem, por cuanto la excepción de prescripción no puede declararse de oficio, tal declaración solamente puede proferirse ante la afirmación o alegación, formalmente hecha, de la existencia de prescripción adquisitiva, y no por inferencia. Es cierto que nuestro Código Judicial no ha mantenido que la excepción deba hacerse mediante incidente, como sostuvo, también en su momento jurisprudencia en casación con anterioridad, pero sí exige su alegación, y esto en los momentos indicados por el artículo 677 del Código Judicial, en relación con la excepción a la regla del reconocimiento de oficio por el juez de la existencia de una excepción, así no se alegue, cuando establece la norma contraria, es decir, la necesidad de su alegación en dicho artículo.

Al haberse exigido por la ley la alegación de la prescripción adquisitiva, y no haberse formulado ésta de manera formal, la Sala debe negar la causal en la forma formulada por el recurrente.

PRIMERA CAUSAL EN EL FONDO

Consiste ésta en un error de derecho en la apreciación de la prueba, al haber el Tribunal Superior desestimado un dictamen pericial, que no fue valorado por el Tribunal, aún a pesar de que había sido allegado al tribunal en forma idónea, sobre la base de que el perito del demandante-opositor era sobrino del Presidente y representante legal de la sociedad demandante, aún cuando no fue recusado dentro de término, es decir, en la oportunidad procesal para ello, por lo que se entiende saneado el impedimento del perito.

Como es sabido, con arreglo al artículo 966, los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causas que los jueces, y tal recusación debe hacerse en el traslado del escrito que los designa, lo que no ocurrió en este proceso. No es sino hasta la segunda instancia, en la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en la que se observa esta circunstancia (foja 407), es decir un momento procesal que no resulta idóneo para separar al perito de la pericia, reemplazándolo por otro.

Con respecto a los jueces cuyos impedimentos son idénticos a la de los peritos, el procesalista colombiano HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, se ha pronunciado en la forma que se reproduce:

> "Uno de los interrogantes que con mayor frecuencia se formula frente al tema que explicamos es qué ocurre cuando un proceso se adelanta estando el juez incurso en alguna causal de las previstas en el art. 150 del C. de P. C., en que no se haya manifestado el impedimento por éste, ni formulado la recusación por las partes.
>
> Debe quedar claramente establecido que no se consagró en nuestro Estatuto como causal de nulidad el hecho anotado y que, por ende, tiene plena validez la tramitación adelantada y el fallo que en él se hubiera podido emitir. La razón es evidente, sólo cuando se formula la recusación o se declara el impedimento se suspende el proceso, y en caso de actuarse en él, si existiera por expresa previsión legal la causal y no la manifestaron, no se afecta la

actuación ...".

Al no haber sido recusado, el tribunal, sin embargo, señala que no resulta apropiado tomar en cuenta dicha prueba, por razón del aludido parentesco, siendo así que, con otro perito, el señor ANDRÉS LÓPEZ, designado por la parte demandada fue separado como perito en el proceso. Esta diferencia de tratamiento constituye un tratamiento desigual para las partes en el proceso.

Conviene, por tanto, deslindar si en efecto se ha dado tal tratamiento diferencial. La Sala debe arribar a una conclusión contraria, por cuanto dicho perito es un perito del tribunal y no del demandado, quien, advertido del impedimento, lo reemplazó. (Veáse fojas 13 y 16).

La Sala considera que el Tribunal Superior debió tomar en cuenta el peritaje del perito Barría, por cuanto su dictamen establece importantes elementos: que su peritaje se hizo sobre la base de las constancias registrales, cuyo lindero Norte marcaba una línea quebrada, lo cual es cierto si se toma en cuenta el certificado del Registro Público visible a foja 29, en que señala la naturaleza de la línea, quebrada no recta, que el límite que se ha tenido es un muro existente, de cuya existencia da cuenta la inspección ocular, y que la finca 5872 es anterior a la finca 9954. El peritaje desestimado por el Tribunal es corroborado, además, por el dictamen de la Dirección de Catastro (f. 32), en el sentido de que no existía traslapo alguno entre ambas fincas.

El factor consistente en la posesión ininterrumpida, que data desde que se adquirió la finca en 1978, ciertamente no equivale a la invocación de la prescripción adquisitiva, pero sí constituye un elemento adicional con respecto al deslinde, previsto en el Código Civil, y a cuya normativa debieron ajustarse los peritos al realizar su encargo. El artículo 397 establece el mandato de los elementos que deben ser tomados en cuenta para el deslinde, cuando afirma:

> "**Art. 397.** El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario, y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes".

La circunstancia de no haberle dado valor al peritaje, aún a pesar de que reconoce su existencia, constituye uno de los elementos que quedan tipificados como errores de derecho en la apreciación de la prueba, a que se refiere el Código Judicial, en su artículo 1154, el cual ha sido interpretado en el sentido antes indicado por jurisprudencia constante de esta Sala.

La Sala, por lo tanto, estima que le asiste la razón al recurrente, por lo que admite la primera causal en el fondo en la que sustenta el recurso el recurrente, visible a foja 463, es decir, infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de mayo de 1995, y actuando como tribunal de instancia, ORDENA al tribunal de la causa que realice el deslinde tomando en cuenta las constancias registrales y el límite oeste, tomando en cuenta la muralla existente entre ambas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RODOLFO REINALDO COSSIO ROJAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERNANDO DELANO FIELD IFFILT, SERVICIOS PANAIRE, S. A. Y THE CONTINENTAL INSURANCE CO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29)

DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Eric Sierra González, apoderado judicial del señor **RODOLFO REYNALDO COSSIO ROJAS** dentro del proceso ordinario que le sigue a **FERNANDO DELANO FIELD, SERVICIOS PANAIRE, S. A. y THE CONTINENTAL INSURANCE CO.**, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 9 de noviembre de 1995.

En vista de que se ha cumplido con la tramitación correspondiente, la Sala debe analizar el presente negocio y determinar si el recurso de casación debe ser admitido.

En primer lugar, se observa que la resolución atacada es susceptible de casación, por tratarse de una sentencia proferida por un Tribunal Superior, en segunda instancia, dentro de un proceso ordinario que tiene una cuantía superior al mínimo establecido por la ley.

En segundo lugar, consta en el expediente que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

En tercer lugar, en relación con los requisitos que debe llenar el escrito de formalización del recurso, de acuerdo con el artículo 1160 del Código Judicial, la Sala advierte lo siguiente:

Se trata de un recurso de casación en el fondo en el cual se invoca como única causal, **"INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO, RESPECTO A LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UNA NORMA Y DEL TEXTO QUE SE DEJO DE APLICAR LO CUAL HA INFLUIDO DE MODO SUSTANCIAL EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO RECURRIDO"**, la cual no corresponde a ninguna de las causales establecidas en el artículo 1154 del Código Judicial. Pareciera referirse a dos conceptos distintos de la causal de fondo, lo cual no es aceptable, ya que cada causal debe invocarse individualmente.

En cuanto a los motivos que le sirven de fundamento, se observa que los cinco primeros se limitan a hacer un recuento del proceso y a señalar los argumentos que condujeron al Primer Tribunal Superior de Justicia a proferir la sentencia impugnada.

El motivo sexto plantea que el Tribunal Superior "aplicó indebidamente el ordinal cinco del artículo 1651 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1650 de la misma excerta legal", sin precisar en qué consistió la indebida aplicación que invoca. Se mantiene en un nivel teórico, que no permite conocer en qué consiste la infracción de las disposiciones legales que señala.

Por último, el motivo séptimo plantea el problema teórico de la indebida aplicación de una norma, sin señalar la situación concreta del presente proceso, lo cual no es propio del recurso de casación.

En relación con las disposiciones legales que se consideran infringidas, el recurrente incluye los artículos 9 y 34 f del Código Civil, que no guardan relación con la causal de indebida aplicación a la que al menos en parte se refiere el recurrente. Por otro lado, aunque el artículo 1706 del Código Civil resulta apropiado en su aspecto formal, se observa que no se invoca la disposición legal del Código de Comercio que se señala en el motivo sexto como indebidamente aplicada por el juzgador de segunda instancia.

De todo lo anteriormente expuesto se colige que el presente recurso de casación resulta ininteligible, ya que no existe unidad entre los tres elementos que lo componen.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de

casación presentado por el apoderado judicial del señor RODOLFO REYNALDO COSSIO ROJAS, dentro del proceso ordinario que le sigue a FERNANDO DELANO FIELD, SERVICIOS PANAIRE, S. A. y THE CONTINENTAL INSURANCE CO.

Las costas a cargo de la parte recurrente se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO RANDOLPH A. LAWSON R., INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (INCIDENTE DE COBROS DE HONORARIOS DE ABOGADO) INTERPUESTO POR JORGE VILLALOBOS CONTRA AGENCIAS DE SEDAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado **RANDOLPH A. LAWSON R.**, actuando en su propio nombre y representación, ha presentado recurso de hecho contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 21 de noviembre de 1995, en el incidente de cobro de honorarios interpuesto por el recurrente, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva instaurado por el señor **JORGE VILLALOBOS** contra **AGENCIAS DE SEDAS, S. A.** Dicha resolución "... niega el término para la formalización del recurso de casación", en vista de que consideró que el auto proferido por ese mismo Tribunal el 9 de noviembre de 1995, no es susceptible de impugnación por medio de ese recurso.

Corresponde a la Sala decidir si admite el presente recurso de hecho, lo que significa, en este caso, determinar si el Primer Tribunal Superior de Justicia debe otorgarle al recurrente el término de diez días para que formalice el recurso de casación por él anunciado.

Se advierte que el recurso cumple con los requisitos formales que la ley exige, ya que fue interpuesto oportunamente y el Tribunal Superior negó expresamente el término para formalizar el recurso de casación. Igualmente, se observa que las copias fueron solicitadas y retiradas dentro del término y con ellas compareció ante la Corte el recurrente, en la debida oportunidad.

En vista de lo anteriormente señalado, es preciso determinar si la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 9 de noviembre de 1995, es recurrible en casación.

La mencionada resolución confirmó el auto N° 414 de 3 de marzo de 1995, proferido por el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 3 de marzo de 1995, mediante el cual negó el incidente de cobro de honorarios profesionales promovido por el recurrente, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva instaurado por el señor JORGE VILLALOBOS contra AGENCIAS DE SEDAS, S. A. Los honorarios se reclaman por razón de la actuación del Licenciado Lawson dentro de ese proceso, los cuales, según él, ascienden a la suma de B/.8,400.00.

El recurrente sostiene que el auto que se pretende impugnar en casación es susceptible de ese recurso porque, "al confirmar en todas sus partes el auto # 414 de 3 de marzo de 1995, extingue de esta manera, o entraña la extinción, de

la pretensión ejercida por el suscrito del incidente de cobro de honorarios de abogado interpuesto". Además, agrega que la cuantía del incidente es superior a los cinco mil balboas.

La Sala estima que le asiste razón al recurrente.

En relación con el cobro de honorarios profesionales, el número ordinal 4 del artículo 1335 del Código Judicial señala lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 1335.** Sin perjuicio de los otros casos establecidos en la ley, se tramitará por la vía del proceso sumario las causas referentes a:
> ...
> 4. Cobros judiciales de honorarios de abogados, médicos, contadores, arquitectos, constructores, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente, así como cualquier controversia que surja por razón de cobro de dichos honorarios. Si los honorarios de peritos y abogados y demás auxiliares de la jurisdicción proceden de su intervención en un proceso podrán también reclamarse dentro del mismo, por la vía del incidente, mientras el expediente se encuentre en el juzgado; ..."

De la norma transcrita se colige que el cobro de los honorarios profesionales, cuando se trata de peritos, abogados y demás auxiliares de la jurisdicción, puede reclamarse de dos maneras: 1) mediante proceso sumario y 2) mediante incidente dentro del mismo proceso en que se causaron.

La sentencia proferida en segunda instancia dentro de un proceso sumario de esta clase es recurrible en casación, siempre y cuando la cuantía del mismo sea de cinco mil balboas o más. Consecuentemente, la resolución que decide un incidente de cobro de honorarios profesionales en segunda instancia, si alcanza la cuantía necesaria como en el caso que nos ocupa, también es susceptible de ser impugnada mediante recurso de casación, por tratarse de un auto que entraña la extinción de la pretensión del incidentista.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho presentado por el Licenciado RANDOLPH A. LAWSON y ORDENA al Primer Tribunal Superior de Justicia, que le conceda el término para formalizar el recurso de casación anunciado contra el auto proferido por ese tribunal, el 9 de noviembre de 1995.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

JAIME OBREGÓN ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE VIRCA, S. A. (IMPEDIMENTO) MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado **ROGELIO A. FÁBREGA Z.** ha solicitado que se le separe del conocimiento del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor **JAIME OBREGÓN ORTEGA,** dentro del proceso ordinario instaurado por la sociedad **VIRCA, S. A.** contra la parte recurrente en casación.

El Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z. fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "Respetuosamente les solicito se me separe del conocimiento del recurso de casación incoado por JAIME OBREGÓN ORTEGA, dentro del proceso ordinario propuesto por VIRCA, S. A. contra JAIME OBREGÓN ORTEGA, en virtud que antes de ser designado Magistrado en esta Corporación de Justicia, actué como apoderado judicial de la Sociedad VIRCA, S. A., inclusive, en la constitución de la misma, y me une una amistad estrecha con el señor VIRGILIO CAPRILES MORALES, quien funge como Presidente y Representante legal de la mencionada sociedad.
>
> Por tal motivo, fundamento mi impedimento en el numeral 13 del artículo 749 del Código Judicial, a fin de que prevalezca la transparencia de la justicia."

La situación descrita por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z. no corresponde a la del número ordinal invocado por él, ni a los otros supuestos contemplados en el artículo 749 del Código Judicial, disposición que enumera las causales de impedimento; razón por la cual no debe concederse la solicitud que por este medio se resuelve.

En mérito de lo expuesto, los Suscritos Magistrados de la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES LEGAL EL IMPEDIMENTO manifestado por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., para conocer del recurso de casación presentado por el señor JAIME OBREGÓN ORTEGA, dentro del proceso ordinario que le sigue la sociedad VIRCA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO JAIME JOVANÉ INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LEONARDO CIPPONERI MARTINICO CONTRA YAPELO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JAIME J. JOVANÉ, en su condición de apoderado judicial del señor LEONARDO CIPPONERI MARTINICO, ha interpuesto recurso de hecho dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que le sigue a YAPELO, S. A.

En el caso en estudio, el recurrente pretende la revocatoria de un auto proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia de fecha 10 de enero de 1996, que NIEGA POR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación contra la resolución de 31 de octubre de 1995 del mismo tribunal, por medio de la cual se NIEGA EL INCIDENTE DE NULIDAD de lo actuado dentro del proceso.

Le corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del presente recurso de hecho, examinando previamente la competencia que tienen los tribunales para el conocimiento de los negocios que en ellos se tramitan.

El artículo 129 le confiere competencia al Tribunal Superior para conocer de las apelaciones promovidas contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Circuito y el Magistrado Sustanciador en el caso de Tribunales Colegiados. Este fue en efecto el criterio del Tribunal Superior al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que había decidido el incidente.

Al efecto el tribunal argumentó de la siguiente forma:

"...
Esta Judicatura al abordar el tema sobre la viabilidad o no del medio impugnativo ensayado, considera que dicho recurso resulta procesal y jurídicamente improcedente, por el hecho de que se está ejerciendo contra un auto dictado por un Tribunal Colegiado, el cual no es susceptible de recurso de casación que, de ser el caso, sería el medio impugnativo idóneo para impugnar una resolución dictada por esta Corporación Judicial. (Art. 1116, ord. 8 del C. J.). ...".

Ante la negativa de la concesión del recurso de apelación por parte del Tribunal Superior, el recurrente presentó recurso de hecho ante la Sala Primera de esta Corporación de Justicia.

El deber primario de esta Sala es determinar la competencia de la misma para conocer del recurso de hecho y, en su caso, del de apelación. Esto viene, en términos generales, señalado en el artículo 94 del Código Judicial, en los términos siguientes:

"ARTÍCULO 94. La Primera Sala conoce en segunda instancia:

1. De los negocios civiles de que conocen en primera instancia los Tribunales de Distrito Judicial en los cuales haya lugar a consulta, o apelación de autos y sentencias; y, ...".

Se aprecia de la lectura del expediente que, en este caso, no se trata de un proceso cuya competencia le corresponda decidir al Tribunal Superior en primera instancia, sino de un incidente de nulidad sobre actuaciones del a-quo, que fue negado por dicho cuerpo colegiado.

El recurso de hecho es viable contra resoluciones que hayan negado un recurso de apelación cuando éste quepa. No obstante, excluye a la competencia de la Corte Suprema, el conocimiento del recurso de hecho contra resoluciones del Tribunal Superior dentro de un proceso en el cual éste no actuaba como tribunal de primera instancia, con la única excepción de aquéllas resoluciones del Tribunal Superior que niegan la admisión del recurso de casación, hipótesis ésta que no es la que ocupa a la Sala en este proceso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho promovido por LEONARDO CIPPONERI MARTINICO, mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

PABLO GORDÓN I., TORIBIA JULIA GORDÓN URRIOLA, OTILIA GORDÓN IBARRA E INÉS GORDÓN DE CASTAÑEDA INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1983 Y 24 DE ENERO DE 1992, PROFERIDAS POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE COCLÉ, EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PROPUESTO POR CONCEPCIÓN CORONADO CONTRA EUGENIO GORDÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A.

SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada MARÍA GRACIELA VALOY, actuando en nombre y representación de PABLO GORDÓN, OTILIA GORDÓN IBARRA, INÉS GORDÓN IBARRA y TORIBIA JULIA GORDÓN URRIOLA, interpuso ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia recurso extraordinario de revisión contra las resoluciones proferidas por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, fechadas el 27 de diciembre de 1983, el 24 de enero de 1992 y el 27 de julio de 1992; las últimas dictadas en virtud de actuaciones subsecuentes que se surtieron dentro de la misma causa y por la misma autoridad sentenciadora.

La Sala de la Corte dictó el 23 de junio de 1995 resolución mediante la que declaró admisible el recurso de revisión interpuesto por los recurrentes, procediéndose a la aplicación de los trámites a observarse según la Ley cada vez que se trata de esta clase de acciones de carácter extraordinario. Para ello se citó personalmente a los que aparecen como parte en el proceso ordinario, a fin de permitirles comparecer en defensa de sus derechos, no antes de advertir que cualquier persona o entidad a quien la resolución recurrida pudiese haber agraviado, beneficiado o afectado en alguna forma, también gozaba del derecho de intervenir en esta fase del proceso en calidad de litis consorte. Se ordenó la celebración de la audiencia oral, acto que se llevó a cabo el día 16 de enero de 1996 y que se encuentra reflejado en el acta que rola de fojas 200 a 232 del expediente. Esta audiencia fue presidida por los magistrados integrantes de la Sala y en ella participaron los apoderados judiciales de las partes.

ANTECEDENTES.

Para mayor claridad conviene hacer un recuento sintetizado de los antecedentes del caso que diera origen a la revisión interpuesta que ahora debe resolver la Sala.

En julio de 1982 el señor CONCEPCIÓN CORONADO interpuso juicio ordinario de prescripción adquisitiva de dominio en contra del señor EUGENIO GORDÓN, aduciendo desconocer su paradero, por lo cual se le solicitó al Tribunal que la notificación de la demanda se surtiese mediante el procedimiento del edicto emplazatorio. Así se hizo, continuando el proceso con la intervención del defensor de ausente designado para representar a la parte demandada. El Juez de la causa, Primero del Circuito de Coclé, dictó sentencia, luego de haber sido practicadas y evacuadas las pruebas testimoniales, documentales y periciales aducidas en su favor por la parte actora, pronunciándose en los siguientes términos:

"DECLARA:

PRIMERO: Que el señor CONCEPCIÓN CORONADO, desde hace más de 15 años (quince años) está en posesión, pública, continua, sin interrupción, y actos de dueño, sobre un globo de terreno de SIETE HECTÁREAS con 5678,08 metros cuadrados de superficie, comprendido de los siguientes linderos:

NORTE: Resto de la Finca 6528;
SUR: Callejón servidumbre;
OESTE: Resto de la Finca 6528;
ESTE: Resto de la Finca 6528. Inscrita al Tomo 654, Folio 424 del Registro Público.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior, el señor CONCEPCIÓN CORONADO, Cedulado N° 2-13-774, ha adquirido por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, el lote o globo de terreno, identificado en la declaración anterior.

TERCERO: Que la directora del Registro Público, haga la inscripción

correspondiente, asignándole un valor de UN MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1.500.00).

Expídase copia debidamente autenticada de esta resolución a la Dirección General del Registro Público, para su debida inscripción. ..."

Posteriormente el propio Juez Primero del Circuito del Distrito de Coclé, dictó, en este mismo caso, el día 24 de enero de 1992, resolución con la que se adiciona la sentencia anterior, a fin de satisfacer reparos formulados por la Dirección General de Registro Público, procediéndose a ordenar:

"EN ADICIÓN A LA SENTENCIA de 27 de diciembre de 1983; SE ORDENA LEVANTAR la marginal del 1093 del Código Judicial, recaída sobre la finca 6528, inscrita al Folio 424, tomo 654, Provincia de Coclé, y que le fue comunicada con oficio N° 319 de 19 de julio de 1982. Y en donde dice"... SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior, el señor CONCEPCIÓN CORONADO, cedulado N° 2-13-774." -DEBE DECIR: SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior, el señor CONCEPCIÓN CORONADO, varón, cedulado N° 2-15-948."

Más adelante, el 27 de julio de 1992, vuelve el Tribunal a dictar otra resolución (esta vez a solicitud de la parte demandante) quien peticionó que se adicionara la resolución dictada el 27 de diciembre de 1983 para que en lo dispositivo del fallo quedara añadido que **"la finca N° 6528, inscrita al tomo 654, folio 424 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé quede con las medidas y linderos que constan en el Registro Público y con la superficie que quede después de hecha la segregación referente a este proceso de prescripción".**

La petición resultó concedida por el Juzgador, como se comprueba por medio del documento que obra a foja 7 del expediente así como a foja 57 del juicio ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, antecedente de este recurso extraordinario de revisión.

EL RECURSO DE REVISIÓN.

Los herederos declarados de la parte demandada en el juicio de prescripción adquisitiva de dominio (señor EUGENIO GORDÓN), quienes formalizaron el recurso de revisión que merece la atención de esta Sala, sostienen que a la parte demandada en aquella causa **"no se les dio oportunidad de comparecer al Proceso, utilizando para ello medio y recursos fraudulentos".**

Los recurrentes, quienes alegan haber encontrado documentos decisivos que no pudieron aportar o introducir por motivo de fuerza mayor, fueron declarados herederos de la parte demandada en el juicio de prescripción adquisitiva, mediante resolución calendada el 14 de marzo de 1991, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil. Según el auto de declaratoria de herederos la finca N° 6528, inscrita al folio 424, tomo 654 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé, fue transmitida, en virtud del juicio de sucesión intestada, a las personas que han interpuesto el presente recurso de revisión con el propósito de que se revoquen las sentencias o resoluciones dictadas en donde se declara la usucapión de una porción del predio en favor del señor CONCEPCIÓN CORONADO, parte demandada en este recurso.

Las causas medulares que le sirven de fundamento al recurso de revisión son expresadas como sigue: el señor CONCEPCIÓN CORONADO actuó fraudulentamente en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio al emplazar por edicto a EUGENIO GORDÓN, faltando a la verdad cuando aseguró que desconocía su paradero, ya que tenía pleno conocimiento de su muerte, entre otras razones, por ser vecino del difunto. Ese emplazamiento por edicto que le fuera hecho a EUGENIO GORDÓN luego de su fallecimiento dio lugar a que la parte demandada no fuese notificada personalmente de acuerdo a los términos del artículo 989, numeral 1 del Código Judicial, de la resolución que ordenó el traslado de la demanda, privándose a los legítimos herederos, a sabiendas y maliciosamente, de la oportunidad de defender sus intereses y ejercer sus derechos. Para la época en que fue promovido aquel

proceso de prescripción adquisitiva de dominio, EUGENIO GORDÓN tenía tres años de muerto.

Del artículo 1189 del Código Judicial, dos han sido las causales invocadas en este recurso: la contemplada en el numeral 2 que remite al hallazgo de documentos decisivos que la parte no hubiese podido aportar o introducir en el proceso por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida; y la contemplada en el numeral 9 que se refiere a la falta de notificación legal en perjuicio de la parte demandada.

POSICIÓN DE LA PARTE OPOSITORA.

La parte opositora del recurso de revisión interpuesto (CONCEPCIÓN CORONADO), al dar contestación a las pretensiones del recurrente por medio de su apoderado judicial, negó, en primer término, los hechos en que se sustenta la acción interpuesta en su contra, pasando de inmediato a señalar que dicha acción se encuentra prescrita, tanto para los efectos de solicitar la nulidad como para interponer el recurso de revisión.

El 16 de enero de 1996 se celebró la audiencia oral por razón del presente recurso de revisión, ante esta Sala de lo Civil de la Corte, a la que asistieron ambas partes representadas por la licenciada María Graciela Valoy apoderada de la parte solicitante del recurso de revisión y, el licenciado Eufrosinio Troya Torres como apoderado de la parte demandada en este recurso o sea CONCEPCIÓN CORONADO. Durante el desarrollo de esta audiencia, cuya acta consta de fojas 200 a 232, fue interrogado el señor RODOLFO GORDÓN y, posteriormente el Tribunal consideró importante tomarle declaración al demandado señor CONCEPCIÓN CORONADO quien compareció y fue interrogado. Entre sus respuestas a los cuestionamientos que le hiciera esta Sala resulta fundamental destacar que: estaba enterado de la muerte del señor EUGENIO GORDÓN IBARRA cuando interpuso el juicio de prescripción adquisitiva para adquirir un terreno de propiedad de éste, o sea del difunto (Eugenio Gordón) (ver fs. 211 y 212). Lo que quiere decir que acepta que inició un juicio de prescripción demandando a un difunto y citándolo por edicto a sabiendas de que estaba muerto, pues era vecino y sobrino del demandado. Aunado a ello, ni siquiera se había realizado el juicio de sucesión. Seguidamente se pasó a la etapa de alegatos, en la que ambos apoderados hicieron uso de la palabra, según consta a partir de foja 212 hasta 231.

La audiencia finalizó, advirtiendo a los abogados que tenían oportunidad de presentar alegatos escritos, en el término de 3 días. (Fs. 232).

POSICIÓN DE LA CORTE.

Ha sido constante e invariable la postura de esta Sala Primera de la Corte al concebir el recurso de revisión como un medio de impugnación cuyo objetivo supremo consiste en salvaguardar la buena fe, el derecho de contradicción y las reglas de lealtad procesal que deben observarse y estar presentes en todas las controversias judiciales. Es dentro de ese espíritu que la Sala pretende resolver este recurso extraordinario. Con ese propósito se examinará la verdad de los hechos demandados a la luz de las constancias procesales y del derecho invocado por las partes en contienda.

Después de analizar las abundantes pruebas que obran en el expediente, así como el desarrollo y lo acontecido durante la celebración de la audiencia oral, no pareciera existir incertidumbre en cuanto a que el señor CONCEPCIÓN CORONADO interpuso el juicio de prescripción adquisitiva de dominio que culminó con la adjudicación a su favor de una porción de la finca N° 6528, inscrita al Tomo 654, Folio 424 de la Sección de la Propiedad, que pertenecía al señor EUGENIO GORDÓN, a sabiendas y con plena conciencia de que lo hacía en contra de una persona fallecida hacía apenas tres años. Los lazos de amistad que los unieron, las relaciones de vecindad y el medio provincial en el que juntos convivían imposibilitan que, para el señor CORONADO, hubiese pasado inadvertida la muerte del señor EUGENIO GORDÓN. La Sala se convenció de lo anterior cuando en el acto de la audiencia el propio señor CONCEPCIÓN CORONADO al serle preguntado si él tenía o no conocimiento de la muerte de EUGENIO GORDÓN en el momento en que interpuso la demanda, respondió en forma candorosa, si se quiere, pero también

en términos que lo reivindican al no faltar a la verdad que, en efecto, él estaba enterado de ese deceso. A partir de este primer hecho incuestionable, la Sala tiene que deducir, en base a la naturaleza del debate procesal que se ha planteado, que CONCEPCIÓN CORONADO no pudo haber permanecido ocupando con ánimo de dueño, en forma pacífica e ininterrumpida por espacio de más de quince años el inmueble que reclamó y obtuvo en propiedad mediante el instituto jurídico de la usucapión en el juicio en donde se notificó al fallecido (EUGENIO GORDÓN) utilizando el procedimiento del edicto emplazatorio.

El método utilizado para surtir el traslado de la demanda, pasando por encima de la notificación personal, colocó a la parte demandada en abierta desventaja y la imposibilitó de procurarse la auténtica defensa de sus intereses y de sus derechos. Esa desventaja fue determinante y decisiva para que se profiriese una sentencia que equivale a un despojo a sus legítimos dueños de un patrimonio que les pertenecía. Ese proceder no puede excusarse haciendo uso de la argumentación ensayada por la defensa del señor CONCEPCIÓN CORONADO, que pretende justificar la conducta procesal censurada en la existencia de una obligación contraída por uno de los parientes de EUGENIO GORDÓN, quien supuestamente mantenía una deuda pendiente de pago con Coronado por la suma de 1,500.00 balboas, cuyo cumplimiento se pretendió hacer efectivo a través del juicio de prescripción adquisitiva de dominio.

La Sala desea llamar la atención sobre un aspecto que considera de importancia. Este caso, que tiene como protagonistas a gente humilde y sencilla de nuestro interior, le posibilita a la Corte lidiar con una situación en la que se refleja y aflora el drama cotidiano que con cierta frecuencia surge debido a la ignorancia, al mal asesoramiento o a la actuación equivocada en que no pocas veces incurren los encargados de brindar un adecuado servicio profesional o de administrar justicia. Situaciones como ésta sólo se evitan mediante el ejercicio apropiado que abogados y jueces deben desplegar con el propósito de que el proceso desemboque en resultados apegados a la justicia y a la verdad.

Encuentra la Sala, después de haber hecho las anteriores consideraciones que le asiste razón al recurrente cuando invoca, en respaldo de su impugnación, lo previsto en el numeral 9 del artículo 1189 del Código Judicial, porque en este caso es patente que la parte afectada con la sentencia no fue legalmente notificada en el proceso.

En relación con la segunda causal invocada por el revisionista, referente a los documentos que aduce la parte actora del recurso ligándolos al numeral 2 del artículo 1189 del Código Judicial, esta Sala tiene que admitir que los mencionados no son ni decisivos ni de aquellos que la parte no hubiese podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida. Al contrario, todos esos documentos siempre estuvieron al alcance de los interesados y no ve la Sala como pudieron haber sido ocultados o de alguna forma manipulados con la intervención de la parte favorecida, o sea, por el señor CONCEPCIÓN CORONADO, con lo cual se descarta la existencia de una conducta fraudulenta.

Queda pendiente la solución de la denominada prescripción que alega en este caso la parte opositora. Es cierto, tal como consta en autos que el Juzgado Primero de Circuito del Distrito de Coclé, Ramo Civil, dictó sentencia para decidir el juicio de prescripción adquisitiva de dominio el día 27 de diciembre de 1983, resolución que fue notificada al día siguiente al defensor de ausente en ese caso. Desde esa fecha al 2 de febrero de 1995, cuando se interpuso el recurso de revisión, ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 1192 del Código Judicial que fija en cuatro años como máximo el tiempo en que puede hacerse uso del recurso. No obstante, la problemática de este proceso debe ser examinada atendiendo a sus propias particularidades. Ellas indican que, por distintas razones, el Tribunal que decidió la causa se vio en la necesidad de pronunciarse, con posterioridad a la sentencia dictada en la fecha arriba señalada, en dos nuevas ocasiones. Primero lo hizo a través de la resolución de 24 de enero de 1991 y luego mediante la resolución de 27 de julio de 1991. Esa última actuación indica que el proceso realmente no había culminado en diciembre de 1983 como sostiene el representante de CONCEPCIÓN CORONADO. Al producirse otros hechos procesales a menos de cuatro años de que se hiciese uso

del recurso de revisión bajo estudio, la Sala estima que no se cumplen los presupuestos necesarios para aceptar la prescripción alegada o para declarar extinguida la acción del revisionista. También ha sostenido la parte opositora que el artículo 1191 del Código Judicial concede el término de un año para interponer el recurso de revisión. La Sala observa que existe una evidente contradicción en el término concedido por el artículo 1191 (un año) y el del artículo 1192 (cuatro años), para la interposición del recurso. En esas condiciones la Sala tiene que aplicar la disposición posterior de acuerdo a la regla de interpretación establecida por el numeral 2 del artículo 14 del Código Civil. Al prevalecer la disposición consignada en el artículo posterior el término de prescripción que aplica la Sala es el señalado en el artículo 1192 del Código Judicial, o sea, de cuatro años. Esta parte de la controversia, es decir la de la prescripción que en este caso se plantea, fue resuelto por la Sala ya en el momento en que decidió declarar admisible el presente recurso extraordinario de revisión, pues si la Sala hubiese considerado que la acción se ejercía en forma extemporánea lo indicado hubiese sido que se rechazase el recurso de plano declarándolo inadmisible, basándose para ello en lo dispuesto en el artículo 1199 del Código Judicial que le ordena a la Corte que así lo haga si el recurso no ha sido presentado dentro del término legal. Se infiere que la Sala Primera al declarar admisible este recurso extraordinario de revisión dictaminó, de antemano, que había sido interpuesto dentro de los plazos legalmente señalados. En consecuencia, la Sala deniega la petición de que se decrete prescrita la acción en los términos solicitados por la parte opositora.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

DECLARA:

1. **FUNDADO** el Recurso de Revisión interpuesto por PABLO GORDÓN I., TORIBIA JULIA GORDÓN URRIOLA, OTILIA GORDÓN IBARRA e INÉS GORDÓN DE CASTAÑEDA contra las resoluciones de fecha 27 de diciembre de 1983 y 24 de enero de 1992, y 27 de julio de 1992 proferidas por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé en el PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuesto por CONCEPCIÓN CORONADO ya que la parte afectada no fue legalmente notificada.

De consiguiente **RESUELVE:**

1. **INVALIDA** en todas sus partes las resoluciones de fecha 27 de diciembre de 1983, 24 de enero de 1992, y 27 de julio de 1992, dictadas por Juzgado Primero del Circuito de Coclé en el Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva propuesto por **CONCEPCIÓN CORONADO** contra **EUGENIO GORDÓN**; y, en su lugar **NIEGA** la declaración de Prescripción Adquisitiva pedida por el demandante CONCEPCIÓN CORONADO sobre la finca 6528, inscrita al tomo 654, Folio 424 del Registro Público de la Provincia de Coclé, que consiste en un globo de terreno de 7 hectáreas ubicado en el Corregimiento El Coco, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé, con las medidas, linderos y demás especificaciones que constan en el Registro Público.

2. **ORDENA** al Director del Registro Público de la Provincia de Coclé cancelar y dejar sin efecto legal las inscripciones que pesan sobre la finca N° 6528, inscrita al tomo 654, folio 424, Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé ordenadas por el Juez Primero del Circuito de Coclé, mediante oficio N° 63 de 31 de enero de 1984, oficio N° 116 de 30 de enero de 1992, oficio N° 619 de 22 de junio de 1992 y oficio N° 764 de 27 de julio de 1992.

Para los efectos indicados devuélvase por Secretaría al Juzgado Primero del Circuito de Coclé el expediente contentivo del Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva propuesto por CONCEPCIÓN CORONADO contra EUGENIO GORDÓN, agregándose al mismo la copia autenticada del fallo de la Corte.

Las costas a cargo del opositor **CONCEPCIÓN CORONADO** se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ALONSO PINZÓN CORRALES CONTRA LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA Y RADIO SOBERANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, en carácter de apoderados judiciales de LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA y RADIO SOBERANA, S. A., interpusieron recurso de revisión, contra el auto de 26 de noviembre de 1995, dictado por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario que le sigue ALONSO PINZÓN CORRALES.

Surtido el reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador mediante providencia de 10 de enero de 1996, fijó la caución que debía consignar el recurrente, tal como lo dispone el artículo 1196 del Código Judicial, cumpliéndose con lo ordenado dentro del tiempo previsto por la ley, por lo que se procedió a solicitar al Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, el expediente contentivo del proceso ordinario propuesto por ALONSO PINZÓN CORRALES contra LUIS GASPAR SUÁREZ y RADIO SOBERANA, S. A., con el objeto de resolver sobre la admisibilidad del mismo. Analizada toda la ritualidad inherente a este recurso, se pasa a resolver, tal como lo preceptúa el artículo 1198 del Código de Procedimiento Civil.

El negocio en estudio, observa la Sala que se trata de un auto dictado por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 26 de noviembre de 1992, y cuya parte resolutiva expresa "NIEGA la solicitud de corrección de la demanda formulada por el Licdo. RANDOLPH A., LAWSON, dentro del proceso ordinario promovido por: ALONSO BUCHO PINZÓN CORRALES contra LUIS GASPAR TOTI SUÁREZ y/o RADIO SOBERANA, S. A. y ORDENA que el defensor de ausente conteste la demanda dentro del término que resta".

En el expediente que contienen los antecedentes que guardan relación con el caso que nos ocupa, aparece a fojas 249 y 250, la solicitud de nulidad de todo lo actuado, formulada ante el Juez Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

La Sala observa que el artículo 743 del Código Judicial le ofrece la opción o la facultad de utilizar la vía del recurso de revisión para obtener la anulación de lo actuado por la razón que se alega.

No obstante, es evidente que la utilización del recurso de revisión ha de promoverse en la etapa procesal correspondiente, es decir, cuando se haya dictado sentencia. Únicamente, en muy calificadas situaciones, cuando haya sido imposible la intervención en el proceso de la parte afectada por la nulidad, quedando en indefensión, podrá pedir la nulidad mediante recurso de revisión, conforme al artículo 743 del Código Judicial. Es decir, cuando el proceso se ha cerrado para el agraviado. Esta interpretación resulta consistente con el artículo 1189, numeral 9° del Código Judicial, que condiciona el recurso de revisión contra una sentencia indebidamente notificada o emplazada, cuyo tema no haya sido debatido en el proceso. No debe prosperar si la notificación realizada en contravención del ordenamiento procesal ha sido hecha valer en el proceso correspondiente.

El artículo 741 del Código Judicial, por otra parte le ofrece a la parte que se considera afectada, promover la declaratoria de nulidad hasta la fecha que

venza el término de alegatos de la instancia correspondiente, lo que hizo en efecto el recurrente.

El referido artículo señala el momento en que se puede invocar la nulidad y el mecanismo procesal idóneo para ello, es decir, mediante incidente. La falta de notificación al demandado, con arreglo al artículo 722, numerales 4° y 5° del Código de Procedimiento Civil, es causal de nulidad y la misma fue invocada por el demandado en el proceso cuya revisión se solicita, el cual aún no ha concluido.

En fallo proferido por esta Corporación de Justicia, y publicado en el Registro Judicial de Agosto 1994, se expresó lo siguiente:

> "En el derecho positivo panameño se califica a la revisión como recurso. No obstante, en realidad no se está frente a un medio de impugnación, esto es, un recurso ya que la revisión se produce contra una resolución dentro de un proceso que ya ha llegado a término. Un recurso de impugnación se formula, dentro del proceso, por quien pretende evitar la firmeza de la resolución que impugna. En cambio la revisión se presenta contra resoluciones que están ejecutoriadas, esto es, que están en firme y fuera del proceso".

Sobre esta materia, el procesalista colombiano, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA, en su obra, "COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Tomo I, pág. 575, señala lo siguiente:

> "...
> Se trata de otro recurso extraordinario y excepcional, contra la sentencia que puso término al proceso. Se diferencia de los otros en que procede contra sentencia ejecutoriada, razón por la cual algunos consideran y nosotros con ellos, que se trata más bien de un proceso separado contra la sentencia dictada en el anterior, se asemeja a la casación en cuanto tiene limitaciones, pues el Tribunal o la Corte que lo tramita solo puede examinar la sentencia acusada por las causales que invoque el recurrente y éste solo puede alegar las que expresamente contemplan los Códigos de Procedimiento Civil y Penal ...".

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión propuesto por LUIS GASPAR SUÁREZ SIERRA y RADIO SOBERANA, S. A., mediante apoderado judicial.

DEVUÉLVASE el certificado de garantía que el recurrente consignó, así como el expediente del proceso ordinario promovido por ALONSO PINZÓN CORRALES CONTRA LUIS GASPAR SUÁREZ Y RADIO SOBERANA, S. A., al Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

MARZO 1996

ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR EL LICENCIADO GONZÁLO MONCADA LUNA EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS MANUEL BOYD SEVILLA DENTRO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL, LICENCIADO CRISTÓBAL ARBOLEDA, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE CALUMNIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia la acusación particular propuesta por el licenciado Gonzalo Moncada Luna, quien actúa en nombre y representación de Carlos Manuel Boyd Sevilla, contra el Fiscal Superior Especial, licenciado Cristóbal Arboleda, por delito contra el honor.

Corresponde decidir en este momento sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2013 del Código Judicial, reformado por el artículo 7 de la ley N° 3 de enero de 1991. Con tal propósito, el estudio del libelo permite advertir que la acusación ha sido presentada por la persona afectada, quien por tanto se encuentra investida de legitimación activa; se designa tanto al acusador como al acusado y se precisa que el delito imputado es el de calumnia. De igual manera, la lectura permite conocer el lugar y la fecha en que supuestamente fue ejecutado el hecho, sus circunstancias particulares y se cita como disposiciones legales infringidas el artículo 22 de la Constitución Nacional y el artículo 2099-A del Código Judicial (fs. 2-3). Sin embargo, en el poder no se consigna el compromiso del acusador, en el sentido de que se obliga "a continuar con la acusación y a probar la verdad de su relato". En ese sentido, se observa que si bien en el libelo el apoderado judicial expresa que "Nos comprometemos a probar la verda (sic) y llevar hasta el final este caso" (f. 3), lo cierto es que tal compromiso debe manifestarlo expresamente el propio acusador, ya sea, a través del poder que confiere a su apoderado judicial o en un escrito separado. Al respecto, la jurisprudencia tiene señalado que "corresponde **al acusador** particular manifestar su compromiso de continuar la acusación y probar la verdad de su relato, por lo que mal puede hacer tal afirmación quien recibe poder para representar judicialmente a la persona que se convierte en acusadora" (Registro Judicial, septiembre de 1993, pp. 210-211). Esta omisión constituye un defecto de forma que impide el ejercicio de la acción penal y, consecuentemente, descarta la intervención activa y eficaz del acusador durante la etapa sumarial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acusación particular propuesta por Carlos Manuel Boyd Sevilla contra el Fiscal Superior Especial, licenciado Cristóbal Arboleda.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

APELACIÓN DE AUTO QUE DECRETA DETENCIÓN Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ROBERTO ANTONIO PINZÓN DÍAZ Y JACINTO JORGE MC DONALD, POR LA MUERTE DE BETSY MARLENE MENDIZÁBAL Y LA DESAPARICIÓN DE JORGE ENRIQUE FALCONETT GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante resolución de 22 de diciembre de 1995, ordenó la detención preventiva de **ROBERTO ANTONIO PINZÓN DÍAZ y JACINTO JORGE MC DONALD**, la prohibición de que abandonen el territorio de la República sin que medie autorización judicial y la separación del cargo público que ocupen (fs. 2169-2170).

Al notificarse de esa decisión jurisdiccional, el apoderado judicial de los imputados, licenciado Rubén Darío Moncada Luna, anunció recurso de apelación (f. 2170), el cual sustentó dentro del término de ley.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Moncada Luna en el respectivo escrito manifiesta que el auto de 12 de diciembre de 1995 emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revocó el segundo auto de sobreseimiento dictado a favor de los señores Pinzón Díaz y Mc Donald y los llamó a responder en juicio penal por la vía de Jurado de Conciencia, no ordenó la detención de propio imperio, ni le ordenó al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que dictara dicha orden. El apelante sostiene que esto es consecuencia de la convicción, tanto de las acciones llevadas a cabo por distintos Agentes del Ministerio Público, como del propio Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, autoridades que en su momento han determinado la inocencia de los ahora llamados a juicio. Dado esos antecedentes surge la necesidad de la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva.

Se refiere el recurrente a la Ley 3 de 1991 que plasmó la filosofía penal -desde el punto de vista social- de obligar al juzgador a un estudio científico, moral y social, en la aplicación de la medida cautelar y que determina en su artículo 2147-D del Código Judicial, que la detención preventiva en centros carcelarios sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resulten inadecuadas.

Considera que al no emerger prueba directa, grave y sustancial de la existencia de un hecho punible, es aconsejable a la justicia se haga menos dolorosa y grave la situación a quienes, de realizarse una audiencia ante Jurado de Conciencia, este tribunal popular declare su inocencia. Además, que dadas las gestiones del Ministerio Público y del propio Tribunal Superior de Justicia, quienes han mantenido el constante concepto de inocencia de los encausados y por las circunstancias tan especiales, solicita, de no resultar aceptadas sus convicciones procesales respecto a la prescripción de la acción penal, es de justicia, que se mantenga la libertad corporal regulada en el artículo 2147-B, ordinales a, b, c, d, del Código Judicial, toda vez que no existen "exigencias cautelares de excepcional relevancia", que impliquen la necesidad de una detención preventiva (fs. 107-110).

OPINIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

El licenciado Silvio Guerra Morales, estima que no le asiste razón al recurrente porque la Ley 3 de 22 de enero de 1991, es clara al expresar cuáles son las condiciones para que proceda la adopción de medidas cautelares alternas, que el delito imputado a los acusados tiene pena mínima de prisión de cinco (5) años, por lo que no se encuentran en los casos y circunstancias contemplados por la ley para que aspiren a tener derecho alguno a la aplicación de una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Concluye señalando que la defensa no ha podido, bajo ningún concepto, sustentar razones propiamente jurídicas y de conformidad a los parámetros legales, que ameriten que la máxima corporación de justicia desvíe en este caso, la vastísima jurisprudencia nacional que ha deslindado el problema de la aplicabilidad de la Ley 3 de 22 de enero de 1991. Solicita así, se confirme lo resuelto por el a-quo (fs. 112-113).

La Sala observa que la representación fiscal dejó vencer el término sin dar respuesta al traslado (f. 105).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Ciertamente, como lo citó el apelante, esta Sala ha manifestado, conforme a la realidad procesal, que en nuestra historia judicial, el caso sub-júdice presenta características especiales.

Ahora bien, contrario a las opiniones vertidas a lo largo del expediente -iniciado en 1976- por distintos funcionarios judiciales, en resolución del 12 de diciembre esta máxima corporación de Justicia, luego de un análisis crítico, arribó a la conclusión que de conformidad con lo normado en el artículo 2222 del Código Judicial, debían responder en juicio penal los señores Pinzón Díaz y Mac-Donald, como supuestos infractores del capítulo I, título I, del libro II del Código Penal, o sea por el delito de homicidio.

También es un hecho cierto que nuestro código Judicial fue modificado por la Ley 3 de enero de 1991 en la materia referida a medidas precautorias de carácter personal y mantiene la detención preventiva como la más grave de ellas.

La normas que regulan las medidas cautelares personales referentes a su aplicación determinan que "**cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado**" (art. 2147-D del Código Judicial) y en relación con su aplicación dice que "**sólo se tendrá en cuenta la pena prevista por la ley para cada delito**" (art. 2147-F del Código Judicial).

Con fundamento en las previsiones normativas citadas y atendiendo a esas circunstancias, se explica por qué la ley ha establecido que **los imputados por delito que la ley penal sanciona con pena mínima de cinco años de prisión están excluidos del derecho de excarcelación** (art. 2181 ord. 1 del Código Judicial) que es un beneficio al cual pueden recurrir, aún aquellas personas que sufren detención preventiva.

En el caso sub-júdice, los imputados han sido encausados penalmente por delito de homicidio y este hecho punible en su tipo básico o simple contempla pena mínima de cinco (5) años de prisión. A los encausados se les endilga el homicidio de dos personas, dándose por probado el hecho punible investigado, aunque predomine en esta fase el principio de presunción de inocencia.

La detención al inicio del plenario sólo mantiene un propósito procesal, cual es, el de asegurar la presencia de los procesados en el juicio oral, pues a esta altura del proceso no cabe temer la fuga o evasión, ni la alteración o destrucción de pruebas y menos la continuidad de hechos delictivos.

La ley dispone la detención y por ello, la medida cautelar adoptada es acorde a la misma y a los lineamientos jurisprudenciales de esta Sala.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MOISÉS ESPINO BRAVO CONTRA EL AUTO ENCAUSATORIO DE TRES (3) DE FEBRERO DE 1994 EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

CUARTO DISTRITO JUDICIAL SUMARIAS SEGUIDAS A RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA O RUBÉN ALEXIS CORTEZ CÓRDOBA POR LOS DELITOS DE ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PEDRO CORTÉS OSORIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Han ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, las sumarias seguidas a **RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA o RUBÉN ALEXIS CORTEZ CÓRDOBA** por los delitos de robo y homicidio perpetrados en la persona del señor PEDRO CORTES OSORIO el día 6 de enero de 1993 en la comunidad de Corozal, Macaracas, Provincia de Los Santos.

Se trata de apelación del auto de tres (3) de febrero de 1994, emitido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, y por el cual se abre causa criminal contra el prenombrado **BANDA CÓRDOBA.**

El Auto apelado llama a juicio al sindicado por los delitos de robo y homicidio, para ello, toma en cuenta la ubicación, intensidad y la cantidad de lesiones inferidas para concluir que en el fuero interno del imputado se encontraba la intención o el ánimo de matar cuando penetró a la residencia del hoy occiso para robar, y no la intención de lesionar como alega su defensa. Por tanto, el Tribunal sindica a **BANDA CÓRDOBA** no por el delito de lesiones personales con resultado de muerte, como lo solicitó la Fiscalía y la defensa, sino por el delito genérico de homicidio.

Por su parte, el defensor de **BANDA CÓRDOBA**, Licenciado **MOISÉS ESPINO BRAVO**, sostiene en su escrito de sustentación de apelación, que no se encuentra probada la participación de su defendido en el delito que se le imputa, puesto que el propio ofendido dijo que lo reconoció por la voz y no porque lo haya visto. Desvirtúa el testimonio de **AQUILES CORTES** (en cuanto dice haber visto al imputado pasar corriendo frente a su casa) basándose en el hecho de que en la comunidad de Corozal solo existe un camino que es el que utilizan todos los residentes y no residentes y que por supuesto también lo pudo utilizar su defendido o el propio atacante de **PEDRO CORTES OSORIO**; además no existen luminarias en el lugar tal como lo reconoce el propio declarante.

Por último sostiene **ESPINO BRAVO** que el hoy occiso murió a causa de una perforación de las vísceras y no como consecuencia de los golpes recibidos en el ataque. Es por ello que la Fiscalía pidió la declinatoria del proceso pues resulta claro, según **ESPINO** que quien hirió al hoy occiso no tenía la intención de matarlo de lo contrario lo habría rematado.

En cuanto a la acusación particular, ésta presentó, a través del Licenciado **HUMBERTO A. COLLADO**, escrito de objeciones a la sustentación de la apelación visible a fojas 470 a 477 del sumario. En dicho escrito, el acusador particular realiza un detallado y amplio estudio sobre las piezas procesales que obran en el sumario y que le llevan a la convicción de que fue **RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA** la persona que lesionó y provocó la muerte de **PEDRO CORTES OSORIO.** Así pues, menciona las declaraciones del propio ofendido, de **AQUILES CORTEZ DELGADO**, **ERMISENDA CONSUEGRA BANDA**, **VIELKA E. CASTRO**, de los médicos que atendieron al señor CORTES OSORIO, entre otras. Hace también alusión a la indagatoria rendida por el imputado, en la cual éste manifestó encontrarse el día del ataque en su casa conversando con **ISIDRO CUBILLA**, sin embargo, en su declaración, éste último niega tal versión. Por último, el acusador particular solicita la confirmación del auto recurrido en los siguientes términos:

> "... no se diga que la intención sólo fue la de robar y no matar, con olvido total del arma que fue utilizada, con olvido total de la intensidad con que se dieron los golpes, con olvido total de los daños y lugares en que se dieron los golpes al difunto PEDRO CORTES OSORIO, con olvido total de que CORTES OSORIO conocía y conoció a su agresor, pues eran del mismo lugar y con olvido total de que PEDRO

CORTES OSORIO al ser golpeado perdió totalmente el conocimiento y se pensó seguramente que había fallecido en el acto". (Fs. 476 y 477).

En cuanto a la forma en que se dieron los hechos, el propio ofendido relató, días después, lo ocurrido al presentar formal denuncia ante la Policía Técnica Judicial de Macaracas, en los siguientes términos:

"... Resulta que el día 6 de enero del presente año yo llegué a mí (sic) residencia en mí(sic) auto como a las ocho de la noche (8:00 P. M.) y cuando estaba acostado, escuché en la puerta trasera de mí(sic) casa que un muchacho que conozco con el nombre de **ALEXIS CORTES CÓRDOBA**, el cual conozco perfectamente ya que tengo una tienda y me dijo que decía el maestro **MELCHI**, quería que fuera en mí (sic) carro a llevarle la hija de él que estaba mala con vómitos, repitiéndome esto en dos ocasiones ya que yo se lo pregunté y sabiendo que se trataba del maestro y quien me llamaba era en ese momento **ALEXIS CORTES CÓRDOBA**, yo me levanté y con toda la confianza sabiendo quien era que me llamaba y abrí la puerta donde me llamaba el tal **ALEXIS CORTES** y fué (sic) cuando me golpearon al instante con un palo que me dió (sic) en la frente y el ojo, perdiendo el conocimiento, pero este sujeto me golpeo cuatro veces más en la cabeza con el objeto de matarme y luego que este sujeto y no se si le acompañaba alguien más me robaron de mí negocio la suma de quinientos balboas B/.500.00 producto del negocio que genera mí(sic) tienda, quiero informarle que por los golpes recibidos tube (sic) recluido por espacio de ocho (8) días y donde presento fractura en el cervical y que debe estar en completo reposo". (F. 19 y 20).

Tenemos que, el día de los hechos, el señor PEDRO CORTES OSORIO se encontraba en su residencia cuando lo llamaron a la puerta, al momento de abrir recibió un golpe en la cabeza con un trozo de madera que le hizo perder el conocimiento, sin embargo el agresor siguió golpeándolo y robó quinientos balboas (B/.500.00) que poseía el difunto en su abarrotería.

Pasados algunos minutos de lo anterior, **AQUILES CORTÉS DELGADO (A) QUILLE** vio pasar corriendo frente a su casa al imputado. A foja 22 del expediente declaró lo siguiente:

"... Señor Personero, como dije anteriormente yo estaba en mi casa solo durante esa fecha y en la hora antes mencionada, bueno estando yó (sic) allí oí como tropel por el camino que pasa por frente de mi casa, me que(sic) mirando y me di cuenta que era una persona que venía, pero cuando llegó mas cerca a mi casa me di cuenta que esa persona era el joven **RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA** y recuerdo cuando él enfrentó a mi casa y que fué ahí cuando me di cuenta que era él o sea **RUBÉN ALEXIS** se metió por un maizal que queda al frente de mi casa, solo hay el camino por medio". (F. 22).

De lo relatado por **JUAN CÓRDOBA CASTRO (A) JUANCHO** a foja 79 del sumario, se desprende que, al volver en sí PEDRO CORTES OSORIO buscó ayuda en la casa de **CÓRDOBA CASTRO**, manifestándole de inmediato "Compadre, compadre mire que me han golpeado y es ALEXIS y está metido en la tienda", luego de lo cual se desmayó en brazos de **VIELKA CASTRO** y lo trasladaron en el vehículo del señor **OLMEDO GUTIÉRREZ** al Hospital de la comunidad, de donde fue ordenado el traslado hacia el Hospital El Vigía de Chitré.

Antes de entrar a considerar la versión que da el sindicado sobre los hechos y si está o no vinculado en los delitos que se le imputan, es necesario establecer con certeza si la muerte de PEDRO CORTÉS OSORIO fue provocada por las lesiones que recibió el día 6 de enero de 1993. Esto nos permitirá saber si la calificación de los delitos de robo y homicidio genéricos es la adecuada al presente proceso, o si por el contrario se trata del delito de lesiones con resultado muerte, tal como lo expresa la Fiscalía y la defensa técnica de **BANDA CÓRDOBA** al solicitar que se decline competencia.

Según certificación médico legal consultable a foja 17 de expediente, la víctima recibió seis (6) heridas inciso-contusas en el cuero cabelludo, sin fracturas; contusión y hematoma periorbital derecho; lesión indirecta de las vértebras y tendones del cuello, por lo que hubo que colocarle un collar ortopédico, todo lo cual puso su vida en peligro principalmente por el trauma craneoencefálico y de manera provisional le incapacitó por treinta y cinco (35) días.

De lo actuado en el sumario, se desprende que el hoy occiso estuvo recluido en diversos centros hospitalarios debido a lo grave de su salud. Así, tenemos que, ingresó el día 6 de enero de 1993 al Hospital El Vigía de Chitré del cual se le dio salida a petición de sus familiares; el 7 de enero fue internado en el Centro Médico San Juan Bautista hasta el día 12 de enero; luego del 20 al 25 de enero permaneció hospitalizado en el Hospital Gerardino De León de Las Tablas de donde fue ingresado nuevamente a la Clínica San Juan Bautista del 25 de enero al 12 de marzo, sin embargo el 7 de abril de 1993 fallece en el Hospital Regional de Los Santos.

El Doctor **KLEBER DE LORA** indicó, en el Protocolo de Necropsia visible a fojas 155 y 156 del sumario, como causa de la muerte de CORTES OSORIO lo siguiente:

"A) DEPLESIÓN ORGÁNICA GENERAL.
B) PERITONITIS, BRONCONEUMONÍA
C) TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y TRAUMA CERRADO DEABDOMEN CON PERFORACIÓN DE VÍSCERA." (

En cuanto al resumen clínico patológico que consta en las páginas antes mencionadas del sumario, el Dr. **DE LORA** manifestó lo siguiente, lo cual coincide con lo puesto en el certificado médico de 18 de enero de 1993 que obra a foja 17 del sumario:

> "En la fecha -6- de enero de 1993, fue agredido físicamente en forma grave:
>
> Recibió 6 heridas contusas de consideración en el cuero cabelludo y trauma craneoencefálico que le produjo conmoción cerebral que peligró la vida.
>
> Sufrió lesiones tendinomusculares del cuello que ameritó aparato ortopédico por un mes.
>
> Recibió escoriaciones en ambos codos ...". (F. 156).

No obstante, a continuación el Dr. **DE LORA** hace alusión a un traumatismo de abdomen que no había sido descubierto en los primeros exámenes que se le practicaron a CORTES OSORIO, sino que fue descubierto tardíamente por los médicos:

> "...
> Traumatismo cerrado de abdomen con perforación de víscera hueca (cólon ascendente y vesícula biliar) que luego ameritaron cirugía de laparatomía abdominal por peritonitis. Se le practicó cecostomía y gastrotomía para alimentación por sonda. Hubo complicaciones orgánicas generalizadas multisistémicas y finalmente falleció el 7 de abril de 1993".

En declaración jurada rendida a fojas 233 a 236 de la encuesta penal, el mismo Doctor **DE LORA** manifestó:

> "... Inicialmente pasó inadvertido a los médicos tratantes el hecho de existir un traumatismo cerrado abdominal, ya que no se apreciaban marcas sobre la piel; sin embargo el hallazgo posterior al inicio de su tratamiento de una perforación del colon transverso comprueba que la agresión a partes blandas del abdomen había sido de suficiente intensidad como para romper o debilitar la pared de una víscera

> hueca que no fue detectada en un inicio, pero que poco a poco fue organizando un proceso de peritonitis crónica".
>
> "... La única deficiencia física del paciente en este caso, y no relacionada con el politraumatismo, sería la edad madura de la persona, ya que las lesiones que recibió la víctima todas fueron traumáticas, aunque algunas no demostrables en el aspecto externo de la persona".
>
> "... Deplesión Orgánica General quiere decir debilitamiento o disfunción progresiva de todos los órganos y sistemas del organismo, y que en este caso se estableció como consecuencia de las siguientes complicaciones: Peritonitis y colecistopatía; desequilibrio ácido base por pérdida de electrólitos; insuficiencia renal, desnutrición secundaria a la hipoingesta, que significa la alimentación a través de sonda nasogástrica por incapacidad propia. **Definitivamente ninguno de estos eventos se habrían presentado de no haber llegado al hospital el paciente en estado grave después de los traumatismos recibidos**.".
>
> "Antes de los traumatismos se conoce que el occiso era una persona relativamente sana y sobre todo **sin patología intestinales conocidas**, que pudieran llevarle a una perforación intestinal por enfermedad propia, de manera tal que en el caso actual **la patología de perforación fue secundaria a los traumas**".
>
> "Definitivamente **de no haber recibido los traumas el 6 de enero, el paciente no habría fallecido 3 meses después por las complicaciones que se han descrito**." (Lo resaltado es nuestro).

Similares declaraciones rindieron los doctores **JOSÉ TRINIDAD CASTILLERO VILLALAZ** e **IRVING ORTEGA ESCOBAR** a fojas 417 a 422 y de 410 a 412 respectivamente, lo cual nos lleva al convencimiento de que la muerte de PEDRO CORTÉS OSORIO se produjo a raíz del ataque del cual fue objeto el 6 de enero de 1993; y que de no haber sido lesionado, el señor CORTES OSORIO no habría muerto el 7 de abril del mismo año resultado de las complicaciones a que hicieron alusión los tres médicos tratantes.

Por otro lado, tenemos la indagatoria rendida por **RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA** en la cual niega los cargos a él formulados, y afirma que el día en cuestión:

> "... desde que era(sic) las seis y media de la tarde (6:30. p. m.) hasta las nueve de la noche (9:00. p. m.), yo me encontraba en mi casa en compañía del señor **ISIDRO CUBILLA** residente allí en el Corozal, ya que mi esposa estaba viendo las novelas en su casa y como él no vé (sic) las novelas, se viene para mi casa a conversar y estamos conversando." (F. 40).

Sin embargo, al ser interrogado sobre el particular, el señor **ISIDRO CUBILLA** negó lo declarado por **BANDA CÓRDOBA** en los siguientes términos:

> "Señor Personero, el día seis (6) de enero del presente año, no estuve en la casa del señor **RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA**, como le dije anteriormente estuve en mi casa viendo la televisión y no es cierto que yo todas las noches me voy para la casa de él mientras están dando las novelas." (F. 76).

Luego de haber analizado las principales piezas procesales en el presente negocio, consideramos necesario indicar el criterio de esta Sala en cuanto a la apelación del auto de llamamiento a juicio.

Primeramente, en relación con la solicitud hecha por la Fiscalía, a fin de que se decline competencia a la esfera de circuito de Los Santos, estimamos que no se encuentra plenamente justificada tal solicitud puesto que la señora Fiscal

se limita en su escrito a hacer un resumen de lo actuado en el proceso, sin dar una explicación suficiente de los motivos por los cuales solicita dicha medida.

La declinatoria de competencia solicitada requeriría una recalificación del delito investigado, puesto que del de homicidio genérico (art. 131 C. P.) se pasaría al de lesiones personales con resultado muerte (art. 138 C. P.); además del delito de robo que también se cometió contra PEDRO CORTES OSORIO. No obstante, la mencionada calificación deberá estar basada en criterios fundamentados adecuadamente a través de lo obrado en la encuesta penal; es decir, que las pruebas deben llevar a la convicción de que el imputado obró queriendo lesionar y no ocasionar la muerte de la víctima.

En relación con el dolo genérico, nos dice **ANTONIO VICENTE ARENAS**, en su obra **"COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO"**:

> "Hay dolo genérico cuando el agente tuvo intención de ejecutar el hecho típico en el cual radica la consumación del delito, como la intención de causar la muerte, en el homicidio; la de sustraer la cosa ajena, en el hurto; la de tener acceso carnal en el estupro, etc." (P. 202).

Considera esta Sala que la excepción presentada por la Fiscalía en el sentido de que el delito por el cual se debe sindicar a **BANDA CÓRDOBA** es el de lesiones personales con resultado muerte, no tiene cabida en este proceso, puesto que resulta evidente que la cantidad de lesiones inferidas al hoy occiso no buscaban sino causarle la muerte, o acaso, ¿alguien que le propina a su víctima más de seis golpes en la cabeza y en el abdomen con un palo de madera que pesa más de tres (3) libras, solo busca lesionarlo?. Obviamente la respuesta es no. Porque si la intención de **BANDA CÓRDOBA** era que su víctima perdiera el conocimiento para él poder robarle su dinero, entonces, con el primer golpe que le dió era suficiente (ver f. 19 y 20). Sin embargo, siguió golpeándolo hasta que, debido a la intensidad con que se dieron los golpes el palo se partió en dos.

Para que se tipifique el delito de lesiones personales con resultado muerte, es necesario que exista el dolo eventual, es decir que el actor no haya querido causar un daño de tanta gravedad como el que causó, pero que haya previsto como posible dicha consecuencia, y por tanto es responsable del delito de que se trate. Sobre este tema, nos dice **ARENAS**:

> "Es eventual cuando el agente se representa un resultado dañoso, lo mira con indiferencia y no renuncia a la ejecución del hecho, aceptando así sus consecuencias." (P. 200).

Indistintamente de que el actor haya obrado con dolo eventual o con dolo genérico, le corresponde igualmente responder por el hecho punible que haya realizado. En algunas legislaciones extranjeras el dolo genérico se presume, sobre ello nos dice **ARENAS**:

> "El art. 9° del Código Penal mexicano dice que 'la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario'. El art. 2° del Código de Nicaragua establece que 'las acciones u omisiones penadas por la ley, se reputan siempre voluntarias, mientras no se pruebe o resulte claramente lo contrario'." (P. 208).

Resulta claro, que la intención de matar se desprende de el grado de violencia con que se ejecute el ilícito, sobre este particular la Corte Suprema de Colombia sostuvo:

> "La intención, el propósito con que obra una persona, no puede conocerse en sí, porque lo meramente síquico no es perceptible por medio de los sentidos. La intención generalmente se conoce por los resultados de la acción que, como efectos naturales o lógicos, acreditan la causa volitiva que los produjo. Eso es lo que significa la frase conocida en derecho penal de que "el dolo se presume en los

> delitos". A toda persona hay que suponerla inocente mientas no e demuestre lo contrario; pero cuando alguien ejecuta un hecho ilícito prohibido por la ley, hay que suponer que obró sabiéndolo, a menos de acreditarse una causa de justificación o excusa, como la ignorancia, el error, la violencia, etc." (Auto, 13 de mayo 1946, 'G. J', t. LX, nums. 2029-2031).

Similar pronunciamiento hizo esta Sala en fallo de julio de 1991, veamos:

> "Con relación a la ausencia de la intención de matar, cabe señalar que la gravedad de los golpes infringidos a un niño de dos (2) años, con las huellas de violencia que quedaron en su organismo, demuestran que no tenían una categoría de correctivo leve y que por el contrario revestían toda la severidad como para causar la muerte a una persona en estado de indefensión, como es el caso del menor A. T. La presencia del dolo es clara en cuanto a que A. J. P., golpeó deliberadamente a su hijastro y aunque se quiera alegar que no quería causarle al muerte con un dolo directo, si cabe considerar la presencia de un dolo eventual que igualmente hace responsable a su autor de la conducta realizada y de las consecuencias inmediatas y mediatas de la misma".
>
> M. P. JOSÉ MANUEL FAÚNDES. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. JULIO 11 DE 1991.

En relación a la multiplicidad y severidad de las lesiones infringidas, sostuvo esta Sala lo siguiente:

> "Las múltiples lesiones producidas al infante que van desde fractura del aspecto externo de la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª, costilla izquierda, con callo óseo antiguo a nivel de las 6ª, y 7ª, sumado a ello toda las cantidades de laceraciones y excoriaciones en tronco, extremidades, cuello y cabeza, nos llevan a compartir el criterio de la recurrente en el sentido de que hubo más que un acto accidental de caída de la cama, pues la severidad de las lesiones demuestran la intención de causarle la muerte al menor."
>
> M. P. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL. FEBRERO 28 DE 1992.

Por otro lado, la preexistencia y la propiedad de los quinientos balboas del hoy occiso se encuentran probadas por las declaraciones de **JUAN CÓRDOBA CASTRO** (f. 241) y **HERMENEGILDO CORTÉS** (f. 243); por lo tanto procede el llamamiento a juicio por robo, así como por homicidio genérico.

Por todo lo anterior, considera esta Sala que se encuentran reunidos los presupuestos del artículo 2222 del Código Judicial y en consecuencia, hay asidero para abrir auto encausatorio en contra del prenombrado **BANDA CÓRDOBA.**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el auto de tres (3) de febrero de 1994, dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra RUBÉN ALEXIS BANDA CÓRDOBA o RUBÉN ALEXIS CORTEZ CÓRDOBA por los delitos genéricos de robo y homicidio en perjuicio de PEDRO CORTES OSORIO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

SUMARIAS SEGUIDAS A OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO, JUAN PATRICIO DENA KEE, FRANCISCO CUEVAS VALDÉS Y ERBIN HUNT POR LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, ROBO Y HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARCELINO JAÉN MÁRQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, las sumarias seguidas a **OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO**, **JUAN PATRICIO DENA KEE**, **FRANCISCO CUEVAS VALDÉS y ERBIN ALBERTO HUNT** por los delitos de robo, asociación ilícita y homicidio, perpetrados contra la persona de MARCELINO JAÉN MÁRQUEZ, hecho ocurrido el día 26 de junio de 1991, en la calle N° 30 Sur, Urbanización Chanis, Casa N° 221.

El recurso de apelación contra el Auto de Llamamiento a juicio, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia fechado cinco (5) de agosto de 1993, anunciado por el Licenciado **LUIS CARLOS AROSEMENA RAMOS**, defensor de oficio del sindicado **OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO**, único que apeló dicho auto, fue sustentado en tiempo oportuno. En su parte medular indica entre otras cosas, que de la indagatoria rendida por su defendido se desprende que éste no tuvo participación en el homicidio de JAÉN MÁRQUEZ, puesto que iba con PATRICIO cuando éste se encontró con los tres amigos que le comentaron que iban a cometer un delito y que su defendido en ese momento se apartó de ellos.

Sigue diciendo el Licenciado AROSEMENA RAMOS en su escrito que; consta en el expediente que a su defendido se le encontró en su poder una pistola de juguete, momentos después del homicidio; que **JUAN PATRICIO DENA KEE** en su indagatoria refiere lo acontecido el día de los hechos y en ningún momento señala a **CARRASCO MALDONADO** como el homicida. También manifiesta el defensor que le causa extrañeza que a su patrocinado se le llame a juicio por el delito de Asociación Ilícita, pues considera que el artículo 242 del Código Penal, que trata sobre este delito, se refiere únicamente a los casos en que se trate de pluralidad de delitos indeterminados para los cuales se haya dado un concierto previo entre los que participan.

Por último, manifiesta el Licenciado **AROSEMENA RAMOS**, que con relación al delito de homicidio, su defendido ha negado su participación en dicho delito y además se encuentra plenamente identificado en el sumario quién fue el homicida. Finalmente, solicita que se revoque el auto atacado y se decline competencia del negocio a propósito de que **OSCAR CARRASCO MALDONADO** sea llamado a juicio por el delito de robo en grado de tentativa.

En cuanto a la forma como se dieron los hechos que trajeron como consecuencia la muerte del señor MARCELINO JAÉN MÁRQUEZ, tenemos que, aproximadamente a las siete y treinta (7:30 p. m.) de la noche del día 26 de junio de 1991, regresaban a su casa el hoy occiso y su hija **GINA MARCEL JAÉN HERNÁNDEZ**, cuando cerca del garaje de su casa pudieron ver a cinco sujetos de aspecto sospechoso caminando en la acera y sobre la grama. Narra la hija del occiso que en el momento en que ella se bajó del automóvil escuchó a un hombre que le dijo a su padre que le diera las llaves y luego de esto escuchó el disparo que cegó la vida del señor **JAÉN MÁRQUEZ**. El sujeto que le disparó se dio a la fuga.

De las indagatorias rendidas por los sindicados se colige que **JUAN PATRICIO DENA KEE y OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO** se encontraron el día que nos ocupa en el sector de Río Abajo, calle 15, que **CARRASCO** invitó a **DENA** y se pusieron de acuerdo para "rebuscarse" (ver fs. 25 y 26). De allí se fueron caminando hasta el Gago de Chanis y a esa altura se encontraron con FRANCISCO CUEVAS VALDÉS, ERBIN HUNT y RAFAEL RODRÍGUEZ, que les comentaron que andaban "transando" pues los tres portaban armas; en vista de esto, CARRASCO y DENA se les unieron. De lo sucedido en el momento en que vieron el auto del hoy occiso entrando al garaje de su casa, existen varias versiones dadas por los propios sindicados; CARRASCO

sostiene que él se encontraba a unos diez (10) metros del lugar cuando escuchó el disparo; DENA afirma que vio cuando los otros cuatro se metieron al garaje y que él se paró casi tres casas adelante de la que entraron los otros; RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA (menor de edad) narra lo siguiente:

> "... seguimos caminando juntos, vimos entrar un carro a una casa, "TOÑIN", "TITO" y "POCHO", se fueron detras (sic) del carro hasta el garage (sic), "PATRICIO" y yo, nos paramos más adelante, para vigilar, desde donde me encontraba parado, logré ver a "TOÑIN", cuando le puso el revólver en la cabeza al señor que iba manejando el carro, derrepente (sic) empezo (sic) a forcejear el revolver (sic) con el señor y se escucho (sic) el disparo y gritos, enseguida, salimos corriendo "PATRICIO" y yo, ...". (F. 50).

Resulta claro, pues, que cada uno de los tres sindicados explica lo sucedido excluyéndose de la participación directa en el delito; no obstante sus declaraciones coinciden con lo dicho por la testigo presencial **GINA JAÉN HERNÁNDEZ** en el sentido de que quien disparó contra su padre fue **FRANCISCO CUEVAS VALDÉS (A) TOÑIN**, tal como lo identificó en fotografía y ampliación de su declaración jurada a fojas 190 y 191.

Por otro lado, tenemos que la defensa de **CARRASCO MALDONADO** afirma que su cliente no tuvo participación en el ilícito por haberlo indicado así en su indagatoria, sin embargo, constan en el sumario las declaraciones de **JUAN PATRICIO DENA KEE y RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA** que involucran directa y claramente a CARRASCO en los hechos, de los cuales afirman que todos estaban de acuerdo sobre el delito que se iba a cometer (robo), y además que **CARRASCO** manifestó portar una pistola nueve (9) milímetros. (Ver fs. 28 y 50).

Considera esta Sala, que existen claros elementos de convicción para pensar que se dio un acuerdo de voluntades entre todos los involucrados en el hecho, y por lo tanto se configura el delito de asociación ilícita. Disentimos, así, de la interpretación que le da el Licenciado AROSEMENA RAMOS al contenido del artículo 242 del Código Penal; pues no es lo determinado o indeterminado de los delitos lo que constituye los presupuestos de la norma en cuestión, sino más bien, que se trate de tres o más sujetos, y que se asocien con fines de cometer delitos. La norma tampoco se refiere a que la comisión de dichos delitos deba ser continúa o duradera, simplemente que se asocien con el fin de cometerlos.

No comprendemos cómo es que, habiendo CARRASCO declarado que él se apartó de los otros cuatro sujetos involucrados y que no participó del robo, su defensor afirma que en el caso de su cliente no hay asociación ilícita, pero que sí se le debe juzgar por robo en grado de tentativa. Si la asociación ilícita se dio previamente y era para robar, ¿cómo es que CARRASCO no se asocia pero sí intenta robar junto a los otros imputados?; sobre todo cuando había manifestado portar una pistola nueve (9) milímetros para lograr el objetivo.

En cuanto a los cargos que se le formulan al recurrente por el delito de homicidio en perjuicio de JAÉN MÁRQUEZ, resulta claro, que CARRASCO tenía conocimiento de que iban a cometer el delito de robo, además tenía conocimiento de que los otros imputados portaban armas de fuego, lo cual representaba altas probabilidades de que alguien saliera herido o muerto en el intento. A este respecto, el artículo 42 del Código Penal es enfático al establecer:

> "Artículo 42. Los partícipes serán responsables desde el momento en que se inició la realización del hecho punible, según lo establecido en el artículo 18. **Si el hecho fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquél quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida.**" (La negrita es nuestra).

Solo hace falta un poco de sentido común para comprender que resulta evidente que el recurrente, al igual que el resto de los imputados, aceptaban la muerte de la víctima o de uno de ellos como una consecuencia probable de intentar un robo a mano armada. Por tanto, el riesgo naciente del delito va encaminado a

compartir responsabilidades en su totalidad en los autores y partícipes del hecho.

De la norma citada se colige que todos y cada uno de los imputados son responsables por los tres delitos a ellos atribuidos, pues aceptaron como probables las consecuencias que su asociación ilícita para robar pudiera traer, en este caso el lamentable homicidio de JAÉN MÁRQUEZ.

Estima esta Sala, que respecto a **OSCAR ANTONIO CARRASCO MALDONADO**, se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial para que los imputados en un hecho delictivo puedan ser llamados a responder en juicio. Esto es, plena prueba de la existencia del hecho punible que se desprende tanto de los testimonios de los sindicados en su propósito de delinquir y del certificado de defunción de **JAÉN MÁRQUEZ**; o graves indicios contra alguno, los cuales ya hemos analizado en el caso de **CARRASCO MALDONADO.**

Por todo lo anterior, consideramos que lo procedente es confirmar el auto recurrido, a fin de que en el plenario se estableciera claramente su grado de participación en los hechos punibles que se le atribuyen.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto de cinco (5) de agosto de 1993 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual se abre causa criminal contra OSCAR ANTONIO MALDONADO CARRASCO, JUAN PATRICIO DENA KEE, FRANCISCO CUEVAS VALDÉS (A) TOÑIN y ERBIN ALBERTO HUNT (A) TITO por los delitos de Tentativa de Robo, Asociación Ilícita, y Homicidio genérico en perjuicio de MARCELINO JAÉN MÁRQUEZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO PROFERIDO EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 1995 POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR SUMARIAS SEGUIDAS A JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS (A) RATÓN RIVAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GILBERTO CUETO DE GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias seguidas a **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS (A) RATÓN RIVAS** por el delito de homicidio en perjuicio de GILBERTO CUETO DE GRACIA, hecho ocurrido el día 24 de diciembre de 1990 en la Cárcel Modelo de esta ciudad.

Se trata de la apelación interpuesta por el Licenciado **DANILO MONTENEGRO**, defensor de **RIVAS VALDÉS**, único sindicado contra el cual se dictó llamamiento a juicio mediante auto encausatorio proferido por el Segundo Tribunal Superior fechado el treinta (30) de junio de 1995.

Con relación a la muerte violenta de GILBERTO CUETO DE GRACIA (A) MEDE CUETO, se involucró inicialmente a los siguientes reclusos de la Cárcel Modelo: **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS** (A) RATÓN RIVAS, ALBERTO AMAYA MORENO (A) BETITO AMAYA (Q. E. P. D.), MARTÍN ALBERTO MARISCAL (Q. E. P. D.), GERMÁN ARGUMEDES SALAZAR, RAÚL SINCLAIR GORDÓN (A) PINKI, y AURELIO ROMAÑA. También resultaron involucrados en este hecho de sangre, algunos oficiales de la Policía Nacional que laboraban en la Cárcel el día de marras, ellos son, el Sargento **NATIVIDAD SÁNCHEZ PINTO** y el Cabo **CECILIO GONZÁLEZ OBANDO.**

Antes de pasar al estudio de los hechos que trajeron como consecuencia la muerte de CUETO DE GRACIA, es necesario aclarar la situación jurídica de los imputados en este proceso.

El Segundo Tribunal Superior ordenó mediante Auto de dieciocho (18) de noviembre de 1992, el Sobreseimiento Provisional de RAÚL SINCLAIR GORDÓN, GERMÁN ARGUMEDES SALAZAR, AURELIO ROMAÑA y MOCHO HENRY, además ordenó el llamamiento a juicio de **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS**. Dicho Auto fue apelado por la defensa de **RIVAS VALDÉS** y revocado en todas sus partes por esta Sala Penal, mediante Auto de catorce (14) de abril de 1994, que ordenó la ampliación del sumario. No obstante, mediante el Auto de 30 de junio de 1995, (objeto de la apelación que nos ocupa) el Segundo Tribunal Superior llama a juicio a RIVAS VALDÉS y además dicta sobreseimiento provisional a favor de RAÚL SINCLAIR GORDÓN, GERMÁN ARGUMEDES SALAZAR y NATIVIDAD SÁNCHEZ PINTO, sin pronunciarse respecto a los sindicados AURELIO ROMAÑA y MOCHO HENRY. En dicho Auto se declara extinguida la acción penal solo respecto a MARTÍN MARISCAL URRIOLA (Q. E. P. D.) sin hacer mención del también difunto ALBERTO AMAYA MORENO (Q. E. P. D.) respecto del cual se ha extinguido igualmente la acción penal. Por lo tanto, consideramos necesario reiterar en este Auto la decisión de sobreseer provisionalmente a los mencionados sindicados y declarar extinguida la acción penal respecto a AMAYA MORENO y MARISCAL URRIOLA, a fin de darle estabilidad a su situación jurídica.

En razón de lo anterior, solo quedaría pendiente de decisión, la situación jurídica de **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS**.

El escrito de apelación del Auto de proceder que nos ocupa, presentado por el licenciado **DANILO MONTENEGRO**, que obra de fojas 481 a 485, básicamente solicita el sobreseimiento de su defendido fundamentado, entre otras cosas, en que la reconstrucción de los hechos evidenció la imposibilidad del testigo **CASTILLO VECES** de ver desde el patio lo que ocurría en la celda N° 5 de la segunda galería, además de que ni éste ni los otros dos testigos principales del proceso -JIMÉNEZ CUNNINGANM y MERRY WORRELL-, participaron en dicha diligencia judicial. También, indica el defensor de **RIVAS VALDÉS** que, existe contradicción entre la hora indicada por JIMÉNEZ CUNNINGANM y CASTILLO VECES, en la que supuestamente ocurrió el homicidio. Alega MONTENEGRO, que los tres testigos aludidos poseen reconocida trayectoria criminal y que, por tanto, sus testimonios son dudosos. Hace también alusión el defensor a la nota manuscrita redactada por CASTILLO VECES, en la cual niega todo lo que había declarado a fojas 25 y 26, afirmando que fue obligado por custodios de la Cárcel Modelo a firmar dicha declaración. Sobre esta nota en particular nos referiremos al decidir la apelación del auto que resolvió el incidente planteado por la defensa de **RIVAS VALDÉS**, con el fin de que ésta y otras dos pruebas fueran anexadas al proceso, a lo cual se negó la Fiscalía. Por último, solicita la defensa técnica del imputado, la aplicación del principio IN DUBIO PRO REO en el presente negocio penal, y en tal sentido cita al reconocido autor José María Martínez Val.

Por su parte, el señor Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, señaló en su contestación del traslado de la apelación, que ha quedado debidamente establecida la existencia del hecho punible, al igual que la responsabilidad de **RIVAS VALDÉS**, contra quien pasan los señalamientos de CASTILLO VECES, quien escuchó al imputado cuando afirmó haber pagado al Sargento para que llevaran al hoy occiso a la segunda galería (fs. 25 y 26), lugar donde le dieron muerte. Además, remite el señor Fiscal las dos Vistas anteriores, la N° 86 del 24 de junio de 1992 y la N° 177 del 31 de octubre de 1994, en las cuales se "establecen claramente los parámetros donde se responsabiliza al encartado como presunto autor material del hecho de sangre". Termina, el señor Fiscal, solicitando la confirmación del Auto impugnado, por considerar que se encuentra demostrada la comprobación plena del delito, al igual que la vinculación del sindicado **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS**.

Observamos en el sumario, que consta de 494 fojas útiles, las diferentes declaraciones e indagatorias rendidas en el presente caso, entre las cuales figura la de AURELIO ANTONIO MERRY WORRELL, quien narra lo ocurrido en los siguientes términos:

"Señor Fiscal, ese día yo me encontraba en una de las puertas de acceso a la preventiva, estando yo en la puerta un Cabo me dijo que iba a subir siete detenidos para la galería, yo bajé con el Cabo para la preventiva a buscar a los detenidos estando yo en la preventiva el Cabo señaló a MEDE CUETO dos veces que iba para la Galería, en el transcurso de la preventiva a la galería (sic) MEDE CUETO me pidió dos cigarrillos y yo se lo di, en el momento que llegamos a la Galería 2, en el momento en que MEDE CUETO entraba a la Galería (sic) otro detenido que se encontraba en ella lo agarró por la camisa y lo empujo (sic) para una de las celdas, dicho detenido (sic) le dicen RATÓN RIVAS y en eso oí un silbato que hicieron los detenidos y todos los detenidos en su mayoría corrieron para donde estaba el problema y yo bajé corriendo para mi puesto en la puerta de acceso a la preventiva". (Fs. 23 y 24).

Como podemos ver, MERRY WORRELL involucra directa y claramente a **RIVAS VALDÉS** en la comisión del homicidio; por su parte, ROBERTO JIMÉNEZ CUNINGANM, testigo de referencia, hace igualmente graves señalamientos contra el sindicado **RIVAS VALDÉS** y contra otros reclusos:

"Al cabo de aproximadamente treinta (30) minutos un Sargento segundo que es obeso, trabaja en la corregiduría, de color claro, cabello laceo y le apodan CHICHOMAN, trabajó en la Cárcel El Renacer; le dijo a GILBERTO CUETO DE GRACIA (a) MEDE CUETO, que saliera de la Corregiduría y se fuera a la segunda galeria (sic); al ver MEDE CUETO, la reacción de este sargento le manifestó que porque lo mandaba a la segunda Galeria (sic), si él tenía conocimiento de que se encontraba en la 80 por seguridad, ya que todos saben de que lo estaban esperando para matarlo, pero el sargento con la vara policial lo obligó a que subiera a la segunda galeria (sic) manifestándole que enfrentara su problema dándole la cara, a todo esto insistió en no subir MEDE CUETO, pero al ver la insistencia del Sargento CHICHOMAN, de que subiera, inició el acenso (sic) escuchando sus últimas palabras que fueron "DIOS MÍO, A TI ENCOMIENDO MI ALMA"; al llegar a la parte superior de la tercera galería bajaron JOSÉ LUIS RIVAS (A) RATÓN RIVAS; BETITO AMALLA; DIOMEDES PALACIOS ARGUMEDES y MARTÍN ALBERTO MARISCAL, quienes lo agarraron por los brasos (sic) y luego de que DIOMEDES PALACIOS ARGUMEDES, amenazara al custodio de la segunda galería manifestándole que la abriera o tomaba con el puñal que tenía en las manos y que se retirara de inmediato, así lo hizo el custodio y se fue luego de que ellos entraron cerrando la puerta; ya dentro de la galeria (sic) entre todos los que ya he mencionado metiron (sic) a MDE CUETO (sic), a la celda N° 5 y luego lo sacaron envuelto en una sábana color gris con rayas rojas para tirarlo en el baño de la galería. ..." (Fs. 38 y 39).

No obstante lo transcrito anteriormente, reiteramos que JIMÉNEZ CUNINGANM es solo un testigo de referencia y por tanto consideramos necesario prestar mayor atención a otros testimonios, como el de RIGOBERTO CASTILLO VECES, quien a fojas 25 y 26 rindió declaración juramentada cuatro días después del homicidio, ante el despacho de la Fiscalía Auxiliar de la República, en los siguientes términos:

"Señor Fiscal, me encontraba yo, cómo (sic) a las dos (2:00) de la tarde tomando sol en una silla del patio de la Cárcel Modelo, y en mi espalda **escuché cuando el detenido de apodo RATÓN RIVAS le decía a otros detenidos, ya le pagué al Sargento para que lo suba a la segunda GALERÍA, y vamos a darle muerte**, fue a eso de dos y quince (2:15) minutos de la tarde de ese día 24 de diciembre, cuando me percaté de que la ventanas habían quedado vacías y me vi que iba subiendo un grupo de detenidos corriendo, dándome cuenta que había metido al hoy, muerto MEDE, **vi cuando RATÓN RIVAS, le daba la primera apuñalada a MEDE**, cayendo MEDE al suelo, tirándole una (1) sábana en cima (sic) del cuerpo de MEDE, empezó RATÓN RIVAS, a darle de puñaladas, RATÓN RIVAS se hagachó limpio o degolló, dando la

> espalda hizo una mueca, los demás (sic) que estaba (sic) con él, empezaron a darle a MEDE." (Lo resaltado es nuestro).

Respecto a esta última declaración, es necesario hacer referencia al hecho de que ni CASTILLO VECES ni MERRY WORREL participaron en la Diligencia de Reconstrucción e Inspección Ocular, realizada en la Cárcel Modelo, el día 7 de septiembre de 1994, donde se trató de determinar la ubicación exacta de los lugares relacionados con el homicidio de CUETO DE GRACIA.

ISABEL CUETO DE MENA, hermana del interfecto, declaró a foja 83 del sumario, que su hermano le había dado ciertos nombres de personas a las cuales responsabilizaba si algo le llegaba a ocurrir:

> "Señor Fiscal, son AURELIO ROMAÑA, PINKI RAÚL SINCLAIR, el **RATÓN RIVAS**, el MOCHO HENRY. Esas son las personas que mi hermano me dijo que eran los responsables si a él le sucedía algo, además existen comentarios de que ellos mataron a mi hermano." (Lo resaltado es nuestro).

De los sujetos indicados por CUETO DE MENA, sólo **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS**, fue señalado directamente en el lugar de los hechos, pues existen testigos que así lo confirman; mientras que a ROMAÑA, SINCLAIR y MOCHO HENRY los señala la declarante, pero no estaban en el lugar el día indicado ni son mencionados por los testigos presenciales.

En su declaración indagatoria, **RIVAS VALDÉS** desmiente los testimonios en su contra y manifiesta que no tuvo participación en el hecho investigado; que se encontraba con los cristianos celebrando un culto y el cumpleaños de su hermano VÍCTOR MANUEL RIVAS en el comedor; que al salir de éste se enteró que había un tipo muerto en la galería; que el hermano Gudiño era quien daba el culto; que conocía a CUETO DE GRACIA desde niño y nunca tuvieron problemas; que se encontraba detenido para esa fecha en la celda 15 de la tercera galería y que no sabe si en ella se encontraban RAÚL SINCLAIR GORDÓN, ALBERTO AMAYA MORENO, MARTÍN ALBERTO MARISCAL URRIOLA, GERMÁN ARGUMEDES SALAZAR y AURELIO ROMAÑA. En este sentido, a fojas 189 a 194 del sumario constan dos cartas, una fechada 7 de enero de 1991 y otra del 4 de junio del mismo año, en las cuales se lee una larga lista de firmas de reclusos de la Cárcel que aseguran que **RIVAS VALDÉS** se encontraba en el mencionado culto el día de marras. Como quiera que a foja 40 de la encuesta penal, ROBERTO JIMÉNEZ CUNINGANM manifiesta que, **RIVAS VALDÉS** y sus "compinches" iniciaron una recolección de firmas para asegurar que éste no se encontraba en la galería al momento de la muerte de CUETO DE GRACIA y que amenazaban de muerte o golpeaban salvajemente a quienes se negaban a firmar, considera esta Sala que debido a este señalamiento de JIMÉNEZ CUNINGANM, las referidas cartas poseen un carácter sospechoso, sobretodo la frase que se lee a foja 192, línea 7ª, que dice: "... más aún ese día **mi hermano**, VÍCTOR M. RIVAS estaba de cumpleaños ...". Lo anterior nos revela que fue el propio sindicado quien redactó la carta y recogió las firmas que obran en el sumario, pues, mientras que toda la redacción parece indicar que son los propios detenidos de la Cárcel quienes voluntaria y solidariamente apoyan a **RIVAS VALDÉS**, se denota en la aludida frase que fue él quien elaboró dicho documento.

En declaración indagatoria, el Sargento NATIVIDAD SÁNCHEZ PINTO, explica el procedimiento de control y clasificación de los detenidos; aclara que el día del homicidio de CUETO, él entró a las ocho (8:00 a. m.) de la mañana y que no tenía conocimiento de que CUETO hubiese estado todo el fin de semana en la celda 80 por su seguridad; que es falso lo declarado por JIMÉNEZ CUNINGANM en el sentido de que fue él -Sánchez-, quien condujo a CUETO a la galería segunda; que fue el Cabo CECILIO GONZÁLEZ quien los llevó hasta la entrada, pero que de allí en adelante CUETO se fue solo a la galería a la cual había sido asignado. No obstante, contra SÁNCHEZ PINTO pesan los señalamientos de varios testigos, además de JIMÉNEZ CUNINGANM, entre ellos RIGOBERTO CASTILLO VECES, cuyas declaraciones ya vimos, y las de ALICIA E. JULIO BONILLA (f. 84), que lo identifican como el Sargento que recibió el pago por trasladar a MEDE CUETO a la segunda galería.

Por su parte, el Cabo CECILIO GONZÁLEZ OBANDO, declaró que laboraba en la

oficina de Centro de Clasificación de Internos y que le tocó junto al Sargento SÁNCHEZ PINTO, clasificar al interfecto CUETO DE GRACIA, al cual le correspondía la segunda galería; que el hoy occiso se dirigió solo a la galería segunda, pues ya conocía el penal y que era usual que los detenidos se dirigieran por sus propios medios a la galería asignada; por último asegura no haber subido a MEDE CUETO a la segunda galería.

VÍCTOR ZÚÑIGA PÉREZ, Sub-Teniente de la Fuerza Pública declaró ser el encargado de la oficina de control de detenidos y haber estado presente cuando MEDE CUETO llegó con las unidades de la Policía Técnica Judicial; que llamó al licenciado MERARDO CASTRELLÓN, quien le indicó que le preguntara a MEDE CUETO si tenía enemigos en la Cárcel, que así lo hizo y que MEDE CUETO le contestó que no, por lo cual el licenciado CASTRELLÓN le ordenó proceder normal como con todos los detenidos y lo asignó a la preventiva. No obstante, ZÚÑIGA PÉREZ incurre en ciertas contradicciones, cuando a foja 146 dice:

> "Señor Fiscal, cuando él llegó lo puse de inmediato a la celda 80 **porque éste tenía una fama muy conocida** y luego cuando hablé con el Director MERARDO CASTRELLÓN lo pasé de inmediato a la preventiva de inmediato." (Lo resaltado es nuestro).

Quiere decir, que ZÚÑIGA PÉREZ reconoce saber que MEDE CUETO era de reconocida mala fama, sin embargo, aún sabiendo esto, necesitó llamar al Director -que no sabía nada de la fama de MEDE CUETO-, para preguntarle qué hacer con él. Llama la atención a la Corte el proceder de ZÚÑIGA PÉREZ, pues no tiene mucha lógica que si él mismo conocía la fama de CUETO, estando ya asignado por ello a una celda especial, procediera sin más ni más a cambiarlo a la preventiva, de la cual sabía que era seguro que lo asignarían a la segunda galería. Además, es muy extraño que el propio MEDE CUETO negara tener enemigos en la Cárcel Modelo, pues él sabía perfectamente que si caía en la segunda galería lo mataban. Su preocupación en este sentido, queda evidenciada en las declaraciones de NEREYDA VALDÉS MARTÍNEZ (A) BAUDI (fs. 87 y 88). ISABEL CUETO DE MENA (fs. 30-32; 81-83), ROBERTO JIMÉNEZ CUNINGANM (fs. 37-40), ALICIA E. JULIO BONILLA (fs. 27-29) e IVETTE MURRAY PHILLIPS (fs. 33 y 34).

Tenemos pues, que la comisión del hecho punible se encuentra comprobada con la diligencia de levantamiento de cadáver (fs. 5-6), el protocolo de necropsia (fs. 48-60) y el certificado de defunción de GILBERTO CUETO DE GRACIA (f. 73).

Por todo lo anterior, considera esta Sala, que se encuentran cumplidos los presupuestos del artículo 2222 del Código Judicial, que establece los requisitos para que los imputados de algún delito puedan ser llamados a juicio. Esto es, plena prueba de la existencia del hecho punible o graves indicios contra alguno. De modo pues que, comprobado el homicidio de CUETO DE GRACIA, existen graves indicios que vinculan al imputado **JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS** con este ilícito, por lo cual se hace necesario que concurran al plenario a fin de que en éste se determine si le cabe responsabilidad en este hecho de sangre.

En relación con el Sargento NATIVIDAD SÁNCHEZ PINTO, el Cabo CECILIO GONZÁLEZ OBANDO y el Sub-Teniente VÍCTOR ZÚÑIGA, somos de la opinión de que no existen suficientes indicios que los vinculen con el hecho punible de modo tal que se les debiera llamar a juicio para responder por este homicidio, pero sí estimamos necesario que se investigue más a fondo la conducta que los tres observaron en el proceso que nos ocupa, a fin de determinar si incurrieron en algún delito con sus actos.

Igualmente está pendiente de decisión en esta misma Sala, la apelación del Auto que resolvió un incidente de controversia interpuesto por el defensor de oficio del sindicado, licenciado **DANILO MONTENEGRO**, con el fin de que se ordenase a la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial la recepción de ciertas pruebas aducidas por la defensa en favor de **RIVAS VALDÉS**, cuya admisión fue negada por la Fiscalía mediante providencia fechada 7 de julio de 1994. Dicho incidente fue presentado inicialmente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual, luego de correr el respectivo traslado al Fiscal Cuarto Superior, confirmó la decisión del Fiscal de no recibir las pruebas en cuestión.

Esta decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia fue apelada por la defensa técnica de **RIVAS VALDÉS**, razón por la cual se encuentra dicha apelación en esta Sala.

Por tratarse de dos recursos de apelación promovidos dentro de un mismo negocio, se hace necesario resolverlo en un solo Auto.

El incidente trata de tres pruebas aducidas por la defensa de **RIVAS VALDÉS**, nos referimos a cada una de dichas pruebas por separado.

Primeramente, un manuscrito supuestamente redactado por RIGOBERTO CASTILLO VECES, en el cual se retracta de lo dicho en declaración rendida ante la Fiscalía Auxiliar de la República el día 28 de diciembre de 1990 a la una y media (1:30 p. m.) de la tarde. El mencionado manuscrito fue presentado ante el Notario Público Duodécimo, licenciado ADÁN HERNÁNDEZ CHEN, el día 30 de marzo de 1993, y en el mismo señala CASTILLO VECES, en su punto primero, que fue "salvajemente golpeado y torturado por lo custodia de dicha cárcel para obligarme a firmar una declaración en contra de Ratón Rivas." Sobre este primer punto vale la pena destacar que, la declaración juramentada de CASTILLO VECES, fue rendida ante la Fiscalía Auxiliar de la República y no ante ningún custodio de la Cárcel Modelo, por lo cual no es posible que este señor haya sido torturado u obligado a firmar ninguna declaración contra su voluntad. Además, en su propia declaración CASTILLO VECES reconoce que su vida está en peligro por dicha declaración y solicita "que usted me de seguridad o libertad, ya que solo me faltan cincuenta día, para terminar mi pena ..." (F. 26). En su punto dos, dice CASTILLO VECES que no vio ni escuchó nada de lo ocurrido en el homicidio de MEDE CUETO y que se le obligó a firmar la aludida declaración y que no se le permitió leer lo que firmó y, por tanto, su declaración es totalmente falsa. En el punto tres, nos dice el manuscrito en comento que, CASTILLO VECES tiene en su cuerpo señales visibles de los golpes recibidos por parte de los policías de la Cárcel Modelo para obligarlo a declarar contra RIVAS y que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía; y, en el último punto, dice el firmante que, no es posible que él haya visto desde el patio del penal cómo mataban a una persona en otro piso y que para ello hubiera necesitado un largavista.

La otra prueba que solicitó el defensor de **RIVAS**, fue que se tomara declaración a VÍCTOR MANUEL RIVAS, quien es hermano del encartado y además pastor cristiano en la Cárcel Modelo; y a GUMERCINDO SOTO, quien atestiguaría sobre la presencia de RIVAS VALDÉS en el culto que se celebraba el día del homicidio en el comedor de la cárcel.

Como ya hemos dicho, las pruebas solicitadas por la defensa de **RIVAS VALDÉS** fueron inadmitidas por la Fiscalía, en los siguientes términos:

> "... consideramos completamente irregular la presentación de la retractación contenida en el documento, por el hecho de haberse dado ante el Despacho de Notario Público, funcionario que tiene el mismo horario de labores que esta Fiscalía Superior y que los Tribunales de Justicia, los cuales, por demás, están localizados en la misma ciudad de Panamá, por lo que no existe ningún obstáculo para que el señor RIGOBERTO CASTILLO VECES no compareciera directamente a este Despacho a rendir una ampliación de su declaración jurada ...". (Fs. 5 y 6 del cuadernillo de incidente).
>
> "... que con respecto a RIGOBERTO CASTILLO VECES desde antes de la emisión de nuestra primera Vista Fiscal ya se contaba con su declaración jurada y nunca, desde el mes de abril de 1991, compareció ni se hizo escuchar en el sentido que hoy pretende hacerlo por intermedio del escrito de prueba presentado por el Licenciado Danilo Montenegro. En lo que respecta a los señores VÍCTOR MANUEL RIVAS y GUMERCINDO SOTO, no solo se encuentran incluidos entre los llamados testigos sospechosos, sino que se agrava tal situación al ver que se trata de imponer estos dos nombres de una lista que supera las cien personas, todos reclusos de la Cárcel Modelo al momento de darse el incidente investigado." (Fs.

7 y 8 del cuadernillo de incidente).

Al promover el incidente de controversia, el licenciado **MONTENEGRO**, solicitó al Segundo Tribunal Superior de Justicia que ordenase al Fiscal la recepción de las citadas pruebas, alegando para ello la aplicación de los artículos 2038, 2123 y 2122 del Código Judicial. Adujo, también, que VÍCTOR MANUEL RIVAS no es testigo inhábil por ser hermano del imputado y citó un fallo de esta Corte de 18 de diciembre de 1991. Además, que es obligación del Ministerio Público recavar todos los testimonios que sean necesarios para aclarar los hechos investigados y que los aludidos testimonios de VÍCTOR MANUEL RIVAS y de GUMERCINDO SOTO no son inconducentes ni improcedentes como alega el Fiscal. También, explicó que lo declarado por RIGOBERTO CASTILLO VECES en el manuscrito en cuestión fue necesario notariarlo, debido a que se hacía imposible que éste rindiera ampliación ante la Fiscalía puesto que en esa fecha -30 de marzo de 1993-, el expediente se encontraba en la Sala Penal de la Corte Suprema para resolver la apelación del auto de enjuiciamiento.

Por su parte, el Fiscal señaló, en su contestación del traslado del incidente que, al ordenar la Corte la ampliación del sumario, indicó que el Ministerio Público podía hacer alguna gestión adicional a las señaladas a fin de lograr el perfeccionamiento del sumario, pero solo las que esta agencia de instrucción estimare convenientes; que no hay constancias de que realmente VÍCTOR MANUEL RIVAS sea pastor y que obviamente al preguntársele el paradero de su hermano el día del homicidio, declararía a su favor, lo cual lo convierte en testigo sospechoso; que después de tres años y medio es que viene a solicitarse se reciba declaración a GUMERCINDO SOTO, quien aparece firmando en una carta en la que se afirma que RIVAS VALDÉS se encontraba en el culto religioso a la hora del homicidio, carta ésta de la cual ya un testigo manifestó que había sido firmada por varios presos bajo coacción de parte de RIVAS VALDÉS y sus "compinches"; que RIGOBERTO CASTILLO VECES pudo haberse presentado a declarar directamente ante la agencia del Ministerio Público y no ante Notario, además de que la carta está fechada 30 de marzo de 1993 y el defensor no la presenta sino hasta un año y dos meses después; que lo declarado inicialmente por CASTILLO VECES coincide perfectamente con lo declarado por otros dos testigos y que los hechos indubitables que ellos narran que esa primera declaración sea considerada como cierta; que el Ministerio Público solo deberá aceptar y practicar las pruebas aducidas por el imputado o su defensor siempre que estas sean conducentes y que las que se solicitan en este caso, resultan inconducentes.

El Segundo Tribunal Superior negó, mediante Auto de 14 de septiembre de 1994, la revocatoria de la Providencia de 7 de julio de 1994, que rechazó la admisión de las pruebas, basándose en las siguientes consideraciones. Que resulta un contrasentido que después de dos años, tres meses y dos días, RIGOBERTO CASTILLO VECES, "alegremente pretenda desvirtuar el contenido de dicha atestación, arguyendo razones baladíes, valiéndose de un documento que ni siquiera se pidió su afirmación y ratificación ante el Fiscal de grado"; que no se encuentra establecido en el sumario la condición de pastor de VÍCTOR MANUEL RIVAS, ni en qué calidad se encontraba en la Cárcel Modelo para la fecha de autos; que existen testimonios de que la carta en la cual aparece como firmante GUMERCINDO SOTO, dichas firmas fueron recavadas bajo presión. Por último, el Segundo Tribunal cita a JUAN JOSÉ GONZÁLEZ BUSTAMANTE, quien en su obra "principios de Derecho Procesal Mexicano", indica que se debe saber quien es el testigo para dar crédito a lo que afirma, pues frecuentemente sus afirmaciones son producto de errores, equívocos o autosugestiones o personas sin escrúpulos que mienten a la justicia con algún propósito.

Ingresó así, a esta Sala la apelación del auto que resolvió el incidente de controversia. En su escrito de apelación del auto que deniega el incidente de controversia, visible a fojas 36 a 38 del cuadernillo de incidente, el licenciado **DANILO MONTENEGRO** solicita que se revoque el auto dictado por el Segundo Tribunal Superior y que "se ordene al Fiscal Cuarto Superior la reaceptación de las pruebas documentales y testimoniales aducidas por la defensa". Basa su solicitud fundamentalmente en reiterar los conceptos emitidos en el escrito de incidente presentado ante el Segundo Tribunal Superior; estos conceptos son, entre otros, que la declaración de CASTILLO VECES no se rindió ante la Fiscalía porque el

expediente se encontraba en grado de apelación del auto encausatorio ante la Sala Penal de la Corte; que CASTILLO VECES indica en el propio manuscrito que está dispuesto a ratificar lo escrito en ese documento ante el señor Fiscal; que el testimonio de VÍCTOR MANUEL RIVAS debe recibirse, pues no se trata de testigo inhábil; que es obligación del funcionario de instrucción constatar la veracidad, confiabilidad y exactitud de los testimonios mediante diligencias como la reconstrucción de los hechos; que si el funcionario tiene dudas sobre la presencia de VÍCTOR MANUEL RIVAS en la cárcel el día de los hechos, debió investigar, pues esa es su obligación; que el Fiscal no puede dejar de ser objetivo e imparcial en la etapa sumarial y que, a su parecer, está prejuiciado en el presente caso. Por otro lado, el señor Fiscal, en contestación del traslado de la apelación, manifestó entre otras cosas, que reitera los conceptos emitidos en la contestación visible a fojas 14 del cuadernillo de incidente; que si bien la actividad probatoria de las partes a la luz de los artículos 2058, 2071 y 2122 del Código Judicial, es amplia, la misma está supeditada a la conducencia y pertinencia de las pruebas, que las mismas deben ser idóneas para acreditar los puntos que desean establecerse y que no contengan un carácter dilatorio que retrase el proceso; que la prerrogativa de las partes de aportar pruebas favorables al proceso no es absoluta, sino que debe cumplir con los requisitos que la Ley impone.

Compartimos la opinión de la Fiscalía y del Segundo Tribunal, en el sentido de que resulta sospechoso el manuscrito firmado por RIGOBERTO CASTILLO VECES, quien después de que rindió su declaración jurada el 28 de diciembre de 1990, nunca más regresó para ampliar sus declaraciones ante el Fiscal. Además, concurre ante un Notario el 30 de marzo de 1993, fecha en que resultaba imposible recibir prueba alguna en el expediente, tal como lo manifiesta el defensor, pues el mismo se encontraba en grado de apelación del auto encausatorio.

Si CASTILLO VECES tenía realmente el ánimo de cambiar sus declaraciones, pudo haberlo hecho concurriendo en la fecha en que la defensa de **RIVAS** presentó el escrito de pruebas, cuando ya se encontraba el proceso en la etapa de ampliación, es decir el 14 de junio de 1994.

Sobre este mismo tema, vale la pena citar a EUGENIO FLORIÁN, quien en su obra "De las pruebas penales", tomo II, páginas 75 y 76 afirma:

> **"Las primeras declaraciones de los testigos que se recogen en el procedimiento escrito deben tenerse como las más verídicas**, porque no hay tiempo de engañarlos o apartarlos de su deber mientras en la discusión pública los testigos pueden, si están comprados o se les ha inducido a apartarse de su deber, retractarse impunemente de las declaraciones escritas en el expediente". (Lo resaltado es nuestro).

Con relación a los testimonios de VÍCTOR MANUEL RIVAS y GUMERCINDO SOTO, igualmente consideramos que por ser el primero hermano del sindicado, resulta lógico pensar que su declaración obviamente va a ir encaminada a protegerlo, lo cual no lo hace testigo inhábil, sino que al momento en que se solicitó su declaración, no se iba a producir sino una tardanza en la ampliación del sumario. En cuanto a SOTO, si tenía conocimiento de la inocencia de **RIVAS VALDÉS**, debió presentarse a declarar en la primera etapa de investigación, lo que sabía, no esperar tanto tiempo -más de tres años-, para narrar el hecho, cuando su memoria ya no está tan fresca; además, compartimos con la Fiscalía que la defensa solo solicita esa declaración cuando en la mencionada carta aparecen firmando muchos más detenidos.

Con base en todo lo hasta aquí analizado, estimamos que se hace necesario confirmar la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia emitida para resolver incidente de controversia, mediante Auto de 14 de septiembre de 1994, en el cual se niega la revocatoria de la Providencia fechada siete (7) de julio de 1994, emitida por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la que rechaza la admisión de unas pruebas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONA el Auto del Segundo Tribunal Superior de Justicia fechado 30 de junio de 1995, y en consecuencia, DECLARA extinguida la acción penal respecto a ALBERTO AMAYA MORENO, y SOBRESEE PROVISIONALMENTE a favor de AURELIO ROMAÑA y RODOLFO HENRY WORRELL (A) MOCHO HENRY.

SEGUNDO: CONFIRMA en todo lo demás dicho Auto.

TERCERO: CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 14 de septiembre de 1994, dictado por el Segundo Tribunal Superior que resuelve incidente de controversia propuesto contra el Fiscal Cuarto Superior para que se le ordenase la admisión de unas pruebas en el mismo negocio penal que por homicidio de GILBERTO CUETO DE GRACIA se le sigue a JOSÉ LUIS RIVAS VALDÉS (A) RATÓN RIVAS.

CUARTO: COMPULSAR las copias respectivas al Ministerio Público a fin de que se investigue la conducta del Sargento NATIVIDAD SÁNCHEZ PINTO (a) CHICHOMAN, el Cabo CECILIO GONZÁLEZ OBANDO y el Sub-Teniente VÍCTOR ZÚÑIGA PÉREZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DEL AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SE LE SIGUE A ROGER MARTÍN CARLES MATOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 26 de julio de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia abrió causa criminal por la vía en que interviene el Jurado de Conciencia contra **ROGER MARTÍN CARLES MATOS**, como supuesto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título II del Código Penal, en relación a aquellas contenidas en el Capítulo VI, Título II, Libro I de la misma excerta legal, o sea, por el delito genérico de Tentativa de Homicidio (fs. 415-425).

Al momento de notificarse de esa resolución el procesado, como su abogado defensor, licenciado César Broce (f. 425 vt), apelaron y sustentaron su disconformidad con la calificación del sumario.

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

El licenciado Broce, dentro del término de ley, presentó escrito de sustentación del recurso anunciado, en el cual solicita se revoque el auto impugnado.

Censura el auto recurrido por dos motivos:

a) Por error en la calificación delictual del cargo imputado producto del desconocimiento de la existencia de una excusa absolutoria personal (Wessels).

Señala, que existe contradicción en cuanto al dicho de los testigos. Así, Orlando Oscar Samaniego Rodríguez contradice notablemente a Franklin Luis Rincón Delgado; Omar Enrique Villalaz Montenegro (a) Torero contradice a Franklin Luis Rincón. Todo lo cual permite colegir que fue Roger Martín Carles Matos quien abandonó espontáneamente la eventual resolución de ejecución ulterior del hecho presuntamente propuesto.

Señala el apelante, que su defendido tenía a su alcance un medio idóneo para producir el presunto resultado, como lo es, una pistola calibre 25 de funcionamiento semi-automático, con el cargador aun provisto de seis proyectiles vivos y tuvo toda la oportunidad para ello, sin que nadie lo hubiera impedido. Y pese a su estado físico supo discernir y desistir de la consecución del presunto resultado delictual que se le imputa.

Acota que el artículo 45 del Código Penal, establece que en los casos que la persona desista voluntariamente de la ejecución del delito, sólo incurrirá en pena cuando los actos ya realizados constituyen de por sí otro u otros hechos punibles.

Siendo así, la existencia y reconocimiento de esta acción personal y voluntaria, produce un desplazamiento de la presunta conducta típica atribuida a Carles Matos, que deja sin competencia al Tribunal Superior.

b) La evidente contradicción en la prueba testimonial recaudada, que induce igualmente a error en la calificación delictual y conlleva a falta de credibilidad y seriedad.

Manifiesta que los testigos presenciales, Franklin Luis Rincón Delgado, Carlos Javier Fernández, Orlando Oscar Samaniego, Jerónimo Sibauste y Omar Enrique Villalaz Montenegro e incluso la propia víctima proporcionan versiones disímiles de cómo ocurrieron los hechos.

Concluye que la presencia de bridas y adherencias en las heridas por arma de fuego, que consta en la historia clínica 21-1882 perteneciente a Fernández Rojas, sólo es posible en disparos realizados a muy corta distancia o a quemarropa, por lo que la versión suministrada por su defendido, bien pudiera ser veraz, colocando su eventual propósito delictivo en el delito de lesiones personales (fs. 437-446).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, el licenciado Dimas Ernesto Guevara, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, considera que no le asiste razón al recurrente, por lo que la tesis sostenida en el auto de enjuiciamiento es correcta.

Considera que todos los actos realizados por el procesado Carles Matos tenían la intención de causarle la muerte al ofendido Fernández Rojas, pues las lesiones que le propinó eran suficientes para traer como resultado su deceso. Además, que el hecho que Carles Matos tuviera el arma en su poder, luego de realizar los disparos, no indica que hubo desistimiento por su parte de causar la muerte de la víctima. Advierte que las causas que le impidieron a Carles Matos seguir disparando se debe a que las personas que procedieron a auxiliar al lesionado -que se había desplomado- permitieron dejarlo fuera de su alcance o a la vista de su agresor (fs. 448-452).

ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala observa que el fundamento que tuvo el tribunal a-quo para encausar a Roger Martín Carles Matos por el delito genérico de Tentativa de Homicidio, lo fue el hecho que los disparos que le efectuó a Carlos Alberto Fernández Rojas, son demostrativos que en forma dolosa intentó quitarle la vida, dado que **"uno de ellos lo dirigió en una parte noble y del cuerpo a tal punto que su vida corrió innegable peligro, aunándose a ello que fue incapacitado por seis (6) semanas y el proyectil que recibió en la región hipocondríaca quedó alojado en la pelvis donde aún permanece"**.

Ahora bien, el propio imputado Carles Matos señala que al ver que su cuñado Jerónimo Sibauste era golpeado por Fernández Rojas, sacó su arma e hizo un disparó al aire como advertencia, al no lograr detenerlo de esa forma dirigió el arma hacia abajo para herirlo en la pierna (fs. 5-6 y 9-11).

No obstante, el señor Fernández Rojas afirma que Carles Matos lo hirió en la pierna derecha y cuando intentaba levantarse, le propinó otro disparo en el lado izquierdo del abdomen (fs. 20-23).

Lo anterior se comprueba con el examen médico legal practicado por el Dr. Aquiles H. Espino quien indica que Fernández Rojas recibió dos heridas por proyectil con arma de fuego una en el hipocondrio derecho del abdomen, la cual lesionó el intestino delgado y el colon y otra herida en la pierna derecha (entrada y salida). Afirma que la lesión sí puso en peligro la vida del lesionado (f. 19).

Por otra parte, Carles Matos al rendir declaración indagatoria, dos días después del incidente -el 30 de noviembre de 1992- en ningún momento manifiesta que el señor Fernández Rojas tuviera o intentara sacar arma de fuego y se limita a señalar que actuó de esa manera en defensa de su cuñado porque **"estas personas lo iban era a matar porque era entre varios que lo estaban agrediendo"** (f. 10).

Esta Sala ha manifestado que **"la tentativa, se presenta cuando el agente delictivo dolosamente realiza todos o parte de los actos de ejecución requeridos para la producción del resultado prohibido por la norma, es decir, para la consumación del delito, y ésta no se produce por causas ajenas o distintas a su voluntad, pudiendo provenir estas causas de la acción de la propia víctima, de terceros o de otra índole (p. eje. hechos de la naturaleza, caso fortuito etc.)"** (Resolución de agosto 26 de 1993).

En el caso bajo examen, una vez se tuvo oportunidad de quitarle el arma al imputado, se hizo. Así se desprende de la declaración de Orlando Oscar Samaniego Rodríguez, quien en calidad de agente de la Policía Técnica Judicial con ayuda de otras personas obligaron a Carles Matos a entregar el arma (fs. 53-55).

Por otra parte, para ubicar el actuar ilícito dentro del catálogo de hechos punibles que contempla nuestro código punitivo, se debe tomar en consideración además del aspecto subjetivo del imputado, las lesiones que le produjo al señor Fernández Rojas, cuya vida estuvo en peligro. La acción así realizada consume el delito de tentativa de homicidio.

Luego entonces, el auto impugnado merece la confirmación de esta superioridad.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A CARLOS ALBERTO MINA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE CONCEPCIÓN CUESTAS GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante auto calendado 24 de julio de 1995, abrió causa criminal contra Carlos Alberto Mina

(a) "Bufalón" como presunto infractor de "las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro Segundo, en relación con el Capítulo VI, Título II, Libro Primero, del Código Penal" (f. 169), es decir, por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Concepción Cuesta Guerra. Contra esta decisión jurisdiccional anunciaron recursos de apelación tanto el encausado como su defensor técnico, licenciado Raúl Antonio Almanza.

En la sustentación de la alzada sostiene el licenciado Almanza que su defendido "no participo en la consecución del hecho punible con la actitud dolosa que se le quiere atribuir, ya que el mismo actuó en defensa de su integridad y de sus intereses pecuniarios los cuales se encontraban amenazados por la actitud desafiante de la supuesta víctima" (f. 173). Este razonamiento lo sustenta con las deposiciones rendidas por Thayka Shennel Atencio, Karem Iveth García y Alberto Pineda Araujo (f. 174).

También argumenta el recurrente que no se tomó en cuenta el concepto vertido por el representante del Ministerio Público, quien "recomienda la declinatoria de competencia del Segundo Tribunal Superior para conocer de este supuesto hecho punible, puesto que el delito en mención tiene la configuración de otra figura delictiva denominada Lesión Personal de tipo grave y no un Homicidio Doloso en grado de Tentativa" (f. 174).

Conocidos los argumentos de la defensa técnica, la Sala pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Judicial.

El examen de las sumarias permite conocer que en horas de la noche del 18 de junio de 1993, en la barriada Monte Oscuro, Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, se suscitó una discusión entre el imputado Mina y Concepción Cuesta Guerra, con el resultado de que Mina le disparara a Cuesta Guerra con un arma de fuego y lo lesionara. El dictamen médico legal consigna que el cuerpo de la víctima presenta "Heridas por proyectiles de arma de fuego en escroto, pene y extremidades inferiores" (f. 45), lesiones que, según afirma el galeno forense, pusieron su vida en peligro. La incapacidad provisional del herido fue fijada en "CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS a partir del día del incidente" (f. 45).

Para llegar a la decisión que ahora se impugna, el tribunal a-quo sostuvo que "En el caso bajo examen concurren los presupuestos legales de la tentativa acabada, porque si bien el procesado justifica su conducta bajo la premisa que el sujeto activo intentó atacarlo en primer lugar, va contra el sentido común el hecho de haberle disparado 6 veces consecutivas" (fs. 168-169).

El primer reclamo formulado por el recurrente gira en torno a que se reconozca que su patrocinado no actuó dolosamente, sino "en defensa de su integridad y de sus intereses pecuniarios". La Sala considera necesario el examen de los elementos de convicción que constan en autos, con la finalidad de comprobar la procedencia de la causa de justificación que intenta hacer valer el recurrente. En tal empeño, se advierte que el imputado Mina, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, manifestó que el día de los hechos "yo venía de buscar la cuenta del bus de mi papá, entonces un amigo mio me pide una cerveza, y yo le digó (sic) que la plata que yo llevaba era ajena ... entonces salió el joven de nombre CUESTA y me dijó (sic)...`NO LE PIDA CERVEZA A ESE HIJO DE PUTA ... yo le dijé `QUE TU TIENES CONTRA MI y él CUESTA, me dijó (sic) `AHORA TU VAS A VER LO QUE YO TENGO CONTRA TI él quebró unas botellas dos para ser exacto, y comenzó a caminar hacia mi, con intención de apuñaliarme ... no tuve más recurso que de sacar mi arma y dispararle" (fs. 8-9).

Las testigos Thayka Shennel Atencio (fs. 16-17) y Karen Iveth García Mina (fs. 18-19) coinciden en señalar que Mina empleó su arma de fuego para defenderse de la amenaza de agresión física de que era objeto de parte de Cuesta Guerra.

Todo pareciera indicar que, efectivamente, Mina actuó "en defensa de su integridad"; sin embargo, la Corte observa que esos relatos están viciados por ciertas contradicciones. Así vemos que el sindicado indicó que Cuesta Guerra

quebró "unas botellas **dos para ser exacto** ... con intención de apuñaliarme" (f. 9), en tanto que Thayka Shennel Atencio sostuvo que "el muchacho **tenía una botella** en la mano" (f. 16). También se advierte que los argumentos externados por Karen Iveth García Mina (f. 19) y Thayka Shennel Atencio (f. 17), en el sentido de que el imputado efectuó tres disparos al aire de advertencia y luego abrió fuego contra el cuerpo de Cuesta Guerra, **resultan dudosos**, pues el arma que portaba el sindicado era "una escuadra calibre 22 ... de seis tiros" (f. 9) y el examen médico legal evidencia más de tres proyectiles impactados en la anatomía de la víctima, detallando: "-Cicatriz vertical de 4.0 cm en escroto. -Cicatriz quirúrgica lineal de 23.0 cms de longitud que se extiende desde región inguinal derecha hasta región anterior del tercio medio del muslo derecho. -Cicatriz quirúrgica lineal que mide 12 cm en región lateral interna del tercio superior de pierna derecha ... -Cicatriz irregular que mide 0.8 cm x 0.5 cm en región lateral interna de muslo izquierdo. -Cicatriz que mide 0.8 cm x 0.5 cm en región posterior de base de pene. -Cicatriz irregular que mide 1.0 cm x 0.8 cm entre 1er y 2° dedo de mano derecha" (f. 15).

De otra parte, consta en las sumarias el testimonio de Aníbal Alberto Pineda Araujo, testigo presencial del hecho, quien afirmó que Cuesta Guerra y Mina "comenzaron a discutir ... me metí a desapartarlos, y en cuando de repente (sic) escuche dos disparos y me tire al piso, disparos que impactaron en el cuerpo de mi primo, luego el señor Carlos Mina siguió tirando más bala y salió huyendo por la vereda que se encuentra frente a nuestra casa" (fs. 75-76). De igual manera, el propio afectado sostuvo que: "CARLOS A. MINA (a) BUFALON ... me dijo hey ven acá tú eres bién (sic) liso, cuando trate de pararme del banco en dónde estaba sentado cuando sentí el primer disparo, y no tuve chance de pararme hay fue que me soltó los cinos (sic) (5) que faltaban" (f. 11).

La indicada contradicción en los testimonios de Carlos Alberto Mina y Thayka Shennel Atencio, la falta de concordancia en las declaraciones de Karen Iveth García Mina y Thayka Shennel Atencio con las pruebas obrantes en autos, sumados a los cargos que se desprenden de las deposiciones que brindan tanto Pineda Araujo como Cuesta Guerra, son elementos que permiten afirmar la existencia de graves indicios que comprometen la responsabilidad del encartado, por lo que se desestima la alegación de la defensa legítima conque se pretende amparar el proceder del imputado.

Finalmente, se censura que la conducta de Mina sea constitutiva del delito de homicidio en grado de tentativa. Sobre este particular, es pertinente aclarar que esta figura delictiva surge cuando "se inicia la ejecución de un hecho punible por actos idóneos encaminados a su consumación y que no se produce por causas independientes del agente" (art. 44 del Código Penal).

En el caso que ahora nos ocupa, el encausado admite que "honestamente le solté los seis" -refiriéndose a los disparos hechos- (f. 9), reconocimiento que es corroborado por Pineda Araujo: "escuche dos disparos ... Carlos Mina siguió tirando más bala y salió huyendo" (fs. 75-76), y Cuesta Guerra: "sentí el primer disparo, y no tuve chance de pararme hay fue (sic) que me soltó los cinos (sic) (5) que faltaban" (f. 11), testimonios que corroborados por las consideraciones médico legales, que indican: a) los impactos de balas que recibió la víctima (f. 14), y b) que "**Su vida sí estuvo en peligro**" (f. 45), ponen de relieve que Mina agotó los actos idóneos para consumar el hecho punible, es decir que su intención fue la de suprimir la vida de Cuesta Guerra.

Finalizado el examen de las peticiones formuladas por el recurrente, la Sala considera correcta la decisión acordada por el tribunal a-quo, en el sentido que el sindicado sea sometido a los rigores de un enjuiciamiento criminal.

Por las consideraciones que anteceden, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 24 de julio de 1995 dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por el cual se abre causa criminal contra Carlos Alberto Mina (a) "Bufalón", por violación del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en relación con el Capítulo VI, Título II, Libro I del mismo Código, es decir, por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa,

cometido en perjuicio de Concepción Cuesta Guerra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO SEGUIDO A CARLOS WITTGREEN SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Auto de 23 de septiembre de 1992, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal y se decreta la detención preventiva de **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte del señor FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, y el incendio del yate CASIMIRO II, hechos ocurridos el miércoles 17 amanecer jueves 18 de mayo de 1989, en el muelle del Club de Yates y Pesca de Balboa, ubicado en Amador.

Primeramente, cabe observar que en el caso sub-judice, luego del estudio de las constancias procesales que obran como pruebas en el sumario, se ha podido comprobar la existencia de dos hechos punibles distintos entre sí, que por tratarse de delitos conexos, según se desprende del artículo 2001, deben seguirse en un solo proceso (Art. 1973 del C. J.).

La Sala, para efectos didácticos, realizará la exposición de los antecedentes del caso, relatando en primer lugar, lo referente al delito genérico de incendio doloso, cometido en detrimento del yate CASIMIRO II, propiedad de la Sociedad Balboa Boat Builders, Inc., para luego, entrar a detallar lo concerniente al delito genérico de homicidio doloso, cometido en perjuicio de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA (q. e. p. d.).

ANTECEDENTES:

Mediante Oficio N° 377 de 22 de mayo de 1989 (f. 43), la Personería Cuarta Municipal de Panamá, Área de Ancón, remitió las sumarias en averiguación de la muerte de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, a la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial.

Mediante Vista N° 116 de 30 de noviembre de 1990 (fs. 386 a 394), la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, finalizadas las investigaciones, remitió el presente sumario para su calificación legal y, a su vez, solicitó la apertura de causa criminal contra **CARLOS A. WITTGREEN A.**, por el delito genérico de homicidio, en perjuicio de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título I, Capítulo I, Libro II del Código Penal.

De las declaraciones juradas rendidas por el capitán del yate CASIMIRO II y concuñado del occiso FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, RICARDO FERNANDO HALL SMITH (fs. 8 a 10; -ampliación- fs. 67 a 72); por el marino, OCTAVIO RUIZ PEREA (fs. 153-154); por el mecánico, RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ PÉREZ (fs. 195 a 197); por el Representante Legal y Presidente de la Sociedad Balboa Boat Builders, Inc. -propietaria del yate CASIMIRO II-, EDUARDO LEWIS NAVARRO (-ampliación- fs. 167 a 170); por el Vicepresidente de la Sociedad Balboa Boat Builders, Inc., GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI" (fs. 217 a 220), se desprende que, el miércoles 17 de mayo de 1989, trabajaron en la nave CASIMIRO II, el capitán del yate

CASIMIRO II, RICARDO FERNANDO HALL SMITH; el marino, OCTAVIO RUIZ PEREA; el mecánico, RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ PÉREZ, los ayudantes de este último; y GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI", hasta las 6:00 p. m. aproximadamente, debido a que se estaban efectuando reparaciones al motor derecho de una máquina, ubicada en la parte de atrás del yate, en la que se filtraba diesel en el aceite, por no tener buena presión de aceite, lo que causaba desgastes en los casquillos. GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI", fue al lugar a dejarle los anillos al mecánico, y a su vez, llevó la comida que mandó su hermano EDUARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI", para las personas que estaban trabajando en el yate.

El mecánico GONZÁLEZ, sacó la máquina, y los otros, lavaron las piezas. Hicieron la limpieza general de las piezas; lavaron las piezas con combustible del mismo barco -diesel-, agua y jabón, en la plataforma del Club de Yates para esos fines.

Luego de la limpieza, se cambiaron los casquillos por unos nuevos, y cambiaron también, los empaques y las partes afectadas de la máquina. Finalmente, colocaron las piezas limpias. El motor reparado, estaba completamente armado, listo para montarlo en su base y darle arranque; pero como faltaba colocar otras piezas que habían sido desarmadas, terminarían las reparaciones al día siguiente, después de casi una semana de trabajos.

Dejaron el yate limpio, con un motor en perfectas condiciones, no realizaron trabajos en la plataforma del yate, y las llaves del combustible estaban cerradas (paso del combustible que viene del tanque hacia el motor). En tal sentido, el capitán HALL, declaró que, él personalmente las cerró y amarró la manguera hacia arriba por cualquier duda.

El hecho de que el yate CASIMIRO II fue visto en perfecto estado el día anterior a los hechos, es corroborado por las personas que se encontraban en el muelle el día 17 de mayo de 1989, tales como GILBERTO PACHECO SECAIDA (fs. 347-348), empleado del yate LA GORDA.

El mecánico GONZÁLEZ, declaró que siempre se derramaba un poquito de diesel, pero que éste bajaba al nivel inferior del yate.

GABRIEL LEWIS NAVARRO, el mecánico, y los ayudantes de éste, abandonaron el yate como a las 6:00 p. m., al finalizar los trabajos del día 17 de mayo de 1989, y llamaron al panguero de turno, FÉLIX LEONOR CALDERÓN (A) "CHINO", quien los recogió y los llevó hasta el muelle.

En el lugar se quedaron, el capitán, RICARDO HALL; el marino, OCTAVIANO RUIZ; y, el celador que cuidaba el yate de noche, FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ (q. e. p. d.), quien llegó en la lancha que recogió a los demás. El capitán, el marino y el celador, transportaron el yate CASIMIRO II, con un solo motor, hasta la boya y lo amarraron. El occiso FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, se quedó solo en el yate; los otros dos, el capitán y el marino, luego de bañarse se fueron del Club de Yates, entre 6:30-6:45 p. m. y/o 7:00 p. m.

A la mañana siguiente -jueves 18 de mayo de 1989-, cuando fueron al muelle a trabajar, estas personas se enteraron de que el yate se había quemado y de que el celador había desaparecido.

Posteriormente, según las declaraciones de EDUARDO LEWIS NAVARRO (A) "CHICHO" (ampliación fs. 167 a 170); GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI" (fs. 217 a 220); **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI** (declaración indagatoria fs. 269 a 272); y, TEÓFILO VALDÉS JUÁREZ (fs. 276 a 278), capitán del yate INSPIRATION, después fue transportado hacia el muelle en la lancha del Club de Yates, GABRIEL LEWIS NAVARRO, entre las 6:00 p. m. y/o 6:30 p. m., llegó al muelle, junto con su chofer GINO GIDEÓN, el mecánico RUBÉN GONZÁLEZ y los ayudantes de éste. En la escalera del muelle, LEWIS NAVARRO, se encontró a **CARLOS A. WITTGREEN A.** -quien frecuentaba el Club de Yates por ser propietario del yate INSPIRATION y otros yates-, con quien tuvo un intercambio de palabras, por razón de sus diferencias políticas, y quien lo retó a pelear en el área de los estacionamientos, cerca de la Oficina de Migración, ubicada en la entrada del

muelle. Luego de unos minutos de pelea, golpes y puñetazos recíprocos, el capitán del yate INSPIRATION, TEÓFILO VALDÉS JUÁREZ, los separó.

Según declararon **WITTGREEN** y VALDÉS, cuando salieron del Club de Yates, este último llevó a **WITTGREEN** a la reunión de cumpleaños de su amigo MARIO RIEGA, y entre 8:30 p. m. y/o 9:00 p. m. lo recogió y lo llevó a su casa. También, VALDÉS declaró que, regresó al muelle del Club de Yates de Balboa, y amarró el yate INSPIRATION a la boya; después buscó una moto en el Aeropuerto de Tocumen, y se la llevó al señor **WITTGREEN** hasta su residencia. Por último, se fue a su casa.

Y, LEWIS NAVARRO declaró que, cuando salió Club de Yates, se fue a casa de su tío SAMUEL LEWIS GALINDO a contarle lo sucedido; y, como a las 10:00 p. m., se fue a su casa.

LEWIS NAVARRO, declaró que, durante la confrontación física mencionada, percibió que **WITTGREEN** tenía aliento alcohólico. En tal sentido, **WITTGREEN** declaró que, esa tarde había asistido a un almuerzo a las 3:00 p. m., donde se tomaron una botella de vino entre tres personas.

Del informe secretarial de 29 de mayo de 1989 (f. 92), que se refiere a información suministrada por el licenciado MÁXIMO FERNANDO AGUILAR, Gerente General del Club de Yates de Balboa; y de los Informes a manuscrito, fechados 18 y 19 de mayo de 1989, dirigidos al licenciado AGUILAR antes citado, suscritos por el lanchero de turno, FÉLIX LEONOR CALDERÓN (A) "CHINO" (f. 93), y EVELIO ROBLEDO VALENCIA (A) "YEYO" (f. 94), respectivamente; y, de las declaraciones de las personas que estaban en el muelle del Club de Yates y Pesca de Balboa, el día del incendio del yate CASIMIRO II: FÉLIX LEONOR CALDERÓN (A) "CHINO" (fs. 82 a 85), lanchero de turno; LISARES PRESTÁN (A) "CHORRILLO" (fs. 89 a 91), celador del yate LA GALLETA; ALFONSO MORENO (A) "CHESPIRITO" (fs. 100 a 102), celador del yate GÉNESIS; EVELIO ROBLEDO VALENCIA (A) "YEYO" (fs. 109 a 111); OSVALDO VALDERRAMA (fs. 112 a 114), Inspector de Migración; y MANUEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ (A) "TATÚ" (fs. 343 a 345), celador de la moto-nave MP-1, se desprende que, el incendio del yate CASIMIRO II, ocurrió entre las 2:30 a. m. y/o 3:30 a. m., del jueves 18 de mayo de 1989. Los que vieron el incendio, señalaron que el mismo fue alto, "tan fuerte que no se pudo rescatar nada", y "demasiado grande que no podían acercarse al yate por el calor". Los que estuvieron esa noche en el muelle, no escucharon ningún ruido ni vieron nada extraño, sin embargo, todos opinaron que el incendio no fue accidental. Fue una noche oscura, sin claridad alguna; y cuando ocurrió el incendio, la marea estaba bajando.

Al percatarse del incendio del yate CASIMIRO II, el celador del yate MAR DELEVA, que era un Guardia de Seguridad de la Primera Agencia de Seguridad -con uniforme de camisa blanca y pantalón azul-, tocó la bocina o sirena de su yate para dar aviso del incendio; por su parte, ALFONSO MORENO (A) "CHESPIRITO", celador del yate GÉNESIS, ubicado aproximadamente a 100 pies del yate CASIMIRO II, declaró que, sintió el sonido del fuego -el cual se extendió por toda la parte superior del yate-, y llamó al compañero del yate CASIMIRO II, para que se tirara al agua, porque se imaginó que estaba durmiendo en la parte de abajo del yate, pero éste no respondió. Luego, llegó al lugar, el panguero de turno, FÉLIX LEONOR CALDERÓN (A) "CHINO", en la lancha del Club de Yates, junto con LISARES PRESTÁN (A) "CHORRILLO" y EVELIO ROBLEDO. MANUEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ (A) "TATÚ", celador de la moto-nave MP-1, alumbró los alrededores con los reflectores del yate bajo su cuidado, a fin de facilitar la búsqueda del celador del yate incendiado, pero a pesar de que varias personas estuvieron dando vueltas alrededor del yate incendiado con tal fin, no lo encontraron.

Durante la búsqueda alrededor del yate CASIMIRO II, vieron el salvavidas -"dingue"-, prendido, por lo que lo apagaron y amarraron a una llanta.

OSVALDO VALDERRAMA, de la Oficina de Migración, ubicada a la entrada del muelle, declaró que, vio que llegó a un Teniente de la Policía Militar, a quien le preguntó que si iba a bajar al muelle, y éste le dijo que no; posteriormente, declaró que, después del incendio llegó un Subteniente, en compañía de un Policía Militar de los gringos; y, luego, llegaron los bomberos, etc.

El yate CASIMIRO II estaba amarrado a la boya norte 26 (N-2-6); y anclados cerca de éste, estaban el MAR DELEVA, el GÉNESIS -boya norte 56 (N-5-6)-, el MARF II, y el IN THE MEAN TIME, según se desprende de diagrama de la ubicación de las boyas asignadas a los yates, del Club de Yates y Pesca de Balboa, copia autenticada, visible de fojas 86 a 88.

Según declaró una de las hijas del occiso, ROSA EVELIA VÁSQUEZ DE JAÉN (fs. 356-357), a las 4:00 a. m. aproximadamente, del jueves 18 de mayo, recibieron la llamada telefónica, en la que se les informó sobre el incendio del yate y la desaparición de su padre.

En tal sentido, la esposa del occiso, BÉLGICA MENDOZA DE VÁSQUEZ (fs. 78 a 80), declaró que al enterarse del incendio del yate CASIMIRO II y de la desaparición de su esposo, denunciaron el hecho en el DENI, y que después se enteraron de que habían encontrado el cadáver del mismo.

A las 6:00 a. m., del jueves 18 de mayo de 1989, los yernos del occiso, CARLOS JAÉN, GILBERTO ORREGO SUÁREZ (fs. 16-17) y JOSÉ VALDÉZ, junto con los empleados del Club de Yates, que se encontraban en el muelle, emprendieron la búsqueda del señor FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ.

Entre tanto, las hijas del occiso, EDILMA ESTHER VÁSQUEZ DE ORREGO (fs. 359-360), HEROIDA VÁSQUEZ DE CHEN (fs. 351-352), y ANA VÁSQUEZ DE VALDÉZ, al enterarse de la noticia, realizaron diligencias, a fin de solicitar ayuda en la búsqueda de su padre, ante distintas agencias de las antiguas Fuerzas de Defensa: El G-2; el DENI, de Ancón; la Compañía de los Cholos, en Balboa, sin recibir información alguna; y, finalmente, en la UESAT, según narró EDILMA ESTHER VÁSQUEZ DE ORREGO (fs. 359-360), un oficial los apoyaría con los llamados "hombres ranas", pero mientras alistaban el equipo necesario, llegó un civil -que cree que era un G-2-, y luego de una conversación entre éste y el oficial de la UESAT mencionado, se le negó el apoyo prometido.

Los detalles del incendio y su consiguiente extinción, se desprenden de las declaraciones juradas de los bomberos de la Comisión del Canal de Panamá, Teniente LUIS FERNANDO SHANNON Mc CARTHY (fs. 138-140), SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ COVER (fs. 147-.148), y LLOYD TIMOTHY ALLEN STERLING (fs. 149-150); del Informe de Incendio de la División de Incendio de la Comisión del Canal de Panamá, fechado 25 de mayo de 1989, sobre el incendio del navío M/V CASIMIRO II (-inglés- fs. 141 a 146; -traducción- fs. 185 a 190); del Informe de 18 de mayo de 1989 (-copia autenticada- f. 77), suscrito por el Capitán OSCAR LEONARDO CUNNINGHAM, Encargado de la Oficina de Seguridad (para la prevención de incendios), Balboa, del Cuerpo de Bomberos de Panamá; de la Declaración-Ratificación de informe (fs. 176 a 179), de 23 de mayo de 1989, suscrito por el Capitán OSCAR LEONARDO CUNNINGHAM. Así, pues, en informe secretarial de 22 de mayo de 1989 (f. 22), se informa el hecho de que se recibió llamada en el Oficina de Seguridad del Cuartel de Bomberos de Balboa, pero los primeros que brindaron cooperación con motivo del mismo, fueron los del Departamento de Bomberos de Corozal.

Consta en autos, que el día 18 de mayo de 1989, aproximadamente a las 3:24 a. m. (alarma telefónica: 3:26 a. m.), recibieron una llamada en el Departamento de Bomberos de Corozal, perteneciente a la Comisión del Canal, procedente del Departamento de Seguridad de la Base Naval de Rodman, en la cual informaron que había algo quemándose en el área del Club de Yates y Pesca de Balboa.

Mientras tanto, los Bomberos de Corozal enviaron el carro bomba "BALBOA 2", para investigar, a las 3:26 a. m.

A las 3:29 a. m., dicho carro bomba regresó y confirmó al Cuartel de Corozal que había un yate prendido afuera del muelle, y que el mismo estaba totalmente cubierto por las llamas, entonces enviaron al lugar el carro bomba de Corozal, Compañía # 5, el cual solicitó una bomba portátil, para que fuera despachada en el muelle 19.

El Teniente LUIS FERNANDO SHANNON Mc CARTHY, se apersonó al lugar, junto con los bomberos a su cargo: El operador del camión, ARMANDO SAMUELS; y los otros bomberos, LLOYD TIMOTHY ALLEN STERLING y SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ COVER.

Informaron al Cuartel de Bomberos de Corozal, que el navío se había alejado de la orilla y que estaba aproximadamente a tres cuartos (3/4) de milla desde el borde de la ribera. Solicitaron los equipos necesarios a su estación y una lancha para transportarse hasta el lugar donde estaba el yate. Al llegar al lugar los bomberos del Cuartel Segismundo A. Navarro, los bomberos de la Comisión del Canal de Panamá se encontraban en espera de la lancha solicitada. Igualmente les informados en el muelle de Balboa que el señor FÉLIX VÁSQUEZ, quien cuidaba el yate de seis de la tarde (6:00 p. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.), posiblemente estaba a bordo del yate.

Luego la lancha SKATE, de la Comisión del Canal, transportó al Teniente SHANNON, y a los bomberos, ALLEN y RODRÍGUEZ, al lugar donde estaba el yate incendiado; realizaron, entonces, una búsqueda de posibles víctimas, y alejaron el yate más próximo al incendio: IN THE MEAN TIME -como a 150 pies del yate involucrado-, para evitar que éste también fuera consumido por las llamas.

Llegó al lugar, el carro bomba del Cuartel de Bomberos de Corozal, de la Compañía BALBOA 2, con la lancha CLUB, la cual abordaron el capitán de puerto, el señor CASTLE; el Sargento VÍCTOR BROWN; y, los bomberos, JOSÉ PECERO, ANTONIO MECINA y HARMODIO BOSTIC, quienes llevaron consigo una bomba portátil.

Mientras tanto, el Asistente Jefe QUIRÓS, llegó al Club de Yates de Balboa, solicitó personal de las Fuerzas de Defensa de Panamá, e inició la búsqueda desde el muelle del cuidador del yate CASIMIRO II, y le notificó al personal a bordo de los yates, en el área.

Entonces llegó al lugar el remolcador "SMITUITSLAND" de la Comisión de Transporte Marítimo de Panamá, a fin de coordinar esfuerzos y extinguir las llamas que consumían a CASIMIRO II. De modo pues, que empezó a tirar agua y se logró apagar el fuego temporalmente. Los bomberos del carro bomba de la Compañía #5, se colocaron contra el viento y procedieron a aplicar un agente extinguidor químico de tipo seco (polvo químico).

Hubo una reignición del fuego, y los restos del yate comenzaron nuevamente a quemarse violentamente. En ese momento (a las 4:21 a. m.), llegó el remolcador "LÍDER" de la Comisión del Canal de Panamá, el Teniente SHANNON abordó para operar el sistema de extinción del fuego con espuma mecánica, dirigiendo ésta hacia. Aproximadamente a las 5:24 a. m., ocurrió una explosión.

Cuando finalmente pudieron controlar el fuego, pusieron dos bombas "BILGE" a los restos del yate para extraer el agua y evitar que se hundiera; también, aplicaron una línea de manguera de 1 1/2, para seguir enfriando y prevenir la reignición.

Extinguieron el fuego totalmente a las 5:54 a. m. Coordinaron, entonces con los trabajadores del Club de Yates de Balboa, para remolcar la lancha hasta la ribera, a fin de investigar. También, arrastraron hacia el muelle un bote pequeño parcialmente quemado en la parte posterior, perteneciente al yate CASIMIRO II, que encontraron cerca del área. Todo lo que había a bordo del yate se derritió, debido al intenso calor; no quedó evidencia alguna.

Visibles a foja 65 del sumario, se encuentran vistas fotográficas en su estado natural del yate CASIMIRO II, y del pequeño bote con motor fuera de borda que formaba parte del yate (f. 66).

Del informe de inspección de barcos de la Compañía ASSA, al yate CASIMIRO II, a flote en el Club de Yates de Balboa, fechado 12 de septiembre de 1988, visible a foja 56 del sumario, se desprende que, las condiciones generales de dicho yate, eran satisfactorias; incluyendo tanto la estructura interna y externa como los motores y el equipo en general del yate CASIMIRO II.

A fin de recoger evidencias probatorias de las causas que originaron el incendio producido en el yate CASIMIRO II, ubicado en el Club de Yates de Balboa.

El día 22 de mayo de 1989, se llevó a cabo diligencia de inspección ocular al yate CASIMIRO II, de conformidad con lo establecido en el artículo 2098 del

Código Judicial (fs. 30 a 31;-a manuscrito- fs. 24 a 29), con la asistencia de dos peritos, de la Oficina de Seguridad, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes, durante la diligencia, recogieron muestras del material quemado resultante (según consta en la vista fotográfica de f. 38), en el área de la superficie del casco del yate, donde el olor a gasolina era más penetrante, y se refirieron a lo que quedó del yate, en los términos siguientes:

> "El yate estaba construido de fibra de vidrio, las secciones interiores de playwood marino, y aproximadamente se quemó en unos quince minutos, señalan los peritos que a pesar de tener varios días de estar en el agua todavía se siente un fuerte olor a gasolina, más que todo en el área en donde estaba el puente de arriba hacia abajo, adentro del casco del yate se observa equipo de refrigeración, equipo de aire acondicionado, parte del equipo de radio comunicación, los tanques del diesel en condiciones intactas, se observan también las dos máquinas de diesel una en posición original y la otra movida de su base por motivos de que el personal del yate estaban (sic) haciendo reparaciones en esta maquina (sic) ..." (f. 30).

De fojas 32 a 38 del expediente, constan fotografías tomadas durante la diligencia de inspección ocular practicada a los restos del yate CASIMIRO II, anclado en las cercanías del Club de Yates de Balboa, ubicado en Amador, donde se observan vistas fotográficas del casco del yate CASIMIRO II, y de la parte superior de dicho casco -"se trata de un casco de color blanco con rayas (líneas) de color celeste y negro" (f. 30)-; de la proa del yate; del material quemado producto del incendio; del equipo de refrigeración y del motor, que se encontraban entre los escombros en la superficie del casco.

Consta copia autenticada de informe de 23 de mayo de 1989 (fs. 137 y 164), suscrito por el Capitán OSCAR L. CUNNINGHAM, Encargado de la Oficina de Seguridad, Balboa, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, contentivo de las apreciaciones y conclusiones a las que arribaron el suscrito y el Inspector GARY LANGSHAW, quienes participaron como peritos en la diligencia de inspección ocular practicada en los escombros del yate CASIMIRO II, donde no se aporta mayor información relativa a las causas que motivaron el incendio del yate, sino que se reitera el hecho de que, durante la remoción de los escombros de la parte superior del casco del yate, observaron los restos de equipo y artefactos en general; también, "... el fuerte olor a gasolina que se percibia (sic) en el área donde se desplomó la parte superior del yate (puente)"; y, que "... los tanques donde se depositaba el diesel, no sufrieron daño alguno."

De fojas 209 a 215 del expediente, consta copia del informe de inspección de avería, preparado en su calidad de ajustadores independientes de seguros, con relación a la operación de salvamento de ASSA, por la firma Tridex, Inc. (Ajustes, inspecciones, recobros, avalúos marítimos), por el reclamo interpuesto por su Asegurado Balboa Boat Builders, y confirmación de daños sufridos por la M/N CASIMIRO II, a raíz del incendio que sufriera dicha nave el día 17 de mayo de 1989. Dicho informe incluye la operación de rescate del bote auxiliar; y la correspondiente descripción fotográfica (fs. 213 a 215), la cual comprende vistas fotográficas del estado del yate, luego del incendio sufrido por el mismo; del estado del interior del casco del yate; del bote auxiliar parcialmente quemado, y de éste en el patio de reclamo de la Compañía Aseguradora. En el informe de los ajustadores de daños antes mencionado, se señala que el incendio consumió la embarcación CASIMIRO II, casi en su totalidad, a excepción del casco en sus sectores de las tracas de aparadura, traca de pantoque y parte de la traca de cinta, por encontrarse éstas sumergidas. Finalmente, dicho informe contiene una descripción detallada de los daños sufridos por el yate CASIMIRO II, concluyéndose en que "... las posibilidades de salvamento en esta lancha son nulas, no obstante, se pueden rescatar las transmisiones, ejes y hélices, siempre y cuando el calor irradiado no las afecto (sic), al igual que el bote auxiliar." (F. 211).

Sin embargo, dicho informe no aportó mayores pruebas a la investigación, toda vez que hasta la fecha, no han podido determinarse las causas que provocaron el siniestro bajo estudio.

En relación con el examen realizado a las muestras recogidas durante la inspección ocular en el yate Casimiro II, mediante Nota de 25 de mayo de 1989, Evidencia N° 32, el licenciado César E. Ayala Ch., Laboratorista Químico Forense, del Instituto de Medicina Legal, del Ministerio Público, rinde el siguiente informe:

"A. Descripción del material suministrado:

1. Una (1) cajita de aluminio de 7 cm2, color oscuro (gris) con señales de óxido y varios orificios.

B. Resultados Obtenidos:

Finalizadas las experticias químicas, realizadas a las evidencias anteriormente descrita (sic), tengo a bien informarle, que dentro del artículo aludido, se encontraron restos de vidrio, madera incinerada, un (1) clavo oxidado de 4 cm de largo sin cabeza, un (1) tornillo con cabeza de 4 cm de rosca ordinaria, restos de fibras de madera con cemento, piedras pequeñas, etc.

Cabe mencionar que dicha evidencia en general al momento del examen, presentaba olor compatible con algun (sic) tipo de hidrocarburo." (F. 105).

A fojas 115-116, consta declaración jurada del Técnico Laboratorista del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Licenciado César Eduardo Ayala Chávez, quien se ratifica del informe antes transcrito, y reitera que:

"Al momento de ser analizadas en conjunto las muestras llegadas al laboratorio (sic) éstas presentaban olor compatible con hidrocarburo porque despedía (sic) olor penetrante característico de los componentes químicos derivados de la destilación del petróleo que se utilizan como combustible (sic)." (F. 116).

También, señala que los hidrocarburos a los que se refiere, son tres: Diesel, gasolina y/o kerosene; y, que el hidrocarburo presente en las muestras analizadas, se encuentra disuelto en agua, por lo que se imposibilita la determinación específica del tipo de hidrocarburo de que se trata. Además, explica las técnicas empleadas y los resultados obtenidos en el examen de laboratorio citado; así pues, en la del ensayo microscópico ocular, "al examinar las evidencias recogidas en el yate CASIMIRO II pude identificar restos de madera quemada." (F. 115); y, "Las pruebas químicas determinaron la presencia de fragmentos de vidrios, madera, clavos de hierro y tornillos también de hierro, cenisas (sic) etc. ..." (F. 115).

Consta a foja 131, Informe de Laboratorio, efectuado por el licenciado César Ayala, Laboratorista Químico Forense del Instituto de Medicina Legal, efectuado por el licenciado César Ayala, Laboratorista Químico Forense del Instituto de Medicina Legal, enviado mediante Oficio N° /95-193 de 23 de mayo de 1989, en relación con la ropa que portaba el cadáver al momento del Protocolo de Necropsia antes transcrito, N° de Necropsia:/95-22-324, y cuyo contenido es el siguiente:

"MUESTRA: Un (1) pantalón azul de hombre.

Sirva la presente para informarle que se le efectuó (sic) análisis químicos compatibles con algún tipo de combustible, la cual se determinó que se trata de un hidrocarburo, líquido, volátil e inflamable que se obtiene de la primera destilación del petróleo, por ejemplo, podemos señalar entre GASOLINA O DIESEL." (F. 131).

El Capitán OSCAR L. CUNNINGHAM, perito del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quien examinó los restos del CASIMIRO II, catalogó el siniestro de tipo AB, es decir, cuando se toman en cuenta los carburantes y los derivados del petróleo en general, toda vez que, se quemaron telas, maderas, plásticos, metales y existían un fuerte olor a carburante derivado del petróleo. Indica que posiblemente, fue

un incendio doloso, y en este particular, reitera el hecho de que se percibió un fuerte olor a gasolina, durante la diligencia de inspección ocular, realizada el día 22 de mayo de 1989. Y, afirma que el olor que emana de la gasolina es distinto al del diesel; aunado a lo anterior, el hecho de que el yate no utilizaba gasolina, sino diesel, para mover sus máquinas, y que los tanques que almacenaban el diesel estaban intactos, sólo se notaba que les había entrado un poquito de agua de mar. Por otro lado, en declaración-ratificación de informe (fs. 176 a 179), de 23 de mayo de 1989, suscrito por el Capitán OSCAR LEONARDO CUNNINGHAM, al referirse a las quemaduras que presentó el cuerpo del occiso FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, éste indicó que, "Basado en mi experiencia yo puedo asegurar que esas quemaduras son por efecto de carburantes." (f. 178), pues, las quemaduras provocadas por carburantes tienden a irritar la piel antes de penetrar.

Similar opinión, externó el Teniente LUIS FERNANDO SHANNON Mc CARTHY, cuando señaló que el yate fue consumido muy rápidamente, y que, "posiblemente se utilizó alguna clase de acelerante, cualquier combustible que ayuda a la extensión del fuego, por eso nosotros decimos que las (sic) causas (sic) del fuego es posiblemente incendiaria/sospechosa." (F. 140).

Por su parte, RICARDO FERNANDO HALL SMITH, capitán del yate CASIMIRO II (-ampliación- fs. 67 a 72), corroboró el hecho de que los tres tanques de diesel, hechos de un material de fibra, estaban más o menos intactos y que uno de ellos tenía un hueco en la parte superior y que como éstos se encuentran unidos por dentro, el diesel estaba mezclado con agua; además, señaló que la fecha del incendio estaban llenos a 1/3 de su capacidad, porque el fin de semana harían un viaje a Puerto Piña, donde los llenarían.

EDUARDO LEWIS NAVARRO (A) "CHICHO" (fs. 11-12), señaló que el yate tenía dos niveles y que según las declaraciones de los que estaban en el muelle el día del incendio, éste comenzó en la parte superior del yate.

Y, GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO (A) "BIBI" (fs. 217 a 220), manifestó que el incendio no fue accidental, alegando que el combustible diesel del yate es menos inflamable que la gasolina.

Las pruebas y opiniones estudiadas expuestas descartan de plano la teoría de un incendio accidental o provocado por daños en el propio yate, comprobando la existencia de un hecho punible de incendio doloso.

Visible a foja 108 del sumario, se encuentra Certificado de la Dirección General del Registro Público, donde consta que la sociedad Balboa Boat Builders, Inc., se encuentra debidamente inscrita y que sus directores y dignatarios son los hermanos EDUARDO, GABRIEL, FERNANDO y SAMUEL LEWIS NAVARRO, quienes fungen en la Junta Directiva de la sociedad, ocupando los cargos de como Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario, respectivamente; que el representante legal de la sociedad es el Presidente de la misma, EDUARDO LEWIS NAVARRO; y, que su agente residente es Eduardo Aurelio Chiari Méndez.

Obra como prueba en el sumario, documentación concerniente a la inscripción de la nave CASIMIRO II, tales como, copia autenticada (f. 133) -y copia simple (f. 14)- del permiso de navegación, Registro o Patente N° 3737, válido hasta el 31 de diciembre de 1989, expedido a favor del yate CASIMIRO II, propiedad de Balboa Boat Builders, Inc.; y copia autenticada (f. 134) -y copia simple (f. 13)- de la licencia de la estación de radio N° 18833-A, vigente también hasta el 31 de diciembre de 1989, a favor de la misma nave, expedida por la Dirección de Consular y Naves del Departamento de Telecomunicaciones Marítimas, del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Según se desprende del Acta de visita a las oficinas de la Compañía Aseguradora ASSA, situada en el Edificio Torre Miramar, Avenida Balboa (f. 47), y de la documentación referente al caso-copias debidamente autenticadas- (fs. 48 a 57), se desprende que la Compañía Balboa Boat Builders, Inc., adquirió la Póliza del Seguro de Yates N° 04B00087 B, del Ramo de Cascos Marítimos, sobre el yate CASIMIRO II, por un monto total de B/.400 000.00; sin embargo, mediante Endoso N° 1-88/89 de 2 de diciembre de 1988, la Compañía Aseguradora y la Asegurada, acordaron rebajar la suma inicial a una nueva por valor de

B/.225,000.00 (f. 57).

En la nota fechada 24 de mayo de 1989, suscrita por el Gerente General de la Compañía ASSA, Carlos A. Rabat M., se informa que:

> "Cía. Balboa Boat Builders, Inc., al ocurrir el siniestro, se encontraba en mora en el pago de las primas correspondientes a la póliza, hecho éste que se había puesto en conocimiento de la asegurada en diversas ocasiones, sin que la misma hubiese pagado dichas primas antes de la fecha del siniestro." (F. 74).

Mediante la Nota N° 368 de 23 de mayo de 1989 (f. 60), de la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, dirigida al Gerente General de la Compañía ASSA, se solicita que sea suspendido todo pago que por cualquier reclamo solicite la Empresa Balboa Boat Builders, Inc., en relación con el incendio sufrido por el yate CASIMIRO II de su propiedad. Visible a foja 283, consta Nota de 8 de enero de 1990, suscrita por el Representante Legal y Presidente de Compañía Balboa Boat Builders, Inc., EDUARDO LEWIS NAVARRO, mediante la cual solicita que se deje sin efecto lo pedido en la Nota mencionada en líneas anteriores. Solicitud ésta que es acogida por la Fiscalía Primera Superior, que mediante Nota de 15 de enero de 1990, dirigida al Gerente General de la Compañía ASSA, deja sin efecto el contenido de la Nota mencionada, toda vez que, "... el resultado de la investigación (sic) de momento, no arroja visos de que el siniestro de la nave fue producto de la acción dolosa de sus propietarios, ..." (f. 285).

En cuanto al homicidio doloso de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, consta a foja 1 del expediente, informe secretarial de 19 de mayo de 1989, sobre llamada telefónica, procedente del Departamento Nacional de Investigaciones, Agencia de Balboa, en la cual comunicaron que, en la playa de Palo Seco, se encontraba el cadáver de una persona del sexo masculino, entre sesenta (60) y/o sesenta y cinco (65) años de edad.

A raíz de dicho informativo, el día 19 de mayo de 1989, la Secretaria de la Personería Cuarta Municipal de Panamá, área de Ancón, en "Funciones de Agente Especial", llevó a cabo la diligencia de reconocimiento y levantamiento de un cadáver (fs. 3-4). En el lugar estuvieron presentes, entre otros, el señor ÁNGEL FRANCISCO LATA, quien manifestó haber sido la primera persona que vio el cadáver, aproximadamente a las siete (7:00 a. m.) de la mañana. También, se apersonó al lugar, el Sargento GILBERTO ORREGO SUÁREZ, quien reconoció al occiso como su suegro, de nombre FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, de sesenta y dos (62) años de edad, desaparecido desde la madrugada del día jueves, después del incendio en el yate propiedad de la familia LEWIS GALINDO que éste cuidaba, el cual estaba anclado en el muelle del Club de Yates y Pesca de Balboa.

Inicialmente, los presentes no pudieron pasar al lugar en que se encontraba el cadáver, porque estaba subiendo la marea, y llamaron a la Marina Nacional para que mandaran una balsa; sin embargo, ésta nunca llegó y la marea siguió subiendo. Por lo que, aceptaron la cooperación del señor LOTDO STEFANO, quien en una balsa propiedad de la Compañía Balboa Boat Builders, propietaria del yate incendiado, trasladó el cadáver a la playa; y, procedieron al levantamiento del mismo, el cual presentaba, "... quemaduras en la cara, una herida en la espalda, en el costado izquierdo, de aproximadamente dos (2) pulgadas de diametro (sic) y profunda, aparentemente punzo-cortante, ..." (F. 4).

Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Hospital Santo Tomás, donde se realizó el Protocolo de Necropsia N/95-22-324 (fs. 118 a 129), suscrito por el Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Doctor OSCAR BULGIM T., correspondiente al cadáver de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, quien falleció el día miércoles 17 de mayo de 1989, cuya parte pertinente transcribimos a continuación:

> "RESUMEN ANÁTOMO PATOLÓGICO.
>
> -Laceración lumbar penetrante.
> -Laceración riñon (sic) izquierdo.
> -Laceración pelvis renal izquierdo.

-Laceración pediculo (sic) vascular renal izquierdo.
-Hematoma perirenal izquierdo.
-Derrame pleural bilateral.
-Hematorax (sic) izquierdo.
-Adherencias pleura derecha.
-Laceración pulmonar izquierda.
-Quemadura grado II.
-Putrefacción avanzada.

CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES

Se trata de adulto de 59 años de edad con evidencia anatomopatologica (sic) de herida penetrante traumática en región lumbar izquierda que secciono (sic) el riñón, pelvis renal y pedículo vascular que ocasiona hemorragia (hematoma perirenal, hematorax izquierdo) e hipoxia tisular sin hallazgos que indiquen mecanismo asfíctico. Las características de las quemaduras indican que ocurrieron luego de la muerte (postmorten). El estado de putrefacción límita (sic) el examen anátomo patológico (sic), pero los hallazgos son suficientes para establecer, explicar y justificar la muerte.

CAUSAS DE LA MUERTE

A) HERIDA ARMA BLANCA.
B) SHOCK HIPOVOLÉMICO.
C) LACERACIÓN PEDICULO RENAL IZQUIERDO.
CONTRIBUYENTE: SECCIÓN RENAL IZQUIERDO." (Fs. 128-129).

"La ropa especialmente el pantalón presenta fuerte olor a combustible (hidrocarburo) ..." (F. 120).

Mediante Oficio/96-5499 de 26 de junio de 1989, del Instituto de Medicina Legal, de la Procuraduría General de la Nación, que complementa el contenido del Protocolo de Necropsia correspondiente al señor FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, se informa, entre otras cosas, lo siguiente:

"1- De acuerdo a las características de la herida descrita ésta fue ocasionada por arma punzocortante. ...

... la expresión 'sin hallazgos que indiquen mecanismo asfíctico' se refiere específicamente a la ausencia de hallazgos que indiquen hipoxia tisular por causa física o mecánica directa V. GR. (sofocación, ahorcadura, estrangulación y/o sumersión).

4. Las características de las quemaduras (aspecto apergaminado, cubierta de exudado fibrinoso amarillento y escasa circulación sanguínea) son indicativos de que cuando estas (sic) ocurrieron no existía vitalidad (vida) tisular que permitiese la respuesta orgánica invivo en las quemaduras de este grado ..." (F. 199).

En declaración jurada, LARÍN BENIGNO PERRY BARLEY (fs. 333-334), quien actuó como testigo actuario en la diligencia de reconocimiento y levantamiento del cadáver de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ (fs. 3-4), señaló que, al realizarse el examen superficial sobre el cadáver, observó quemaduras leves alrededor de la cara y en los brazos, y al voltearse el mismo, observó en la espalda, herida que parecía hecha con arma blanca; y, escuchó comentarios entre los presentes, de que la persona que mató al occiso era un familiar.

Fotografías tomadas por unidades de la Sección del S-2 de la Policía de Balboa, durante el levantamiento del cadáver de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, el día 19 de mayo de 1989.

Fotos (6) a colores, del cadáver del hoy occiso, tomadas en la morgue del Hospital Santo Tomás (fs. 173 a 175), por unidades del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), Agencia de Balboa.

Fotografías (3) correspondientes a la práctica de la autopsia del cadáver del occiso en la presente causa penal (f. 321).

Según se desprende de autos, se ha acreditado, en primer orden, la existencia legal de quien en vida se llamó FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA (q. e. p. d.), a través de la copia de la cédula de identidad de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA (q. e. p. d.), visible a foja 15 del expediente, y de la copia del Acta de Matrimonio Civil del interfecto (f. 291); y, además, se ha comprobado legalmente la muerte de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, así pues, a fojas 202 y 292, se encuentra inserto el Certificado de Defunción, expedido por la Dirección General del Registro Civil.

Mediante Nota de 19 de julio de 1989 (fs. 223-224), la Oficina de Asesoría Legal de la Comisión del Canal de Panamá, remitió información, escrita en idioma inglés, relativa a las mareas registradas el 17 y 18 de mayo de 1989 (fs. 227 a 252); así como, información existente, basada en estudios de 1974 y 1987, la cual comprende el ciclo completo de las corrientes marinas a la entrada del Canal, sector Pacífico (fs. 225-226). La traducción de fojas 267 a 268, correspondiente al estudio existente, sobre las corrientes marinas (de mareas) en la cuenca de Balboa, la realizó el Traductor e Intérprete Oficial del Ministerio Público, Licenciado Carlos A. Espino B.

Se realizó diligencia de inspección ocular al área comprendida entre el punto donde estaba anclado el yate CASIMIRO II (boya N-2-6), y el área donde fue localizado el cadáver de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ -Playa de Palo Seco, área adyacente al muelle de Balboa-, visible de fojas 261 a 263 (-a manuscrito- fs. 254 a 260), con la participación, entre otros, de JAIME LEÓN ASSOT HERNÁNDEZ, Hidrólogo de la Comisión del Canal de Panamá, quien en su entonces condición de perito, externó los razonamientos siguientes:

> "Las (sic) mareas (sic) alta el día en cuestión fue aproximadamente a las dos y cuarto de la mañana (2 1/4 a. m.) y la marea baja aproximadamente a las ocho y cuarto de la mañana (8 1/4 a. m.), Cuando la marea empieza a bajar las corrientes son hacia fuera (sic) del canal con una velocidad aproximada de 0.2 mudos (sic) en la superficie del agua, a medida que la marea va bajando la velocidad se va incrementando hasta apeoximadamente (sic) un (1) nudo en la misma dirección. En otras palabras, entre la marea alta y la marea baja es cuando el agua se enfila siguiendo el curso del cause del Canal. ... es muy difícil que un cuerpo haya estado flotando en la misma área sin ser visualizado por nadie y sin que los factores de corriente o se lo hayan llevado afuera del canal o lo hayan depositado en alguna playa cercana. ... entre un periodo (sic) de una marea alta a una marea baja son aproximadamente seis horas, en otras palabras las frecuencias de las mareas altas ocurren aproximadamente cada doce horas ..., el movimiento de las aguas como hemos visto tiene (sic) a ser hacia afuera del canal desde el principio de la marea alta bajando y tiende en dirección contraria cuando la marea está subiendo, este ciclo ... se repite ..." (Fs. 262-263).

En este orden de ideas, el capitán del yate CASIMIRO II, RICARDO FERNANDO HALL SMITH (-ampliación- fs. 67 A 72), declaró que le parecía raro que el cuerpo del señor VÁSQUEZ haya cruzado el Canal, por el sistema de corrientes descrito en líneas anteriores, toda vez que, el cadáver fue encontrado a una distancia aproximada de 1 milla 3/4 a 2 millas, lado sur del muelle, en la playa de Palo Seco, antes de entrar al Canal.

Lo anterior, nos lleva a concluir que, el cadáver del occiso en el presente negocio, no fue arrastrado por la marea al sector donde fue encontrado, sino que el cuerpo inerte de quien en vida se llamó FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, fue directamente colocado en la playa de Palo Seco.

En declaración indagatoria, **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI** (fs. 269 A 272), niega haber cometido los delitos investigados por venganza; y, manifiesta

que le tenía gran estima a VÁSQUEZ, por su gran afición a los gallos, a quien se encontraba en el muelle y conversaban amenamente.

Mediante la Nota N° 8-4854-89 de 17 de agosto de 1989 (f. 280), suscrita por el Sub-Director General del Departamento Nacional de Investigaciones, de las Fuerzas de Defensa, se informa que **CARLOS A. WITTGREEN A.**, no registra antecedentes policivos ni penales, de acuerdo con los archivos centralizados de dicha Institución.

Consta en el expediente, copia de fax recibido en la Procuraduría General de la Nación, de cuyo contenido se desprende que el señor GABRIEL LEWIS GALINDO, el 23 de mayo de 1989, denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras cosas, el asesinato de FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ, celador del yate CASIMIRO II, y el incendio de dicho yate; según declara LEWIS GALINDO,

> "esta acción es una de las múltiples realizadas por los sicarios del (Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, General Manuel Antonio Noriega en (sic) contra los panameños que se atreven a enfrentarlo para defender sus derechos ciudadanos." (F. 193).

Para entrar a resolver el presente negocio, la Sala desea llamar la atención sobre lo manifestado por los empleados del Club de Yates y Pesca de Balboa, tales como, EVELIO ROBLEDO VALENCIA, quien declaró que, "en ocasiones se han robado motores fuera de borda, estando los cuidadores en el barco y no se han dado cuenta."; y que, "... en forma ilegal puede llegar cualquiera sin que nosotros nos demos cuenta, en un dingui (sic), un bote con motor fuera de borda, o en cualquier otra forma, por ejemplo nadando o buceando." (Fs. 110-111).

En tal sentido, se manifestó el lanchero, FÉLIX LEONOR CALDERÓN (A) "CHINO", cuando señaló que, "para cualquier situación contraria a la ley, por ejemplo que quieran robar, tienen que usar cayucos o pequeños botes de goma con motor o remos". (F. 84).

Por otro lado, en virtud de la información suministrada a la hija del occiso, HEROIDA VÁSQUEZ DE CHEN (fs. 351-352), mediante la llamada telefónica que le hiciera RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA, armador de barcos en la Comisión del Canal de Panamá, éste rindió declaración jurada (fs. 365 a 367), en la cual se refirió a una conversación que escuchó en un Bar denominado "ACROPOL", ubicado detrás del Banco Nacional, la cual provenía de una mesa cercana a la suya, pegada a la pared, de donde un hombre se paró y se fue, y al rato llegó otro, de contextura delgada, un poco alto, con corte de policía, al igual que el sujeto que se encontraba en la mesa, y quienes aparentemente eran compañeros. MARTÍNEZ, declaró que, escuchó que el sujeto que estaba en la mesa primero, le decía al otro sujeto, que no le gustaba como se había dado el caso del yate, que a ese hombre sólo había que asustarlo haciendo un movimiento con el pie para que se tirara al agua, y que el Capitán QUIEL era un "hijo de puta"; y, también, dijo que una lancha casi "lo jode".

Según declaró RAMÓN MARTÍNEZ, la conversación le llamó la atención porque tenía conocimiento de que unos bomberos de la Comisión del Canal, lugar donde él trabaja, participaron en la extinción del incendio del yate CASIMIRO II, y también sabía de la desaparición del celador del mismo, FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ.

Consta a foja 361, Nota DISEP-654-90 de 28 de junio de 1990, suscrita por el Teniente Coronel FERNANDO QUEZADA MARTÍNEZ, Jefe de la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional, de servicio la madrugada del 17 de mayo de 1989, en relación con los miembros de la Unidad Especial Anti Terror (UESAT), sección de los llamados "hombres ranas", cuyo contenido transcribimos a continuación:

> "Listado de las Unidades que pertenecían a la UESAT, Sub-Sección de Marina.
>
> 1. Capitán EVELIO QUIEL
> 2. Sub-Tte. VICTORIANO VALENCIA G.
> 3. Sgto. 1° AURELIO GRANT ÁLVEO.

4. Sgto. 1° SANTIAGO PADILLA.
5. Sgto. 1° AGUSTÍN REYES COCCIO.
6. Sgto. 2° ANÍBAL ALBERTO FLOREZ.
7. Sgto. 2° FILEMÓN MONTERO DEL RÍO." (F. 362).

Posteriormente, mediante Nota DISEP 758-90 de 27 de julio de 1990 (f. 371), fueron enviadas las fotografías de los miembros de la Unidad Especial Anti Terror (UESAT), Sub-Sección de Marina, enumerados en el listado antes transcrito (fs. 372 a 378), de turno para la fecha del hecho investigado.

En declaración ampliada, RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA (f. 379), reconoció a la persona de nombre, EVIDELIO QUIEL, visible a foja 372; pero, declaró que las otras fotografías de las Unidades de la UESAT, de turno la noche de los hechos, no correspondían a los sujetos que escuchó en el bar.

Consta en autos, Salvamento de voto de la Magistrada SANDRA T. HUERTAS DE ICAZA, en el Auto de 23 de septiembre de 1992, dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, cuyo contenido es el siguiente:

> "Las averiguaciones descartan penetración terrestre a la nave, más bien podríamos pensar en que personas entrenadas para realizar operaciones acuáticas, fueron quienes participaron en el hecho, así permite deducirlo el testimonio de RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA (fs. 365-367), ..." (F. 422).

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Auto de 23 de septiembre de 1992 (fs. 416-421), abre causa criminal y decreta la detención preventiva, contra el señor **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, por presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I y Capítulo I, Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por los delitos de homicidio e incendio doloso, en base a que, "existen graves indicios de responsabilidad penal contra el imputado WITTGREEN debido a la enemistad manifiesta surgida por la confrontación física con uno de los propietarios del bote y la confrontación física fue llevada a cabo horas antes de la comisión del hecho punible, ..." (F. 419).

Luego del análisis de los argumentos presentados por el recurrente, la Sala pasará a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso, sólo sobre los puntos de la Resolución a que se refiera el recurrente.

La actuación de la defensa del sindicado en la presente causa penal, tiene su génesis en virtud del poder general para pleitos o judicial, a favor de **Daysi Estela Sánchez Bethancourt** y José Alvarez Cueto, otorgado por **CARLOS WITTGREEN**, mediante Escritura Pública #4544 de 29 de marzo de 1990, según consta en Memorial presentado por la firma forense Padilla y Asociados, debidamente certificado por el Registro Público, visible a foja 314 del expediente.

La licenciada **Daysi Estela Sánchez B.**, en su escrito de sustentación de apelación, sugiere que se favorezca a **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, con un sobreseimiento definitivo; y que, a fin de descubrir a los posibles autores, si es que a estas alturas es posible determinarlos.

> "se ordene la ampliación del sumario. (sic) y ello es así porque de la lectura de las piezas que componen el sumario; si acaso, surgen meras sospechas sin fundamento legal alguno contra la Persona de CARLOS WITTGREEN como supuesto autor, que nacen precisamente de la relación de enemistad entre WITTGREEN y los supuestos propietarios de la embarcación siniestrada. ...
>
> Para la dictación de un auto de Llamamiento a juicio, que involucre a una o varias personas, no basta con que se compruebe la existencia del hecho punible, sino que es necesario que surjan graves indicios lcontra (sic) alguno o algunos como supuestos autores del delito (art. 2222 del Código Judicial).

> El imputado y el señor Galindo, sostuvieron una pelea (sic) el mismo día que el barco fue incendiado, una confrontación entre dos hombres que terminó después de unos breves puñetazos. Este hecho por sí solo no constituye un indicio y menos indicio grave que afecte a ninguno de los dos contrincantes personales y políticos ya que si en el supuesto de que a (sic) Wittgreen ese día hubiese tenido un atentado contra su vida o sus bienes, no habría razones para investigar al señor Galindo.
>
> Carlos Wittgreen, al momento en que se dice ocurrió el hecho se encontraba distante del muelle y pruede (sic) probarlo,más no se le ha dado la oportunidad amén de que el Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba o vínculo de causalidad entre el hecho objetivo y la persona de CARLOS WITTGREEN A. ..." (Fs. 534-535).

El representante de la Acusación Particular, Licenciado Rafael Rodríguez A., contestó el traslado del escrito de sustentación de apelación, en los términos siguientes:

> "Somos del parecer que contrario a lo vertido por la defensa en el sentido de que estamos de acuerdo con el tribunal, ya que si (sic) existen méritos para llamar a responder criminalmente al señor CARLOS WEETGREEN (SIC) ANTINORI, existe un hecho delictivo comprobado, y además hay suficientes indicios de que el señor acusado tuvo participación en el ilícito, ya que, aunque la defensa no le parece suficiente el hecho de que hubo una 'riña' entre el dueño de la nave y el señor WEETGREEN (SIC), nosotros nos preguntamos que (sic) coincidencia que después de la pelea ocurre el penoso y lamentable hecho. ... .
>
> Si (sic) hay los requisitos necesarios de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2222 del Código Judicial para llamar a juicio, pero si (sic) debe ser necesario que se ahonde más en la investigación, debe hacerse para que no

haya dudas de que el señor WEETGREN (SIC) ha sido llamado a juicio porque existe mérito suficiente para ello. ..." (Fs. 546-547).

La Fiscal Primera Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciada Cecilia R. López F., en contestación de traslado de 30 de mayo de 1995 (fs. 538 a 542), disiente del criterio esbozado por el Tribunal Superior, y opina que el auto apelado debe ser modificado, y en su lugar, proferirse un sobreseimiento provisional, a favor del señor **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2211 del Código Judicial, dejando así abierta la posibilidad que, de surgir nuevos elementos en relación a este caso, pueda reabrirse la investigación, en tal virtud realizó las siguientes consideraciones:

> "De las piezas procesales existentes se han acreditado dos hechos fundamentales: El primero la presencia de mano criminal en la muerte del señor **FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ** y el segundo el incendio intencional provocado en el Yate Casimiro II el día de la muerte del señor Vásquez, con lo que se crea una reacción (sic) estrecha entre uno y otro hecho. Por otro lado del testimonio del señor **RAMÓN MARTÍNEZ** se desprende un indicio de la posible participación de efectivos militares en el incendio de la nave, pero el mismo no se ha reforzado con otros medios probatorios por lo que no esta (sic) acreditado este último hecho.
>
> En cuanto a la persona de **CARLOS WITGREEN** (SIC) si bien se ha establecido que el mismo sostuvo una pelea con el señor **GABRIEL LEWIS NAVARRO** en horas antes del fuego que consumió la embarcación **CASIMIRO II** no existe hasta el momento ningún otro elemento que permita vincularlo de manera directa a la muerte del señor **FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ.** Esto es así ya que el solo hecho de haber sostenido una pelea con el propietario de la embarcación que cuidaba el

> occiso, no es indicador de que fuese él quien le ocasionaba (sic) la muerte al mismo.
>
> En este sentido nuestra Ley procesal exige en el artículo 2222 que además de la plena prueba de la existencia del hecho punible, concurra cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad o graves indicios que vinculen a determinada persona para que haya lugar a seguimiento de causa contra esta (sic).
>
> Lo anterior nos hace discrepar de la apreciación que en derecho hiciera el Fiscal Superior a quien correspondió realizar la Vista Fiscal el día 30 de noviembre de 1990 y en la cual se señalaba que:
>
> 'Analizados el conjunto de diligencias acopiadas a la presente instrucción, en definitiva las circunstancias que rodearon los hechos que originaron el incendio del Yate Casimiro II y posterior hallazgo del cadáver de la persona que lo custodiaba en horas de la noche con huellas evidentes de violencia son signos inequívocos que en la ejecución de estos actos se vio la participación dolosa de terceras personas, y de momento, en atención a los incidentes escenificados entre los señores CARLOS WITGREEN (SIC) y GABRIEL EDGARDO LEWIS NAVARRO, éste (sic) último miembro de la Junta Directiva de la compañía propietaria de la neve (sic) incendiada, estimamos cierta gravedad que a nuestro juicio, salvo mejor criterio, el prenombrado CARLOS WITGREEN (SIC), debe ser encausado penalmente'.
>
> Como puede apreciarse el único elemento que se esgrime para vincular al imputado al hecho el (sic) ilícito es haber sostenido horas antes una pelea con uno de los propietarios de la embarcación. En nuestro concepto dicho elemento no posee la fortaleza ni la gravedad para ser utilizado como fundamento para un Llamamiento a juicio en (sic) contra de (sic) **CARLOS WITTGREEN**. Esto es así ya que (sic) tenerse como cierto dicho argumento nos veríamos precisado (sic) a encauzar por el Homicidio en mención a todas aquellas personas que hubieses (sic) tenido o que mantuvieran algún tipo de disouta (sic) o enfrentamiento con cualquiera de los propietarios de la nave ... ." (Fs. 540-541).

La Sala halla muy atinada la tesis que sustenta la Fiscal Primera Superior del Primer Distrito Judicial en la contestación de traslado arriba transcrita, y por lo tanto, asiste razón al recurrente, toda vez que, el elemento subjetivo del delito, es decir, la presunta responsabilidad del imputado **CARLOS WITTGREEN**, emana principal y únicamente de la manifiesta enemistad entre éste y el occiso en el caso sub-judice y, por lo tanto, no existe hasta el momento, mérito suficiente para el llamamiento a juicio contra **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, según lo establecido en el artículo 2222 del Código Judicial, debido a que, a pesar de que se ha comprobado plenamente la existencia del hecho punible, no puede afirmarse que existan graves indicios contra el mencionado imputado; y, debe decretarse un sobreseimiento provisional a favor del imputado, según lo establecido en el artículo 2211 del Código Judicial, en base a la carencia de otras pruebas, hasta el momento, que demuestren sin lugar a dudas que **WITTGREEN ANTINORI**, sea el responsable de los delitos de homicidio e incendio doloso estudiados en el presente negocio penal.

A fojas 428-429, constan notas suscritas por el Director General de la Policía Nacional, sobre la captura en Lima-Perú del prenombrado **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**.

Y, a fojas 465 a 476, consta copia del fallo de 7 de abril de 1993, mediante el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Lima, Perú, declaró improcedente la extradición solicitada por la República de Panamá, por conducto de su Cónsul General en Lima, contra el ciudadano **CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI**, por los delitos de homicidio e incendio doloso, y ordenó su inmediata libertad.

Examinados y analizados los autos, de acuerdo con los principios legales y la sana crítica, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el Auto apelado de veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y se SOBRESEE PROVISIONALMENTE a favor de CARLOS ANTONIO WITTGREEN ANTINORI, de generales conocidas en el proceso; y, se DECRETA su libertad, en el proceso penal levantado con motivo de la muerte del señor FÉLIX AUGUSTO VÁSQUEZ MEDINA, y el incendio del yate CASIMIRO II, hechos ocurridos el miércoles 17 amanecer del jueves 18 de mayo de 1989, en el Club de Yates y Pesca de Balboa, ubicado en Amador.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN DETRIMENTO DE FÉLIX CÓRDOBA Y DE LESIONES CULPOSAS EN DETRIMENTO DE EDUARDO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Bolívar Dávalos Moncayo anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia calendada 18 de septiembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual, previa revocatoria de la sentencia de 15 de junio de 1994 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial, se condena a Miguel Martín Alvarado a la pena de 24 meses de prisión, como responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas cometidos en perjuicio de Félix Córdoba y Eduardo Castillo, respectivamente.

El examen del libelo de casación, a efectos de decidir sobre su admisibilidad, permite advertir que la historia concisa del caso se presenta de manera deficiente, pues lo que el recurrente hace en este aparte del libelo es impugnar la juridicidad del fallo en la valoración de los elementos de convicción que constan en el proceso.

Como quiera que se trata de un defecto de forma subsanable, se procede a ordenar la corrección del defecto advertido, tal como lo permite el artículo 2444 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, el suscrito magistrado sustanciador ORDENA mantener el presente negocio en secretaría por el término de cinco (5) días, para que el recurrente efectúe la corrección indicada, luego de lo cual corresponderá decidir en definitiva sobre la admisibilidad del recurso.

Notifíquese.

FABIÁN A. ECHEVERS
RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JORGE ALONSO MARTÍNEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 8 de mayo de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al resolver vía apelación la sentencia N° 96 del 17 de octubre de 1994 proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en la cual se declaró penalmente responsable a JORGE ALONSO MARTÍNEZ y se le condenó a la pena de cinco años de prisión por el delito de posesión de drogas en cantidad presumiblemente para la venta (fs. 223-240); la reformó en el sentido de imponer a JORGE ALONSO MARTÍNEZ el comiso de la suma de ciento treinta y cinco balboas con setenta y cinco centésimos (B/.135.75) y la confirmó en todo lo demás (fs. 292-300).

En tiempo procesal oportuno el licenciado Gilberto L. Gómez Cazorla, apoderado judicial de Jorge Alonso Martínez, anuncia y formaliza recurso extraordinario de casación en el fondo, el cual fue admitido por esta Sala en resolución del dos de octubre de 1995 (fs. 331-332). La audiencia oral y pública se realizó el 7 de febrero de este año (fs. 254-271).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El día 21 de diciembre de 1991, como consecuencia de información recibida, se realizó diligencia de allanamiento presidida por el Corregidor de Curundú al apartamento N° 105 del multifamiliar N° 2 ubicado en Santa Cruz, propiedad de Jorge Alonso Martínez, en la cual se encontró dentro del inodoro varias piedras, que según el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas resultó ser cocaína en la cantidad de 5.0 gramos (f. 45). Se incautó además, la cantidad de ciento ocho balboas con treinta y nueve centavos (B/.108.39) en billetes de diferentes denominaciones y monedas sueltas. Además del propietario fueron detenidos Delmira Medrano Ávila y Oscar Meléndez Garibaldi.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

El casacionista en el escrito respectivo (fs. 313-322) invoca dos causales de fondo, la primera de ellas es: **Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la Ley sustancial penal**, prevista en el numeral N° 1 del artículo 2434 del Código Judicial; la cual fundamenta en los siguientes motivos:

> PRIMER MOTIVO: La sentencia del Segundo Tribunal de Justicia que se impugna a través de este recurso al ponderar el acta de allanamiento visible a fojas 4, en relación con la supuesta droga encontrada reconoce que ni en ese documento ni en la certificación del laboratorio técnico especializado en droga se describe la cantidad de la supuesta droga encontrada ni la forma en que estaba distribuida, no obstante erróneamente le reconoce valor probatorio sobre este punto a las declaraciones de IDRIS HELMER SANTANA SÁNCHEZ (fs. 33 a 35), RAMÓN JAVIER HERRERA CASTILLO (fs. 74-75) y BASILIO ANTONIO MENDOZA (fs. 76-77).
>
> SEGUNDO MOTIVO: En declaración jurada rendida por el señor Corregidor de Curundú, visible a fojas 33-34, éste señala que giró instrucciones para que en primer lugar se revisara la cocina del apartamento allanado y a pesar de ello, mientras él y algunos agentes del DIIP cumplían esa tarea, el Sargento Ramón Javier Herrera Castillo por su propia cuenta se dirigió al baño en donde posteriormente dijo había encontrado cierta cantidad de droga. No obstante lo anterior, el Segundo Tribunal Superior al ponderar los testimonios de Idris Helmer Santana Sánchez, Ramón Javier Herrera Castillo y Basilio Antonio Mendoza da por cierto de acuerdo con esas piezas procesales la presencia de droga en la casa de Martínez haciendo una errónea de dichos elementos probatorios.

TERCER MOTIVO: En las declaraciones juradas de Idris Helmer Santana Sánchez (fs. 33-35), Ramón Javier Herrera Castillo (fs. 74-75) y Basilio Antonio Mendoza (fs. 76-77) se deja dicho que cuando llegaron al apartamento de Jorge Alonso Martínez inmediatamente visualizaron a las tres personas que se encontraban dentro y que no vieron en ellas movimiento alguno, además que tampoco escucharon ruidos característicos similar al que se produce cuando se hala la cadena del inodoro. Sin embargo, el Segundo Tribunal Superior al valorar dichos testimonios en torno a la presencia de droga en el apartamento dejó de considerar, erradamente, esas circunstancias y por ello, afirma que la droga pertenecía a Martínez".

Como disposiciones legales infringidas menciona el artículo 904 del Código Judicial y el artículo 260 del Código Penal.

La segunda causal invocada: **Error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable**, prevista en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial. La apoyan los siguientes motivos:

"PRIMER MOTIVO: El fallo impugnado a través del presente recurso, en su parte motiva sostiene que el señor Martínez no se le sorprendió in fraganti vendiendo drogas y que no se encontró en el apartamento material alguno del que se utiliza para la venta de sustancias ilícitas, no obstante, erróneamente califica la supuesta conducta punible como posesión ilícita de drogas en cantidad presumiblemente para la venta.

SEGUNDO MOTIVO: La sentencia del Segundo Tribunal Superior en su parte motiva admite que de acuerdo con doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de droga decomisada (5.0 gramos de cocaína) no es suficiente para fundar un cargo por el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, es decir, por posesión ilícita de drogas en cantidad presumiblemente para la venta, sin embargo, erróneamente el Tribunal califica la supuesta conducta punible como delito de posesión ilícita de drogas en cantidad presumiblemente para la venta".

Señala como disposición legal infringida el artículo 260 del Código Penal.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En la Vista N° 82 del 27 de diciembre de 1995, el licenciado José Antonio Sossa R., con respecto a la primera causal invocada estima no se encuentra acreditada en el proceso penal objeto de estudio. En cuanto a la segunda causal, es del criterio que la misma resulta excluyente con relación a la primera causal invocada, es decir, la de error de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez, que en esta última se cuestiona la valoración de la prueba realizada por el juzgador mientras que en esta causal no se discuten aspectos probatorios, sino por el contrario, se sostiene que el hecho ilícito acreditado en el proceso ha recibido una inadecuada calificación, lo que ha traído como resultado la aplicación de una pena mayor. Al darse esa contradicción, estima que se encuentra impedido para entrar a conocer los puntos o aspectos plasmados por el casacionista en la segunda causal.

Opina que la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial fue emitida conforme a derecho y solicita que no se case la misma (fs. 335-351).

ANÁLISIS DE LAS CAUSALES INVOCADAS

Con respecto a la primera causal invocada: Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la ley sustancial penal; esta Sala ha manifestado que **"También se comete el mencionado error cuando el juzgador se aparte de los principios establecidos por la ley para valorar la prueba, aún**

cuando la propia Ley no tase el valor que debe dársele a la misma. Claro está, el error debe ser manifiesto de manera que si no se hubiere cometido, el fallo sería distinto. Además esta causal requiere que el juzgador haya estimado o valorado el medio probatorio" (Fallo de 7 de junio de 1991).

El primer motivo se refiere al valor probatorio asignado a tres declaraciones testimoniales que contradicen la información que aparece en un acta de allanamiento. El segundo motivo indica que la diligencia de allanamiento rebasó las instrucciones dadas por el Corregidor de Curundú y a pesar de tal exceso el Tribunal le asignó valor probatorio. El tercer motivo señala que los ocupantes de la casa allanada no realizaron acto alguno de esconder las evidencias de droga y pese a ello los agentes afirmaron que encontraron droga dentro del inodoro.

En cuanto a las disposiciones infringidas se menciona el artículo 904 del Código Judicial, en el concepto de violación directa por comisión, no obstante al revisar las consideraciones hechas por el Tribunal al valorar la prueba aportada al expediente aparece un razonamiento lógico que le otorga la fuerza de convicción que le confiere la ley a este tipo de medio probatorio.

Siendo ello así, la violación de la ley sustantiva penal no se produce pues la diligencia de allanamiento, junto a las declaraciones de los agentes de policía y el examen que se hizo de los fragmentos de piedra encontrados, se subsumen en el tipo genérico de posesión de drogas.

En consecuencia no se comprueba la primera causal alegada.

La segunda causal es la descrita por el numeral 3° del artículo 2434 del Código Judicial o sea "cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable".

Dos motivos fundamentan esta segunda causal; el primero se refiere a las consideraciones de la sentencia impugnada, en el sentido de aceptar que el justiciable no fue sorprendido in fraganti vendiendo drogas, ni se le encontró material adicional que lo corroborara.

En efecto, a fojas 293-294 en la resolución censurada el Tribunal enfatiza la escasa cantidad de droga, o sea, 5.0 gramos de cocaína y en cuanto al dinero afirma que Martínez pudo explicar la procedencia del dinero que le fue incautado en la fecha del allanamiento. En lo pertinente el Tribunal hizo estas apreciaciones:

> "En este evento, tal como lo demuestran las copias aportadas por el apelante, nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido que esa cantidad no es suficiente como para presumirse que sea para la venta o traspaso a ningún título. Y, en el caso **subjúdice**, ha de tomarse en cuenta que al procesado Martínez no se le ha acusado de haber sido sorprendido **in fraganti delito**, mientras se dedicaba a alguna de esas actividades; tampoco en ese habitat se encontró material utilizado para la venta de ese tipo de sustancias, aparte de que pudo explicar de manera detallada la procedencia del dinero que le fue incautado en esa fecha.
>
> También, es importante destacar que en el supuesto de que el sentenciado hubiese aceptado la propiedad de la droga y que fue él quien la tiró al servicio, el total de la misma era la que se incautó y aunque no se describió su total distribución, resultó en poca cantidad. Debe recordarse aquí, que ninguno de los que participaron en el allanamiento escuchó que halaran la cadena del servicio ni dijo haber visto movimiento de persona alguna tendiente a deshacerse de la droga, lo que confirma lo anterior".

El segundo motivo señala que el Tribunal de segunda instancia reconoce que el caso subjúdice comprende una cantidad reducida que al tenor de la doctrina

jurisprudencial de la Corte no es suficiente para fundar un cargo de posesión agravada.

En tal aserto le asiste razón al recurrente, pues así consta en la sentencia objeto de este medio extraordinario de impugnación.

Como norma infringida se anota el artículo 260 del Código Penal en forma directa por comisión, al aplicarle el segundo párrafo de la citada norma en vez del primero, que es el que coincide con las apreciaciones externadas en la parte motiva.

La Sala debe indicar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido que las causales probatorias que impugnan los hechos en casación penal son contradictorias con algunas causales de fondo que sin objetar los hechos probados inciden en aspectos sustantivos exclusivamente, pues no es posible censurar la probanza de los hechos -ya en su valoración o existencia- y al mismo tiempo aceptarlos para incursionar en otras circunstancias de la aplicación de la ley sustantiva.

En este caso, el recurrente planteó una causal probatoria basada en pruebas concretas de carácter testimonial, mientras en la segunda ataca la incoherencia que resulta entre la motivación de la sentencia de segunda instancia y las conclusiones a las que la misma arriba. Sugiere dos aspectos distintos, por lo que ante el rechazo de la primera causal, es permisible al Tribunal de casación examinar la segunda causal alegada, independientemente de los argumentos que sustentaban la causal no probada.

En ese orden de ideas, hay un claro error "in iudicando" del Tribunal cuando ubica el hecho delictivo en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, pues la posesión ilícita de drogas a que se refiere el tipo penal del primer párrafo del artículo in comento, debe aplicarse en aquellos casos en que la cantidad es reducida y no se reúnen otros factores que indiquen con absoluta claridad que se destina a la venta. Salvo la cantidad de 5.0 gramos incautada, no aparecen otros elementos que conduzcan a colegir una posesión agravada en este caso.

No pueden perderse de vista los principios que matizan esta fase del proceso penal, entre ellos, el de proporcionalidad, que no sólo tiene que ver con el grado de culpabilidad, sino también otros factores objetivos y subjetivos, como lo es en este caso la cantidad en que recae la acción delictiva de posesión.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia recurrida, en consecuencia, REVOCA la sentencia de 8 de mayo de 1995 y CONDENA a JORGE ALONSO MARTÍNEZ, de generales consignadas en autos, a la pena de dos (2) años de prisión y cien días multa como reo de delito de posesión de drogas.

El procesado tiene derecho a que se le reconozca como abono a pena el tiempo de privación de libertad preventiva que cumplió del 21 de noviembre al 30 de diciembre de 1991 y luego de enero de 1994 a la fecha.

Se ORDENA su libertad por haber cumplido la pena impuesta por este caso, si no tiene pendiente otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A LUIS A. GONZÁLEZ MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Julián García Trejos, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, interpuso recurso de casación contra la sentencia del 18 de septiembre de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en la cual se condenó a LUIS ALBERTO GONZÁLEZ MEJÍA a la pena principal de cinco (5) años de prisión y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal, por el delito de posesión ilícita de drogas en calidad agravada.

A objeto de decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación, se procede a revisar los requisitos establecidos en la ley.

Observa la Sala que el examen hecho por el Tribunal Superior en el primer momento de admisibilidad del recurso, es correcto. Fue anunciado en tiempo oportuno y formalizado dentro del término de ley. Hay legitimación para impugnar, dado que el recurso fue interpuesto por el defensor del procesado, quien dentro del proceso penal tiene calidad jurídica de parte. La sentencia impugnada es una sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por un Tribunal Superior de Justicia y el delito tiene pena de prisión superior a los dos años.

Corresponde **-en este segundo momento de la admisibilidad-** examinar si el escrito de formalización del recurso de casación cumple con los requisitos formales tasados por la ley.

El escrito consta de una historia breve del caso, se invocan tres causales con sus respectivos motivos, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción.

La tercera causal invocada referente **a cuando la sanción impuesta no corresponde a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o de las circunstancias que modifiquen su responsabilidad** (art. 2434, numeral 12° del Código Judicial) presenta tres alternativas. No obstante, el recurrente se limitó a transcribir el numeral respectivo sin elegir la que se ajusta al caso. Se hace necesario se subsane este error formal.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que se mantenga el presente negocio penal en Secretaría por el término de cinco días a fin de que la parte interesada haga la corrección anotada en la parte motiva.

Fundamento Legal: artículos 2443 y 2444 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A JOSÉ FÉLIX REVELLO FERNÁNDEZ Y ALDO ARTURO FERNÁNDEZ MUÑOZ POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE MARTA DÍAZ DE LINARES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**, en su condición de Fiscal Segundo de Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, anunció y formalizó oportunamente recurso de casación en el fondo contra la sentencia fechada 4 de mayo de 1995 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual, se reforma la sentencia N° 101 del 1° de diciembre de 1994 emitida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal.

Al analizar el escrito de casación con el objeto de determinar si el mimo reúne los requisitos legales exigidos para poder ser admitido, observa la Sala que el recurrente ha cometido algunos errores en su formalización.

Así se aprecia que en recurso, el recurrente expresa argumentos y cita jurisprudencias inmediatamente después de las causales lo cual no tiene lugar ya que según las técnicas de casación después de la causal o causales aducidas lo procedente es manifestar los motivos que fundamentan las mismas.

Por otro lado, se observa que los motivos deben ser corregidos en el sentido de que los mismos contengan verdaderos cargos de injuridicidad atribuibles a la resolución impugnada, y no la simple enunciación de hechos que obran en el expediente. En esta sección, el recurrente expresa meras alegaciones, motivo por el cual el casacionista debe corregir éste y todos los errores que se han señalado.

Los defectos puntualizados pueden ser subsanados por el recurrente, motivo por el cual debe concedérsele el término de cinco (5) días con el fin de que el interesado realice las correcciones del caso, de conformidad con el artículo 2444 del Código Judicial.

Siendo así las cosas, el suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la SALA PENAL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA que permanezca por el término de cinco (5) días en Secretaría, a efectos de que el casacionista realice la corrección de los defectos puntualizados, el escrito mediante el cual se interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia dictada el 4 de mayo de 1995 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA
Secretario-Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE AQUILES ESCOBAR, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista, de que trata el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a examinar el escrito de formalización del recurso de casación presentado por el licenciado Gilberto Gómez Cazorla, en representación de **JORGE AQUILES ESCOBAR FRANCO**, procesado por el delito de tráfico internacional de drogas y a quien, el Tribunal de segunda instancia, impuso la pena de diez años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término.

Tal como lo anota el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en su auto de

19 de enero de 1996, en el presente caso concurren los requisitos externos del recurso de casación, por cuanto el mismo fue anunciado y formalizado en término, por persona hábil y dentro de un proceso penal por delito que tiene asignada pena privativa de libertad superior a dos años.

En cuanto a los requisitos internos, se advierte que el casacionista ha presentado una sola causal de fondo, antecedida de una historia sucinta del caso, del que emerge el vicio de injuridicidad que se le imputa, los motivos están acorde a la causal que se menciona y las disposiciones que se dicen fueron violadas por la sentencia impugnada, definen y establecen la pena que corresponde a los casos de tentativa inacabada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado en este negocio y dispone correr traslado del mismo al Señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días, tal como lo prevé el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE CARLOS SMITH FERNÁNDEZ, JERÓNIMO GUERRA SERRANO, FELIPE OSCAR DOWNIE CEDEÑO Y LUIS CARLOS MONTENEGRO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 28 de septiembre de 1994, fue sometido a las reglas de reparto, el expediente penal que contiene los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por los abogados de esta localidad, licenciado Carlos Carrillo Gomila, en representación del señor **FELIPE CAMARGO AMAYA** y el licenciado Lorenzo De Gracia, en representación del señor **JESÚS MARÍA GEORGE BALMA**, sentenciados por delitos contra la libertad y el patrimonio.

El 30 de septiembre del mismo año, el despacho de la Magistrada Sustanciadora dictó la providencia correspondiente en la que se puso en conocimiento de las partes el ingreso del expediente al Tribunal de Casación, por el término de ocho días. Vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial, se expidió el auto de 28 de octubre de 1994 (cfr. fs. 2721-2723) mediante el cual se ordenó la corrección de los recursos por defectos formales subsanables. Ambos recurrentes procedieron a enmendar el escrito de formalización del recurso dentro del término de ley y el 6 de diciembre de 1994, se declaró la admisibilidad de los mismos y se dispuso correr en traslado el caso al Señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto, en el término de cinco días.

A pesar de que el expediente ingresó a la Procuraduría el 9 de diciembre de 1994, el Jefe del Ministerio Público no emitió concepto hasta el 24 de junio de 1995, mediante su Vista N° 49 de 21 de junio de 1995, la cual aparece de fojas 2778 a la 2867 del expediente.

Estrechamente vinculado a este caso, pero tramitado en cuadernillo separado, se presentó una solicitud de libertad, signada por el licenciado Carrillo Gomila a favor de su defendido y una solicitud de extinción de la acción penal, a favor de ESTEBAN GABRIEL RAMOS MARTÍNEZ, quien fuera favorecido con el

indulto decretado por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo N°469 de 23 de septiembre de 1994. De ambas solicitudes se le corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación, quien se opuso a la primera y en relación con la segunda adjuntó una advertencia de inconstitucionalidad.

Según consta en autos, la primera solicitud sobre la libertad del señor CAMARGO AMAYA basada en que ha cumplido en exceso la pena que se le pudiera imponer por los delitos que se le imputan, fue resuelta por la Sala Segunda mediante resolución de 28 de junio de 1995 (fs. 2887-2889) denegándola y, en cuanto a la segunda solicitud, tan pronto el Pleno resolvió la advertencia de inconstitucionalidad, se dictó el auto de 7 de diciembre de 1995, mediante el cual se declaró extinguida el resto de la pena impuesta a ESTEBAN RAMOS por haber sido favorecido con el indulto presidencial.

Resueltos los incidentes y solicitudes presentadas, se fijó la fecha de audiencia oral de los recursos de casación interpuestos, para el día 31 de enero de 1996. Celebrada la misma, levantada el acta y presentados los escritos que sintetizan las intervenciones de las partes durante la audiencia, se pasa a resolver los recursos de casación presentados.

La narración del curso procesal que se le imprimió al presente expediente en la Sala Segunda de la Corte, era necesaria a fin de aclarar el porqué de la prolongación de su permanencia en el Tribunal de Casación.

Para ordenar el análisis de los recursos presentados en los que se invocan varias causales, empezaremos por el presentado por el licenciado Carlos Carrillo Gomila y posteriormente nos ocuparemos del promovido por el licenciado Lorenzo De Gracia, aunque en la última etapa procesal éste le sustituyó el poder conferido al licenciado Carrillo (fs. 2913).

PRIMER RECURSO

De folios 2724 a 2753 aparece el escrito corregido del recurso de casación presentado por el licenciado Carlos Carrillo Gomila, en representación de FELIPE CAMARGO AMAYA, en cuatro procesos penales acumulados por delitos contra la libertad y el patrimonio en perjuicio de CARLOS SMITH FERNÁNDEZ, LUIS CARLOS MONTENEGRO, JERÓNIMO GUERRA SERRANO y FELIPE OSCAR DOWNIE CEDEÑO.

Mediante este recurso extraordinario se impugna la sentencia de segunda instancia dictada el 27 de abril de 1994, confirmatoria de la resolución apelada y que impone a CAMARGO AMAYA seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, por el delito contra la libertad en perjuicio de JERÓNIMO GUERRA SERRANO, LUIS CARLOS MONTENEGRO y CARLOS SMITH FERNÁNDEZ y lo absuelve dentro del proceso penal seguido por el mismo delito contra la libertad individual en perjuicio de FELIPE OSCAR DOWNIE CEDEÑO.

PRIMERA CAUSAL INVOCADA

Se trata de la causal descrita por el numeral 1° del artículo 2437 del Código Judicial, esto es: la falta de competencia del Tribunal.

Es una causal de casación en la forma.

Los motivos que se expresan, son cinco. El primero alude a la multiplicidad de procesos penales que se le siguen al señor CAMARGO, por las mismas infracciones de la ley penal, cuando fungía como miembro de las extintas Fuerzas de Defensa. Este es un hecho cierto, por cuanto en este expediente aparecen cuatro causas penales acumuladas.

El segundo motivo anota que el recurrente hizo varias solicitudes de acumulación de todos los procesos penales que se le siguen a su cliente. Como se puede apreciar los dos motivos señalados constituyen aserciones de constancia procesal, pero que no inciden en la causal invocada.

El tercer motivo indica que a pesar de la reiteración de las solicitudes en distintas instancias, no se procedió a la acumulación. Si bien es cierto que

por economía procesal la ley prevé los casos en que cabe la acumulación, también hay previsiones normativas que obligan a continuar el proceso más adelantado donde hay coautoría o participación criminal y pueden perjudicarse otros sujetos con la medida, dada la dilación del caso.

En el cuarto motivo se dice que la solicitud de acumulación fue negada en primera y segunda instancia, extremo éste que es válido para comprobar la advertencia del error in procedendo ante los tribunales competentes.

El quinto motivo es una afirmación deductiva, que no fundamenta la causal invocada.

En lo que se refiere a las disposiciones legales infringidas, se anotan los artículos 2001, 2002, 2219 y 1968 del Código Judicial. Con relación al primero, se afirma que fue violado en forma directa por omisión, porque según su opinión entre las causas penales seguidas contra su mandante hay conexidad; no obstante, el numeral 5° del artículo mencionado condiciona la calificación de la analogía o relación de los casos entre sí "a juicio del Tribunal" y que no "hubiesen sido hasta entonces objeto de procedimiento".

El artículo 2002 de la excerta citada, trata sobre el orden en que debe asignarse la competencia de los Tribunales, para conocer de los delitos conexos. Esto significa, que establecida la conexidad de las causas penales pendientes contra un mismo sujeto, se procederá conforme al orden establecido en esa norma. En el caso que nos ocupa, se trata de delitos que son de competencia de los Tribunales de Circuito, que no se iniciaron simultáneamente y que tienen la particularidad de la pluralidad de sujetos con diferentes grados de participación en los hechos delictivos, por lo tanto, se encuentran en distintas etapas procesales.

Respecto al artículo 2291 que se dice fue infringido en forma directa por omisión, cabe anotar que en este caso se acumularon cuatro casos que a ese momento lo permitían, dado su estado procesal y adecuación a las exigencias establecidas en la ley.

En lo que se refiere a la infracción del artículo 1968 del Código Judicial, que reitera una garantía procesal con rango constitucional, la Sala al examinar la naturaleza jurídica de los cargos, se percata que son los Tribunales Circuitales de Panamá, del Primer Circuito Judicial, a los que corresponde el conocimiento de las distintas denuncias formuladas contra el señor CAMARGO AMAYA, de manera que no se registra en este caso la causal de forma invocada.

CAUSALES DE FONDO

El recurrente plantea, además de la causal en la forma, antes examinada, dos causales en el fondo. La primera es la contenida en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial que se refiere a la violación directa de la ley sustancial penal.

En apoyo a la misma, se enuncian siete motivos. Los tres primeros indican que FELIPE CAMARGO ha sido encausado por múltiples procesos penales por delito contra la libertad, los cuales cometió durante 1988, en y desde las instalaciones de las extintas Fuerzas de Defensa. Los siguientes motivos argumentan que en todos esos procesos penales hay identidad de agente, de tiempo, de lugar y de designio criminoso y la violación repetida de una misma norma penal y por lo tanto se concluye, que se hacía acreedor a la unidad de proceso y de pena.

El delito continuado, que tiene sus antecedentes en la legislación romana de la época de Farinacio -quien se oponía a los excesos procesales y la aplicación de la pena capital por dos o más delitos contra el patrimonio-, exige la concurrencia de varios presupuestos de carácter objetivo y subjetivo, sin los cuales esta figura de pluralidad delictiva que se caracteriza por la realización de varias acciones independientes, conectadas temporalmente, con similitudes de ejecución, en infracción reiterada del mismo tipo penal y contra el mismo titular del bien jurídico, no se registran en este caso, porque falta precisamente la identidad de sujeto pasivo.

Por otra parte, tratándose de la causal de violación directa de la ley sustancial penal, las normas que se enumeran como infringidas, deben tener, como sostiene Calderón Botero, el sentido inmanente o el objeto jurídico que la norma adjetiva desarrolla y en la que se fundamenta. Por ello, salvo el artículo 62 del Código Penal que se anota como infringido en forma directa por omisión, las otras disposiciones contienen garantías procesales penales o el procedimiento a seguir en la aplicación del sistema de acumulación jurídica, que no se compaginan con la causal de fondo invocada.

Con relación al artículo 62 del Código Penal, que define el delito continuado, basta recordar que son elementos de esta figura delictiva: a) Unidad de sujeto activo; b) Infracción repetida de una misma disposición de la ley penal mediante pluralidad de acciones; c) Existencia de un mismo designio al ejecutar las diversas violaciones; y d) Unidad del sujeto pasivo o titular del derecho o bien jurídico lesionado; en el presente caso se registran tres de los presupuestos, no así el último que resulta de igual importancia para integrar esta figura de pluralidad delictiva.

La tercera causal es de carácter probatorio y está contenida en el numeral 1° del artículo 2434 del Código Judicial, que se ocupa del error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial. En apoyo a la misma, se exponen siete motivos que cuestionan la valoración de las pruebas testimoniales y periciales hechas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Tal como lo anotó el Ministerio Público cuando se le corrió en traslado el negocio para que emitiera concepto, en la estructuración del recurso de casación presentado, se registra una contradicción al seleccionar las causales de fondo, ya que la primera causal presentada se fundamenta en la aceptación de los hechos probados y sólo cuestiona la aplicación de la ley sustantiva penal, pues estima que el juzgador incurrió en un error in iudicando, de violación directa por omisión. En cambio la segunda causal censura la valoración y apreciación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales incorporadas al expediente en la fase instructoria, a pesar de que en la causal anterior estimó que la valoración probatoria de los hechos era inobjetable.

Dado el carácter técnico de este medio de impugnación extraordinario, y siguiendo las pautas de orientación de la jurisprudencia nacional en búsqueda de la uniformidad de la misma, la Sala estima que el examen de la causal anterior, impide el análisis de la segunda causal de fondo presentada.

SEGUNDO RECURSO DE CASACIÓN

Con un seguimiento muy cercano del recurso presentado por el licenciado Carrillo Gomila en representación del señor FELIPE CAMARGO AMAYA, el licenciado Lorenzo De Gracia, abogado defensor de JESÚS MARÍA GEORGE BALMA, optó por una casación mixta, en la que invoca una causal de casación en la forma y dos causales de casación en el fondo y, por razones metodológicas, el Tribunal de Casación examinará por separado cada una de las causales presentadas.

PRIMERA CAUSAL

Falta de competencia del Tribunal (art. 2437, numeral 1 del Código Judicial).

El recurrente elabora cinco motivos para fundamentar la causal alegada, refiriéndose a la existencia de varios procesos penales contra su defendido, que acusan violación de una misma disposición penal y a la negativa de los Tribunales de primera y segunda instancia en aceptar y proceder a la acumulación solicitada, lo que deviene en falta de competencia del tribunal que falló estos casos sin esperar la acumulación.

Las disposiciones legales que se consideran infringidas son los artículos 2291, 2294 y 2003 del Código Judicial. Respecto al primero, se explica que fue violado de manera directa por omisión al no considerar sus presupuestos dentro de la realidad procesal que pudieran favorecer al señor GEORGE BALMA.

Si bien es cierto que de manera aislada, podría arribarse a la conclusión que le asiste razón al recurrente en cuanto a la infracción de la norma citada, la interpretación de la ley adjetiva y sustantiva penal debe hacerse en forma sistemática, tomando en cuenta la ubicación, especialización y relación de la materia dentro del cuerpo orgánico de la legislación codificada. La situación procesal que se recoge en este caso, es el de la acumulación de cuatro expedientes que vinculan a las personas como sujetos activos en la comisión de hechos punibles contra distintas víctimas.

Sobre la segunda norma que regula el procedimiento a seguir cuando uno de los procesos se encuentra cursando la segunda instancia en un Tribunal Superior, en el caso de autos, el recurrente no ha precisado dentro de las fases procesales cumplidas, de qué manera se produjo la situación regulada por la norma mencionada.

Con relación a la tercera disposición citada, o sea, el artículo 2003 del mismo código, que se refiere a los casos en que no procede la acumulación, se afirma que fue violada en forma directa por omisión. No obstante, hay constancia de que el expediente con acumulación de cuatro procesos penales se resolvió en septiembre de 1993 en primera instancia, en abril de 1994 en segunda instancia, sin que aparezca una solicitud de unificación de penas y, por el contrario, tal como se anotó en los primeros párrafos de esta sentencia, los incidentes y solicitudes presentadas retardaron al máximo la celebración de la audiencia de casación, que motivó el ingreso del caso a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDA CAUSAL

Error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica violación de la ley sustancial (art. 2434, numeral 1° del Código Judicial).

La causal es fundamentada a través de diez motivos, que contienen apreciaciones subjetivas del casacionista y luego en forma genérica alude a la prueba testimonial, sin precisar folios, ni individualizar las pruebas que dice fueron mal o indebidamente apreciadas por el Tribunal.

Tratándose de una causal probatoria, es indispensable que se puntualicen los vicios de injuridicidad en que se incurrió con relación a cada medio de prueba que, según el recurrente, fue apreciado erróneamente por el Tribunal Superior.

En cuanto a las disposiciones legales que se enumeran como infringidas, se anota el artículo 904 del Código Judicial, cuyo texto recoge pautas o principios generales que determinan el sistema de valoración probatorio que sustenta nuestra legislación. Esta norma, no concreta un criterio de apreciación de la prueba testimonial, que no fuera tomado en cuenta por el juzgador.

Sobre el artículo 907 que señala una apreciación probatoria sobre el testimonio de referencia, en el caso de autos, al revisar el texto del fallo recurrido, se advierte que el testimonio de FITZ GIBSON PARRISH no se adecúa a la norma citada, porque sus deposiciones versan sobre hechos apreciados sensorialmente por percepción propia y no a base de referencia alguna.

En cuanto a la violación del artículo 967 del Código Judicial que señala cómo se debe apreciar la fuerza probatoria del dictamen pericial, el recurrente al explicar el concepto de la infracción hace una referencia genérica a dos dictámenes médicos, uno que emana del Instituto de Medicina Legal y otro de un médico psiquiatra en ejercicio privado, pero no concreta en qué forma la inaplicación de la norma a la prueba mencionada, incidió en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

También se cita la violación del artículo 844 que trata sobre el valor y formalidades que deben llenar los documentos privados. Al señalar el concepto de la infracción, omite el señalamiento exacto del folio que contiene los documentos tachados y se limita a mencionar los "documentos aportados" sin ninguna especificación, lo que impide su consideración en este análisis.

Por último, se mencionan los artículos 38, 160 y 181 del Código Penal. La primera norma forma parte del primer libro del Código Penal al abordar el tema de la autoría y participación criminal, el segundo artículo integra el Capítulo III del Título II del Libro II de la excerta citada, que trata sobre los delitos contra la libertad individual y el tercero, forma parte del Capítulo I del Título IV que tipifican las figuras delictivas contra el patrimonio económico. Con relación a la cita de estas disposiciones, cabe recordar que las normas sustantivas penales en las causales de tipo probatorio, resultan violadas como consecuencia de la infracción de las que regulan el valor y fuerza probatoria de los medios de convicción, o sea, de la violación de las normas adjetivas. Es lo que los autores identifican y denominan como violación indirecta de la ley sustantiva penal, porque ésta sólo se produce cuando ha tenido lugar la violación de la norma adjetiva. No siendo ello así en el caso que nos ocupa, tampoco ocurre la infracción de las normas penales citadas.

TERCERA CAUSAL

Cuando se haya procedido por delito que requiera acusación particular, denuncia o querella de persona determinada, sin la previa acusación, denuncia o querella, que requiere la ley (artículo 2434, numeral 7 del Código Judicial).

El casacionista plantea cinco motivos para sustentar la causal invocada, señalando como errores in iudicando el hecho de que su defendido era servidor público al momento en que se produjeron las denuncias penales en su contra y que tal calidad no fue considerada para aplicarle las normas sobre procesos contra servidores públicos.

En relación con los motivos expuestos, la Sala recuerda que los requisitos formales de procedibilidad en los procesos contra los servidores públicos, referidos a la previa denuncia o acusación, según jurisprudencia reiterada de esta Superioridad y en correcta interpretación del sentido y alcance de los artículos 2468 y 2471 del Código Judicial, sólo es válida tratándose de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de su destino, no así en relación con otro tipo de delitos. El presente expediente recoge cuatro procesos penales que versan sobre delitos contra la libertad y contra el patrimonio y por tanto, los mismos son perseguibles de oficio, bastando la denuncia como impulso inicial de la acción penal.

Así las cosas, la sentencia recurrida no infringe el artículo 2471 del Código Judicial, pues el señor GEORGE BALMA no fue denunciado ni acusado por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos y por ello, no era un requisito de procedibilidad la presentación previa de acusación particular, denuncia o querella para que prosperara la investigación de los cargos que se le imputaron.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AMÍLCAR SAMUDIO VEGA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA (EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTES FONDOS) EN PERJUICIO DE PRODUCTOS AVÍCOLAS PANARICO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de 8 días establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en la forma interpuesto por el licenciado LUIS A. MORENO H., en su condición de abogado defensor, contra la sentencia de 5 de octubre de 1995 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El recurso ha sido propuesto por persona hábil, en tiempo oportuno y la sentencia contra la que se promueve es de aquellas susceptibles de impugnación, ya que se trata de delito de Expedición de Cheques sin suficiente provisión de fondos, cuya pena de prisión es superior a dos años.

No obstante lo anterior, observa la Corte defectos formales que inciden desfavorablemente en la admisión del recurso.

El escrito que contiene el recurso debe reunir, según el artículo 2443 del Código Judicial, los siguientes requisitos:

a. Historia concisa del caso;
b. La causal o causales que se invocan; y,
c. Especificar los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.

En el negocio que nos ocupa, el casacionista no ha cumplido el patrón señalado en el párrafo que antecede, ya que omitió la exposición de la historia concisa del caso, así como el señalar el concepto de la infracción de la norma violada, requisitos claramente establecidos por la ley, razón que hace que este recurso sea inadmisible.

También omitió señalar el concepto en la infracción de la norma violada.

Según el artículo arriba mencionado, de no concurrir los requisitos "de que se deja hecha mención, la Corte se limitará simplemente a negar la admisión del recurso".

En mérito de lo expuesto, Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE que el recurso de casación presentado por el licenciado LUIS A. MORENO H. en representación del señor AMÍLCAR SAMUDIO VEGA.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN DETRIMENTO DE FÉLIX CÓRDOBA Y DE LESIONES CULPOSAS EN DETRIMENTO DE EDUARDO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante providencia calendada 5 de marzo de 1996, se ordenó que el libelo de formalización del recurso de casación propuesto por el licenciado Bolívar Dávalos Moncayo permaneciera en Secretaría por el término de cinco días, a fin de que el recurrente corrigiera el libelo del recurso en los términos que le fueron indicados (fs. 396.397).

Como quiera que en la Secretaría de la Sala Penal se recibió el libelo corregido por la defensa técnica (fs. 398-403), corresponde ahora, entonces, decidir sobre la admisibilidad del recurso extraordinario propuesto.

El examen del nuevo libelo permite advertir que el recurso ha sido interpuesto contra sentencia de segunda instancia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito que tiene señalada pena de prisión superior a los dos años. De igual manera, se comprueba que la resolución impugnada es de las que admite el recurso, el que ha sido interpuesto en tiempo oportuno, y que en él se expone con claridad la historia concisa del caso.

De otra parte, se observa que el recurrente anuncia dos causales de casación en el fondo, correspondientes a: "ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, LO QUE IMPLICÓ INFRACCIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL PENAL" (f. 382), y "SANCIÓN DE UN DELITO, NO OBSTANTE EXISTIR ALGUNA CIRCUNSTANCIA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD" (f. 385).

En lo que concierne a la primera causal invocada, el casacionista aduce como fundamento cinco motivos. No obstante, la Corte advierte que sólo el segundo y tercer motivos contienen cargos concretos de injuridicidad, puesto que en el **primero**, **cuarto y quinto motivos** el recurrente sólo se limita a indicar que la sentencia impugnada no evaluó correctamente las pruebas testimoniales y periciales que constan en las sumarias, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Sobre este particular, la jurisprudencia ha sostenido que cuando se invoca la causal en estudio resulta indispensable indicar expresamente el folio donde aparece la prueba alegada por el recurrente, que supuestamente no ha sido apreciada por el Tribunal Ad-quem (Registro Judicial, marzo de 1990, pág. 179). Por ello, no basta sostener que la sentencia atacada "incurrió en evidente y manifiesto error" al valorar los testimonios obrantes en autos, sino que es imprescindible que el casacionista haga referencia a la prueba testimonial concreta que ha sido mal apreciada y el folio donde aparece, requerimiento que no atienden estos motivos.

Por lo que hace a la segunda causal, viene apoyada en un solo motivo que, a juicio del casacionista, "se basa en la existencia del anterior, cuando surge el error de la apreciación en derecho de las pruebas suficientemente descritas" (f. 385). Aquí, la motivación de la causal que realiza el recurrente es, sin lugar a dudas, deficiente, pues omite la mención de cargos concretos que destaquen la infracción de la ley sustantiva, fundamentando la causal en la existencia del "error de la apreciación en derecho de las pruebas" (f. 385), de lo cual fácilmente se colige que el motivo no se compadece con la causal invocada.

Ante la comprobación de que la primera causal invocada por el casacionista, es decir, "error de derecho en la apreciación de la prueba", cumple con las formalidades previstas en el artículo 2443 del Código Judicial, procede su admisión, sólo en relación con el segundo y tercer motivos aducidos.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Bolívar Dávalos Moncayo, contra la sentencia de 18 de septiembre de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, sólo en cuanto a la primera causal invocada, con respecto al segundo y tercer motivos aducidos, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación, por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A ANTONIO HERRERA VALIENTE, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EN PERJUICIO DE LUZMILA MURILLO Y DOBELUZ TUÑÓN MURILLO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Firmada el acta de audiencia y presentados los escritos contentivos de los alegatos de las partes, en el término establecido por el artículo 2646 del Código Judicial, se pasa a resolver el fondo del recurso de casación promovido por el licenciado Gasparino Fuentes, en representación de **ANTONIO HERRERA VALIENTE**, dentro del proceso penal que se le siguió por el delito de homicidio culposo.

RELACIÓN SUCINTA DEL CASO

Según constancia de autos, el 4 de marzo de 1992, a las 11:30 de la noche, el señor Antonio Herrera Valiente conducía un autobús por la Vía España y al ingresar a la Vía Porras, en la primera parada, una aglomeración de personas intentó subir al autobús, pues se trataba del día martes de carnaval y había escaso transporte colectivo. Al momento en que arrancó el autobús los pasajeros le gritaron que había atropellado a una señora y en el curso de la investigación también se le imputó el atropello del hijo de la señora Luzmila Murillo González, hechos punibles por los que se le llamó a juicio y se le impuso cuarenta meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas e interdicción para conducir vehículos a motor, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior.

CAUSAL DE FONDO INVOCADA

Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustancial, lo cual influyó en lo dispositivo de la sentencia (art. 2434 numeral 1° del Código Judicial).

MOTIVOS

Para fundamentar la causal de fondo alegada se presentan cinco motivos. El primero se refiere a la apreciación del testimonio del señor Carlos Javier B. Wong, quien se refirió al atropello de dos personas que él había presenciado a una distancia de 20 metros, la noche del martes de carnaval de 1992; sobre este punto la Sala advierte que ese testimonio fue incorporado al expediente el 23 de septiembre de 1992, a pesar de que el sumario se inició el 4 de marzo de ese año. El segundo motivo alude al dictamen del perito Guillermo Ferrufino, quien, según el recurrente, incurrió en contradicciones; sobre esta apreciación de un dictamen post facto, en el texto de la sentencia el Tribunal de segunda instancia no aparece que éste basara su decisión en un sólo elemento probatorio. El tercer motivo se refiere al peritaje de la abogada Maribel Del Rosario Vega Vega, basado en el testimonio de Carlos Javier Batista Wong. Sobre este motivo, cabe anotar que el peritaje incorporado a los autos se le asignó fuerza probatoria en relación con los otros elementos de juicio incorporados a los autos y sólo alcanzó relevancia para calificar si la maniobra realizada por el conductor del autobús se ajustaba o no a los reglamentos de tránsito y al deber de cuidado en la actividad u oficio que desempeñaba en el momento en que ocurrió el atropello. El cuarto motivo hace énfasis en la declaración del agente de tránsito, Eduardo Antonio Sánchez Domínguez, pues se afirma que su testimonio no fue analizado conforme a las reglas de sana crítica. En efecto, al revisar el texto de la sentencia censurada se advierte que se menciona la declaración del agente de tránsito en la narración de los antecedentes y al entrar a los aspectos de fondo, se descarta su versión porque no estaba en el lugar de los hechos, se basó en informes de los pasajeros y su conclusión sobre la culpabilidad de la occisa compete a los Tribunales de justicia, no obstante, nada se dice sobre los aspectos que sí fueron apreciados sensorialmente por este testigo, especialmente sobre el traslado de los cuerpos de las personas supuestamente atropelladas, pués el agente de tránsito expresó que al apersonarse al lugar solamente encontró el

cuerpo de la señora Luzmila Murillo. El quinto motivo es un alegato conclusivo, no así un hecho de fundamentación de la causal probatoria alegada.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista señala cinco artículos violados por la sentencia de segunda instancia, a saber: 770, 904, 908 y 967 del Código Judicial y el 133 del Código Penal.

Respecto al primer artículo, que dispone cuáles son los principios de valoración de las pruebas, el recurrente omite señalar el concepto de la infracción y en la explicación de la violación por el Tribunal, afirma que éste no apreció la prueba testimonial ni la pericial conforme a esa regla de valoración probatoria. Dado el carácter eminentemente técnico de este recurso, tal omisión impide su análisis porque el lenguaje utilizado en la sustentación del concepto de la infracción es más propio de otra causal probatoria, cual es el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

El artículo 904 del Código Judicial que se cita como infringido, reitera la necesidad que el juzgador se ciña en su apreciación del caudal probatorio a las reglas de sana crítica, especialmente en cuanto a las circunstancias y motivos que corroboren o debiliten la fuerza probatoria de los testimonios. En el caso de autos, el Tribunal valoró las dos declaraciones que obran en el expediente: la de Batista Wong y la del agente de Tránsito, pero no tomó en cuenta las circunstancias y motivos para corroborar la versión de cada uno de ellos, especialmente en cuanto al número de personas atropelladas por el autobus que conducía Antonio Herrera Valiente la noche del 4 de marzo de 1992.

El tercer artículo que se anota como violado por la sentencia impugnada, es el 908 del Código Judicial, que se refiere a las contradicciones advertidas en una declaración y su fuerza probatoria. Como se dijo antes, el Tribunal no sólo se apoyó en declaraciones, sino también en dictámenes periciales, protocolos y documentos, por lo que no cabe deducir la violación directa de la norma citada por omisión.

El cuarto artículo del Código Judicial que menciona el casacionista es el 967, que trata sobre la fuerza probatoria de los dictámenes periciales. Sostiene que dicha norma fue violada directamente por omisión porque no se consideró la falta de competencia de los peritos y la falta de uniformidad en sus opiniones; sin embargo, las consideraciones del Tribunal sobre este aspecto se limitan a darle valor probatorio a sus aserciones en cuanto señalan que el procesado atropelló a las víctimas y las arrastró al poner el autobús en marcha, violando el deber de cuidado.

Por último, se afirma que como consecuencia de las infracciones anteriores, se violó el artículo 133 del Código Penal, porque en el expediente consta que el señor Antonio Herrera Valiente causó la muerte de la señora Luzmila Murillo quien se cayó del autobús cuando intentaba abordarlo, no así de la muerte de dos personas como se afirma en la sentencia recurrida. Sobre este señalamiento, la Sala arriba a la conclusión que al producirse la infracción del artículo 904 del Código Judicial, que como se anotó antes, preceptúa la obligación del juzgador de analizar las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan el valor probatorio de las declaraciones de los testigos, se violó indirectamente el artículo 133 del Código Penal. En este caso, el Tribunal no tomó en cuenta el hallazgo y traslado del cadáver de una persona en el lugar en que ocurrió el atropello, información ésta que se deduce de la declaración del agente de tránsito al esperar la ambulancia para el traslado del cadáver a la morgue del Hospital Santo Tomás. Ese error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, condujo a la dictación de una sentencia condenatoria, apoyada en el segundo párrafo del artículo 133 del Código Penal y no en el primer inciso, pues en el expediente sólo se acredita el atropello de una señora por razón de la aglomeración de los pasajeros en la noche del martes de carnaval y debido a la reprochable costumbre de permitir el transporte excesivo de personas en los medios de transporte colectivo. Salvo la declaración de Batista Wong, no existe otra evidencia que permita deducir que el autobús que conducía Herrera Valiente arrolló a dos personas el 4 de marzo de 1992 en ese momento y no hay sustento

probatorio que informe sobre el traslado del cuerpo del joven Dobeluz Tuñón antes del de su madre, pues en el momento en que apareció el inspector de tránsito solamente encontró el cadáver de la señora Murillo y la versión reiterada del procesado relata que los pasajeros le pidieron que detuviera el autobús porque había atropellado a una señora, pero no menciona a otra persona. Es más, en los protocolos de necropsia se informa que el cuerpo de Dobeluz Edgardo Tuñón provenía de Bella Vista, Cuarto de Urgencia, mientras el de la señora Murillo anota como procedencia San Francisco-Vía Porras.

Procede entonces casar la sentencia y entrar a la valoración de los medios probatorios erróneamente apreciados y que, como se expresó en el párrafo precedente, se limita a determinar si de conformidad al caudal probatorio de autos, Antonio Herrera Valiente es autor del homicidio culposo de una o de dos personas. Hay evidencias claras que al violar el deber de cuidado según las circunstancias que le imponía su calidad de conductor de un transporte colectivo, atropelló a una señora o sea a Luzmila Murillo González, quien murió a consecuencia de los politraumatismos sufridos y por tanto debe responder penalmente por ello, conforme lo establece la ley penal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia recurrida y en su defecto DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE a ANTONIO HERRERA VALIENTE, de generales expresadas en autos, como autor del homicidio culposo en la persona de la señora LUZMILA MURILLO GONZÁLEZ y lo CONDENA a dos (2) años de prisión e interdicción del oficio de conductor por igual período, contado a partir del cumplimiento de la pena principal, al igual que a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el lapso de cumplimiento de la pena de prisión.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN DE LAS CAUSAS DE MUERTE DE JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial y el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro de las sumarias en averiguación de las causas de muerte del menor JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA.

En cuanto a los antecedentes del caso bajo estudio, según se desprende de la Vista N° 56 de 18 de mayo de 1995, emitida por la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial,

> "... este negocio recibió su impulso procesal en la Personería Segunda Municipal del Distrito de David, Provincia de Chiriquí, el 29 de noviembre del año próximo pasado -1994-, al recibirse del Hospital Rafael Hernández información telefónica que a ese nosocomio había ingresado, procedente de Santiago, el señor JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA, el 24 de ese mes de noviembre, y que había muerto el 28 del mismo mes y año, a las cuatro de la mañana (4:00 a. m.).
>
> En las diligencias procesales iniciales (fs. 3-7) el Funcionario de

> Instrucción primario interrogó al señor JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA CRUZ, cuando inspeccionaba el cadáver de Batista Batista en la morgue del Hospital José Domingo De Obaldía, quien manifestó que el cadáver era el de su hijo JOSÉ SEBASTIÁN, de quince (15) años de edad, estudiante del primer Ciclo La Peña de Santiago, habido con ENILSA EVELIA DE BATISTA y en cuanto a la presunta causa de muerto de su vástago dijo lo lo (sic) que textualmente se transcribe:
>
> 'En relación a lo sucedido es que el día martes 22 de este mes, a eso de las siete de la noche, se le llamó la atención por parte de su mamá, porque le pegó al hermanito más chico o sea (sic) él quiso poner orden, este (sic) mi señora lo hizo verbalmente; yo no me encontraba en casa, esto fue lo que me dijo mi esposa. Entonces a eso de las tres de la madrugada mi hijo me llamó y me dijo que se sentía mal estaba vomitando y tenía escalofrío (sic) y en eso cuando mire (sic) le preguntó que qué había comido o tomado él dijo que había tomado GRAMOXONE y dijo que había sido una cucharada, de ahí nos fuimos al Hospital de Santiago, entonces el día jueves en la mañana o sea el 24 fue trasladado por orden Médica al Hospital Regional de esta ciudad, para hacerle el examen que determinará (sic) la cantidad de veneno que tenía en el cuerpo, falleciendo ayer lunes 28 de este mes, a eso de las cuatro de la tarde'.
>
> En base a que BATISTA BATISTA, llegó al Hospital Regional de David, procedente del nosocomio de Santiago, la Personería Segunda Municipal del Distrito de David, remitió su actuación a la Personería Municipal del Distrito de Santiago, con base a lo normado en el Artículo 1999 del Código Judicial y esta a su vez lo declinó a la Fiscalía de Circuito de Veraguas (fs. 13 y 17), y quedó radicado en la Fiscalía Segunda de aquél Circuito Judicial.
>
> En la Fiscalía Segunda citada, se le recibió declaración jurada a los padres del occiso señores JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA CRUZ y ENILDA BATISTA DE BATISTA (fs. 61-63 y 64-66) y ambos afirmaron que son residentes en La Peña, jurisdicción del Distrito de Santiago, que son los padres del extinto Batista Batista, y que éste al ser regañado ingirió gramoxone y luego fue trasladado de su domicilio al Hospital de Santiago, donde lo internaron tras prestarle los primeros auxilios y al día siguiente lo mandaron para el Hospital Regional de David, lugar en donde expiró al cuarto día de su ingreso. ..." (Fs. 110-111).

El Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), Licenciado Rolando A. Rodríguez Chong, mediante la Vista Fiscal N° 31 de 21 de febrero de 1995 (fs. 95-96), remite la actuación para su valoración legal y sugiere al Tribunal Superior de su esfera de colaboración, que decline la competencia del presente negocio ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, con base en el artículo 1999 del Código Judicial, toda vez que, "... la prueba recogido (sic) establece que el deceso se debió a Intoxicación de Gramoxone, por un actuar propio de BATISTA BATISTA, sin inducción alguna de terceras personas y como la misma ocurrió en la ciudad de David, ..." (F. 95).

Al conocer de la presente causa, para su calificación legal, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante el Auto de 17 de marzo de 1995 (fs. 100-101), acoge la solicitud hecha por el Fiscal Superior de la misma circunscripción territorial y, declina la competencia en el presente caso al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, "por estar debidamente acreditado en autos que el deceso del menor tuvo lugar en el Distrito de David, Provincia de Chiriquí, toda vez que el artículo 1999 del Código Judicial establece que 'En los procesos penales serán competentes los Tribunales de la circunscripción territorial donde se haya cometido el hecho por el cual se procede', por lo que en este caso específico la muerte del menor José Sebastián Batista resulta competencia de ese Tribunal Superior." (F. 101).

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante Providencia de 24 de abril de 1995 (f. 105), ordenó la remisión de la presente

actuación, al Fiscal Superior de turno, a fin de que realizara las diligencias pertinentes y emitiera concepto, siéndole remitido en este caso al Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado Edwin Alvarez C, para los fines de lugar. En este orden de ideas, concluida la etapa de investigación sumarial, la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la Vista N° 56 de 18 de mayo de 1995 antes mencionada (fs. 110-114), luego del estudio de las constancias procesales que integran este cuaderno penal, concluye:

> "... que si hubo o no terceras personas que determinaron a JOSÉ BATISTA BATISTA, a quitarse la vida, la competencia para señalar una cosa u otra, a través de una decisión jurisdiccional es el Tribunal Superior de la circunscripción territorial en que se escenificó el acto que motivó posteriormente el fallecimiento de Batista Batista, sin considerar el lugar en que se materializó el resultado muerte de la víctima.
> ..., tal como se desprende del Artículo 18 del Código Penal que a la letra dice:
>
> Artículo 18: El hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, aún cuando sea otro el momento del resultado'. (El subrayado es nuestro).

Conviene señalar además que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha dicho de manera uniforme que respecto del lugar donde el delito debe suponerse realizado 'se acoge sin reservas el principio de la ubicuidad'. Ello es así porque de manera categórica y sin discusión alguna se admite que el hecho punible se entiende cometido en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción o donde debió realizarse la acción omitida (Crf. Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal. Parte General, XI Edición Edit. Temis, Bogotá, Colombia, 1987, Pág. 71 y Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General, Temis-Ilanud, 1984 P. 49." (Fs. 112-113).

Ante esta situación, el agente instructor antes citado, opina:

> "que el Tribunal de nuestra esfera de colaboración debe inhibirse de conocer la causa que nos ocupa y remitir la actuación a su superior Jerárquico para que dirima el conflicto de competencia que se originará con tal decisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 703 y 2285 y siguientes de nuestra normativa instrumental; ..." (F. 114).

Por su parte, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el Auto de 21 de junio de 1995 (fs. 118 a 121), comparte el criterio esbozado por su colaborador de instancia, el Fiscal Primero Superior,

> "... en el sentido de considerar que como la sustancia que causó la muerte al occiso fue ingerida por éste mientras estaba en el distrito de La Peña, provincia de Veraguas, este hecho determina de manera indubitable la competencia del tribunal.
>
> De la declaración del padre de Batista Batista se desprende como ingirió el occiso la medicina. Y a foja 83 consta el protocolo de necropsia donde se establece como causa de la muerte 'INTOXICACIÓN POR GRAMOXONE'.
>
> Tomando en cuenta estas consideraciones y basándonos en lo establecido en el artículo 1999 del Código Judicial estimamos que las referidas sumarias en averiguación de las causas de la muerte competen al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial." (F. 120).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial se inhibe de conocer de la presente causa penal y, dispone remitir el expediente a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que dirima el conflicto de competencia surgido en este negocio, según lo establecido en los artículos 703-704, en relación con el artículo 2285 del Código de procedimiento.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, Licenciado José Antonio Sossa R., mediante la Vista No. 67 de 27 de septiembre 1996 (fs. 126 a 129), solicita a esta Sala, "que al resolver el presente conflicto de competencia, lo haga adjudicando el conocimiento del negocio al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial." (F. 129).

También, el Jefe Máximo del Ministerio Público, en su emisión de concepto, advierte que:

> "La controversia que ha sido planteada en esta causa penal, consiste en un conflicto de competencia negativo, que es aquél que tiene lugar cuando dos o más tribunales niegan cada uno tener competencia para conocer determinado proceso. ...
>
> ... de conformidad con los artículos 1999 del Código Judicial y 18 del Código Penal, el Tribunal competente para conocer del caso sub júdice (sic), lo constituye el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, toda vez que el hecho de ingerir el gramoxone se suscitó en la circunscripción territorial de Veraguas, a pesar de que las futuras consecuencias de tal acción se dan en Chiriquí. ...
>
> La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar al aquí planteado resolvió en sentencia del 29 de mayo de 1995, lo siguiente:
>
> 'En conclusión, si se tiene en cuenta que el artículo 18 del Código Penal contempla que 'aun cuando sea otro el momento del resultado', el hecho punible se considera realizado en el momento y lugar de la acción u omisión, queda claro que es del caso fijar la competencia tomando en consideración el momento de la realización del hecho, es decir, por el evento que se desarrolló dentro de la jurisdicción del Segundo Distrito Judicial y no por el lugar donde murió Gil Rodríguez.' (Lo subrayado es de la Corte). ..." (fs. 127 a 129).

La Sala es de la opinión de que, las declaraciones de los padres de JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA (fs. 61-63 y 64-66, respectivamente), y las consideraciones médico-legales y la causa de muerte señaladas en el respectivo protocolo de necropsia (f. 83), comprueban que el día 22 de noviembre de 1994, JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA ingirió gramoxone en el Distrito de La Peña, Provincia de Veraguas, siendo conducido en primer lugar al Hospital de Santiago por sus padres, y posteriormente, el día 24 de noviembre del mismo año, fue trasladado al Hospital Rafael Hernández en la Ciudad de David, Provincia de Chiriquí, donde falleció el 29 de noviembre de 1994. Por lo tanto, está ampliamente comprobado en autos que el hecho que le causara la muerte a JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA, ocurrió en la Provincia de Veraguas, circunscripción territorial ésta en la que es competente el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, según el criterio antes expuesto.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE fijar la competencia para conocer de las sumarias en averiguación de las causas de muerte de JOSÉ SEBASTIÁN BATISTA BATISTA y remitir el presente negocio, para su calificación legal, al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO

DEL RECURSO DE REVISIÓN INCOADO A FAVOR DE ANTONIO JOHNSON BEST. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz solicita se le declare impedida para conocer de recurso de revisión promovido a favor de Antonio Johnson Best, reo del delito de homicidio cometido en perjuicio de Máximo Salas Márquez.

La petición viene fundamentada en la consideración de que "una de las firmas forenses que representan al señor **ANTONIO FERNANDO JOHNSON BEST**, lo es la **VILLALAZ & ASOCIADOS**, a la cual me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, con algunos de los socios que la componen" (f. 31).

Luego de examinada la solicitud, la Sala considera que la manifestación de impedimento se encuentra comprendida en el numeral 1° del artículo 749 del Código Judicial, por lo que es procedente admitirlo.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura E. Guerra de Villalaz, DISPONE separarla del conocimiento de este negocio y ORDENA la continuación del proceso con el Magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DENTRO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE LA SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PROMOVIDA POR LA LICENCIADA EMMA E. ALBA, EN REPRESENTACIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Magistrada Aura E. Guerra de Villalaz solicita a la Sala se le declare impedida para conocer del recurso de reconsideración interpuesto por la licenciada Emma E. Alba contra auto calendado 2 de febrero de 1996, mediante el cual fue negado el beneficio de fianza de excarcelación a Alfredo López Rodríguez.

La petición se fundamenta en el hecho de que "dentro del expediente principal una de las firmas forenses que representan al señor ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ lo es la VILLALAZ & ASOCIADOS (f. 318) a la cual me unen vínculos de parentesco dentro del primer grado de consanguinidad, con algunos de los socios que la componen" (f. 12).

El examen de la solicitud permite comprobar que la manifestación de impedimento hecha por la magistrada Guerra de Villalaz tiene sustento jurídico en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que es del caso acceder a su reconocimiento.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz y dispone, en consecuencia, separarla del conocimiento de este caso. Procédase, como lo ordena la ley, a la continuación del proceso, con el magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA LCDA. SONIA F. DE CASTROVERDE, DENTRO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO DE JAMES HILARY APOLLO MINOTT CONTRA RUTH HYACINTH THOMPSON. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada **SONIA F. DE CASTROVERDE** manifestó impedimento para actuar como Secretaria de la Sala de lo Civil, dentro del negocio contentivo del recurso extraordinario de casación interpuesto por **RUTH HYACINTH THOMPSON** dentro del proceso de divorcio que le sigue a **JAMES HILARY APOLLO MINOTT**, de conformidad con lo señalado en el artículo 749, numeral 5° del Código de procedimiento.

La manifestante explica que en su condición de Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Familia actuó como integrante del Tribunal que emitió la sentencia impugnada; por lo que solicita se califique el impedimento y la separen del presente caso (f. 123).

Efectivamente, consta que la sentencia de 13 de septiembre de 1995, dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Familia, ha sido impugnada mediante el recurso de casación; y la licenciada Sonia F. de Castroverde formó parte de los tres magistrados que signaron el fallo (fs. 66-70).

El artículo 749 del Código Judicial en su numeral 5° señala:

> "Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;".

Como se aprecia, la norma se refiere al que siendo **juez** o **magistrado** se le adjudique para su conocimiento un asunto en el cual hubiese intervenido previamente, en cualquiera de las calidades que indica. No obstante, le asiste razón a la manifestante porque el artículo 767 del Código Judicial hace extensible las causales de impedimentos a los **Secretarios**.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada Sonia F. de Castroverde y DISPONE llamar al Oficial Mayor (art. 83 del C. J.) para que la reemplace en la Secretaría del Tribunal en el trámite del presente caso.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA

Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUEJA PRESENTADA POR EL LICENCIADO JAVIER ALEXIS QUIROZ CONTRA LA MAGISTRADA ELVIA BATISTA, PRESIDENTA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante entrada N° 61-D, de 4 de marzo de 1996, ingresó a este despacho el expediente que contiene queja presentada por el licenciado Javier Alexis Quiroz contra la magistrada Elvia Batista, presidenta del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En informe secretarial del 8 de marzo de 1996, se pone en conocimiento de la ponencia que "anterior a la formulación de la presente solicitud de reiteración de querella, fue presentada ante ésta Secretaría, específicamente el día once (11) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), una queja por el Dr. Javier Alexis Quiroz M., también contra la Mgda. Elvia Batista" (f. 4), la cual le fue adjudicada, mediante las reglas de reparto, al honorable magistrado José Manuel Faúndes, bajo la entrada N° 16-D.

Como quiera que se trata de dos iniciativas procesales de la misma naturaleza, enderezadas contra la misma autoridad, procede la acumulación de este cuaderno con el primer expediente, atendiendo el orden cronológico del reparto.

En consecuencia, el suscrito magistrado sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA ACUMULACIÓN de los expedientes 16-D y 61-D, a fin de resolverlos bajo una misma cuerda.

Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

INCIDENTE DE OBJECIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Villalaz y Asociados comparece ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de solicitar la reconsideración del auto de 19 de diciembre de 1995, mediante el cual fueron **DESESTIMADAS** las objeciones propuestas contra la resolución N° 10, de 29 de septiembre de 1995, que concede la extradición de Fernando Hernández Arias.

La lectura del libelo mediante el cual se formaliza la solicitud permite establecer, más allá de toda duda, que se trata de los mismos cargos y argumentaciones que fueron inicialmente presentados, los que ya fueron

debidamente ponderados y resueltos por la Sala, como lo atestigua la resolución que ahora se impugna (fs. 170-174), por lo que, frente a la repetición indicada, bastaría con repetir el contenido del fallo que ahora se censura.

A los efectos de conocer de esta nueva solicitud, se puede afirmar que lo medular a considerar guarda relación con el cómputo de términos o plazos legales que han tenido verificativo en este negocio.

El primero de ellos constituye la objeción fundamental, y se refiere al tiempo transcurrido entre la detención de Hernández Arias, practicada con motivo de la solicitud de extradición, y la fecha de formalización de la solicitud por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamerica.

Los letrados que actúan en representación del detenido sostienen insistentemente que el plazo de sesenta días previsto por la ley para mantener en efecto la detención del requerido en extradición fue excedido, ya sea **en dos días**, según afirman en algunas ocasiones, o **en un día**, según lo hacen en otras. A primera vista se trata de una extraña reiteración de lo que constituye un argumento sin sustento alguno, como lo afirma el Procurador y lo sostiene la Sala.

Si Hernández Arias fue detenido el 29 de junio de 1995, el cómputo correspondiente se iniciaría a partir del 30 de junio de 1995, lo que, hasta el 28 de agosto de 1995, fecha de formalización de la solicitud de extradición, arroja un total inequívoco de **sesenta días**.

Sin embargo, por mandato de la ley el cómputo debe ser otro, tal como se anuncia en la resolución recurrida. De acuerdo con el artículo 499 del Código Judicial, "los términos legales corren por ministerio de la ley sin necesidad de que el Juez exprese su duración. **Los de días teniendo en cuenta únicamente los hábiles...**", procedimiento a seguir en esta causa, toda vez que la ley habla de sesenta días como plazo para la formalización de la solicitud de extradición.

En segundo lugar, es preciso referirse al cómputo del término que la ley confiere al requerido, a los efectos de "usar todos los recursos legales que otorguen las leyes panameñas" (numeral 3, art. 27, ley 23 de 1986). Con base en las consideraciones que trae la resolución censurada sobre la vigencia de la ley en el tiempo, es a partir de su detención, cuando debe ser notificado de sus derechos, según la norma en cita -y no a partir de la notificación de la resolución que concede la extradición, según preceptuaba el artículo 2510 del Código Judicial- cuando comienza a correr el término de 15 días que la ley le otorga para formular objeciones. Ese plazo corrió, entonces, desde el 28 de abril de 1995, hasta el 19 de mayo del mismo año, por lo que las objeciones propuestas el 4 de octubre de 1995 resultan a todas luces extemporáneas.

Un tercer término o plazo legal a considerar guarda relación con la formalización del recurso de reconsideración que se examina. Según consta en el folio 175, vuelta, la resolución censurada le fue notificada a la firma forense Villalaz y Asociados el día 10 de enero de 1996 y la solicitud de reconsideración fue presentada el 15 de enero de 1996, es decir dentro del **tercer día** siguiente a la notificación de la resolución que se impugna. De esta manera el recurso interpuesto deviene extemporáneo, toda vez que la ley prevé que "**el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la notificación de la respectiva resolución**" (a. 1114, C. J.).

Por las razones antes indicadas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de reconsideración presentado en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) Rodolfo Palma Guerra

Secretario Ad-Hoc

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Lamentablemente, pero dentro de lo que jurídicamente debe observarse en un proceso penal, es obvio que se alude a circunstancias, elementos y disposiciones que tengan que ver con el proceso.

1. Parto del hecho de que a la altura del tiempo actual, el detenido lleva mas de (100) cien días de encierro.

Alegase que lo que quiera argumentarse, visto que es el primer caso que sobrepasa el término legal.

2. En el proyecto que fue elaborado por mi aduje entre otras consideraciones, que en el expediente había carencia de documentos debidamente autenticados; que no habían en esa instancia evidencia alguna de que el supuesto imputado estuviera envuelto en tráfico de drogas o lavado de dinero producto de dicho tráfico.

Los documentos llegan fuera de tiempo y no era permitible agregarlos a un expediente que estaba ya en proceso.

Por otro lado, el delito imputado a Hernández Arias tiene relación con materia fiscal porque se trataba de impuestos no cubiertos por éste durante su permanencia en los Estados Unidos de Norte américa.

Era óbice entonces que se le concediera entonces la libertad con medida cautelar o por fianza.

El artículo 2508 del código Judicial en su numeral 2 expresa que, "No se concederá la extradición en los casos siguientes: Cuando los tribunales panameños sean competentes para juzgar a la persona cuya extradición se solicite, por el delito en que se funde el requerimiento".

El artículo 2516 del mismo Código citado advierte, "La persona que haya sido detenida en virtud de una solicitud de una extradición podrá prestar fianza de excarcelación mientras aquella se resuelva, en los casos en que la ley panameña concede ese derecho".

Como expresé antes, el delito señalado al extradido, que es fiscal, amerita fianza de excarcelación.

Esta solicitud fue negada y me parece que no se ajustó la negativa a lo dispuesto en la norma que he citado, artículo 2516.

3. Otro aspecto importante que la Sala no debe pasar por alto, por la reacción que pueda venir de parte de los interesados, y que fue omitido sin resolverlo, es el incidente de nulidad de todo el proceso, lo que, repito, no se atendió.

4. Consta en el expediente que la omisión es contraria al procedimiento no se hizo el traslado del expediente para conocimiento del señor Procurador, todo lo cual consta en el expediente.

Resumo mi salvamento de Voto fundado en un estricto derecho, con la advertencia de que respeto el inteligente proyecto del sustanciador.

Véase páginas 164, 165, 166, 169.

Fecha ut supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE QUIRÓS MURILLO Y ASOCIADOS CONTRA EL AUTO DE 31 DE ENERO DE 1996 PROFERIDO POR LA SALA SEGUNDA, DENTRO DEL TRÁMITE DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PROPUESTA A FAVOR DE FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Quirós Murillo y Asociados ha solicitado la reconsideración de auto dictado por esta Sala el 31 de enero de 1996, mediante el cual se revoca el de 23 de enero de 1996, dictado con ocasión del trámite de fianza de excarcelación impetrada en favor de Fernando Hernández Arias.

En el libelo de reconsideración se reitera el argumento central de los apoderados judiciales de Hernández, quien se encuentra sometido a un proceso de extradición, consistente en que a su patrocinado lo reclama la justicia norteamericana por delitos de naturaleza fiscal, de donde resultaría la procedencia del beneficio de excarcelación mediante fianza que se solicita. Según allí también se expresa -en visible contradicción con la afirmación anterior-, el auto que resuelve la solicitud de fianza "debe solo analizar si le asiste el derecho o no a la persona que lo solicita, **no así la circunstancia del delito o propiamente el contenido del expediente jurídico**" (f. 16).

Lo cierto es que, además de constituir un imperativo, tanto lógico como legal, para la decisión de la causa resulta ineludible la consideración concerniente a la naturaleza del delito y al contenido del expediente. En este orden de ideas, el examen de la documentación suministrada por el país requiriente, consultable en el trámite de extradición de Hernández Arias, revela de manera palpable que los cargos que le formula la justicia norteamericana, además de los de naturaleza fiscal, guardan relación inmediata con el hecho de que, junto con otros coacusados, lavó fondos provenientes del tráfico ilegal de drogas, en cantidad que excede los tres millones de dólares.

Por ser esa la realidad procesal, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el recurso de reconsideración propuesto. Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (Con Salvamento de Voto)

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Mi salvamento de voto se fundamenta en el hecho de que en el expediente no aparece concretamente que cantidad de drogas traficó el supuesto imputado Hernández Arias, no están debidamente acreditados los documentos remitidos desde el exterior de acuerdo con nuestras normas legales; por otro lado, la defensa ha adjuntado pruebas que revelan que el extradido solo esta señalado en materia fiscal, que no de drogas; y si ello es así, el sujeto puede ser juzgado en Panamá y la pena a imponer seria de multa.

Por otra parte, estoy informado de que el ciudadano Hernández Arias padece de enfermedades graves que deben ser atendidas en el hospital como se ordenó en base a documentos debidamente acreditados, Médico general de la Cárcel Modelo e Instituto de Medicina Forense.

Interés? Cumplir con los preceptos legales como siempre lo ha exteriorizado la Sala.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ROGELIO MANUEL CLOUGH, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado en su propio nombre por **ROGELIO MANUEL CLOUGH**, detenido en el Centro de Rehabilitación El Renacer, contra la sentencia dictada por el Juez Primero de Circuito, Ramo Penal, que lo condenó a la pena de sesenta (60) meses de prisión, por el delito de tráfico internacional de drogas. Dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El recurrente señala en su escrito a manuscrito lo siguiente:

"En mi expediente, hay puntos dudoso (sic), por ejemplo.

a) La declaración de la señora Vielka Rosa Ledezma, (concubina) en mi contra.

b) La fecha de allanamiento con el (sic) de (sic) el (sic) arresto no concuerda. Fecha de arresto: 23 de abril de 1989 a las 12:00 M. D. (sic).

Allamiento: 24 de abril de 1989 a las 12:00 M. D.

c) El numero (sic) de mi apartamento no concuerda con el del allanamiento. Mi apartamento era el N° 5, en el que se hizo el alllanamiento era el N° 6.

d) En la hoja del allanamiento al final reza lo siguiente: El propietario del apartamento llegá (sic) al final de la diligencia.

e) No existe declaración jurada por la señorita Oriana Acevedo (empleada), donde afirma a (sic) ver (sic) visto la prueba ... ." (Fs. 1-2).

Finalmente el detenido manifiesta que fue perseguido por las Antiguas Fuerzas de Defensa, por su profesión de periodista.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a esta Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, para tales fines, esta Colegiatura corrió traslado del presente negocio, por el término de quince días, al licenciado **Rubén E. Pecchio**, Defensor de Oficio (f. 5). Sin embargo, el Defensor de Oficio designado no presentó escrito alguno durante el término concedido para la formalización del presente recurso.

Ante tal situación, en vista de que la formalización del recurso extraordinario de revisión se encuentra sujeto a los requisitos expresamente establecidos en el artículo 2459 del Código Judicial, y por tratarse de un recurso de naturaleza eminentemente técnica que debe ser presentado por un abogado y que el juez no puede suplir de oficio, la Sala es de la opinión de que

en tales circunstancias no es posible acceder a la solicitud de revisión formulada por el propio detenido **ROGELIO MANUEL CLOUGH.**

En cuanto al silencio por parte del Defensor de Oficio designado para la representación de **ROGELIO MANUEL CLOUGH**, durante el término concedido para la formalización del presente recurso, la Sala opina oportuno hacer ciertas consideraciones al respecto. Siendo que los defensores de oficio prestan un servicio de necesidad pública, como abogados designados "... para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita." (Art. 406 del C. J.), y considerando que el defensor va a la jurisdicción a proteger o reivindicar el derecho de su patrocinado, se colige que éstos deben cumplir con todas las obligaciones que, en general, les impusiere una defensa técnica completa y eficaz, así pues, deberán velar porque se cumplan todas las garantías procesales en favor de sus defendidos, facilitándoles a los mismos la prestación de servicios legales competentes, para lo cual deberán cumplir el poder recibido sin demora y llevar a cabo oportunamente las diligencias que deban ejecutar. En este sentido, si el defensor asume la representación de una persona, no sólo debe cumplir con esa representación sino dedicarse a ella en todo cuanto sea necesario o posible; por lo tanto, lo menos que puede hacer el defensor de oficio es dar una opinión por escrito sobre si el derecho de su representado está o no protegido por el derecho positivo y el probable resultado de la actuación que se pretenda realizar.

A juicio de la Sala, en este caso en particular hay negligencia manifiesta por parte del Defensor de Oficio, toda vez que éste no ha presentado escrito alguno que justifique la falta de defensa legal de su representado, lo que conlleva un supuesto de responsabilidad por daños y perjuicios imputable a dicho abogado defensor. En razón de esto, el Instituto de Defensoría de Oficio debe tomar las medidas pertinentes con el objeto de que se eviten situaciones similares en el futuro.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por ROGELIO MANUEL CLOUGH y, por consiguiente, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A GIL ERNESTO ORTEGA ORTEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 19 de enero de 1996, se recibe en la Secretaría de esta Sala, el escrito de solicitud de recurso de revisión signado por el recluso GIL ERNESTO ORTEGA ORTEGA.

Mediante providencia de 29 de enero se ordenó el traslado del negocio por el término de 15 días a la licenciada Carmen Luisa Tovar Stagnaro, Defensora de Oficio para que represente al recurrente y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente (f. 5).

OPINIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

La licenciada Tovar de Stagnaro, en escrito presentado el 23 de febrero, detalla los puntos relevantes del proceso, expresa que no concurren en el presente caso los elementos que fundamenten la formalización de un recurso de revisión, el cual se presenta única y exclusivamente con base a las causales enumeradas en el artículo 2458 del Código Judicial, dentro de las cuales no se enmarcan las circunstancias que rodea el hecho por el cual fuera condenado el señor Ernesto Ortega Ortega.

El fundamento de su posición se puede sintetizar de la siguiente manera:

1. Que mediante sentencia del 18 de abril de 1994, el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial, condenó a Gil Ernesto Ortega Ortega a la pena de dos años de prisión como responsable del delito de robo.

2. Que como el hecho ilícito se suscito el 8 de septiembre de 1991, se le aplicó lo contenido en el artículo 13 del Código Penal referente sobre la ley más favorable al reo. Es decir, la pena que oscilaba entre los 3 a 5 años de prisión, descartándose las modificaciones que adicionó el artículo 1 de la Ley 15 de 1993, que sanciona con prisión de 4 a 6 años de prisión.

3. Que la pena fue fijada de conformidad con los parámetros del artículo 56 del Código Penal en 3 años de prisión, atendiendo a que no se registraba antecedentes penales y a la facultad consignada en el numeral 8 del artículo 66, en concordancia con el artículo 69 del Código Penal atenuó la pena en una tercera parte (1/3) que representa doce (12) meses, siendo la pena a imponer dos (2) años de prisión.

4. Que se negó la solicitud de la suspensión condicional de la pena, por no cumplir los requisitos indispensables, pero se procedió a reemplazar oficiosamente la pena de prisión por la reprensión pública. Decisión que fue apelada por la representación fiscal y en resolución del 10 de enero de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia reforma la resolución impugnada en el sentido de dejar sin efecto el reemplazo de la pena corta de prisión.

Concluye así, que no procede el recurso de revisión anunciado por su patrocinado (fs. 6-7).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Esta Sala ha señalado que el recurso de revisión **"tiene carácter extraordinario y su interposición debe rodearse de condiciones y requisitos de tipo eminentemente restrictivos. Sólo es viable en los casos que la Ley señala y cuando reúna copulativamente las formalidades legales correspondiente"** (Resolución de 21 de febrero de 1991).

Luego entonces, al observarse que en el caso sub-júdice no se está en ninguna de las situaciones consagradas en el artículo 2458 del Código Judicial, no procede admitir el recurso.

PARTE RESOLUTIVA

Por las razones anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INVOCADO POR ANTONIO FERNANDO JOHNSON BEST, CONTRA SENTENCIA

DICTADA EN SU CONTRA DENTRO DE PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense Villalaz y Asociados, actuando en representación de Antonio Johnson Best, ha interpuesto recurso de revisión con el objeto de que se rescinda la "sentencia de **(18)** años de prisión impuesta por el Segundo tribunal Superior de Justicia en el Juicio Penal seguido a nuestro representado por la muerte de **MÁXIMO SALAS MÁRQUEZ**" (f. 25).

La parte recurrente sostiene básicamente que la sentencia atacada debe ser revisada, ya que el día en que acaeció el hecho de sangre, su patrocinado "portaba un arma de fuego tipo pistola semi-automática **9mm**, Serie **TAB 5008**, Modelo **469**" (fs. 25-26), descripción que no corresponde a "los tres (3) proyectiles (balas) extraídas del cuerpo de **MÁXIMO EDUARDO SALAS MÁRQUEZ** ... de calibre 32 largo (long)" (f. 26).

La Sala procede a examinar el libelo presentado, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad de la revisión que se solicita. En tal empeño, se advierte que el recurrente **no especifica** la causal que le sirve de fundamento al recurso de revisión, entre las que establece el artículo 2458 del Código Judicial. Asimismo, se observa que el memorial de revisión no viene acompañado de pruebas que sirvan de fundamento al recurso, exigencia consagrada por el artículo 2459 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por la firma forense Villalaz y Asociados, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ REYES, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO PECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En estado de resolver se encuentra el recurso de revisión interpuesto por el Licdo. Miguel R. Sifontes en representación de **PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ REYES,** condenado mediante fallo proferido el 15 de noviembre de 1989 por el Juez Segundo de Circuito de Veraguas por ser responsable de la comisión de tres delitos de hurto pecuario, a una pena de sesenta y cinco (65) meses de prisión, e inhabilitación para ejercer funciones públicas por un (1) año.

Fundamenta el actor su recurso, en el ordinal 5° del artículo 2458 del Código Judicial, que establece como causal para interponer el mismo, encontrar -después de la condena- nuevos hechos que, en el mismo o combinado con pruebas anteriores, puedan originar la absolución del sentenciado, o una condena menos rigurosa por la aplicación de una pena menos severa.

Considera el impugnador que han surgido nuevos elementos de juicio que ameritan una nueva ponderación del proceso.

Se deduce de los testimonios producidos en razón del recurso que nos ocupa -según el Licdo. Sifontes-, que **GONZÁLEZ REYES** goza de una reputación intachable; que se le involucró en el hecho según el testigo Augusto Alvarado- por intrigas del Sargento Pedro Pérez.

Dice el recurrente que los otros testigos e incluso uno de los damnificados declaró que jamás ha sospechado del justiciado como autor del ilícito, a quien conocen como honrado, honesto, y trabajador, "propiciando el caso quizás una equivocación de persona."

Luego de interponer su recurso, el Licdo. Sifuentes se ausentó de la litis, por lo que hubo que notificarle, tanto el traslado de apertura a pruebas como el de alegatos, mediante el procedimiento establecido en el artículo 2304 -correo certificado- siendo presentado únicamente el argumento del Procurador General de la Nación.

En dicho alegato, sostenido en la Vista N° 14 del 14 de febrero de 1995, afirma el Funcionario Instructor lo siguiente:

Que "... el no prever la honorabilidad u honestidad del condenado no es motivo de revisión; pues en tal supuesto, la sentencia sigue manteniendo su valor acerca de la responsabilidad que recae a esa conducta delictiva."

Considera el Colaborador que las declaraciones extrajudiciales incorporadas al cuaderno, aunque se combinaran con las anteriores probanzas procesales, no cambian la situación del procesado; están fundamentadas en confesiones de personas que participaron directa e inmediatamente en la comisión de los ilícitos, los que sumados a los elementos de oportunidad, llevaron al juzgador a la convicción de responsabilidad del encartado.

La declaratoria de culpabilidad contenida tanto en la sentencia del Juez Segundo de Circuito de Veraguas, y confirmada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, se fundamentó también en los testimonios de Félix Martínez Camarena, Rufino Muñoz, Ricardo Antonio Camarena y Felícita González, entre otros, así como en las denuncias de los afectados, a más de la actividad laboral del justiciado, cónsona con el delito cometido.

Considera el Jefe del Ministerio Público que si bien los testimonios aportados después de la condena son nuevos hechos, no poseen las características necesarias para enervar el conjunto de pruebas adscritas al caso y examinadas en ambas instancias, y que fundamentó la sentencia.

Por lo tanto, no procede declarar la validez de la causal invocada por el revisionista, porque "... los hechos nuevos que traen los testimonios aludidos, no resultan suficientes por sí solos, ni combinados con las demás pruebas para dar lugar a una revisión, ..."; esa aseveración estableció la solicitud del Ministerio Público, de negar la concesión del recurso que nos ocupa.

Vertidos los elementos principales de la encuesta, se apresta la Sala a emitir su decisión, no sin antes exponer las siguientes consideraciones.

El recurrente fundamentó su impugnación en las cinco declaraciones extrajudiciales que incorporó al recurso, y que fueron prestadas después de la ejecutoria de la sentencia, que según él- fundamentan la causal contenida en el numeral 5° del artículo 2458 del Código Judicial.

Advierte esta Corporación de Justicia que, pese a que las cinco declaraciones son novedosas al proceso, cumpliendo este aspecto normado por el artículo citado, no se compadecen con el otro aspecto de la norma, pues no producen ni la disolución ni la atenuación de la responsabilidad de **GONZÁLEZ REYES.**

Ello es así, por cuanto las declaraciones manifiestan que el justiciado es persona proba, honorable y honrada; dichas afirmaciones constituyen un elemento subjetivo sobre la opinión de la persona del condenado, pero no influyen en la valoración de los elementos objetivos que indujeron a los Juzgadores de ambas instancias a reconocer la responsabilidad del inculpado. El no valorar la honorabilidad y la honestidad del procesado -como lo señala el señor Procurador-, no es motivo de revisión, pues los hechos investigados le restan toda validez a esas atribuciones morales que acompañaban a **GONZÁLEZ REYES** antes de la comisión del ilícito. Es decir, el recurso debe compadecerse con la verdad real del hecho imputado, lo que no se verifica en este caso.

En otras palabras, el "... error de hecho sobre la verdad histórica del acontecimiento delictual ..." que sirve de justificación al recurso de revisión que señala el autor Calderón Botero -y que es invocado el Ministerio Público-, se refiere al error de hecho en los actos materiales que produjeron la acción antijurídica, y no a las consideraciones subjetivas de la categoría del sujeto activo.

En cuanto al segundo aspecto de las declaraciones en comento, **JULIO RICHARD CAMARENA** -f. 54- e **IVÁN CLAVEL DE GRACIA** -f. 55- manifestaron que el justiciado "pudo" haber sido procesado por error o equivocación; es decir, no pueden afirmar categóricamente que no hubo fundamento para la decisión impugnada; esas aseveraciones no pueden restarle mérito a la decisión impugnada.

JESÚS MARÍA MUÑOZ MUÑOZ f. 53 dijo que no tenía conocimiento que hubieran involucrado al sentenciado; esa declaración tampoco demuestra nada, solo que el declarante no tenía conocimiento de la relación de **GONZÁLEZ REYES**.

Es decir, que las declaraciones expuestas no meritan, ni por sí solas, ni combinadas con las otras probanzas procesales del proceso, la revisión del mismo.

Además, señala la sentencia del Juez Segundo de Circuito de Veraguas f. 6 que tanto Félix Martínez como Rufino Muñoz y Pedro González se declararon responsables del delito durante la audiencia, y esa confesión -a juicio del Juzgador- "se ajustan al resto de las pruebas que las involucran a ellos precisamente por las declaraciones que dieron y la oportunidad para delinquir, resultando responsables del hurto ... y Pedro González también por haber organizado la ejecución del delito y la consiguiente realización del animal."

La confesión del imputado le resta efectividad a las declaraciones ya expuestas, tanto en lo referente a su probidad, como a su relación en la comisión del ilícito.

En síntesis, no le cabe otro camino a esta Colegiatura, que rechazar el presente recurso.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el recurso de revisión interpuesto por el Licdo. Miguel R. Sifontes en representación de PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ REYES.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EUFRACIO GIL ALONSO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante manuscrito dirigido a esta Sala, Eufracio Gil Alonso ha propuesto, en su propio nombre, recurso extraordinario de revisión contra "la resolución dictada por el juzgado 4° ... él cuál (sic) se me sentenció a la pena de 16 años de reclución (sic) ..." (F. 1).

Como quiera que la iniciativa procesal anunciada requiere de la intervención de un abogado, el 1 de febrero de 1996 el despacho sustanciador asignó como defensor de oficio del recurrente al licenciado Danilo Montenegro, con el propósito de que "lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 6).

El defensor de oficio designado presentó ante la Secretaría de la Sala Segunda escrito en el cual informa que la culpabilidad de Eufracio Gil Alonso fue declarada por un jurado de conciencia el 21 de diciembre de 1994; que "mediante sentencia dictada el día 20 de febrero de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia le impuso dieciséis (16) años de prisión, sentencia esta que fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. ... También sostuvimos entrevista con el reo ... tendiente a ampliar los señalamientos que hace en el manuscrito" (fs. 7-8). Sin embargo, sostiene el licenciado Montenegro que "no hemos encontrado que en este caso se registre ninguna de las causales previstas en el artículo 2458 del Código Judicial para fundamentar un Recurso de Revisión" (f. 8).

En vista de que el defensor de oficio designado considera que no es factible formalizar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el sentenciado, por cuanto no cumple con los requisitos que a tales efectos exige el artículo 2458 del Código Judicial, no es posible entonces acceder a su petición.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión que, en su propio nombre, interpuso Eufracio Gil Alonso y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS, SINDICADO POR EL DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO PRIVADO (CHEQUE). MAGISTRADA PONENTE: AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 11 de enero se recibió en la Secretaría de esta Sala, el escrito de solicitud de revisión interpuesto -desde la Cárcel Modelo- por el recluso **JOSÉ DE LA LUZ JIMÉNEZ PALACIOS**.

Por medio de providencia de 16 de enero de este año, se ordenó el traslado del negocio por el término de 15 días a la licenciada Teresa Ibañéz, miembro del instituto de Defensoría de oficio, a objeto que asista al recurrente, examine su caso y presente escrito de conformidad con las normas que rigen la materia (f. 5).

OPINIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA

La licenciada Ibáñez, en escrito presentado el 22 de febrero de 1996, formaliza el recurso de revisión contra la sentencia N° 73 del 28 de agosto de 1995 en la cual el juzgado Quinto del Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, condenó a su patrocinado, José De La Luz Jiménez Palacios, a la pena de 30 meses de prisión por el delito de falsificación de cheques privados.

Fundamenta la formalización del recurso en ocho hechos que a continuación se resumen:

1. El señor Roberto Mangravita Rago presentó denuncia formal referente al delito de falsificación de cheque privado, en perjuicio de un establecimiento comercial de su propiedad.

2. Las investigaciones del Ministerio Público derivaron en la persona de José De La Luz Jiménez, quien aceptó los cargos y se declaró culpable en la audiencia pública celebrada el 25 de mayo de 1995, con respecto a uno de los cheques presentados.

3. Su patrocinado fue condenado a cumplir la pena de 30 meses de prisión como autor del delito de falsificación de cheque privado tipificado en el artículo 269 del Código Penal e inhabilitación para el cargo de funciones públicas por igual período.

4. Dentro del proceso consta que José De La Luz Jiménez tiene procesos en trámite en el Juzgado I del Circuito Penal, por delitos similares, lo cual es mencionado por el juez a quo en el auto N° 438 del 23 de noviembre de 1995, en la cual niega la conversión de la pena a su representado.

5. De conformidad con el artículo 2291 del Código Judicial, era obligante que el juzgador ordenara la acumulación de los procesos existentes, el desconocimiento o inobservancia de esta disposición, según la Ley 1 de 1995, conlleva a la imposición de sanciones.

6. El artículo 64 del Código Penal establece una tabla para la aplicación de las penas en caso de acumulación, lo que representa una pena inferior a la que le correspondería en el caso de ser impuesta cada una de ellas por Tribunales en forma aislada o independiente.

7. Al conocer la existencia de antemano de otros procesos contra Jiménez Palacios, era obligación del juzgador ordenar la acumulación de lo procesos.

8. El cumplimiento de las reglas de acumulación representa una ventaja para su defendido, por lo que cabe la causal contenida en el artículo 2458 numeral 5 del Código Judicial.

Aporta como prueba nota del Juzgado I° del Circuito Penal, con respecto a los procesos seguidos en ese despacho, en contra de Jiménez Palacios por delitos contra la Fe Pública.

Como fundamento de derecho menciona los artículos 2458, 2003 y s.s. del Código Judicial y los artículos 64 y 269 del Código Penal (fs. 6-8).

FUNDAMENTO DE LA SALA

El recurrente alega como fundamento legal del recurso, la causal quinta del artículo 2458 del Código Judicial, que expresa:

> "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

Como fundamento de hecho, expresa que de haberse dado la acumulación de los procesos que se le siguen a su representado en el Juzgado XI, ello le representaría una ventaja.

Sobre el particular, se tiene que al momento de recibir el Juez Quinto de Circuito de lo Penal el informe de 7 de noviembre de 1995, del Director de la Cárcel Modelo, en el sentido que José De La Luz Jiménez se encontraba a órdenes del Juzgado XI, la sentencia condenatoria había sido notificada a las partes desde el mes de septiembre (f. 122 vta.).

No obstante, al examinar el expediente principal se percata la Sala que cuando el procesado Jiménez Palacios rindió declaración indagatoria el 3 de febrero de 1993, confesó que introdujo varios cheques en diferentes locales del país y del distrito de La Chorrera, incluso proporciona los nombres de algunos. Además, señaló a Juan Carlos Moreno como la persona que le ofreció trabajar en ese negocio, dándole el 50% de cada cheque que cambiara.

Si bien, Moreno Muñoz al ser indagado afirma que fue Jiménez Palacios quien le ofreció ese negocio, indica que en la Fiscalía Octava de Circuito tiene otro caso similar (fs. 56-58).

Luego, mediante auto de 1 de abril de 1993 se le concede a Jiménez Palacios el beneficio de libertad caucionada (fs. 23-25); constituida la fianza de excarcelación se ordena su libertad siempre y cuando no tenga otra causa pendiente (fs. 30-31).

En auto de 17 de diciembre de 1993 se decreta la apertura de causa criminal contra Jiménez Palacios y se sobresee a Moreno Muñoz (fs. 97-101).

La fecha para la audiencia se fijó para el 29 de junio de 1994, pero ninguna de las partes se presentó (f. 106); luego se señaló para el 1 de noviembre de 1994 y no se presentó el sindicado (fs. 108-109). Finalmente, se celebró la audiencia el 25 de mayo de 1995 pero un día antes la defensora del imputado informa que éste se encontraba detenido en la Cárcel Modelo por otra causa (fs. 110-111).

En el acto de audiencia, el imputado responde que se encontraba detenido por un problema con una vecina (f. 114), pero es hasta después de dictada la sentencia que se envió oficio pertinente con el objeto de investigar cuales eran las causas de su reclusión (f. 124).

En oficio N° 3760-SJM la dirección de la Cárcel Modelo, informa que Jiménez Palacios ingresó a ese centro desde el 17 de abril de 1995 por delitos de falsedad que se le siguen (f. 130).

Estima la Sala que desde el momento que se supo de la detención del imputado Jiménez Palacios se debió investigar al respecto. Consideraciones que permiten concluir, que le cabe razón al postulante, en el sentido, que de haberse aplicado las reglas de la acumulación podría dar lugar a una condena menos rigurosa.

Siendo que la formalización del recurso reúne los requisitos de forma establecidos en el artículo 2459 del Código Judicial, se procede a admitir el recurso.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de revisión y se dispone imprimirle el trámite que establece el artículo 2459 del Código Judicial.

Se abre el proceso a pruebas por el término de 30 días.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A OMAIRA CORREA WEDDENBURN Y SHEWIN JEFFERSON SMITH WRIGTH, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DEL MENOR JONATHAN ATENCIO CÁCERES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 13 de diciembre de 1995 el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial declaró penalmente responsable a **SHEWIN JEFFERSON SMITH WRIGTH** por la comisión del delito de homicidio en perjuicio del menor **JONATHAN ATENCIO CÁCERES**; y lo condenó, al igual que a **OMAIRA DIANA CORREA WEDDERBURN,** quien fue declarada culpable por un jurado de conciencia por la comisión del mismo delito, a sufrir cada uno la pena principal de veinte (20) años de prisión. Les impone además, las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término y de manera simultánea con la pena principal (fs. 1213-1242).

Esta sentencia adjunta el salvamento de voto del magistrado Luis Mario Carrasco, quien estima que con las pruebas aportadas al expediente el procesado Smith Wrigth debe ser absuelto (fs. 1243-1247).

Al momento de notificarse del fallo en comento, anunciaron recurso de apelación el licenciado Juan Antonio Morales Gómez, defensa técnica del procesado Smith Wrigth, al igual que la procesada Correa Wedderburn y su abogado defensor (f. 1242 vt.), quienes presentaron en tiempo oportuno el escrito respectivo (f. 1283).

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

El licenciado **Morales Gómez** solicita se revoque la sentencia impugnada en lo referente a la persona de su representado Smith Wrigth y lo absuelvan de los cargos formulados en el auto de proceder.

En su extenso escrito rebate los puntos que sostiene la sentencia objetada para condenar a su cliente y en lo sustancial expresa:

1. Que contrario a lo afirmado en la sentencia apelada, estima que en las tres declaraciones rendidas por su defendido no existe contradicción, sino confusión u olvido al omitir ciertas circunstancias en unas y agregar otras en las posteriores declaraciones; que no se da una variación sustancial y por lo tanto son coherentes y uniformes; que no se debe inferir de esa confusión un indicio de culpabilidad, lo cual es propio de los acusados inocentes, quienes se sienten confundidos por la injusta acusación de un hecho criminal que ellos no han cometido y más aún cuando están privados de su libertad por algo injusto.

2. Que si bien la sentencia apelada afirma que no hay coherencia o uniformidad entre las declaraciones de los testigos de descargo y las versiones de su representado, no dice en que consiste, por lo que opina que se refiere a la hora en que dice su cliente y los testigos que lo vieron en el sector de la esquina caliente y la gran manzana; punto en donde estima hay discordancia. Considera que ello no le resta valor probatorio a esas declaraciones porque no necesariamente tenían que coincidir en la hora exacta.

3. Que la sentencia recurrida se fundamenta en la declaración del sordomudo Eliseo Miranda, testigo que fue manipulado debido a sus limitaciones naturales (sordomudez) y a su condición de analfabeta.

Agrega, que la sentencia sostiene que Eliseo Miranda condujo al funcionario de instrucción a la residencia de "Jef", pero el testimonio de Amílcar Alberto

Villarreal en la audiencia oral da fe que es un testigo prefabricado por la acusación particular para incriminar a su defendido.

Señala el recurrente el testimonio de Rolando Roberto West, quien en el acto de audiencia oral afirma que pasado dos días de la ocurrencia del hecho criminal estaba en el bar donde trabaja, se encontraban otras personas entre ellas "Jef" cuando llegó el sordomudo Eliseo Miranda y se puso a hacer muecas, referentes al rapto o secuestro del niño Atencio Cáceres; pero en ningún momento señaló a "Jef" como la persona que participara en ese rapto o secuestro. Concluye que Eliseo Miranda es un testigo falso.

4. Que la sentencia impugnada se basó en las incriminaciones de Correa Wedderburn, no obstante su declaración verdadera es la consignada del folio 93 al 97 del expediente donde lisa y llanamente, libre, sincera y espontáneamente confiesa el crimen por ella cometido. Lo cual hace no por arrepentimiento sino por las evidencias encontradas en su casa, las cuales la comprometen seriamente.

Que el Tribunal debió apreciar la proclividad de Correa Wedderburn a incriminar a personas inocentes lo que se acredita al tratar de orientar a la pesquisa contra de su propia madre Claudia Malva Wedderburn, con lo que manifiesta a folios 81-82 y lo que se constata en lo declarado por Ramona Cáceres de Atencio (f. 371) y Morene Joyce Wedderburn de Daley, tía de Correa Wedderburn (f. 425).

5. Que la sentencia sostiene que de las declaraciones de Omaira Correa, Romelia Burton de Serrano y del propio Smith Wrigth se desprenden indicios que lo ubican en o próximo a la escena del crimen. El apelante transcribe lo medular de la declaración de su defendido y de los testigos Burton de Serrano y Martínez García, indicando que de éstas se colige que su cliente ha dicho la verdad en cuanto a que ese día estuvo por escasos minutos frente a la casa de Omaira buscando al hijo de ésta y no se bajó de su carro.

Finaliza su escrito señalando que su cliente no tenía motivo para asesinar a Jonathan Atencio; que el móvil del rito satánico es una invención novelesca; que está probado en autos con las pruebas científicas de los doctores Errol Edward y Hugo Moreno que al cadáver de Jonathan no se le extrajeron órganos internos, ni sangre; que el móvil o motivo de la tragedia se encuentra en la declaración indagatoria de Correa Wedderburn (f. 96) al igual que la verdad material y formal que esta expuesta con lujo de detalles (fs. 94-96) por la única autora del asesinato (fs. 1251-1280).

La licenciada Micaela Morales Miranda, Miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, solicita se reforme la sentencia apelada en el sentido de rebajar la pena impuesta a su representada, al estimar que no se ha probado la causa de la agravación del homicidio y mal puede condenársele conforme el artículo 132 del Código Penal, debiéndose aplicar el artículo 131 del código mencionado.

Señala que no ha sido debidamente acreditado en autos el motivo fútil o medios de ejecución atroces y que si bien la acusación particular intentó emerger en este expediente motivos de tipo satánico, tampoco se acreditó este hecho.

Menciona que la experticia forense realizada por el Dr. Hugo Moreno establece que la causa de muerte fue traumatismo cráneo encefálico severo y no existen evidencias de otra lesión anatómica en el cuerpo del menor. Además, que en esta clase de agravación es incompatible con el dolo eventual; que hay una diferenciación entre la acción torpe o brutal y el deseo de ejecutar un hecho con la intención de ocasionar un sufrimiento mayor.

Acota que en el expediente se comprueba que su cliente no tiene antecedentes penales, que brindó cooperación con el despacho instructor en la investigación y ello debió haber sido tomado en cuenta por el tribunal de la causa al momento de estudiar las causas que modifican la responsabilidad penal (fs. 1281-1282).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Rotman Tristán Rodríguez como representante del Ministerio Público, estima que procede la confirmación de la sentencia impugnada. En su corto escrito de objeciones a las apelaciones, al referirse brevemente a lo planteado por el licenciado Morales Gómez opina que esas apreciaciones las considera muy subjetivas y de ninguna manera se puede tomar en cuenta. En cuanto a lo planteado por la apoderada de la procesada Correa Wedderburn, señala que el tribunal a-quo si consideró las circunstancias de la dosificación de la pena que establece el artículo 56 del código penal en favor de la imputada (f. 1240), concluyendo que lo alegado por aquella no se ajusta a la realidad jurídica (fs. 1286-1287).

OPINIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

El licenciado Rodrigo Miranda Morales manifiesta que Smith Wrigth evade admitir -en su primera declaración rendida el 30 de noviembre de 1992- que estuvo en la casa de Omaira Correa en la fecha y a la hora en que se inicia la cadena de hechos; y no es hasta el 10 de diciembre de 1992 cuando amplía su indagatoria que lo señala. Esto se debe según su opinión, a que no le quedaba otra alternativa que aceptarlo porque su propia mujer Vicenta La Ventura Ábrego lo declaró el 7 de diciembre de 1992 (f. 161). Además, constan las declaraciones en ese sentido de Marjorie Romelia Burton de Serrano y Luis Martínez García rendidas el 16 de diciembre de 1992 y el 5 de enero de 1993, respectivamente.

Añade que el testimonio del sordomudo Eliseo Miranda, quien formula directamente el cargo a Jef de haber agarrado y llevado a rastras al niño Atencio Cáceres, precisamente frente a la casa de Omaira y en horas del mediodía, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 2140 del Código Judicial.

Estima también en su escrito que mantienen pleno poder de persuasión los argumentos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando dictó su resolución de 16 de enero de 1995, donde consideró que existen graves indicios que comprometen la responsabilidad de Smith Wright en el homicidio de Atencio Cáceres.

Agrega que existen discrepancias entre los acusados Smith y Correa quienes se inculpan mutuamente y las serias contradicciones en que incurren, así como su negativa a explicar la verdad de lo ocurrido. Concluye expresando que los oscuros móviles de este brutal asesinato no podrán ser desentrañados jamás a menos que uno o los dos criminales juzgados decidan, en un acto de contrición, confesar plena y sinceramente lo que hicieron con la infeliz víctima de sus brutales instintos.

Solicita así, se confirme la sentencia condenatoria proferida contra Smith Wrigth en la justa sanción de veinte años de prisión que les ha sido impuesta a ambos procesados (fs. 1288-1290).

FUNDAMENTO DEL FALLO IMPUGNADO

En cuanto a la responsabilidad penal de Smith Wright el Tribunal señala que sus versiones rendidas en su declaración indagatoria y en la diligencia de reconstrucción de los hechos cae en contradicciones porque difiere en algunas actividades y en el tiempo en que las realizó; que si bien aporta el testimonio de varios conocidos y pariente suyos, se observa que no hay coherencia o uniformidad entre unos y otros. En ese sentido se transcribe algunos fragmentos de las declaraciones de Eraldo Roy Daring Stewart (fs. 202-204), Manuel Filemón Medrano Montes (fs. 206-208), Hupert Nathaniel Robinson Wrigth (fs. 209-212), Leyla Casasola Rayos (fs. 213-215) y George Vivian Rowe Allwood (fs. 220-222).

Se menciona que el testigo Eliseo Miranda relaciona a Smith Wrigth con el menor agraviado el día en que ocurrieron los hechos y conduce al agente instructor a la residencia de aquél.

En cuanto a la diligencia de reconocimiento textualmente consta en el fallo:

> "si bien es cierto que él no reconoció al procesado en la respectiva diligencia de reconocimiento, no menos cierto es que él no negó que el reconocido se encontrara en esa diligencia, sino que mostró confusión y por ello no lo señaló, además de que si la misma no resultó más evidente en cuanto a una conclusión determinada, ello se puede atribuir a la falta de destreza por parte de quien fungió como interprete"

Se apoya en la declaración de la coimputada Correa Wedderburn indicando que si bien en su declaración inicial se autoincrimina, **"hace claros señalamientos s Smith Wrigth, los que mantiene en la diligencia de careo y en la Sala de audiencia (fs. 1008-1019), ocasión esta en que actuó con decisión y firmeza".**

Finalmente para apoyar el veredicto de culpabilidad con respecto a Smith Wright el tribunal a-quo manifiesta:

> "Así las cosas, las pruebas testimoniales favorables a Smith Wrigth, incorporadas en la etapa sumarial (a las que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no les reconoció mayor valor) no han sido complementadas o fortalecidas por las que se incorporaron en la fase plenaria, razón por la que las mismas, en conjunto, no hacen o permiten que prevalezca la presunción de inocencia a favor del justiciable; en tanto que los elementos probatorios en contra del imputado, provenientes del período sumarial, han conservado y hasta aumentado su valor como piezas de convicción, realidad procesal que a la postre lleva a la Colegiatura a la expedición de un fallo condenatorio en contra del enjuiciado, por su participación en la ejecución del delito imputado.
>
> En el sentido apuntado vale señalar que en contra del justiciable militan los señalamientos de la coimputada Correa Wedderburn, quien a pesar de sus relaciones íntimas le ha mantenido y reiterado los cargos formulados, mismos que a lo largo de la actuación no han sido desvirtuados; las incriminaciones del testigo Miranda, que tampoco han sido enervadas a través del proceso, amén de que no existen situaciones o hechos acreditados en autos que vicien o inhabiliten su actuación; los indicios de mala justificación y actitud sospechosa que surgen de la declaración indagatoria del procesado al crear contradicciones en sus propias versiones y de éstas con las declaraciones rendidas por los testigos aportados en el sumario, situación procesal que no corrió mejor suerte en el plenario ya que los señores Mathews, West y Villarreal a través de sus exposiciones no crearon una impresión de veracidad, ya que según esas deposiciones no se agregan nuevos elementos de convicción a la encuesta, incluso resulta sospechosa la reiterada actitud de la defensa al insistir en formular a los declarantes preguntas sugerentes o dirigidas; y, los indicios de presencia o proximidad en el lugar de los hechos y oportunidad o capacidad de delinquir que se desprenden de las declaraciones de Correa Wedderburn, Burton de Serrano, Miranda y el propio Wright".

Se subsumió el actuar ilícito de los procesados en el artículo 132 numeral 3° del Código Penal indicando que el hecho fue ejecutado mediante actos atroces y por motivos fútiles o de escasa importancia. Explica que la muerte de la víctima fue ocasionada empleando medios crueles e inhumanos **la introducción de una toallita en la boca y repetidos golpes en la cabeza con una barra de acero** que han de haberle causado un sufrimiento despiadado e innecesario.

Este tipo penal ejecutado tiene pena de prisión que oscila entre doce a veinte años de privación de libertad ambulatoria. De conformidad con lo normado por el artículo 56 del estatuto penal, el tribunal estimó pertinente establecer en dieciséis años de prisión la pena base aplicable a los procesados.

Luego consideró se daba la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal y de la pena conforme lo regula el numeral 1 del artículo 67 del Código

Penal e incrementa la cuarta parte de la pena base. No observa circunstancias atenuantes modificativas de la pena que deban ser reconocidas a favor de los enjuiciados. Por lo que la pena líquida a imponer -luego de la operación aritmética- quedó establecida en veinte años de prisión. Igualmente se les impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período de la pena principal (fs. 1213-1242).

FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA

Corresponde -luego de la lectura minuciosa de las probanzas procesales- plasmar la decisión de esta instancia.

Primeramente, debemos tener claro cómo surge la investigación con respecto a los procesados.

El niño Jonathan Atencio Cáceres, de 9 años de edad, desapareció el día lunes 23 de noviembre de 1992, después de haber salido de la escuela, aproximadamente un cuarto para las doce, según lo manifestó Leony Bryan -maestra del niño- al padre del menor (f. 24).

Al día siguiente, en horas de la tarde, en el río Changuinola, como a un kilómetro y medio hacia abajo de donde está el Puente Torres, fue encontrado el cuerpo sin vida del menor Atencio Cáceres, dentro de unas bolsas plásticas. Estaba atado, con pedazos de tela color rojo alrededor del cuello, también tenía pedazos de tela con una toalla de bebé introducida en la boca, lo cual consta en la diligencia de inspección ocular, reconocimiento, levantamiento y traslado del cadáver (fs. 4-8) y las vistas fotográficas tomadas (fs. 964-974).

Consta el protocolo de necropsia signado por el Dr. Errol Edwards, Médico Forense Interino de la provincia de Bocas del Toro, quien en sus consideraciones médico-legales determinó: "**la necropsia reveló múltiples heridas en el cráneo, una de las cuales le produjo fracturas de cráneo, laceración cerebral y posteriormente la muerte**" y como causas de la muerte: **laceración cerebral, fractura expuesta en cráneo y trauma craneal múltiple** (fs. 45-57).

Ante la Policía Técnica Judicial, agencia de Bocas del Toro, el día martes 23 de noviembre de 1992 a las 6:00 p. m. se presenta por **voluntad propia** a declarar el conductor de taxi **Manuel Salvador Torres Ríos** de 64 años, quien narra:

> "el día de ayer cuando me encontraba conduciendo mi taxi 1T-129, a eso de las siete y diez de la noche (7:10 p. m), venía procedente del Luzón de Empalme hacia la piquera de taxi La Unión, trayendo un pasajero de aproximadamente quince (15) años, presuntamente estudiante, en ropa civil; llegando a la bodega Torres, me salió una señora de aproximadamente unos treinta y cinco (35) años, vestida de la siguiente manera: pantalón rojo corto, blusa blanca manga corta y un pañuelo amarrado en la cabeza, me hizo seña parando el taxi, que si le podía hacer una carrera, yo le manifesté que estaba para servirle, ella me dijo "espere un momento, voy a buscar un saco, a prudente distancia del taxi como a unos veinte a veinticinco pies, observe que recogió una bolsa de plástico color negra, la misma era grande, ella hizo gran esfuerzo para traerla al carro, ella depositó la bolsa en el asiento trasero del auto, para esto abrió la puerta trasera derecha; le pregunte si quería ayuda, antes de depositar la bolsa, me manifestó que no, que ella podía sola; cuando ella la depositó en el asiento, yo observe la forma de la bolsa, creí que era un puerco de aproximadamente unas cincuenta a sesenta libras, en ese momento sentí la sensación que era un cuerpo humano. Salimos y en la curva del Supermercado Degracia (Loojareg) el mismo ubicado cerca de la bodega Torres, ella me manifestó que la llevara al Puente Torres, al oír esto me extrañe y le dije que a esta hora al puente Torres y le dije que le iba a costar un balboa y ello no dijo nada; cuando iba llegando a la subida para llegar al puente Torres, el auto me pistoneó, no se por qué, ella me manifestó nerviosa

> "cuidado señor" yo le dije que era desperfecto del auto, aparente era un corto circuito, la deje en el Alto de la línea férrea, de este lado del puente, ella bajó el bulto y de nuevo no quiso ayuda; me pagó antes de bajarse y yo di la vuelta y le manifesté al joven pasajero "será que va a tirar ese bulto al río, parece un cuerpo humano o a lo mejor es un puerco" de la cantidad de libras que manifesté antes. Al regresar de nuevo, en la subida hacia Empalme, venía en mano contraria un auto color rojo, relativamente nuevo, observe por el retrovisor que ese auto hizo un semi-alto, rumbo a Almirante, le brindó el auto a la señora que yo había dejado y aparentemente ella aceptó. Yo me vine a dejar al joven pasajero a la piquera, eso fue lo que observe".

Señala además, que dejó a la señora en ese lugar a las siete y veinte de la noche; da su descripción física y afirma que puede identificarla de volver a verla; que la casa donde la recogió pertenece a Luzón de Empalme; que la joven estaba enfrente de una casa cuya pintura color crema estaba bien deteriorada y enfrente de ésta una casa color turquesa y otra verde caña; que debido al movimiento continuo de vehículos el lugar esta bien alumbrado; que cerca de donde estaba ella parada queda la entrada a Coibita. Agrega que observó a la joven nerviosa; que ésta le solicitó el manubrio para bajar el vidrio de la ventana pero él le dijo que estaba condenada y que el aire acondicionado estaba encendido; que no la conoce ni le sabe el nombre. Hace entrega de un pergamino de papel manila que contiene un dibujo del cuerpo humano que tiene el nombre de Jairo González I año con fecha 20/11/92 que fue dejado por el joven pasajero que estaba abordo del taxi cuando le hizo la carrera a la señora del bulto (fs. 69-72).

El joven Jairo Aristarco González Váldez rinde declaración juramentada el día jueves 26 de noviembre de 1992, quien sólo difiere de lo afirmado por el señor Torres Ríos en el sentido que al momento de abordar el taxi iba la señora morena que llevaba la bolsa y una niña que pidió parada frente a la bodega Berta (fs. 84-87).

El conductor Torres Ríos reitera que al joven estudiante lo recogió dando la vuelta por la finca #15 y como aproximadamente a tres cuadras y media recogió a la señora morena (fs. 344-346).

Como consecuencia de lo aportado por el conductor Torres Ríos, se dirigen las investigaciones por el aérea donde afirma recogió a la señora morena con la bolsa negra. Es así, que se le recibe declaración juramentada a **OMAIRA DIANA CORREA WEDDERBURN** el día jueves 26 de noviembre de 1992. Señala que como a las 4:30 p. m. del lunes 23 se enteró por su prima que es vecina del niño Atencio Cáceres que éste había desaparecido; que el martes en la tarde cuando fue a buscar a su hijo a la escuela las maestras estaban llorando y le dijeron que al niño lo habían encontrado muerto; que al niño Atencio Cáceres lo veía predicando en las casas. Afirma que entre las siete y siete y treinta de la noche del lunes 23 se encontraba en compañía de su hijo en casa. Al cuestionársele si por donde ella reside vive una mujer con las características que había dado el conductor Torres Ríos, indica que más adentro de Luzón vive una mujer con esa descripción y cree le dicen Malva Loca y se dedica a vender zapatos y ropa; que ésta frecuenta a los Burton quienes no son buenas fichas; que es de origen costarricense y da su descripción física (fs. 81-83).

A las 9:00 de la noche del jueves 26 de noviembre de 1992 se efectuó diligencia de allanamiento y registro a la residencia de la señora Correa Wedderburn, de la misma se recogió un pedazo de tela color rojo que se encontraba en el baño a objeto de compararlo con los que tenía el cadáver al momento de su hallazgo (fs. 34-36).

Al observar que el pedazo de tela color rojo coincidía con los encontrados en el cuerpo del menor Atencio Cáceres esa misma noche se realizó otro allanamiento a la residencia de la señora Correa Wedderburn (fs. 37-38). En esta ocasión se encontró dentro de la mesita de centro del juego de sala un maletín ejecutivo en cuyo interior se encontraban los útiles escolares del niño Atencio

Cáceres, ante eso, la señora Correa Wedderburn manifiesta: "yo sola no lo hice, también hay otros involucrados" (fs. 39-41). Esa misma noche guía a las autoridades al sitio donde arrojó la varilla con la cual golpeara de muerte al niño Atencio Cáceres (fs. 42-43).

En horas de la mañana del viernes 27 de noviembre de 1992 al rendir declaración indagatoria Omaira Diana Wedderburn confiesa que fue ella quien dio muerte al menor Atencio Cáceres y explica:

> "el día lunes veintitrés (23) de noviembre del presente año, como a las doce y quince de la tarde (12:15 p. m.) Jonathan iba pasando por mi casa, yo estaba sentada en una silla al frente de mi casa, cuando él pasó yo lo llamé y le dije que entrara a mi casa y él entro solo conmigo, una vez que entramos, le di un golpe con la mano abierta, frente a la peinadora, eso fue como a las doce dieciocho minutos de la tarde (12:18) producto del referido golpe, el niño Jonathan, se cayó al piso cuando él se paró estaba medio mareado, le volví a dar dos cachetadas y le dije que no gritara, en eso pensé en dejarlo ir, pero después decidí no hacerlo, porque después se lo iba a decir a sus padres, en eso yo le metí una toalla de bebé que estaba en el baño en la boca a Jonathan con el fin que no gritara, todavía estaba medio tonto del golpe. Después de eso lo puse debajo de la pluma del baño, para que le cayera agua, mientras tanto yo fui a la parte trasera de mi casa donde está la pila de lavar y saque un pedazo de varilla que tenía allí y entré nuevamente al baño y con ese pedazo de varilla lo golpié, por la parte izquierda de la cabeza con fuerza, quiero aclarar que ese fue el último golpe que le di anteriormente, ya le había dado varios golpes en la cabeza, el último golpe que le di, se lo propiné cuando él ya estaba en el suelo. Luego lo dejé en el baño tirado, entre dos a tres horas, mientras tanto yo estaba viendo televisión. Cuando yo me percaté que estaba muerto, busqué un plástico transparente, para envolverlo, además una bolsa azul y una negra, estos plásticos yo los tenía adentro de mi casa, entré al baño con el plástico transparente pero antes de envolverlo yo le até un suéter en el cuello y las manos se las amarré con un trapo rojo, a fin de que ambos trapos lo pudiera unir, con el objeto de que la cabeza, tuviera una mejor posición para que cupiera en la bolsa después que lo até lo envolví de la cintura para arriba, en el plástico transparente, luego cogí la bolsa azul y lo metí pero antes le doblé las piernas y lo metí en la bolsa negra por la parte de abajo. Procediendo a amarrar la bolsa en forma de un bulto, ya iban a ser las cuatro de la tarde (4:00), lo dejé en el baño como hasta las seis y treinta de la tarde, posteriormente salí a la calle, a buscar un taxi dejando el bulto bastante cerca de la calle, paré un taxi como a las seis y cuarenta de la tarde aproximadamente, subí a Jonathan en el puesto trasero junto a mi y le pedí que me llevara al puente Torres y le pagué la suma de B/.1.00 por la carrera y me llevó al mencionado lugar o sea al puente sobre el río Changuinola (Puente Torres), al bajarme del taxi puse a Jonathan en la orilla de la calle, el taxi dio la vuelta y se fue; luego yo tomé a Jonathan y caminé por el puente hasta la primera canasta de la mano izquierda, levanté el cuerpo envuelto de Jonathan y lo dejé caer en el agua y me regresé a mi casa caminando, a ella llegué como a las siete y diez de la noche".

Manifiesta que su comportamiento se debió a que hacía como cinco meses su hijo Dani iba pasando frente a la casa de Jonathan y éste con un pedazo de hierro viejo le cortó la pierna izquierda; que le quiso dar un escarmiento por ello, pero como le había golpeado tuvo miedo que se lo dijera a sus padres y añade que éstos **"creen que sus dos hijos son unos santos es decir ellos son terribles y traviesos"**. Finalmente manifiesta que su intención no era matar al niño (fs. 93-97).

Posteriormente, el 30 de noviembre de 1992 al ampliar su declaración indagatoria da otra versión de los hechos e incrimina como autor a su concubino

Shewin Jefferson Smith Wrigth.

Señala la procesada que desconoce los motivos por los cuales Jefferson Smith cometió el homicidio pero sospecha que la señora Thelma, de nacionalidad costarricense y amiga íntima de Jef, tiene un niño enfermo en Costa Rica y necesitaba unos riñones; que eso lo escuchó de una conversación sostenida por aquellos (fs. 105-111). Luego se le toma declaración juramentada sobre los cargos hechos en su indagatoria contra Smith Wright (fs. 113).

Al practicarse la diligencia de reconstrucción de los hechos el 13 de junio de 1994 la procesada Correa Wedderburn da otra versión de lo acontecido:

> "el día veintitrés (23) de noviembre del 92 a eso de las seis y media (6:30) de la tarde llegó una señora de tez morena traía una bolsa, preguntó donde estaba mi hijo, le dije que mi hijo no estaba, luego me dijo que esa bolsa que había en el portón la recogiera y la llevara al río sin hacer preguntas, yo no estaba vestida como para ir a la calle, ella me amenazó, que si no llevaba la bolsa que estaba en la puerta, me iba a ver con mi hijo, se quedó allí, insistiéndome, chantajeándome y yo asustada entré y me cambié, luego abrí el portón y salí, recogí la bolsa y fui hasta la calle a una distancia estaba un taxi rojo, cuando salí a la calle la señora me acompañó y de la misma distancia que estaba el carro, estaba el señor Jefferson Smith, de allí vino un taxi, se paró y me monté, cuando me monté al taxi la mujer me dijo que no hiciera ningún paso en falso, le dije al señor del taxi que me llevara al río, me llevó hasta el río, cuando llegué le di un dólar él me dijo que estaba bien que ya le habían pagado, allí estaba la señora conjuntamente con el señor Jeff, luego cuando llegué me metí en la primera canasta puse la bolsa en la canasta y gritaron tíralo para abajo y así lo hice, luego de eso me dejaron sola y regresé caminando sola en mi persona no tenía nada contra el niño, no tenía por qué matarlo, la respuesta está entre Jeff, la mujer y el taxero".

Al preguntársele como explicaba que en la inspección ocular indicó dónde se encontraba la varilla con la cual había dado muerte al menor Atencio Cáceres, responde: **"como tiran toda clase de cosa en esa zanja, le dije eso al Personero, fue y metió la mano y sacó la varilla y le conteste que esa era"**; seguidamente se le preguntó como sabía que la varilla estaba en dicha zanja y dice: **"sencillamente el día veintisiete (27) llegó una carta a mi poder donde explicaba todo lo que yo tenía que decir y esa carta llegó a poder de mi ex-abogada porque ella era la única que sabía en donde se encontraba la carta, donde decía que era lo que tenía que hacer y dije tal y cual decía la carta y luego cuando yo le pregunté sobre la carta, ella me dijo que no la había encontrado, pero sí la había encontrado"**.

Con respecto a los útiles escolares del niño Atencio Cáceres manifiesta que al salir de su casa el 27 de noviembre de 1992 por la mañana para dirigirse a la Policía Técnica Judicial y al regresar por la tarde estaba el maletín frente a la puerta y que el único que podía haberlo puesto ahí era Jeff quien tenía llave. Agrega que no sabía qué contenía la bolsa; que la carta se la entregó la licenciada Rita Hilton; que al ir a pagar el taxista le dijo que ya le habían pagado; que al bajar del taxi ya estaban juntos Jefferson y la señora de tez morena y que no sabe en que se habían transportado; que la bolsa que llevaba **"no pesaba nada y era suave"**; afirma que el señor Manuel Salvador Torres quien estaba presente en la diligencia de reconstrucción de los hechos no era quien conducía el taxi sino otro (fs. 669-694). Las vistas fotográficas de esta diligencia se aprecian a foja 696 a 709.

El procesado **Shewin Jefferson Smith Wrigth** rinde declaración indagatoria en horas de la tarde del día lunes 30 de noviembre de 1992. Manifiesta que conoce a Omaira Diana Correa Wedderburn desde hace unos seis años y que son amantes; que no conoció al niño Atencio Cáceres ni a la familia de éste; niega el delito que le endilga Correa Wedderburn y detalla los lugares y las personas con las que se encontraba el lunes 23 de noviembre de 1992 desde horas del mediodía en adelante

(fs. 123-127). Amplía su declaración en horas de la mañana del jueves 10 de diciembre de 1992. Vuelve a detallar dónde se encontraba el 23 de noviembre de 1992 (fs. 180-183); al igual que en la diligencia de reconstrucción de los hechos (fs. 687-689).

Estima esta Sala, contrario a lo afirmado en la sentencia bajo examen, que no son claros los señalamientos que le hace la procesada Correa Wedderburn a Smith Wright.

Se observa que la procesada Correa Wedderburn da tres versiones de las cuales finalmente involucra a otras personas, entre ellas al conductor del taxi y que las declaraciones rendidas luego de su primera indagatoria carecen de lógica. Además, la licenciada Rita S. Hylton quien fue su abogada defensora, afirma que es falso lo de la carta a que se refiere la procesada (fs. 752-753).

Por otra parte, al analizar lo declarado por el procesado Smith Wrigth no se observa que incurra en contradicciones y su dicho fue avalado por personas que lo vieron en horas de la tarde del día 23 de noviembre de 1992, entre éstas: Maximino González Cabrera (fs. 187-190); Eraldo Roy Daring Steward (fs. 202-204); Manuel Filemón Medrano Montes (fs. 206-208); Hupert Nathaniel Robinson Wrigth (fs. 209-212); Leyla Casasola Royo (fs. 213-215); George Vivian Rowe Allwood (fs. 220-222).

Si bien no mencionó en su primera declaración indagatoria que fue a buscar al hijo de Correa Wedderburn a casa de ésta en horas del mediodía para llevarlo a la escuela, en autos consta que solía llevar al niño a la escuela y traerlo a casa. Así lo afirma Marjorie Romelia Burton de Serrano, vecina de la señora Correa Wedderburn, quien además manifiesta:

> ... "ese día lunes veintitrés (23) de noviembre del presente año, si noté que el señor Jefferson llegó en su carro y no se bajó, en eso salió la señora Omaira y le extendió como un plato de comida, él a mi parecer comió dentro del carro puesto que los vidrios de su carro son ahumados y no pude observar si comía o no, pero por el plato que ella le extendió me supongo eso, mientras él comió o cogió el plato mientras tanto el niño de Omaira dio la vuelta uniformado con su maletín y subió al carro, esto fue como a las doce (12:00) y cinco ya que él llegó donde Omaira como a las doce (12:00) en punto, era la primera vez que yo lo miré comer dentro del carro, ella se quedó hablando un ratito y de allí yo me metí para adentro de mi casa para ver una novela y ellos quedaron allí mismo, no se si demoró mucho o si se fue rápido por el motivo que expresé anteriormente" (fs. 199-201).

Luis Martínez García también afirma que vio a Smith Wrigth el día de los hechos y dice:

> ... "desde siempre he transitado por ese lugar, ahora o sea para esa fecha más porque estaba haciendo unos trabajos de albañilería en ese sector y siempre he visto que él se parqueaba en ese mismo sitio en su vehículo, esto lo vine a observar no hace mucho tiempo, creo un poco menos de un año y como era algo rutinario no le prestaba ningún tipo de interés ya yo sabía que él vivía con esa muchacha y posiblemente la iba a visitar, yo lo miré parqueado en diferentes horas y diferentes días" (fs. 228-231).

Contra Smith Wright aparece el señalamiento que le hace Eliseo Miranda en declaración rendida el 12 marzo de 1993, quien, por tratarse de un sordo mudo, es asistido por la intérprete Evangelina Isolina Rodríguez Garay, docente Integral de Educación Especial, quien labora en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, con seis años de experiencia, quien afirma:

> "El dice que sí vio cuando agarraron al niño Jonathan, que fue una mujer que lo agarró y que el niño empezó a morderla y a arañarla y que el niño le hacía fuerza los dos se cayeron al suelo o sea el niño y ella y que en eso llegó un hombre alto y grueso, agarró al

> niño del suelo recogiéndolo y lo metió dentro de un carro, subió el vidrio, cerró la puerta del carro y se fueron" (fs. 407-409).

Consta el acta de la diligencia de inspección ocular al sitio donde el testigo Eliseo Miranda observó cuando agarraron al niño Jonathan, ubicado atrás del club bananero. En esta oportunidad dice:

> "El dice que cuando el niño y la mujer cayeron al suelo, el hombre vino de detrás de la casa sin repellar hacia donde ocurría el incidente y agarró al niño al hombro y lo llevó a la casa en construcción y lo tiró por la ventana de la misma, dice que el hombre dio la vuelta entrando a la casa en construcción y sacando al niño en peso y lo llevó hasta un carro que estaba parqueado al lado de esta casa en construcción y lo metió dentro del carro y tanto el hombre y la mujer se fueron en el carro".

En esa misma diligencia el testigo lleva a los participantes a la casa en donde vive el hombre a quien ya había descrito en su declaración y la casa que señaló coincide con la que habita Smith Wrigth (fs. 410-413).

El testigo Eliseo Miranda, sin embargo, no pudo reconocer a Smith Wright en la diligencia de reconocimiento y en la misma se indica que estaba confundido (fs. 440-444).

Ahora bien, ¿cómo se tiene noticia de este testigo? El día 5 de enero de 1993 el señor Pedro Atencio Caballero al ampliar la denuncia que presentó señala:

> ... "encontrándome en la búsqueda de mi pequeño hijo Jonathan, en horas de las primeras horas de la noche, yo me encontraba con el señor Edgardo Estribí, residente en Empalme, barriada El Mayor A, estábamos buscando a mi hijo por atrás de lo que son las maquinitas de juego que hay frente al bananero de Empalme, por un caminito que sale con dirección hacia donde nosotros vivimos, entonces un mudito que es indígena se nos quedó viendo y en señas se dirigió a nosotros e indicó como en ese sector por ese camino había ocurrido algo que él había visto, nos llevó hasta cierto lugar dentro del caserío que hay allí y nos dijo o nos indicó como que había una lucha con un niño, pero no le entendimos muy bien por lo que yo deseo que por alguna vía este señor sea citado para que diga lo que sabe, este mudo se llama Eliseo Miranda, no sé donde vive directamente, pero trataré de localizarlo, para que se le pregunte a que hora fue que vio que ocurrió esto y entre que personas" (fs. 232-233).

Tal como se señala en el salvamento de voto, la versión de Eliseo Miranda es "**abiertamente incompatible con el dicho de las otras personas que concurren a la encuesta, toda vez que ubica a Correa Wedderburn fuera de su casa a la hora del evento**" (f. 1245). De modo tal, que este testimonio tiene el mismo valor que le dio el juzgador primario a los testimonios rendidos en el acto de audiencia oral de los señores Mathews Patterson (fs. 1021-1027), West Jacob (fs. 1029-1032) y Villarreal (fs. 1035-1039).

En autos consta que la señora Correa Wedderburn da tres versiones, de los hechos; que se ha demostrado a lo largo del proceso que tiende a mentir; que el médico-psiquiatra Wualdemar Oliveros Víctor, quien la atendía antes de la ocurrencia de los hechos investigados, afirma que presentaba un cuadro de **depresión ansiosa** y que entre las características de esta enfermedad esta la **irritabilidad** (fs. 216-219). Las pruebas incorporadas a los autos no confirman que Smith Wright con vehículo propio obligara a su amante a requerir los servicios de un taxi **casi frente a la casa de ésta** a temprana hora de la noche para llevar un cadáver a un lugar apartado y solitario (ver fs. 701- 702), tampoco se registran motivos para cometer el homicidio del menor Jonathan y aunque su amante insinuó que era porque una amiga de éste tenía un hijo que requería un trasplante de riñones, consta el protocolo de necropsia (fs. 45-57), la declaración del médico forense Errol Sylvester Edwards Spence que realizó dicho examen (fs. 329-336) y el protocolo de exhumación (fs. 504-505), que

determinan la causa de la muerte del menor Atencio.

Si bien de conformidad con lo normado en el artículo 2222 del Código Judicial existieron méritos para llevar al plenario a Smith Wrigth, **"en el Procedimiento penal, es principio capital que el acusado sólo puede ser condenado si se han constatado con certeza los hechos que vienen al caso"** (Dr. Erich Dohring. La Prueba su Práctica y Apreciación. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires 1992. p. 422).

Se ha cometido un hecho punible sumamente reprochable y existe interés por parte de los familiares de la víctima y de la sociedad **que también se siente ofendida** a que se castigue a su autor y partícipes por ello fueron sometidos a un juicio penal Omaira Correa Wedderburn y el señor Smith Wrigth. La primera fue declarada culpable por un jurado de conciencia. Smith se sometió a un Tribunal de Derecho.

La pena debe recaer sobre quien es culpable, sin duda alguna, pues como sostiene Framarino, **"la posibilidad de condenar sin tener la certeza de la culpabilidad del reo despojaría a la pena de su auténtico fundamento, que es la defensa del derecho, y la tornaría enemiga del fin mismo de la tranquilidad social, al cual debe tender. De modo que la pena, tanto por el principio que la inspira como por el fin al cual se dirige, no puede legítimamente imponerse sino cuando se ha logrado la certeza de la responsabilidad penal"** (Nicola Framarino Dei Malatesta. Lógica de las Pruebas en Materia Criminal. Volumen I. Editorial Temis S. A. Bogotá-Colombia. 1988. p. 6).

Al valorar racionalmente las pruebas contenidas en el expediente judicial, de conformidad con las reglas de la sana crítica, adoptado por nuestra legislación procesal, las mismas no logran alcanzar la eficacia para crear en la convicción de la Sala la certeza necesaria para condenar al señor Smith Wright.

En cuanto a las objeciones formuladas por la licenciada Morales Miranda, se observa que en el proceso de subsunción se ubica el ilícito en el artículo 132 del Código Penal.

El Tribunal sostiene que el homicidio se ejecutó mediante actos atroces y por motivos fútiles o de escasa importancia. Seguidamente explica por qué considera que se emplearon medios crueles e inhumanos y después textualmente afirma: **"Los móviles de esa acción no han sido precisados de modo inequívoco, si bien no es posible establecer al respecto una explicación medianamente aceptable o creíble siquiera".**

La Sala considera que estamos ante un homicidio agravado por motivo fútil, lo cual se desprende de la primera versión que dio la procesada en donde explica por qué cometió ese acto criminal (f. 96). Igualmente estamos ante un homicidio con caracteres de ejecución atroces, **"que son aquellos que permiten aumentar deliberadamente el sufrimiento o dolor del sujeto pasivo del homicidio, cuando lo que se persigue es producir la muerte del mismo a través de medios innecesarios que producen un sufrimiento adicional al necesario para producir el resultado deseado"** (Muñoz Pope/Arango de Muñoz. Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Universidad de Panamá. Publicación del Departamento de Ciencias Penales. 1986. p. 52).

La procesada en su primera versión indicó que introdujo la toalla en la boca de su víctima y los golpes que le propinó eran para lograr su objetivo, usando además una varilla de hierro que le hizo salir la masa encefálica, lo que en un niño de escasa edad, altamente vulnerable a la superioridad física de su agresora, conlleva caracteres de ejecución atroz.

El artículo 132 en su numeral 3 establece dos circunstancias del homicidio agravado: por razón del **motivo fútil** y el medio utilizado **medios de ejecución atroces**, ambas tienen previsto la sanción de 12 a 20 años, aún cuando sean concurrentes.

Por otra parte, la delincuencia primaria no es una circunstancia que

modifique la responsabilidad penal (art. 66 del Código Penal), pero si es un factor que entre otros permite al juzgador fijar la pena dentro de los límites señalados para cada delito (art. 56 del Código Penal). Esta normativa fue ponderada y se estableció la pena base en dieciséis años, la cual fue aumentada a veinte años al darse la agravante contemplada en el numeral 1 del artículo 67 del código aludido. Contrario a la defensa no se observa que la procesada brindó ayuda o cooperación. De consiguiente, no cabe la modificación en la pena impuesta.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada y ABSUELVE a SHEWIN JEFFERSON SMITH WRIGTH, de generales conocidas en autos, de los cargos por los cuales fue llevado a juicio; ORDENA su inmediata libertad y CONFIRMA la sentencia en lo demás.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A JOSÉ MANUEL ALMENGOR CONTRERAS, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JORGE ISAAC RIVERA MIRANDA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia del recurso de apelación presentado por el licenciado Fernando Fabián Gutiérrez V, Fiscal Segundo Superior, contra la sentencia de 14 de diciembre de 1995 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se impone a José Manuel Almengor Contreras la pena de 6 años de prisión y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como reo del delito de homicidio cometido en perjuicio de Jorge Isaac Rivera Miranda.

Según se expresa en el libelo de la alzada, la disconformidad con el fallo consiste básicamente en que "sí hubo premeditación y motivo fútil, por parte de ALMENGOR CONTERAS (sic), en la comisión del hecho criminoso, suficiente para que la pena que se le ha impuesto, se fije en lo máximo que contempla el artículo 131 del Código Penal, o sea, 12 años" (f. 644).

La Sala pasa a resolver el recurso propuesto, sólo sobre los puntos de la resolución que objeta el recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2428 del Código judicial. Es necesario destacar que el examen de la sentencia condenatoria se encuentra limitado a la consideración de la pena recaída sobre el autor de la conducta ilícita, pues la culpabilidad del sentenciado fue declarada por jurados de conciencia, decisión que consta a foja 517 de las sumarias.

Las piezas procesales permiten determinar que el hecho de sangre ocurrió en horas de la madrugada del 7 de enero de 1994 en el corregimiento de Chiriquí, Provincia de Chiriquí, cuando el culpable, luego de reñir con Jorge Isaac Rivera Miranda, esgrimió un arma blanca y le infirió una herida a la altura del abdomen. El dictamen médico legal consignó como causas de la muerte "I. CHOQUE HEMORRÁGICO. II. HERIDA POR ARMA BLANCA PENETRANTE AL ABDOMEN" (f. 182).

El tribunal a-quo, tras encuadrar la conducta del procesado en el artículo 131 del Código Penal, individualizó la pena en 6 años de prisión, de conformidad

con los elementos que menciona el artículo 56 de la misma excerta legal (fs. 626-628), sin que acreditara en su proceder circunstancia de atenuación o de agravación común modificativa de la responsabilidad penal (f. 628).

La Sala considera incongruente que el recurrente pretenda el aumento de la pena líquida impuesta al "máximo que contempla **el artículo 131** del Código Penal" (f. 644), aduciendo que el homicidio fue cometido con premeditación y por motivo fútil, toda vez que, de comprobarse la concurrencia de tales circunstancias en la conducta del reo, estaríamos frente al tipo penal de homicidio calificado o agravado descrito en **el artículo 132** del Código Penal. Mal se podría entonces, acceder a lo impetrado, o sea al aumento de la pena con fundamento en la disposición legal que regula el homicidio simple (art. 131).

No obstante lo anterior, resulta imprescindible adentrarse en el examen de la encuesta penal, a fin de comprobar si concurren en este caso las agravantes de premeditación y motivo fútil que alega el representante del Ministerio Público. Con tal objeto, es importante resaltar el testimonio de Lucinio Valdés Delgado, testigo presencial del hecho, quien manifestó que "más o menos a las tres de la madrugada, me encontraba jugando bolos en las patronales de Chiriquí, cuando en ese momento **vi que se suscitaba una discusión entre un señor y un muchacho joven ... entonces el más nuevo le dio una trompada al más viejo en la cara y lo derribó** ... después el muchacho que le pegó al señor se fue a jugar bolo ... de pronto vi el molote de gente y vi salir huyendo al señor a quien él o sea el Torero había agredido de una trompada" (f. 40). De igual manera, el deponente Félix Antonio Suira Atencio señaló que "en el momento que estaban jugando bolos el señor le ganó una apuesta, y se agarraron a los puños en el juego de bolos" (f. 324). Este testigo también indicó que "mire (sic) que el sujeto traía su mano derecha metida entre ... su camisa, entonces en el momento que el sujeto alcanzó a REGADERA, sacó un cuchillo de su cinto ... ese sujeto le dio dos puñaladas a REGADERA, en el área del abdomen" (f. 33).

De los anteriores testimonios, no se desprende que la acción del sentenciado hubiere sido premeditada, producto de una firme y deliberada voluntad de cometer el delito; lo que parece emerger más bien es que la resolución delictiva surgió con ocasión de la riña, y que el arma homicida salió a relucir posiblemente por la percepción de inferioridad física que experimentara Almengor Contreras -de 52 años de edad y 132 libras de peso- en su experiencia previa con el occiso -de 25 años de edad y 170 libras de peso-, quien ya lo había golpeado y derribado. Asimismo, es de anotar que esa condición emocional del procesado, que comúnmente surge como consecuencia de una riña, se convierte en un estado de exaltación agresiva, que si bien no justifica la comisión del hecho delictivo en la oportunidad del segundo incidente, tampoco autoriza a considerar la conducta del condenado como presidida por un motivo fútil.

En vista de que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad criminal de Almengor Contreras en el delito de homicidio simple, la Corte estima que la pena de 6 años de prisión impuesta por el tribunal sentenciador se encuentra correctamente individualizada, por lo que se impone su confirmación.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia calendada 14 de diciembre de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual condenó a José Manuel Almengor Contreras a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 5 años, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Jorge Isaac Rivera Miranda.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ARISTÓTELES SANTOS LEMOS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS ALBERTO SALAZAR CASAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia del 7 de septiembre de 1995, condenó a **ARISTÓTELES SANTOS LEMOS** a la pena principal de dieciséis (16) años de prisión y a las accesorias de Inhabilitación para el ejercicio de funciones publicas por igual período, una vez cumplida la pena de prisión y al Comiso del arma utilizada en la ejecución del hecho punible, como consecuencia de haber sido declarado culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio de Luis Alberto Salazar Casas (fs. 401-408).

Esa decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse por la entonces apoderada judicial del procesado, licenciada Irene Mora Valdés (f. 408 vt.), recurso sustentado en tiempo oportuno por el licenciado Rafael Rodríguez A., actual defensor técnico del señor Santos Lemos.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Rodríguez solicita se imponga la pena mínima a su defendido, al estimar que no se está ante un homicidio fútil. Señala que el hecho ocurrió al darse una discusión, que no fue provocada por Santos Lemos sino por parte de unos señores que se encontraban en un camión, que la misma originó una pelea tumultuaria en donde ambas partes se estaban agrediendo, por lo que su defendido hizo uso del arma en un acto de defensa, situación que no se puede calificar de irrazonable, sin motivos. Explica que nuestros campesinos, generalmente, en riñas tumultuarias hacen uso de su arma o en riñas consentidas y no por ello, se habla de que se actúa por motivos fútiles porque se aplica tal adjetivo a una acción ejecutada con frialdad, baladí o trivialmente, cosa que no ha ocurrido en este caso (fs. 414-418).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Se refiere el presente proceso penal a la muerte violenta de Luis Alberto Salazar Casas, el 1 de julio de 1994, en horas de la noche, a consecuencia de herida sufrida por arma de fuego, hecho ocurrido en el Madroñal, Corregimiento de Nuevo San Juan, provincia de Colón. Por ese ilícito fue encausado penalmente Aristóteles Santos Lemos, quien fue declarado culpable por un jurado de conciencia, mediante audiencia oral y pública celebrada el 21 de julio de 1995.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Antes de analizar lo puntos objeto del recurso (art. 2428 del Código Judicial), se observa que si bien consta escrito de contestación del traslado por parte de la representación del Ministerio Público (fs. 420-421), el mismo se declaró extemporáneo en providencia de 23 de enero de 1996 (f. 424).

El tribunal de primera instancia, subsumió la conducta ilícita de Santos Lemos en el tipo penal que describe el homicidio agravado por motivo fútil **-artículo 132 numeral 3° del Código Penal-** que tiene señalada pena de 12 a 20 años de prisión.

El fundamento de esa decisión fue el siguiente:

> "Con facilidad resalta de autos que fue el uso de la bocina del camión operado por el occiso lo que causó la irritación de Santos Lemos y sus acompañantes, que a la postre trajo como lamentable consecuencia la muerte de Luis Alberto Salazar Casas. El motivo que irritó al acusado, hace que el homicidio sea agravado ..."

Luego, dentro de la discrecionalidad otorgada por la ley, el Tribunal fijó la pena conforme a los parámetros que señala el artículo 56 del Código Penal, en 16 años de prisión, la que estimó inamovible al no observar circunstancias atenuantes o agravantes contempladas en los artículos 66 y 67 del Código punitivo, ni en otra disposición penal especial.

Al revisar las declaraciones rendidas tanto por los compañeros del occiso, señores Félix Cruz Quintero (fs. 16-18 y 52-54) y Gabriel Ortega (19-22 y 55-59) y las declaraciones del procesado (fs. 77-83 vt.) y sus acompañantes, señores Gilberto Torrero González (fs. 24-26 y 64-67) y Cipriano Ramos Rivas (fs. 27-29 y 60-63) es evidente que se dio una discusión entre dos grupos y no hubo riña tumultuaria como afirma el apelante.

No obstante, quienes estaban irritados por el sonido constante de la bocina del vehículo era el grupo al que pertenecía el procesado, al extremo de que fue Cipriano Ramos Rivas quien se acercó al conductor del camión, a solicitarles que cesaran el escándalo.

Con relación al motivo fútil, Gómez López en el derecho penal colombiano, manifiesta:

> "Motivo fútil no implica ausencia de móvil, sino cometer el crimen por una razón insignificante, de escasa importancia, desproporcionada frente a la magnitud del homicidio, todo lo cual deja entrever en el sujeto una facilidad para consumar el hecho, situación que es la que alarma a la sociedad, pues no es común que tal tipo de motivación incline la voluntad hacia el delito" (Gómez López. El Homicidio. Tomo I. pág. 397. Editorial Temis, S. A. Bogotá-Colombia).

La Sala Segunda de la Corte también se ha pronunciado sobre esta modalidad del homicidio agravado en varias resoluciones judiciales, tales como: la sentencia de 27 de noviembre de 1991 (R. J. noviembre, 1991), sentencia de 18 de marzo de 1993 (R. J. marzo 1993), sentencia de 30 de abril de 1993 (R. J. abril 1993) y sentencia de 1° de junio de 1993 (R. J. de junio de 1993).

Al tomar en consideración esa reflexión doctrinal y valorar las circunstancias en que se llevó a cabo el homicidio, se percata la Sala de la evidente desproporción de la conducta ilícita desplegada por Santos Lemos ante una discusión, que bien pudo llegar a su fin si el procesado hubiere asumido un comportamiento prudente. En cuanto a que Santos Lemos hizo uso de su arma en un acto de defensa, tal afirmación la desvirtúa su propio compañero, Torrero González, quien le manifestó que no había necesidad de disparar (f. 67). La ley penal tutela el bien jurídico de la vida humana y agrava las consecuencias jurídico-penales en casos como el presente, donde la violencia matiza fuertemente las desavenencias de las personas hasta el extremo de truncar la vida útil de un semejante. Esta situación procesal irremediablemente nos lleva a confirmar el fallo apelado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE JOE JOHN MEDINA VERNAZA, SINDICADO POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MARÍA EUGENIA SANCHIZ DE SÁNCHEZ, YARITZA SÁNCHEZ Y GABRIEL SÁNCHEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ingresa vía apelación el cuadernillo de fianza de excarcelación que contiene el auto de fecha 12 de enero de 1996, mediante el cual se concede ese derecho a **JOE JOHN MEDINA VERNAZA**, dentro del proceso que se le sigue por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de **MARÍA EUGENIA SANCHIZ DE SÁNCHEZ**, **YARITZA SÁNCHEZ Y GABRIEL SÁNCHEZ** y fija la cuantía en la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) (fs. 11-12).

Esa decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse por el licenciado Waldo Suárez Robles, defensa técnica del imputado. En providencia de 22 de enero de 1996, fue concedido el recurso en el efecto que determina la ley; además se hace constar que de conformidad con el numeral 14 del artículo 393 del Código Judicial se ordenó tachar una frase injuriosa observada en la página N° 3 en los renglones 4 y 5 de el escrito de apelación (f. 18).

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Suárez Robles manifiesta que fijar la cuantía de la fianza en quinientos mil balboas (B/.500,000) es negar la misma; que se da por descontado la posibilidad de la presunción de inocencia de su defendido, violando así, preceptos legales; que el tribunal Superior para considerar la cuantía de la fianza no tomó en consideración la posición económica del involucrado, siendo su representado Cabo de la Policía Nacional, cuyos ingresos serán quizás no mayores de trescientos balboas (B/.300.00) mensuales; que el Tribunal Superior fija su atención en la posibilidad existente de que pudiese evadir la acción de la justicia cuando él cree plenamente en la inocencia de su defendido y éste también lo cree por lo que no hay motivos para evadir a la justicia y sí interés en que se aclaren los hechos para su propia satisfacción.

Por otro lado, enuncia los hechos que estima no vinculan para nada a su defendido:

> "1. Ante el estado de conmoción e indefensión de la señora SANCHIZ DE SÁNCHEZ al momento de la agresión, nos preguntamos, cómo pudo ella, lograr, percatarse de los rasgos de su atacante si todo se realizó a oscuras?.
>
> 2. Los dibujos existentes en la agenda de nuestro poderdante no son elementos incriminatorios, ya que no demuestran realmente características de violencia, sino una desaprobación personal a los dibujos realizados.
>
> 3. Existe una supuesta informante, la cual indicó un presunto responsable del acto criminal. Sí pretendemos darle validez a ese testimonio con relación al procedimiento penal, nos permitimos asegurar que no llenó los requisitos establecidos en nuestra legislación penal, en materia de normas de procedimiento.
>
> 4. Es más, creemos que no existe tal informante, pues, quien recibió tal comunicación fue el Sargento Vergara, ex-miembro del Departamento de Investigación Policial con sede en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, principal investigador del hecho. Cabe resaltar. el Sargento Vergara hace algunas semanas fue dado de baja de la Policía Nacional ..."

Por lo que solicita se estime la cuantía de la fianza solicitada con

relación a la presunción de inocencia y la capacidad económica de Medina Vernaza (fs. 15-17).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El tribunal de primera instancia señaló que las disposiciones procesales permiten la concesión de fianza de excarcelación cuando se trata del delito de tentativa de homicidio. Para fijar la cuantía a imponer tomó en consideración **"el hecho cometido, las consecuencias, el daño efectuado, la posición económica del involucrado y el interés que pudiese tener para evadir la acción de la justicia, a juicio del juzgador"**; por lo que establece la suma de quinientos mil balboas (B/.500.00.00).

Observa la Sala, que posterior a la inhumana agresión que sufrieran tres miembros de la familia Sánchez Sanchiz a temprana hora de la madrugada del sábado 30 de noviembre de 1995, consta la declaración del sargento Eugenio Vergara Coronado en la cual se refiere a los informes signados por él (fs. 136 a 141) referentes a llamadas anónimas y al encuentro con una dama -el 16 de octubre de 1995- que le informa que un policía está involucrado en el ilícito investigado; y que la descripción física como los datos aportados recaen en la persona de Medina Vernaza (fs. 342-346).

Consta en el acta de la diligencia de allanamiento a la casa de Medina Vernaza realizada el 20 de octubre de 1995 a las doce del día. En la misma se encontró un "pantihouse" color chocolate el cual tenía una media cortada (fs. 276-278).

Por otra parte, el imputado Medina Vernaza cae en contradicciones en cuanto al turno que le correspondía laborar la noche del viernes 29 al sábado 30 de septiembre de 1995 y tampoco coincide con lo manifestado ante la policía Técnica Judicial el 21 de octubre de 1995 (fs. 279-282).

En declaración rendida por el agente Mario Augusto Núñez Rodríguez al referirse a Medina Vernaza señala lo siguiente:

> "se le registró personalmente encontrándosele una agenda de color azul, tipo bolsillo que afuera dice Panacredit, quiero aclarar que esta agenda según él la usaba para trabajos diarios, en ella se aprecia los turnos que hacia y novedades, también consignas, pero quiero hacer la observación que a esta agenda le habían arrancado las páginas de las fechas 29, 30 de septiembre de 1995, observación que se lo hice saber al detective Eric De León, ya que en esta fecha fue que ocurrió el hecho, seguido a las páginas de la misma agenda casi al final, habían unos dibujos a tinta de una imagen de mujer cortadas las manos y con la cara rayada y en la página contigua el rostro de una mujer con una cortada transversal en la cara y una horizontal en la boca, o sea eso era lo que representaba el dibujo ..." (fs. 347-351).

El detective Eric Alberto De León Flores afirma que se percató que la diligencia de allanamiento se llevó adecuadamente. Que luego le solicitó a Medina Vernaza que sacara todo lo que tenía en el bolsillo de la camisa del uniforme de policía y señala:

> "noté que ese señor mantenía en su poder una libreta tipo agenda de la entidad Panacredit, la cual se la solicite y la verifique, percatándome que dentro de la misma aparecían varios dibujos a pluma, y entre esos que eran solamente tres, y que si no me equivoco estaban en las hojas del mes de diciembre, aparecían dos que presentaban sus rostro como rallados y uno de ellos que les faltaba los brazos, dibujo este que llamó la atención y como no estaba dentro de lo encontrado en la diligencia de allanamiento, le solicité a ese sujeto Medina Vernaza, que la tomara y me la mostrara nuevamente en las instalaciones de la Policía Técnica de Penonomé lo cual manifestó que estaba bien, pero al momento de estar en las

> instalaciones de la Personería de Aguadulce y esperar la diligencia transcrita y las evidencias levantadas en esa residencia este sujeto que solamente permanecía en compañía del funcionario Juan Moreno, de servicio en el D. I. I. P. de Penonomé, se aprovechó de un descuido y arrancó dos de estos dibujos y los botó según él en el estacionamiento de la personería antes mencionada, y como estaba lloviendo las mismas debieron ser llevadas por el agua, toda vez que supe esto le pregunté la razón por la cual la había botado y me manifestó que esos dibujos no tenían ningún interés" (fs. 352-357).

En cuanto a la situación de la libreta y sus dibujos, Medina Vernaza, responde:

> "yo lo hice porque yo estaba leyendo un periódico y como a mi me gusta dibujar hice el dibujo de dos personas a mi manera lo hice y después que los hice deje el otro sin terminarlo quedando plasmado en la libreta y eso lo iban a ver las autoridades y iban a pensar que yo estaba loco por hacer esas clases de dibujos" (f. 369-370).

Las pruebas mencionadas vinculan a Medina Vernaza con la investigación, ya desde el 2 de octubre consta en el informe de despacho, signado por Alejandro Carter, jefe de la Policía Técnica Judicial de Penonomé, que la señora María Eugenia de Sánchez describe la ropa de su agresor afirmando que el pantalón era de color verde como el que usan los militares y que el sujeto tenía puesto en la cara porque estaba cubierta con una media pantihouse (f. 181); y ello lo reitera en su declaración rendida el 9 de noviembre de 1995 (fs. 493-496).

Luego entonces la situación de Medina Vernaza es totalmente comprometida.

En lo que respecta a la cuantía, el artículo 2166 del Código Judicial establece:

> "Para determinar la cuantía de la fianza el tribunal tomará en cuenta la naturaleza del delito, el estado social e intelectual y los antecedentes del imputado, su situación pecuniaria y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de las autoridades; pero, en ningún caso, la fianza será menor de cien balboas (B/.100.00).
>
> Cuando se trate de hurto pecuario, en ningún caso la fianza será menor de mil balboas (B/.1,000.00) por imputado".

Ponderando el caso sub-júdice y que el delito por el cual es imputado Medina Vernaza le da derecho al beneficio de la fianza de excarcelación, la Sala considera que estamos ante un hecho de gran conmoción social por la agresión física de que fueron víctimas tres personas en su residencia, en una comunidad pequeña, por lo que la cuantía de la fianza debe ser proporcional a ese hecho. Además debe tomarse en cuenta el estado socio-económico del imputado, quien se desempeñaba como agente de la Policía Nacional con salarios relativamente bajos y por esa vinculación a una institución garante del orden público, cabe presumir que no tiene interés en evadir la dilucidación de su situación procesal ante los tribunales de justicia.

Con fundamento en lo anterior cabe hacer un reajuste de la cuantía señalada por el Tribunal Superior, sin desatender los parámetros que enmarcan los aspectos objetivos-subjetivos de este caso.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto apelado en el sentido de fijar la cuantía en VEINTE MIL BALBOAS (B/.20,000.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario-Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Actuando en representación de Alfredo López Rodríguez, la licenciada Emma E. Alba comparece nuevamente ante la Sala Penal de la Corte Suprema, esta vez para solicitar se reconsidere el auto dictado el 2 de febrero de 1996, mediante el cual se niega el beneficio de fianza de excarcelación solicitado a favor de su mandante.

Antes de conocer el fondo del recurso, es preciso examinar lo concerniente a su viabilidad, a lo que se pasa.

Se advierte que la resolución objeto de censura le fue notificada a la recurrente el 16 de febrero de 1996, y que el libelo que impetra su reconsideración fue recibido en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema el día 26 del mismo mes, es decir durante el **tercer día** hábil siguiente a la fecha de la notificación del acto procesal.

Sobre la oportunidad para proponer el recurso de reconsideración, el artículo 1114 del Código Judicial preceptúa que "el recurso deberá interponerse **dentro de los dos días siguientes** a la notificación de la respectiva resolución.

Siendo esta la realidad procesal, resulta entonces evidente la extemporaneidad de la solicitud de reconsideración que se considera.

Por las razones indicadas, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de reconsideración propuesto en esta causa.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR LOS DELITOS EN QUE HUBIESEN INCURRIDO MARCIANO VERGARA, EUCLIDES DELGADO, CARLOS VILLANUEVA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Marciano Vergara, Euclides Delgado, Carlos Villanueva, José Ramos, Omar

Rebollón Buitrago, Edgardo Reeder y Yoni Cruz Gamboa, hicieron llegar al Procurador General de la Nación, desde la Cárcel Modelo, un manuscrito-denuncia fechado 18 de septiembre de 1995, para poner en su conocimiento dos categorías de hechos: a) Irregularidades supuestamente cometidas por los responsables de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, durante la instrucción de sumarias en las que figuran como imputados, en "clara violación a los derechos individuales y constitucionales", y b) la vinculación del Fiscal y del Secretario de Drogas con personas y actividades del narcotráfico.

La recepción de la carta motivó el inicio de una investigación, dirigida a comprobar el fundamento de los cargos que en ella se formulan. Con ese objeto se le recibió declaración jurada a todos los signatarios-denunciantes, lo que permitió conocer que Omar Rebollón sostiene no haberla firmado, aun cuando reconoce que se enteró de parte de su contenido, pero que no la suscribió por encontrarse en desacuerdo con los términos en que había sido redactada; identificó a Edgardo Reeder como la persona que se la entregó para que la leyera y la firmara, pero desconoce quién pudo firmar con su nombre.

Reeder es también señalado por otros de los denunciantes como la persona que les entregó la carta para su firma, por lo que algunos incluso llegaron a opinar que posiblemente fue él quien la redactó.

Lo cierto del caso es que quienes la firmaron manifiestan no tener conocimiento de la veracidad de los cargos que en ella se endilgan contra los funcionarios de la Secretaría de Drogas, por lo que no se ratificaron en ellos. Coinciden también en afirmar que el interés que los movió a firmar la carta fue llamar la atención del Procurador General para que se agilice la causa que los mantiene detenidos. En el caso particular de Reeder, quien parece haber liderizado el grupo, al confrontársele con cada uno de los cargos que se formulan en la carta, contestó insistentemente que no le constan los hechos denunciados: "Solamente, quiero dejar claro que no era la intención realizar tal denuncia, ni tampoco pensábamos el curso que se le iba a dar a la misma" (f. 16).

Los resultados de la averiguación sumaria sirven de fundamento a la opinión externada en la Vista remisoria del cuaderno, en el sentido de que: "Sin lugar dudas que, al no existir la veracidad, la confirmación o ratificación de los cargos formulados en dicha carta, ello dista mucho de constituir un delito previsto por nuestra ley penal, máxime cuando los denunciados son funcionarios públicos" (f. 57).

Con vista en esa apreciación, el Procurador General de la Nación, "sobre la situación jurídica del Lic. Rosendo Miranda" solamente, por razón de la competencia funcional que le está atribuida, solicita se "archive la presente encuesta sumarial, dictando un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal" (f. 58).

Considera la Sala que, en efecto, la justa valoración del acervo probatorio demuestra la falta de fundamento de la denuncia, la que tenía como propósito llamar la atención de las autoridades sobre la situación procesal de los detenidos, lo que efectivamente lograron. Sin embargo, es altamente censurable que el medio utilizado haya llegado al extremo de atentar contra la integridad de los funcionarios de la Fiscalía de Drogas, imputándoles la comisión de delitos.

Así las cosas, por comprobada la ausencia de ilicitud de la conducta de los funcionarios denunciados, de quienes simplemente se recibió una declaración jurada y un informe, por lo que no tienen la calidad de indagados o de imputados, lo que procede es el archivo de la actuación, con lo que se admite parcialmente la recomendación que se formula en la vista remisoria.

Por las anteriores consideraciones, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL ARCHIVO de esta actuación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LIBERTAD DENTRO DEL INCIDENTE DE EXTRADICIÓN DEL SEÑOR ANTHONY WILLIAMS ROAD. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **Javier Quiroz Murillo** de la firma forense **QUIROZ, MURILLO Y ASOCIADOS,** en su condición de apoderado judicial del señor **ANTHONY WILLIAMS ROAD** ha presentado escrito desistiendo de la petición de libertad interpuesta ante la Secretaría de esta Sala el día 3 de enero de 1996.

Ahora bien, en materia de desistimiento se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte esté autorizado para ello expresamente. Por otro lado, es viable el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido o la persona que interpuso la acción, y en este caso el licenciado **Javier Quiroz Murillo** fue la persona que interpuso la acción de la cual ahora formula desistimiento, lo que es corroborado por la nota a manuscrito del señor **WILLLIAMS ROAD,** quien expresa su voluntad de desistir de lo anteriormente solicitado (fs. 14-15).

Al examinar la solicitud del licenciado **Quiroz Murillo,** la Sala nada tiene que objetar y estima que debe accederse a lo pedido, y en tal virtud admitir el desistimiento manifestado.

Por ello, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento de la solicitud de libertad a favor de ANTHONY WILLIAMS ROAD; en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE DESERCIÓN DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR PROMOVIDA CONTRA EMILIO DE LEÓN LOKKE, EX FISCAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL POR LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, SEGURIDAD COLECTIVA Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PERJUICIO DE BELARMINO CHÁVEZ MORENO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Juzgado Sexto del Circuito de la provincia de Chiriquí, ingresó a esta Corporación de Justicia el cuadernillo de la solicitud presentada por el apoderado judicial del licenciado **EMILIO DE LEÓN LOKEE,** para que se declare desierta la acusación particular interpuesta por **BELARMINO CHÁVEZ MORENO** contra su defendido; el cual contiene el auto N° 417 del 22 de mayo de 1995, en el cual ese juzgado se INHIBE de pronunciarse sobre esa petición y DISPONE remitir la actuación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se surta el trámite procesal del recurso de apelación interpuesto

contra el auto que admite la acusación particular proferido por la Sala Penal (fs. 6-9).

SITUACIÓN PROCESAL

Del estudio del expediente principal se observa, que efectivamente esta Sala admitió la acusación particular presentada por el señor Chávez Moreno contra el licenciado Emilio De León Lokee, Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial en resolución proferida el 14 de abril de 1993; que mediante oficio N° 88-S. S. P. de 22 de abril de ese año, se remitió el cuadernillo contentivo de la acusación particular al Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 2302 del Código Judicial (f. 26); que el licenciado Emilio De León Lokee, el día 3 de mayo de 1993, al momento de notificarse de la resolución emitida en su contra, anunció recurso de apelación (f. 25-vt).

No obstante, no consta providencia que impulse la actuación procesal para fijar el término para sustentar el recurso anunciado; lo cual correspondía a la secretaría del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y una vez presentado el escrito respectivo, correr el traslado a las parte y luego conceder el recurso, en el efecto que determina la Ley.

La Secretaría del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial remite mediante oficio N° 573 de 4 de mayo de 1993 el cuadernillo contentivo de la acusación particular (f. 28); el cual según oficio N° 101-S. P. de la Secretaría de esta Sala fue remitido al Procurador General de la Nación (f. 32).

Por otra parte, a foja 85 se aprecia copia debidamente autenticada del oficio N° SADS-411-93, de fecha 1 de noviembre de 1991 en el cual el Secretario Administrativo del Ministerio Público, licenciado Ricardo Cárdenas comunica al licenciado Emilio De León su reemplazo en el cargo de Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial y el nombramiento en dicha posición del licenciado Pedro Pablo Huete.

La circunstancia antes descrita comprueba la pérdida inmediata de la competencia de esta Sala para conocer del presente negocio penal, por lo que mediante proveído del 19 de noviembre de 1993, el Procurador General de la Nación dispuso remitir el sumario a la Fiscalía del Circuito de Chiriquí, de turno, para que continuara con la investigación pertinente (f. 82). Es así, que el Juzgado Sexto de Circuito Judicial de la provincia de Chiriquí en auto de 17 de enero de 1994 se inhibe del conocimiento de las sumarias seguidas contra el ex-fiscal Emilio De León Lokee, determinando su competencia al Juzgado de Circuito de Bocas del toro (fs. 92-94); y éste en auto del 21 de junio de 1994, igualmente se inhibe del conocimiento y lo remite al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial (fs. 116-120).

El conflicto de competencia surgido, fue dirimido mediante resolución del 31 de agosto de 1994, cuando el Tribunal Superior del tercer Distrito Judicial, declaró competente para conocer de este negocio al Juzgado Sexto del Circuito de Chiriquí (fs. 125-130); correspondiéndole a este tribunal resolver el incidente de controversia propuesto por el licenciado Fernando Stapf Gómez en representación del licenciado Emilio De León Lokee y contra el Fiscal del Circuito de Bocas del Toro (fs. 154-153).

Resumiendo, se puede afirmar que consta en autos que no se surtió el trámite para la sustentación del recurso de apelación anunciado contra la resolución que admitió la acusación particular contra el licenciado Emilio De León Lokee, Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial y que en la actualidad el licenciado De León ha perdido esa calidad funcional, hecho que impide a la Corte conocer del caso. Por ello, esta Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE ABSTIENE de resolver la alzada y

DISPONE devolver la actuación al juzgado de origen.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA PRESENTADA POR CARLOS MANUEL BOYD SEVILLA EN CONTRA DEL LICENCIADO CARLOS ARBOLEDA, FISCAL SUPERIOR ESPECIAL, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Carlos Manuel Boyd Sevilla, quien aparece como inculpado en las investigaciones relacionadas con el homicidio de John Scott Barton, propuso querella contra el Fiscal Superior Especial Cristóbal Arboleda, por el delito de calumnia cometido a través de un medio de comunicación social.

El querellante le atribuye al Fiscal Arboleda la autoría de información aparecida en el diario El Siglo, edición correspondiente al 18 de diciembre de 1995, "entre otras cosas":

> "El Fiscal Superior Especial CRISTÓBAL ARBOLEDA dijo que demostrará y acreditará ante los tribunales panameños la vinculación y participación del empresario CARLOS BOYD y de otras cuatro personas en el brutal crimen (sic) del empresario canadiense JOHN SCOTT BARTON" (f. 1).

También lo responsabiliza por el titular de la noticia, que es del siguiente tenor: "Ante tribunales. Fiscal ARBOLEDA promete acreditar vinculación de Carlos Boyd en el brutal asesinato de BARTON".

Según afirma Boyd Sevilla, en la publicación transcrita el Fiscal Arboleda "hace alusión directa a mi nombre y apellido", cuando "No hay necesidad de enlodar mi honor, vulnerar mi presunción de inocencia y alterar la paz y tranquilidad a que tienen derecho mi familia y principalmente mis hijos (f. 2). Sostiene igualmente que el querellado "asoció mi nombre y el legado de mis progenitores a un abominable homicidio con el cual no tengo ninguna relación" (f. 2). Como prueba sumaria de su denuncia, el querellante aportó un ejemplar de la edición del diario El Siglo donde apareció la información periodística.

Requerido para que rindiera un informe sobre los hechos objeto de la querella, el Fiscal Arboleda manifestó:

> "el señor periodista, me parece que de forma no intencionada, hizo inferencia, y en general, interpretaciones, que no reflejan lo exactamente dicho por mi. Por ello ni el titular de la noticia que sirve de fundamento a la querella ni el párrafo con que se inicia la misma, reflejan lo declarado por este servidor, sin que lo anotado en este diario pueda ser considerado como supuesto calumnioso". ...
>
> **"De la noticia en cuestión, solamente debe considerarse, como expresado por mí, lo que el periodista cita entre comilla, visibles, en la segunda columna, párrafo segundo y tercero**, forma reconocida en el periodismo, y en general en la literatura para indicar anotando textualmente lo dicho o escrito por una persona. Por otro lado, no está demás, recordar que el suscrito no titula las noticias que aparecen en el diario "El Siglo", ni en ningún otro medio de

comunicación social del país".

En declaración jurada que rindiera ante la Procuraduría General de la Nación, el periodista José Elpidio González Batista, autor de la noticia, ofreció su versión sobre la entrevista, manifestando:

> "Le pregunté al licenciado Arboleda si habían pruebas para que en su momento se solicitara un llamamiento a juicio para uno de los presuntos implicados, el señor CARLOS BOYD, me contestó que la Fiscalía, en su oportunidad, emitiría su solicitud a través de una vista fiscal; como periodista insistí en que si habían méritos para vincular a Boyd al homicidio Barton, me contestó que en su momento podrían surgir méritos para solicitar la apertura de un encausamiento. **Como periodista en muchas ocasiones y así lo establece las reglas de esta profesión hacemos interpretaciones objetivas de las declaraciones que nos ofrecen los funcionarios. ...** PREGUNTADO: Diga el declarante si considera usted que dentro de las declaraciones ofrecidas por el licenciado Arboleda éste hizo alusión al señor Carlos Boyd de forma calumniosa. CONTESTO: **En ningún momento, es más tampoco mencionó el nombre de Carlos Boyd; este nombre lo mencionaba yo como periodista en las preguntas que le hacía".**

En la vista remisoria de las sumarias, el Procurador General de la Nación solicita el cierre de esta encuesta con un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, con fundamento en lo que preceptúa el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

El examen del libelo induce a la Sala Penal a considerar que la conducta delictiva imputada encuadra más bien en el tipo penal de que trata el artículo 173 del Código Penal, toda vez que se reclama por ofensas a la dignidad, tanto del querellante como de su familia. Como quiera que quien reclama está siendo investigado por la presunta comisión de un hecho delictivo, de poder atribuírsele la conducta denunciada al Fiscal Arboleda, la publicación podría configurar la infracción del principio de presunción de inocencia, pero nunca el delito de calumnia. Aun cuando se menciona también la violación de tal principio, resulta evidente que el ejercicio de la acción concerniente a los delitos contra el honor no sería la vía idónea para formular el reclamo correspondiente.

De cualquier modo, lo cierto es que, con la simple presentación de la prueba de la publicación de la noticia, el querellante no ha comprobado la comisión del pretendido delito por el querellado, sobre todo cuando éste último niega la imputación que se le hace y su negativa se encuentra ampliamente respaldada por la versión que de los hechos ofrece el autor de la publicación.

Así las cosas, considera esta colegiatura que la recomendación que formula el Ministerio Público, en cuanto a la decisión jurisdiccional sobre el mérito de las sumarias, debe ser atendida favorablemente, aun cuando estima que la situación procesal analizada corresponde más bien a lo previsto en el primer numeral del artículo 2210 del Código Judicial, toda vez que "resulta con evidencia que el hecho motivo de la investigación no ha sido ejecutado", ello sin perjuicio de que también resulta evidente que la conducta atribuida al Fiscal Arboleda no constituye delito.

Por las razones que se dejan expresadas, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA IMPERSONAL, en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RODOLFO PALMA
Secretario Ad Hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA CRIMINAL INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GONZALO ANTONIO MONCADA LUNA, CONTRA EL SEÑOR CRISTÓBAL ARBOLEDA, FISCAL ESPECIAL SUPERIOR, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 31 de enero de 1996 ante la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, el licenciado Gonzalo Antonio Moncada Luna, en representación de **MARVIN MAURO SALAZAR**, presentó formal denuncia contra el Fiscal Especial Superior, **CRISTÓBAL ARBOLEDA** por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.

FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA

El licenciado Moncada Luna, manifiesta que dentro del sumario seguido a Marvin Mauro Salazar por el delito de homicidio de John Scott Barton, su defendido al momento de ampliar su declaración indagatoria, el día 30 de enero de 1996, se acogió a la garantía que establece en el artículo 25 constitucional, explicando que no se sentía confiado ante esa fiscalía porque el señor fiscal Cristóbal Arboleda lo amenazó con palabras soeces si no cooperaba con la investigación.

Estima que esa acción tipifica el delito que consagra el artículo 336 del Código Penal. Además, que son varias las actuaciones del referido fiscal que podrían afectar el desenlace de esa encuesta penal. Narra que precisamente ese día -de la entrega del escrito- el Fiscal Arboleda sin previo aviso dejó a varios abogados esperando por un testigo, aduciendo por teléfono que estaba indispuesto, aunque el día anterior lo había observado trabajando en la fiscalía **"tarareante y rebosante de salud"**. Adjunta como prueba sumaria la declaración indagatoria rendida por Marvin Salazar. (Fs. 1-3).

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., mediante vista N° 17 de 26 de febrero de 1996, solicita a esta Sala se archive la denuncia presentada, al considerar improcedente e ineficaz las pretensiones del denunciante, porque además de no cumplir con los requisito legales exigidos en el artículo 2471 del Código Judicial, tampoco se desprende de los hechos fundamentados, la modalidad delictiva que se atribuye al funcionario público denunciado (fs. 5-9).

FUNDAMENTO DE LA SALA

El delito por el cual se denuncia al Fiscal Especial, Cristóbal Arboleda, lo es el artículo 336 del Código Penal que establece:

> "El servidor público que, con abuso de su cargo ordene o someta en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no clasificado especialmente en la ley penal, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses o de 25 a 75 días-multa".

Como se puede observar, la estructura de este tipo penal requiere que el acto arbitrario cause perjuicio. La prueba acompañada a la denuncia no demuestra que el servidor público denunciado haya dirigido de manera abusiva **-sin respaldo legal-** su autoridad en perjuicio del imputado Marvin Mauro Salazar. Tampoco es demostrativa que se le causó un perjuicio.

Luego entonces, al no acompañar la denuncia la prueba sumaria de su relato, la cual según el artículo 2471 del Código Judicial **"es cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido"**, se procederá al archivo de la misma.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE de manera objetiva e impersonal en la presente sumaria.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RODOLFO PALMA GUERRA
Secretario Ad-Hoc
==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

MARZO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSA DE INTERPRETACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL GARCÍA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIE SOBRE LA OPINIÓN VERTIDA POR EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN SUPLENTE EN SU NOTA C-43 DEL 9 DE FEBRERO DE 1996. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel García, actuando en nombre y representación del Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de interpretación con el fin de que la Sala interprete prejudicialmente la opinión vertida por el señor Procurador de la Administración Suplente en la Nota N° C-43, del 9 de febrero de 1996.

Al decidir sobre la admisibilidad de la presente demanda, la Sala estima necesario examinar, por razones de economía procesal, si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.

El demandante pide a la Sala que se pronuncie acerca del alcance y sentido de la "opinión vertida por el Procurador de la Administración Suplente a través de la Consulta N° C-43 de 9 de febrero de 1996, relativa la pago de estipendios por la asistencia a las Comisiones Permanentes y Accidentales de Trabajo, tal cual se establece en el Acuerdo 214 de 19 de diciembre de 1995, proferido por el Consejo Municipal de Panamá".

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 98 del Código Judicial, el proceso contencioso de interpretación tiene como fin que la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la autoridad administrativa que deba ejecutar un acto, conozca el alcance y sentido de un acto administrativo antes de resolver el fondo del juicio o de aplicar dicho acto.

El acto administrativo cuya interpretación se pide no es un acto que deba cumplirse, aplicarse o ejecutarse; no es un acto vinculante, es simplemente una opinión. Como este acto no obliga al demandante, no es de aquellos sobre los cuales la Sala puede pronunciarse prejudicialmente y, por tanto, la demanda es inadmisible, de conformidad con el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de interpretación presentada por el licenciado Manuel García, en nombre y representación del Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá, para que la Sala Tercera se pronuncie prejudicialmente sobre la opinión vertida por el señor Procurador de la Administración Suplente en su Nota N° C-43 del 9 de febrero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE PLATA, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE LA SALA TERCERA INTERPRETE EL ALCANCE Y SENTIDO DE LA SENTENCIA HC032-96, DEL 22 DE ENERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **JORGE PLATA**, actuando en nombre propio, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de interpretación prejudicial para que ésta se pronuncie sobre el alcance y sentido de la Sentencia N° HC032-96, del 22 de enero de 1996, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la demanda para decidir acerca de su admisibilidad la Sala observa que el demandante pide que declare ilegal la Sentencia N° HCO32-96 del 22 de enero de 1996, expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia; que se interprete el artículo 45 de la Ley N° 30 de 1984 y se declare que las Administraciones Regionales de Aduanas, a solicitud del Departamento de Fiscalización Aduanera, están facultadas para detener a los sindicados de delitos aduaneros si en los sumarios se determina la plena prueba de éstos o graves indicios de culpabilidad (fs. 19. ss).

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 98 del Código Judicial, el proceso contencioso-administrativo de interpretación tiene como fin que la autoridad judicial encargada de decidir un proceso, o la administrativa encargada de su ejecución, conozca el alcance y sentido de un **acto administrativo** antes de resolver el fondo del juicio o de aplicar dicho acto.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, la presente demanda no debe admitirse porque el acto cuya interpretación se pide no es un acto administrativo sino jurisdiccional, y además las pretensiones del demandante resultan improcedentes en este tipo de procesos.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de interpretación prejudicial presentada por el licenciado ALBERTO PLATA para que la Sala Tercera se pronuncie prejudicialmente sobre el alcance y sentido de la Sentencia N° HCO32-96 del 22 de enero de 1996, expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMILIO DE LEÓN LOCKEE, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS IGLESIAS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 028 DE 31 DE MAYO DE 1995, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 30 de 15 de enero de 1996, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 14 de noviembre de 1995, por la cual se admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, promovida por el licenciado Emilio De León Lockee, en representación de ALEXIS IGLESIAS, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 28 de 31 de mayo de 1995, expedido por el

Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración, la demanda presentada no debe admitirse porque el demandante no ha comprobado en el expediente el agotamiento de la vía gubernativa; esto es así, porque interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el acto administrativo impugnado el día 12 de junio de 1995, y el día 14 de agosto del mismo año, sustenta recurso de apelación ante la Junta Directiva del Instituto de Investigación Agropecuaria, sin esperar la notificación de la decisión de primera instancia (Resuelto N° 041-95 de 10 de julio de 1995, fojas 10-11) en cuya parte resolutiva se le concede al recurrente la facultad de interponer Recurso de Apelación ante la Junta Directiva hasta cinco días después de notificado el acto administrativo.

Señala también la señora Procuradora de la Administración, que el apoderado judicial de la parte actora, omitió incluir en su demanda la petición al Magistrado Sustanciador de que solicite a la Junta Directiva del Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), certificación en la cual conste si hubo o no contestación al Recurso de Apelación interpuesto.

A este recurso se opuso oportunamente el apoderado judicial de la parte actora quien alegó, que "en el último hecho de la demanda se indica que quedó agotada la vía gubernativa con la negación del recurso de apelación, tal como se contempla en el artículo 42 de la Ley Contencioso Administrativa y no como lo prevé el artículo 36, numeral 3, de dicha excerta legal". Señala también el apelante que "cuando en los hechos de la demanda se asegura que se decidieron los recursos de reconsideración y apelación, interpuestos y sustentados en contra del acto recurrido, se tiene por agotada la vía gubernativa. En este caso, estamos confirmando que el Director y la Junta Directiva del IDIAP han negado dichos recursos, con lo que le pusieron término al proceso administrativo iniciado con la interposición de los mismos". (fs. 50-51).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que la parte actora utilizó en tiempo los recursos que le confiere la Ley para el agotamiento de la vía gubernativa; mas sin embargo, se constata también en el expediente, que en la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, el apoderado judicial de la parte actora solicita a la Sala que se "pida al Director General del IDIAP, copia autenticada de la Resolución N° 055 de 17 de agosto de 1995, expedida por la Junta Directiva de dicha institución", resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en el cual la Junta Directiva del Instituto de Investigación Agropecuaria confirma en todas sus partes los Resueltos N° 028 de 31 de mayo de 1995 y N° 041 de 10 de julio de 1995. (Cfr. foja 36)

Por lo tanto, como por medio de dicha resolución se agotó la vía gubernativa, y además si se solicitó a la Sala copia autenticada de acto para poder comprobarlo, el resto los Magistrados de la Sala consideran que debe confirmarse la resolución de primera instancia que admite la demanda.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la providencia de 14 de noviembre de 1995, mediante la cual el Magistrado Sustanciador admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Emilio de León Lockee, en representación de ALEXIS IGLESIAS, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto N° 028 de 31 de mayo de 1995, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE KIA PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-41-2-95, DICTADA POR EL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INAFORP), EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CUATRO (4) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Javier Carrillo González, actuando en nombre y representación de la sociedad **KIA PANAMÁ, S. A.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DN-41-2-95, del 19 de diciembre de 1995, dictada por el Director Nacional de Instituto Nacional de Formación Profesional, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Antes de admitir la demanda, la suscrita Magistrada Sustanciadora estima necesario examinar si la misma cumple con los requisitos legales indispensables para ser admitida.

En este sentido, se aprecia que el apoderado de la actora omitió designar expresamente a las partes y a sus representantes, es decir, a la parte demandante, constituida por la sociedad KIA PANAMÁ, S. A., representada por el licenciado Javier Carrillo González; y la parte demandada, constituida por el Director Nacional del Instituto Nacional de Formación Profesional, representada por la señora Procuradora de la Administración.

Sobre el particular, el numeral 1° del artículo 43 de la Ley N° 135 de 1943 señala como uno de los requisitos formales de las demandas contencioso-administrativas, la **"designación de las partes y de sus representantes"**. El incumplimiento de este requisito ocasiona la constituida de la demanda, en atención a lo dispuesto en el artículo 50 de la misma Ley.

Es de observar, por otra parte, que el apoderado de la actora dirigió su libelo en forma genérica a todos los Magistrados de la Sala Tercera cuando, en atención a lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial, debió dirigirla al Magistrado Presidente de la misma.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Javier Carrillo González, en nombre y representación de KIA PANAMÁ, S. A. para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DN-42-2-95 del 19 de diciembre de 1995, dictada por el Director Nacional del Instituto Naciona de Formación Profesional.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ARSENIO GARCÍA VALDÉS, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL DE GRACIA, PARA QUE SE

DECLARE NULO POR ILEGAL, AL AUTO N° 157 DE 28 DE ABRIL DE 1995 PROFERIDO POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO DE LO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA PONCE. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Arsenio García Váldez, actuando en representación de Miguel de Gracia, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el auto N° 157 de 28 de abril de 1995, proferido por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil.

El Magistrado Sustanciador pasa a examinar la demanda a fin de verificar si la misma cumple con los requisitos exigidos por ley para su admisión.

Se observa que, en la presente demanda se solicita que se declare la nulidad de un Auto dictado por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, mediante el cual se decreta secuestro contra el señor Miguel De Gracia Castro, sobre el vehículo marca Izusu, tipo Pick-Up, doble cabina, color blanco, placa del año 1995, hasta la concurrencia de doce mil doce con doce centésimos (B/.12,012.12), que corresponde a B/.1,969.52 de costas; B/.150.00 de gastos y B/.45.00 de intereses legales al 6 por ciento en un mes tentativamente.

Quien suscribe estima que dicho auto, constituye un acto meramente jurisdiccional, mismo que no puede ser impugnado ante esta jurisdicción contencioso administrativa. El artículo 98 del Código Judicial establece claramente que la Sala Tercera conoce de las actos que dicten las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia administrativa.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. Arsenio García Váldez, en representación de Miguel De Gracia.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE COSTUREX INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 241-04-0041 DE 18 DE ENERO DE 1995, EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Francisco Espinosa Castillo**, en representación de **COSTUREX INTERNACIONAL, S. A.**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 214-04-0041 de 18 de enero de 1995, emitida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Colón, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los presupuestos legales exigidos en las leyes

reguladoras de este tipo de proceso contencioso administrativo, que hagan procedente su admisión.

Se percata quien suscribe que la parte demandante no acompañó a su demanda copia debidamente autenticada del acto impugnado consistente en la Resolución N° 214-04-0041 de 18 de enero de 1995, con las constancias de su notificación, publicación o ejecución, según sea el caso, tal como lo exigen el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 820 del Código Judicial. Únicamente se observa a fs. 1-2 del exp., copia fotostática de la referida resolución, sin la constancia de su notificación, lo que imposibilita determinar si la demanda ha sido presentada en tiempo oportuno.

La ley exige la autenticación del acto impugnado con la constancia de su notificación, con el fin de verificar el agotamiento de la vía gubernativa, para establecer si la demanda ha sido presentada en tiempo oportuno, o si por el contrario, la misma es extemporánea.

Igualmente la Ley 135 de 1943, en su artículo 46, señala el mecanismo para la consecución de dicha autenticación, por medio del Magistrado Sustanciador, en caso de que la oficina donde se encuentra el original, deniegue la expedición de la copia debidamente autenticada del acto acusado, con la constancia de su notificación.

El presente criterio ha sido objeto de reiterada jurisprudencia por parte de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como se aprecia a continuación.

> "... Se observa que el libelo no ha cumplido con la formalidad prevista en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 modificado por la Ley 33 de 1946, que es clara al señalar que deberá acompañar a la demanda, copia del acto impugnado con la constancia de su notificación, publicación o ejecución según sea el caso.
>
> A foja 25 del expediente principal, el actor señala que entre las pruebas presentadas incluye copia autenticada del acto impugnado. Sin embargo esta Sala, previo estudio de los documentos que constan en el expediente, ha verificado que a foja 1 del mismo, aparece una copia fotostática de la Resolución de 5 de octubre de 1989, que es el acto administrativo acusado, pero en ningún momento consta la fecha de notificación de tal resolución, requisito indispensable para comprobar si el afectado utilizó los recursos que la ley le concede, en tiempo oportuno, o si por el contrario acudió a la vía gubernativa extemporáneamente.
>
> Reiteradamente esta Sala se ha pronunciado sobre el hecho de que el acto impugnado debe aparecer en el expediente debidamente autenticado, y con la constancia de la notificación respectiva, y si el recurrente se viera imposibilitado para aportarla debe demostrar por otros medios idóneos si esta se hizo o no, y partiendo de ese punto dilucidar si los recursos gubernativos fueron incoados oportunamente ..." (Auto de 11 de febrero de 1992).
>
> "... Siguiendo este orden de ideas, se detectan en el escrito de demanda otros defectos formales que impiden la admisión de la misma, como lo son la omisión de acompañar la copia autenticada del acto impugnado. Así, se observa a fojas 1-5 del expediente, copia del Decreto N° 285 de 18 de julio de 1994, contentivo de la declaración de insubsistencia del cargo del señor **LUIS CARLOS VALDERRAMA**, sin embargo el referido documento no está revestido por el sello de autenticidad que se exige a los documentos aportados al proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 820 del Código Judicial, y extensivamente en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.
>
> La copia simple del acto acusado es pues, en virtud de la aplicación de las normas legales precitadas y de la inveterada jurisprudencia

de la Sala Tercera, inidónea para los efectos de admisión de la demanda presentada." (Auto de 8 de septiembre de 1994).

En adición a lo expresado, también se observa que el actor tampoco ha dado fiel cumplimiento al requisito establecido en el artículo 28, ordinal 4 de la Ley 33 de 1946, en razón de que no ha precisado el concepto de la violación de la norma que considera violada; ya sea violación directa por omisión o por comisión, interpretación errónea de la ley, indebida aplicación, la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que dictó el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades legales y la desviación de poder.

Por las consideraciones expuestas, no debe dársele curso legal a la presente demanda, conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Francisco Espinosa Castillo, en representación de COSTUREX INTERNACIONAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. XIOMARA RÍOS DE VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE FERMÍN ENRIQUE CASTAÑEDAS ALDEANO (JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL PLENO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Xiomara Ríos de Vallarino, actuando en representación de FERMÍN ENRIQUE CASTAÑEDAS ALDEANO (JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN), ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución de 26 de octubre de 1995, emitida por el PLENO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

En la demanda se incluye una petición dirigida a la Sala Tercera para que ésta decrete una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Mediante el mismo, se suspende al Licenciado Fermín Enrique Castañedas como Juez Primero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Colón, por el término de quince (15) días sin derecho a sueldo.

El apoderado Judicial del demandante sustenta su petición de suspensión al expresar que " si se llega a cumplir ... la suspensión ordenada ... se habrá perfeccionado la injusticia y de poco habrá valido la interposición del presente recurso, aunque todavía pueda exigirse el pago de los emolumentos no recibidos en virtud del la sanción impuesta ...".

Si bien es cierto, el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta al Pleno de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave", también es cierto que, para que la suspensión provisional de un acto administrativo proceda es necesario que la parte actora acredite que fue contratada por un período fijo o por un período definido de tiempo, tal como lo dispone el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943.

En este caso, la parte actora no ha podido comprobar que el Licenciado Castañedas fue nombrado por un período fijo, por lo que lo procedente es, pues, no acceder a la presente solicitud de suspensión.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución de 26 de octubre de 1995, emitida por el PLENO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUÍZ Y ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Icaza, González-Ruíz y Alemán, actuando en representación de ISMAEL JAVIER SUCRE TEJADA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, dictada por el Contralor General de la República, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda, la parte actora solicita a la Sala Tercera que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución 33-94 mediante la cual el Señor Contralor General de la República ordenó al Director General del Registro Público que se abstenga de inscribir cualquier acto, medida o resolución que enajene, traspase o segregue, entre otros terrenos, la finca 48088, propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano.

La parte actora fundamenta su petición de suspensión en los siguientes términos:

> "... solicitamos a esa augusta Sala que ordene la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República, en lo que se refiere a la inscripción de la Escritura Pública número 5211 otorgada ante el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, el día 7 de junio de 1994, por medio del a cual el Ministro de Desarrollo Agropecuario segrega dos globos de terreno de la finca distinguida con el número 48088 de propiedad de la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y los vende a Ismael Sucre Tejada.
>
> Esta solicitud de suspensión tiene como propósito proteger , salvaguardar los derechos subjetivos y los intereses particulares del señor Sucre como resultado de la firmeza de los actos administrativos impugnados, así como también garantizar la integridad del orden jurídico.
>
> Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni iuris).
>
> Los actos administrativos son ostensiblemente ilegales o, al menos, cuentan con una apariencia real de ilegalidad. La violación de la Ley es clara, manifiesta y notoria. ... Urgencia.

> El señor Sucre consiguió hasta la fecha una espera prolongada por parte del banco que le financia su actividad agrícola. Pero el tenor de la carta del banco (más arriba citada) advierte que éste podrá tomar acción pronta en contra del señor sucre, lo que podría suceder en cualquier momento ..."

La Sala pasa a examinar las circunstancias planteadas en relación con la solicitud de suspensión provisional incoada por el recurrente.

En primer lugar mediante Resolución de Gabinete N° 768 de 29 de diciembre de 1993, modificada por la Resolución N° 96 de 9 de febrero de 1994, el Consejo de Gabinete autorizó el traspaso a favor de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad principal de que: 1. Se otorgase en propiedad ciertas hectáreas a comunidades o asentamientos humanos que eran moradores de las mismas; 2. Se procediese a la venta directa de otras fincas a los siguientes grupos de personas:

a) quienes venían arrendándolas a la Corporación y que manifestaban su interés de adquirirlas para explotación agropecuaria; y b) a quienes habían sido previamente expropiados tales inmuebles; el resto de las tierras serían vendidas mediante el trámite de Licitación Pública.

Consta en las pruebas aportadas por la parte actora, que entre los beneficiados con la venta directa autorizada por el Consejo de Gabinete se encontraba el Señor Ismael Sucre Tejada, toda vez que el mismo era arrendatario de parte de la finca antes distinguida, razón por la cual tenía opción de compra preferente.

De esta forma, y contando el Ministro de Desarrollo Agropecuario con la autorización del Consejo de Gabinete, se autorizó el traspaso mediante venta directa al Señor Ismael Sucre Tejada, de ciertas fincas o globos de terreno segregados de inmuebles de propiedad de la **CORPORACIÓN.**

Seguidamente y conforme a lo preceptuado en el artículo décimo de la Resolución del Consejo de Gabinete N° 768, se suscribió el contrato para la venta de una porción de la finca 48088 entre el Señor Ismael Sucre Tejada y la Corporación para el Desarrollo integral del Bayano, tal como se aprecia de la Escritura Pública N° 5211.

Una vez formalizada la Escritura Pública contentiva del contrato de compra-venta antes mencionado, la misma fue protocolizada ante la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, y estando pendiente de inscripción en el Registro Público, el Señor Contralor General de la República, mediante Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, ha ordenado al Director del Registro Público que se abstenga de inscribir cualquier acto de traspaso de dominio, relativo entre otras, a la finca N° 48088; fundamentado en que, a su juicio, en las resoluciones del Consejo de Gabinete N° 768 y N° 96 se determinó en B/.375.00, el precio de venta, por hectárea, lo que pudiese afectar fondos o bienes públicos, por cuanto que un informe de valorización de bienes de la Contraloría General ha determinado que en la mayoría de los casos, el valor de la hectárea sobrepasa el precio fijado en las citadas resoluciones de Gabinete y, en segundo lugar, establece que para proceder a la cautelación de las propiedades de la **CORPORACIÓN** se circunscribe al hecho de que estos son bienes nacionales, y que por tanto, conforme a los artículos 23 y 25 del Código Fiscal requieren de un avalúo del Ministerio de Hacienda y Tesoro y de la Contraloría General de la República antes de fijar el precio de venta.

Mediante auto de 8 de agosto de 1995, la Sala Tercera, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución N° 33 de 18 de mayo de 1994, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por la firma Ramírez y Cigarruista en representación de **Alberto De León**, para que se declare nula por ilegal, la resolución N° 33-94 De 18 de mayo de 1994, emitida por el Contralor General de la República. En dicho auto se estableció "... que el Señor Contralor General de la República no puede suspender los efectos de un acto administrativo que a su juicio es ilegal, pues es necesario que el mismo

interponga los recursos que establece la ley para que se pueda declarar judicialmente la suspensión de dicho acto. Dicha potestad para suspender los efectos de un acto administrativo es competencia privativa de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tal y como se establece en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, lo cual implica que es ésta, solamente, la que tiene la potestad discrecional de suspender un acto administrativo acusado de tener vicios de ilegalidad ..."

Por otro lado, a foja 146 del expediente, se observa una carta suscrita por el Gerente General de BIPAN, donde se hace referencia a la facilidad crediticia otorgada por dicha institución bancaria al recurrente y a un préstamo por B/.20.000.00 para financiar parcialmente la siembra de cien hectáreas de arroz en los terrenos vendidos al mismo bajo la referida Escritura Pública N° 5211. En dicha nota se le informa al señor Sucre Tejada que no podrá mantenerse vigente el financiamiento agrícola existente hasta tanto cumpla con el compromiso adquirido por él con dicho banco.

Como corolario de lo anterior y debido a que la parte actora ha logrado probar el perjuicio grave y de difícil reparación que le puede ocasionar dicho acto, lo procedente es, pues, suspender la resolución N° 33 de 18 de mayo de 1995.

En consecuencia la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los efectos de la Resolución N° 33 de 18 de mayo de 1994, proferida por el Contralor General de la República, en los que se refiere a la Inscripción de la Escritura Pública N° 5211 suscrita por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano, por una parte y Ismael Sucre Tejada, por la otra, en relación a la finca 48088 inscrita en el Tomo 1134 Folio 152.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE BERTILO MEJÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 350 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas, actuando en representación de BERTILO MEJÍA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nulo por el ilegal el Decreto de Personal N° 350 de 12 de septiembre de 1994, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se pide que se declare nulo el Decreto de Personal N° 350 de 12 de septiembre de 1994, dictado por el Ministro de Educación y mediante el cual se deja sin efecto el Decreto N° 37 de 2 de febrero de 1990 que nombra como Director Nacional de Educación, con la posición 00454 al señor Bertilo Mejía. Igualmente, se solicita a la Sala la declaratoria de nulidad del acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 60 de 5 de diciembre de 1994 y en la cual se resuelve mantener en todas sus partes el contenido de la Resolución N° 350 de 12 de septiembre de 1994 y, que como consecuencia de ello, se restituya al señor Mejía a su cargo y se le paguen los sueldos dejados de percibir desde

la fecha de remoción hasta la fecha en que sea restablecido.

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se acusa expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto de Ministerio de Educación es nulo, dado que vulnera en concepto de infracción literal del precepto legal el artículo 127, en concordancia con los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

En cuanto a la violación endilgada al artículo 127 de la Ley 47 de 1946, el cual hace referencia a la estabilidad que gozan tanto el personal docente como el administrativo que labora en el Ministerio de Educación, opina el licenciado Rosas que se ha violado dicha norma por infracción literal del precepto legal, puesto que el artículo 127 transcrito contiene la prohibición para el Ministerio de Educación de remover a los empleados del ramo de la educación sino mediante el proceso establecido en la misma Ley 47 de 1946, proceso que se regula desde el artículo 130 hasta el 140 de la misma excerta. Igualmente, señala el Licenciado Rosas, se desconoce a su representado como miembro del personal docente, ya que el mismo ingresó con diploma de maestro de enseñanza primaria al Ramo de Educación, inscrito en el Ministerio de Educación. Aunado a lo anterior, señala el apoderado judicial del demandante, se pretende excluir al señor Mejía de los beneficios del status de docente, al atribuírsele la situación de "Directivo de importancia dentro de ese Ministerio de Educación; un cargo de confianza en relación a la actuación del Despacho Superior y, por consiguiente, de libre nombramiento y remoción por parte del Órgano Ejecutivo, por cuanto no está incluido en ninguna carrera pública".

También afirma el licenciado Mejía, que la resolución acusada viola de manera directa por omisión los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, los cuales hacen referencia a la forma en que debe ser enderezado un proceso disciplinario que se siga contra un funcionario del ramo de la educación. Según el recurrente, ninguno de los requisitos del procedimiento establecido en estos artículos fue cumplido, con lo que se le impide a su poderdante "el beneficio de una investigación y el derecho de defensa."

El Ministro de Educación rindió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota N° DNAL/104-373 de 12 de octubre de 1995. En dicha nota el funcionario fundamenta su actuación de la siguiente manera:

> "El profesor **BERTILO MEJÍA ORTEGA**, ingresó a este Ministerio por nombramiento como Educador mediante Decreto N° 182 de 21 de junio de 1969, en la Escuela Gualaca en la provincia de Chiriquí. A partir de ese momento, ocupó distintas posiciones dentro del Ministerio de Educación, algunas veces por concurso de vacantes y otras por designación personal del Ministro. Por Decreto de Personal N° 37 de 2 de febrero de 1990 fue nombrado Director Nacional de Educación en la Dirección Nacional de Educación, conservando esta posición hasta la expedición del Decreto N° 350 de 12 de septiembre de 1994 que dejó sin efectos el nombramiento que se le efectuó por Decreto N° 37 de 1990.
>
> Cabe aclarar que la posición de Director Nacional de Educación corresponde a la de Director General de Educación de acuerdo con la Ley. También conviene señalar que el Resuelto 1102 de 1990, exige que los cargos en la carrera docente sean sometidos a concurso, y en particular la posición que ocupaba el educador **BERTILO MEJÍA ORTEGA** de Director Nacional de Educación también tendrá que ser objeto de concurso por disposición legal contenida en el Artículo 23 de la Ley 34 de 1995 que adiciona el Artículo 17-A de la Ley Orgánica de Educación.
>
> Como puede observar el Magistrado Sustanciador, la posición de Director General de Educación que ocupaba **BERTILO MEJÍA ORTEGA**, no forma parte de la Carrera Docente, ya que no está contemplada en el escalafón establecido en la Ley 47 de 1979, que regula lo concerniente al escalafón y a la política salarial de los

> educadores. Por consiguiente, esta posición es considerada de libre nombramiento y remoción de la Administración, ya que no forma parte de la Carrera Pública y, en particular, de la Carrera Docente. ...
>
> Esta posición del Ministerio con respecto a la clase de cargo que ocupaba el profesor **BERTILO MEJÍA ORTEGA** fue la que se le comunicó mediante la Nota DP-DOPA-3581 de 5 de septiembre de 1995, suscrita por **Bernardina Chanis**, Directora de Personal en la cual se le aclara que su remoción es en virtud de que su cargo es de confianza del señor Ministro. ...
>
> ... consideramos que no hemos violado disposición legal, por cuanto que el nombramiento de **BERTILO MEJÍA ORTEGA** no fue producto de un concurso de méritos y su posición, consecuentemente, es de confianza con respecto a la gestión del Ministro de Educación.
>
> En cuanto a la violación de los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, con respete advertimos que los mismos no son aplicables al presente caso, por cuanto que el nombramiento del educador **BERTILO MEJÍA ORTEGA** fue dejado sin efecto no por razones disciplinarias, sino porque el cargo de Director Nacional de Educación que ostentaba, era de libre nombramiento y remoción de la administración."

Al corrérsele traslado a la Procuradora de la Administración, ésta contestó la demanda mediante Vista N°468 de 2 de noviembre de 1995 en la que considera que las pretensiones de la parte actora deben ser denegadas, puesto que la separación del cargo del profesor Bertilo Mejía Ortega, no obedeció a la imposición de una medida o sanción disciplinaria, sino por razón de que el cargo de Director Nacional de Educación, es de libre nombramiento y remoción de la Administración. Aunado a ello, considera la Procuradora que al aceptar el nombramiento en la posición de Director Nacional de Educación también estaba renunciando implícitamente a las prerrogativas y garantías inherentes al cargo que ocupaba con anterioridad por lo que, a su juicio, el demandante no se encuentra amparado por la estabilidad que en esa norma jurídica se reconoce.

En cuanto a la supuesta violación a los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, consideró la Procuradora que los mismos hacen referencia a la investigación, procedimiento y sanción a los miembros del personal docente o administrativa del Ramo de Educación contra los cuales se formulen cargos o denuncias. No proceden, a juicio de la funcionaria, las violaciones alegadas por cuanto el demandante no ha sido objeto de ningún proceso disciplinario.

Según los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 127 de la Ley 46 de 1947 observa la Sala que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, tal como lo señala el Ministro de Educación en su informe de conducta, el señor Mejía ocupaba el cargo de Director Nacional de Educación por elección directa del Ministro de Educación de turno, lo que significa que su cargo no se encuentra comprendido dentro de los supuestos contemplados en el mencionado artículo. Se aprecia, además, que el Ministro de Educación señala que el cargo específico ocupado por el señor Mejía es de "confianza y colaboración inmediata con la administración, sujeta por consiguiente a su libre nombramiento y remoción." A este respecto, cabe señalar que la Sala mediante Sentencia de 12 de agosto de 1994 consideró que:

> "... el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, es debido a que los cargos que ocupan han sido conferidos ya sea por medio de concursos, por el tiempo de servicio en la institución, o porque simplemente no son cargos de confianza, con respecto a la gestión del Ministro de Educación." (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, resulta palmario el hecho que el señor Mejía fue nombrado como Director Nacional de Educación por designación personal del Ministro que ocupaba la cartera de Educación en 1990, y no como producto de un concurso, ni por el tiempo de servicio en la institución, puesto que no se han presentado pruebas en contrario, por lo que a todas luces se colige que el mencionado cargo es uno de los que dispone el Ministro de Educación para nombrar a su personal de confianza, con respecto a la gestión del Ministerio. Este criterio se ha mantenido en reiteradas ocasiones por la Sala Tercera, tal y como se puede apreciar en las sentencias de 12 de agosto de 1994, 24 de febrero de 1995, 31 de junio de 1995 y 25 de enero de 1996, entre otras. Se desestima, pues, el presente cargo.

Sin embargo, a juicio de la Sala, no le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración cuando afirma que al aceptar el cargo administrativo de Director Nacional de Educación el demandante renunció implícitamente a las prerrogativas y garantías inherentes al cargo que ocupaba con anterioridad, y siendo esto así no está amparado por la estabilidad que le reconoce el artículo 127 de la Ley 46 de 1947. En reiterados fallos la Sala ha sostenido que el desempeño de cargos administrativos no produce la pérdida de la estabilidad ganada mediante concurso de méritos, y en el caso en estudio consta en autos que al asignársele al profesor Mejía funciones de Director Nacional de Educación, mediante el Resuelto 5 de 12 de enero de 1990, se señaló que continuaría recibiendo los beneficios inherentes a su condición de docente. (Cfr. foja 24).

Por último en lo que respecta a la supuesta violación de los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, considera la Sala que no son aplicables al presente caso, dado que el señor Bertilo Mejía Ortega, no ha sido destituido por razones disciplinarias, sino porque su cargo era de libre nombramiento y remoción, puesto que el cargo de Director Nacional de Educación es una de las posiciones de las que dispone el Ministro de Educación para nombrar a su personal de confianza, que le ayudará en su gestión administrativa. No proceden, pues los cargos alegados por el demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que NO ES ILEGAL el acto administrativo contenido en el Decreto de Personal N° 350 de 12 de septiembre de 1994, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Educación, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ T. VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FLOR MIRÓ DE CHASSIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 185-D. G. DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, LA RESOLUCIÓN N° 4 DE 28 DE MARZO DE 1995, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, ha presentado recurso de apelación contra la resolución fechada el 5 de diciembre de 1995 dictada por la Magistrada Sustanciadora, y en la que se admite la corrección de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que fue interpuesta por el Lcdo. José T.

Vásquez, en representación de FLOR MIRO DE CHASSIN, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 185-94 D. G. de 17 de noviembre de 1994 emitida por el Director General del Instituto Nacional de Deportes y su acto confirmatorio.

El resto de los Magistrados de la Sala proceden a examinar los argumentos planteados por la Procuradora de la Administración en su recurso de apelación.

Alega la Procuradora de la Administración, que inicialmente la parte actora interpuso el 10 de mayo de 1995, demanda contencioso administrativa que fue admitida por la Magistrada Sustanciadora mediante resolución de 3 de julio de 1995. No obstante, añade que la corrección de la demanda efectuada por el Lcdo. Jerónimo E. Mejía, presentada ante la Secretaría de esta Sala el 22 de noviembre del mismo año, excede con creces el plazo contemplado por el artículo 42 b) de la Ley Contencioso Administrativa, pues, a su criterio, si se deseaba hacer alguna corrección de la demanda presentada el 10 de mayo de 1995, la misma podía darse hasta el 24 de junio de 1995, dado que esa fecha constituye el plazo para la presentación de la acción.

Por su parte, el Lcdo. Jerónimo E. Mejía se opone a los criterios expuestos por la Procuradora de la Administración y entre los argumentos por él expresados, figuran que la demanda original había sido presentada oportunamente según lo previsto el artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943; que dicha demanda ya había sido admitida; y, finalmente, que la corrección de la demanda se hizo dentro del plazo previsto por el artículo 60 de la Ley 135 de 1943.

Estima el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera que no le asiste la razón a la Procuradora de la Administración, puesto que, como bien lo señala el licenciado Jerónimo E. Mejía, representante legal actual de Flor Miró de Chassin, una vez que es admitida la demanda ésta puede estar sujeta a aclaración o corrección hasta el último día del término para aducir pruebas según lo previsto en el artículo 60 de la Ley 135 de 1943. Observa, pues, el resto de la Sala, que la demanda original fue presentada oportunamente el 10 de marzo de 1995, una vez agotada la vía gubernativa según lo preceptúa el artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943, y, el escrito de corrección fue presentado el 22 de noviembre del mismo año, es decir, cuando ya había sido admitida por lo que la presentación de la misma figura dentro del término previsto en el artículo 60 antes mencionado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la resolución fechada el 5 de diciembre de 1995 que admite la corrección de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. José T. Vásquez en representación de FLOR MIRO DE CHASSIN para que se declare nula por ilegal, la resolución N° 185-94 D. G. de 17 de noviembre de 1994 dictada por el Director General del Instituto Nacional de Deportes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RANGEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE JULIO CÉSAR MARTÍNEZ CREDIDÍO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 1 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Rangel Castillo, actuando en nombre y representación de JULIO CÉSAR MARTÍNEZ CREDIDÍO, promovió recurso de apelación contra el auto de 26 de octubre de 1995, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 1 de junio de 1995 emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas, y para que se haga otras declaraciones.

En dicha resolución, el Magistrado Sustanciador consideró lo siguiente:

> "Ciertamente el recurrente omite incorporar al proceso el acto impugnado debidamente notificado y autenticado como lo requiere el tenor del artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con los artículos 844 y 860 del Código Judicial.
>
> Aunado a lo expresado, el petente no define con claridad la parte demandada en el proceso instaurado, dado que señala que este funcionario podría ser el Director de la Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas o el respectivo Ministro del Ramo. A este respecto se debe destacar que el funcionario demandado debe ser aquel responsable de la emisión del acto original que se impugne, si éste no ha sufrido modificaciones, ya que de lo contrario deberá demandarse al funcionario responsable que en alzada modifique la resolución inicialmente expedida.
>
> Frente a lo expuesto es necesario poner de relieve, que el actor tampoco trató de obtener previamente y por sus propios medios y esfuerzo, la certificación de la entidad que supuestamente lo destituyó para que le facilitara la copia autentica del acto acusado de ilegal, así como del silencio administrativo que invoca el petente como medio a través del cual presupone que se agotó en este negocio la vía gubernativa. Sin embargo, se hace la salvedad que el recurrente sólo solicita que se compruebe si hubo pronunciamiento o no sobre los recursos promovidos sin hacer alusión al acto administrativo impetrado, indispensable igualmente para la admisión de la demanda. Por consiguiente, el actor no comprueba el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto esencial para acceder ante este Tribunal. Dicho requisito es indispensable para comprobar no solamente la negativa tácita de la pretensión por parte de la Administración con respecto a la petición del demandante, sino también para determinar, que la acción de plena jurisdicción bajo estudio ha sido interpuesta en término y por ende no está prescrita.
>
> Por otro lado, se advierte que el demandante estima como conculcada una norma de rango constitucional, ante lo cual debe señalar el sustanciador que ello no es permisible mediante el móvil procesal de las Acciones Contencioso Administrativo promovibles ante esta Jurisdicción, en atención a que dicha competencia revisora de los actos que conculquen la Constitución Nacional es privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no de la Sala Tercera.
>
> Finalmente y no menos importante es el hecho de que el actor no ha comprobado previamente el haber sido nombrado por virtud de un concurso de oposición o mérito, o ser poseedor del derecho de estabilidad que le garantice una situación de inamovilidad relativa que implica en síntesis, el derecho a que se le siga un procedimiento legal en el cual se pruebe fehacientemente las causales que se le imputan (justa causa) con anticipación a su destitución". (Fs. 28-30).

El apelante fundamenta su petición alegando, en primer lugar, que resulta imposible para quienes han sido destituidos al obtener copia autenticada de los actos ilegales, por lo que el recurrente no pudo obtenerlos. Señala también que,

en cuanto a la designación de la parte demandada, es **obvio** que recae en el Director de Personal del Ministerio de Obras Públicas toda vez que es la persona que firma la Nota de 1 de junio de 1995.

En segundo lugar, alega que si hizo las gestiones pertinentes a fin de que se certificara si hubo contestación o no del recurso interpuesto y así probar el silencio administrativo, prueba de ello es la nota que presentó ante el Departamento de Asesoría Jurídica. En tercer lugar, manifiesta el apelante que su intención al aducir una norma constitucional como violada no es que sea revisado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sino que sea revisado lo actuado de conformidad al Artículo 84 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Obras Públicas en relación con el debido proceso que tutela la Constitución Nacional.

Por último destaca el hecho que, "si para lograr la expedición de copias autenticadas del Departamento que ejecutó la destitución ilegal contra nuestro poderdante se necesita de un Milagro, cuanto se necesitará para consecución del expediente personal del funcionario afectado, a quien únicamente le queda entablar una demanda contenciosa administrativa de Plena Jurisdicción". (Fs. 37-38).

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que el recurrente omitió cumplir una de las formalidades exigidas por la Ley, consistente en presentar copia debidamente autenticada del acto administrativo impugnado, el cual no presentó con la demanda, ni tampoco solicitó dentro del libelo para que el Magistrado Ponente pidiera al Ministerio de Obras Públicas copia del acto administrativo acusado de ilegal. (Cfr. artículo 44 de la Ley 135 de 1943 en concordancia con los artículos 844 y 860 del Código Judicial).

Además, tampoco **consta en el expediente**, como el actor afirma, la solicitud debidamente autenticada que acredite que el demandante haya pedido una certificación a la entidad administrativa correspondiente, acerca de si ha habido o no pronunciamiento en relación al recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto, contra la Nota de 1 de junio de 1995. En reiterados autos la Sala Tercera ha manifestado, en relación con estos hechos, que no es suficiente que el actor piense que el referido recurso no ha sido resuelto, sino que debe comprobarse plenamente este hecho, porque podría ocurrir que existiera un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado no conocido por el actor, quien deberá cerciorarse de lo ocurrido pidiendo una certificación mediante memorial.

Cabe señalar también, que el actor estima infringida una norma constitucional por el acto impugnado, y el conocimiento de esta inconstitucionalidad **no compete a esta Sala**, sino a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Tal como lo preceptúa el numeral 1 del Artículo 203 de la Constitución Nacional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es quien ejerce el control de la **constitucionalidad** en nuestro país.

Por otro lado se advierte, tal como lo afirma el Magistrado Sustanciador, que el recurrente no señala claramente quien es el funcionario demandado, sino que se limita a expresar que "la parte demandada está constituida por el Sr. **PASCUAL LEGUÍAS**, Director de Administración Personal del Ministerio de Obras Públicas, **o** el Jefe de este Ministerio, El señor Ministro del Ramo" (fs. 22); demostrando su inseguridad para indicar cual es el funcionario a quien está demandando. (el subrayado es de la Sala).

Por las anteriores consideraciones, la providencia apelada debe confirmarse.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 26 de octubre de 1995, mediante la cual el Magistrado Sustanciador no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Carlos Rangel Castillo, en representación de JULIO CÉSAR MARTÍNEZ CREDIDÍO, para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 1 de junio de 1995, emitida por el Director de Administración de Personal del Ministerio de Obras Públicas, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE BARCHESTER SHIPPING, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 603-04-07 ALCN DE 5 DE ENERO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Morgan y Morgan., actuando en nombre y representación de BARCHESTER SHIPPING, INC., ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 603-04-07 ALCN de 5 de enero de 1994, emitida por la Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Mediante la Resolución N° 603-04-07 ALCN de 5 de enero de 1994 la Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro resolvió sancionar a la nave RIVER PLATE con patente reglamentaria de navegación N° 17211-87-B, distintivo de llamada 3EKU5, propiedad de BARCHESTER SHIPPING, INC, a pagar en concepto de multa la suma de B/.1,000.00 balboas por violar el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar 74/78.

Admitida la presente demanda, se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración, y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe explicativo de conducta tal como lo preceptúa el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

Dicho informe fue rendido a la Sala mediante la Nota N° 603-01-808-ALCN de 28 de octubre de 1994, en el cual el Director General de Consular y Naves, señaló lo siguiente:

> "Esta Dirección General recibió, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reporte oficial fechado el 27 de julio de 1993, emitido por las Autoridades Sudafricanas, en relación a una infracción cometida por la nave de bandera panameña **"RIVER PLATE"** al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974/78 (SOLAS 74/78).
>
> En el mencionado reporte, las Autoridades Africanas indican, entre otras cosas, que en la inspección realizada a la nave **"RIVER PLATE"** se detectó que el planchaje del casco, las cuadrenas o bastidores y las placas de unión se encontraban en condiciones deplorables, se pudo observar además corrosión y evidente falta de mantenimiento.

> Cabe agregar, que un análisis del reporte de inspección sudafricano, nos lleva a la conclusión de que realmente las deficiencias detectadas a esta nave no sólo se originaron por haberla forzado a enfrentar el mal tiempo, sino también por la corrosión y la falta de mantenimiento.
>
> Luego de considerar los hechos antes expuestos y las pruebas presentadas por las Autoridades Sudafricanas, esta Dirección General, en uso de las facultades que le concede la Ley 2 de 1980, procedió a sancionar a la nave **"RIVER PLATE"** mediante Resolución motivada N° 603-04-07-ALCN de 5 de enero de 1994, por violar el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974/78, especialmente lo dispuesto en la Regla 11(A), Capítulo I, de este Convenio, la cual es del tenor siguiente:
>
> "A) El buque y su equipo serán mantenidos de modo que se conserven ajustado a las disposiciones de las presentes reglas para así garantizar que el buque seguirá estando, en todos los sentidos, en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para él mismo ni para las personas que se encuentren a bordo".
>
> En mi opinión, en lo relativo a este caso, creo que se ha violado esta regla ya que al momento de zarpar de Tubarao, Brazil, lo hizo con soldadores para realizar trabajos durante la navegación en las cuadernas de las bodegas, además de esa regla, debo anotar que violó los literales B y C en lo concerniente a informar a la Administración y clasificadora de los trabajos de cambio de estructuras.
>
> Las acciones arriba tomadas por Lloyd's Register fueron las correctas ya que al arribar al puerto le extendieron un certificado de clase interino con condiciones para mantener la clase. Todas las bodegas por reparar que menciona el reporte del Prt State Control de Sur Africa, están incluidas en las condiciones que debe cumplir el Barco.
>
> 2. Considerando las condiciones de mar y tiempo (mar 8-10 Esc. Douglas y Vientos 8-10 Beaufort) durante 4 días, no podemos atribuir estas averías a las condiciones del tiempo".
>
> Tomando en cuenta lo antes expresado, somos de la opinión que la inspección realizada por las Autoridades Marítimas Sudafricanas constituye prueba suficiente de que la nave reportada violó el Convenio SOLAS 74/78, del cual Panamá forma parte". (Fs. 24-25)

Las normas que el demandante señala violadas por el acto administrativo impugnado son los siguientes: el literal a) de la Regla 11 del Convenio Internacional para Seguridad de la Vida en el Mar, adoptado como Ley panameña N° 12 de 9 de noviembre de 1981 y el artículo 34d del Código Civil.

El literal a) de la Regla 11 del Convenio Internacional para Seguridad de la Vida en el Mar, es del siguiente tenor literal:

> "a) El buque y su equipo serán mantenidos de modo que se conserven ajustados a las disposiciones del Convenio y del presente Protocolo, para así garantizar que el buque seguirá estando, en todos los sentidos, en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para él mismo ni para las personas que se encuentren a bordo".

Afirma el demandante (a fojas 19) que la anterior disposición ha sido violada en el concepto de aplicación indebida, puesto que las condiciones de seguridad a que se refiere la previsión deben ser observadas por el buque **antes** del inicio de un viaje y en el caso de la nave **RIVER PLATE** esas condiciones existían para el momento del inicio del viaje. Además, los daños encontrados en el planchaje del casco y otros sitios del buque fueron causados por la tormenta

que se dio en el trayecto durante el viaje por un fenómeno natural imprevisible y que ocurrió después del zarpaje.

El demandante señala también como violado el artículo 34d del Código Civil en el concepto de violación directa por omisión. Esto es así, según su opinión porque en los distintos memoriales sustentatorios de las impugnaciones acaecidas para el agotamiento de la vía gubernativa, se produjeron las debidas explicaciones del caso fortuito acaecido a la motonave River Plate.

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 4 de 10 de enero de 1995 da contestación a la presente demanda y señala en cuanto a la violación de las normas aducidas por el demandante que al mismo no le asiste la razón por las siguientes razones.

En primer lugar, no es cierto como afirma el demandante que los daños presentados por la nave **RIVER PLATE** fueron ocasionados por el mal tiempo en que se vio envuelta la nave después del zarpaje. Esto es así, porque de acuerdo con el informe rendido por las autoridades sudafricanas **la nave no pudo enfrentar el mal tiempo debido a la corrosión y la falta de mantenimiento en que se encontraba el casco, las cuadrenas o bastidores y las placas de unión**, por lo que no se puede alegar como pretende la parte actora caso fortuito debido a la tormenta en que se vio sometida la nave.

Además, el informe técnico de la Dirección de Consular y Naves, que reposa en el expediente administrativo, indica que al momento de zarpar de Turbarao Brazil, la nave **RIVER PLATE** lo hizo con 15 soldadores a bordo para realizar trabajos en las cuadrenas de las bodegas, lo cual nos indica que antes que se diera el mal tiempo las condiciones de seguridad no eran las más óptimas.

En segundo lugar, es importante resaltar la afirmación hecha por el inspector naútico en el informe técnico de la Dirección de Consular y Naves en la cual señala que "considerando las condiciones de mal tiempo (mar 8-10 Esc Douglas y vientos 8-10 Beaufort) durante 4 días, no podemos atribuir estas averías a las condiciones del tiempo". (fs. 29)

Para la señora Procuradora de la Administración los daños que presentó la nave **RIVER PLATE** en el puerto Sudafricano están comprobados en las fotos que reposan en el expediente administrativo, las cuales muestran el deterioro y grado de corrosión de la nave, los cuales no pudieron haberse producido en 3 días de tormenta como afirma la parte actora.

OPINIÓN DE LA SALA

En cuanto a la violación del literal a) de la Regla 11 del Convenio Internacional para Seguridad de la Vida en el Mar, la Sala considera que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que dicho artículo fue violado en indebida aplicación, puesto que la Dirección General de Consular y Naves aplicó en debida forma este artículo al sancionar a la nave **RIVER PLATE** al pago de B/.1,000.00 en concepto de multa; debido a que la nave presentaba según el reporte de inspección practicado por el Departamento de Transporte del Gobierno de Sudáfrica el 27 de julio de 1993, daños en el planchaje del casco, las cuadrenas o bastidores y las placas de unión.

A su vez, el Ingeniero Rubén Berbey (Inspector Naútico de la Dirección General de Consular y Naves) al rendir testimonio sobre los hechos manifestó a fojas 58 y 59 lo siguiente:

> "...
> 2. Tal como lo he expuesto en el memorándum N° 609-02-368-dtcn, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Tesoro solicito una opinión técnica del reporte del Port State Control de las autoridades sudafricanas en lo relativo al estado en que fue inspeccionada la nave River Plate en ese país. El reporte presentado ponía en evidencia serias deficiencias estructurales de la nave, que fueron evidenciadas por la sociedad clasificadora Lloyd s Register

of Shipping. Luego de estudiar el reporte, las copias de la bitácora de la nave, fotografías de las cuadernas, planchas del casco y el rol de tripulación de la nave, **no había duda de que la misma estaba en muy malas condiciones de estructura, todo esto confirmado por 15 soldadores que se encontraban a bordo. Condición anormal en una nave con una tripulación de aprox. de 15 personas**.

4. Todos los mares del mundo tienen características especiales debido a las corrientes marinas existentes, la temperatura del agua, los vientos, la cercanía a los polos o al trópico y varían también dependiendo la época del año. Ciertamente la nave arribo al puerto de Cape Town en condiciones no excelentes de mar y viento, pero de ninguna forma extremas o intolerables para una embarcación de 67,915 grt. Cabe señalar que la nave **no cruzó nunca el cabo de Buena Esperanza (mal llamado Cabo de las Tormentas), ya que el mismo esta ubicado al sur del citado puerto.**

5. Sí. Las condiciones del mar pueden en un momento afectar la estructura de la nave sometiendo la misma a grandes presiones, conocidas estas como los fenómenos de arrufo y quebranto. **Pero las mismas afectarían la parte media de la nave mayormente y no las bodegas situadas mas a proa, como es el caso de la nave River Plate, ya que en la bitácora de la nave se señala que el oleaje fue capeado poniendo la nave en la misma dirección de la corriente. Maniobra realizada para navegar con mar gruesa**". (el subrayado es de la Sala).

Por lo anterior, se puede deducir que la Dirección General de Consular y Naves hizo la investigación pertinente y constató el desarrollo de los hechos antes de sancionar a la nave **"RIVER PLATE"** de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 2 numeral 5 y 6, y el artículo 14 de la Ley 2 de 1980.

En cuanto al cargo de violación del artículo 34d del Código Civil, la Sala considera que no prospera. Tal como se ha expresado, se hizo la investigación correspondiente para reunir los elementos de prueba necesarios, para sancionar a la nave **RIVER PLATE**, por haber presentado daños que debieron haber sido reparados antes de emprender el viaje y que por supuesto no se debieron a 3 días de tormenta a que se vio sometida la nave, tal como ha sido probado en autos.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 603-04-07 ALCN de 5 de enero de 1994, emitida por la Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VASCO TORRES DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LAS NOTAS N° VIP-638-95 DE 23 DE JUNIO DE 1995 Y N° VIP-805-95 DE 24 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDAS POR EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LICENCIAS, BECAS Y SABÁTICAS, APROBADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU REUNIÓN N° 39-95 DE 30 DE AGOSTO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista Fiscal N° 537 de 18 de diciembre de 1995, la señora Procuradora de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la providencia de 1 de noviembre de 1995, por la cual se admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, promovida por el licenciado Vasco Torres De León, en representación propia, para que se declaren nulas, por ilegales, las Notas N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 y N° VIP-805-95 de 24 de julio de 1995, expedidas por el Vicerrector de la Universidad de Panamá, y el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, aprobado por el Consejo Académico en su reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995, y para que se hagan otras declaraciones.

De acuerdo a la señora Procuradora de la Administración, la demanda presentada no debe admitirse porque "la parte actora, al acudir ante esta jurisdicción incumple con lo normado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, toda vez que pretende la declaratoria de ilegalidad de dos (2) Notas y un Informe que no tienen el carácter de actos definitivos, sino de meras comunicaciones (las Notas) y de recomendación, como el mismo Informe lo expresa en su último párrafo" (fs. 78). Resalta también la señora Procuradora que el artículo 7 del Reglamento de Licencias Académicas para Docente e Investigadores de Facultades, Centros Regionales e Institutos de la Universidad de Panamá, aprobada por el Consejo General Universitario el 13 de abril de 1984, en su reunión N° 3-84, señala que las Licencias no remuneradas que sobrepasen el término de seis (6) meses y que no excedan de cuatro (4) años, **serán concedidas por el Consejo Académico**.

Por lo tanto, en su opinión, los actos administrativos contenidos en las Notas e Informe que demanda el apoderado judicial no constituyen actos recurribles o impugnables ante esta jurisdicción; y además, el actor pretende en un sólo proceso obtener la declaratoria de ilegalidad de tres actos autónomos e independientes uno del otro.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

La Sala no comparte el criterio de la señora Procuradora de la Administración, puesto que del examen de los autos se desprende, que la licenciada Jazmina Rovi Sánchez representante legal del demandante, interpuso el 4 de agosto de 1995, recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Nota N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995, mediante la cual se le informó a su representado, que la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, luego de revisar la documentación del **PROF. VASCO TORRES DE LEÓN**, hizo la observación que según "el artículo 2°, del Reglamento, el término de las **Licencias Sin Sueldo por estudios, no deberá exceder al término del Contrato del docente. Al no haber contrato vigente, no procede la licencia**". (fs. 3)(El Subrayado es de la Sala).

El recurso interpuesto por la parte actora contra dicha nota fue resuelto por el Consejo Académico en su reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995, en la cual se resolvió aprobar el Informe presentado por la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas quien recomendó al Consejo Académico no acoger favorablemente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado por el actor.

La Sala observa también, que en Nota N° 1223/95/SGP de 29 de septiembre de 1995, mediante la cual el Secretario General de la Universidad de Panamá, le notificó al recurrente, la decisión del Consejo Académico, se expresó lo siguiente:

> "En consideración a que la solicitud de licencia sin sueldo del profesor VASCO TORRES DE LEÓN, fue negada por la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, hecho que consta en la Nota VIP-635-95, de 23 de junio de 1995, fundamentándose en que las licencias no deberán exceder al término del contrato del docente y que por no "haber contrato vigente, no procede la licencia", decisión contra la

> que su representante legal JAZMINA ROVI, solicitó reconsideración con apelación en subsidio, recurso este último que resolvió el Consejo Académico en su reunión N° 39-95, aprobando el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas, que implica confirmación de la decisión recurrida, la que por tratarse de **decisión en grado de apelación no procede recurso de reconsideración en su contra**". (Fs. 11) (El subrayado es de la Sala).

Esto nos demuestra que el recurrente sí cumplió con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, puesto que el Secretario General de la Universidad de Panamá, le comunicó en la nota arriba transcrita a la parte actora, que con lo resuelto se había agotado la vía gubernativa porque los actos administrativos impugnados no son susceptibles de recurso alguno.

Además, como la demanda presentada cumple con todos los requisitos legales para su admisión, la Sala considera que debe confirmarse la resolución de primera instancia.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la providencia de 1 de noviembre de 1995, mediante la cual el Magistrado Sustanciador admite la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Vasco Torres en su propio nombre y representación, para que se declaren nulas, por ilegales, las Notas N° VIP-638-95 de 23 de junio de 1995 y N° VIP-805-05 de 24 de julio de 1995 suscritas por el Vicerrector de la Universidad de Panamá, el Informe de la Comisión de Licencias, Becas y Sabáticas aprobado por el Consejo Académico en su Reunión N° 39-95 de 30 de agosto de 1995, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ TEJADA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7397-95 DNP, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Juan Tejada, actuando en nombre y representación del señor ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 7397-95-DNP, del 26 de septiembre de 1995, expedida por el señor Director de la Caja de Seguro Social y para que se haga otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisión de la presente demanda, el suscrito Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe ser admitida, ya que el apoderado del actor no probó el supuesto silencio administrativo que, según afirma, se produjo porque la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social no resolvió dentro del término de dos meses, el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución mediante la cual el Director General de esa institución destituyó a su representado.

Si bien el apoderado del actor aportó copia del recurso de apelación interpuesto ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, no consta en el expediente que haya pedido a esa entidad una certificación en la que se indique si dicho recurso ha sido o no resuelto. Sobre el particular, la Sala ha manifestado en diversos precedentes (V. gr. fallo del 20 de febrero de 1995 y 13 de marzo de 1995) que no es suficiente que el demandante alegue que ha agotado la vía gubernativa por silencio administrativo, sino que además debe probarlo o, por lo menos, presentar prueba de que ha solicitado la correspondiente certificación y le ha sido negada, caso en el cual debe pedir a la Sala que la requiera al funcionario correspondiente.

Como el demandante no acreditó el silencio administrativo, no probó tampoco el agotamiento de la vía gubernativa, por lo cual su demanda no puede admitirse, de conformidad con los artículos 36 (numeral 1) y 42 de la Ley N° 135 de 1943.

Por las razones anotadas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por el Magistrado Sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Tejada, en nombre y representación del señor ARCADIO GÁLVEZ GONZÁLEZ, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 7397-95 DNP, del 26 de septiembre de 1995, expedida por el señor Director de la Caja de Seguro Social y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE C. RANGEL F., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 13004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986 EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y LAS RESOLUCIONES N° 10254-95 J. D., DE 23 DE MARZO DE 1995 Y LA RESOLUCIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Felipe C. Rangel F., actuando en representación propia, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986 emitida por la Comisión de Prestaciones y la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y las Resoluciones N° 10254-95 J. D., de 23 de marzo de 1995 y la Resolución de 9 de agosto de 1995, emitidas por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 13,004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se suspende "a partir del 16 de noviembre de 1986, los efectos de las Resoluciones número 5134-77 de 3 de enero de 1978 y 6623-78 de 20 de julio de 1978, en la cual se reconoció al señor FELIPE CAMILO RANGEL FREDERICKSON, seguro social 81-2673, una pensión por el riesgo de Invalidez por el monto actual de B/.208.57." Igualmente se acusa de ilegalidad la Resolución N° 10254-95 J. D., dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Además, solicita la nulidad de la Resolución sin número de 9 de agosto de 1995, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por medio de la cual "se rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor FELIPE RANGEL."

Procede pues, examinar la demanda para determinar si cumple con los presupuestos procesales exigidos para su admisión.

Observa quien suscribe que el demandante, no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, que establece que "a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con constancias de su ... notificación ...," ya que, en el presente caso, la parte actora presenta copia autenticada de una sola de las resoluciones que ataca como ilegales, tal como obra a foja 1 del expediente, y, no presenta ninguna prueba que demuestre que ha solicitado copia de las demás resoluciones, ni tampoco solicita que sea el Magistrado Sustanciador, quien pida copia autenticada de las mismas, previa admisión de la demanda, según lo previsto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Felipe Rangel, en su propio nombre y representación, con el objeto que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986 emitida por la Comisión de Prestaciones y la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y las Resoluciones N° 10254-95 J. D., de 23 de marzo de 1995 y la Resolución de 9 de agosto de 1995, emitidas por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA MARTÍN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 95-06-0008 DE 23 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, ha presentado recurso de reconsideración contra la Resolución de 9 de febrero de 1996, en la que se decide previa revocatoria de la Resolución de 30 de noviembre de 1995, no admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la mencionada firma de abogados, en representación de María Alejandra Martín con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 95-06-0008 de 23 de junio de 1995, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

La firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, entre los hechos en los que sustenta su recurso señala que, la Sala Tercera ya ha sido clara en que "la forma de demostrar el Silencio Administrativo es: `**MEDIANTE CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA QUE QUE** (sic) **SE INDIQUE QUE DICHO RECURSO NO HA SIDO RESUELTO, O COPIA DE UN ESCRITO EN QUE SE PIDA ESA CERTIFICACIÓN**, situación que se ha demostrado de manera fehaciente en el expediente.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, se opone al recurso de reconsideración, mediante Vista 90 de 28 de febrero de 1996, por considerar que no se ha acreditado el silencio administrativo en este caso.

Con fundamento en el último párrafo del artículo 1114 del Código Judicial,

el resto de los Magistrados que integran la Sala, consideran que le asiste razón a la parte actora, toda vez que obra a foja 8 del expediente, copia que acredita que efectivamente, el apoderado judicial de la parte actora presentó solicitud de certificación que no se había resuelto el recurso de reconsideración presentado por esta firma forense ante la entidad demandada, con lo que se acredita el silencio administrativo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 9 de febrero de 1996, ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma forense Arrocha, Blandón, Castro & Young, en representación de María Alejandra Martín con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 95-06-0008 de 23 de junio de 1995, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UNIVERSAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., PARA QUE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 078, DEL 7 DE FEBRERO DE 1996, DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Galindo, Arias y López, actuando en nombre y representación de la sociedad UNIVERSAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 078, del 7 de febrero de 1996, dictada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias y para que se haga otras declaraciones.

En el mismo libelo de la demanda, la apoderada de la actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, fundamentándose en las siguientes afirmaciones:

> "Solicitamos al Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera que, con el fin de evitar los perjuicios irreparables y notorios que la Resolución impugnada pueda ocasionar a nuestro representado y la confianza que las compañías de seguros deben proporcionar a la comunidad en general, ya que de seguir la intervención es inevitable la liquidación de Universal, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. en perjuicio de los intereses de los asegurados y del personal que trabaja para dicha sociedad. La intervención ha provocado la cancelación de pólizas que hubieren mantenido vivos los ingresos de la sociedad ... En el presente negocio se impone acceder a lo pedido para que los actos impugnados no le causen un perjuicio notoriamente grave. (Fs. 37-38).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, el pleno de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a su juicio, ello es necesario

para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Después de examinar los cargos de ilegalidad que se formulan contra la Resolución N° 078, del 7 de febrero de 1996, la Sala considera que no es posible acceder a la solicitud impetrada, ya que del estudio preliminar de los mismos no se infiere una violación ostensible del ordenamiento jurídico ni tampoco la apariencia de buen derecho (**fumus boni iuris**) a favor de la demandante.

Por las consideraciones anteriores, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 078, del 7 de febrero de 1996, expedida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RIVERA Y BOLÍVAR, EN REPRESENTACIÓN DE ALEJANDRA ATHANASÓPULOS DE LIAKÓPULOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 06-95 DE 10 DE FEBRERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración y la firma de abogados Cabinet Maitre Boutin, actuando en representación de la señora Eusebia Arce de Boutin, han interpuesto sendos recursos de apelación contra la resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera (Contencioso Administrativa) expedida el 12 de junio de 1995, y mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Rivera y Bolívar en representación de Alejandra Athanasópulos de Liakópulos con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Resolución N° 06-95 D de 10 de febrero de 199 expedida por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda la resolución recurrida en vista de que la misma cumple, en su opinión, con los requisitos establecidos para su admisión.

El resto de los Magistrados que componen la Sala proceden a examinar si se dan los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

La Procuradora de la Administración mediante Vista N° 349 de 16 de agosto de 1995, presentó escrito de apelación de la resolución que admite la demanda (v. fs. 48-52) en vista que no se había agotado la vía gubernativa puesto que el apoderado de la demandante no había demostrado haber utilizado los recursos a que tenía derecho la señora de LIAKÓPULOS para cumplir con el requisito del agotamiento de la vía gubernativa, que le permite concurrir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia."

El apoderado judicial de la parte actora se opone a la apelación pues considera que se agotó la vía gubernativa y señala lo siguiente:

> "a. Se presentó una demanda de desahucio para uso habitacional, que quedó radicada en la comisión de vivienda N° 3.

b. Esa demanda fue resuelta por medio de la Resolución de Desahucio N° 20-94 de 15 de noviembre de 1994 proferida por la meritada Comisión, quien conoce por disposición legal expresa, de este tipo de procesos.

c. Esa resolución fue apelada por la representación legal de la señora Boutin, y el trámite de apelación se surtió ante la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, quien por mandato expreso del Decreto Ejecutivo N° 87 antes citado, conoce de este tipo de negocios en la alzada.

d. La Dirección General de Arrendamientos dicta la Resolución objeto del Recurso presentado, con la cual se pone término a la vía gubernativa.

e. Con la copia aportada de la Resolución bajo censura, se puede evidenciar la certeza de todas las afirmaciones anteriores por lo cual consideramos no procede la inadmisión del recurso, en vista de que queda demostrado que sí se agotó la vía gubernativa.

En efecto, al estatuir el Decreto Ejecutivo que contra las decisiones de las Comisiones de Vivienda solo cabe el Recurso de Apelación, se infiere que no le era dable a nuestro mandante apelar de una decisión que había sido dictada dentro de una alzada, pues ello no es propio de este tipo de procesos."

Observa la Sala que estamos en presencia de un acto administrativo proferido por la Dirección General de Arrendamientos que resuelve un conflicto que se origina en las Comisiones de Vivienda.

El artículo 32 del Decreto Ejecutivo de 1993 dispone lo siguiente:

"Contra el fallo proferido por la Comisión de Vivienda sólo cabe el Recurso de Apelación ante la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación."

De lo anterior se colige que nos encontramos ante un acto proferido por le Dirección General de Arrendamiento que resuelve un conflicto de competencia y por lo tanto, de origen en las Comisiones de Vivienda, resolución que una vez apelada y resuelta por la Dirección General de Arrendamientos, se debe entender que se ha agotado la vía gubernativa. Por lo tanto consideramos válido el fundamento del apoderado de la parte actora por cuanto que, efectivamente el artículo 32 del Decreto Ejecutivo N° 87 por medio del cual se aprueba el Reglamento sobre los trámites, demandas y solicitudes relacionadas con arrendamientos urbanos sujetos a la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 otorga únicamente el recurso de apelación ante la Dirección General de Arrendamientos.

Por otro lado, la firma Cabinet Maitre Boutin, quien también apeló la resolución proferida por la Magistrada Sustanciadora por medio de la cual se admite la demanda, señaló que cuando se presentó la corrección de la demanda "se excedió dieciocho días más de los dos meses que establece el Artículo 42 b) de la Ley 135 de 1943, por lo tanto prescribió el término para la interposición de la demanda".

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, consideran que le asiste la razón a la parte actora, pues, la corrección de la demanda que nos ocupa no fue interpuesta en tiempo oportuno, requisito esencial para que la misma sea admitida.

Efectivamente, se observa, en el caso que nos ocupa, que el término para concurrir ante esta Sala vencía el 22 de abril de 1995, por lo que el demandante al presentar la demanda corregida el 10 de mayo de mayo de 1995, no la presentó oportunamente ante la Secretaría de esta Sala, contencioso administrativa de plena jurisdicción. Cabe agregar que la sola presentación de la demanda, tal como lo señala el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, no interrumpió los términos para

que operara la prescripción de la acción, por lo tanto los mismos siguen transcurriendo, razón por la cual, una vez que la parte actora presentara su demanda corregida, es decir el día 10 de mayo de 1995, ya había transcurrido el término de los dos meses que señala el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, lo que impide que se admita la demanda corregida.

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es, revocar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCAN el auto de 12 de junio de 1995 y por lo tanto NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesto por la firma Rivera y Bolívar en representación de ALEJANDRA ATHANASÓPULOS DE LIAKÓPULOS.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. PEDRO PEREIRA EN REPRESENTACIÓN DE QUALITY ASSURANCE CHEMICAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°009-96-D. G. DE 3 DE ENERO DE 1996 DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Pendiente de admisión se encuentra la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Pedro Pereira actuando en representación de **QUALITY ASSURANCE CHEMICAL, S. A.** para que se declare nulo por ilegal la Resolución N° 009-96-D. G. de 3 de enero de 1996 dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Dentro de este contexto se percata el Sustanciador que el libelo antes descrito contiene una petición previa a través de la cual, el petente requiere a la Sala Tercera para que se solicite a la Secretaría General de la entidad demandada el expediente administrativo del presente caso, para que éste sirva de prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

No obstante, se observa que el actor incumple diversas formalidades que impiden la admisión del libelo bajo estudio.

Es así como se pone de relieve que la presente demanda se estructura o formaliza deficientemente, dado que el actor no la dirige al presidente de esta Corporación como lo exige expresamente el artículo 102 del Código Judicial.

Por otro lado no se alude al papel que desempeña la señora Procuradora de la administración en el negocio de plena jurisdicción que se surte, el cual de acuerdo a lo estatuido en el artículo 345 numeral 2 de la precitada excerta legal, se circunscribe a defender los intereses de la Nación y por ende del acto impugnado de ilegal.

Aunado a lo externado, el recurrente no indica el concepto de la violación mediante el cual estima que se han infringido las disposiciones invocadas como conculcadas. De allí a que no se de cumplimiento riguroso al numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, que establece como requisito sine qua non de

toda demanda contencioso administrativo que se presente ante esta Superioridad, el enunciamiento del concepto de la violación de las normas legales transgredidas. Cabe recordar que la jurisprudencia de esta Sala en forma reiterada ha solicitado además que dicho concepto de la violación sea debidamente motivado, para mayor comprensión de la pretensión del peticionista, y para que este Tribunal pueda analizar adecuadamente el fondo de las causales de ilegalidad invocadas por el actor. Debe recordarse que los motivos de ilegalidad son la infracción literal (cuyas modalidades son la violación directa por omisión, violación directa por comisión, interpretación errónea e indebida aplicación), la falta de competencia o jurisdicción del funcionario o entidad que dictó el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades legales y la desviación de poder. (cfr. Auto de 23 de marzo de 1995).

Por último y no menos importante es el hecho de que el impugnante solicita de manera previa y como prueba, que esta Superioridad requiera el expediente administrativo del presente caso con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1946, ya que la Caja de Seguro Social no se los ha proporcionado a pesar de mediar petición por escrito. Sin embargo, aun cuando es de suponer que los actos administrativos impetrados de ilegal deben reposar en dicho expediente, no se puede soslayar el hecho de que el tenor del artículo 46 de la Ley 135 de 1943 únicamente le permite al este Tribunal solicitar los actos endilgados y no otras pruebas adicionales, por lo que se evidencia que el demandante debió expresamente instar a esta Corporación para que se obtuvieran las resoluciones necesarias para la admisión del presente libelo.

Frente a las circunstancias puestas de manifiesto, no es dable imprimirle curso legal a la demanda bajo estudio.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado que suscribe de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Pedro Pereira actuando en representación de QUALITY ASSURANCE CHEMICAL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG, EN REPRESENTACIÓN DEL PATRONATO DEL ENCUENTRO AGROPECUARIO DEL SECTOR ESTE DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO, AL NO CONTESTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 0006 DE 12 DE MAYO DE 1995, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG,** en su condición de representante legal del **PATRONATO DEL ENCUENTRO AGROPECUARIO DEL SECTOR ESTE DE PANAMÁ,** ha presentado escrito de desistimiento dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, que interpusiera el día 18 de septiembre de 1995, contra la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por el Director General de la Corporación Bayano, al no contestar el recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado contra la Resolución N° 0006 de 12 de mayo de 1995, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora mediante escrito que corre a foja 39 del exp., manifestó lo siguiente:

> "Nosotros, **ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG**, sociedad civil de abogados debidamente constituida e inscrita en el Registro Público, con domicilio en Avenida Balboa y Calle Uruguay, Edificio Plaza Miramar, oficina N° 7, lugar donde reciben notificaciones personales, en ejercicio de las facultades otorgadas por **ALBERTO ANTONIO DE LEÓN FLORES**, portador de la cédula de identidad personal N° 8-49-565, en mi calidad de Vicepresidente, actual Presidente encargado y actuando en su condición de Representante Legal del **PATRONATO DEL ENCUENTRO AGROPECUARIO DEL SECTOR ESTE DE PANAMÁ**, asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica debidamente inscrita en el Registro Público, ambos con domicilio en Posada del Bayano, Carretera hacia Chepo, teléfono 55-0178, por este medio acudo ante su despacho a fin de presentar formal DESISTIMIENTO de la Demanda presentada, descrita al margen superior derecho, toda vez que la Dirección de la Corporación Bayano ha emitido resolución favorable a nuestras pretensiones."

Dado que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, establece que "en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo", y el artículo 1073 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el presente desistimiento.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE el desistimiento presentado dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, por la firma ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG, en representación del PATRONATO DEL ENCUENTRO AGROPECUARIO DEL SECTOR ESTE DE PANAMÁ, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALEJANDRO WATSON, EN REPRESENTACIÓN DE VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 8 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN N° 000/93 DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Alejandro Watson**, en representación de **VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 8 de julio de 1994, expedida por la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública N° 00/93 de la Dirección de Aeronáutica Civil, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La sociedad demandante VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP., pretende que esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, de la precitada Resolución N° 1 de 8 de julio de 1994, emitida por la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública N° 009/93 de la Dirección de Aeronáutica Civil, mediante la cual se resuelve " Adjudicar Definitivamente a la empresa TECNASA la Licitación Pública

N° 009/93, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES PARA LA RED FIJA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (AFNT) EN EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DEL CORREGIMIENTO DE ANCÓN, PROVINCIA DE PANAMÁ, por la suma de SETECIENTOS MIL BALBOAS (B/.700,000.00), por cuanto que cumple con las especificaciones establecidas en el Pliego de Cargos y porque representa los mejores intereses para el ESTADO."

De igual manera, solicita el demandante, que una vez hecha la anterior declaración, se le adjudique definitivamente a la sociedad VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP. la referida licitación pública.

Las aludidas pretensiones las fundamenta el recurrente básicamente, en los siguientes hechos:

Que el día 30 de diciembre de 1993 a las 9:00 a. m. se celebró la Licitación Pública N° 009/93 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES PARA LA RED FIJA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS (AFNT) EN EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO CORREGIMIENTO DE ANCÓN, PROVINCIA DE PANAMÁ. Que la licitación pública N° 009/93 debía regirse por el artículo 72 del Código Fiscal, reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 59 de 16 de abril de 1993, debido a que se lo que se quería contratar era la prestación de servicios técnicos. Por ello, era necesario que se nombrara una comisión evaluadora técnica, compuesta por personas idóneas, esto es, por expertos en la materia de que trata la licitación, según establece el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985, por el cual se reglamenta el Capítulo lV del Título 1 del Libro l° del Código Fiscal sobre Licitación Pública, Concurso de Precios, Solicitud de Precios y los respectivos contratos con el Estado.

Sin embargo, la referida comisión evaluadora no fue constituida con personas idóneas.

Aunado a lo anterior, sostiene el demandante que sin que se cumpliera con lo establecido por el artículo 9 del citado Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985, que establece "Toda innovación que se introduzca al Pliego de Cargos deberá anunciarse en un diario de reconocida circulación nacional, por dos (2) días consecutivos y con una anticipación de por lo menos diez (10) días antes de la fecha fijada para la celebración de la licitación pública correspondiente", la COMISIÓN EVALUADORA TÉCNICA de la licitación pública N° 009/93 aumentó el precio oficial de la licitación pública N° 009/93 sin hacer las respectivas publicaciones.

Finalmente también alega que, la COMISIÓN EVALUADORA TÉCNICA de la licitación pública N° 009/93, sin tener facultades legales, se excedió en las funciones que le atribuye el Decreto Ejecutivo N° 50 de 20 de abril de 1992, publicado en la gaceta oficial N° 22.038 del miércoles 20 de mayo de 1992, al realizar lo siguiente: al nombrar una subcomisión o comisión paralela para que estudiara las propuestas técnicas presentadas por las empresas que participaron en la licitación pública N° 009793; y b) al recomendar una forma de pago distinta a la establecida en el pliego de cargos.

De la presente acción, se le corrió traslado a la entidad demandada, quien procedió a rendir su informe explicativo de conducta, legible a fs. 41-46 del expediente.

La firma forense **Morgán y Morgán**, en representación de la sociedad TECNOLOGÍA APLICADA, S. A. (TECNASA), en su calidad de tercero interesado en este proceso, mediante escrito que corre a fs. 50-70, presentó sus objeciones a las pretensiones del recurrente, alegando que en la licitación pública N° 009/93 DAC impugnada, no hubo ninguna irregularidad. Que dicho proceso de licitación se desarrolló de una forma transparente, y su adjudicación definitiva cumplió con todos y cada uno de los requisitos contemplados en el marco jurídico creado por el artículo 72 del Código Fiscal y demás disposiciones legales aplicables.

Aduce también la contraparte **TECNASA, S. A.**,que contrario a lo que sostiene la parte actora, si bien es cierto la referida licitación pública 009/93 DAC debía regirse por el Artículo 72 del Código Fiscal, reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 59 de 1993, que requiere que las propuestas se sometan a la consideración de una Comisión Evaluadora Técnica, ello no implica que las interpretaciones del recurrente sean correctas. Muy por el contrario, los hechos demuestran que los requisitos exigidos por el artículo 72 del Código Fiscal citado y su reglamentación, fueron cumplidos en su totalidad, y que la Comisión Evaluadora fue constituida por personas idóneas.

Finalmente, argumenta **TECNASA, S. A.**, que las funciones que le otorga el Decreto Ejecutivo N° 59 de 16 de abril de 1993, a la Comisión Evaluadora es amplio. Por consiguiente, es claro que tales disposiciones no prohíben a la referida Comisión, el solicitar opiniones técnicas a particulares que a su juicio, ayuden a seleccionar la propuesta que, desde el punto de vista técnico, convenga a los intereses del Estado.

La señora Procuradora de la Administración, mediante su Vista Fiscal N° 354 de 21 de agosto de 1995, que corre a fs. 94-108 del expediente, solicitó a esta Superioridad acceder a las pretensiones del demandante, porque considera que efectivamente, el artículo 72 del Código Fiscal ha sido infringido. Al respecto, sostiene que por tratarse el acto de licitación pública N° 009/93 celebrado por la Dirección de Aeronáutica Civil, para la "contratación de Servicios Técnicos Especiales, para la adquisición e implementación de un sistema de conmutación aeronáutica de mensajes, para la red fija de control de tránsito aéreo (AFTN), el cual se ejecutó bajo la base de un procedimiento para contratación de consultorías o prestación de servicios técnicos, sin tener presente que la parte esencial de este acto era la adquisición e implantación de un equipo AFTN, debió efectuarse por medio del procedimiento ordinario de licitación pública, y no con la modalidad de los dos sobres (propuesta técnica y la económica) así como la negociación del precio.

Sin embargo, en lo que concierne a las demás disposiciones legales que el demandante estima infringidas, la señora Procuradora señaló lo siguiente:

Primeramente, que al ser el precio base de la licitación pública N° 009/93 impugnada de B/.700,422.00 suma que sobrepasó los B/.500,000.00 reglamentados por las disposiciones legales aplicables a dicha materia, la Comisión Evaluadora de la referida licitación, estuvo bien conformada, es decir, estuvo bien ajustada a derecho.

Aunado a que, contrario a lo que alega la sociedad demandante, la Dirección de Aeronáutica Civil al momento de proceder al anuncio para la segunda convocatoria de la licitación en comento, le informó a los interesados que el Pliego de Cargos había sido modificado en su totalidad, y que la respectiva Adenda debía ser retirada en las oficinas del Departamento de Proveeduría y Compras de la referida entidad, por lo que al ser dicho pliego modificado en su totalidad, cabía la posibilidad de que también hubiese cambiado el precio, aunque en el anuncio de la segunda convocatoria no se especificara nada con relación al monto, lo cual no quiere decir que los interesados estuvieran exentos de adquirir la adenda que contenía las reformas.

Encontrándose el proceso en este estado, la Sala procede a resolver la controversia encausada.

En primer lugar, se aducen infringidos los artículos 27 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985, modificado por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 50 de 20 de abril de 1992, y el 43-f del Decreto Ejecutivo N° 59 de 1993, que por estar estrechamente vinculados entre si, esta Superioridad procede a analizarlos conjuntamente. El texto de los mismos es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 27. La Comisión Evaluadora de las propuestas que se establece en el Artículo 47 ordinal 9 del Código Fiscal, modificado por el Artículo 16 del Decreto de Gabinete N° 45 de 20 de febrero de 1990, será nombrada por el respectivo Ministro o titular de la

entidad licitante, salvo lo que se establece en el parágrafo del presente Artículo. La Comisión estará presidida por un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro o, en su defecto, por el funcionario respectivo de la entidad licitante, y además, integrada por servidores públicos y, en los casos en que lo necesite la entidad licitante, por personas particulares, todos de idoneidad acreditada como expertos en la materia de que trata la licitación que, a juicio de quien deba nombrar la Comisión, se requiera a los efectos de garantizar una adecuada recomendación para el escogimiento de la propuesta que más convenga a los intereses del Estado.

La Comisión estará integrada por no menos de tres (3) ni más de cinco (5) miembros.

La comisión considerará y evaluará las propuestas y dictaminará sobre la licitación pública, el concurso de precios y, en el caso de solicitud de precios, cuando se trate de obras de adquisición de equipo especializado.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier otra adquisición queda a discreción de la entidad que realice el acto público someter dicha adquisición a la consideración de una comisión evaluadora.

Estas comisiones se sujetarán al procedimiento, plazos, recursos y reservas establecidas en las normas pertinentes y aplicables del Código Fiscal.

Para la evaluación, el valor oficial estimado o los parámetros establecidos por la entidad licitante servirán de referencia a la comisión para determinar si las propuestas admitidas son gravosas o riesgosas para el Estado.

PARÁGRAFO: Cuando se trate de licitaciones públicas cuyo monto sobrepase la suma de B/.500.000.00 la Comisión Evaluadora estará integrada de la siguiente manera:

1. Un representante del Presidente de la República, quien la presidirá.

2. Un representante del Ministro de Hacienda y Tesoro.

3. Un representante del Contralor General de la República.

4. Un representante del Ministerio de Planificación y Política Económica.

5. Un representante de la entidad licitante."

"ARTÍCULO 43-f: Al siguiente día de abiertos los sobres que contienen las ofertas técnicas, los mismos pasarán a la consideración de una Comisión Evaluadora Técnica, que estará integrada por funcionarios o por particulares idóneos y especialistas en la materia de que trate la licitación.

El nombramiento de la Comisión Evaluadora se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente Decreto, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 50 de 20 de abril de 1992."

Considera la parte actora que las precitadas disposiciones legales han sido infringidas en el concepto de violación directa por omisión, en virtud de que si las mismas se hubiesen tomado en cuenta, no se hubiera designado a las personas que conformaron la comisión evaluadora de la licitación pública N° 009/93.

Añade el recurrente, que el hecho de que el precitado artículo 27, establezca la excepción de que en los casos en que las licitaciones cuyo monto

sobrepase la suma de B/.500.000.00, la comisión estará integrada por un representante del Presidente de la República, quien la presidirá, por uno del Ministro de Hacienda y Tesoro, por uno del Contralor General de la República, por uno del Ministro de Planificación y Política Económica y por un representante de la entidad licitante, no significa que los miembros de dicha comisión no deben poseer conocimientos especiales, en calidad de expertos, sobre la materia objeto de licitación, pues se desnaturalizaría la razón por la cual se hizo la reglamentación.

La Sala estima que no le asiste la razón al actor, dado que de un análisis de los expedientes, tanto gubernativo como contencioso, se desprende que la designación de las personas que conformaron la Comisión Evaluadora Técnica de la impugnada Licitación Pública 00/93, es acorde con lo estipulado en el Parágrafo del artículo 27 del D. E. N° 50 de 1993, en concordancia con el artículo 43-f del D. E. N° 50 de 1993, que establecen el procedimiento a seguir para proceder al nombramiento de los integrantes de dicha Comisión. (Cfr. fs. 1-4).

Ello, en atención a que al ser el precio oficial de la Licitación Pública 009/93 de la Dirección de Aeronáutica Civil de setecientos mil cuatrocientos veintidós balboas (B/.700.422.00), (ver f. 45 del exp.), suma que sobrepasaba los B/.500.000.00 a los que hace alusión el antes citado parágrafo del aludido artículo 27, la Comisión Evaluadora debía estar integrada como en efecto lo estuvo, por los siguientes miembros: un representante del Presidente de la República y Presidente de la Comisión Evaluadora, un representante de la Dirección de Aeronáutica Civil, un representante del Contralor General de la República, un representante del Ministro de Hacienda y Tesoro, y un representante de la Ministra de Planificación y Política Económica.

La función esencial de la Comisión Evaluadora era precisamente, la de analizar las propuestas técnicas de las empresas participantes en la Licitación Pública N° 009/93, tomando en cuenta la adecuación de las propuestas al Pliego de Cargos, la idoneidad y competencia de los proponentes, y demás circunstancias y elementos de juicio que se consideran pertinentes desde el punto de vista técnico y que convengan a los intereses del Estado, a los efectos de establecer el orden de prelación de las empresas participantes para proceder a la adjudicación de la referida licitación.

Aunado a que, dado el monto de la misma, así como también al recaer el objeto de ésta sobre la contratación de Servicios que según la Dirección de Aeronáutica Civil, requiere el suministro e instalación del equipo para que dicho sistema funcione. Lo lógico era que dicha Comisión solicitara la opinión técnica de personas idóneas, es decir, de expertos en la materia que como señalamos en líneas anteriores, garanticen una adecuada recomendación para el escogimiento de la propuesta que más convenga a los intereses del Estado, como efectivamente lo hizo, máxime cuando del artículo 43-g del D. E. 50 de 1993, se desprende que la Comisión Evaluadora posee amplias facultades al momento de analizar la idoneidad y la competencia de las propuestas.

Por las consideraciones expuestas, no prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 27 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 1985 y 43-f del Decreto Ejecutivo N° 59 de 1993.

También se aduce infringido el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 3 de mayo de 1985, que a la letra establece:

> "Artículo 9. Toda innovación que se introduzca al Pliego de Cargos deberá anunciarse en un diario de reconocida circulación nacional, por dos (2) días consecutivos y con una anticipación de por lo menos diez (10) días antes de la fecha fijada para la celebración de la licitación pública correspondiente.
>
> Cuando se trate de Concurso de Precios, dicha innovación se anunciará con tres (3) días de anticipación a la fecha de su celebración y será publicada una (1) vez en un diario de reconocida circulación nacional.

> Si fuera necesario, para cumplir con los plazos mínimos antes fijados, se anunciará nueva fecha para llevar a cabo el respectivo acto."

Dice el recurrente que este artículo "fue violado en concepto de violación directa por comisión, debido a que si la comisión evaluadora técnica lo hubiera tenido presente no hubiera modificado el precio oficial de la licitación pública N° 009/93 sin haber hecho las respectivas publicaciones. En otras palabras el hecho de que la citada comisión evaluadora no hiciera las publicaciones de rigor, hace que, al proceder a variar el precio oficial de la licitación pública, infrinja la norma transcrita."

Esta Superioridad no comparte el cargo de violación hecho por el demandante al artículo 9 ibídem, en virtud de que un análisis de las constancias procesales aportadas al proceso, indican que al momento en que se procedió a realizar la Segunda Convocatoria para efectuar la Licitación Pública 009/93 AFTN, la Dirección de Aeronáutica Civil procedió a notificar a los interesados que el Pliego de Cargos había sido modificado en su totalidad, y que la respectiva Adenda debía ser retirada en las oficinas del Departamento de Proveeduría y Compras de la Dirección de Aeronáutica Civil (ver f. 34 del exp. adm.).

Por lo tanto, al ser modificado dicho pliego de cargos en su totalidad, al momento en que se dio el anuncio de la segunda convocatoria para efectuar la referida licitación, era posible que el precio de dicha licitación hubiese sido objeto de modificación, y por consiguiente, era responsabilidad del recurrente obtener la respectiva adenda contentiva de las modificaciones hechas al pliego de cargos.

Lo anterior, sin perjuicio de que las modificaciones al pliego de cargos, incluyendo el precio de la licitación pública, no es una facultad conferida a la Comisión Evaluadora Técnica, como lo señala la parte actora. La misma, tal como hemos visto, únicamente tiene facultad para analizar la idoneidad y la competencia de los proponentes, así como las demás circunstancias y elementos de juicio que resulten pertinentes para seleccionar la propuesta que, desde el punto de vista técnico, convenga a los intereses de Estado.

En lo que respecta a que la Comisión Evaluadora procedió a ajustar la oferta económica de la Empresa TECNASA, que oscilaba en el orden de B/.720,829.44 que era superior al precio oficial establecido por la Dirección de Aeronáutica Civil el cual era de setecientos mil balboas (B/.700.000.00), tal como se aprecia a fs. 45 y 46 del exp., cabe destacar que esta es una facultad conferida a dicha Comisión, en el artículo 43-k del D. E. N° 59 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 43-k: Si el precio de la propuesta seleccionada resultara elevado o gravoso, a juicio de la Comisión Evaluadora Técnica, se negociará en el acto dicho precio con el licitador de que se trate. Dicha negociación deberá ser en privado y, si hubiese acuerdo, se le adjudicará definitivamente el contrato. De no llegarse a un acuerdo en el momento la Comisión podrá declarar un receso y se hará una nueva reunión para continuar la negociación."

Por las consideraciones expresadas, no prospera el cargo de violación endilgado, al artículo 9 del Decreto Ejecutivo de N° 33 de 1985.

También se considera violado el artículo 72 del Código Fiscal que a la letra establece.

> "ARTÍCULO 72. Cuando se trate de contrataciones de consultoría, o de prestación de servicios técnicos o servicios personales de especialistas o de obras de arte, cuya ejecución no pueda confiarse sino a artistas reputados, el Estado determinará los requisitos formales indispensables que deberán ser cumplidos por los posibles postores, en los actos de selección del contratista, así como los restantes requisitos y tramitaciones previstos en el título 1° de este Código.

> La celebración de los contratos pertinentes se sujetará a las siguientes reglas especiales.
>
> Las propuestas se harán en dos (2) sobres cerrados, uno que contendrá la proposición formal y técnica ajustada al pliego de cargos, y otro sobre que contendrá el precio. Una vez entregados los sobres en la hora indicada, se suspenderá el recibo de sobres y se procederá a la apertura de los que contengan las condiciones técnicas, en el orden en que hayan sido presentados, y pasarán a la consideración de una comisión evaluadora técnica que dispondrá de un término no mayor de (30) días para analizar la idoneidad y la competencia de las propuestas, así como las demás circunstancias y elementos de juicio que resulten pertinentes para seleccionar la propuesta que, desde el punto de vista técnico, convenga a los intereses del Estado ..."

Aduce el demandante que "la norma jurídica no faculta a la comisión evaluadora a que cree o delegue sus funciones en ninguna otra comisión o subcomisión paralela. Como quiera que la comisión evaluadora técnica de la licitación pública N° 009/93 no tuvo en consideración el texto del artículo transcrito, al proceder a crear una subcomisión para que realizara las funciones que legalmente le correspondía, violó, en concepto de violación directa por omisión el artículo 72 de Código Fiscal. Y ello hace que el acto impugnado sea nulo, por ilegal".

Sobre el particular, la Sala reitera el criterio expresado al analizar los cargos de violación de los artículos 27 del D. E. N° 33 de 1985, y 43-f del D. E. N° 59 de 1993. Al ser la función esencial de la Comisión Evaluadora Técnica, la de analizar las propuestas técnicas de las empresas participantes en la Licitación Pública N° 009/93, tomando en cuenta la adecuación de las propuestas al Pliego de Cargos, la idoneidad y competencia de los proponentes, y demás circunstancias y elementos de juicio que se consideran pertinentes desde el punto de vista técnico y que convengan a los intereses del Estado, a los efectos de establecer el orden de prelación de las empresas participantes para proceder a la adjudicación de la referida licitación.

Aunado a que, dado el monto de la misma, así como también al recaer el objeto de ésta sobre la contratación de Servicios que según la Dirección de Aeronáutica Civil, requiere el suministro e instalación del equipo para que dicho sistema funcione, lo lógico era que dicha Comisión solicitara la opinión técnica de personas idóneas, es decir, de expertos en la materia que garantizaran una adecuada recomendación para el escogimiento de la propuesta que más convenga a los intereses del Estado, como efectivamente lo hizo, máxime cuando del artículo 43-g del D. E. 50 de 1993, se desprende que la Comisión Evaluadora posee amplias facultades al momento de analizar la idoneidad y la competencia de las propuestas.

Por tanto, debe desestimarse este cargo.

Finalmente, se aduce que la resolución impugnada es violatoria del artículo 75 del Código Fiscal, que establece que "son absolutamente nulos los contratos en que tenga interés la Nación y que se hayan celebrado contraviniendo las disposiciones de este Código."

El demandante sostiene que la resolución acusada de ilegal, viola la precitada disposición legal en el concepto de violación directa por omisión, ya que la comisión evaluadora técnica no tuvo presente este precepto, y porque el mismo sanciona con nulidad los contratos que se han celebrado en contravención de las normas del Código Fiscal que establece los pasos que se deben seguir para efectuar una contratación.

La Sala estima que el presente cargo de violación carece de asidero jurídico, en razón de que dicha disposición únicamente le es aplicable a los **contratos celebrados** en que tenga interés la Nación, que no es el caso que nos ocupa, en que la sociedad demandante **VIDEO & COMMUNICATION NETWORKS CORP.** está

impugnando una resolución, que adjudica definitivamente la licitación pública N° 009/93 a la sociedad **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.**,, que es una situación diferente al perfeccionamiento del contrato, que todavía no existe, y por tanto no ha surgido a la vida jurídica.

En lo que respecta a la violación del artículo 47 del Código Fiscal, este Tribunal considera que no es procedente entrar a examinar el mismo, en atención a que el recurrente no explicó en qué consiste la infracción de dicho precepto legal, como lo exige el artículo 43, ordinal 4 de la Ley 135 de 1943.

Por las consideraciones expuestas, no prosperan los cargos de violación endilgados contra la Resolución N° 1 de 8 de julio de 1994.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 1 de 8 de julio de 1994, expedida por la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública N° 009/93 de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-95 DE 23 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARRENDAMIENTO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alberto Lázaro Ramos, quien actúa en representación de Leeman Edward Davis Graham Leeman, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 02-95 de 23 de mayo de 1995, dictada por la Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Dentro de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora ha solicitado a la Sala Tercera que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución N° 02-95 de 23 de mayo de 1995, mediante el cual se resuelve, entre otras cosas, "levantar la condena decretada sobre el inmueble N° 13 A-99, ubicado en Calle 17 Oeste, Corregimiento de Santa Ana, mediante Resolución N° 07-90 de 19 de octubre de 1990 y la cual esta construida sobre la Finca N° 6820, Tomo 220, Folio 474 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, cuyo dueño es el señor Víctor Manuel Lombardo y Graciela Del Carmen Lombardo ..." pues, según aquél, dicha resolución puede causar "perjuicios notoriamente graves con su ejecución".

Al examinar el criterio sustentado por el apoderado de la parte actora, la Sala considera que no se da el supuesto alegado que amerite la suspensión provisional del efecto de la resolución impugnada. A juicio de quienes suscriben, para que se decrete la suspensión provisional del acto, no sólo basta con enunciar que se sufre un perjuicio notoriamente grave, sino que es necesario que se explique de manera pormenorizada y específica en qué consiste tal perjuicio, acompañando las de pruebas para demostrar lo que se afirma.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, NIEGA la petición de suspensión provisional formulada por el licenciado Alberto Lázaro Ramos, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por el señor Leeman Edward Davis Graham Leeman contra la Dirección General de Arrendamientos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EMILIO DE LEÓN EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 032 DE 15 DE JUNIO DE 1995, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Emilio De León**, en representación de **JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 032 de 15 de junio de 1995, dictado por el Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

Se percata el Magistrado Sustanciador que consta en el expediente una petición especial para que sea atendida, previo al trámite de admisión de la demanda. Sin embargo, por motivos de economía procesal, lo procedente es examinar el presente libelo, a los efectos de determinar si la misma cumple con los presupuestos legales que hagan procedente su admisión.

Quien suscribe considera que la misma no puede ser admitida por razón de que la parte demandante no agotó la vía gubernativa para poder accionar ante esta Sala en demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, cuyo texto establece:

> "ARTÍCULO 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39, y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación."

A fojas 3-4, consta copia del recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el Resuelto N° 032 del 15 de junio de 1995, emitido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, mediante el cual se le declaró insubsistente del cargo que ocupaba en la referida institución.

De igual manera, consta a f. 7, copia autenticada de la Nota N° N-497 de 10 de octubre de 1995, a través del cual se le notifica al demandante que mediante el Resuelto N° 048-95 de 10 de octubre de 1995, el referido recurso ya había sido resuelto.

Por consiguiente, a partir de la fecha de dicha notificación, es decir el 10 de octubre de 1995, el recurrente contaba con cinco días útiles los cuales vencían el 17 de octubre de 1995, para sustentar el recurso de apelación que oportunamente había anunciado al momento de interponer la reconsideración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 135 de 1943. Sin embargo, no es hasta el 6 de noviembre de 1995, tal como se aprecia f. 13 del exp. en que dicha alzada es sustentada, lo cual hace que la misma sea extemporánea al no ser sustentada oportunamente dentro del término legal establecido, dando ello lugar a que el acto administrativo quedase ejecutoriado o en firme.

El hecho de no haberse utilizado en tiempo oportuno los recursos legales contemplados en el artículo 33 de la Ley 135 de 1943, hace que la vía gubernativa no hubiese sido debidamente agotada, situación que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, hace imposible darle curso legal a la presente demanda.

El objetivo de agotar la vía gubernativa, como lo señaló esta Superioridad en Auto de 30 de junio de 1994: "... consiste en que el administrado debe utilizar todos los medios de impugnación a su alcance y sólo cuando utilizados todos estos medios, no obtiene la satisfacción de su pretensión puede iniciar su actuación ante la Sala Tercera de la Corte. Así es en el Derecho Contencioso Administrativo y el demandante no utilizó hasta el final todos los medios de impugnación en la vía gubernativa."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Emilio De León, en representación de JOSÉ DEL CARMEN ESPINOZA, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 032 de 15 de junio de 1995, dictado por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO RUIZ EN REPRESENTACIÓN DE ELBA R. DÍAZ VDA. DE RUIZ Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 97 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1983 DICTADA POR EL MINISTRO DE HACIENDA, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado **Roberto Ruiz** en representación de **ELBA DÍAZ Vda. DE RUIZ** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 97 de 2 de septiembre de 1983 dictada por el Ministro de Hacienda, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos que exige la ley, para que la misma pueda ser admitida.

Observa el suscrito que el libelo carece de una formalidad, que sin el mismo no podría ser admitido. En este sentido, la parte actora no presenta el acto acusado de ilegal que consiste en la Resolución N° 97 de 2 de septiembre de 1983, y que debe estar debidamente autenticado, tal como lo exigen los artículos

44 y 45 de la Ley 135 de 1943, los cuales dicen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos."
>
> "ARTÍCULO 45. Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicaciones en los periódicos oficiales, debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes."

Ya la Sala ha manifestado reiteradamente la importancia de aportar el acto que se acusa de ilegal y que además debe estar autenticado, y en caso de que se le imposibilite obtener la documentación requerida, previa comprobación de que se llevaron a cabo las correspondientes diligencias para su consecución, el interesado dentro de la demanda expondrá el hecho y solicitará al Magistrado Sustanciador, que éste requiera a la oficina respectiva el documento que es motivo de controversia.

Por las anteriores consideraciones el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Roberto Ruiz en representación de ELBA DÍAZ Vda. DE RUIZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SIMEÓN GONZÁLEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARCOS SALINAS Y FÉLIX VILLARREAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° CJ-17-95, DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Simeón González, actuando en nombre y representación de **MARCOS SALINAS y FÉLIX VILLARREAL** interpuso, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° CJ-17-95, del 1° de diciembre de 1995, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En el libelo de la demanda, el licenciado González pidió la suspensión provisional de los efectos de los actos impugnados, argumentando que la adopción de esta medida es necesaria para evitar graves perjuicios a sus representados, quienes no podrán inscribirse en el período académico ordinario de clases que se inicia el 25 de marzo del presente año.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada, si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Después de examinar los cargos de ilegalidad formulados en la demanda contra los actos acusados, la Sala considera que no es posible acceder a la medida cautelar pedida, pues, del estudio preliminar de los mismos no se infiere

una violación ostensible del ordenamiento jurídico ni la apariencia de buen derecho (fumus boni juris) a favor de los demandantes.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de los actos demandados, solicitada por el licenciado Simeón González, en nombre y representación de MARCOS SALINAS y FÉLIX VILLARREAL.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE GIANELLA DEL CARMEN CARREIRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°24-95-F. DE C. DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 1, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala Montero, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 1° de febrero de 1996, en la que no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el mencionado licenciado, en representación de Gianella Carreiro, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 24-95-F. de C. de 4 de septiembre de 1995, dictada por la Comisión de Vivienda N° 1, y para que se hagan otras declaraciones.

A foja 21 del expediente, obra informe secretarial en el cual se señala que vencido el término de apelación, no se presentó escrito de sustentación de la misma. Como en este caso, se trata de un recurso de apelación contra un auto, procede declarar desierto el recurso, según lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por licenciado Carlos R. Ayala M., contra el auto expedido dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción antes mencionado.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO, SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL VALERO DOMENECH, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3269 DE 27 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Salvador Sánchez** en nombre y representación de **ÁNGEL VALERO DOMENECH**, ha interpuesto recurso de reconsideración contra el Auto de 19 de enero de 1996, por la cual, previa revocatoria de la Providencia de 7 de septiembre de 1995, no se admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el demandante para que se declare nulo, por ilegal la Resolución N° 3269 de 27 de mayo de 1992 expedido por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

El resto de la Sala de acuerdo con el criterio de la Procuradora de la Administración, no admitió la demanda incoada por varias razones: 1. no se identifican debidamente las partes y sus representantes; y 2. no se dirigió la demanda al Magistrado Presidente de la Sala.

A juicio de este Tribunal Colegiado, el recurso propuesto es viable a la luz de lo preceptuado en el último párrafo del artículo 1114 del Código Judicial.

De acuerdo a lo anterior, procede el Tribunal colegiado al nuevo estudio de las formalidades del libelo, para determinar si efectivamente le asiste la razón al demandante.

En primer lugar, observa el resto de la Sala, que el afectado no señala cuales son las partes en este proceso, como lo son la parte actora y parte demandada con sus respectivos representantes. La designación de las partes no sólo debe constar en el poder y en la parte introductoria de la demanda, sino que debe especificarse de manera clara y ordenada quién es el demandante y su representante y a qué funcionario se demanda, y que este último estará representado por la Procuradora de la Administración.

En segundo término, la parte actora no especifica claramente lo que se demanda, es decir, que es lo que pretende con este proceso contencioso.

La jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterada y sostenida en sendos casos, por lo que nos parece extraño que el afectado insista en que se le admita una demanda que no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Ambas situaciones descritas, se encuentran en abierta contradicción con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946, que a la letra dice lo siguiente:

> "ARTÍCULO 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes;
>
> 2. Lo que se demanda; "...

Por último, la demanda no está dirigida al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, exigencia esta contemplada en el artículo 102 del Código Judicial. Quizás esta no sea una omisión de gravedad para inadmitir una demanda, pero como esta situación está aunado a el incumplimiento de algunos requisitos de importancia, que fueron ya comentados en párrafos anteriores, el Tribunal se encuentra obligado a no acceder a la pretensión del demandante.

Por las anteriores consideraciones el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la Resolución del 19 de enero de 1996.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOUTEAU RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Dr. Rolando Murgas Torraza, ha presentado recurso de reconsideración contra la Resolución de 16 de febrero de 1996, en la que se decide previa revocatoria de la Resolución de 11 de diciembre de 1995, no admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Dr. Murgas, en representación de Damaris Leoteau Ruiz, con el objeto que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación.

El recurrente sustenta su recurso de reconsideración en los siguientes términos:

> "... En ninguna parte de la demanda se hace alusión ni se pretende utilizar como presupuesto procesal la existencia del silencio administrativo.
>
> 2. Al momento en que se pretende la demanda no había posibilidad alguna de invoca el silencio administrativo, según las fechas utilizadas tanto por la Procuraduría como por la resolución que impugnamos. En efecto, si el recurso de reconsideración en la esfera administrativa de promovió, como se afirma, el 19 de septiembre de 1995, la demanda se presentó el 13 de noviembre del mismo año, esto es, cuando aún no habían transcurrido dos meses para el silencio administrativo que nunca hemos invocado ...
>
> 5. El artículo 33 de la Ley 135 de 1943 es claro en el sentido que la reconsideración se promueve ante el funcionario administrativo de la primera instancia, de lo cual se desprende que si el acto administrativo se dicta en única instancia (porque no hay superior que pueda revisar la decisión), no se requiere del trámite de reconsideración para agotar la vía administrativa. Es más, ni siquiera procede el recurso de reconsideración ..."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, se opone al recurso de reconsideración, mediante Vista 110 de 12 de marzo de 1996, por considerar que no se ha acreditado el silencio administrativo en este caso.

Con fundamento en el último párrafo del artículo 1114 del Código Judicial, el resto de los Magistrados que integran la Sala, consideran que le asiste razón a la parte actora, ya que, ha sido jurisprudencia reiterativa de esta Sala que, cuando el acto administrativo fuese expedido por la máxima autoridad de la esfera administrativa correspondiente o se tratase del supuesto en que la autoridad que expide el acto es un organismo independiente que actúa bajo sus propias leyes y reglamentos, no es necesario agotar la vía gubernativa. En este caso, el acto administrativo impugnado fue suscrito por el Presidente de la República, conjuntamente con el Ministro de Educación siendo éstos las máximas autoridades del ramo correspondiente.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 16 de febrero de 1996, ADMITEN la demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Dr. Rolando Murgas Torraza, en representación de Damaris Leoteau Ruiz.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ELIO SALAS, EN REPRESENTACIÓN DE HOMAB, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 6327-94-SUB-DG DE 27 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 91-80-9410 J. D. DE 29 DE ABRIL DE 1994, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **INFANTE, GARRIDO & GARRIDO** , en representación de la sociedad **HOMAB, S. A**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare, nula por ilegal la Resolución N° 6327-94-SUB-DG de 27 de abril de 1994, emitida por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 9180-9410 J. D. de 29 de abril de 1994, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

El señor Procurador de la Administración Suplente, mediante su Vista Fiscal N° 45 de 22 de enero de 1996, que corre a fs. 49-53, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la Providencia fechada 17 de mayo de 1995, que ADMITE la presente demanda, en atención a las siguientes consideraciones:

> "Para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa se exige en nuestro medio, el agotamiento de la vía gubernativa. Esto significa, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 33 de 1946, que:
>
> 1. Hayan sido interpuestos los recursos de reconsideración y/o apelación y no se dicte decisión resolutoria en el lapso de dos (2) meses.
>
> 2. Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualesquiera de los recursos de reconsideración o apelación.
>
> 3. Cuando se haya presentado a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma cualquier solicitud y transcurra el lapso de dos (2) meses sin que recaiga sobre ella decisión alguna, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.
>
> La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es darle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores. En otros términos, con el agotamiento de la vía gubernativa se busca que dentro de la propia Administración Pública se pueda derogar o revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause perjuicios.
>
> En el proceso subjúdice, encontramos que la parte actora interpuso el día 26 de julio de 1994 (ver folios 4 a 8) recursos de reconsideración contra la Resolución N° 9180-94 J. D., de fecha 29

de abril de 1994, que dictó la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Como en efecto expresa el demandante, en el hecho cuarto de su demanda, el recurso de reconsideración propuesto contra la Resolución N° 91-80-94 J. D. no fue resuelto, produciéndose así el silencio administrativo, previsto en numeral 1°, del artículo 22 de la Ley 33 de 1946 ...

Cabe destacar sin embargo, que para perfeccionar el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la demanda, en el caso específico del silencio administrativo, es necesario que éste sea acreditado o probado. Esta exigencia jurisprudencial guarda relación con el mismo fin o propósito del agotamiento de la vía gubernativa, es decir, se pretende que esté plenamente demostrado que la Administración dispuso de la oportunidad de variar o corregir su decisión ...

Para probar el silencio administrativo se exige, que junto al libelo se presente copia autenticada del recurso promovido, que indique la fecha de su presentación, y la certificación de la institución, en la que se haga constar que desde la presentación del recurso han transcurrido dos (2) meses y que no ha habido pronunciamiento que lo decida. ...

La anterior referencia contrasta con la gestión del apoderado de la parte actora, quien se limitó a presentar copia del memorial del recurso de reconsideración que promoviera contra la Resolución N° 9180-94 J. D. de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (ver folios 4 a 8), omitiendo probar al Tribunal por medio de certificación de las instancias de decisión (Junta Directiva), que aún no ha sido resuelto dicho recurso)."

Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora presentó sus objeciones a la presente alzada, argumentando lo siguiente:

"A pesar que la jurisprudencia a (sic) sido reiterativa en relación a este punto sobre la acreditación del silencio administrativo a través de una certificación de la propia institución de que no ha resuelto la petición o el recurso respectivo, somos de la opinión que es preciso que la Sala Tercera de la Corte Suprema modifique este criterio por ser equívoco y promover la indefensión de la parte actora ante la Administración.

La Ley 33 de 1946 no impone como requerimiento para la admisión de la demanda en los procesos contenciosos administrativos de plena jurisdicción por silencio administrativo que el actor cargue con la carga de la prueba del mismo. La prueba de que la Administración dispuso de la oportunidad de variar o corregir su decisión, `como el fin o propósito del agotamiento de la vía gubernativa', al decir de la Procuraduría de la Administración, se cumple plenamente con la aportación del Recurso, debidamente autenticado o en el sello de presentación, que no fuera resuelto en el término señalado en el artículo 22 de la excerta legal citada.

Exigir adicionalmente que el actor le solicite al funcionario moroso que le certifique el incumplimiento de su deber para demostrar el silencio administrativo es totalmente impráctico, porque si no ha resuelto lo principal menos va a responder sobre algo que lo afecta. Por lo que estamos seguros que estas certificaciones son otorgados muy ocasionalmente, en la práctica forense."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver la controversia encausada.

Esta Superioridad coincide con los planteamientos vertidos por el

Procurador de la Administración Suplente al señalar que la parte actora no acreditó fehacientemente el silencio administrativo como medio de agotamiento de la vía gubernativa, a los efectos de poder accionar ante esta Sala en acción contencioso administrativa de plena jurisdicción.

A fs. 1-2 consta copia debidamente autenticada de la Resolución N° 6327-94-SUB-DG de 27 de abril de 1994, mediante la cual la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social, resolvió: "ADJUDICAR en forma definitiva a la empresa COMPAÑÍA ASTOR, S. A., en el Renglón N° 8 de la Licitación Pública N° 64 (18-1-94); para la compra de 108,000 CAJAS X 30 GRAGEAS DE INDAPAMIDA DE 2.5 mg. (NATRILIX), por el precio de B/.4.20 Caja x 30 Grageas, para un monto total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS BALBOAS SOLAMENTE (B/.453,600.00), amparada en la Requisición N° 7389". En dicho acto de licitación participó como proponente, la empresa demandante, HOMAB, S. A.

De igual manera, consta a fs. 3 copia autenticada de la resolución N° 9180-94-J. D. emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se resolvió aprobar la anterior adjudicación, la cual le fuera notificada al recurrente el 25 de julio de 1994. Contra esta resolución la parte demandante interpuso en tiempo oportuno, recurso de reconsideración el cual fuera recibido en la secretaría de dicha institución el día 26 de julio de 1994, (ver fs. 4-8).

Por consiguiente, a partir de la fecha de presentación del referido recurso de reconsideración, la Administración contaba con dos meses, es decir, hasta el 26 septiembre de 1994 para pronunciarse de manera expresa sobre el mismo. En caso de que al 26 de septiembre no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se agotaba la vía gubernativa y, por ende, el recurrente podía acudir ante la vía jurisdiccional dentro de los dos meses siguientes a la configuración de la negativa tácita de la administración. Sin embargo, ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que para comprobar la negativa tácita como medio de agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto esencial para acceder ante este Tribunal, la parte actora debe previamente, y por sus propios medios y esfuerzo tratar de obtener la certificación de la entidad demandada, de que sobre dicho recurso no ha recaído pronunciamiento, o en su defecto, solicitarlo al Magistrado Sustanciador a fin de que, previo al trámite de admisión de la demanda, requiera a la entidad demandada expida constancia de si el referido recurso ha sido objeto de pronunciamiento.

En el caso en estudio, este Tribunal de segunda instancia ha podido comprobar que el recurrente no ha demostrado que oportunamente solicitó ante la administración la certificación referente a la omisión de pronunciamiento de ésta sobre el recurso de reconsideración interpuesto, a través del memorial correspondiente con el sello de recibido, y la solicitud de certificación dirigida al Magistrado Sustanciador a fin de que éste, previo al trámite admisión de la demanda, solicite a la institución demandada la referida certificación de no pronunciamiento sobre el precitado medio de impugnación.

El criterio jurisprudencial de exigir a la parte recurrente la debida comprobación del silencio administrativo como medio de agotamiento de la vía gubernativa para ocurrir en demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como bien lo señaló esta Superioridad en Auto de 15 de enero de 1996: "... obedece a una interpretación analógica de los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, que establecen que a la demanda el actor deberá acompañar una copia del **acto acusado**, o en caso de que deniegue dicha certificación el recurrente debe solicitarla en la demanda a fin de que se solicite por el Sustanciador, previo al trámite de la demanda.

El cumplimiento de requisito permite a la Sala constatar la existencia del acto impugnado, su notificación, y por ende, el agotamiento de la vía gubernativa, y de este modo poder verificar si la demanda ha sido presesentada en tiempo oportuno, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

De igual manera, al constituir el silencio administrativo un acto presunto que equivale a la negativa tácita de lo pedido, cuyo efecto procesal consiste en que el afectado a partir de su configuración pueda ocurrir ante la jurisdicción,

tal presunción, y como bien lo indicara el Magistrado Sustanciador, también debe ser probada mediante una certificación o constancia que indique que la administración no se ha pronunciado sobre dicha solicitud, o simplemente con copia de un escrito en el cual se solicite a la entidad esa certificación a fin de que el Sustanciador, previo al trámite de admisión de la demanda lo requiera, atendiendo a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943."

Por consiguiente, al recurrente no haber acreditado debidamente el silencio administrativo, lo procedente es no admitir la presente demanda.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia fechada 17 de mayo de 1995 NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense INFANTE, GARRIDO & GARRIDO, en representación de la sociedad HOMAB, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GERMÁN ANTONIO NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 36 DE 8 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Jorge Enrique Sánchez**, en representación de **GERMÁN ANTONIO NÚÑEZ**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 036 de 8 de julio de 1995, emitida por el Director General de la Policía Técnica Judicial, y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal que corre a fs. 32-36, promovió y sustentó formal recurso de apelación contra la Providencia calendada 18 de enero de 1996, que **ADMITE** la presente demanda, argumentando medularmente lo siguiente:

> "A nuestro juicio, la demanda en referencia no debió ser admitida, ya que al momento de su presentación había precluído el término para su presentación, por lo que fue presentada extemporáneamente.
>
> Se colige de lo antes expuesto, que el Señor Núñez, tenía a partir de la fecha de la notificación de la resolución que resolvía el recurso de Reconsideración interpuesto, "(27 de septiembre de 1995)", dos meses para acudir ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo a presentar su demanda, lo cual no hizo, ya que presentó la misma el día 10 de enero de 1996, fecha en la cual ya estaba prescrita su acción, por tener plazo hasta el día 27 de noviembre de 1995, por consiguiente, acudió extemporáneamente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados entran a resolver la presente controversia.

Este Tribunal de alzada coincide con los planteamientos vertidos por la Procuradora de la Administración, en el sentido de que la presente acción debe inadmitirse por ser extemporánea, en atención a las siguientes consideraciones.

Mediante la Resolución N° 36 de 8 de julio de 1995, legible a fs. 1-2, a la parte actora se le destituyó del cargo que desempeñaba como detective en la Policía Técnica Judicial. Una vez notificado de dicha resolución, el recurrente presentó recurso de reconsideración contra la misma, tal como se aprecia a fs. 3-4.

También consta a f. 5 del exp., copia autenticada de la Resolución N° DG-114-95 de 17 de agosto de 1995, mediante el cual el Director General de la Policía Técnica Judicial, resolvió dicho recurso. De la referida resolución se le notificó al recurrente el día 27 de diciembre de 1995, y contra la misma interpuso recurso de apelación ante la Procuraduría General de la Nación.

Sobre el recurso de apelación se pronunció la Procuradora General de la Nación Suplente el 18 de octubre de 1995, argumentando en su parte resolutiva lo siguiente:

> "En tal circunstancia, este despacho DISPONE: rechazar por improcedente, el escrito de apelación presentado por el licenciado Jorge Enrique Sánchez, en nombre y representación del señor GERMÁN ANTONIO NÚÑEZ."

Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta última resolución, la cual se produjo el día 9 de noviembre de 1995, (Cfr. f. 8), la parte actora ocurrió en demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante esta Sala, es decir, el 10 de enero de 1995, (Ver f. 15).

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1994, los jefes de las distintas divisiones y agencias, jefes de departamento y secciones y demás servidores públicos de la Policía Técnica Judicial, serán nombrados y removidos conforme la Ley, por el Director General de dicha Institución, previo concepto del Procurador General de la Nación. De igual manera, el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, aprobado mediante la Resolución N° 25-94 de 15 de noviembre de 1994, (G. O. 22.675 de 2 de enero de 1994), en su artículo 43, establece que las sanciones impuestas por el Director de la Policía Técnica Judicial **sólo admiten recurso de reconsideración**, y que resueltos los recursos indicados, en cada caso, **se entenderá agotada la vía gubernativa**.

Por consiguiente, este Tribunal de segunda instancia estima, y tal como lo señaló en Auto de 24 de agosto de 1994, que: "los actos administrativos emitidos por el Director General de la Policía Técnica Judicial en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, constituyen actos de única instancia, y por lo tanto, contra los mismos sólo cabe recurso de reconsideración para que se agote la vía gubernativa."

Siendo así, al notificársele al recurrente de la resolución N° DG-114-95 de 17 de agosto de 1995, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución N° 36 de 8 de julio de 1995, mediante la cual se le destituyó del cargo que desempeñaba en dicha institución, notificación que se dio el 27 de septiembre de 1995, el demandante contaba con dos meses a partir de dicha fecha, para ocurrir ante esta Sala. Término que tal como se desprende de las constancias procesales aportadas al expediente, le prescribía el 27 de noviembre de 1995, y no es hasta el 10 de enero de 1995, transcurridos más de dos meses a los se refiere el artículo 27 de la Ley 135 de 1943, en que ocurre ante este Tribunal en demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, por lo que la interposición de dicha acción es extemporánea.

Por las consideraciones vertidas, este Tribunal de alzada estima que lo procedente es negarle curso legal a la presente acción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la Sala Tercera,

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia de 18 de enero de 1996, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Jorge Enrique Sánchez, en representación de GERMÁN ANTONIO NÚÑEZ, para que declare nula, por ilegal, la Resolución N° 36 de 8 de julio de 1995, emitida por el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR BUFETE ARTURO VALLARINO, EN REPRESENTACIÓN DE CORPORACIÓN BIZARRO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO EJECUTIVO N° 349 DE 16 DE AGOSTO DE 1994, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Flavio González Jr.** a través del bufete **ARTURO VALLARINO** presentó demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en nombre de LA CORPORACIÓN BIZARRO, S. A. con el fin que se declare nulo por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 349 de 16 de agosto de 1994, dictado por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y por medio de la cual se resolvió la expropiación y utilización a favor de los Casinos Nacionales de las máquinas tragamonedas, sus repuestos y herramientas de reparación que se encuentran en los Casinos Nacionales y que fueron suministradas por la empresa Corporación Bizarro (Ex-Juliano Internacional).

Surtidos todos los trámites procesales establecidos en la Ley 135 de 1943 con sus reformas de la Ley 33 de 1946, pasa la Sala Tercera de la Corte a decidir la presente controversia.

Considera el demandante que el Decreto Ejecutivo impugnado viola los artículos 337, 338, 1644 y 986 del Código Civil, así como el artículo 846 del Código Administrativo.

La violación del artículo 337 del Código Civil que alega el demandante, la expone así, previamente reproduciendo el mencionado artículo que a la letra dice:

> "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
>
> La norma legal reproducida garantiza a todo propietario el derecho de gozar y disponer de los bienes que son de su propiedad, las únicas limitaciones a tales facultades son exclusivamente `las establecidas por la ley .
>
> Esta norma legal fue violada en forma directa, por omisión, porque no fue aplicada por el Órgano Ejecutivo al adoptar la medida expropiatoria que se impugna. En efecto, nuestra representada ha sido privada de sus bienes, sobre los cuales tenía legítimo derecho de propiedad, sin que haya transgredido ninguna prohibición o limitación legal y sin que se haya dado causa legítima para privarlo de tales bienes.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la constitución, que es la norma jurídica invocada por el Ejecutivo como supuesto fundamento jurídico de la medida, éste sólo puede expropiar bienes por vía de urgencia en `caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas . En el caso que nos ocupa no existía interés social urgente, porque no existía una necesidad social que fuese solucionado mediante la actividad de los Casinos Nacionales, dado que la actividad de los Casino no constituye un servicio público, sino una explotación económica contemplada en el Título X de la Constitución (artículo 292), sobre la `ECONOMÍA NACIONAL .

Menos podía existir interés social urgente, que justificase expropiar por vía de urgencia los bienes en referencia, porque ya los Casinos Nacionales estaban en posesión de ellos y los venían utilizando para sus actividades habituales desde muchos años antes, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado entre nuestra mandante y la Junta de Control de Juegos. De allí que no tenían necesidad de adoptar o celebrar ningún acto o medida distinta para adquirir el uso de tales bienes, menos aún para adoptar una medida tan drástica y extrema como lo es la expropiación.

El Pleno de la Corte Suprema, en jurisprudencia reiterada desde junio de 1955, al definir las leyes de orden público e interés social, ha declarado que las últimas son las que resuelven de manera inmediata una necesidad social. Y esa Honorable Sala ha sostenido que ninguna actividad comercial o industrial del Estado, como es la explotación de los juegos de suerte y azar, da solución a una necesidad de la sociedad panameña, porque no constituye un servicio público, y a explicado que, a pesar de vehemente inclinación del hombre hacia el juego, las actividades de los Casinos Nacionales jamás pueden ser consideradas como medio para solucionar necesidades de la sociedad panameña.

Por tanto, el Decreto de Expropiación violó de manera protuberante el artículo 337 del Código Civil, puesto que desconoció abiertamente el derecho de propiedad que tal norma legal consagra, sin que hubiese causa legítima para ello."

Considera el demandante que el acto acusado viola el artículo 338 del Código Civil que establece:

"Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por graves motivos de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.

Esta norma legal fue igualmente violada en forma directa, porque no fue aplicada en el caso que nos ocupa. Tal como se explicó al exponer el concepto de la violación del artículo 337 ibídem, la medida expropiatoria impugnada fue decretada sin que existiese `motivo de utilidad pública o de interés social urgente , porque no estaba de por medio la prestación de ningún servicio público, y ya los Casinos Nacionales estaban en poder y haciendo uso de las máquinas tragamonedas y video para sus actividades económicas, en adición, ya había celebrado una licitación pública para la adquisición de máquinas similares con ese propósito, licitación cuya adjudicación definitiva estaba en vías de adoptarse, lo que indica con toda claridad que no existía posibilidad alguna de que mediase `interés social urgente que justificase la expropiación.

La medida expropiatoria acusada en este proceso constituye un típico acto de desviación de poder, en los términos consagrados en el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, puesto que los verdaderos motivos y la finalidad perseguida por el Órgano Ejecutivo adoptarla no son los que nuestras normas jurídicas, especialmente el artículo 47 de la Constitución, señalan al efecto.

Conviene agregar a lo ya expresado, para confirmar que no existió nunca motivos de interés social urgente, las siguientes acotaciones:

A. El Artículo 1° de la Ley 57 de 1946, que regula la expropiación que está vigente y que es aplicable a los bienes muebles por autorizarlo el artículo 13 del Código Civil, dispone que la expropiación sólo es viable cuando el bien de propiedad particular sea necesario para una actividad de servicio público. Es así porque señala como actividades de utilidad pública y actividades de interés social las que se realizan a través de los aeropuertos, carreteras, hospitales, orfelinatos, asilos y otras de naturaleza similar. No menciona entre ellas actividades comerciales o industriales del Estado.

B. El fundamento o excusa invocada por el Órgano Ejecutivo en la parte motiva del Decreto de Expropiación impugnado, para justifica la expropiación, es que existían dudas en torno `a la transparencia de la licitación. Este argumento no puede constituir jamás causa para expropiar bienes de una empresa que ni siquiera había figurado como postor en la licitación pública realizada para adquirir máquinas tragamonedas y video para los Casinos Nacionales.

De haber sido cierto que se cometieron irregularidades en dicho proceso de licitación, la Junta de Control de Juegos (presidida por el Sr. Ministro de Hacienda y Tesoro y responsable de la medida expropiatoria) pudo declarar desierta dicha licitación, con fundamento en el Artículo 49 del Código Fiscal, o anular la actuación, si es que existía alguna causa especial para ello, pero nunca tal argumento podía legitimar la expropiación de los bienes con arreglo al artículo 47 de la Constitución Política.

Todo lo anterior deja en evidencia un típico acto de desviación de poder ejecutado por el Órgano Ejecutivo, que conlleva una medida arbitraria e ilegal."

Expresa el demandante que se ha violado el artículo 1644 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

"El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, esta obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados.

Esta norma legal hace responsable de los perjuicios causados a terceros, a la personal que los cause a través de actos culposos o negligentes. Por tanto, si conforme al Artículo 181 de la Carta Política, el Ministro de Hacienda y Tesoro, Ing. Víctor N. Juliao, es el responsable del Decreto de Expropiación en referencia, y como ya se vio, tal medida es negligente y culposa, él personalmente esta obligado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la expropiación a nuestra representada.

Como el Ing. Juliao ni el Estado han indemnizado a nuestra mandante por los daños y perjuicios recibidos con motivo de la expropiación, el artículo 1644 del Código Civil ha sido violado en forma directa, por omisión, porque no ha sido aplicado al caso que nos ocupa."

Por último, en cuanto al Código Civil se refiere, considera la parte actora que se ha violado el artículo 986 del mencionado Código que dispone:

"Quedan sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieron en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieron al tenor de aquéllas.

Esta norma legal ha sido violada también en forma directa, por

omisión.

De acuerdo a la misma, el Ministro de Hacienda y Tesoro, a la sazón Ing. Víctor M. Juliao, por haber emitido un Decreto de Expropiación sin motivo legal que lo justifique y para fines diferentes de los permitidos por el ordenamiento constitucional, es responsable conforme a la norma legal reproducida de indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo. Sin embargo, como no ha cumplido con tal obligación, ha infringido en forma directa dicha norma legal, porque ha desconocido su texto claro."

Concluye el demandante sosteniendo que se ha violado el artículo 846 que preceptúa:

"Todo empleado público es directa y personalmente responsable de los actos punibles que ejecute, aunque sea a pretexto de ejercer sus funciones; a menos que pruebe haber procedido por orden superior de aquellas cuyo cumplimiento es indudable según la Constitución.

Esta norma legal establece que todo funcionario público es directa y personalmente responsable por los actos ilícitos en loa que incurra o emita. Esta norma legal, para los efectos del caso que nos ocupa, debe ser interpretada y aplicada con arreglo del principio de legalidad instruido por el artículo 18 de la Carta Política, según el cual el Ejecutivo sólo puede hacer aquello que la ley autoriza.

Como ya se ha demostrado que la expropiación decretada fue una medida adoptada sin motivo y para los fines que la justificasen conforme al artículo 47 de la constitución, tal medida resulta ilegal y arbitraria, por lo que el Sr. Ministro de Hacienda y Tesoro es el responsable personalmente de la misma, el Ing. Víctor M. Juliao, quien refrendó el Decreto Ejecutivo respectivo. Como no ha asumido su obligación de indemnizar a nuestra representada los daños y perjuicios que tal medida le ha ocasionado, ha infringido en forma directa, por omisión, la norma del Código Administrativo que se ha reproducido."

El Ministro de Hacienda, Olmedo David Miranda Jr. mediante nota de 26 de septiembre de 1994, contestó el informe que se le solicitó, en cuya parte pertinente, dijo lo siguiente:

"Tratándose de un Acto Administrativo proferido por el Órgano Ejecutivo en funciones de la anterior Administración, somos de concepto que, tal como lo establecen las disposiciones legales vigentes, corresponde a la Honorable Corte Suprema de Justicia dictaminar la procedencia legal o improcedencia del Acto Administrativo objeto de impugnación.

En los términos ut-supra cumplimos con el requerimiento solicitado".

La Procuradora de la Administración al contestar los cargos expuestos por la parte demandada, se manifestó en cuanto a la supuesta violación del artículo 337 del Código Civil, de la siguiente manera:

"Discrepamos del criterio esgrimido por el demandante, toda vez que el derecho a la propiedad privada que consagra nuestra Carta Magna no es de carácter absoluto, dado que en esta excerta se reconocen limitaciones a este derecho. (Artículo 47 C. N.).

En efecto, la propiedad privada es el derecho de gozar de una cosa, usarla, disponer de ella, usufructuarla, hasta destruirla, siempre y cuando no existan limitaciones y prohibiciones en la Constitución y la Ley.

En el caso subjúdice, el derecho de propiedad que señala la empresa demandante, resultó afectado por una expropiación decretada por el

Órgano Ejecutivo, fundamentada en motivos de interés social urgente contemplados en el artículo 47 de la Constitución Nacional. En efecto, como quiera que las máquinas tragamonedas significan una constante fuente de ingresos a los Tesoros Nacionales, que luego se traducen en obras para la colectividad social, es decir, la comunidad, se adoptó esta medida tendiente a asegurar la continuación de la prestación del servicio a través de los Casinos Nacionales.

Destacados autores como RAFAEL BIELSA Y DUGUIT han realizado señalamientos al respecto, como los que nos permitimos citar a continuación:

`La perpetuidad del derecho de propiedad está limitada por la expropiación fundada en causa de utilidad pública ... que alcanza a toda clase de bienes patrimoniales ...

Las limitaciones a la propiedad como la expropiación (que resuelve en un derecho al precio del objeto expropiado) se fundan en la utilidad pública. (BIELSA, Rafael. Derecho Constitucional. 3ª ed., Roque Depalma Editor, Buenos Aires, pág. 364).

Y ello se debe a que en ciertos casos `La propiedad privada deja de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social. (DUGUIT, citado por QUINTERO, César. Derecho Constitucional. Librería, Lithografía e Imprenta Lehman, Panamá, 1967, tomo I, pág. 185).

En consecuencia, la norma citada como infringida, lejos de ser violada, ha sido acatada a cabalidad por el Órgano Ejecutivo, dentro de los parámetros que la Constitución Nacional y la Ley le confieren, tal como se ha señalado."

En lo que se refiere a la violación del artículo 338 del Código Civil, la Procuradora de la Administración lo contesta así:

"Diferimos del criterio externado por el demandante; ya que la norma bajo estudio no tenía que ser utilizada como fundamento legal de la medida adoptada, existe una norma Constitucional (de mayor rango jurídico) que recoge iguales principios que la desarrollada en la norma de carácter legal la cual fue aplicada por el Órgano Ejecutivo, en el caso subjúdice.

Hemos explicado que sí existía motivo de interés social urgente, ya que se descubrió la existencia de una serie de irregularidades en los registros contables, según el Informe de Auditoría presentado por la firma de Contadores Públicos Autorizados, DELOITE HASKINS & SELLS, que traían como consecuencia mermas en los ingresos del Tesoro Nacional, por razón de las utilidades que generan las máquinas tragamonedas, así como desde agosto de 1985 hasta noviembre de 1989, se registró en la cuenta `Reservas de Contingencias , la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA BALBOAS SOLAMENTE (B/.6.278,180.00) que correspondía a salarios y prestaciones laborales que debieron haber sido contabilizados como gastos en sus respectivas cuentas. Por lo tanto, no fueron deducidos en la parte proporcional en las liquidaciones para cancelar las regalías a Juliano Internacional, S. A."

Así mismo, `entre los Gastos que debían deducirse antes de calcular las regalías, está el 3% para la `Reserva para Fondo de Desarrollo Social lo cual no se efectuó durante ese período, ocasionado en exceso de regalías por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS SOLAMENTE (B/.2.388,357.00)' (fs. 33).

Lo anterior confirma el interés social urgente, causado por las

> mermas en los ingresos a las arcas estatales, destinados a actividades de carácter social, adecuándose de esta forma la medida (de expropiación) adoptada por el Órgano Ejecutivo, a lo dispuesto tanto en el artículo 47 de la Constitución, como en el artículo 338 del Código Civil bajo estudio, por lo que este cargo de ilegalidad que se le endilga al Decreto N° 349 de 1994 resulta injustificado".

La Procuradora de la Administración considera que por estar íntimamente relacionado el artículo 1644 con el 986 del Código Civil, en cuanto a la violación expuesta de estas normas por la parte demandante, analizará de forma conjunta ambas disposiciones, para contestar los argumentos de la parte actora.

Empieza su razonamiento la Procuradora de la siguiente manera:

> "Yerra el actor en sus apreciaciones, al considerar que se han infringido las normas pretranscritas, ya que en el caso subjúdice no se ha causado daño interviniendo culpa o negligencia; puesto que en todo caso la negligencia fue por parte de la empresa arrendadora y no por causa del Órgano Ejecutivo, en consecuencia, no son aplicables las normas invocadas.
>
> El artículo 47 Constitucional, que le sirve de fundamento al Decreto Ejecutivo impugnado, contempla circunstancias en que es dable decretar la expropiación y que cuando fuere factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será solo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.
>
> En este mismo artículo se contempla la responsabilidad estatal por las expropiaciones que lleve a cabo el Órgano Ejecutivo, por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación, siguiéndose el procedimiento que para tales efectos señala la Constitución Nacional y la Ley."

El último cargo, que se refiere a la supuesta violación del artículo 846 del Código Administrativo, la Procuradora de la Administración, lo contesta así:

> "Este cargo del actor resulta infundado, porque contrario a lo que asevera el demandante en el caso subjúdice resulta evidente que el Señor Ministro de Hacienda y Tesoro, en su calidad de funcionario público, no se ha apartado del margen que establece nuestro Estatuto Fundamental y la ley, al decretar la expropiación de las máquinas tragamonedas, en atención a los fundamentos de interés social urgente que motivaron tal decisión."

Expuestos los argumentos del demandante como los de la Procuradora de la Administración, entra la Sala a decidir la controversia.

Como se ha visto, el Órgano Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto Ejecutivo N° 349 de 16 de agosto de 1994, ordenó la expropiación de las máquinas tragamonedas, sus repuestos y herramientas, suministradas por la **CORPORACIÓN BIZARRO** a los Casinos Nacionales.

La parte motiva del Decreto Ejecutivo acusado, hace mención a la problemática surgida a raíz de la Licitación Pública N° 1-94 adelantada a través de la Junta de Control de Juegos para la prestación del servicio de arrendamiento de Máquinas Tragamonedas y de Video para los Casinos Nacionales, Acto Público que se vio muy dilatado al ser objeto de numerosos ataques sobre la transparencia del mismo, por parte de quienes tenían un interés directo en sus resultas. A consecuencia de lo anterior, el Órgano Ejecutivo consideró que dadas las circunstancias polémicas que habían rodeado el acto de Licitación lo más conveniente para los intereses del Estado era la operación directa, a través de los Casinos Nacionales de las referidas Máquinas, sin que mediase concesión con ningún particular, contratista o intermediario para la prestación del servicio.

Conforme al Decreto Ejecutivo en mención, el Estado debía adoptar medidas tendientes a asegurar la prestación del servicio de las Máquinas Tragamonedas en los Casinos Nacionales, pues ello redunda en beneficio del Tesoro Nacional, el interés social y fiscal, y que la continuidad del servicio prestado así como los beneficios percibidos son de **interés social urgente** para el Estado, por lo que se hacía necesaria proceder a la expropiación de las máquinas que habían venido prestando el servicio.

Conforme al artículo 47 de la Constitución Nacional, el Estado tiene derecho a expropiar bienes por motivos de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, y que en tales circunstancias, el Ejecutivo puede decretar la expropiación de la propiedad privada. También dice el párrafo final de la norma constitucional citada, que **el Estado es siempre responsable** por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación.

El artículo 292 de la Constitución panameña establece que la explotación de juegos de suerte y azar y de actividades que originen apuestas **sólo podrán efectuarse por el Estado**.

Las dos normas constitucionales transcritas demuestran claramente que no se han violado las normas legales señaladas como infringidas por la parte demandante en el Decreto impugnado. El Ejecutivo puede expropiar la propiedad privada por medio de Decreto como se ha visto. Es la expropiación conocida como extraordinaria y que ya se explicó en la Resolución de 8 de septiembre de 1994, visible a fojas 68 a 74 de este expediente. Los juegos de suerte y azar **sólo** los puede explotar el Estado. En el presente caso, el Estado explotaba a medias y debe explotar en el futuro los juegos de suerte y azar en los Casinos Nacionales. La empresa **CORPORACIÓN BIZARRO, S. A.**, alquilaba las máquinas tragamonedas por "sumas mensuales significativas" como ellos mismos expresan en su demanda, y que de acuerdo con el acta de 8 de octubre de 1990 de la Junta de Control de Juegos, ascendía a unos B/.300,000.00 balboas mensuales, constancia que aparece a foja 35 del expediente. La empresa demandante no puede dedicarse a la explotación del juego de suerte y azar en la República de Panamá ni ningún particular. Solo el Estado puede hacerlo. El Estado panameño pagó grandes sumas de dinero a los demandantes en concepto de alquiler de las mencionadas máquinas tragamonedas, que recuperaron su inversión con creces y con enormes ganancias, **de una actividad, que constitucional y legalmente**, no pueden participar de sus utilidades resultantes, disfrazadas en este caso, de arrendamiento. El Estado panameño se ha comprometido en el Decreto impugnado a cancelar el precio de la expropiación que determinen los Tribunales de Justicia.

No existe la menor duda de que los juegos de suerte y azar deben producir rentas e ingresos a favor del Tesoro Nacional para cubrir sus exigentes necesidades y que interés social más urgente, evidentemente, que dineros que se desviaban a sectores privados que se enriquecían a costa de los intereses públicos, vuelvan a ingresar a las arcas nacionales en beneficio de toda la comunidad panameña.

Por lo expuesto, se rechazan todos los cargos de ilegalidad que se le señalan al Decreto Ejecutivo impugnado.

En razón de lo anterior, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto Ejecutivo N° 349 de 16 de agosto de 1994, expedido por el Ministerio de Hacienda, que decreta unas expropiaciones de máquinas tragamonedas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS C. CEDEÑO, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO A. SOTO PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 95 (32010-1830)12, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL SUBGERENTE GENERAL ADMINISTRATIVO DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Luis C. Cedeño**, en representación de **FERNANDO A. SOTO**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 95 (32010-1830)12 de 12 de septiembre de 1995, dictado por el Subgerente General Administrativo del Banco Nacional de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador se percata que consta en el expediente una solicitud especial de certificación de documentos que debe ser atendida, previo al trámite de admisión de la demanda.

Quien sustancia ha podido constatar que efectivamente, el recurrente trató de acompañar el libelo contentivo de la demanda con la documentación necesaria gestionando ante el respectivo ente administrativo la autenticación de los mismos. Tal diligencia, legible a f. 13, fue recibida en el Departamento de Admisión de Documentos del Banco Nacional de Panamá el día 20 de marzo de 1996.

Considera el Sustanciador que el recurrente cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, de realizar todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea a la que alude el mencionado artículo, pero al resultar infructuosas solicitó a esta Sala que procediera a oficiar a la entidad demandada que remita a esta Superioridad la documentación solicitada. Ello en atención a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 46: Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE solicitar a la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, proporcionar copias autenticadas con las respectivas constancias de su notificación de los siguientes documentos:

1. Decreto N° 95 (32010-1830)12, de 12 de septiembre de 1995, expedida por el Subgerente General Administrativo del Banco Nacional de Panamá.

2. Resolución N° GG-37-95 de 6 de noviembre de 1995, expedida por la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá.

3. Resolución N° 03-96-JD de 13 de febrero de 1996, expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIONISIO RODRÍGUEZ BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE PORFIRIO ARGUETA CLAROS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 30 DE 3 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Dionisio Rodríguez Bernal ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación del señor **PORFIRIO ARGUETA CLAROS**, a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 30 de 3 de julio de 1995, emitida por el Director de la Policía Técnica Judicial.

Mediante la nota número A.L. 1194-95 de 25 de octubre de 1995, el Director General de la Policía Técnica Judicial presentó su informe explicativo de conducta, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946. En este señala que, "A través del Oficio N° A.L. -659-95 de 14 de junio de 1995, el Director de la Policía Técnica Judicial solicitó al Procurador General de la Nación, el previo concepto para proceder a la destitución del prenombrado **ARGUETA CLAROS**, quien por medio del Oficio DPG-961 del 22 de junio de 1995, emitió su concepto favorable para la misma"(fs. 18).

Estando el negocio para resolver la Sala estima necesario solicitar al señor Director de la Policía Técnica Judicial, copia autenticada del oficio mediante el cual Procurador General de la Nación emitió concepto favorable para la destitución del señor **PORFIRIO ARGUETA**, que es el N° DPG-961 de 22 de junio de 1995.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se oficie al Director General de la Policía Técnica Judicial, para que remita a este Despacho copia autenticada del Oficio N° DPG-961 de 22 de junio de 1995, mediante el cual el Procurador General de la Nación emitió concepto favorable para la destitución del señor **PORFIRIO ARGUETA**.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN EL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO, SUSCRITO POR LA MINISTRA DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y EL SEÑOR DANIEL K. H. CHAO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Morgan Y Morgan actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo por ilegal, el acto contenido en el Memorándum de

Entendimiento, suscrito por la Ministra de Comercio e Industrias y el señor Daniel K. h. Chao.

Encontrándose el presente proceso en estado de decidir la alzada propuesta por el actor, el resto de los Magistrados que integran esta Sala de la Corte observan que obra a foja 40 del expediente, escrito de desistimiento de la demanda contencioso administrativa de nulidad en relación al caso que nos ocupa.

En el mismo la parte recurrente señala que desiste de la presente demanda de nulidad, ya que: "ha transcurrido ... el plazo de tres meses establecidos en el Memorándum de marrass (sic) y que el Gobierno Nacional no ha concluido ningún contrato definitivo con la empresa BECHTEL ENTERPRISES, INC., respecto al manejo y/o operación de los puertos panameños localizados en las riberas del Canal de Panamá (Balboa y Cristóbal)."

Al considerarse dicho escrito, se tiene que a la luz del artículo 66 de la Ley 135 de 1943, la parte demandante puede desistir de su acción en cualquier estado del proceso, produciéndose así la terminación del mismo.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que componen la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITEN el desistimiento interpuesto por la firma Morgan y Morgan actuando en su propio nombre y representación dentro de la descrita demanda contencioso administrativa de nulidad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. FELIPE C. RANGEL F., EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13.004-86 DE 1° DE OCTUBRE DE 1986 DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Felipe C. Rangel F., actuando en representación propia, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 13004-86 de 1° de octubre de 1986 dictada por la Comisión de Prestaciones y la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaración de nulidad de la Resolución N° 13,004-86 de 1° de octubre de 1986, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se suspende "a partir del 16 de noviembre de 1986, los efectos de las Resoluciones número 5134-77 de 3 de enero de 1978 y 6623-78 de 20 de julio de 1978, en la cual se reconoció al señor FELIPE CAMILO RANGEL FREDERICKSON, seguro social 81-2673, una pensión por el riesgo de Invalidez por el monto actual de B/.208.57." Igualmente solicita la nulidad de la Resolución sin número de 9 de agosto de 1995, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por medio de la cual "se rechaza por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor FELIPE RANGEL."

Procede pues, examinar la demanda para determinar si cumple con los presupuestos procesales exigidos para su admisión.

Del estudio realizado, nos hemos percatado que la parte actora ha incurrido en un grave error al confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la de plena jurisdicción.

Como ha señalado esta Sala en innumerables ocasiones, existen diferencias sustanciales entre la demanda de nulidad y la de plena jurisdicción. Puede interponer la nulidad del acto administrativo cualquier persona natural jurídica, pública o privada domiciliada en Panamá; en la de plena jurisdicción sólo puede demandar aquella persona cuyo derecho sea lesionado por el acto objeto de impugnación.

Es claro que la parte actora confunde ambos tipos de demandas, puesto que pide el restablecimiento del derecho vulnerado, que es propio de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En la demanda de nulidad se pide sólo la declaración de nulidad del acto administrativo. Además, se confronta el acto impugnado con la norma infringida, lo que sitúa al Juez facultado, sólo para decretar la nulidad del acto impugnado y no para dictar disposiciones en reemplazo de las anuladas. En cambio, en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, además de confrontar el acto impugnado, el derecho subjetivo lesionado y la norma infringida, está el Juzgador facultado para decretar la anulación del acto y ordenar el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado.

Del examen realizado se desprende que el apoderado judicial erró al interponer la demanda, pues a todas luces lo que pretende la parte demandante no es una sentencia declarativa sino el restablecimiento de un derecho subjetivo, de tal forma que la vía utilizada no es la adecuada.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el Licenciado Felipe Rangel, en su propio nombre y representación, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 13,004-86 de 1° de octubre de 1986, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOEL C. LUQUE F., EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC), PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 16 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAME. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Joel C. Luque F., actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE ACUICULTORES (ASPAC), ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo Municipal N° 16 de 15 de diciembre de 1994, proferido por el Consejo Municipal del Distrito de Chame.

Por medio del acto impugnado el Consejo Municipal del Distrito de Chame dictó nuevas disposiciones aplicables a las empresas dedicadas a la cría de camarones y pescados en estanques naturales o artificiales en el Distrito de

Chame, acordando lo siguiente:

"Art. N° 1: Fijar el gravamen a la producción de camarones en cautiverio dentro de la jurisdicción del Distrito de B/.10.00 a B/.15.00 mensuales por cada tina utilizada para la cría de camarones, y pescados.

N° 2: Gravar a los laboratorios dedicados a la cría de larvas con un impuesto mensual de B/.-100.00 a 1,000.00 mensuales.

N° 3: Gravar a las plantas procesadoras de camarón y pescados un impuesto de B/.50.00 a B/.500.00 mensuales, en los meses de producción.

N° 4: Gravar a las plantas para hacer alimento con un impuesto de B/.50.00 a B/.300.00 mensuales.

N° 5: Realizar inspecciones a dichas empresas por voluntad propia cada 3 meses, las cuales deben ser realizadas por el Tesorero o Inspectores Municipales.

N° 6: Las empresas deben notificar al Municipio de Chame al momento de iniciar la cría de camarón en las diferentes tinas y suministrar croquis en donde se haga saber el lugar y la cantidad de tinas existentes.

N° 7: La evasión de los impuestos correspondientes a dichas actividades causarán una multa de B/.100.00 a B/.1,000.00 más el pago de los impuestos evadidos.

Art. N° 8: Habrá por parte de las autoridades de policía, inspectores, o popular para el denuncio contra cualquier contribuyente que no aparezca en el catastro Municipal ... Art. 90 (Ley 106 de 8 de octubre de 1973).

Dado a los 22 días del mes de diciembre de 1994.

Presentado a la consideración del pleno por la Comisión de Hacienda Pública."(G. O. 22.703 de 16 de enero de 1995, fs. 9).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 207 de 19 de mayo de 1995, solicitó a esta Sala declarar nulos, por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo Municipal N° 16 de 15 de diciembre de 1994, emitido por el Consejo Municipal del Distrito de Chame (fs. 46-52).

Además, se solicitó al Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Chame que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 31-33).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 21 numeral 6 y 79 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, cuyo texto transcribimos a continuación:

Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973.

"Artículo 21: Es prohibido a los Concejos:
...
6. Gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación.
...
Artículo 79: Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la nación no pueden ser materia de impuestos, derechos y tasas municipales sin que la Ley autorice especialmente su establecimiento."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas el demandante

indicó que las mismas se han violado porque, los "estanques naturales o artificiales para la cría de camarones, o lo que ello implica en particular la PRODUCCIÓN DE CAMARONES EN CAUTIVERIO EN TINAS; LA INSTALACIÓN DE LABORATORIOS DEDICADOS A LA CRÍA DE LARVAS DE CAMARONES; LAS PLANTAS PROCESADORAS DE CAMARÓN: LAS PLANTAS PARA HACER ALIMENTOS PARA LOS CAMARONES" son actividades para las que, el particular que va a realizarlas debe celebrar un contrato de concesión con la Nación que lleva implícito por parte del concesionario, el pago de impuestos para la explotación y uso de las albinas en las que se desarrollan estas actividades, es decir, el pago por la concesión constituye un gravamen u obligación fiscal impuesto por el Estado; por lo que al gravar el Consejo Municipal del Distrito de Chame estas actividades, a través del Acuerdo Municipal impugnado, dicho gravamen constituye una doble tributación y debe ser declarado nulo, por ilegal. (Fs. 23).

Alega la autoridad demandada a foja 91 y siguientes del expediente que, por medio del acuerdo municipal impugnado se gravaron las actividades de producción de camarones en cautiverio, los laboratorios dedicados a la cría de larvas, las plantas procesadoras de camarón y pescados y las plantas para la producción de alimentos para tales especies, con fundamento en los artículos 242 y 243 numeral 1 de la Constitución Nacional que preceptúan lo siguiente: tienen carácter de municipales aquellos impuestos "que no tengan incidencia fuera del Distrito"; y que serán fuente de ingreso municipal "el producto de sus áreas o ejidos lo mismo que de sus bienes propios". Señala además la administración, que los pagos que tiene que asumir el concesionario por el contrato de concesión no tienen el carácter de gravamen o tributo y que son sumas pagadas en concepto de canon de arrendamiento según consta en el Decreto N° 3 de 12 de enero de 1983; y que no se da por tanto, una doble tributación porque lo que se paga a la Nación es un canon de arrendamiento por el uso del área otorgada en concesión y por las actividades que se realizan en esas áreas se debe pagar un impuesto al Municipio.

Entre las pruebas aportadas por el apoderado del Consejo Municipal del Distrito de Chame están las siguientes: nota N° 60 de 24 de marzo de 1995, de la Tesorería Municipal del Municipio de Chame en la que se certifica que las Compañías **Aqua Chame, Rivoflavia y Granjas Marinas** se dedican a la cría de camarones en estanques, con negocios inscritos en la Tesorería Municipal del Distrito de Chame; la nota N° 181 de 13 de octubre de 1995, en la que se certifica que estas tres empresas que desarrollan la actividad de la cría de camarones en estanques, contribuyeron al Municipio por la explotación de dichos negocios, del año 1983 hasta el mes de enero de 1993, y se adjunta copia de los recibos que comprueban los pagos mencionados; también consta la certificación del Presidente del Consejo Municipal de Chame, de que **AQUA-CHAME, S. A., RIVOFLAVIA INC. Y GRANJAS MARINAS** son empresas que operan en el Distrito de Chame, dentro del área de cultivo de camarones y pescados en estanques, siendo que la primera y la segunda empezaron a pagar al Municipio el 24 de octubre de 1983 mediante el recibo N° 128017, hasta enero de 1993 mediante el recibo N° 51050; mientras que la tercera empezó a pagar al Municipio el 21 de noviembre de 1983 con el recibo N° 128319, hasta marzo de 1993 con el recibo N° 54101. (Fs. 63-66).

También está entre las pruebas aportadas por la autoridad demandada, la nota N° 501-01-1207 de 25 de octubre de 1995 de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en la que se certifica que las empresas que se dedican al cultivo de camarones en estanques, en áreas de albinas, deben suscribir un contrato de concesión con la Nación por el **uso** de dichas áreas inadjudicables; que la Nación cobra un canon de arrendamiento de B/.6.00 mensuales por hectárea de conformidad con el Decreto N° 58 de 3 de abril de 1964, adicionado mediante el Decreto N° 3 de 12 de enero de 1983; y que los concesionarios están obligados a pagar al Tesoro Nacional el impuesto de inmueble sobre las mejoras que se edifiquen en las áreas de propiedad de la Nación y el impuesto sobre la renta producto de los ingresos que generan sus actividades, tal como lo establece el artículo quinto del Decreto N° 58 de 3 de abril de 1964 (fs. 69-70). También se aportó copia de cuatro contratos celebrados por el Ministro de Hacienda y Tesoro, los cuales son: el N° 1 de Granja Marina, S. A., N° 55 de Rivoflavia, S. A., N° 12 de Aquachame, S. A., N° 19 de Aquachame, S. A. y la Resolución N° 119 de Rivoflavia, S. A. (Fs. 71-89).

La señora Procuradora de la Administración solicitó, se declaren nulos, por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo N° 16 de 15 de diciembre de 1994, impugnado en esta demanda, toda vez que el Consejo Municipal del Distrito de Chame desconoció el artículo 54 de la Ley 135 de 1943, el cual exige que ningún acto administrativo revocado por el Tribunal sea reproducido por la corporación o funcionario que lo dictó si conserva la esencia de las mismas disposiciones revocadas, a menos que con posterioridad a la sentencia hayan desaparecido los fundamentos legales de la revocación.

La Procuraduría de la Administración se refiere al hecho de que antes de emitirse el Acuerdo impugnado, el Consejo Municipal del Distrito de Chame ya había dictado el Acuerdo N° 8 de 24 de noviembre de 1992, que también gravaba la cría de camarones y pescados en estanques naturales y artificiales, y que fue declarado nulo mediante la sentencia de 26 de noviembre de 1993 de la Corte Suprema de Justicia.

Como el proceso está listo para resolver, a ello se procede a continuación.

A juicio de la Sala, no procede la alegación de la Procuraduría toda vez que, a pesar de que ambos acuerdos gravan la misma actividad, no son iguales, y uno toma como referencia el número de hectáreas dadas en concesión, mientras el otro grava la actividad de producción o procesamiento. El acuerdo impugnado no es una reproducción del Acuerdo N° 8 de 1992, como tampoco sus normas conservan la esencia de las disposiciones revocadas, así que no es aplicable el artículo 54 de la Ley N° 135 de 1943.

La autoridad demandada dictó el acto impugnado con fundamento en los artículos 242 y 243 de la Constitución Nacional y 74 y 75 de la Ley N° 106 de 1973 (fs. 32), los cuales preceptúan lo siguiente:

CONSTITUCIÓN NACIONAL

"ARTÍCULO 242. Son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del Distrito, pero la Ley podrá establecer excepciones para que determinados impuestos sean municipales a pesar de tener esa incidencia. Partiendo de esa base, la Ley establecerá con la debida separación las rentas y gastos nacionales y los municipales.

ARTÍCULO 243. Serán fuentes de ingreso municipal, además de las que señale la Ley conforme al artículo anterior, las siguientes.

1. El producto de sus áreas o ejidos lo mismo que de sus bienes propios. ..."

LEY N° 106 DE 1973 modificada por la LEY N° 52 DE 1984.

"ARTÍCULO 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y contribuciones todas las actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el Distrito.

ARTÍCULO 75. Son gravables por los Municipios los negocios, actividades o explotaciones siguientes:
...
27. Industrias, fábricas, talleres y actividades manufactureras de cualquier clase en los municipios; ...

30. Hospitales, laboratorios y clínicas comerciales e industriales de propiedad privada, o de servicio público."

La primera norma constitucional citada, define los impuestos municipales como aquéllos que no tienen incidencia fuera del Distrito, a menos que la Ley establezca una excepción; mientras que la segunda norma, indica como fuente de ingreso municipal el producto de las áreas o ejidos municipales. A juicio de la Sala, la actividad acuícola es una actividad agropecuaria cuyo gravamen no está autorizado por la ley. Además las albinas no son bienes del municipio por lo que

la Nación es la que las da en concesión. Por lo expuesto en virtud de estas normas no podría considerarse esta actividad como gravable por los municipios.

En cuanto a las normas municipales transcritas, observa la Sala que éstas se refieren básicamente a las actividades comerciales e industriales, aunque se incluye también el concepto genérico de "actividades lucrativas de cualquier clase". Si bien este concepto parece comprender todas las actividades lucrativas que pueden desarrollarse en un distrito, a juicio de la Sala la actividad de **explotación, construcción e instalación de viveros para la cría de mariscos y en especial, viveros para camarones** -tal como se le especifica en los contratos aportados a fojas 72, 77, 83 y 87- es una actividad definida en la ley como agropecuaria y no está incluída entre las actividades citadas, y por tanto, no puede el Municipio gravar esta actividad sin que exista una ley que así lo disponga, en virtud del principio constitucional contenido en los artículos 48 y 242, que delegan en el legislador patrio la facultad de crear los impuestos. Si bien, la lista de las actividades gravables, contenidas en el artículo 75 de la Ley N° 106 de 1973 no sigue el criterio de numerus clausus, la actividad de la Acuicultura que se desarrolla en las albinas dadas en concesión por el Estado en el Distrito de Chame, no es una actividad gravable con impuesto municipal, porque en primer lugar se trata de una actividad agropecuaria y no de las actividades que la ley autoriza al Municipio gravar. En segundo lugar, el Estado ha determinando un régimen impositivo especial de exenciones, para la promoción y fortalecimiento de esta actividad agropecuaria.

En este sentido, tal como se expresó en fallo de 11 de abril de 1989 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional el Legislador ha separado en forma minuciosa los impuestos que constituyen la renta municipal, de la renta nacional y aunque se otorga facultades a los Consejos Municipales, para que en sus respectivas áreas geográficas graven con impuestos y contribuciones, entre otras, "las actividades lucrativas de cualquier clase", esta potestad tributaria municipal debe entenderse como una facultad derivada de la ley. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 26 de febrero de 1993 esta Superioridad señaló lo siguiente:

> "... la potestad tributaria del Gobierno Central es originaria, mientras que la potestad tributaria de los Municipios es derivada. Esto es así porque la primera es ilimitada en cuanto a los tributos que puede crear y emana de la soberanía del Estado, mientras la segunda se encuentra limitada a las materias que la ley le permita gravar a los Municipios y, por lo tanto, emana principalmente y en forma inmediata de la ley. Como bien lo destaca el profesor Rastello, la potestad tributaria municipal no faculta a los Municipios para "inventar" tributos propios (op. cit. pág. 143) no determinados previamente por la ley que, en nuestro caso, es la Ley 106 de 1973. Este es el sentido del artículo 243 de la Constitución: los Municipios no pueden crear mediante acuerdos municipales otros tributos distintos de los previstos en la Ley 106 de 1973 u otra ley que al efecto se dicte. Su potestad tributaria no es pues soberana, ilimitada sino derivada.
>
> Por otra parte, el principio de que los Municipios no pueden gravar lo que ya ha sido gravado por la Nación tiene rango constitucional pues se deriva del artículo 242 de la Constitución que requiere que las rentas municipales y las nacionales sean separadas, es decir, que no provengan de los mismos tributos, además de los aspectos contables de dicha separación.
>
> El Pleno pasa a examinar, a la luz de lo expuesto anteriormente, los cargos de inconstitucionalidad que se endilgan a los artículos 74, 75 y 94 de la Ley 106 de 1973.
>
> En cuanto a los artículos 74 y 75 de la Ley 106 considera el Pleno que los mismos no infringen los artículos 242 y 243 de la Constitución.

> Es cierto que el artículo 74 señala que son gravables por los Municipios todas las actividades industriales, comerciales y lucrativas de cualquier clase que se realicen en el distrito y que el artículo 75 en su numeral 48 dispone que es gravable "cualquier otra actividad lucrativa además de la enumeradas expresamente en dicho artículo". Sin embargo, ambas normas legales en el fondo no hacen más que desarrollar las normas constitucionales antes señaladas porque dan a los Municipios el marco legal dentro del cual pueden establecer tributos.
>
> El citado numeral 48 del artículo 75 de la Ley 106 es amplio en cuanto permite a los Municipios establecer tributos sobre actividades lucrativas que no estén expresamente determinadas en la ley. Pero esta norma no permite a los Municipios gravar lo que ya ha sido gravado por la Nación ni tampoco faculta a los municipios para "inventar" cualquier tributo ya que, por ejemplo, es evidente que no podrían los Municipios gravar con impuestos actividades que no sean lucrativas. En todo caso los tributos municipales deberán constar en forma expresa y detallada en el respectivo acuerdo municipal que los regula. "(Sentencia de 26 de febrero de 1993).

La actividad de la Acuicultura considerada por la Ley N° 58 de 28 de diciembre de 1995, promulgada en la Gaceta Oficial N° 22,940 de 29 de diciembre de 1995, como "una **actividad agropecuaria** en la que se maneja la reproducción, cultivo y repoblamiento de organismos acuáticos", está sujeta a un régimen impositivo especial, determinado por las distintas leyes que regulan la materia, como son: la Ley N° 109 de 30 de diciembre de 1974, mediante la cual se otorgan incentivos fiscales a las personas naturales o jurídicas que se dedican a actividades agropecuarias. También la Ley N° 2 de 20 de marzo de 1986, establece medidas e incentivos a favor de la producción y las exportaciones agropecuarias, dándoles, por ejemplo, una tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía eléctrica; y la Ley N° 20 de 9 de julio de 1980, que estableció el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.

Nuestro régimen impositivo nacional, dispone por tanto, un sistema de incentivos para la actividad agropecuaria, hecho que la excluye de ser fuente de renta municipal, y tal como hemos explicado en líneas precedentes la ley no le otorga al Municipio de Chame la facultad de imponer gravámenes municipales a una actividad agropecuaria, como lo es la acuícola, que además se desarrolla en albinas de propiedad de la Nación dadas en concesión para su explotación mediante el pago de una determinada suma de dinero.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que los artículos señalados del Acuerdo Municipal impugnado violan los artículos 21 numeral 6 y 79 de la Ley N° 106 de 1973 y su nulidad debe ser declarada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULOS, POR ILEGALES, los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del Acuerdo Municipal N° 16 de 15 de diciembre de 1994, proferido por el Consejo Municipal del Distrito de Chame.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTO POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE JAZMÍN SOTO DE MITROTTI, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 60 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,

CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha presentado recurso de apelación contra la resolución dictada por la Magistrada Sustanciadora, el 15 de noviembre del año en curso, que admite la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma Rosas y Rosas, en representación de JAZMÍN SOTO DE MITROTTI, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 60 de 2 de septiembre de 1994, emitida por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda que nos ocupa mediante el auto de 15 de noviembre de 1994 por considerar que la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

El Procurador de la Administración se opone a la admisión de la demanda por cuanto, en su opinión, la demandante interpuso una demanda de nulidad encaminada a hacer valer derechos subjetivos, lo que es propio de una demanda de plena jurisdicción. Observa dicho funcionario que la demandante pretende que se declare ilegal la Resolución N° 60 de 2 de septiembre de 1994 emitida por el Consejo Municipal de Panamá porque removió al Licenciado Jaime Mitrotti del cargo antes que venciese el período para el que fue nombrado. A juicio del Procurador, la demanda debió presentarla el propio afectado, el señor Jaime A. Mitrotti Quintero y no su esposa ya que el acto acusado de ilegal tan solo afecta los derechos subjetivos de éste, y no se ha alegado que este se encuentre incapacitado o ausente.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver el recurso de apelación en estudio.

El acto administrativo impugnado lo constituye una resolución mediante la cual se nombra al señor Alcibiades Vásquez Velázquez en el cargo de Secretario General del Consejo Municipal de Panamá por el período que se inicia el 2 de septiembre de 1994 y termina el 31 de agosto de 1999.

El resto de los Magistrados que integran la Sala observan que, efectivamente, se trata de un acto administrativo de carácter particular o individual, a través del cual se crean derechos subjetivos a favor de un particular, en este caso, el señor Alcibiades Vásquez Velázquez a quien se le nombre en el cargo de Secretario General del Consejo Municipal de Panamá.

Esta situación ha causado en la opinión del Procurador de la Administración el convencimiento de que la vía idónea para interponer esta demanda es la contencioso administrativa de plena jurisdicción.

La controversia se origina en el hecho de que mediante dicho acto administrativo se nombra al Secretario General del Consejo Municipal de Panamá para el período que se inicia el 2 de septiembre de 1994 y termina el 31 de agosto de 1999 lo cual, a juicio de la demandante, destituye del cargo de manera tácita al señor Jaime Mitrotti. Dicho nombramiento, señala la parte actora, se llevó a cabo en la sesión de instalación del Consejo Municipal el día 2 de septiembre de 1994, en abierta violación de las normas que regulan la materia, específicamente el artículo 57 del Acuerdo Municipal N° 8 de 27 de marzo de 1979 el cual señala que "cuando el Concejo haya de elegir sus nuevos dignatarios, miembros de Comisiones y Funcionarios Municipales, señalará la fecha en que se verificará la elección por medio de una resolución aprobada en sesión ordinaria por lo menos cuarenta y ocho horas (48) antes de la fecha señalada para su elección". Además, señala la demandante, se desconoce el período del nombramiento del Licenciado Mitrotti señalado en la Ley y se incumplen las formalidades instituidas por el Reglamento del Consejo Municipal atentando contra la seguridad y estabilidad jurídica en el seno del Consejo Municipal y el resto de la organización municipal.

Lo antes señalado por la parte actora nos lleva al punto de que la

resolución impugnada no sólo crea derechos subjetivos para la persona favorecida con el nombramiento, en este caso, el señor Alcibiades Vásquez Velázquez, sino también para la persona que resulta destituida de manera tácita que en este caso lo es el señor JAIME MITROTTI, por lo que este último al resultar afectado por la resolución impugnada está facultado para interponer una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción contra el acto administrativo que nombra al señor Vásquez Velázquez en el cargo de Secretario General del Consejo Municipal de Panamá.

En este sentido, estima el resto de la Sala, la resolución impugnada es un acto administrativo **tácito**, que crea derechos subjetivos tanto hacia la persona nombrada como hacia la persona que resulta tácitamente destituida, lo cual lo hace recurrible por la vía de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. El **acto administrativo tácito**, en opinión del Profesor y Tratadista Gustavo Penagos es aquel "no expresado formalmente, pero que se infieren del contexto de la expresión utilizada por la administración, con base en una norma legal". En este sentido, señala, "para la existencia del Acto Administrativo, solamente basta que se manifieste la voluntad, en alguna forma" y en este sentido señala que la legislación colombiana reconoce los actos administrativos tácitos, como por ejemplo lo dispuesto en el Decreto 1950, inciso 2º del artículo 107, que señala que "En los empleos de libre nombramiento y remoción **la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña**". (PENAGOS, Gustavo. El Acto Administrativo. Ediciones Librería del Profesional. Cuarta Edición. Colombia. 1987. p. 330.)

El resto de los Magistrados que integran la Sala observan que la presente demanda se refiere al nombramiento del Secretario General del Consejo Municipal de Panamá, con la pretensión evidente de que continúe en la posición el Secretario anterior, señor Jaime Alberto Mitrotti Quintero. En este sentido quienes suscriben estiman que este último ha debido interponer una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción antes de cumplirse el término de prescripción de dos meses pues no es posible que el fácil recurso de interponer una tercera persona la demanda obvíe el fenómeno de la prescripción. En el presente caso, es claro que la resolución impugnada es un acto administrativo tácito por lo que le correspondía al señor Jaime Mitrotti, cuyos derechos subjetivos se vieron afectados, la interposición de una demandan contencioso administrativa de plena jurisdicción. No procede, pues, la admisión de esta demanda.

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del Auto de 15 de noviembre de 1994, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense Rosas y Rosas, en representación de JAZMÍN SOTO DE MITROTTI.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA DOCTORA AURA FERAUD EN REPRESENTACIÓN DE DAVID PÉREZ ALMILLANO Y OTROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO DE GABINETE N° 17 DE 5 DE JUNIO DE 1991, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MANEJO DE LOS SEGUROS DEL ESTADO". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Doctora Aura Feraud, actuando en representación de DAVID PÉREZ ALMILLANO y otros ha promovido proceso contencioso administrativo de nulidad contra el Consejo de Gabinete.

I. La Pretensión y su Fundamento

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que declare que es nulo el Decreto de Gabinete N° 17 de 5 de junio de 1991, expedido por el Consejo de Gabinete, mediante el cual se establece el manejo de los seguros del Estado.

A juicio de la parte actora el decreto impugnado viola el literal ch del artículo 2, los artículos 7, 8, 10 (literales h, i, k, l, m, n), 11, 12 (literales ch, d), 14 (literal b), 17, 45, 46, 54, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 81, 83 y 85 de la Ley N° 55 de 1984. También se consideran violados los artículos 29, 30, 32, 33, 38, 39, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Fiscal.

La apoderada judicial de los demandantes señala que el literal ch del artículo 2 y el primer párrafo del artículo 60 de la Ley N° 55 de 1984 han sido violados en el concepto de violación directa por cuanto el Consejo de Gabinete dejó de aplicar un texto claro de la Ley que debió ser observado. A juicio de la parte actora la creación de la Comisión Tripartita desconoce la tipificación que a la profesión o actividad del corredor de seguros le han dado en forma clara y expresa los artículos que se alegan violados por cuanto en ningún momento se exige a los funcionarios/representantes de las instituciones mencionadas y que fungen como miembros de la precitada comisión que reúnan los requisitos de idoneidad que exige la Ley 55 de 1984, ni consta que hayan obtenido la licencia correspondiente que otorga la Superintendencia de Seguros para poder dedicarse a tal actividad ni la consignación de fianza a favor del propio gobierno nacional como lo exige dicha ley. Agrega la recurrente que, como servidores públicos, les está expresamente vedado ejercer en forma habitual y permanente cualquier otra actividad, no tienen autonomía profesional ni económica, ni pueden ejercer la mediación entre las compañías de seguros que expedirán las pólizas y el asegurado.

En segundo lugar se señala como violados los artículos 7, 8, 10(numerales h, i, k, l, m y n), 12 (numerales ch, d), 14 (numeral b), 17 y 54 de la Ley 55 de 1984. La violación se da, a juicio de la parte actora, por cuanto se sustituye las funciones y competencia asignada por Ley a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en materia de contratación de seguros del Estado, y se le confieren a la Comisión Tripartita creada mediante el decreto impugnado, el cual no tiene valor de Decreto-Ley, sino que es un Decreto Administrativo o de tipo reglamentario, lo que en su opinión constituye un grave quebrantamiento del orden jurídico objetivo al pretender los funcionarios que expidieron el acto acusado modificar, subrogar o revocar mediante una disposición de menor jerarquía jurídica, una ley que fuera debidamente expedida por el Órgano Legislativo y que se encuentra plenamente vigente. Por otro lado, se otorgan facultades omnímodas a la Comisión Tripartita tales como que el diseño y propuesta de nuevas pólizas que deben ser presentadas a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para su aprobación sin que ésta entidad pueda negar su concurso quedando la misma totalmente marginada de la función fiscalizadora y controladora que al efecto le confiere la Ley 55 de 1984.

También se señala violado directamente el artículo 11 de la Ley 55 de 1984 al eliminar las funciones y competencias privativas del Consejo Técnico de Seguros para reglamentar, interpretar y aplicar los aspectos de la Ley N° 55 de 1984, al abrogarse la Comisión Tripartita dichas funciones con respecto a la contratación de Seguros con el Estado. Los demandantes estiman que las decisiones del Consejo Técnico de Seguros en materia de contratación de los seguros del Estado fueron inexistentes por no haber sido convocado en debida forma ni actuado al respecto de conformidad con su reglamento.

La parte actora señala como violados los artículos 45, 46, 60 (segundo párrafo), 61, 65, 70, 71, 74 y 78 de la Ley N° 55 de 1984 porque se le confieren toda una serie de facultades a los funcionarios públicos miembros de la comisión tripartita que no son corredores de seguros ni tienen licencia para ello, las

cuales serán ejercidas sin la intervención de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros ni del Consejo Técnico de Seguros en la forma estatuida por la Ley N° 55 de 1984, la cual a juicio de la parte actora, no distingue entre seguros y/o pólizas para personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, por lo que no es dable a los funcionarios que expidieron el acto acusado distinguir o discriminar la contratación de las pólizas del Estado para concederse una situación de ventaja, fuero o privilegio al margen de la Ley.

También señala el actor que las normas antes aludidas han sido violadas en concepto de desviación de poder por cuanto ha rebasado los límites del poder reglamentario del Ejecutivo al modificar, subrogar, derogar o dejar sin efecto claras disposiciones de una norma de mayor jerarquía legal (Ley 55 de 1984) en lo que dice relación con la contratación de los seguros del Estado.

La parte actora estima que han sido violados los artículos 72, 79, 81, 83 y 85 de la Ley N° 55 de 1984, por cuanto cercena la facultad sancionadora de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, por violaciones a la Ley cuando se trate de contratación de seguros del Estado ya que su competencia y funciones privativas han sido subrogadas a pesar de que la Ley no hace distinción alguna entre el tratamiento dado cuando el asegurado es una persona natural o jurídica, pública o privada.

También se produce, a juicio de la parte actora, la violación a las normas arriba citadas, por desviación de poder al rebasar el Ejecutivo su poder reglamentario y causar que los corredores de seguros y empresas aseguradoras incumplan la Ley N° 55 de 1984, cuando se trate de contratación de seguros del Estado.

La parte actora señala que se ha producido igualmente la violación de los artículos 29, 30, 32, 33, 38, 39, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Fiscal.

II. La postura del Procurador de la Administración.

El entonces Procurador de la Administración contestó la presente demanda mediante la Vista N° 196 de 22 de abril de 1994 visible de fojas 191 a 218 del expediente contentivo del proceso y en la misma expresa que no comparte el criterio del demandante que estima que el Decreto de Gabinete N° 17 de 5 de junio de 1991 es violatorio de las normas arriba señaladas por cuanto, en su opinión, la Ley 55 del 20 de diciembre de 1984 no contiene disposición alguna que regule de manera especial el corretaje de seguros, cuando el asegurado es el Estado panameño en tanto que la norma que se alega violada fue expedida teniendo como fundamento la atribución del Consejo de Gabinete para organizar el crédito público de conformidad con el numeral 7 del artículo 195 de la Constitución Política de la República por lo que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia, este Decreto debe ser ubicado como un reglamento constitucional independiente que si bien es un acto administrativo desde el punto de vista formal tiene la virtud de poder modificar, adicionar o derogar una ley formal por lo que, en su opinión, no se ha producido la violación del literal ch artículo segundo, ni del primer párrafo del artículo 60 de la Ley 55 de 1984.

En torno a la supuesta violación de los artículos 7, 8, 10 (literales h, i, k, l, m, n), 12 (literales ch, d), 14 (literal b), 54, 72 y 78 de la Ley N° 55 de 1984, la misma no se produce, señala el Procurador, dado que la materia de contratación de seguros por parte del Estado carecía de regulación legal por lo que mal puede el decreto impugnado haber invadido esa supuesta regulación legal, máxime cuando en su opinión se trata de un reglamento autónomo fundamentado en una autorización de jerarquía constitucional. El mismo, agrega, no es producto de la potestad reglamentaria como la parte actora pretende entender por cuanto el ejercicio de esa potestad reglamentaria está reservada al Presidente de la República en conjunto con el Ministro de Estado respectivo y, no forma parte de las atribuciones del Consejo de Gabinete como cuerpo colegiado. El acto impugnado lo constituye, pues, un reglamento constitucional independiente que no pretende reglamentar una ley formal sino una materia especial (contratación de seguros por parte del Estado) que carecía de toda regulación jurídica y que por su naturaleza debe quedar sujeta a un régimen especial y distinto al del Derecho Privado.

Tampoco se produce, a su juicio, la violación del artículo 11 de la Ley N° 55 de 1984, por cuanto el decreto impugnado no pretende reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley N° 55 de 1984, sino por el contrario regula en forma autónoma la materia de contratación de seguros por parte del Estado. Agrega que la facultad de reglamentar que tiene el Consejo Técnico de Seguros, en virtud del artículo 11 de la Ley N° 55 de 1984, dice relación con aspectos estrictamente técnicos de esa Ley y no al aspecto de su desarrollo en el sentido de ejercer potestad reglamentaria, la cual está reservada al Órgano Ejecutivo.

Estima el Procurador, que tampoco se produce la violación de los artículos 45, 46, el segundo párrafo del artículo 60. 61, 65, 70, 71, 74, 78 y 83 de la Ley N° 55 de 1984 por cuanto las normas que se alegan infringidas "no son incompatibles con las contenidas en el Decreto de Gabinete N° 17 de 1991, el cual establece apenas algunos parámetros generales aplicables sólo a la contratación de seguros por parte del Estado en vías de establecer un régimen especial para la contratación de este tipo de seguros, tomando en cuenta la naturaleza de este contrato, sin que ello altere en nada las disposiciones generales de la Ley N° 55 de 1984, aplicables a la contratación de seguros por parte de los particulares.

Tampoco se produce, a su juicio, la violación de los artículos 72, 79, 81, 83 y 85 de la Ley 55 de 1984 porque dichas violaciones se fundamentan en el desconocimiento de disposiciones legales que regulan en forma general el negocio de seguro pero que, tal como ha señalado en cargos anteriores, no son incompatibles con la regulación especial del Decreto de Gabinete N° 17 de 1991, pues ni siquiera las roza porque trata aspectos distintos.

De igual manera, no se produce a su juicio, la violación de los artículos 29, 30, 32, 33, 38, 39, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Fiscal.

III. Decisión de la Sala Tercera

Procede la Sala a examinar los cargos de ilegalidad indicados por la parte actora.

En primer lugar se estima violado el literal ch del artículo 2 y el primer párrafo del artículo 60 de la Ley N° 55 de 1984, en los cuales se define la profesión de corredor de seguros y se señala que la misma sólo puede ser ejercida por personas idóneas y que dicha idoneidad la otorga la Superintendencia de Seguros. La Sala estima que la creación de una Comisión Tripartita cuyos fines lo constituyen únicamente el diseño y proposición a la Superintendencia de Seguros de nuevas pólizas de seguros con coberturas y condiciones especiales para los seguros del Estado, aunado al establecimiento de un sistema moderno de administración de riesgos por medio de concursos, según lo establecido en el Código Fiscal, considerado el Estado como un sólo cliente, no constituye, en modo alguno, un desconocimiento de la tipificación de la profesión de corredor de seguros, ni le otorga a los funcionarios que integren la comisión dicha calidad, máxime cuando el mismo decreto impugnado hace referencia, en su artículo cuarto que quienes presten los servicios de administradores de riesgos deberán ser corredores de seguros. No proceden, pues, los cargos alegados.

En cuanto a la violación de los artículos 7, 8, 10 (literales h, i, k, l, m, n), 12 (literales ch y d), 14 (literal b), 54, 72 y 78 de la Ley N° 55 de 1984 los cuales regulan lo relativo al ejercicio ilegal del negocio de seguros y las facultades de la Superintendencia de Seguros, la Sala estima que no se han producido las violaciones alegadas por la parte actora. Ello es así por cuanto de ningún modo se le ha usurpado funciones a la Superintendencia de Seguros por que el decreto impugnado establece claramente que la Comisión Tripartita diseñará y propondrá nuevas pólizas con coberturas y condiciones beneficiosas para el Estado, las cuales se someterán a la **aprobación** de la Superintendencia de Seguros. En ningún momento se establece en el decreto impugnado que la Superintendencia de Seguros está obligada a aprobar todo lo que la Comisión Tripartita le proponga, como señala la parte actora. No se producen, pues, las infracciones alegadas por los demandantes.

En torno a la supuesta violación del artículo 11 de la Ley N° 55 de 1984, en el cual se crea el Consejo Técnico de Seguros y se determina quienes lo conforman, la Sala Tercera considera que no se produce la violación alegada por cuanto hay que tener claro que la Ley N° 55 de 1984 reglamenta el negocio de seguro y capitalización, las operaciones de las compañías que ejerzan dicha actividad y la profesión de corredores de seguros, es decir, que regula los seguros en general, mientras que el decreto impugnado, que consta de solamente 7 artículos, se limita a establecer ciertos mecanismos de aseguramiento y de administración de riesgos específicamente en torno a los **seguros del Estado.** De modo, pues, que la creación de la Comisión Tripartita no es óbice para que el Consejo Técnico de Seguros ejerza las funciones que le han sido asignadas mediante la Ley 55 de 1984, ni los funcionarios que la integran sustituyen a los miembros de dicho consejo. No se produce, pues, la violación alegada.

También se señalan violados los artículos 45, 46, el segundo párrafo del artículo 60, 61, 65, 70, 71, 74, 78 y 83 de la Ley 55 de 1984. Los mismos guardan relación con los deberes y prohibiciones del corredor de seguros y las negociaciones con las compañías aseguradoras. El artículo 78, cabe señalar, fue declarado inconstitucional mediante fallos de 8 de octubre de 1985 (inciso 2°) y 12 de septiembre de 1986 (inciso 1°) por lo cual esta Sala no entrará a analizar los cargos hechos frente a dicha norma. A juicio de quienes suscriben, no se producen las violaciones alegadas por la parte actora por cuanto la Comisión Tripartita, a pesar de que se le permite negociar con las compañías aseguradoras las pólizas del Estado, está obligada a presentar para su aprobación dichas pólizas a la Superintendencia de Seguros, lo cual es demostrativo de que en ningún momento la Comisión Tripartita está atribuyéndose las facultades de la Superintendencia ni se impone limitación alguna a la intervención de esta última en los asuntos que le corresponden. Por otro lado, tampoco está actuando dicha comisión como corredor de seguro pues precisamente el artículo 3 del decreto impugnado señala como uno de los objetivos de dicha norma el fomentar la participación de la mayor cantidad de corredores de seguros en vías de lograr las mejores condiciones para la administración de los seguros del Estado. A su vez, el artículo cuarto del decreto impugnado establece muy claramente que los administradores de riesgos deberán ser corredores de seguros.

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley 55 de 1984 establece que los honorarios de los corredores de seguros deben estar incluidos en la prima o póliza, también es cierto que el artículo cuarto del decreto impugnado establece que los honorarios profesionales de los corredores que presten el servicio de administración de los riesgos del Estado deberán estar incluidos dentro de la oferta que cada corredor, en representación de la compañía de seguros, presente a cada institución. No se observa ninguna contradicción entre una norma y otra, pues el decreto impugnado señala tan sólo que al ofrecer la compañía aseguradora, a través de su corredor, las condiciones de la póliza solicitada, se incluya en dicha póliza los honorarios de los corredores.

Tampoco se produce la violación de las normas antes mencionadas por desviación de poder por cuanto el decreto impugnado no constituye una reglamentación de la Ley 55 de 1984 sino que se trata de un reglamento de carácter autónomo, relacionado con la contratación de seguros del Estado, el cual tiene como fundamento el numeral 7 del artículo 195 de la Constitución Nacional. No procede, pues, el presente cargo.

Finalmente, se señalan violados los artículos 29, 30, 32, 33, 38, 39, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código Fiscal. La Sala considera improcedente analizar los cargos de ilegalidad que se le endilgan a las normas fiscales antes mencionadas por cuanto las mismas han sido derogadas mediante la Ley N° 56 de 27 de diciembre de 1995 a través de la cual se regula la contratación pública. Esta ley a su vez fue reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 18 de 25 de enero de 1996. La Sala estima que en relación a las normas fiscales antes señaladas se ha producido el fenómeno jurídico de **sustracción de materia** al haber cesado dichas normas en su vigencia por lo cual no es procedente acceder a la pretensión de nulidad formulada por la parte demandante en torno a las mismas.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso

Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Gabinete N° 17 de 5 de junio de 1991, expedido por el Consejo de Gabinete.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LEOPOLDO BENEDETTI, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 12 Y 26 DEL DECRETO N° 272 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Pérez, actuando en nombre y representación de Leopoldo Benedetti, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulos, por ilegales, los artículos 12 y 26 del Decreto N° 272 de 30 de noviembre de 1994, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, el cual modifica el Decreto Ejecutivo N° 17 de 29 de noviembre de 1989 reglamentario de la Ley N° 5 de 15 de abril de 1988, por la cual se establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa y se adoptan otras medidas.

Admitida la presente demanda se ordenó correrle traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien contestó la demanda mediante la Vista Fiscal N° 303 de 20 de julio de 1995; se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; y además se le corrió traslado a la empresa Pycsa de Panamá, S. A.

La parte actora estima que los artículos 12 y 26 del Decreto N° 272 de 30 de noviembre de 1994, violan los artículos 2 y 23 de la Ley 5 de 15 de abril de 1988.

Los precitados artículos establecen literalmente lo siguiente:

"Artículo 2: Mediante el sistema de concesión administrativa, una persona jurídica o entidad se obliga, por su cuenta y riesgo, a realizar cualesquiera de las actividades susceptibles de concesión a que se refiere esta ley, bajo el control y fiscalización de la entidad concedente, a cambio de una retribución que puede consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación del Órgano Ejecutivo, el primero cobre a los usuarios de tales obras por el tiempo que se determine en el acto que otorgue la concesión, o en cualquier otra forma que se convenga."

"Artículo 23: Los concesionarios tendrán derecho a los siguientes beneficios fiscales:

1. A partir de la adjudicación de la concesión y durante la ejecución de las obras, los bienes objeto de la concesión, estarán exentos de:

1.1 Impuesto de importación. Terminadas las obras, todas las maquinarias y equipos de construcción introducidos al país deberán ser reexportados, salvo que se cancelen los respectivos impuestos y derechos de importación.

1.2 Impuesto de reexportación.

1.3 Impuesto de transferencia de bienes muebles.

1.4 Impuesto sobre la renta.

2. Durante la administración de las obras o bienes, la concesionaria tendrá derecho a exoneración de:

2.1 Impuesto Sobre la Renta así:

2.1.1 Cien por ciento (100%) durante los primeros cinco (5) años.

2.1.2 Setenta y cinco (75%) durante los cinco (5) años siguientes.

2.1.3 Cincuenta por ciento (50%) durante el resto de los años de la concesión.

2.2 Exoneración cien por ciento (100%) del impuesto de timbres.

2.3 Exoneración cien por ciento (100%) del impuesto de importación del equipo de mantenimiento y operación indispensable en la administración de las obras de la concesión.

2.4 Exoneración cien por ciento (100%) del impuesto de transferencia de bienes muebles en las importaciones del equipo de mantenimiento y operación indispensable para la administración de la obras de la concesión."

"Artículo 12: Se modifica el Artículo 19 del Decreto Ejecutivo N° 17 de 1989, el cual quedará así:

'Artículo 19. El concesionario tendrá derecho a prorrogar el plazo de ejecución de las obras, cuando ocurran los siguientes hechos:

a) Caso fortuito

b) Fuerza mayor

c) Cualquier otro de efectos análogos a los anteriores previa autorización de la entidad concedente.'"

"Artículo 26: Se adiciona el Artículo 38-A al Decreto Ejecutivo N° 17 de 29 de noviembre de 1994:

'Artículo 38-A. El Concesionario estará exento del impuesto sobre la transferencia de Bienes Muebles (ITBM), y el de importación al territorio de la República de Panamá de las maquinarias, equipos, suministros, materiales y bienes en general que se destinen a la ejecución de las obras objeto de la concesión o se incorporen a las mismas, quedando entendido que tales bienes no podrán ser destinados a fines distintos ni vendidos o traspasados en la República de Panamá.

Tales bienes, maquinarias, equipos, suministros y materiales podrán, en cualquier tiempo, ser enviados al exterior o reexportados libre de todo impuesto.

El régimen antes mencionado alcanzará por igual a los bienes que adquieran los contratistas y subcontratistas del Concesionario, y que sean objeto de la Concesión siempre que los bienes objeto de la importación sean consignados a nombre del concesionario."

El demandante considera que el artículo 26 del Decreto N° 272 de 30 de noviembre de 1994 violó, en forma directa por comisión, el artículo 2 de la Ley 5 de 1988, porque esta norma establece claramente que el sistema de concesión

administrativa crea únicamente para el concesionario, obligaciones a cambio de beneficios fiscales, excepto en los casos en que la entidad concedente le autorice para ceder, traspasar o vender su concesión administrativa a un tercero.

Señala la parte actora que el artículo 26 del Decreto N° 272 crea beneficios fiscales para quienes no son parte del sistema de concesiones administrativas, contratistas y subcontratistas sin obligación con el Estado, al extender la exención de impuesto de importación y del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles de las maquinarias, equipos, suministros, materiales y bienes para la ejecución de la obra a contratistas y subcontratistas del concesionario.

La señora Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones del demandante, y al referirse al cargo de violación del artículo 2 de la Ley N° 5 de 1988, expresó que este contiene una serie de elementos indispensables para que se pueda dar la concesión administrativa, entre los que menciona al Estado cedente, el concesionario, la concesión y la retribución, además de aquellos requisitos y condiciones establecidos en el pliego de bases y el respectivo contrato, lo cual es distinto de los privilegios que en materia tributaria pueda tener el concesionario en razón de las exenciones de impuestos que recaen sobre las maquinarias o equipos utilizados en la obra o sobre la prestación del servicio.

La representante del Ministerio Público señaló que los beneficios fiscales a que tiene derecho el concesionario no están establecidos en el artículo 2 de la Ley 5 de 1988, como lo expone el demandante, sino en el artículo 23 de la Ley 5 de 1988, derechos que aunque son especiales para el concesionario pueden ser cedidos a terceros según el artículo 54 del Código Fiscal, aplicable en virtud del artículo 8 de la Ley 5 de 1988, cuyo texto es el siguiente:

> "Artículo 54: Los contratistas podrán ceder los derechos que nazcan del contrato siempre que no esté prohibida la cesión por leyes o disposiciones que regulen el mismo, o por las condiciones consignadas en los pliegos de cargos que hayan servido de base a la licitación. Sin embargo, en todos los casos será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste las garantías exigidas al contratista, y que el Ministerio o entidad respectiva consienta en la cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo."

Agrega además que no se producen las exenciones tributarias a favor de terceros, porque en virtud del artículo 26 acusado de ilegal, sólo se reconocen exoneraciones de impuestos de importación y de transferencia de bienes muebles que adquieran los contratistas y sub-contratistas del concesionario cuando sean objeto de la concesión y cuando sean consignados a nombre del concesionario.

El demandante estima que el artículo 26 del Decreto N° 272 viola directamente por comisión, el artículo 23 de la Ley 5 de 1988, ya que concede a terceros que no son parte de la concesión administrativa, derechos y privilegios fiscales como si lo fueran y la ley sólo contempla los beneficios fiscales del concesionario administrativo que ejecute obras públicas en razón de la inversión que hace por su propio riesgo y cuenta, con la excepción del caso en que ceda, traspase y venda a un tercero sus derechos con la expresa autorización de la entidad concedente.

La señora Procuradora de la Administración expresó que las exenciones contenidas en el artículo 26 del Decreto Ejecutivo N° 272 de 1994 no contradicen la ley, ya que son el resultado de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo para desarrollar las leyes, originada del artículo 179, numeral 14 de la Constitución Política. Manifestó que la Ley 5 de 1988 fue reglamentada por el Órgano Ejecutivo mediante el Decreto N° 17 de 1989, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 272 de 1994, cuyo artículo 26 le adicionó el artículo 38-A, el cual reglamenta el artículo 23 de la Ley 5 de 1988.

Señala también la parte actora que el artículo 12 del Decreto N° 272 de 1994, viola la Ley 5 de 1988 por desviación de poder, porque al reglamentar la ley sobrepasó sus fines. Considera que dicha ley establece un sistema de

concesión administrativa bajo control y fiscalización de la entidad concedente, en el cual el plazo de ejecución de la obra no está sujeto a la voluntad del concesionario, ya que el fin perseguido por la ley N° 5 de 1988 es que la obra pública revierta al Estado en un tiempo determinado.

Agrega el demandante en relación con la referida violación de la ley 5 de 1988, por desviación de poder:

> "Es bueno anotar, finalmente que la propia ley 5 de 1988, en su artículo 18, señala que la entidad concedente podrá otorgar al concesionario un plazo prudencial para que subsanen las causas que motiven el incumplimiento de la concesión administrativa. Este artículo es claro en que el Estado a través de la entidad concedente (sic) el que podrá prorrogar los plazos de ejecución de la obra, y con ello queda expresado textualmente que la finalidad de la ley es que el Estado, a través de la entidad concedente determine el plazo de la concesión administrativa." (Fs. 22).

La señora Procuradora de la Administración indicó que el derecho reconocido al concesionario para el plazo de ejecución de la obra, se fundamenta en los principios generales de esta clase de contratación, la cual podría interrumpirse por caso fortuito, fuerza mayor u otro evento análogo que impida su continuación. Agrega también que por disposición expresa del artículo 2 de la Ley 5 de 1988, la actividad del concesionario estará bajo el control y fiscalización de la entidad cedente, y que según el artículo 12, numeral 8 de esta misma ley, en los convenios de concesión administrativa debe consignarse el plazo para la iniciación y terminación de las obras físicas, por lo cual el plazo no lo determina el concesionario, a quien además según los artículos 16-19 de la Ley 5 de 1988, deben aplicársele las sanciones legales en caso de no concluir la obra en el tiempo pactado o dentro de la prórroga concedida para este efecto.

La Sala procede a confrontar los artículos atacados del Decreto reglamentario, con los artículos de la ley reglamentada que se estima violados.

El artículo 23 de la Ley 5 de 1988 establece que a partir de la adjudicación de la concesión y durante la ejecución de la obra, los bienes objeto de la misma, estarán exentos, entre otros, del pago de los siguientes impuestos:

1. De la transferencia de bienes muebles (ITBM).

2. Sobra la renta.

3. De importación.

4. De reexportación.

Por su parte el Artículo 26 del Decreto N° 272 de 1994, señala que el concesionario tiene derecho a que las maquinarias, equipos, suministros materiales y bienes en general **destinados a la ejecución de las obras objeto de la concesión o incorporados a las mismas**, estén exentos de los siguientes impuestos:

1. Transferencia de bienes muebles (ITBM).

2. De importación.

3. De reexportación.

El precitado artículo 26 del Decreto 272, hace extensivo este régimen a los bienes adquiridos por los contratistas y subcontratistas del concesionario **siempre que los bienes importados sean consignados a nombre del concesionario.**

Los artículos 1 y 3 de la Ley N° 5 de 1988 establecen literalmente lo siguiente:

> "Artículo 1: Establécese el **sistema de concesión administrativa para la ejecución de obras públicas de interés público**, aplicable a la construcción, mejora, mantenimiento, conservación, restauración y explotación de carreteras, autopistas, y otras obras que el Concejo de Gabinete califique como de interés público.
>
> Artículo 3: Sólo podrán ser calificadas de interés público, **aquellas obras que redunden en beneficio e interés de la colectividad nacional, que signifiquen una mejora de carácter permanente y de uso público** a construirse en terrenos de la nación o a ser expropiados o adquiridos por la nación, y **que al final de la concesión puedan revertir a la nación libre de costos, gravámenes o reclamaciones y en buen estado de uso y reparación, que garanticen una vida útil y costos de mantenimiento a satisfacción de la entidad concedente.**"

Los precitados artículos 1 y 3 de la Ley 5 de 1988, establecen la finalidad del sistema de concesión administrativa para ejecución de obras públicas, cuyo objetivo es que estas obras beneficien a la colectividad al revertir a la nación **libre de costos, gravámenes o reclamaciones, en buen estado de uso y reparación y con costos de mantenimiento satisfactorios para el Estado.**

Ejercitando la facultad reglamentaria conferida por la Constitución Política y por el artículo 28 de la Ley 5 de 1988, el Órgano Ejecutivo por Conducto del Ministerio de Obras Públicas, modificó mediante el Decreto N° 272 de 1994 el Decreto Ejecutivo N° 17 de 1989, reglamentario de la Ley N° 5 que establece el sistema de concesiones administrativas para la construcción de obras públicas de **interés social y público**.

La potestad reglamentaria es conferida al ejecutivo para desarrollar las leyes a fin de facilitar su ejecución, en beneficio del interés público.

El interés social y público de esta clase de obras, exige que el Estado como ente encargado de conceder su construcción y explotación a particulares, elabore normas tendientes a disminuir los costos y que permitan que la ejecución de la obra sea rentable al concesionario y por consiguiente, también lo sea el precio que el Estado debe pagar por su construcción y los costos de mantenimiento al finalizar la concesión administrativa.

La Ley 5 de 1988 y el Decreto 272 de 1994, otorgan exenciones fiscales sobre los materiales y equipos necesarios en la construcción de la obra, y no propiamente para el beneficio del concesionario o de los contratistas y subcontratistas, puesto que el objetivo primordial es abaratar el costo de la obra y así beneficiar a la colectividad nacional que se sirva de la misma.

La Sala observa que el artículo 2 de la Ley 5 de 1988 no se refiere a lo señalado por el demandante sobre los beneficios fiscales a que tiene derecho el concesionario para la construcción y explotación de la obra, sino que indica que este tiene derecho, durante la explotación de la concesión, a cobrar una retribución que puede consistir en derechos o tarifas previamente aprobadas por el Órgano Ejecutivo, asunto distinto del que contempla el artículo 26 del Decreto N° 272 de 1994, ya que este sí trata de los beneficios fiscales derivados de la concesión administrativa.

En el presente caso no hay ningún traspaso de los derechos y beneficios fiscales conferidos al concesionario que deba ser aprobado por el Estado, sino que mediante un Decreto, el Órgano Ejecutivo, reglamentando la ley que establece el sistema de concesiones administrativas, desarrolla el artículo de esta que otorga beneficios fiscales para los materiales, maquinarias y demás bienes destinados a la obra objeto de la concesión, a fin de abaratar su costo. El artículo 26 del Decreto N° 272 de 1994 dispone que los bienes exonerados "no podrán ser destinados a fines distintos ni vendidos o traspasados en la República de Panamá". Por lo expuesto, la Sala estima que está norma reglamentaria no viola los artículos 2 ni 23 de la Ley N° 5 de 1988.

En relación a la violación por desviación de poder del artículo 2 de la Ley

N° 5 de 1988, por el artículo 12 del D N° 272 de 1994, esta Sala considera que no se ha producido tal violación, y comparte el criterio de la señora Procuradora de la Administración en cuanto a que el artículo 12 del Decreto N° 272 de 1994 contempla la prórroga del plazo de ejecución de la obra, **previa autorización de la entidad concedente,** en caso fortuito, fuerza mayor o en otros casos de naturaleza análoga a los anteriores, o sea circunstancias ajenas a la voluntad del concesionario, mientras que el artículo 18 de la Ley 5 mencionado por el demandante, establece un supuesto totalmente distinto, porque otorga al concesionario un plazo prudencial, determinado por la entidad concedente, para que subsane las causas de incumplimiento que le son imputables o de lo contrario el concesionario pierde la concesión y las fianzas respectivas.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES los artículos 12 y 26 del Decreto N° 272 de 30 de noviembre de 1994, dictado por el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas, por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo N° 17 de 29 de noviembre de 1989 reglamentario de la Ley N° 5 de 15 de abril de 1988, por la cual se establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa y se adoptan otras disposiciones.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LCDA. NANNETTE DE ROMERO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 508 DE 24 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Nannette de Romero**, actuando en su propio nombre, presentó demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 508 de 24 de agosto de 1994, emitida por el Consejo de Gabinete, "por medio de la cual se exceptúa al Municipio de Colón, de los Trámites de Licitación Pública y se le autoriza para la venta de una Finca de su propiedad registrada como 9942, en el área de Brazos Brooks".

Surtidos todos los trámites procesales establecidos por la ley, pasa la Sala a decidir el fondo de la controversia.

Considera la demandante que la Resolución impugnada viola los artículos 1, 6 y 15 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973.

El concepto de la violación del artículo 1 de la citada Ley, lo explica así:

> "PRIMERA VIOLACIÓN: El acto acusado viola lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 106 de 8 de octubre de 1973, en el concepto de violación directa. Dicha norma establece lo siguiente:
>
> 'El Municipio es la organización política autónoma de la comunidad establecida en un distrito. La Organización Municipal será democrática y responderá al carácter esencialmente administrativo del gobierno local'.

> En reiterados fallos la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, se ha referido de manera lata y llana a la necesidad de que los altos estamentos del gobierno central, en forma alguna pueden interferir de manera arbitraria e ilegal en la administración Municipal, vulnerando así su autonomía de allí, que es evidente la injerencia por parte del Concejo de Gabinete, y a través de la resolución numerada 508, injerencia no sólo en la cosa municipal, sino que va más allá pues no sólo se limita a decirle que venda y a quién le vende. Por el contrario le impone inclusive el destino que debe dar al dinero proveniente de la enajenación de bienes de propiedad exclusiva del municipio, en el caso concreto del Municipio de Colón".

En cuanto a la violación del artículo 6 de la Ley 106 de 1973 la parte actora lo explica así:

> "Dicha norma es del tenor siguiente:
>
> 'El Estado complementará la gestión municipal, cuando está sea insuficiente, en caso de epidemias, grave alteración del orden público u otros motivos de interés general, en la forma que determina la ley'.
>
> Como es de observarse, en el caso que nos ocupa el cual se refiere a la venta de las tierras de propiedad del Municipio de Colón, no se trata de epidemia alguna, ni tampoco de insuficiencia en el actuar municipal que requiera de la acción complementaria por parte del gobierno central a través del Concejo de Gabinete, y mucho menos de una situación que implique el interés general, social o una urgencia notoria. De allí que, a todas luces se trata en el caso particular de una acción alejada de la ley de parte de este órgano del Estado llamado Concejo de Gabinete, a través de su resolución N° 508, de fecha 24 de agosto de 1994.
>
> Como puede observarse de la norma citada, puede el Estado, a través del gobierno central inmiscuirse en las cosas propias de los municipios, sólo en casos extraordinarios y no de manera antojadiza, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa, en donde no existiendo alguno de los motivos que taxativamente enmarca la norma se procede a obviar la norma en cita además de claras disposiciones del Código Fiscal".

Por último considera la demandante que la Resolución acusada viola lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 106 de 1973, que establece el Régimen Municipal, toda vez que el mencionado artículo es del tenor siguiente:

> "...
> 'Los acuerdos, resoluciones y demás actos de los Consejos Municipales y los decretos de los Alcaldes sólo podrán ser reformados, suspendidos o anulados por el mismo Órgano o autoridad que los hubiere dictado y mediante la misma formalidad que revistieron los actos originales. También podrán ser anulados por los tribunales competentes, previo los procedimientos que la ley establezca'.
>
> Esta disposición citada y desconocida por el acto acusado, excluye a cualquier órgano del Estado para conocer y variar los actos llevados a cabo por la entidad autónoma denominada Municipio, como se puede observar la resolución de Gabinete con numeración 508 de fecha 24 de agosto de 1994, no sólo se limita a exceptuar ilegalmente las ventas del terreno, identificado como finca N° 9942, del trámite de Licitación Pública sino que además dispone de manera irregular de los fondos producto de la ya tan mencionada venta, de allí la violación directa".

El Ministro de la Presidencia y Secretario General del Consejo de Gabinete,

Raúl Arango Gasteazoro, al rendir el informe solicitado por este Tribunal, dijo lo siguiente:

> "En cumplimiento de su solicitud contenida en el Oficio N° 132 de 8 de febrero de 1995, relacionada con la Demanda Contencioso Administrativa instaurada por la Licenciada Nannette García de Romero, en su propio nombre, para que se declare **NULA** por ilegal, la Resolución de Gabinete N° 508 de 24 de agosto de 1994, expedida por el Consejo de Gabinete, tenemos a bien rendirle el Informe Explicativo de Conducta, al tenor de lo ordenado por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.
>
> Los antecedentes de la Resolución impugnada son los siguientes:
>
> Por medio de la Ley N° 19 de 29 de septiembre de 1983, la Finca N° 9942, Brazos Brooks, fue traspasada al Municipio de Colón.
>
> Las anteriores autoridades municipales del Distrito de Colón, manifestaron al entonces Ministro de Gobierno y Justicia, el deseo e interés de desarrollar un proyecto habitacional en esta finca, dada la gran demanda de viviendas en dicha Provincia.
>
> Este proyecto, según dichas autoridades, debía desarrollarse con carácter de urgencia en vista de la gravedad y magnitud del problema habitacional, por lo cual se requería obviar el procedimiento de Licitación Pública para la venta de los lotes de terreno, conforme lo ordena el artículo 98 de la Ley 106 de 1973.
>
> Ante la premura de la venta de dichas tierras, el Ministro de Gobierno y Justicia de aquel entonces, a petición del Municipio de Colón, presentó ante el Consejo de Gabinete una solicitud de excepción de Licitación Pública y autorización de venta directa de ciertos lotes de la Finca 9942, en el área de Brazos Brooks, según avalúo de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro.
>
> Esta petición se concretó en la Resolución de Gabinete N° 508 de 24 de agosto de 1994, que además de acceder a lo pedido, dispuso que:
>
> 'El producto de la venta de los lotes de Brazos Brooks será utilizado para cubrir el costo de construcción del Centro Penitenciario de Monte Esperanza (Mount Hope) que ha sido licitado y adjudicado, por un monto de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 CENTÉSIMOS (B/.1,835.955.00)**. El Municipio de Colón utilizará el remanente de los fondos para obras con fines sociales en la Provincia de Colón'".

La Procuradora de la Administración considera que al demandante le asiste parcialmente la razón en su pretensión. En lo que respecta a la violación que alega del artículo 1° de la Ley 106 de 1973, por parte del artículo 2 de la Resolución de Gabinete N° 508, se expresa así:

> "No obstante, es claro que las condiciones, precios de venta y formas de pago, concedidas a las quince (15) personas naturales y jurídicas que suscribieron contratos de compra-venta de terrenos, segregados de la Finca 9942 Brazos Brooks, pertenecientes al Municipio de Colón, no podían ser variados por el Consejo de Gabinete, puesto que en ésta materia dicho cuerpo colegiado se encuentra facultado legalmente sólo para aprobar o denegar la declaratoria de excepción, y determinar si se sigue el procedimiento del concurso de precios o el de la contratación directa, siempre que se den alguno de los Supuestos previstos en el artículo 58 del Código Fiscal.
>
> Por tanto, estimamos que la disposición contenida en el artículo

segundo de la Resolución de Gabinete N° 508, infringe la norma en comento, ya que desconoce la autonomía administrativa que tiene la organización Municipal, en el Distrito en que tiene su asiento".

En cuanto a que la Resolución impugnada viola el artículo 6 de la Ley 106 de 1973, la Procuradora estima lo siguiente:

"No compartimos la opinión del demandante, que se haya violado esta norma en el caso bajo estudio, puesto que la misma se refiere a un supuesto distinto, cual es el de la gestión gubernamental complementaria, para satisfacer las necesidades más apremiantes de la población, en casos excepcionales en que ello sea necesario.

El Dr VÍCTOR FLORENCIO GOYTÍA, refiriéndose al artículo 191 de la Constitución Nacional de 1946, que contiene una disposición similar a la contenida en el artículo 233 de la Constitución vigente, reproducida en el artículo 6 de la Ley 106 de 1973, en su trabajo intitulado 'Las Constituciones de Panamá', comenta que:

'... el artículo 191 impone al Estado la obligación de suplir la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente, en caso de epidemia, grave alteración del orden público u otro motivo de interés general, en la forma que determina la ley. Como se trata de suplir una gestión que naturalmente corresponde al Municipio, debe la ley, cuando ello ocurre, determinar que se cumpla y con los fines que lo hacia el Gobierno Local en beneficio de los intereses comunales".

En el caso que nos ocupa la actuación del Consejo de Gabinete se contrae a: 'Exceptuar al Municipio de Colón del trámite de Licitación Pública, para la venta directa de ciertos lotes de la finca de su propiedad número 9942', a la vez que establece disposiciones adicionales relacionadas con dicha contratación, las cuales consideramos ilegales, aunque no se relacionan con la gestión prevista en el precepto en mención.

Por lo demás, es un hecho notorio que urge la construcción de viviendas en toda la República, por lo que se justifica la excepción a los trámites de la licitación la venta en referencia, dado el interés social existente".

En cuanto al cargo de que la Resolución impugnada viola el artículo 15 de la Ley 106 de 1973, la Procuradora de la Administración opina lo siguiente:

"Concordamos con lo expuesto por el demandante, ya que si bien es cierto corresponde al Consejo de Gabinete exceptuar de los trámites de Licitación Pública, las ventas de terrenos Municipales que no estén destinados a áreas o ejidos municipales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 de la Ley 106 de 1973, 58 y 59 del Código Fiscal, este organismo carece de facultad para administrar los recursos pertenecientes al Municipio, y para dejar sin efecto actos de los Consejos Municipales relacionados con los mismos. El Consejo de Gabinete en el mejor de los casos podría condicionar la declaratoria de excepción, a la realización de algún (os) acto (s) por parte del ente estatal que requiere la autorización, más no puede invadir la esfera de competencia de éste, como bien lo señala el demandante.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Tercera de la Corte, a propósito de casos similares. (V. por ej. S. de 3 de junio de 1976).

Por todo lo expuesto, reiteramos nuestra opinión que no es ilegal el artículo primero de la Resolución de Gabinete N° 508 de 24 de agosto de 1994, emitida por el Consejo de Gabinete, por cuanto que exceptúan al Municipio de Colón del trámite de Licitación Pública

> para la venta de ciertos lotes de su finca N° 9942, en el entendimiento que los compradores de dichos lotes habrán de desarrollar proyectos de carácter habitacional, tal como lo exige el artículo 6 de la Ley 1 de 1991, vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 5 de 1993, Orgánica de la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá (ARI).
>
> A la vez consideramos que si es ilegal el artículo segundo de la Resolución N° 508, por las razones expresadas".

Expuestos los argumentos de todo los que han intervenido en el proceso, entra la Sala a examinar los cargos de ilegalidad atribuidos a la Resolución de Gabinete impugnada.

Se aduce que la Resolución 508 del Consejo de Gabinete, de 24 de agosto de 1994, viola el artículo 1 de la Ley 106 de 1973, al vulnerar la autonomía del Municipio de Colón, por interferir el Consejo de Gabinete de manera arbitraria e ilegal en la administración Municipal.

Consta en el expediente el Acuerdo Municipal 101-40-64, de 23 de agosto de 1994, expedido por el Consejo Municipal de Colón (foja 12), un día antes de la Resolución del Consejo de Gabinete N° 508 impugnada, que es de 24 de agosto de 1994.

Dicho Acuerdo Municipal establece en su artículo 9, que el mencionado Acuerdo entrará en vigencia siempre y cuando la **contratación directa**, sea autorizada mediante Resolución emitida por el Consejo de Gabinete.

El contenido de ese Acuerdo Municipal se refiere a la segregación en lotes, de la Finca 9942, en Brazos Brooks, a los efectos de ser vendidos, concediéndole la primera opción de compra a personas naturales y jurídicas que suscribieron contratos con el Municipio de Colón.

Una comparación del mencionado Acuerdo Municipal con la Resolución impugnada, demuestra que efectivamente el Municipio de Colón requirió al Consejo de Gabinete la autorización para la venta directa de los mencionados lotes. Claramente se observa entonces que no es ilegal el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 508 de 24 de agosto de 1994, por lo que se desestima el cargo, ya que el propio Consejo Municipal de Colón, solicitó la excepción de Licitación Pública como ha quedado demostrado. Además, es un hecho notorio que el país urge la construcción de viviendas en toda la República así como de cárceles para albergar la gran cantidad de detenidos y acabar con el hacinamiento del Sistema Penitenciario Panameño, por lo que se justifica la excepción a los trámites de Licitación Pública en el presente caso y no se altera en lo absoluto la autonomía Municipal del Distrito de Colón.

En cuanto a la infracción del artículo 6 de la Ley 106 de 1973, también estima la Corte que no se ha producido la ilegalidad sostenida por la demandante, por las mismas razones expuestas anteriormente, además que el mencionado Acuerdo Municipal establece lo que luego se reflejó en la Resolución de Gabinete impugnada.

La última violación legal que la demandante le atribuye a la Resolución de Gabinete atacada, es que viola el artículo 15 de la Ley 106 de 1973, al sostener que dicha Resolución no sólo se limita a exceptuar ilegalmente las ventas de terrenos del trámite de Licitación Pública, sino que además dispone de manera irregular de los fondos producto de la ya mencionada venta.

Este cargo es totalmente infundado. El artículo 5 del Acuerdo Municipal N° 101-40-64 del Consejo Municipal de Colón que consta a foja 12, 13 y 14 del expediente dice textualmente lo siguiente:

> "ARTÍCULO 5. Del producto de la venta de los lotes segregados de la Finca 9942 Brazos Brooks, se destinará la suma de **Un Millón Ochocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Cinco**

> **Balboas (B/.1,835.955.00)**, para la remodelación de Edificios de Monte Esperanza para la Cárcel Pública de Colón y el restante para Obras Sociales y Comunitarias del Distrito de Colón".

Como se ve fue el propio Municipio Colonense que estableció el uso que se haría de los fondos, para remodelar Edificios de Monte Esperanza para la Cárcel Pública de Colón. Consta a foja 46-48 del expediente que el producto de la venta de los lotes del 7 al 15 de Brazos Brooks, esta siendo destinados para cubrir el costo de construcción del Centro Penitenciario Monte Esperanza, obra valorizada en B/.1.835.955.00 y que los desembolsos efectuados hasta ahora eran de B/.1.474.254.50, faltando por pagar B/.361.740.50. Como es de conocimiento público dicha cárcel, esta para ser entregada en mayo del presente año y está casi totalmente terminada y albergará de 750 a 800 reclusos, cómodamente, del Distrito de Colón, lo cual resolverá un grave problema social en dicho Municipio, a parte de como hemos dicho también se contribuye en la solución del problema de vivienda, con la venta de los lotes de la Finca 9942 de Brazos Brooks.

Por lo expuesto, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución de Gabinete N° 508 de 24 de agosto de 1994, expedida por el Consejo de Gabinete.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE INTERNATIONAL TELEPHONE & FAX-IT&F, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 13-92 DE 19 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR EL COMITE EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma Vásquez y Vásquez, actuando en nombre y representación de INTERNATIONAL TELEPHONE & FAX IT&F, INC. (antes Telenational Comunication, S. A. TNC), ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 13-92 de 19 de mayo de 1992, emitida por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).

Al admitirse la presente demanda se corrió traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 235 de 19 de junio de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 45-53); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 38-44).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 6 de la Ley 80 de 20 de septiembre de 1973, Orgánica del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y 12 de la Ley 14 de 24 de julio de 1987, por la cual se regulan las telecomunicaciones nacionales e internacionales de la República de Panamá, cuyo texto transcribimos a continuación:

> "LEY N° 80 de 20 de SEPTIEMBRE DE 1973.
>
> ARTÍCULO 6. El Comité Ejecutivo estará integrado por los Ministros de Gobierno y Justicia, quien lo presidirá, de Planificación y

Política Económica y el Gerente General del Banco Nacional de Panamá y tendrá las siguientes atribuciones:

1. Supervisar el funcionamiento de la Institución para lo cual podrá realizar las investigaciones, inspecciones y requerir de los servidores públicos de la Institución los informes que estime necesarios;

2. Aprobar el programa anual y el proyecto de presupuesto del Instituto Nacional de Telecomunicaciones;

3. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y sus modificaciones;

4. Aprobar las adjudicaciones definitivas de las licitaciones o concursos de precios por compras o ventas mayores de quinientos mil balboas (B/.500,000.00);

5. Autorizar la enajenación de bienes muebles o inmuebles del Instituto Nacional de Telecomunicaciones cuyo valor sea superior a veinticinco mil balboas (B/.25,000.00);

6. Recibir periódicamente del Gerente y de otros funcionarios que indique el Reglamento Interno, informes sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Telecomunicaciones."

LEY N° 14 de 24 de JULIO DE 1987.

"ARTÍCULO 12. Es función del INTEL informar y recomendar al Órgano Ejecutivo todo aquello que incida o se relacione con la materia propia de las telecomunicaciones."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas el demandante indicó que las mismas se han violado, en primer lugar, porque las funciones del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones están expresamente contenidas en el artículo 6, y ninguno de los numerales se refiere a la atribución ejercida en el acto administrativo impugnado; y en segundo lugar, porque esta atribución compete, por su naturaleza, al Órgano Ejecutivo previo informe y recomendaciones del INTEL.

A estos cargos se opuso el señor Procurador de la Administración, expresando que el artículo 11 de la Ley 14 de 1987 atribuye al INTEL funciones adicionales, las cuales deben ser ejercidas por quien tiene la administración y dirección de la empresa, es decir, el Comité Ejecutivo y el Gerente General. Cita también la señora Procuradora, el artículo 63 del Decreto de Gabinete N° 214 de 1970, "Por el cual se dictan disposiciones sobre la prestación del servicio de Telecomunicaciones", y que faculta al concesionario para proceder al corte inmediato del servicio sin necesidad de la intervención de una autoridad judicial, cuando se haga uso fraudulento o no autorizado del servicio público de telecomunicaciones.

Evacuados los trámites legales, procedemos al análisis de los cargos expuestos.

El acto impugnado fue dictado por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, y en éste se resolvió lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDERLE O NEGARLE los servicios de telecomunicaciones a las empresas que utilicen dicho servicio para la operación de sistemas paralelos, reventa de servicios, uso inapropiado de servicios especiales tales como: los servicios 800, 900 y otros, utilización indebida del sistema público de telecomunicaciones mediante la utilización de llamadores automáticos o cualquier otro método de línea caliente o dedicada física o virtual, o cualquier uso indebido de la infraestructura de telecomunicaciones del INTEL que contravenga la legislación vigente.

> ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, de aquellos casos en que se compruebe la comercialización al margen del INTEL de llamadas telefónicas al exterior del país, de las cuales, por no haber sido facturadas por el INTEL, no existe constancia del pago del gravamen correspondiente establecido por la Ley 88 de 1961.
>
> ARTÍCULO TERCERO: SOLICITAR al Gerente General que informe periódicamente sobre estas actividades y las acciones tomadas por el INTEL."(Fs. 2-3).

La autoridad demandada al exponer la razón por la cual dictó el acto impugnado expresó, que la decisión adoptada en dicho acto es netamente administrativa, donde se dan instrucciones al Gerente General de la institución para que proceda a "negar o suspender los servicios de las facilidades 800, 900 y otras facilidades telefónicas especiales, que estaban siendo utilizadas de manera ilegal al no estar debidamente autorizados y por ende violando las disposiciones legales que regulan las telecomunicaciones en la República de Panamá y en competencia no permitida a los usuarios del servicio telefónico, para la operación de sistemas paralelos o reventa de servicios telefónicos. "(Fs. 38) Expresa el informe de conducta rendido por el Presidente del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que el objetivo del acto impugnado es frenar la actividad conocida internacionalmente como "call back" o reventa de llamadas telefónicas, que se inicia en nuestro país a partir de 1991, como una actividad no autorizada ocasionando perjuicios económicos al Estado y a la calidad de servicio telefónico que brinda el INTEL.

A modo de ilustración transcribimos parte del informe de conducta comentado, en el que se explica en qué consiste el sistema de llamadas "call back":

> "La actividad de "call back" se realiza a través de empresas que operan en los Estados Unidos de América, país donde está permitida la reventa de servicios telefónicos y donde la libre competencia permite esta actividad y donde los costos de las llamadas son más atractivas que las ofrecidas por nuestro país.
>
> Estas empresas a través de representantes locales operan en Panamá, las cuales mediante panfletos y anuncios enviados vía fax o correo promocionan y comercializan dicho servicio entre clientes establecidos en la República de Panamá, inclusive estableciendo la diferencia de tarifas entre las que ofrece el Intel y las ofrecidas por dichos revendedores con los costos de los Estados Unidos de Norteamérica.
>
> La actividad de call back es realizada por dichas empresas bajo diferentes modalidades tecnológicas, entre ellas:
>
> El servicio de la serie 800 consiste en que el abonado puede efectuar una llamada de larga distancia internacional desde Panamá, sin que se le efectúe ningún cargo a él en virtud de que el usuario no tiene que pagar la llamada el usuario llama a un número telefónico de la serie 800, en el cual le puede contestar un computador o una operadora y luego procede a introducir o a dar su código y el número de teléfono del país a donde desea llamar, esto trae por consecuencia de que se efectúen llamadas a cualquier parte del mundo, utilizando circuitos entre Estados Unidos y el resto del mundo y no entre Panamá y cada país en particular de acuerdo al enrutamiento que tenga el INTEL para un determinado país, obviando el pago de la llamada y del respectivo impuesto a Panamá.
>
> Este servicio consiste en que un computador instalado en los Estados Unidos de Norte América llama constantemente a un número telefónico previamente asignado en Panamá, cuando el usuario desea efectuar una llamada telefónica internacional solamente levanta el teléfono y obtiene el tono del computador y luego procede a efectuar su

llamada, como el computador está llamando al usuario constantemente, una llamada originada en Panamá o sea una llamada saliente se convierte en una llamada entrante, obviando así la facturación de dicha llamada y el respectivo impuesto en la República de Panamá, y ocasionando congestión artificial de los canales internacionales que entra a disposición de la generalidad de los usuarios del servicio telefónico.

Este servicio consiste en que el usuario llama a un número telefónico local el cual corresponde a la red de datos del INTEL, a través de la red de datos el usuario envía su petición al computador instalado en los Estados Unidos de Norte América, el computador procede a llamar al usuario en Panamá y darle un tono para que pueda efectuar su llamada a cualquier parte del mundo esto trae por consecuencia de que no se facture ni la llamada ni el respectivo impuesto en Panamá.

Este servicio consiste en que el abonado efectúa una llamada de larga distancia internacional desde Panamá a un computador instalado en los Estados Unidos de Norte América, el computador le da un tono al usuario y este puede efectuar una llamada a cualquiera parte del mundo evitando así utilizar la infraestructura del INTEL para un determinado país, utilizando esta forma el INTEL solamente percibe el costo de la llamada entre Panamá y los Estados Unidos de Norte América y no entre Panamá y cualquier otro país, desde el punto de vista del impuesto este si se paga, ya que es una llamada originada en Panamá.

CUARTO: La problemática de los servicios de "call back" es una actividad que en el plano internacional está afectando a la mayoría de las administraciones telefónicas de nuestros países latinoamericanos, a lo cual Panamá, por ser país donde convergen empresas calificadas de grandes consumidores de tráfico internacional, resulta altamente rentable para las empresas revendedoras, su operación. INTEL, a través de organizaciones internacionales ha realizado gestiones legales ante la COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS (F.C.C.), a fin de que se consideren los argumentos de los países afectados, donde se ha incluido la posibilidad de que el "call back" que utiliza la configuración de llamada no completada viola la legislación internacional."

Tal como lo afirma el demandante a foja 139 del expediente, en el caso que nos ocupa no se discute si el sistema de llamadas internacionales de "call back", es legal o no, sino si el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones está facultado para tomar decisiones al respecto. En cuanto a este punto de la controversia, si bien el artículo 6 de la Ley N° 80 de 20 de septiembre de 1973 (G.O. 17,448 de 8 de octubre de 1973), mediante la cual se crea el INTEL, tal como quedó subrogado por la Ley N° 36 de 1 de agosto de 1975 (G.O. 17,904 de 13 de agosto de 1975), no contempla entre las funciones del Comité Ejecutivo ninguna que pueda servir de fundamento al acto impugnado, cabe resaltar que la Ley N° 14 de 29 de julio de 1987, promulgada con posterioridad a ésta, dispuso en su artículo 11 que el INTEL asume en forma exclusiva la competencia para planificar, coordinar, reglamentar, expandir, operar y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones, sin perjuicio de las funciones asignadas por el Artículo 4 de la Ley 80 de 1973, es decir, que el INTEL es el ente responsable y competente de aplicar la Ley N° 14 de 1987.

La Ley N° 14 de 1987, regula las telecomunicaciones nacionales e internacionales en la República de Panamá, y es en esta ley donde se establecen ciertas prohibiciones en cuanto a los servicios públicos de telecomunicaciones (art. 20); también se regula su ámbito de aplicación (art. 1), cómo estará organizado el servicio público de telecomunicaciones (arts. 8-13), se definen conceptos (arts. 2-6), se declara de utilidad pública e interés social los servicios públicos de telecomunicaciones (art. 7), se regulan las concesiones vigentes (arts. 14-19), y se consagran otras normas en relación con las

facultades y atribuciones del INTEL (arts. 21-28). Esta ley preceptúa que, es responsabilidad exclusiva del Estado la prestación directa de los servicios públicos de telecomunicaciones (art. 8), y que esta gestión será hecha a través del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), institución que asume en forma exclusiva la competencia para planificar, coordinar, reglamentar, expandir, operar y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones (art. 11). Por tanto, la Ley N° 14 de 1987 otorga al INTEL nuevas facultades en forma exclusiva, que guardan relación con el servicio público que administra dicha institución, y que se adicionan sin perjuicio de aquellas funciones que ya tenía asignado el INTEL en el artículo 4 de la Ley N° 80 de 1973.

Ahora bien las funciones administrativas señaladas en el artículo 11 de la ley 14 de 1987 deben ser ejercidas por el Comité Ejecutivo del INTEL conforme a los artículos 5 y 6 de la ley 80 de 1973 y por ello tal entidad tiene plena facultad para pronunciarse en relación con lo que al servicio público de comunicaciones se refiere.

Los servicios públicos de telecomunicaciones son aquellos que ponen a disposición del público cualquier tipo, forma o sistema de comunicaciones fijos o móviles que constituyen la red pública de telecomunicaciones (art. 3). Esta está constituida por el conjunto de medios de transmisión, distribución y conmutación destinados a los servicios públicos de telecomunicaciones, y también forman parte de esta red los medios internacionales de transmisión y recepción por satélite. El artículo 21 de la Ley N° 14 de 1987 preceptúa que, todo acceso nacional e internacional para servicios de telecomunicaciones se efectuará exclusivamente a través de los sistemas que para tal fin establezca el INTEL, y que no se podrán constituir sistemas paralelos a los del INTEL para acceso nacional e internacional, exceptuando de esta disposición las empresas de servicio público de telecomunicaciones con concesiones vigentes a la promulgación de esta ley.

Por tanto, por disposición del legislador el INTEL controla con exclusividad el acceso internacional para el servicio de telecomunicaciones e incluso tiene facultades para determinar el régimen de gestión de terminales de usuarios de cualquier naturaleza que se conecten a la red pública de telecomunicaciones (art. 24).

En el acto impugnado, el Comité Ejecutivo del INTEL dispuso tomar ciertas medidas respecto a las empresas que utilizan los servicios de telecomunicaciones para: la operación de sistemas paralelos, reventa de servicios, uso inapropiado de los servicios especiales 800 y 900, uso indebido del sistema público de telecomunicaciones para la utilización de llamadores automáticos o cualquier otro método que esté en contravención con la legislación vigente. Observa la Sala que, el Comité Ejecutivo está estrictamente disponiendo las medidas administrativas a tomar con las empresas que violen la ley en materia de telecomunicaciones y es el Gerente General quien a través de un acto distinto, ha impartido las instrucciones para suspender el servicio telefónico específicamente a la empresa INTERNATIONAL TELEPHONE & FAX-IT & F, por dar mal uso, uso fraudulento o no autorizado de las instalaciones del INTEL, decisión que ya no sería revisable mediante una demanda de nulidad sino de plena jurisdicción (fs. 28-37).

En un caso similar al que nos ocupa, la Sala se pronunció en relación con el servicio de teléfonos monederos, señalando que es una responsabilidad exclusiva del Estado y que se enmarca dentro de la definición de servicio público de telecomunicaciones. Así se dictó la sentencia de 29 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

> "Si observamos, el artículo 8 de la Ley 14 señala "Será responsabilidad exclusiva del Estado la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones ..." y el artículo 11 de la misma Ley señala "El INTEL asume en forma exclusiva la competencia para planificar, coordinar, expandir, operar y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones",
>
> Por lo que, un teléfono monedero público es una responsabilidad exclusiva del Estado e igualmente comercializar o la venta del mismo

> compite con el Estado, pues el local comercial al comprar este teléfono, deja de adquirir los teléfonos monederos que tiene el INTEL y éste deja de percibir lo que en ellos se deposita ante la imposibilidad de fiscalización de los mismos.
>
> En mérito de lo anterior consideramos que la venta de un teléfono monedero se enmarca dentro de la definición de servicios públicos de telecomunicaciones según el artículo 3 de la ley 14 y estamos ante un servicio público que no trata una actividad distinta de la señalada en los artículos 8 y 11 de la citada ley.
>
> El demandante señala, también que se ha violado en forma directa, por omisión, el artículo 12 de Código de Comercio en vista de que el demandante fue privado de ejercer libremente el comercio al no ser autorizado a vender los teléfonos monederos."

Referente a esta infracción, considera la Sala que no se produce puesto que en el presente negocio judicial no se discute la capacidad legal para el ejercicio del comercio, sino si la actividad a realizarse es legal o no. Por lo que sólo queda añadir que al tratarse de una actividad reservada al Estado y existiendo una norma que así lo señala, no se infringe el artículo 12 del Código de Comercio.

> "Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones no ha violado las normas atacadas y más bien ha actuado legalmente al no autorizar la venta de los citados teléfonos monederos." (Sentencia de 29 de diciembre de 1995, en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Rosas y Rosas en representación de José King, S. A. contra la Nota N° 13.94.014 de 27 de enero de 1994, dictada por el Gerente General del INTEL)."

En cuanto al servicio público de llamadas internacionales, a juicio de la Sala, éste también está comprendido dentro de la definición de servicio público de telecomunicaciones, cuya prestación directa es responsabilidad del Estado, a través del INTEL, quien tiene competencia exclusiva para planificar, coordinar, reglamentar, expandir, operar y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones. Por tanto, la Sala considera que el acto impugnado no viola el artículo 6 de la Ley N° 80 de 1973.

En cuanto al cargo de violación del artículo 12 de la Ley N° 14 de 1987, la Sala lo desestima porque considera que esta norma no es aplicable al caso, ya que se refiere a las funciones generales del INTEL, como ente que tiene la responsabilidad exclusiva del servicio público de telecomunicaciones, de informar y recomendar todo aquello que se relacione con la materia de las telecomunicaciones al Órgano Ejecutivo. La competencia para planificar, coordinar, reglamentar, expandir, operar y administrar los servicios públicos de telecomunicaciones se la otorga al Intel el artículo 11 de la Ley 14 de 1987, que ya hemos comentado.

Cabe resaltar que, mediante la Ley N° 5 de 9 de febrero de 1995 (G. O. 22.724 de 14 de febrero de 1995) fue reestructurado el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, convirtiéndolo en una sociedad anónima, INTEL, S. A., que permite al Estado vender acciones de esta institución. En su artículo 2 esta ley, en un parágrafo transitorio, dispone que la política de planificación y desarrollo de las telecomunicaciones del país, hasta tanto se dicte la Ley General de Telecomunicaciones y del Ente Regulador, la fijará el Estado. Esta ley también preceptúa en su artículo 6, que el INTEL, S. A. tiene en forma exclusiva la facultad de continuar operando los servicios de telecomunicaciones que venía brindando hasta la fecha el INTEL.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 13-92 de 19 de mayo de 1992, emitida por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Telecomunicaciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARGO TOURS, S. A. Y AGRO GANADERA SANTA FE, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS TRIBUTOS O GRAVÁMENES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL N° 9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TABOGA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Luis Alberto Gutiérrez**, en representación de **ARGO TOURS, S. A., y AGRO GANADERA SANTA FE, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declaren nulos por ilegales, los tributos o gravámenes establecidos en el ACUERDO MUNICIPAL N° 9 de 10 de octubre de 1995, emitido por el CONSEJO MUNICIPAL DE TABOGA.

La Sala se percata que consta en el expediente una solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado que debe ser atendida, previo al trámite de admisión de la demanda.

La parte demandante solicita que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, suspenda provisionalmente los efectos de los Códigos **1. 1. 2. 5. 93, 1. 1. 2. 5. 99, 1. 1. 2. 5. 94 y 1. 2. 1. 4. 02**, literal e del Artículo 2 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, emitido por el Consejo Municipal de Taboga.

Por medio del referido Acuerdo se derogan todos los Acuerdos relacionados con impuestos, tasas, derechos y contribuciones y se establece un nuevo régimen impositivo del Municipio de Taboga, ya que consideran que los mismos exceden la facultad tributaria del Consejo Municipal de Taboga, la cual está sujeta a los límites legales establecidos en la Ley 103 de 1973.

Argumenta también, el representante legal de la sociedad demandante **ARGO TOURS, S. A.**, que ésta es una sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Panamá, además propietaria de la nave **FANTASÍA DEL MAR** con patente de navegación N° 8060 pint-1 expedida por la Dirección General Consular y Naves, que presta un servicio de transporte turístico de pasajeros de Balboa, Taboga, Contadora, así como cualquier otro puerto de la República desde hace muchos años. Además, que es contribuyente del Municipio Capital, es decir, que paga sus impuestos municipales en el Municipio de Panamá, y que igualmente la nave **FANTASÍA DEL MAR** paga sus impuestos nacionales por la actividad que desarrolla (Licencia de Navegación ante la Dirección Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro).

Por lo tanto, considera el recurrente que el Acuerdo Municipal impugnado, ha creado un impuesto que tiene incidencia fuera del Distrito de Taboga, ya que involucra actividades efectuadas fuera de éste, lo cual atenta contra el principio de la doble tributación consagrado en los artículos 21; numeral 6, y 79 de la Ley 106 de 1973, reformado por la Ley 52 de diciembre de 1984, toda vez que mediante dicho impuesto se pretende gravar una actividad que ya se encuentra gravada.

Aunado al argumento antes resumido, sigue diciendo el demandante, de conformidad con el principio de legalidad, los impuestos se establecen a través de leyes, por ello escapa dentro de las atribuciones del Consejo Municipal de

Taboga, tanto el imponer gravámenes a los barcos o lanchas, yates de lujo, y actividades n. e. o. c, que a juicio del demandante, se refieren a embarcaciones análogas o parecidas, así como también el querer imponer un gravamen de $0.25 a $0.50 a los turistas nacionales y extranjeros que visiten la Isla de Taboga, para el mantenimiento y ornato de esa porción territorial; porque ningún municipio de la República está facultado a cobrar impuesto a los visitantes, como pretende hacer el Municipio de Taboga.

Encontrándose el proceso en este estado, la Sala Tercera procede a resolver la presente solicitud.

Los impugnados Códigos **1. 1. 2. 5. 93, 1. 1. 2. 5. 99, 1. 1. 2. 5. 94, y 1. 2. 1. 4. 02**, ordinal e del Artículo 2 del referido Acuerdo, crean impuestos y tasas municipales para el Municipio de Taboga bajo el rubro de actividades turísticas e ingresos por venta de servicios, específicamente para el aseo, recolección y mantenimiento de playas. El texto de los mismos es del tenor siguiente:

> "**1. 1. 2. 5. 93** Empresas Turísticas:
>
> Todo barco o lancha que se dedique a la actividad comercial de transporte o paseo de bienes y personas por la circunscripción dentro de los límites del distrito.
>
> Pagarán por mes o fracción de mes B/.100.00 a B/.200.00.
>
> **1. 1. 2. 5. 99** Otras actividades n. e. o. c. pagarán por mes o fracción de mes; B/.5.00 a B/.200.00
>
> **1. 1. 2. 5. 94** Todo Yate de Lujo que se dedique a Actividades Recreativas y permanecen en aguas Territoriales del Distrito de Taboga, pagarán una tasa de B/.10.00 a B/.20.00, para satisfacer el Servicio Público de Aseo y Ornato y mantenimiento de las Playas, el cual debe ser pagado por los Propietarios o Representantes legales de dichos Yates."
>
> ... **1. 2. 1. 4. 02** Aseo, Recolección de Basura y Mantenimiento de playas. Incluye los ingresos que percibe el municipio por brindar el Servicio de Recolección de Basura a la comunidad y aseo de playas, pagarán:
>
> ... e) Todo turista, nacional o extranjero que visite la Isla de Taboga, pagará para su limpieza, mantenimiento etc. B/.0.25 a B/.0.50".

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala, procede la suspensión del acto impugnado como medida cautelar en las demandas de nulidad, no sólo para evitar perjuicios de carácter económicos o patrimoniales sino también, cuando el acto acusado puede producir una lesión a la integridad del ordenamiento legal, que puede ocurrir cuando el acto administrativo impugnado es manifiestamente incompatible con una norma de superior jerarquía. Cfr. Autos de 2 de enero de 1991, 25 de febrero de 1994 y de 12 de octubre de 1995.

De igual manera, la Sala Tercera ha sostenido en ocasiones similares a la que nos ocupa, que la excepción a la regla general prevista en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, en que se establece que no habrá suspensión en las acciones relacionadas con tributos, ya se trate de impuestos, tasas o contribuciones especiales, sólo le es aplicable a las acciones que recaen sobre tributos nacionales ya que se encuentran regulados íntegramente en la ley, y este Tribunal como regla general no puede suspender los efectos de una ley, sino solamente de actos administrativos. No así sucede con los tributos de carácter municipal, que por el contrario, sólo se encuentran parcialmente regulados en la ley, y los aspectos importantes de su estructura, tales como el hecho generador de la obligación tributaria o la tarifa del impuesto que deben pagar los contribuyentes municipales, se encuentran regulados mediante actos

administrativos los cuales la Sala sí puede suspender.

El ordinal 8 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, señala que los Consejos Municipales tienen competencia exclusiva para establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas de conformidad con las leyes, para atender los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales.

De igual manera, el artículo 242 de la Constitución Nacional preceptúa que son municipales los impuestos que no tengan incidencia fuera del Distrito, y que la ley podrá establecer excepciones para que determinados impuestos sean municipales, a pesar de tener esa incidencia. Por su parte, el ordinal 6 del artículo 21 de la Ley 106 de 1973, establece la prohibición para los Consejos Municipales de "gravar con impuestos lo que ya ha sido gravado por la Nación".

En lo que respecta a los códigos **1. 1. 2. 5. 93 y 1. 1. 2. 5. 99** que aluden a la imposición de un impuesto a "Todo barco que se dedique a la actividad comercial de transporte o paseo de bienes y personas por la circunscripción dentro de los límites del distrito, u otras actividades análogas", así como también al código **1. 1. 2. 5. 94** que "establece tasas para todo yate de lujo que se dediquen a actividades recreativas y permanezcan en aguas territoriales del distrito de Taboga", la Sala estima que a primera vista, pareciera que existe contradicción entre tales disposiciones y las normas relativas a las facultades de los Consejos Municipales para gravar una serie de actividades industriales, comerciales o lucrativas de cualquier clase que se realicen en el distrito.

A juicio de este Tribunal, el Consejo Municipal de Taboga ha establecido un tributo que tiene incidencia fuera del Distrito de Taboga, ya que afecta actividades que se desarrollan dentro de los límites del Distrito y fuera de este, y que de conformidad con la Ley, no constituye una excepción al precitado artículo 242 de la Constitución Nacional.

Al establecer el referido Acuerdo Municipal, un tributo a los yates de lujo que se dediquen a actividades recreativas dentro de los límites del Distrito en mención, a simple vista, pareciera contradecir las atribuciones legales que tienen los municipios en materia de imposición de gravámenes. El artículo 1057-B del Código Fiscal establece un impuesto a la navegación en aguas jurisdiccionales de la República a todo propietario de lanchas, yates, motonaves de uso particular, que a juicio de esta Sala, incluye a los yates de lujo. Por consiguiente, al gravarse esta actividad en el acuerdo en mención, pareciese existir una doble tributación, lo cual violentaría la prohibición a que alude el artículo 21 de la Ley 106 de 1973.

También se observa, que el Acuerdo en mención, en el Código **1. 2. 1. 4. 02**, ordinal e establece la imposición de una tasa para todo turista, nacional o extranjero que visite la Isla de Taboga para satisfacer el servicio público de aseo, ornato, recolección de basura y mantenimiento de playas.

Estima la Sala que en principio, pareciera que no existe contradicción entre tal disposición y las normas relativas a las facultades de los Consejos Municipales para establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, para atender los gastos de la administración, servicios de mantenimiento, aseo de playas e inversiones municipales. Actualmente en la Calzada de Amador en el Distrito Capital, se cobra un gravamen similar.

En base a las aseveraciones vertidas, y en atención a la facultad discrecional que le confiere el artículo 73 y ss. de la Ley 135 de 1943, para suspender los efectos de un acto administrativo cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave, el Pleno de esta Sala considera que en el caso en examen, en lo que respecta a los Códigos **1. 1. 2. 5. 93, 1. 1. 2. 5. 99 y 1. 1. 2. 5. 94** del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, se ha dado lo que en la doctrina se conoce como el **FUMUS BONIS IURIS**, por razón de que los efectos del acto impugnado a prima facie, aparentan vicios de ilegalidad. Lo procedente es pues, suspender los efectos de tales normas.

Cabe destacar que las apreciaciones esgrimidas por este Tribunal Colegiado, al momento de examinar la solicitud de suspensión de los efectos del acto acusado, no son definitivas hasta tanto, no se pronuncie en sentencia de fondo.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos de los Códigos **1. 1. 2. 5. 93, 1. 1. 2. 5. 99, 1. 1. 2. 5. 94 y 1. 2. 1. 4. 02** del artículo 2 del Acuerdo Municipal N° 9 de 10 de octubre de 1995, emitido por el Consejo Municipal de Taboga, y **NIEGA LA SUSPENSIÓN** del Código 1. 2. 1. 4. 02 literal e del referido Artículo 2 de dicho Acuerdo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD BIENES Y RAÍCES DANNA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2 DEL 21 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, actuando en nombre y representación de la sociedad BIENES RAÍCES DANNA, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Ejecutiva N° 2, del 21 de julio de 1994, dictada por el Presidente de la República, por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro.

I. EL ACTO ACUSADO

Mediante la Resolución acusada, el Presidente de la República, por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro autorizó "al señor Procurador General de la Nación en su carácter de Jefe del Ministerio Público, para que en nombre y representación de La Nación, promueva la acción o acciones judiciales necesarias ante la Corte Suprema de Justicia, para que se deje sin efecto los actos de la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que se dictaron en violación del ordinal 1° del artículo 255 de la Constitución Nacional y las leyes que lo desarrollaron". Entre dichos actos se encuentra el "Resuelto N° 191 de 18 de noviembre de 1993, por el cual se adjudica definitivamente la solicitud de precios N° 09-93 de 1 de noviembre de 1993, a la sociedad BIENES Y RAÍCES DANNA, S. A., que se refiere a un lote de terreno baldío nacional de 213.72 M2. ubicado en Punta Paitilla".

II. LAS NORMAS INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La demandante considera que la resolución impugnada viola los artículos 347 (ordinal 3°) y 348 (ordinal 1°) del Código Judicial, así como el artículo 14 de la Ley N° 33 de 1943, los cuales expresan, en el mismo orden, lo siguiente:

> "Artículo 347. Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación:
> ...

> 3. Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante la Corte Suprema de Justicia. ..."
>
> "Artículo 348. Son atribuciones especiales del Procurador de la Administración:
>
> 1. Intervenir, en interés de la Ley, en los procesos contencioso administrativos de nulidad, de protección de los derechos humanos, de interpretación y de apreciación de validez que se surtan ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; ..."
>
> "Artículo 14. Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción popular, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en cualquier caso en que la Administración haya incurrido en injuria contra derecho.
>
> El Órgano Ejecutivo podrá promover, por conducto del Fiscal del Tribunal, cualquier causa contencioso-administrativa en defensa de los derechos e intereses de la Nación. Por el mismo conducto y con la autorización del Concejo respectivo, el Municipio podrá promoverlas también en defensa de sus derechos e intereses propios.
>
> El Órgano Ejecutivo, por conducto del Fiscal del Tribunal, podrá solicitar la nulidad de los acuerdos y de cualquier acto o disposición de los Concejos que estime contrarios al orden jurídico legal." (Los dos últimos párrafos fueron declarados inconstitucionales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de agosto de 1953)

En el concepto de la infracción de la primera norma, la apoderada de la actora se limitó a señalar, en lo medular, que la misma fue violada en forma directa, por comisión, ya que sólo faculta al Órgano Ejecutivo para autorizar al Procurador General de la Nación para que promueva y sostenga los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, dándole las instrucciones al respecto, conforme las reglas de atribuciones especiales del Procurador General de la Nación, y de competencia de los Tribunales".

La demandante estima que el numeral 1° del artículo 348 del Código Judicial se violado en el mismo concepto, "al autorizar al Procurador General de la Nación para interponer acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia **para que se deje sin efectos los actos de la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro**", que, por ser actos administrativos solo (sic) pueden ser invalidados por la vía de lo contencioso administrativo con recurso de nulidad; y en estos (sic), precisamente, la intervención la tiene, únicamente, el Procurador de la Administración; a nombre del Estado".

Finalmente, al sustentar la supuesta infracción del artículo 14 de la Ley N° 33 de 1946, la parte actora se refiere específicamente a la violación del segundo párrafo de esta norma, el cual fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 20 de agosto de 1953. La misma considera que el acto acusado violó la citada norma en forma directa, por comisión, ya que la misma faculta al Órgano Ejecutivo para que, por conducto del Fiscal del extinto Tribunal de lo Contencioso-administrativo, promueva cualquier causa contencioso-administrativa en defensa de los derechos e intereses de la Nación. Agrega, que ese cargo de Fiscal del referido Tribunal desapareció y las funciones que ejercía al mismo corresponden ahora al Procurador de la Administración.

En la etapa de alegatos, la apoderada de la demandante indicó que en virtud de la autorización dada por el Órgano Ejecutivo en el acto demandado y al existir una violación al ordinal 1° del artículo 155 de la Constitución Política, la

acción a ejercer no puede ser otra que la de inconstitucionalidad de los actos especificados en la parte resolutiva de la Resolución Ejecutiva N° 2 del 21 de julio de 1994. Agrega, que dicha resolución fue expedida para enervar un acto administrativo que, por lo dispuesto en el artículo 1148 del Código Fiscal, no puede impugnarlo el propio Ministro de Hacienda y Tesoro (fs. 76-83).

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante Vista N° 448 del 25 de octubre de 1995, indicando que los cargos de ilegalidad contra el acto acusado deben desestimarse porque el Órgano Ejecutivo actuó de conformidad con las disposiciones legales vigentes, entre ellas, el artículo 370 del Código Judicial que prohíbe a los dos Procuradores y a los Fiscales de Distrito promover acciones civiles o contencioso-administrativas en que sea parte la Nación, sin orden e instrucciones del Órgano Ejecutivo (fs. 66-10). Cabe señalar, que el funcionario demandado rindió su informe de conducta mediante Nota N° 101-01-640-DMHYT, del 28 de septiembre de 1995 (fs. 64-65).

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La primera norma que se cita como violada es el numeral 3° del artículo 347 del Código Judicial. Tal como indicó la Sala anteriormente, el apoderado de la demandante no explica de manera clara y precisa la forma en que se produjo la infracción de la mencionada norma y omite comentar la parte inicial del citado ordinal, al que estima violado.

En todo caso, la Sala considera que no se ha producido violación alguna del mencionado precepto, ya que el mismo faculta al Procurador General de la Nación para que promueva y sostenga los procesos que sean necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, para lo cual este funcionario debe seguir las instrucciones que reciba del Órgano Ejecutivo.

El citado numeral 3° del artículo 347 es una de las tantas normas que desarrolla los numerales 1° y 6° del artículo 217 de la Constitución Política, que establecen como atribuciones de los Agentes del Ministerio Público la defensa de los intereses del Estado o del Municipio y las demás funciones que le señale la Ley. Esta atribución constitucional de los Agentes del Ministerio Público, no es nueva, pues, ya estaba consagrada en el artículo 111 de la texto constitucional de 1904, según el cual, correspondía "a los funcionarios del Ministerio Público **"defender los intereses de la Nación"**. Esta misma función se incorporó en el artículo 141 de la Constitución de 1941, adicionándosele la defensa de los intereses "de la Provincia o del Distrito". El numeral 1° del artículo 178 de la Constitución Política de 1946 también consagró como atribución de los funcionarios del Ministerio Público, la defensa de "los intereses de la Nación o del Distrito, según los casos". Estos antecedentes nos permiten entonces afirmar que, tradicionalmente, las constituciones republicanas panameñas han atribuido al **Ministerio Público** la importante función de defender los bienes e intereses del Estado.

La Ley N° 135 de 1943 creó el cargo de Fiscal del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, al cual se le atribuyó la "representación de los intereses nacionales, provinciales y municipales", pero sólo con relación a "todos los negocios Contencioso-administrativos que se sigan" en dicho Tribunal (Cfr. arts. 103 y 105). Posteriormente, el inciso 2° del artículo 14 de la Ley N° 33 de 1946, por la cual se modificaron y derogaron algunas disposiciones de la Ley N° 135 de 1943, dispuso respecto de este funcionario, lo siguiente:

> "Artículo 14. El Órgano Ejecutivo podrá promover, por conducto del Fiscal del Tribunal, cualquier causa Contencioso-administrativa en defensa de los derechos e intereses de la Nación. Por el mismo conducto y con la autorización del Concejo respectivo, el Municipio podrá promoverlas también en defensa de sus derechos e intereses propios.
>
> El Órgano Ejecutivo por conducto del Fiscal del tribunal, podrá

solicitar la nulidad de los acuerdos y de cualquier acto o disposición de los Consejos que estime contrarios al orden jurídico legal."

Los dos párrafos transcritos del artículo 14 de la Ley N° 33 de 1946 otorgaron al Fiscal de lo Contencioso-administrativo una función que, constitucionalmente, correspondía al Ministerio Público, del cual no formaba parte dicho Fiscal, por lo cual el Pleno de la Corte Suprema de Justicia los declaró inexequibles mediante Sentencia del 20 de agosto de 1953 (Cfr. Jurisprudencia Constitucional. Tomo I. Sección de Investigación Jurídica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá. Panamá. 1967. págs. 202-203).

Con las reformas constitucionales de 1956 se creó la figura del Procurador Auxiliar, más tarde Procurador de la Administración, quien hasta hoy día forma parte del Ministerio Público.

Con vista de estos antecedentes la Sala reitera, que el numeral 3° del artículo 347 del Código Judicial no pudo ser violado por el acto acusado, ya que con su expedición el Órgano Ejecutivo cumplió con el contenido de esta norma, pues, con fundamento en ella, autorizó al señor Procurador General de la Nación para que en nombre de la Nación promoviera la acción o acciones necesarias ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto varios Resueltos de la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, dictados en violación "del artículo 255 de la Constitución Nacional y las leyes que lo desarrollan".

La Sala considera que el tenor literal de la norma que el actor considera violada es en extremo claro y, de conformidad con el artículo 9 del Código Civil, debe atenderse el mismo y desestimarse el primero de los cargos.

Con respecto al numeral 1° del artículo 348 del Código Judicial, conviene recordar que el apoderado de la actora considera que la autorización dada en la resolución demandada viola esta norma porque aquella se refiere a actos administrativos que sólo pueden ser invalidados por medio del recurso contencioso administrativo de nulidad, en el que la intervención la tiene únicamente el Procurador de la Administración a nombre del Estado. Sin entrar a considerar qué tipo de acción contencioso administrativa puede utilizar el Procurador General de la Nación para pedir la nulidad de los resueltos a que se refiere la Resolución N° 2 del 21 de julio de 1994, la Sala estima que no se ha producido la infracción que se alega. En primer lugar, porque ya se ha dicho que la autorización dada por el Órgano Ejecutivo al Procurador General de la Nación se fundamenta, entre otros preceptos, en el numeral 3° del artículo 347 del Código Judicial.

En segundo lugar, la resolución impugnada y el numeral 1° del artículo 348 regulan situaciones totalmente distintas. La primera se refiere a una autorización dada al Procurador General de la Nación para que demande ciertos actos violatorios de la Constitución y de las leyes; la segunda, a la atribución del Procurador de la Administración de actuar **"en interés de la ley"** en los procesos de nulidad, protección de derechos humanos, interpretación y apreciación de validez que se surtan ante esta Sala. Si bien, al Procurador de la Administración también corresponde la defensa de los bienes e intereses del Estado y de los Municipios, de conformidad con los numerales 1° y 6° del artículo 217 de la Constitución Política y el artículo 270 del Código Judicial, es evidente que éste no puede ejercer dicha defensa en el caso de los numerales 1° y 2° del artículo 348 antes mencionado, ya que en ellos la Constitución y la Ley le señalan la forma específica como debe actuar, es decir, **"en interés de la Ley"** y en representación de **"los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de la Administración Pública"**, respectivamente. Por estos motivos, debe desestimarse el segundo cargo.

La parte actora cita como violado el artículo 14 de la Ley N° 33 de 1946. Sobre este particular, la Sala coincide con la Procuradora de la Administración, quien afirma que la alegada infracción carece de asidero jurídico, porque los dos

últimos párrafos de la mencionada norma que se considera violada fueron declarados inconstitucionales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 20 de agosto de 1953.

Finalmente, la Sala debe hacer dos observaciones a los argumentos expuestos por la apoderada de la demandante en el escrito de alegatos, con respecto al tipo de acción que puede promover el Procurador General de la Nación por razón de la autorización a él dada y a la prohibición que hace el artículo 1184 del Código Fiscal a los funcionarios públicos de impugnar los actos administrativos fiscales.

Sobre el primer punto debe aclararse que, por ser los resueltos aludidos actos violatorios de la Constitución (ordinal 1° del art. 155) y las leyes que lo desarrollaron, como dice textualmente el acto acusado, el Procurador General de la Nación puede actuar ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción de inconstitucionalidad; o ante la Sala Tercera mediante la acción contencioso-administrativa pertinente.

En cuanto a lo afirmado por la demandante en el sentido de que el Ministro de Hacienda y Tesoro no puede, por razón de lo dispuesto en el artículo 1184 del Código Fiscal, impugnar los resueltos a que se refiere la Resolución Ejecutiva N° 2, del 21 de julio de 1994, la Sala considera que no le asiste la razón, ya que esa norma establece una regla general que no sólo admite las excepciones allí contempladas, sino cualquier otra consagrada en el ordenamiento legal, entre ellas, la del numeral 3° del artículo 347 del Código Judicial.

Por las consideraciones anteriores, la Sala estima que no se ha dado ninguna de las infracciones legales que se formulan y así debe declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución Ejecutiva N° 2 del 21 de julio de 1994 dictada por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA NANCY PERALTA NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE SEBASTIÁN CASTRO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES LOS ARTÍCULOS 1° Y 2° DEL DECRETO N° 552 DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Señora Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher, manifestó que se encuentra impedida para conocer de la **DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN**, interpuesta por la licenciada Nancy Peralta Núñez, en representación de **SEBASTIÁN CASTRO**, a fin de que se declaren nulos por ilegales los artículos 1° y 2° del decreto N° 552 de 31 de octubre de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.

En su escrito de 8 de marzo de 1996 la licenciada Alma Montenegro de Fletcher expresa:

"Sustentamos nuestro impedimento en lo siguiente:

1. Su excelencia, Raúl Montenegro D., Ministro de Gobierno y Justicia, mediante Nota N° 397 D.L. de 27 de marzo de 1995, solicitó nuestra opinión jurídica, respecto a la situación de los Notarios Públicos, referente a si estaban amparados por el Régimen de Carrera Administrativa, y si eran inamovibles en sus cargos durante el período designado.

2. Nuestro criterio sobre la estabilidad de los Notarios Públicos Panameños, fue emitido mediante consulta identificada N° 58 de 7 de abril de 1995.

Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que también declaren legal el impedimento manifestado en esta oportunidad, y nos separe del conocimiento del presente negocio, disponiendo llamar a nuestro Suplente, para que nos reemplace en el mismo".

La Sala estima, que el impedimento manifestado por la Señora Procuradora de la Administración es legal, ya que la causal invocada está contemplada en el numeral 1 del artículo N° 78 de la Ley 135 de 1943, que expresa lo siguiente:

"Artículo 78. Son causales de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo las siguientes:

1. Haber conceptuado sobre la validez o nulidad del acto que se acusa, o sobre el negocio sometido al conocimiento de la corporación, o haber favorecido a cualquiera de las partes en el mismo;"

Cabe señalar, que la causal de impedimento anteriormente citada es aplicable a los Agentes del Ministerio Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 388 del Código Judicial cuando señala que "serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, administrado Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Señora Procuradora, la separa del conocimiento del negocio y procede a llamar a su suplente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO EN EL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA, MELÉNDEZ CRUZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MORITZ SALOMÓN WIEDER, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MORITZ SALOMÓN WIEDER -VS- TEXACO, PANAMÁ, INC. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El honorable Magistrado Arturo Hoyos, por medio de escrito del 11 de marzo de 1995 solicitó que se le separe del conocimiento del recurso de Casación Laboral interpuesto por la firma Meléndez, Cruz y Asociados en representación de MORITZ SALOMÓN WEIDER contra la sentencia de 11 junio de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: MORITZ SALOMÓN WIEDER -vs- TEXACO, PANAMÁ, INC.

La razón por la cual el Honorable Magistrado Arturo Hoyos solicita se le separe del conocimiento del aludido recurso, la expuso en los siguientes términos:

> "... Como lo he manifestado en ocasiones anteriores laboré en la firma de Arias, Fábrega y Fábrega desde el mes de marzo de 1976 hasta el 2 de enero de 1990. Dicha firma representa a la parte demandada en el proceso arriba indicado.
>
> Durante mi permanencia en esa firma intervine como asesor de Texaco Panamá, Inc. y absolví consulta en relación a las prestaciones del señor MORITZ SALOMÓN WIEDER, por lo que creo me encuentro en la causal de impedimento previsto en el numeral 10 del artículo 647 del Código de Trabajo".

El numeral 10 del artículo 647 del Código de Trabajo establece como causal de impedimento la siguiente:

> "Artículo 647. Son causales de impedimento:
> ...
> 10. Haber intervenido el Juez o el Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, perito, depositario, auxiliar de la jurisdicción, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron margen a los mismos;"

Como el hecho planteado por el Honorable Magistrado Arturo Hoyos configura la causal invocada, el impedimento manifestado debe declararse legal.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Arturo Hoyos dispone separarlo del conocimiento del Recurso de Casación Laboral presentado por la firma Meléndez, Cruz y Asociados contra la sentencia de 26 de junio de 1995 y ordena que conozca del mismo el Honorable Magistrado Rafael González, de la Sala Civil, quien está de turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO EN LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. EDUARDO LOMBANA ACHURRA, EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, PARTE DEL ARTÍCULO 5 Y EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de

Fletcher, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Dr. Eduardo Lombana Espinosa, en representación de Félix Alberto Pérez Espinosa, para que se declaren nulos, por ilegales, parte del artículo 5 y el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 413 del 1° de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora General de la Administración manifiesta su impedimento en los siguientes términos:

> "Con respecto a este Decreto Ejecutivo, nuestro Despacho emitió dictamen jurídico antes de su emisión, en virtud de que su Excelencia, Raúl Montenegro D., Ministro de Gobierno y Justicia, solicitó nuestra opinión jurídica sobre la situación de los Notarios Públicos, específicamente, si estaban amparados por el régimen de Carrera Administrativa, y si gozaban de inamovibilidad en sus cargos por el período para el cual fueron designados.
>
> Es así, que en ejercicio de nuestra atribución como consejera jurídica de los servidores públicos encargados de la Administración, emitimos nuestro criterio jurídico mediante Consulta identificada N° 58 de 7 de abril de 1995, en la que absolvimos las interrogantes planteadas ...
>
> En consecuencia, por las razones expuestas, y que constituyen fundamento legal previsto en el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, solicitamos respetuosamente se acceda a la declaración de mi impedimento legal, y se nos separe del conocimiento del presente negocio, disponiendo llamar a nuestro Suplente, para que nos reemplace en el mismo."

La causal invocada por la Procuradora de la Administración consiste en: "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro los grados indicados, en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o no haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo."

Los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que, tal y como lo expone la Procuradora Montenegro de Fletcher, ella dio respuesta a las interrogantes vertidas por el señor Ministro de Gobierno y Justicia, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala estima que la actuación de la Procuradora Montenegro de Fletcher se ubica dentro de lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE ORLANDO A. BARSALLO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMA NACIONAL ESTEREO, S. A., DENTRO DEL

PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Orlando Barsallo y Asociados actuando en representación de la sociedad **SISTEMA NACIONAL ESTEREO, S. A.** ha interpuesto excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá por la suma de B/.3,771.05.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA:

El incidentista esgrime en el libelo de su pretensión, básicamente los hechos que se observan a continuación para mayor ilustración:

> **"Primero**: El 16 de mayo de 1995 nuestro representado se notificó de la Resolución o Auto (no se identifica) donde se le abre Proceso (sic) de Jurisdicción (sic) Coactiva (sic) y Libra (sic) Mandamiento (sic) de Pago (sic) en contra de Sistema Nacional Estereo, S. A. por la suma de B/.3,771.05.
>
> **Segundo**: Luego del estudio de los Estados (sic) de Cuentas (sic) presentado por el Juzgado Ejecutor de fecha 11-05-95, cuyo Número (sic) de Contribuyente (sic) 02-1977-675, recibo: 371771, los Tributos (sic) de fecha 31-01-90, con número de recibo N° 000016536, orden 1, renta 11253002, monto B/.-30.00, Recargo (sic) + Intereses (sic) B/.21.30 y 31-01-91 con número de recibo N° 000017616, orden 1, renta 11253002, monto B/.30.00, recargos + intereses B/.21.30, que consideramos que están **PRESCRITOS**, ya que según el artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, reformada por la Ley 52 de 12 de septiembre de 1994 que establece:
>
> **`Las obligaciones resultantes de los impuestos municipales PRESCRIBEN A LOS 5 AÑOS DE HABERSE CURSADO.**
>
> Como se observar (sic) desde el 31 de enero de 1990 y 1991 hasta el 31 de enero de 1995, han transcurrido mas (sic) de 5 años de haberse cursado el impuesto, sus recargo e intereses. ..."

A estos efectos, el excepcionante solicita que se declaren prescritos los impuestos que el Municipio de Panamá le intenta cobrar a través de la jurisdicción coactiva.

POSICIÓN DEL JUZGADO EJECUTOR DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ:

La entidad ejecutante se opone a la excepción promovida por la sociedad ejecutada y a su vez requiere a este Tribunal Colegiado para que declare que no ha prescrito y en consecuencia, es exigible, el pago de los impuestos causados "desde marzo de 1992 hasta febrero de 1995, orden 0002, renta 11259901 y rótulos 90,91, 93, 94 y 95 Orden 0001 renta 11253002". Igualmente solicita que se declare que no ha prescrito "dentro de la cuenta por lo cual el Municipio ha interpuesto Proceso (sic) por Cobro (sic) Coactivo (sic) por (sic) la suma de **DOSMIL (sic) SETECIENTOS CUARENTA BALBOAS, (B/.2,740.00), en concepto de impuestos y la suma de MIL TREINTA Y UN BALBOAS CON 05/100 (1,031.05), en concepto de recargos**." Y que por consiguiente, la suma de B/.3,771.05 debe ser cancelada.

Sin embargo y de manera curiosa, el ente ejecutante al contestar los planteamientos aducidos en el incidente de excepción de prescripción por la parte actora, acepta los hechos primero y segundo en los cuales se concentra la sustancia material del incidente, y niega el tercer hecho por estimar que "en los Procesos por Cobro Coactivo se pueden interponer las Excepciones que la Ley prevé".

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

El Ministerio Público al vertir su criterio con respecto a la contienda bajo estudio, señala que efectivamente procede admitir la prescripción requerida a tenor del artículo 96 de la Ley 106 de 1973, pero solamente en lo que respecta al período comprendido entre el 31 de enero de 1990 y el 28 de febrero del mismo año, ya que los impuestos municipales al cobrarse mensualmente deben contarse a partir del día 1° de marzo de 1990 y no "desde el año 1991, como lo pretende el demandante". Ante tales circunstancias, reitera la Procuraduría de la Administración que subsiste el cobro de los impuestos adeudados desde el 1° de marzo de 1990 hasta la actualidad.

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD:

Encontrándose el proceso en este estado, los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la controversia planteada.

Sobre el particular es importante destacar que en el estado de cuenta de 11 de mayo de 1995 en el cual se certifica la deuda pendiente del contribuyente, Sistema Estéreo Nacional, S. A. para con el Municipio de Panamá, solamente se incluyen como saldo moroso los períodos que vencen el 31 de enero de 1990, el 31 de enero de 1991 y posteriormente los impuestos causados mensualmente desde el 31 de marzo de 1992 al 30 de abril de 1995. Por lo tanto y en atención a lo expresado en el texto del artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, que establece el período de prescripción de 5 años de las obligaciones resultantes de los impuestos municipales, se colige claramente que, únicamente es dable acceder a la petición del actor en lo atinente a los tributos correspondientes al 31 de enero de 1990, ya que el siguiente saldo moroso prescribiría en caso de que ésta no se hubiese interrumpido, el 31 de enero de 1996. Sin embargo, la prescripción fue interrumpida efectivamente el 16 de mayo de 1995 con la notificación del deudor del Auto de 17 de marzo de 1995 que libró mandamiento de pago; por lo que en consecuencia, los impuestos causados a partir de 31 de enero de 1991 son exigibles.

En mérito de lo expuesto, los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción presentada por la firma forense Orlando Barsallo y Asociados actuando en representación de la sociedad SISTEMA NACIONAL ESTÉREO, S. A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá y en consecuencia se DECLARA prescrita el cobro del impuesto correspondiente al 31 de enero de 1990, número de recibo 000016536, orden 1, renta 11253002.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LCDO. JOAQUÍN ROGER PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE FAPSA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A JORGE POLANCO SÁNCHEZ, DORA ENEIDA POLANCO, FREDESVINDA SÁNCHEZ DE POLANCO, FABIO POLANCO, RICAUTER SAUL POLANCO, ADRIANO POLANCO E HIJOS, S. A. Y GUSTAVO POLANCO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Joaquín Roger Pérez actuando en representación de la sociedad

FAPSA, S. A. ha interpuesto incidente de levantamiento de secuestro dentro del proceso por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Jorge Polanco Sánchez, Dora Eneida Polanco, Fredesvinda Sánchez de Polanco, Fabio Polanco, Ricauter Saul Polanco, Adriano Polanco, e hijos S. A. y Gustavo Polanco.

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA:

La parte actora solicita en el libelo de su pretensión el levantamiento del secuestro de la finca N° 1061A, inscrita al Folio 104 del Tomo 115; Finca N° 718 inscrita al Folio 272 del Tomo 35 R. A.; Finca N° 11317, inscrita al Folio 130 del Tomo 1021; Finca 11329, inscrita al folio 166 del tomo 1021; Finca N° 11331 inscrita al folio 166 del tomo 1021; Finca N° 11421, inscrita al folio 450 del tomo 1021; Finca 11678 inscrita al folio 458 del tomo 1044; Finca 11680 inscrita al folio 10 del tomo 1044, todas de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, alegando ser la propietaria de los mencionados inmuebles tal como consta a foja 72 del expediente, mediante certificación expedida por el Registro Público con fecha anterior al Auto N° 85 de 19 de julio de 1994, emitido por el Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, David.

Añade además el actor que no ha mantenido ni actualmente mantiene obligaciones con la entidad ejecutante, ni es posible que se ejerza una medida cautelar contra una persona jurídica aduciéndose que alguno de sus socios individuales hayan adquirido obligaciones con el Banco de Desarrollo Agropecuario.

Como corolario de lo anteriormente expresado, expone el incidentista que aunque las fincas hayan sido propiedad de Adriano Polanco las mismas están inscritas legalmente en el Registro Público bajo la titularidad de **FAPSA, S. A.**, producto de una operación de compraventa realizada sobre dichos inmuebles al liberarlas el Banco de Desarrollo Agropecuario del secuestro decretado.

POSICIÓN DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

La entidad ejecutante en el presente proceso se limita a negar cada uno de los hechos vertidos por el petente en el incidente sometido a decisión de esta Corporación de justicia, solicitando al final de su escrito que no se acepte la pretensión del incidentista por tener plena validez jurídica los Autos N° 85 de 19 de julio de 1994 y el de 30 de noviembre de 1995.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración expone una historia suscinta del desarrollo de las relaciones que se verificaron entre los diferentes miembros de la sociedad Adriano Polanco e Hijos, S. A. y esta sociedad con el Banco de Desarrollo Agropecuario, indicando que se realizó una consolidación de la deuda existente o refundición de obligaciones, y una novación de los contratos de préstamos de la Familia Polanco con el B. D. A. a través de la operación 13-89 para cancelar la deuda de Adriano Polanco e Hijos, S. A. y Ricaurte Saul Polanco por la suma de B/.47,836.45; pero que sin embargo, ésta no se llevó a cabo al no desembolsarse el dinero producto de este crédito por las irregularidades que el mismo mantenía, quedando esta operación en suspenso para el B. D. A. **aunque se inscribieron los traspasos y liberaciones de las fincas originalmente gravadas.** Por consiguiente, concluye la Procuraduría de la Administración que los traspasos efectuados no son válidos ya que la novación no surtió efectos legales y en consecuencia, subsisten las garantías hipotecarias y anticréticas pactadas entre la familia Polanco y el Banco de Desarrollo Agropecuario; por lo que, las obligaciones son perfectamente exigibles para el ente ejecutor, quien tuvo la necesidad de resolver y dejar sin efecto la novación en mención y continuar con la ejecución, reiterando la acción de secuestro de las fincas descritas en párrafos superiores.

CONCLUSIONES DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO

Encontrándose el proceso en este estado, los magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la contienda planteada.

De las certificaciones expedidas por el Registro Públicose observa claramente que **desde el 6 de julio de 1989** consta inscrita la cancelación de la primera hipoteca y anticresis que pesaba sobre las fincas 11317; 11331; 1061; 11421; 718; 11678; 11680 y 11329. Dichas fincas fueron liberadas a través de la Escritura Pública N° 7410 de 22 de mayo de 1989 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, todo lo cual indica que los inmuebles en comento no se encuentran en la actualidad gravados con los derechos reales de hipoteca y anticresis.

Igualmente se percata este Tribunal Colegiado que la sociedad **FAPSA, S. A.** es propietaria de los inmuebles en comento desde las fechas que se ilustran a continuación:

Finca N° 1061: desde el 3 de agosto de 1993.
Finca N° 718: desde el 21 de junio de 1993.
Finca N° 11317: desde el 3 de agosto de 1993.
Finca N° 11329: desde el 21 de junio de 1993.
Finca N° 11331: desde el 21 de junio de 1993.
Finca N° 11421: desde el 21 de junio de 1993.
Finca N° 11678: desde el 21 de junio de 1993; y finalmente,
Finca N° 11680: desde el 21 de junio de 1993.

Ahora bien, el Auto expedido por el Banco de Desarrollo Agropecuario que ordenó la medida cautelar de secuestro sobre los inmuebles antes mencionados se verificó el 10 de agosto de 1992 mediante el Auto 33-92, tal como se aprecia a fojas 101 y 102 del tomo 3 del expediente de la ejecución coactiva adelantada por el Banco de Desarrollo Agropecuario. Dicho Auto de Secuestro fue reiterado a través de la resolución 85-94 de 19 de julio de 1994, como se confronta a foja 108 del tomo 1 del precitado negocio ejecutivo.

Es importante aludir a que la orden de secuestro de 10 de agosto de 1992 se efectuó una vez el Banco ejecutante decidió unilateralmente dejar sin efecto la novación de las obligaciones de Adriano Polanco e hijos, sociedad anónima y Ricaurte Polanco para con el B. D. A., pero no obstante, no reposa constancia en las certificaciones del Registro Público que indique la fecha del ingreso de la orden de inscripción de dicho secuestro en el diario del ente antes señalado, por lo cual no es dable aludir a este secuestro como parámetro para resolver la pretensión del actor, ya que dicha orden de inscripción en el diario del Registro Público representa la eficacia de la limitación de dominio de los bienes secuestrados.

En este punto debe recordarse que el texto del artículo 544 del Código Judicial permite que en caso de depósito de cosa ajena, "el interesado podrá reclamarla mediante incidente, siguiéndose en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos ...". (La Corte subraya).

A su vez el artículo 1788 numeral 2 de la precitada excerta legal indica que solamente "puede promoverse tercería excluyente fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo."

De los textos legales reproducidos en sus partes esenciales se infiere claramente que no es indispensable que se emita el auto de embargo para que se permita a los terceros propietarios de los bienes secuestrados entrar al proceso y tratar de enervar la medida cautelar perpetrada contra dichos inmuebles; ya que como se ha planteado en párrafos superiores, lo indispensable es que el título de dominio del incidentista sea anterior al auto de secuestro y además a la orden de inscripción del secuestro en comento en el diario de la oficina del Registro Público, para que se determine la viabilidad de la petición del actor.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que en ambas certificaciones expedidas por la entidad registradora consta pendiente de inscripción, en el asiento del diario N° 60304 del tomo 231, el Auto N° 85 de 19 de julio de 1994 que reitera el secuestro sobre los bienes en controversia, por

lo que evidentemente, la orden de inscripción de tal medida cautelar es posterior al título de dominio que presenta la sociedad incidentista.

Frente a lo expuesto se colige que efectivamente procede acceder a la petición de **FAPSA, S. A.** en atención a que los títulos de propiedad que se ostentan sobre los bienes que se pretenden excluir de la presente ejecución, anteceden la orden de inscripción de la medida cautelar de secuestro en el diario del Registro Público. Ello es así dado que los títulos de propiedad en comento a favor **FAPSA, S. A.** datan de 1993, y la orden de inscripción del secuestro es posterior al 19 de julio de 1994.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el LEVANTAMIENTO DEL SECUESTRO que pesa sobre las fincas N° 1061A, inscrita al Folio 104 del Tomo 115; Finca N° 718 inscrita al Folio 272 del Tomo 35 R.A.; Finca N° 11317, inscrita al Folio 130 del Tomo 1021; Finca 11329, inscrita al folio 166 del tomo 1021; Finca N° 11331 inscrita al folio 166 del tomo 1021; Finca N° 11421, inscrita al folio 450 del tomo 1021; Finca 11678 inscrita al folio 458 del tomo 1044; Finca 11680 inscrita al folio 10 del tomo 1044, todas de la Sección de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, propiedad de **FAPSA, S. A.**

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GERMÁN PINEDA PATIÑO, EN REPRESENTACIÓN DE FINANZAS DE BUSES INTERNATIONAL CORPORATION, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN Y BOLNEY RODRÍGUEZ NAVARRO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Germán Pineda Patiño, en representación de FINANZAS DE BUSES INTERNATIONAL CORPORATION, ha promovido tercería excluyente dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Banco Nacional de Panamá le sigue a BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN y BOLNEY RODRÍGUEZ NAVARRO, a fin de que se levante el embargo y se excluya de los bienes rematables el Bus marca International, Motor 1HVLPHXN7EHA59383, Transmisión Spaicer, Diferencial 739, Tren Delantero, 9 mil libras, Año 1984, el cual fue dado en garantía hipotecaria a favor de Finanzas de Buses International Corporation.

La tercerista fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Nuestra representada vendió el Autobús Marca Internacional, Motor N° 1HVLPHXN7EHA59383, al Señor BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN, en la suma de ONCE MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.11,500.00) más el impuesto de la Transferencia de Bienes Muebles y un interés anual del 18%.

SEGUNDO: Que el Señor BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN realizó un abono de SEIS MIL BALBOAS (B/.6,000.00) quedando un saldo pendiente de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS con noventa y seis centavos (B/.6,489.96).

TERCERO: Que para garantizar esta obligación el Señor BIENVENIDO

SAUCEDO DE LEÓN dio en garantía hipotecaria el vehículo tipo autobús, marca Internacional a favor de nuestra mandante.

CUARTO: Que en razón de esta garantía, nuestra representada posee el crédito privilegiado sobre dicho bien, el cual no sólo cubre la deuda existente, sino además todos los gastos y gestiones de cobro que tiene que realizar nuestra mandante.

QUINTO: Que en la actualidad existe un proceso ejecutivo hipotecario en el Juzgado Segundo de Circuito Civil donde se pretende lograr el reconocimiento del derecho que le asiste a nuestra representada sobre el vehículo que describimos en líneas anteriores." (Fs. 4-6).

Admitida la tercería, se corrió en traslado a los ejecutados, a la Señora Procuradora de la Administración y al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, por el término de Ley, y se ordenó suspender el remate.

Mediante su Vista Fiscal N° 192 de 10 de mayo de 1995, la señora Procuradora de la Administración contestó el traslado y se manifestó de acuerdo con la pretensión de la tercerista.

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver la presente controversia, previas las siguientes consideraciones.

Consta en el expediente del proceso ejecutivo seguido a Bienvenido Saucedo de León por el Banco Nacional de Panamá, el Auto N° 58 de 21 de enero de 1994, dictado por el Juzgado Ejecutor de esta institución, mediante el cual decreta embargo sobre cualesquiera vehículos o equipo rodante que aparezcan inscritos a nombre de los señores Bienvenido Saucedo De León y Bolney Rodríguez Navarro, hasta la concurrencia de B/.19,028.06 en concepto de capital e intereses, más los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación (fs. 19), la Nota N° 94 (14010-01) 2159 de 7 de diciembre de 1994 por medio de la cual el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá solicita a la Fuerza Pública de Panamá colabore con el señor Joaquín Rodríguez facultado para capturar y poner a disposición de ese Juzgado Ejecutor el autobús previamente embargado marca International, con motor IHVLPHXN7EHA59383 de propiedad de Bienvenido Saucedo De León, Diligencia de Inventario, Avalúo y Depósito de 22 de diciembre de 1994 del Bus marca International, año 1984, modelo S-1800, accionado por motor diesel Internacional de 8 cilindros en V N° IHVLPHXN7EHA59383 y la Resolución de 17 de enero de 1995, firmada por el Juez Ejecutor y el Secretario del Banco Nacional de Panamá, mediante el cual se fija el día diez de marzo de 1995, para que tenga lugar el remate del bien mueble (autobús), de propiedad de Bienvenido Saucedo De León, embargado en el proceso coactivo que se le sigue.

De acuerdo a lo previsto en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 1788 del Código Judicial, las tercerías excluyentes pueden introducirse desde que se decrete el embargo de los bienes hasta antes de adjudicarse el remate; su tramitación es la señalada para las excepciones en proceso ejecutivo, y en ella se reputarán demandados el ejecutante, el ejecutado y los demás terceristas que hubiere; sólo pueden promoverse fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido el embargo; y si se trata de bienes inmuebles, la anterioridad del título debe referirse al ingreso de la orden de inscripción del embargo o secuestro en el Diario de la Oficina del Registro Público.

En el presente caso, la tercerista ha fundamentado su pretensión en primer lugar en la Escritura Pública N° 4835 de 14 de septiembre de 1993, por la cual FINANZAS Y BUSES INTERNACIONAL CORPORATION, celebra un contrato de compra y venta con garantía hipotecaria con el señor BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN; en segundo lugar en el Auto N° 935 de 8 de marzo de 1995, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se decreta embargo y depósito sobre el vehículo autobús, marca International, motor N° N7EHA59383, transmisión Spaicer, diferencial 739, año 1984, Modelo S1800, placa N° 8B-2207 de propiedad de BIENVENIDO SAUCEDO DE LEÓN.

El artículo 24 del Decreto Ley 2 de 1955 y los artículos 526 y 1705 del

Código Judicial establecen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 24. El contrato de hipoteca de bien mueble o de venta con retención de dominio se perfecciona mediante su otorgamiento, pero para que surta efectos en perjuicio de terceros será necesaria su inscripción en el Registro Público."
>
> "ARTÍCULO 526. Se entiende constituido el secuestro, tratándose de bienes inmuebles, muebles susceptibles de inscripción o **derechos reales sobre los mismos**, cuando la comunicación de esta medida sea anotada en el Diario respectivo del Registro Público y, en otros casos, cuando sea asentado en la oficina registradora correspondiente. Tratándose de otros bienes muebles, será la fecha de la diligencia de depósito. Si no hubiere diligencia, la fecha en la orden del Juez será recibida por la persona o empleado encargado de la custodia del bien o responsable de la tenencia o entrega del mismo.
>
> El depósito judicial consiste en la entrega real que el Juez hace al depositario de la cosa mueble que se ha ordenado depositar. No se estimará verificado el depósito si el presunto demandante no lo pidiere expresamente y el Juez lo creyere innecesario; bastará la inscripción en el Registro Público del auto de secuestro, inscripción que se verificará inmediatamente sea ingresada al Diario, salvo que no proceda por alguna razón legal.
>
> ARTÍCULO 1705. Embargada alguna cosa en una ejecución, no podrá serlo en otra, y, si lo fuere, se revocará el segundo embargo. Pero puede embargarse el sobrante que en una ejecución quede a favor del deudor. El embargo, y consiguiente depósito, cuando lo hubiere de una cosa se rescindirá si el Juez que lo decretó se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de dichos bienes dictado en el proceso hipotecario seguido en virtud de **una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha de embargo. Al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y Secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio ejecutivo, la fecha del auto de embargo, y que dicho embargo está vigente. Esta certificación deberá ser de fecha no anterior a seis meses. Sin ese requisito no producirá efecto la copia**. El juez que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el proceso hipotecario, de manera que éste pueda verificar si el depósito, en virtud del auto de embargo, está vigente.
>
> Esta solicitud se tramitará como incidente, siguiéndose en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos, pero la apelación se concederá en el efecto devolutivo.
>
> Si al darse al Registrador la orden de que trata el artículo 1676 informare que el inmueble denunciado como de propiedad del ejecutado está inscrito a nombre de otro o que haya sido embargado o secuestrado por otro tribunal, se revocará el embargo decretado."

La Sala observa que la Escritura Pública N° 4835 de 14 de septiembre de 1993, por la cual Finanzas de Buses International Corporation, celebra un contrato de compra y venta con **garantía hipotecaria** con el señor Bienvenido Saucedo De León, no es oponible a terceros porque no consta que la misma fuera inscrita en el Registro Público tal como lo exige el precitado artículo 24 del Decreto Ley 2 de 1955.

En adición a lo anterior, la copia auténtica de la Resolución de 8 de marzo de 1995, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, no reúne los requisitos del artículo 31705 del Código Judicial, ya que según este la misma debe contener una certificación

autorizada por el Juez y Secretario, con la **expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el juicio ejecutivo, la fecha del auto de embargo, y que dicho embargo está vigente, certificación que no debe ser anterior a seis meses y sin lo cual no producirá efecto la copia.**

El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá embargó e hizo la diligencia de depósito del bien mueble antes de que el Juez Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá lo embargara, por lo que la única forma en la que se podía rescindir el primer embargo era presentando la copia auténtica del auto de embargo del bien mueble dictado en proceso hipotecario instaurado con motivo de una hipoteca **inscrita antes** de la fecha del embargo decretado en el proceso ejecutivo por cobro coactivo.

En virtud de que no se cumplió con los requisitos exigidos por las normas precitadas, no procede declarar probada la presente tercería.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la tercería excluyente promovida por FINANZAS DE BUSES INTERNATIONAL CORPORATION, dentro del Juicio Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz a Bienvenido Saucedo De León y Bolney Rodríguez Navarro.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO LOAIZA EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA CARIOCA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A INMOBILIARIA CARIOCA, S. A., Y BORIS JAVIER AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Antonio Loaiza, actuando en representación de Inmobiliaria Carioca, S. A., ha presentado excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que el Banco Nacional de Panamá le sigue a la Inmobiliaria Carioca, S. A., y a Boris Javier Aguilar.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual el Banco Nacional de Panamá persigue cobrar una deuda de cincuenta y cuatro mil cincuenta balboas con veinticinco centésimos (B/.54,050.25), en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza más los intereses que causen hasta el completo pago de la obligación, razón por la cual se libró mandamiento de pago mediante auto de 21 de enero de 1976.

El apoderado judicial del excepcionante fundamentó su recurso en los siguientes términos:

> **"PRIMERO:** Mediante pagaré fechado 7 de agosto de 1972, el Banco Nacional de Panamá celebró contrato de préstamo por un monto de **Cincuenta y cuatro Mil Balboas (B/.54,000.00)** con Inmobiliaria Carioca, S. A., cuyo Presidente y Representante Legal es el señor BORIS JAVIER AGUILAR RANDINO, siendo a su vez, a título personal, el señor BORIS JAVIER AGUILAR RANDINO codeudor de la mencionada obligación.

SEGUNDO: Mediante acción propuesta por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá el 18 de junio de 1976, a través de los trámites de la jurisdicción coactiva, se decretó secuestro sobre la Finca 50769 inscrita al Tomo 1195, Folio 240 de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Panamá. Dicho secuestro se encontraba inscrito en el Registro Público y se elevó a categoría de Embargo desde el 17 de agosto de 1976, estableciéndose un monto de Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Balboas (B/.74,800.00).

TERCERO: La Finca mencionada en el hecho segundo fue **adjudicada** al Banco Nacional de Panamá mediante Acta de Remate de 22 de septiembre de 1976 por la suma de Cincuenta y un Mil doscientos noventa y cuatro balboas (B/.51,294.00), cancelándose el Secuestro y Embargo arriba señalado desde el 5 de octubre de 1977.

CUARTO: Para el 5 de octubre de 1976, adjudicada la Finca 50769, antes descrita al Banco Nacional de Panamá, el saldo adeudado era de Veinticinco Mil seiscientos cuarenta y siete Balboas (B/.25,647.00).

QUINTO: Nuevamente en 1979, el Juzgado Ejecutor libró mandamiento de pago Ejecutivo contra Inmobiliaria Carioca, S. A., y el señor Boris Javier Aguilar Randino.

SEXTO: Después de dictada la Resolución mencionada en el hecho anterior, no hubo actividad procesal alguna dentro del proceso, hasta que el día 17 de agosto de 1995, el Juzgado Ejecutor decretó secuestro en contra de los ejecutados sobre cuentas bancarias y automóviles registrados a su nombre, hasta la concurrencia de Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta Balboas con veinticinco centésimos (B/.54,050.25) de capital, intereses y gastos de cobranza.

SÉPTIMO: Confrontando el Mandamiento de Pago Ejecutivo expedido con fecha 18 de junio de 1976, o el expedido en 1979, con la posterior resolución expedida dentro del proceso, o sea, la calendada el 17 de agosto de 1995, tenemos que han transcurrido más de **dieciséis (16) años de inactividad procesal**, tiempo éste que rebasa, **en exceso**, el término para la prescripción de la acción.

OCTAVO: Es conocido que, en materia comercial, la prescripción ocurre a los cinco (5) años, principio jurídico que ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos (Visto de 21 de Marzo de 1993 confirmado mediante Visto de 23 de septiembre de 1993 por la Sala De lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en la Excepción de Prescripción propuesta en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo, Banco Nacional de Panamá -vs- Jorge Alberto Constante Ortega, Compañía Limitada y Otros) y si observamos la fecha que lleva el documento de crédito correspondiente, tenemos que hace veintitrés (23) años expidió el mimos; así como, también han pasado diecinueve (19) años desde que fuera dictada la primera resolución dentro del juicio que nos ocupa. ...

DÉCIMO: Siendo evidente, entonces, de que ha ocurrido la prescripción dentro del proceso anunciado al margen superior derecho de este escrito, Solicitamos nuevamente con todo respeto, que así se declare, a fin de que, previo el levantamiento del embargo que consta en el expediente, se ordene el cese definitivo de la ejecución."

Considera la Sala que la presente excepción es, a todas luces, extemporánea. Ello es así por cuanto el artículo 1706 del Código Judicial exige un término de 8 días contados a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo para la interposición de las excepciones que el ejecutado crea que le favorezca.

En el caso que nos ocupa se notificó del auto ejecutivo, al licenciado Hernán García Aparicio (quien funge, según designación como Defensor de Ausente de la sociedad anónima Inmobiliaria Carioca, S. A.), el 21 de junio de 1976, de lo cual se colige que a partir de la notificación de dicho auto el recurrente tenía ocho días para interponer las excepciones que considerase necesarias. La excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Loaiza fue presentada ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional el 5 de diciembre de 1995, excediendo con creces, el término de 8 días que señala el citado artículo.

Por las razones expuestas, La Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA extemporánea, la excepción de prescripción presentada por el licenciado Antonio Loaiza, actuando en representación de Inmobiliaria Carioca, S. A., dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que el Banco Nacional de Panamá le sigue a la Inmobiliaria Carioca, S. A., y a Boris Javier Aguilar.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LOLA BLAISDELL NÚÑEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FINANCIERA EL FARO, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ A INVERSIONES EL FARO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Ana Lola Blaisdell Núñez actuando en representación de la sociedad **Financiera El Faro, S. A.** ha promovido ante esta Superioridad, incidente de tercería excluyente de los bienes secuestrados, inventariados y evaluados, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá, a la sociedad **INVERSIONES EL FARO, S. A.**

La tercería antes descrita se encuentra pendiente de admisión en el despacho del magistrado sustanciador.

A este respecto se observa de la lectura del negocio de la tercería excluyente en mención, y del expediente de la ejecución coactiva adelantada por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, que el peticionista incumple con el requisito formal estatuido artículo 1788 numeral 2 del Código Judicial, que claramente expresa que solamente "puede promoverse tercería excluyente fundándose en un título de dominio o derecho real cuya fecha sea anterior al auto ejecutivo o al auto de secuestro que haya precedido al embargo."

Se afirma lo anterior puesto que el peticionista no ha suministrado el título de dominio de los bienes que se pretenden excluir de la presente ejecución, que legitimaría la actuación del incidentista en este negocio con respecto a la causa de pedir.

Por otro lado se infiere del escrito del petente, que el supuesto traspaso de los bienes que se pretenden excluir se efectuó con posterioridad al auto de secuestro proferido por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, el cual fue emitido inicialmente el 20 de abril de 1995; y, el traspaso de los aludidos bienes, de acuerdo a lo que expresa el actor, se llevó a cabo el 30 de diciembre del mismo año. Por consiguiente, de existir el título alegado por el incidentista, éste carecería de viabilidad, puesto que incumpliría con la exigencia o requisito de existencia previa al auto de secuestro emitido, como lo

contempla en precitada excerta legal.

Por los motivos expuestos no procede darle curso y en consecuencia admitir la tercería excluyente en comento, a tenor del artículo 1788 numerales 4 y 6 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITEN la tercería excluyente interpuesta por la licenciada Ana Lola Blaisdell Núñez actuando en representación de la sociedad FINANCIERA EL FARO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA O FALTA DE IDONEIDAD DEL TÍTULO, INTERPUESTO POR EL LCDO. TARGIDIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN DARÍO BERNALOYES, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ÁREA CENTRAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Se encuentra pendiente de admisión la excepción de inexistencia o falta de idoneidad del título interpuesta por el licenciado Targidio Bernal, en representación de **RUBÉN DARÍO BERNAL BALOYES**, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Área Central.

Sobre el particular se percata esta Superioridad que el proceso antes descrito es de naturaleza ejecutiva prendaria, siendo la garantía de la deuda adquirida una cuenta o depósito tipo "o", a plazo fijo, a nombre de la deudora principal y de los señores Rubén Darío Bernal Baloyes y Rubén Darío Bernal de Gracia.

Por otro lado debe advertirse que el excepcionante, titular del depósito a plazo fijo garante de la obligación en contienda, contaba solamente con 5 días a partir de su notificación del auto que libra mandamiento de pago para interponer las excepciones que estimare procedentes a tenor de los artículos 1777 y 1778 del Código Judicial, tal como se aprecia a continuación para mayor ilustración:

> "Artículo 1777. Notificado el auto ejecutivo, el deudor puede oponer las excepciones o promover los incidentes que a bien tenga, para lo cual, así como en materia de apelaciones, se estará a lo dispuesto en las Secciones 7ª, 8ª y 9ª del capítulo I de este Título."
>
> "Artículo 1778. Transcurridos cinco (5) días sin que el deudor haya pagado u opuesto excepciones, o falladas éstas contra el ejecutado, el Juez procederá de conformidad con los artículos siguientes."

En consecuencia, no es dable admitir el presente incidente debido a que ha transcurrido en exceso el término establecido en la ley (cinco días) para ejercitar el derecho a proponer excepciones, dado que la notificación del auto ejecutivo que libró mandamiento de pago se efectuó el 6 de diciembre de 1995 (foja 4 del expediente coactivo) y las excepciones propuestas se promovieron el 8 de febrero de 1996 (foja N° 3). Por consiguiente el término para presentar debidamente las aludidas excepciones precluyó, el 14 de diciembre de 1995.

En mérito de lo expuesto, los magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITEN por extemporánea la excepción de inexistencia o falta de idoneidad del título propuesta por el licenciado Targidio Bernal, en representación de RUBÉN DARÍO BERNAL BALOYES.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROGELIO FERNÁNDEZ LARA, EN REPRESENTACIÓN DE MAURICIO HARROUCHE DONOSO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Rogelio Fernández Lara, ha presentado excepción de prescripción en representación de MAURICIO HARROUCHE DONOSO, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz a Importadora Maggi, S. A., y a dicho señor.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo, en el cual el Banco Nacional de Panamá, persigue cobrar una deuda de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON SETENTA Y TRES CENTÉSIMOS (B/.5,847.73), en concepto de capital, intereses, más las costas que se devenguen, hasta el momento en que se realice el pago completo de la obligación, razón por la cual se decretó secuestro "sobre todos los Bienes que la sociedad demandada tenga en su Almacén Cindy s y en su local ubicado en Ave. B, N° 26. Además, todos los depósitos que ambos demandados tengas (sic) a sus nombres en los Bancos de la localidad, hasta la concurrencia de la suma," que se adeuda.

El licenciado Fernández Lara fundamenta la excepción en los siguiente hechos:

> "**PRIMERO**: Con fecha del Veinticinco (25) de Octubre de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979) el Banco Nacional de Panamá-Casa Matriz, suscribió en calidad de acreedor un Contrato de Préstamo a Corto Plazo con Garantía Personal por la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) con plazo de 18 meses con MAURICIO HARROUCHE DONOSO, Presidente y Representante Legal de IMPORTADORA MAGGI, S. A. (ALMACÉN CINDY S) como deudora, constituyéndose (sic) el mismo Señor MAURICIO HARROUCHE, como fiador solidario.
>
> **SEGUNDO**: Al no cumplirse la obligación, el 30 de Enero de Mil Novecientos ochenta y uno (1981), el Banco Nacional de Panamá-Casa Matriz interpuso Juicio Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva en contra de IMPORTADORA MAGGI, S. A. representada por MAURICIO HARROUCHE DONOSO.
>
> **TERCERO**: En dicho juicio que data del año de 1981, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá-Casa Matriz, decretó secuestro sobre todos los bienes que IMPORTADORA MAGGI, S. A. tenía en el ALMACÉN CINDY'S y sobre todos los depósitos que la sociedad y mi poderdante tenían en los bancos de la localidad hasta la concurrencia de la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON SETENTA

Y TRES CENTÉSIMOS (B/.5,847.73).

CUARTO: Que dicha demanda no fue notificada a la parte demandada y no se publicó en un periódico de la localidad o en la Gaceta Oficial un certificado del Secretario del Juzgado Ejecutor en la cual se hacia constar dicha presentación. (Observamos que en el expediente no hay constancia alguna de la expedición y publicación del certificado en cuestión).

QUINTO: Con fecha calendada el 17 de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), es decir casi quince (15) años después de haber interpuesto el Juicio Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva en 1981, el Banco Nacional de Panamá-Casa Matriz, decretó embargo sobre la Cuenta de Ahorros con saldo de B/4,024.41 del Señor MAURICIO HARROUCHE DONOSO en el Chase Manhattan Bank, N. A. de Panamá. El 18 de Agosto el Banco Nacional libró mandamiento de pago en contra de mi poderdante por la vía ejecutiva por la suma de B/.4,512.62.

SEXTO: La prescripción a favor de mi poderdante realmente no se interrumpió en Agosto de 1981 por no cumplirse con las condiciones señaladas en el hecho cuarto. De todas formas si así fuera, de todas maneras han transcurrido mucho más de cinco (5) años de los señalados en el Código de Comercio para la prescripción ordinaria en materia comercial. Por lo que la acción del Banco Nacional está prescrita hace mucho tiempo."

Por su parte, el licenciado Carlos O. Bieberach, apoderado judicial del Banco Nacional de Panamá, mediante escrito presentado ante la Sala Tercera el 13 de marzo de 1996, contestó los hechos en que se fundamenta la excepción de prescripción que nos ocupa de la siguiente manera:

"PRIMERO: Es cierto, por tanto, lo acepto.

SEGUNDO: Es cierto, por tanto, lo acepto.

TERCERO: Es cierto, por tanto, lo acepto.

CUARTO: Es cierto, por tanto, lo acepto.

El Banco mantuvo comunicación con el señor Harrouche y el Juzgado Ejecutor envió notas de secuestro a todos los Bancos del Sistema y Tesorerías de Panamá y San Miguelito.

QUINTO: Es cierto, por tanto, lo acepto.

En efecto, el Banco sigue haciendo gestiones de cobro, ya que el Deudor ni el Codeudor han honrado su obligación de pagar el préstamo que se les concedió.

SEXTO: No es cierto, por tanto, lo niego. No es un hecho, sino una interpretación subjetiva que hace el Abogado del señor Harrouche."

El Procurador de la Administración (Suplente), contestó la excepción de prescripción, mediante Vista N° 56 de 29 de enero de 1996, en donde solicita que se "declare probada la excepción de prescripción interpuesta por el Licenciado Rogelio Fernández Lara, en representación de Mauricio Harrouche Donoso, dentro del Proceso Ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá."

Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala Tercera que los actos de comercio ejecutados por dependencias del Estado están sujetos a las disposiciones de la ley mercantil, como lo dispone el artículo 32 del Código de Comercio, por lo que el término de prescripción ordinaria aplicable a este caso es de 5 años a tenor el artículo 1650 del Código de Comercio.

Esta opinión de la Sala Tercera se ha confirmado respecto a aquellos casos en que el Banco Nacional de Panamá ha hecho valer el cobro de sus créditos, a través del proceso de jurisdicción coactiva y dentro de dichos procesos, se ha reconocido la prescripción mercantil de 5 años porque, en opinión de la Sala Tercera, los préstamos que otorga el Banco Nacional tienen naturaleza mercantiles.

En el presente caso, se aprecia claramente que si bien es cierto que, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, emitió la Resolución de 30 de enero de 1981, en la que se decreta el secuestro de los bienes que la sociedad Importadora Maggi, S. A., tiene en su Almacén Cindy s, así como también, todos los depósitos que tanto ésta, como el señor Mauricio Harrouche Donoso, mantenga en algún banco de la localidad, no es menos cierto que no existe constancia en el expediente que demuestre que la mencionada resolución, fue notificada debidamente, así como tampoco se aporta prueba en la que se establezca que se hizo efectiva la medida cautelar decretada.

Por otro lado, no existe ninguna prueba en el expediente, que evidencie de manera inequívoca que el Banco Nacional de Panamá-Casa Matriz, realizó gestión alguna que pudiera interrumpir la prescripción, tal como lo señala el artículo 1649-A del Código de Comercio.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Rogelio Fernández Lara dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JUAN BOSCO MARTINO, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO MANUEL RANDINO DATRIS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ A INDUSTRIAS METAL, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Juan Bosco Martino, en representación de Hugo Manuel Randino Datris, ha promovido excepción de prescripción dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, le sigue a Industrias Metal, S. A. y otros.

Según el apoderado judicial de la parte actora, el 7 de abril de 1971 y 6 de octubre de 1971, el Banco Nacional de Panamá celebró contratos de préstamo de línea de crédito para sobregiro con Industrias Metal, S. A. por la suma de B/.60,899.68, en el cual Hugo Manuel Randino Datris figura como codeudor-fiador y que como consecuencia del incumplimiento de las facilidades crediticias el 30 de marzo de 1973, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago ejecutivo, notificado a los demandados mediante edicto emplazatorio publicado los días 24, 25 y 26 de mayo de 1973 en el diario de circulación nacional "La Estrella de Panamá". Señala, que no consta que se haya verificado el reconocimiento, renovación, ni prórroga de la obligación y que desde que se publicaron los edictos hasta que se decretó embargo sobre la cuenta bancaria del señor Hugo Manuel Randino Datris el 15 de septiembre de 1995, han transcurrido más de quince (15) años, término principal y específico en que se extinguen los créditos a favor del Estado.

Además indicó que desde el 22 de octubre de 1975, fecha en que se celebró el segundo remate a cuenta del crédito y se adjudicaron los bienes para el pago parcial del capital e intereses de la obligación, han pasado veinte (20) años sin que se haya realizado ninguna otra gestión, configurándose la prescripción al tenor del artículo 1703, numeral 2 del Código Fiscal. Finalmente el apoderado judicial del excepcionante señaló que la prescripción de la obligaciones mercantiles se produce a los cinco (5) años desde que la obligación se hizo exigible o de plazo vencido, igual término al exigido al fiador desde el momento en que se otorga la fianza por tiempo indefinido.

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional y a la señora Procuradora de la Administración, por el término de ley.

El representante judicial del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá solicitó a esta Sala que niegue la excepción de prescripción presentada, en virtud de que al notificarse el Auto Ejecutivo al abogado representante de los demandados y precluir el término de los 8 días para interponer excepciones, cualquier defensa posterior del ejecutado debe ser propuesta mediante juicio ordinario de acuerdo con el artículo 563 del Código Judicial anterior, o mediante el proceso sumario de acuerdo con el artículo 1772 del Código Judicial vigente, ya que este es un proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites.

La señora Procuradora de la Administración señaló que debe declararse probada la excepción de prescripción porque la misma es oportuna, ya que en los procesos ejecutivos como el presente, en los que previamente se ha pactado la renuncia de trámites del juicio, son procedentes las excepciones de pago y prescripción después de los ocho días de notificado el auto ejecutivo, conforme la norma especial contenida en el artículo 1768 del Código Judicial que trata sobre procesos ejecutivos hipotecarios, y señaló además que la prescripción surgió luego de la notificación del auto ejecutivo, por lo cual era imposible alegarla en los ocho días subsiguientes, ya que sólo puede hacerse una vez cumplido el término de prescripción y en ocasión de un nuevo cobro en este año.

El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante Auto ejecutivo de 30 de marzo de 1973, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra los ejecutados, Industrias de Metal, S. A. y solidariamente contra Armando Aguilar Bustamante, Carlos Norberto Bósquez, Hugo Manuel Randino y Manuel De Jesús Torres hasta la concurrencia de B/.60,899.68 correspondiente a capital, más los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación, más B/.6,089.97 en concepto de gastos judiciales de cobranza, y decretó embargo sobre la finca N° 48,245, inscrita al folio 240 del tomo 1145, Sección del Registro de la Propiedad del Registro Público, de la Provincia de Panamá, de propiedad de Industrias de Metal, S. A., hasta la concurrencia de B/.66,989.65, correspondiente a capital y gastos de cobranza, y ordenó la venta en pública subasta de la finca N° 48,245, inscrita al folio 240 del tomo 1145, Sección de la Propiedad del Registro Público, de la Provincia de Panamá, de propiedad de Industrias de Metal, S. A., para que con su venta se pague al Banco Nacional de Panamá, la suma de B/.60,899.68 en concepto de capital y de intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación, más B/.6,089.97 en concepto de gastos judiciales de cobranza.

En el expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo consta el Edicto N° 35-DJ de 17 de mayo de 1973, en el cual se emplaza a los ejecutados, Manuel De Jesús Torres, a título personal y en su carácter de Presidente y Representante Legal de Industrias de Metal, S. A., a Armando Aguilar Bustamante, Carlos Norberto Bósquez y a Hugo Manuel Randino, para que comparezcan en el término de diez días, por sí mismos o por apoderado, a estar a derecho en el Juicio Ejecutivo Hipotecario por Jurisdicción Coactiva interpuesto en su contra por el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, de conformidad con el Decreto de Gabinete N° 113 de 22 de abril de 1969. En dicho edicto se le advierte a los emplazados que de no comparecer ante el Despacho del Juez Ejecutor en el término indicado se les nombrará un Defensor de Ausente con quien se seguirá todos los trámites del Juicio. Este edicto se fijó en lugar público del despacho el 18 de mayo de 1973 y se desfijó el 21 de mayo de 1973, y en el mismo señaló que luego de cumplido el término legal se remitiera copia del mismo para su publicación

legal en un diario de la localidad. El edicto fue publicado en La Estrella de Panamá los días 24, 25 y 26 de mayo de 1973. Vencido el término del emplazamiento se nombró a los ejecutados defensor de ausente, quien tomó posesión de su cargo y se notificó del auto ejecutivo el 13 de junio de 1973.

El proceso continuó y los bienes embargados fueron rematados y adjudicados al Banco Ejecutor. En auto de 12 de noviembre de 1976, el Secretario del Juzgado Ejecutor en funciones de Alguacil Ejecutor, corrigió el Acta de Remate de 22 de octubre de 1975 para dejar constancia que el juicio seguido a Industrias de Metal, S. A. no es un Juicio Ejecutivo Hipotecario por Jurisdicción Coactiva, sino un Juicio Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva.

Con posterioridad, mediante el Auto N° 917 de 22 de agosto de 1995, el Banco Nacional de Panamá decretó nuevo embargo sobre cualesquiera sumas de dinero, valores, bienes y demás bienes que estén depositados a nombre de los demandados en los Bancos de la localidad y sobre cualquier vehículo, automóvil o equipo rodante inscrito en la Tesorería de Panamá, San Miguelito y Chorrera a nombre de los demandados, hasta la concurrencia de B/.71,433.45 en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza más los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación.

El artículo 1706 del Código Judicial establece lo siguiente:

> "Artículo 1706. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto."

Como ya se ha indicado, la resolución mediante la cual el Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva fue notificada al defensor de ausente de los deudores, entre los que está el señor Hugo Manuel Randino Datris, quien alegó excepción de prescripción ante esta Superioridad el 5 de octubre de 1995, muchos años después de la notificación del auto ejecutivo, por lo que la presente excepción de prescripción debe declararse extemporánea.

En mérito de lo expuesto la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES EXTEMPORÁNEA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN presentada por el licenciado Juan Bosco Martino, en representación de HUGO MANUEL RANDINO DATRIS, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, a INDUSTRIAS DE METAL, S. A. y OTROS y NIEGA lo pedido por el excepcionante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Moreno y Asociados, ha presentado en representación propia, excepción de la obligación menor a la que se demanda, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual la Caja de Seguro Social persigue cobrar una deuda de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.4,668.57), en concepto de cuotas obrero patronales y otras contribuciones de ley.

El licenciado Rubén Darío Moreno M., fundamentó la excepción, en los siguientes términos:

> "**PRIMERO**: Que la Firma Forense **MORENO Y ASOCIADOS**, inicio hestiones (sic) en diciembre de 1992, con el Número Patronal 878310572, con Planilla de tres (3) trabajadores, los cuales se les cubrió sus cuotas hasta febrero de 1993, según recibo N° 2311-04 de 12 de febrero de 1993.
>
> **SEGUNDO**: Que el señor **ESTEBAN WILSON**, con cédula N° 8-186-76, dejó de laborar en nuestra firma desde el 15 de julio de 1993, y el señor **CARLOS ERNESTO MALDONADO**, con cédula N° 8-302-311, igualmente no labora con nuestra empresa desde el 2 de julio de 1993.
>
> **TERCERO**: Que desde julio de 1993 hasta la fecha sólo labora en nuestra firma la Sra. **JESSICA ANN GUTIÉRREZ R.**, con cédula N° 8-345-535, sin embargo, se ha contabilizado como deuda efectiva los pagos correspondientes a las cuotas de los tres (3) trabajadores desde febrero de 1993, lo que ha engrosado injustamente la deuda mantenida con la C. S. S."

El Procurador de la Administración (Suplente), contestó la excepción de obligación menor a la que se demanda, propuesta por el licenciado Moreno M., mediante la Vista N° 50 de 24 de enero de 1996, y en la señala que la presente excepción no ha sido probada.

Observa la Sala, que en el presente caso, la parte actora no ha demostrado de manera fehaciente que le asiste la razón, toda vez que no ha aportado pruebas suficientes que nos lleven a esa conclusión. Por un lado, sólo se limita a aportar al expediente copias simples del aviso de cobro y comprobante de pago de la Caja de Seguro Social, y la carta de renuncia presentada por el señor Esteban Wilson. En este sentido debemos señalar, tal como lo hizo el Procurador de la Administración, que el artículo 820 del Código Judicial es claro al señalar que la copias que se adjunten al expediente "deberán ser autenticadas pro el funcionario público encargado de la custodia del original," situación que, la parte demandante desconoce en este caso.

Adicionalmente, se aprecia que en el renglón denominado "Pruebas" dentro de la demanda, la firma forense, señala que aduce también el testimonio del señor Carlos Ernesto Maldonado, pero como se aprecia al reverso de la foja 21, obra certificación expedida por la Secretaria de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la que señala que en el día en que se debía practicar la prueba ni el mencionado señor, ni ningún representante de la firma Moreno y Asociados se presentaron ante el Magistrado Sustanciador, sólo acudió el representante de la Procuraduría de la Administración, razón por la cual, se desestima esta prueba.

En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que al no existir dentro del expediente ninguna prueba que demuestre que le asiste la razón a la parte actora, lo procedente es, no acceder a lo pedido.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de la obligación menor a la que se demanda interpuesta por la firma forense Moreno y Asociados, en representación propia dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LCDO. HIPÓLITO MANUEL CONSUEGRA PALMA, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ, A ESTEREO CONTINENTAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Hipólito Manuel Consuegra Palma actuando en representación de la Caja de Seguro Social, ha interpuesto Tercería Coadyuvante dentro del proceso ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Chitré, a la empresa Estereo Continental, S. A.

Posteriormente el poder extendido por el Juez Ejecutor al licenciado Hipólito Manuel Consuegra Palma fue revocado por el prenombrado funcionario, y seguidamente conferido al licenciado Eliecer Olmos Ríos con las facultades expresas para recibir, desistir, transigir, sustituir y reasumir.

Argumentos del Tercerista:

El incidentista esgrime en el libelo de su pretensión, básicamente que la sociedad Estereo Continental, S. A. con número patronal 87-842-0123 ha incumplido la obligación preceptuada en el artículo 66A del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954 contentiva del pago de las cuotas obrero patronal. En este sentido la entidad coadyuvante sostiene que la deuda en comento asciende a la suma de B/.12,365.35 en dicho concepto de cuotas obrero patronal, otros descuentos de ley, costas, gastos e intereses.

Frente a las circunstancias expuestas, el actor requiere que se ordene el pago del monto adeudado antes mencionado hasta la fecha de su cancelación, producto de la venta de los bienes de Estereo Continental, S. A. sujetos a remate por parte del Banco Nacional de Panamá, destacando que la Caja de Seguro Social goza de preferencia con respecto a cualesquiera otros acreedores conforme lo estatuye el artículo 77 de la Ley de Orgánica del Seguro Social.

Criterio del Banco Nacional de Panamá:

La entidad ejecutante conceptúa en el escrito de su oposición, esencialmente que no le constan los hechos planteados por el actor salvo el punto quinto del mismo; y por consiguiente señalan que en vista de que no existe producto de los bienes perseguidos, se declare improcedente la solicitud de tercería, ya que deviene imposible satisfacer los derechos aludidos por el incidentista.

Concepto de la Procuradura de la Administración:

La precitada funcionaria al manifestar su punto de vista con respecto a la contienda instaurada solicita que se declare no viable la tercería interpuesta, en atención a que la tercería coadyuvante no cumple con los requisitos legales que exige el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, específicamente en lo atinente al hecho de que la certificación de deuda aportada, que hace referencia a 23 meses morosos adeudados por la sociedad Estereo Continental, S. A. (septiembre de 1993 a julio de 1995) a la Caja de Seguro Social, es posterior al Auto Efectivo que libró mandamiento de pago a favor del Banco Nacional de Panamá, fechado 5 de marzo de 1990.

Decisión de esta Superioridad:

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a ventilar la presente contienda.

Sobre el particular se observa que efectivamente el Auto Ejecutivo librado por el Banco Nacional de Panamá en contra de la sociedad Estereo Continental, S. A., fue emitido el 5 de marzo de 1990 (cfr. foja 10 del expediente de la ejecución coactiva) mientras que la deuda certificada por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social comprende el período enmarcado entre septiembre de 1993 a julio de 1995, como se aprecia a foja 4 del expediente bajo estudio. En consecuencia, la tercería incumple el requisito preceptuado en el artículo 1794 numeral 5 del Código Judicial, que conlleva la imperatividad de que el título ejecutivo invocado, que en esta casas involucra el período de deuda certificada, anteceda como fecha cierta al auto ejecutivo.

Ante estas circunstancias no procede acceder a la petición del tercerista.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA la Tercería Coadyuvante presentada por la Caja de Seguro Social dentro del proceso por jurisdicción coactiva que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Chitré a Estereo Continental, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ HERRERO VICTORIA, EN REPRESENTACIÓN DE CÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A PEDRO FLORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS, (26) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Herrero Victoria actuando en representación de la **Compañía Internacional de Seguros** ha interpuesto Tercería Coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Pedro Flores.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA:

La Compañía Internacional de Seguros a través de su apoderado legal esgrime en el libelo de su pretensión, básicamente que el señor Pedro Flores les adeuda la suma de B/.32,262.82 como consecuencia de un préstamo con garantía hipotecaria. Dicho gravamen se refiere a la segunda hipoteca sobre la finca N° 69712 inscrita al Folio 322, Tomo 1692 de la Sección de la Propiedad del Registro Público constituida mediante la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, que a su vez consta inscrita en la Ficha 066240, Rollo 6073, Imagen 0097 de la Sección de Micropelículas de la Precitada entidad registral. Añade el actor que la obligación en comento se encuentra de plazo vencido y por lo tanto es perfectamente exigible sobre el saldo adeudado que certifique un representante de la Compañía Internacional de Seguros, en atención a la cláusula décima tercera del antes mencionado instrumento público.

Por virtud de lo señalado, y dado que el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros está ejecutando la finca en controversia de la cual disfruta del derecho real de hipoteca, como primer gravamen, el incidentista solicita que producto de

la venta del bien inmueble perseguido se le pague a la Compañía Internacional de Seguros, S. A. con la prelación establecida en la ley, la suma que le adeuda el señor Pedro Flores.

POSICIÓN DE LA CAJA DE AHORROS:

La entidad crediticia al vertir su criterio con respecto a la presente contienda, se circunscribe de manera sucinta a aceptar los hechos del incidente de tercería coadyuvante propuesto por la Compañía Internacional de Seguros.

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN:

Sobre el particular el Ministerio Público actuando en interés de la ley considera que es procedente acceder a la petición de la tercerista ya que la misma ha sido promovida antes efectuarse el pago al acreedor, y además, debido que la tercería en cuestión tiene su asidero en la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, inscrita en la ficha 066240, rollo 6073, imagen 0097 del Registro Público mediante la cual, Pedro Flores y la Compañía Internacional de Seguros, S. A. celebraron un contrato de préstamo garantizado con segunda hipoteca sobre la finca 69712.

DECISIÓN DE ESTA CORPORACIÓN DE JUSTICIA:

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso entran a resolver la solicitud planteada.

Al respecto coincide esta Superioridad con el criterio vertido por la Procuraduría de la Administración en el sentido de que es dable acceder a la petición del incidentista en atención a que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1794 del Código Judicial.

Ello es así debido a que efectivamente la presente tercería coadyuvante ha sido interpuesta antes del pago al acreedor apoyándose en un recaudo ejecutivo cuyo origen es anterior al auto ejecutivo fechado 26 de abril de 1991. El título que presta mérito ejecutivo en este caso en particular es la Escritura Pública N° 3301 de 14 de marzo de 1985, tal como lo expresa la Procuraduría de la Administración con fundamento en el artículo 1639 numeral 4 de la prenombrada excerta legal, que le reconoce dicho valor de ejecución al referido documento.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADA la Tercería Coadyuvante presentada por la Compañía Internacional de Seguros S. A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE AHORROS a PEDRO FLORES y en consecuencia, se ORDENA que producto de la venta de la Finca N° 69712, debidamente inscrita al Folio 322, Tomo 1692 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, del Registro Público con la prelación establecida en la ley.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL SALVADOR VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL CONDOMINIO NEREYDA, DENTRO DEL PROCESO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A ATILANO ESPINO CARRASQUILLA Y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Salvador Vásquez Fernández, actuando en nombre y representación del Condominio Nereyda, ha promovido tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a Atilano Espino Carrasquilla y Enedina García de Espino, para que una vez cubierto del crédito Hipotecario a favor de la Caja de Ahorros, se pague a Propiedad Horizontal Condominio Nereyda la suma de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.6,159.00), en concepto de cuotas de mantenimiento, pago al guardia de seguridad, utilización de garajes, recargo de 10% por mora en el pago, instalación de tuberías de gas, compra de tanque para el almacenamiento de agua, luces del condominio en escaleras y pasillos, más los intereses legales, costas y gastos de la presente acción.

La tercerista fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Los señores ATILANO ESPINO CARRASQUILLA y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO, portadores de las cédulas de identidad personal N° 7-39-268 y 7-37-655 respectivamente son copropietarios del Apartamento 6B del Condominio NEREYDA, ubicado en la Urbanización El Carmen, Corregimiento de Bella Vista, Provincia de Panamá.

SEGUNDO: La Caja de Ahorros de Panamá, ha entablado Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo en contra de los señores ATILANO ESPINO CARRASQUILLA y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO dentro del cual se ha fijado para el día 29 de junio de 1995 la venta pública del apartamento 6B del Condominio NEREYDA; que corresponde a la Finca 3758, inscrita al folio 352, tomo 79, Sección de la Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá.

TERCERO: Los señores ATILANO ESPINO CARRASQUILLA y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO, en su condición de Copropietarios del Apartamento 6B del Condominio NEREYDA adeudan a la administración de dicho inmueble la suma de B/.6,159.00 que son producto de cuotas dejadas de pagar por los demandados desde el año 1990 para cubrir pagos de instalación de tanque de aguas, tuberías de gas, guardia de seguridad, cuotas de mantenimiento, utilización de garajes, recargos por mora en dichos pagos, luces comunales del condominio, etc., erogaciones estas que fueron autorizadas por las Juntas ordinarias y extraordinarias de Copropietarios del condominio.

CUARTO: A pesar de todas las gestiones de cobro efectuadas por la Administración del Condominio NEREYDA ha sido imposible obtener el pago de las sumas adeudadas por los demandados, razón por la cual se interpone la presente Tercería." (fs. 26 y 27).

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, a la Procuradora de la Administración y a los ejecutados, por el término de Ley.

Mediante la Vista Fiscal N° 313 de 26 de julio de 1995, la señora Procuradora de la Administración señaló que la presente tercería no cumple con los requisitos legales establecidos en el ordinal 5 del artículo 1794 del Código Judicial, ya que consta que la Caja de Ahorros libró mandamiento de pago contra los deudores el 18 de marzo de 1985 y la Escritura Pública N° 4265 de 15 de junio de 1995 aportada por la tercerista como título ejecutivo, es de fecha posterior al auto ejecutivo dictado por la Caja de Ahorros.

Según las constancias procesales el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros, mediante Auto N° 27 de 18 de marzo de 1985, libró mandamiento de pago ejecutivo a su favor y en contra de Atilano Espino Carrasquilla y Enedina García de Espino, y ordenó embargo por la suma de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE BALBOAS con 49/100 (B/.25,667.49) sobre la finca N° 3,758, inscrita en el Registro Público al folio 352 del Tomo 79, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, dada como garantía de la obligación contraída con dicha institución y ordenó su venta en pública subasta, con citación del deudor para que con el producto del remate se le pague a la Caja de Ahorros todo lo adeudado, más los gastos de cobranza e intereses ocasionados hasta la cancelación total de la

obligación.

Dentro de la presente tercería coadyuvante se admitieron como pruebas presentadas por la tercerista una copia autenticada del auto de remate dictado por el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, la Escritura Pública N° 4265 de 15 de junio de 1995 legalizada en la Notaría Pública Primera de Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza el Acta de Asamblea de la Junta Directiva de Copropietarios del Edificio P.H. NEREYDA, y el expediente del juicio ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a los ejecutados. No se acogió las demás pruebas presentadas con la tercería por no ajustarse a lo señalado en el artículo 23 de la ley 13 de 1993.

El numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, el numeral 13 del artículo 1639 del Código Judicial y el artículo 23 de la Ley 13 de 1993, establecen literalmente lo siguiente:

> "ARTÍCULO 1794: Las demandas de tercerías coadyuvantes se sujetarán a las siguientes disposiciones:
> ...
> 5. La tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Pero si se tratare de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha sentencia se hubiere dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo.
>
> ARTÍCULO 1639: Son títulos ejecutivos:
> ...
> 13. El crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, según lo dispuesto en la ley;
> ...
>
> ARTÍCULO 23. Cuando alguno de los propietarios se negara a pagar el valor de las cuotas correspondientes a los gastos comunes y gastos privados según lo dispuesto en la presente Ley; el administrador a quien corresponde esta recaudación, podrá entablar en contra de éste un juicio ejecutivo para lograr el pago, **sirviéndole de título ejecutivo la escritura notarial levantada, mediante la cual el administrador podrá exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación.**
>
> El Notario Público deberá insertar en el instrumento jurídico la parte correspondiente del acta en que se acordó el gasto y la declaración del administrador de que el propietario renuente no ha efectuado el pago correspondiente. Se exceptúan los gastos relativos a las reparaciones urgentes en las cosas comunes o privativas que afecten a otro propietario, las cuales podrá ordenar el administrador por sí mismo. En estos casos servirá de título ejecutivo el estado de cuenta que presente el administrador."

Tal cual se aprecia en el expediente, no se cumplió con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 13 de 1993, porque la tercerista no aportó con su demanda el título ejecutivo consistente en la Escritura Notarial levantada para exigir el pago de la obligación, en la que el Notario Público debe insertar "**la parte correspondiente del acta en que se acordó el gasto y la declaración del administrador de que el propietario renuente no ha efectuado el pago correspondiente**". La única excepción que contempla el artículo 23 de la ley 13 de 1993, es la relativa a los gastos de reparaciones urgentes en las cosas comunes o privativas que afecten a otro propietario que pueden ser ordenados por el administrador, en cuyo caso sirve como título ejecutivo el estado de cuenta que presente el administrador; lo cual no ha ocurrido en el presente caso, puesto que los gastos reclamados por el tercerista no son de esta naturaleza.

En virtud de que la presente tercería no se apoya en título ejecutivo, por

incumplir con los requisitos exigidos en el artículo 23 de la ley 13 de 1993, esta Sala no puede acceder a la pretensión de la tercerista.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Tercería Coadyuvante propuesta por el licenciado Manuel Salvador Vásquez Fernández, en representación de CONDOMINIO NEREYDA, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue la CAJA DE AHORROS a ATILANO ESPINO CARRASQUILLA y ENEDINA GARCÍA DE ESPINO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DEL CONDOMINIO LILIA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS A ANGELA OLGA ROLDÁN DE LUZULA Y ARMANDO LUZULA LÓPEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Miguel Antonio Bernal, actuando en nombre y representación del Condominio Ligia, ha promovido tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a Angela Olga Roldán de Luzula y Armando Luzula López, para que sean condenados a pagar a Propiedad Horizontal Condominio Ligia, MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 78/100 (B.1,146.78), en concepto de capital adeudado por cuotas de mantenimiento, recargos e intereses que se causen hasta la total cancelación de la obligación, más las costas y gastos legales de esta acción.

La tercerista fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: La ejecutada, es propietaria del Apartamento N° 2, que corresponde a la Finca 2838, Folio 62, Tomo 79, de la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público.

SEGUNDO: Que la Finca antes descrita forma parte de la Propiedad Horizontal Condominio Lilia, la cual se encuentra inscrita en la Finca 1136, Tomo 55, Folio 31, de la Sección de Propiedad Horizontal del Registro Público.

TERCERO: La ejecutada se encuentra en mora en el pago de cuotas de administración y mantenimiento desde el mes de agosto de 1992 hasta la fecha, adeudando en dicho concepto incluyendo recargos e intereses, la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 78/100 (B/.1146.78). Según declaración notarial, que presta mérito Ejecutivo.

CUARTO: Que mediante Auto N° 979 fechado el 18 de octubre de 1994 la Caja de Ahorros, dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario por Cobro Coactivo, libró mandamiento de pago contra la ejecutada y decretó embargo sobre la finca 2838, descrita en el hecho primero." (Fs. 6 y 7).

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, a la Procuradora de la Administración y a los ejecutados, por el término de Ley.

Mediante la Vista Fiscal N° 335 de 8 de agosto de 1995, la señora Procuradora de la Administración señaló que la Escritura Notarial N° 5628 de 23 de junio de 1995, presentada por el tercerista como título ejecutivo según el numeral 13 del artículo 1639 del Código Judicial y el artículo 23 de la Ley 13 de 28 de abril de 1993, no reúne los requisitos legales establecidos en el numeral 5 del artículo 1749 del Código Judicial, porque dicha escritura es de fecha posterior al Auto N° 979 dictado por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros el 18 de octubre de 1994.

Según las constancias procesales en la presente tercería coadyuvante, el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, mediante Auto N° 979 de 18 de octubre de 1994, libró mandamiento de pago ejecutivo a su favor y en contra de Olga Roldán de Luzula y Armando Luzula López, hasta la concurrencia de B/.37,239.77 en concepto de capital, intereses vencidos y pólizas de seguro, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos causados hasta la fecha de su cancelación total y decretó embargo sobre la finca N° 2838, inscrita al tomo 79, folio 64, Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, de propiedad de Angela Olga Roldán de Luzula, dada como garantía de la obligación contraída con dicha institución y ordenó su venta en pública subasta, mediante Auto N° 350 de 18 de mayo de 1995 señaló como fecha para el remate de la precitada finca el 28 de junio de 1995 y fijó como base para el remate la suma de B/.46,508.54.

El numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial y el artículo 23 de la Ley 13 de 1993, establecen literalmente lo siguiente:

> "ARTÍCULO 1794: Las demandas de tercerías coadyuvantes se sujetarán a las siguientes disposiciones:
> ...
> 5. La tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Pero si se tratare de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha sentencia se hubiere dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo.
>
> ARTÍCULO 23. Cuando alguno de los propietarios se negara a pagar el valor de las cuotas correspondientes a los gastos comunes y gastos privados según lo dispuesto en la presente Ley; el administrador a quien corresponde esta recaudación, podrá entablar en contra de éste un juicio ejecutivo para lograr el pago, **sirviéndole de título ejecutivo la escritura notarial levantada, mediante la cual el administrador podrá exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación.**
>
> El Notario Público deberá insertar en el instrumento jurídico la parte correspondiente del acta en que se acordó el gasto y la declaración del administrador de que el propietario renuente no ha efectuado el pago correspondiente. Se exceptúan los gastos relativos a las reparaciones urgentes en las cosas comunes o privativas que afecten a otro propietario, las cuales podrá ordenar el administrador por sí mismo. En estos casos servirá de título ejecutivo el estado de cuenta que presente el administrador."

La Sala observa que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 13 de 1993, la tercerista presentó con su demanda la Escritura Notarial N° 5628 de **23 de junio de 1995**, pero el Auto Ejecutivo dictado por el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros que libra mandamiento de pago y decreta embargo en el presente proceso por cobro coactivo fue dictado el **18 de octubre de 1994**, por lo cual se aprecia claramente que el título ejecutivo es de fecha posterior al auto ejecutivo y por tanto no reúne las exigencias del precitado numeral 5 del artículo 1749.

Por lo antes expuesto esta Sala no puede acceder a la pretensión de la tercerista ya que incumple los requisitos exigidos por la ley.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Tercería Coadyuvante propuesta por el licenciado Miguel Antonio Bernal, en representación de CONDOMINIO LIGIA, dentro del Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue la CAJA DE AHORROS a ANGELA OLGA ROLDÁN DE LUZULA y ARMANDO LUZULA LÓPEZ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CEDEÑO & MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Cedeño & Méndez, en representación de COPRUFIN, S. A., ha interpuesto excepción de inexistencia de la obligación dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

El representante judicial de COPRUFIN, S. A. fundamentó su excepción en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Con fecha ocho (8) de marzo de 1995, el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá decretó abierto en contra de nuestra representada, Proceso por Cobro Coactivo y Libró Mandamiento de Pago por la vía ejecutiva a favor del Municipio de Panamá en concepto de impuestos municipales dejados de pagar desde el año 1986 y su correspondiente recargo por mora.
>
> SEGUNDO: El Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, presentó como título ejecutivo un Estado de Cuenta fechado siete (7) de marzo de 1995 y un denominado reconocimiento. El Estado de Cuenta carece de la firma responsable del Tesorero Municipal a quien le corresponde la recaudación de los impuestos y el Reconocimiento es un documento expedido unilateralmente por el Juez Ejecutor quien lo firma, y no responde al reconocimiento que hace un contribuyente después de habérsele practicado un alcance de impuestos.
>
> TERCERO: La obligación de pagar impuestos, contribuciones y servicios municipales rige después de la respectiva calificación y previa comunicación al contribuyente.
>
> CUARTO: Nuestra representada nunca fue notificada de la obligación de pagar impuestos municipales, por ende la falta de notificación no permite que el acto administrativo sea obligatorio, tenga eficacia y fuerza vinculante.
>
> QUINTO: La supuesta obligación de pagar impuestos municipales es inexistente. Por lo tanto, es ilegal proceder en contra de nuestra representada por la vía ejecutiva para el cobro coactivo de esta supuesta deuda y lo que es más grave aún, ejercer en perjuicio de su patrimonio, medida cautelar de secuestro.
>
> SEXTO: La obligación impositiva municipal además de ser inexistente por no haber sido notificada a nuestra representada, es inexistente por cuanto nuestra representada no realiza ninguna actividad que

pueda sujetarla al pago de impuestos municipales de ninguna naturaleza.

SÉPTIMO: Por todo lo anteriormente expuesto, nuestra representada no tiene la obligación jurídica de cumplir con el pago de supuestos impuestos municipales que no han entrado a regir y que además se pretenden hacer efectivos a más de cinco (5) años, a pesar de que las obligaciones en carácter de impuestos municipales, prescriben en un término de cinco (5) años."

Admitida la presente excepción de inexistencia de la obligación, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración, por el término de tres días.

La representante del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá solicitó a esta Sala no acceder a la pretensión de la excepcionante, porque el estado de cuenta presentado por el Municipio presta mérito ejecutivo y en él se refleja la deuda que la ejecutada tiene con el Municipio, y agregó que el reconocimiento está dentro de lo contemplado por el numeral 2 del artículo 1803 del Código Judicial. Además indicó que la empresa sí tenía conocimiento del impuesto, porque en marzo de 1978 la firma Villalaz y Troyano interpuso a nombre de esta un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 286 de marzo de 1978, emitida por la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, por lo que tuvo que notificarse primero de la resolución recurrida, por tanto la obligación es clara, líquida y exigible.

Finalmente señaló que es cierto que los impuestos prescriben a los cinco años, pero que la excepción de prescripción debe solicitarse expresamente como tal y dentro del término legal.

La representante del Ministerio Público, mediante su Vista Fiscal N° 34 de 15 de enero de 1996, consideró que a la excepcionante no le asiste la razón, porque los elementos probatorios demuestran que existe la obligación por parte de COPRUFIN, S. A. de pagar tributos municipales por la suma de B/.33,657.60, desde el año de 1986, ya que el 6 de abril de 1978 se opuso mediante un recurso de reconsideración, al cobro de los impuestos por la actividad de Representación y Valores asignados por la Resolución N° 286 de 3 de marzo de 1978. Señaló que la Tesorería Municipal y el Juzgado Ejecutor actuaron de acuerdo a los artículos 74, 80, 83 y concordantes de la Ley 106 de 1973 y del artículo 1801, 1803 y siguientes del Código Judicial. Dijo además que en caso "de que se den cobros de impuestos más allá de cinco (5) años, corresponderá, tal y como lo ha expresado ese ente municipal, alegarlo, por vía de prescripción".

A foja 1 del expediente consta el Estado de Cuenta de COPRUFIN, S. A. expedido por el Municipio de Panamá el 7 de marzo de 1995, y a foja 6 reposa el reconocimiento de 8 de marzo de 1995 del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, a cargo de COPRUFIN, S. A., contribuyente N° 278-86 y a favor del Tesoro Municipal de Panamá por la suma de B/.33,657.60 en concepto de impuestos morosos identificados con la orden 0001 renta 11252901 y orden 0002 renta 11253002, correspondientes al período comprendido entre el 31 de diciembre de 1986 y el 28 de febrero de 1995. Posteriormente, mediante Auto Ejecutivo de 8 de marzo de 1995, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá abrió proceso por cobro coactivo en contra de COPRUFIN, S. A. Dicho auto ejecutivo fue notificado al apoderado judicial de la empresa el 21 de noviembre de 1995 (fs. 5 y 6 del expediente del proceso por cobro coactivo).

Consta a foja 25 del expediente copia autenticada del escrito en el cual Pedro J. Ameglio T., representante legal de COPRUFIN, S. A. otorga poder a la firma Villalaz y Troyano para que interponga recurso de reconsideración contra la Resolución N° 286 de 3 de marzo de 1978, emitida por la Tesorería Municipal de Panamá y el escrito de fecha 6 de abril de 1978, en el cual el apoderado judicial de la sociedad solicita que se reconsidere la referida resolución que fija a su representada el impuesto de agente de representación y valores para que sea rebajado al mínimo posible permitido por la ley. Este recurso fue resuelto mediante la Resolución N° 838 de 9 de noviembre de 1978, en la que la Directora de la Tesorería Municipal decidió mantener la renta de B/.150.00 mensuales,

fijada a COPRUFIN, S. A. Posteriormente esta resolución fue apelada por la sociedad y la Junta Calificadora Municipal la confirmó mediante la Resolución N° 5 de 1 de agosto de 1980.

El numeral 2 del artículo 1803 del Código Judicial y los artículos 87 y 88 de la Ley 106 de 1973 establecen literalmente lo siguiente:

> "Artículo 1803. Prestan mérito ejecutivo:
> ...
> 2. Las copias de reconocimientos y estados de cuenta a cargo de los deudores por créditos a favor del Tesoro Nacional, de los municipios, de las instituciones autónomas, semiatónomas y demás entidades públicas del Estado;
> ...
> Artículo 87. La calificación o aforo de las personas o entidades naturales o jurídicas sujetas al pago de los impuestos, contribuciones y servicios que estableciere esta Ley, corresponde al Tesorero Municipal y regirán después de haberse efectuado la respectiva calificación y previa comunicación al contribuyente. Los catastros se confeccionarán cada dos (2) años y los gravámenes de que tratan se harán efectivos el primero de enero de cada año fiscal.
>
> Artículo 88. Los aforos o calificaciones se harán por parte del Tesorero Municipal, con el asesoramiento de la Comisión de Hacienda. Una vez preparadas las listas del Catastro, éstas se expondrán a la vista de los interesados en pliegos que permanecerán en lugar visible y accesible en la Tesorería durante treinta (30) días hábiles a partir de cada año. Si se considerase conveniente podrán publicarse las listas del Catastro en uno o más diarios o fijarlas en tablillas en otras oficinas de dependencias municipales."

Esta Sala observa que tal cual se desprende del numeral 2 del artículo 1803, el reconocimiento y estado de cuenta presentado por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá prestan mérito ejecutivo.

Según el precitado artículo 88 de la Ley 106 de 1973, la notificación de los aforos o calificaciones se hace mediante pliegos que permanecen en lugar visible a los interesados por treinta días o mediante publicación en diarios locales, por lo que no procede la excepción de inexistencia de la obligación por falta de notificación, pues según consta en autos COPRUFIN, S. A. tenía conocimiento desde 1978 del tributo impuesto mediante la Resolución de 3 de marzo de 1978, ya que se opuso a ella por medio de los recursos de reconsideración y apelación, los cuales fueron resueltos en su contra.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción para cobrar la obligación tributaria, alegada ante esta Superioridad por el apoderado judicial de COPRUFIN, S. A. en el hecho séptimo de la demanda, para que se declare prescritos los impuestos municipales de los años de 1986 a 1991, la Sala debe manifestar que esta excepción de prescripción se presentó oportunamente, dentro del término de 8 días contados a partir de la notificación del auto ejecutivo. Las excepciones se hacen valer en los juicios ejecutivos por medio de incidentes, los cuales se tramitan de acuerdo con las reglas señaladas para los incidentes que se promueven los procesos de conocimiento. De conformidad con estas reglas el escrito en que se interpone un incidente no requiere formalidad especial. Del escrito se le corrió traslado a la contraparte, se acogió las pruebas presentadas oportunamente y se otorgó términos para alegar, por tanto, se cumplió la actuación esencial en este tipo de solicitudes (Cfr. artículos 1706, 1708, 1720, 693 y 699 del Código Judicial).

De conformidad con el artículo 469 del Código Judicial cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente o recurso, o del acto, de la relación o negocio de que se trate, no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara.

A juicio de la Sala estamos frente a una gestión procesal en la cual se invocó oportunamente una excepción, esta ha sido puesta en conocimiento de la contraparte y ha sido probada parcialmente con los documentos aportados por las partes, y la intención de la parte es clara en cuanto a que pretende demostrar que no está obligada a cumplir con la obligación tributaria cuyo pago se le exige. Por tanto, a juicio de la Sala procede declarar probada parcialmente su existencia.

La excepción de prescripción se probó parcialmente porque los impuestos cuyo pago se ordena mediante el auto Ejecutivo fechado el 8 de marzo de 1995 corresponden al período comprendido entre el 12 de diciembre de 1986 y el 29 de febrero de 1995, y de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, los impuestos municipales prescriben en 5 años, término que se interrumpió con el Auto Ejecutivo, dictado el 8 de marzo de 1995, tal como lo preceptúa el artículo 738 del Código Fiscal, aplicable por disposición del artículo 7 del Código Fiscal.

De lo expuesto se deduce que está prescrita la acción para el cobro de los impuestos que se causaron hasta el 8 de marzo de 1990 ya que el auto ejecutivo dictado el 8 de marzo de 1995 interrumpió el término de 5 años para la prescripción de esta acción.

Por todo lo anterior la Sala debe declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación y probada parcialmente la excepción de prescripción.

En mérito de lo expuesto la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN de la acción para el cobro de los impuestos municipales causados de diciembre de 1986 al 8 de marzo de 1990, ambas excepciones propuestas por la firma Cedeño & Méndez, en representación de COPRUFIN, S. A. dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LA FIRMA CEDEÑO & MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Cedeño & Méndez, en representación de COPRUFIN, S. A., ha interpuesto recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.

En el escrito de apelación el representante judicial señaló que Coprufin, S. A. es una sociedad anónima constituida e inscrita en el Registro Público de Panamá el 6 de octubre de 1971, que nunca ha incumplido sus obligaciones tributarias, pero que el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá pretende cobrar de manera retroactiva supuestos impuestos con recargos por mora, dejados de pagar desde 1986, que al momento de librarse el mandamiento de pago ascienden a la suma de B/.33,657.60.

Señala además que dichos impuestos municipales no le corresponden, nunca le fueron notificados y son violatorios de las normas municipales que establecen el procedimiento para gravar y cobrar a los contribuyentes, contenidas en el artículo 87 de la Ley 106 de 1973, el cual señala el mecanismo legal para calificar y gravar a un nuevo contribuyente y para comunicarle su nueva obligación tributaria, todo lo cual fue desconocido por el Municipio de Panamá, ya que a la sociedad Coprufin, S. A. le fue supuestamente asignado el número de contribuyente 276-86, según se desprende de la resolución recurrida, pero nunca se le notificó dicho número ni su calidad de contribuyente, lo que impidió que cumpliera con el pago de estos impuestos.

Admitido el presente recurso de apelación, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá para que en un término de tres días hiciera valer sus objeciones al recurso interpuesto.

El representante del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá solicitó a esta Sala que confirme el Auto de Mandamiento de Pago contra COPRUFIN, S. A., ya que consta que la empresa sí tenía conocimiento del impuesto, porque en marzo de 1978 la firma Villalaz y Troyano interpuso a nombre de esta un Recurso de Reconsideración a la Notificación N° 286 de marzo de 1978, en donde se le grava y se le notifica del Impuesto por la actividad de Agentes de Representación y Valores.

Consta a foja 2 del expediente del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el 8 de marzo de 1995, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá hizo un reconocimiento a cargo del Contribuyente COPRUFIN, S. A. con número 278-86, a favor del Tesoro Municipal del Distrito de Panamá por la suma de B/.33,657.60 en concepto de impuestos morosos identificados con la orden 0001 renta 11252901 y orden 0002 renta 11253002. Posteriormente, mediante Auto Ejecutivo de 8 de marzo de 1995, el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá abrió proceso por cobro coactivo en contra de COPRUFIN, S. A., contribuyente N° 278-86 y libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor del Municipio de Panamá hasta la concurrencia de B/.33,657.60. Dicho auto ejecutivo fue notificado al apoderado judicial de la empresa el 21 de noviembre de 1995 (fs. 5 y 6 expediente del proceso por cobro coactivo).

Consta a foja 7 del expediente copia autenticada del escrito en el cual Pedro J. Ameglio T., representante legal de COPRUFIN, S. A. otorga poder a la firma Villalaz y Troyano para que interponga recurso de reconsideración de la Resolución N° 286 de 3 de marzo de 1978, emitida por la Tesorería Municipal de Panamá y el escrito de fecha 6 de abril de 1978, en el cual el apoderado judicial de la sociedad solicita que se reconsidere la referida resolución que fija a su representada el impuesto de agente de representación y valores para que sea rebajado al mínimo posible permitido por la ley; recurso resuelto mediante la Resolución N° 838 de 9 de noviembre de 1978, en la que la Directora de la Tesorería Municipal decidió mantener la Renta de B/.150.00 mensuales, fijada a COPRUFIN, S. A. Posteriormente esta resolución fue apelada por la sociedad y la Junta Calificadora Municipal la confirmó mediante la Resolución N° 5 de 1 de agosto de 1980.

Los artículos 87, 88 y 91 de la Ley 106 de 1973, relativos al procedimiento para el cobro de impuestos o contribuciones municipales establecen lo siguiente:

> "ARTÍCULO 87. La calificación o aforo de las personas o entidades naturales o jurídicas sujetas al pago de los impuestos, contribuciones y servicios que estableciere esta Ley, corresponde al Tesorero Municipal y regirán después de haberse efectuado la respectiva calificación y previa comunicación al contribuyente. Los catastros se confeccionarán cada dos (2) años y los gravámenes de que tratan se harán efectivos el primero de enero de cada año fiscal.
>
> ARTÍCULO 88. Los aforos o calificaciones se harán por parte del Tesorero Municipal, con el asesoramiento de la Comisión de Hacienda. Una vez preparadas las listas del Catastro, éstas se expondrán a la vista de los interesados en pliegos que permanecerán en lugar

visible y accesible en la Tesorería durante treinta (30) días hábiles a partir de cada año. Si se considerase conveniente podrán publicarse las listas del Catastro en uno o más diarios o fijarlas en tablillas en otras oficinas de dependencias municipales.

Dentro del término antes señalado pueden los contribuyentes presentar sus reclamos que tendrán como objeto no sólo las calificaciones hechas, sino también la omisión de los mismos en las listas respectivas.

ARTÍCULO 91. El gravamen señalado por la Junta Calificadora entrará en vigencia el día primero del mes siguiente. La calificación de los contribuyentes que comenzaren a ejercer sus actividades después de confeccionados los catastros corresponden al Tesorero, sujeta a la confirmación de la Junta Calificadora. Todos los miembros de la Junta Calificadora tienen el derecho a proponer estudios o revisión de calificaciones. Las decisiones de la Junta serán adoptadas por mayoría de votos y serán definitivas."

El artículo 88 de la Ley 106 de 1973 establece la forma en que se notifica a los contribuyentes las listas del Catastro en las que consta el impuesto que deben pagar los mismos por la actividad que desarrollan dentro del Municipio.

La Sala considera que en autos queda demostrado que COPRUFIN, S. A. tenía conocimiento desde 1978 de la Resolución de 3 de marzo de 1978, que grava su actividad de inversionista con la renta de B/.150.00 mensuales, porque presentó los recursos permitidos por la ley en contra del impuesto que se le asignó según la actividad que desarrollaba. Los recursos de reconsideración y apelación oportunamente interpuestos fueron resueltos por la Dirección de la Tesorería Municipal y por la Junta Calificadora Municipal respectivamente, confirmando el monto del impuesto asignado según la actividad de dicha empresa, por lo que no puede alegar que los mismos no le corresponden y que no le fueron notificados.

Esta Sala considera que el auto ejecutivo impugnado se ajusta a derecho y por tanto debe desestimar el recurso de apelación interpuesto en el presente proceso ejecutivo por cobro coactivo y confirmar el auto recurrido.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el Auto de 8 de marzo de 1995 dictado por el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Municipio de Panamá le sigue a COPRUFIN, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. GONZALO LAGUNA POLO, EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS VALDIES HAWKINS, CONTRA LA SENTENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MARCOS VALDIES HAWKINS VS OSCAR GRENALD Y/O ROSA DE GRENALD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Gonzalo Laguna Polo, actuando en representación del señor

Marcos Váldez Hawkins, y la firma de abogados Botello Aparicio y Asociados en representación de Oscar Grenald y/o Rosa de Grenald, han interpuesto sendos recursos de casación laboral, con el objeto de que revoque la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 11 de diciembre de 1995, dentro del proceso laboral Marcos Váldez Hawkins contra Oscar Grenald y/o Rosa de Grenald.

Posteriormente el Magistrado sustanciador, mediante oficio fechado el 3 de enero de 1996, con fundamento en los artículos 636 y 638 del Código de Trabajo ordenó la acumulación de los procesos que nos ocupa.

Se trata de un proceso laboral mediante el cual el demandante, solicita que la parte demandada sea condenada a pagarle la suma de cuarenta y dos mil ochocientos siete balboas con dos centavos (B/.42,.807.00) en concepto de prima de antigüedad, vacaciones y décimo-tercer mes dejados de pagar. La Juez Primera de Trabajo de la Segunda Sección condenó únicamente a uno de los demandados, a la señora Rosa de Grenald al pago de veinticinco mil ochocientos treinta y dos balboas con cuarenta y nueve centésimos (B/.25,832.49) en concepto de vacaciones y décimo tercer tanto vencidos como proporcional y absolvió el pago en concepto de prima de antigüedad. Al señor Oscar Grenald lo absolvió de todas los reclamos en su contra. El Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia de primera instancia y en su lugar condenó a Rosa de Grenald a pagar la suma de catorce mil catorce balboas con cincuenta y seis centavos (B/.14,014.56) en concepto de vacaciones y décimo tercer mes vencidos y proporcional más intereses.

Por un lado, la finalidad del demandante consiste en que se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se decrete solidariamente responsable al señor Oscar Grenald conjuntamente con su esposa de las prestaciones laborales a que tiene derecho desde 1980 y se hagan en base a seis días de trabajo a la semana.

Por el otro lado, los demandantes presentan el recurso de casación con el objeto de que se absuelva a la sra. Grenald en vista de que no existe relación de trabajo y en caso de no ser así, se cuantifique la demanda en base a B/.25.00 diarios.

Por la parte demandante se alegan violados los artículos 6, 14 numerales 3 y 4, 69, 732 y 738 del código de Trabajo y por la parte demandada se señalan violados los artículos 62, 64, 65, 54 y 732 del Código de Trabajo.

En tiempo oportuno, cada apoderado presentó escrito de oposición al recurso de casación presentado por la parte contraria.

La Sala pasa a examinar las mencionadas infracciones.

Considera la Sala que primero debe estudiar el cargo endilgado por parte de los demandados los artículos 62, 64 y 65 puesto que tratan sobre la existencia de la relación de trabajo.

El abogado de las partes demandadas, fundamenta su inconformidad en que el Tribunal Superior de Trabajo reconoció la relación de trabajo cuando no existe subordinación jurídica ni dependencia económica, pues "el señor Váldez Hawkins sólo conducía tres veces a la semana, sin estar sujeto a régimen alguno de dirección" y "no dependía de los ingresos que recibía como conductor del vehículo de nuestra representada", pues tenía diversas fuentes de ingresos. Según el demandante esto así fue demostrado.

Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo luego de analizar la manera de operar y de trabajo entre los esposos Grenald con el señor Váldez Hawkins, consideró que el responsable de las prestaciones laborales que se demandan en el presente caso es únicamente la señora Grenald por ser la propietaria del bus y absuelve a su esposo en vista de que se desempeñara como administrador del bus, y señaló lo siguiente:

> "Este Tribunal no encuentra que la relación descrita sirva para liberar a la propietaria del autobús de su responsabilidad en cuanto a las prestaciones laborales reclamadas se refiere, ya que admitida la prestación del servicio como conductor se tiene que la misma se

> hacía con subordinación jurídica, tal como lo señalan los artículos 62 y 64 del Código de Trabajo. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Trabajo, las relaciones entre los choferes y conductores que presten servicio en los autobuses y los propietarios de dichos vehículos, como en el presente caso, se encuentran sujetos a las disposiciones del Código de trabajo y en especial al capítulo especial correspondiente, que establece además que las estipulaciones que en cualquier forma desvirtúen la naturaleza laboral de la relación anterior no producen ningún efecto legal."

De lo anterior se coligue que el Tribunal Superior de Trabajo para considerar si existía relación de trabajo o no, se basó en que una vez admitida la prestación de servicio existe subordinación jurídica, según lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Trabajo.

Al igual que el Tribunal Superior de Trabajo, consideramos que los conductores o choferes de buses de transporte público se encuentran sujetos a las disposiciones del Código de Trabajo. Asimismo consideramos que el solo hecho de conducir un vehículo no es suficiente para que exista relación de trabajo, pues esta actividad dependerá si existe o no subordinación jurídica o dependencia económica, como cualquier otra relación contractual que se encuentre sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo. Por ende, debemos entrar a conocer si efectivamente, como señala el actor, se probó que no existía ninguno de estos elementos.

Sin embargo, los demandados no señalan cuáles son estas pruebas o de qué manera se demostró la no subordinación jurídica o independencia económica. Los demandados se limitan a señalar que el demandante -Sr. Váldez-, trabajaba tres (3) días a la semana y trabajaba con otros propietarios de autobuses sin dar nombres o algún otro dato que confirme su dicho. Más bien, contrario a probar la ausencia de los elementos que crean la relación de trabajo, a pregunta que se le hiciera al administrador del bus -sr. Grenald-, si tenía conocimiento que el demandante conduce otro bus, contestó que no (v. fs. 799, 790). De un examen al expediente contentivo de la demanda no se encuentra prueba alguna que demuestre o se refiera al hecho que el demandante goza de otros ingresos o genera ingresos de otra fuente que no sea la que aquí se discute. En cuanto a la subordinación jurídica consideramos que estamos en presencia de una relación de trabajo subordinada pues el operario se encuentra aferrado a una ruta otorgada al concesionario, por ende a un horario fijo, sigue las instrucciones y desarrolla una actividad en beneficio del concesionario o propietario del vehículo.

Visto lo anterior y definida la existencia de la relación de trabajo, queda ver el fin perseguido por el demandante en cuanto a que se condene solidariamente a los demandados, pues el sr. Oscar Grenald fue absuelto de las pretensiones perseguidas por el demandante en ambas instancia.

El Tribunal Superior de Trabajo no consideró al Sr. Oscar Grenald solidariamente responsable en vista de que "se desempeñaba en calidad de administrador y responsable directo del autobús con placa 3B-391, por lo que resulta que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Código de Trabajo no se le puede considerar como empleador".

Los artículos citados los debemos ver en conjunto con el artículo 89 del mismo capítulo del Código de Trabajo el cual contempla a quienes también se les debe considerar como empleadores.

El artículo 89 del Código de Trabajo dispone que serán considerados empleadores los contratistas, subcontratistas y demás empresas establecidas que contraten los servicios de trabajadores para la ejecución de trabajos en beneficio directo de terceros, con capital, equipo, dirección y otros elementos propios.

Observa la sala que el Tribunal Superior de Trabajo se ha limitado en ver quién es el propietario del transporte para señalar la responsabilidad de la relación de trabajo sin observar las diferentes modalidades o diferentes sujetos

que intervienen en este tipo de relación contractual.

En forma general, en el servicio de autotransporte intervienen tres sujetos, a saber: a)el dueño o propietario del transporte, quien no necesariamente tiene que ser el empleador; b)el administrador, intermediario, arrendatario e inclusive **el usufructuario**, que puede ser el mismo propietario del vehículo u otra persona y c) el chofer, conductor u operario del vehículo y/o ayudantes u otro tipo de colaboradores, los cuales pueden abarcar un sinnúmero de actividades.

En el presente caso estamos ante las tres figuras arriba citadas, una propietaria, un administrador y un chofer. La propietaria del vehículo, sra. Grenald, adquiere el vehículo por traspaso de su esposo y no conoce el manejo de este negocio. El sr. Grenald, administrador del vehículo es quien conoce realmente del negocio y por lo tanto se concluye que es quien toma las decisiones, da las instrucciones al chofer u operario, o sea al demandante, es usufructuario de las utilidades que genere el vehículo y no solo maneja los gastos, sino también decide sobre estos e igualmente los cubre. Todo esto se desprende claramente de las declaraciones de los esposos Grenald quienes señalan que las ganancias "van para la casa", sobretodo de las declaraciones de la sra. grenald a fojas 813 y s. s. El otro sujeto que interviene es el chofer u operario.

De lo anterior se concluye claramente que el sr. Grenald, quien funge como administrador, es quien realiza cualquier tipo de operación, incluyendo la contratación de los operarios del vehículo. Contrataciones éstas que son en beneficio de un tercero el propietario del vehículo y suyo propio, situación que contempla el artículo 89 del Código de Trabajo y establece que en estos casos la responsabilidad es solidaria entre estas personas.

Aunado a lo anterior, cuando el artículo 245 del Código de Trabajo define y decide la relación de trabajo entre los sujetos que intervienen en la prestación del servicio de autotransporte con los derechos y obligaciones que el derecho positivo establece, en este caso especial, debemos señalar que estamos ante una presunción "juris et de jure" que favorece ampliamente al asalariado. Por lo tanto, debemos considerar, en este caso en especial, que la responsabilidad de las prestaciones laborales ante el trabajador es solidaria del administrador y del propietario del bus.

El demandante señala violado el artículo 6 del Código de Trabajo. Este artículo contiene el principio de que en caso de conflicto o duda de las normas de nuestro ordenamiento laboral, se aplicará **la disposición o interpretación** mas favorable al trabajador. Sin embargo el demandante ha interpretado incorrectamente la disposición al pretender que esta norma sea aplicada a una situación o a hechos que genere dudas. Además cabe señalar que esta norma no es de carácter sustantivo, y no consagra un derecho subjetivo. Por lo tanto tampoco procede este cargo.

Los cargos endilgados por el demandante a los artículos 14 numerales 3 y 4, 69, 732 y 788 del Código de Trabajo, tratan sobre la valoración que le diera el Tribunal Superior de Trabajo a las pruebas, que fueron selectivas y discriminatorias, así como la ausencia de unas e igualmente señala que las declaraciones de los testigos fueron interesadas y no tomadas como sospechosas, que no fueron apreciadas en base a la regla de la sana crítica. A este respecto la Sala ha señalado en reiteradas ocasiones que el recurso de casación no es una tercera instancia con el propósito de revisar la valoración que le diera el juzgador a las pruebas presentadas en la demanda, sino más bien el fin del recurso de casación laboral trata sobre errores in judicando en que incurriera el juzgador. Cabe añadir que respecto a la supuesta falta a las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal Superior de Trabajo al valorar los testimonios presentados por la demandada, el juzgador tomó en cuenta lo dicho por el sr. Iván Lara, únicamente en la parte que confirmaba lo dicho por un testigo, precisamente presentado por la parte demandante y el testimonio del otro testigo no es considerado por el Tribunal Superior de Trabajo.

En cuanto a las dos certificaciones "que parecieran" ser contradictorias, el demandante no señala en que consiste esta supuesta contradicción y si se trata del "status" del demandante, ya ha sido aceptado que existía relación de trabajo, por lo tanto el "status" es favorable al demandante. Por todas estas razones consideramos que tampoco prosperan estos cargos.

Además de las violaciones ya estudiadas con respecto a la relación de trabajo, encontramos que, según el demandado, se han violado los artículos 54 y 732 del Código de Trabajo.

En cuanto a la infracción del artículo 54 del Código de Trabajo, los demandados señalaron que el Tribunal Superior de Trabajo "no tomó en consideración el sistema de cómputo previsto en la norma citada, pues no limitó, como debió, su apreciación al tiempo efectivo de manejo del demandante en el autobús" y, por lo tanto, no se percató de que el operario de un autobús en la ruta Panamá-Colón y viceversa "sólo recauda para sí entre 25 y 35 dólares diarios". Sobre esta cantidad se debería calcular las prestaciones reclamadas. A este respecto el Tribunal Superior de Trabajo acepta como cierta el salario alegado por el trabajador en el libelo de la demanda, que es de B/.60.00 diarios.

La Sala no encuentra fundamento para considerar como cierto el salario de B/.60.00 diarios, pues de los diferentes testimonios brindados encontramos que no existe certeza alguna del salario recibido por el operario, o mas bien debemos decir, de cuanto dinero le queda al operario del bus después de pagar el alquiler diario y realizar los diferentes gastos en que incurre por el uso del vehículo. Testigos presentados y que se activan en este negocio señalan que por lo general puede ser de B/.175 mensuales, otros que de 10 a 15 balboas diarios como promedio es lo que le queda al conductor. Por lo tanto al no existir certeza sobre la suma recibida, cabe señalar que esta Sala ha manifestado en diferentes ocasiones, que probada la relación de trabajo le corresponde al empleador probar el salario percibido por el trabajador, por ser quien lleva las planillas y demás controles exigidos a toda empresa y de no ser así, existe la presunción a favor del trabajador. Sin embargo, en la presente relación quien lleva el control de gastos diarios y quien puede demostrar la suma de dinero que queda al terminar el día de trabajo, o sea lo que pudiéramos considerar, el salario, es el trabajador, por lo tanto la carga de la prueba se revierte y en estos casos en particular, el operario debió entonces probar el salario alegado.

Ante la situación arriba planteada, debemos aplicar el artículo 142 del Código de Trabajo y procurar garantizar el salario mínimo. Sin embargo, la parte demandada en el recurso presentado solicita establecer el salario del trabajador en B/.25.00 diarios y, al ser éste superior al salario mínimo, así lo debemos aceptar, y por lo tanto el salario base para calcular las pretensiones aquí solicitadas. Por lo que debemos calcular en base al promedio de B/.25.00 diarios.

Por último, concordamos con el Tribunal Superior de Trabajo quien, después de un análisis exhaustivo y pormenorizado de las pruebas presentadas y en base al Registro de Movimiento diario de Buses con el propósito de obtener el tiempo efectivo laborado por el señor Váldez, consideramos que debemos ajustarnos a el, con la diferencia que se debe considerar el salario en base a B/.25.00 diarios. Lo que reproducimos a continuación:

Tiempo de trabajo efectivo en seis meses: 84 días	
Promedio de días trabajados en un mes: 14 días	
(84:6=14)	
Salario diario:	B/.25.00
Monto del salario mensual promedio	B/.350.00
(B/.25.00 x 14=B/.350.00)	
Vacaciones vencidas y proporcionales a pagar del 22 de enero de 1985 al 20 de mayo de 1993 (B/.350.00 x 8.342= B/.2,919.70)	B/.2,919.70
Décimo tercer mes vencidos y proporcional:	B/.2,919.70
TOTAL	**B/.5,839.40**

Con respecto a la prima de antigüedad, igualmente coincidimos en que la relación de trabajo se inició en 1985 y no en 1980, por lo tanto no tiene derecho a la prima de antigüedad por no haber prestado servicios durante más de 10 años continuos de trabajo.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 11 de diciembre de 1995 dentro del proceso laboral promovido por MARCOS VÁLDEZ HAWKINS contra OSCAR GRENALD Y/O ROSA DE GRENALD y condena solidariamente a los demandados a pagar la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON CUARENTA CENTÉSIMOS (B/.5,839.40/100) en concepto de vacaciones y décimo tercer mes vencidos y proporcionales, más CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES BALBOAS CON CUARENTA CENTÉSIMOS en concepto de intereses.

Las costas se fijan en un 10% del total de la condena.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS A. DÍAZ Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS A. DÍAZ Y OTROS -VS- AVICULTURA NACIONAL, S. A. Y ASESORÍA AVÍCOLA Y ADMINISTRATIVA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Jorge Enrique Sánchez, en representación de LUIS A. DÍAZ Y OTROS, interpuso ante esta Sala Laboral, Recurso de Casación Laboral contra la Sentencia de 5 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante la cual se confirma la Sentencia N° 21 de 31 de mayo de 1995 del Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, dentro del proceso laboral promovido por LUIS A. DÍAZ, LUIS A. SEGURA, FÉLIX SÁNCHEZ, JOSÉ FERNÁNDEZ, JUVENCIO SÁNCHEZ, LEOPOLDO GUZMÁN Y EVERARDO GUZMÁN, en contra de las empresas AVICULTURA NACIONAL, S. A. Y ASESORÍA AVÍCOLA Y ADMINISTRATIVA, S. A.

En el referido proceso laboral, el casacionista pretende que se condene a Avicultura Nacional, S. A. y Asesoría Avícola y Administrativa, S. A., a pagar solidariamente a los demandantes las sumas de dinero correspondientes a media hora de descanso entre las jornadas, trabajadas y no pagadas desde que iniciaron sus respectivas relaciones laborales hasta el 16 de mayo de 1991, cuando se comenzó a dar la media hora de descanso, más los recargos, intereses, costas y gastos.

El Tribunal de primera instancia, mediante la Sentencia N° 21 de 31 de mayo de 1995, al absolver a las empresas demandadas de las reclamaciones en su contra, expresó lo siguiente:

> "... se acredita en el proceso documento fechado 22 de febrero de 1989, en su fiel copia en original, visible a fojas 201-202, identificadas como prueba E-1, transacción o acuerdo, ante la Dirección Regional de Trabajo de Chorrera.
>
> El documento en mención, en su calidad de acuerdo tiene a nuestro juicio la validez necesaria, toda vez que no se ha demostrado algún vicio del consentimiento que anule el mismo, los conocidos como

dolo, error o violencia.

Conviene señalar que dicho acuerdo abarca desde el 1 de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1988 y en su último párrafo el propio Sindicato manifiesta su completa aceptación del contenido de la revisión y reconoce, además, que a los trabajadores antes enunciados se les ha pagado correctamente los recargos y descansos autorizados por la ley.

En otra parte el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social mediante peritaje N° 18-DA-93, de 1 de abril de 1993 da respuesta a una solicitud de la Junta de Conciliación y Decisión N° 4, la cual determina "que desde el acuerdo del 22 de febrero de 1989, hasta el 16 de mayo de 1991, en la revisión de los reportes del tiempo las cuales son preparadas por los supervisores o capataces, no se detalla la interrupción entre jornadas ya que se hace en forma corrida.

Consideramos que no se puede determinar si las empresas Asesoría Avícola y Administrativa y/o Avicultura Nacional, S. A. haya pagado la media hora de descanso obligatorio entre jornadas" (fojas 203-204, prueba E-2).

Otra prueba pericial aprobada por este Juzgado, en ocasión del proceso que nos ocupa, nos da cuenta que dos (2) auditores del Departamento de Auditoría Laboral y Sindical, el primero a fojas 234-235 concluye en iguales términos del auditor de la prueba E-2, foja 203 al que hicimos referencia y el último auditor concluye, en peritaje visible a foja 238, en los siguientes términos "no se detalla la interrupción entre jornadas de ningún trabajador y se hace en forma corrida, no hay pruebas fehacientes y contundentes que revelen que en efecto el trabajador laboró la media (1/2) hora de almuerzo al servicio del empleador." Este peritaje comprende el período del 22 de febrero de 1989, hasta el 16 de mayo de 1991.

Conforme a lo anterior y tratándose de reclamos de horas y recargos de descanso, debemos en consecuencia aplicar las reglas generales sobre las cargas probatorias, y en este sentido de conformidad con el artículo 735 del Código de Trabajo, es la parte demandante quien al afirmar la existencia de hechos como fundamento de su acción, le corresponde la necesidad y responsabilidad de probar ..." (fs. 242 a 244 expediente del proceso laboral).

El Tribunal Superior de Trabajo resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandante y confirmó la decisión de primera instancia, expresando que:

"Esta Superioridad, luego de revisar las constancias procesales debe coincidir con el Juzgador de Primera instancia en que efectivamente y tal como consta en el documento presentado como prueba visible a fojas 201 del expediente, el Sindicato Industrial de Trabajadores Avícolas y Afines y la empresa Productos Avícolas Fidanque, S. A., el 22 de febrero de 1989, luego de una revisión efectuada a las planillas de la empresa, con motivo del reclamo presentado por el Sindicato de que se revisaran las mismas a fin de detectar cualquier posible error en el pago de horas extraordinarias, días de descanso compensatorios y descanso de media jornadas, arribaron al acuerdo de que se había demostrado que no existe diferencia a favor de los recolectores de aves, celadores, conductores y ayudantes de venta viva.
...
En conclusión, no existen reportes individuales de cada trabajador con su hora de inicio y terminación de cada jornada de trabajo, ya que en el Informe diario de ventas se establece la hora de inicio y terminación del trabajo, por lo que resultaría imposible determinar si efectivamente se laboró la media hora de descanso y la cantidad

laborada por cada uno de los demandantes."

El casacionista estima que la decisión del Tribunal Superior de Trabajo, viola los artículos 34 y 39 del Código de Trabajo, los cuales son del siguiente tenor literal:

> "ARTÍCULO 34: Se computa en la jornada, como tiempo de trabajo sujeto a salario:
>
> 1° El tiempo durante el cual el trabajador está a disposición exclusiva del empleador; ...
>
> 3° El tiempo requerido para su alimentación dentro de la jornada, cuando por la naturaleza del trabajo se haga necesaria la permanencia del trabajador en el local o lugar donde realiza su labor.
>
> ARTÍCULO 39: Todo empleador está obligado a conceder a sus trabajadores el período de descanso normal que necesitan para reponer sus fuerzas, de conformidad con las siguientes reglas:
>
> 1° La jornada de trabajo tendrá un período de descanso no menor de media hora ni mayor de dos horas. Sin embargo, en caso de jornadas nocturnas o mixtas, el empleador y el trabajador pueden convenir en distribuir dichos descansos, sin exceder los límites de la jornada correspondiente, de manera que no se interrumpa la producción."

El casacionista considera que el Tribunal de segunda instancia violó los artículos 34 y 39 en forma directa, ya que los demandantes no podían utilizar libremente la media hora mínima de descanso para ingerir sus alimentos, porque estaban a disponibilidad de sus empleadores, y no fue sino a partir del 16 de mayo de 1991, cuando se reglamentó el uso de la media hora de comida durante la jornada de trabajo, la cual es de obligatoria remuneración cuando por la naturaleza del trabajo sea necesario permanecer en el lugar donde se labora, obligación que las empresas demandadas no cumplieron.

Los trabajadores Luis A. Díaz, recolector de aves con salario de B/.218.40, Luis A. Segura, chofer con salario de B/.284.96, Félix Sánchez, recolector de aves con salario de B/.243.26, José Fernández, recolector de aves con salario de B/.375.44, Juvencio Sánchez, chofer con salario de B/.413.92, Leopoldo Guzmán, chofer con salario de B/.900.00 y Everardo Guzmán, recolector de aves con salario de B/.218.40, solicitaron el pago de horas extra laboradas en la media hora mínima de descanso obligatorio durante la jornada, desde el inicio de la relación laboral el 15 de diciembre de 1982, 17 de enero de 1983, 23 de octubre de 1979, 17 de mayo de 1976, 12 de mayo de 1961, 16 de junio de 1965 y 1 de agosto de 1980 respectivamente hasta el 16 de mayo de 1991.

Conforme al artículo 735 del Código de Trabajo, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción, y no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos o reconocidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exija prueba específica; los hechos notorios; los que no estén amparados por una presunción de derecho, y el derecho escrito que rige en la Nación, o en los municipios, en las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas.

En el presente caso no hay presunción legal a favor de los trabajadores que los exima de la carga de la prueba, por lo que les corresponde probar que efectivamente laboraron durante la media hora mínima de descanso durante la jornada.

Consta a foja 201 del expediente del proceso laboral una transacción celebrada entre la empresa y el Sindicato Industrial de Trabajadores Avícolas y Afines en la cual este expresa que presentó un reclamo para que se revisaran las planillas de las empresas que constituyen la unidad económica del grupo Chassin-Fidanque a fin de detectar cualquier posible error en el pago de horas extraordinarias, días de descanso compensatorios y descansos de medias jornadas

de los trabajadores que ejecutan labores como recolectores de aves, celadores, conductores y ayudantes de venta viva y cualquier otro trabajador de las empresas que **tuviese derecho a algún ajuste económico por razón del reclamo presentado por el Sindicato** y con motivo de dicho examen que abarca desde el **1 de enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1988** ambas partes llegaron a la conclusión de que "la revisión efectuada a las planillas de pago demostró que **no existe diferencia a favor de los recolectores de aves, celadores, conductores y ayudantes de ventaviva.**" y el Sindicato manifestó adicionalmente que la firma de esta transacción constituía su completa aceptación del contenido de la revisión y reconocimiento de que a los trabajadores antes enunciados se les pagó correctamente los recargos y descansos autorizados por Ley.

La Sala Laboral ha expresado con anterioridad que son válidas las transacciones laborales en materia de derechos inciertos e indiscutibles, porque ello no constituye una renuncia tácita o expresa de un derecho abstracto, pero debe dejarse claro que en el presente caso no se ha convenido acerca de un derecho abstracto, sino que en la transacción los trabajadores y la empresa reconocen que una vez efectuado un estudio y análisis de los documentos de la empresa, **no encontraron diferencia alguna en favor de los trabajadores,** por tanto el Sindicato de Trabajadores no renunció a ningún derecho, ya que se determinó que no existía ninguno a su favor y por consiguiente la transacción no es violatoria del artículo 8 del Código de Trabajo.

Se pretende que esta Sala determine si los trabajadores han probado que trabajaron y no se les pagó la media hora mínima de descanso durante la jornada **desde enero de 1989 hasta el 16 de mayo de 1991,** fecha en que ambas partes señalan que se reglamentó el uso de esta media hora mínima de descanso y que como consecuencia de esa valoración probatoria se establezca si se ha violado o no normas de derecho sustancial laboral.

Los trabajadores presentaron como pruebas dos informes de venta viva de los años 1985 y 1986 confeccionados por Leopoldo Guzmán, los cuales no son útiles para probar el derecho reclamado por los trabajadores porque en ellos no se puede precisar qué horarios cubrían los demandantes, ya que no se apuntaban a qué jornadas del día pertenecían las horas, si en la mañana o en la noche y porque son informes de años incluidos en la revisión que se hizo para firmar la transacción celebrada entre los trabajadores y la empresa.

Las demás pruebas documentales y la inspección ocular a los libros, planillas y otros documentos contables de la empresa solicitada por las partes para determinar si se hizo el pago de la media hora mínima de descanso en la jornada, no fueron suficientes para establecer si se concedía o no a los trabajadores el derecho al descanso obligatorio durante la jornada.

Cabe destacar que el auditor del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social encargado de efectuar el peritaje, Nicolás Antonio Zambrano expresó lo siguiente:

> "Desde el acuerdo del 22 de febrero de 1989 hasta el 16 de mayo de 1991, en la revisión de los reportes del tiempo, los cuales son preparados por los supervisores o capataces no se detalla la interrupción entre jornadas ya que se hace de forma corrida.
>
> Consideramos que no se puede determinar si la empresa Asesoría Avícola y Administrativa y/o Avicultura Nacional, S. A. haya pagado la media hora (1/2) de descanso obligatorio entre jornadas.
> ...
> En prueba que reposa en el Juzgado 1° donde verificamos los comprobantes de pago y los registros y documentos de tiempos, no se detalla la forma de pago si es calculada la media hora de Alimentación, ya que dicha jornada de trabajo es corrida y a su vez son preparados por los capataces o supervisores ..." (fs. 234).

En una ampliación del peritaje anterior, el auditor Vicente Espina señaló lo siguiente:

> "En la revisión de los registros de tiempo, los cuales son preparados por los Capataces y Supervisores sin las firmas de los trabajadores, no se detalla la interrupción entre jornadas de ningún trabajador y se hace en forma corrida, no hay pruebas fehacientes y contundentes que revelen que en efecto el trabajador laboró la media (1/2) hora de almuerzo al servicio del empleador.
>
> Por otra parte queremos señalar que cuando el trabajador estaba a disposición del empleador en su media hora, éstas se marcaban en los registros de tiempo del trabajador y eran pagadas correctamente, remítase a las planillas de pago de la primera quincena de abril de 1989 y subsiguientes." (fs. 238 del expediente del proceso laboral).

Las pruebas aportadas no son, pues suficientes para establecer la violación de los artículos 34 y 39 del Código Laboral.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia de 5 de octubre de 1995, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: LUIS A. DÍAZ Y OTROS -vs- AVICULTURA NACIONAL, S. A. Y ASESORÍA AVÍCOLA Y ADMINISTRATIVA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ARISTIDES SERRACÍN JR. CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR. VS XEROX DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Julio Antonio Candanedo, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 22 de septiembre de 1995 proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral instaurado por su representado, el señor Abel Aristides Serracín Jr. contra Xerox de Panamá, S. A.

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia y a la vez condene a la parte demandada al pago de ciento catorce mil quinientos setenta y un balboas con ocho centavos (B/.114,571.08).

Se trata de un proceso laboral en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada al pago de la suma arriba mencionada en concepto de diferencia de comisiones por cobro de 2 1/2% reducido a 1% desde enero de 1970 hasta agosto de 1982 y de los salarios derivados por el no pago de las comisiones por cobro realizado por el trabajador demandante, que van del 1 de septiembre de 1982 al 25 de abril de 1988.

El juzgador de primera instancia condenó al demandado a pagarle al demandante la suma de ochenta y seis mil setecientos cuarenta y tres centésimos (B/.86,745.43) en concepto de diferencia de comisiones dejadas de pagar de 1% a 2 1/2%, más el pago de costas e intereses legales y absolvió a la empresa de las demás pretensiones. El Tribunal Superior de Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a la empresa de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra.

La Sala pasa a examinar las infracciones que se endilgan a la sentencia de

segunda instancia.

El recurrente considera que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 732, 62, 63, 64, 65 y 159 del Código de Trabajo.

La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee presentó escrito de oposición al recurso de casación en su calidad de apoderado judicial especial del demandado.

Con respecto a la infracción al artículo 732 del Código de Trabajo, el recurrente señala lo siguiente:

> "La sentencia de 22 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral a que se refiere el memorial conculca en concepto de violación directa por omisión el Artículo 732 del Código Laboral el cual es del tenor siguiente:
> ...
> La disposición legal transcrita es clara y precisa; el Tribunal de Segunda Instancia estaba en la obligación de ponderar y evaluar todas las pruebas existentes en autos para que a través de la debida confrontación entre unas y otras, encontrar la verdad objetiva que de ellas se desprende a través de un razonamiento lógico y equitativo, cual es, la de que el trabajador **ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR.** laboraba con la empresa demandada desde el 7 de noviembre de 1966. Véase que al no sopesar la Certificación del pago de cuotas del Seguro Social por parte de la empresa demandada, a favor del trabajador demandante, con cada una de 43 pruebas documentales presentadas el 27 de noviembre de 1989 por ante el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, y todas en su conjunto, así como tampoco con la prueba documental (2) consistente en 4 libretas contentivas de reportes técnicos efectuados por el señor **ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR.** para la **XEROX DE PANAMÁ, S. A.**, y que igualmente fueran incorporadas a los autos mediante el escrito de 27 de noviembre de 1989 ya mencionado, incurre en Error de Lógica y de Equidad Procesal, lo que indefectiblemente llevó al Tribunal Superior de Trabajo en la sentencia recurrida, a no cumplir con el principio de la Sana Crítica enmarcado en la disposición legal anotada.

Con respecto al artículo 62, el actor señala que ha sido violado por lo siguiente:

> "La extensa acreditación documental que el trabajador demandante aportó a la encuesta procesal, prueban y acreditan como verdad procesal innegable la subordinación jurídica a la cual estaba sometida el trabajador demandante, con la empresa demanda."

Sobre la violación al artículo 63 del Código de Trabajo, el demandante dice que ha sido violado de la siguiente manera:

> "por cuanto que tiene por mercantil un Contrato Laboral, que la demandada denominó Contrato de Concesión Mercantil y que descansa a foja 33 y 108 de autos; y ello en virtud de que las pruebas documentales existentes en autos determinan que la relación entre el trabajador demandante y la Empresa demandada era de naturaleza laboral y no mercantil; de allí que el Tribunal Superior de trabajo debió prescindir y desestimar tal argumentación de la empresa".

Del artículo 64 del Código de Trabajo señaló lo siguiente:

> "La vulneración de la norma consiste en que el Tribunal Superior de Trabajo, en la sentencia impugnada, no tuvo en cuenta que a través de las innumerables pruebas documentales aportadas por el trabajador demandante, se acredita la dirección ejercida por la empresa demandada".

De todo lo anterior se desprende claramente que los cargos que alega el casacionista se fundamentan en que no está de acuerdo con la valoración que el Tribunal Superior de Trabajo le dio a las pruebas, al igual que no se evaluaron otras presentadas al proceso y por lo tanto, el fallo resultó en su contra.

En diferentes ocasiones esta Sala ha señalado que el recurso de casación no es una tercera instancia con el objeto de revisar el valor que el Tribunal Superior de Trabajo le haya dado a las pruebas, sino más bien es un recurso con el objeto de revisar los errores in judicando en que haya incurrido el tribunal de segunda instancia. Igualmente ha señalado esta Sala, que solo en ocasiones excepcionales puede entrar a juzgar la valoración que el juez le dé a las pruebas y es en los casos en que dicho tribunal haya incurrido en un error manifiesto, un error que salte a la vista sin mayor dificultad.

En el caso bajo estudio, el recurrente no ha tomado en cuenta la citada y vigente orientación jurisprudencial. Esto es así por cuanto él recurrente se limita a señalar las pruebas que según el han sido mal apreciadas o no fueron apreciadas, y sin embargo no explicó -frente a cada una de ellas- lo que la prueba acredita y el mérito que se le debió reconocer a su favor. Pues bien, el actor señaló un determinado número de pruebas sin expresar cómo cada una de ellas demuestra el error del juzgador de segunda instancia, el cual, debe aparecer a simple vista o ser manifiesto con el simple cotejo de las pruebas.

Se advierte entonces, luego de una lectura de los cargos endilgados, que simplemente el recurrente hace una mención de las pruebas que supuestamente no se valoraron o mal interpretaron, sin sustentar o demostrar el porqué dichas pruebas conducirían a una conclusión opuesta a la que el Tribunal Superior resolvió.

Siguiendo este orden de ideas, por no ser el recurso de casación una tercera instancia, el casacionista al manifestar que existe un error en la interpretación de la prueba, está obligado a sustentar con claridad y precisión el error manifiesto para que sirva a la Sala de instrumento en una resolución favorable. De otra manera, la Sala tendría que deducir el supuesto error evidente y para juzgar la sentencia impugnada se requeriría acudir a la investigación y búsqueda del supuesto error porque simplemente el actor ha señalado que se incurre en error sin explicar cómo se han infringido las reglas de la sana crítica.

Con respecto a la violación al artículo 159 del Código de Trabajo el recurrente señaló lo siguiente:

> "Al considerar el Tribunal Superior de Trabajo en la resolución recurrida, en abierta contradicción a las pruebas existentes en autos, que antes del 20 de noviembre de 1972, entre el trabajador demandante y la empresa demandada existía un contrato de concesión mercantil, atenta contra el salario convenido entre las partes integrantes de esta relación procesal laboral, toda vez que permite la reducción salarial del Trabajador a través del desconocimiento del pago de comisiones que ya habían sido pactadas y efectuadas desde el 7 de noviembre de 1966."

Veamos las consideraciones que el Tribunal Superior de Trabajo tomó en cuenta para emitir su decisión:

> "El Tribunal Superior, estima que la relación laboral existente entre el demandante y la empresa demandada, surge a partir de la suscripción del Contrato de Trabajo, el 20 de noviembre de 1972, según se lee a fojas 39 y 166, ya que con anterioridad, lo que había entre las partes era un contrato de Concesión Mercantil (fojas 33-108). Además es jurisprudencia constante y reiterada que el hecho del pago de cuotas de Seguro Social no es prueba idónea para determinar la existencia de la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 64 y 65 del Código de Trabajo.
>
> En consecuencia, este Tribunal Superior considera que no existe

> obligación alguna por parte de la empresa al pago de una comisión de cobro del 2 1/2%, ya que lo pactado en el contrato laboral fue de un salario de B/.250.00 mensual, que se le fue aumentando en el transcurso del tiempo hasta B/.1.132.00, tal como se observa a fojas 177, más una comisión de 1% por los cobros según adición hecha a partir del 1° de octubre de 1975, tal como se lee en los documentos operantes a fojas 41, 43, y 636.
>
> El cobro de comisión del 2 1/2, fue con anterioridad a la suscripción del contrato de trabajo, cuando la relación que mantenían las partes era producto de una concesión comercial muy corriente en nuestro medio comercial. Las estimaciones y cálculos de los peritos al contestar las preguntas, responden más que todo a una aplicación del 2 1/2 pactado, durante la relación mercantil, es decir a partir de 1966, pero que le fueron pagados según el perito (fojas 608) y no subsiste al establecimiento una relación laboral a partir del 20 de Noviembre de 1972 y que en todo caso resulta superior.

De lo anteriormente expuesto, se pueden resumir las razones que motivaron la decisión del Tribunal Superior de Trabajo en los siguientes puntos:

1. Que durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 1966 al 20 de noviembre de 1972 se firmó un contrato de concesión (v. fs. 108 a 111), eminentemente mercantil.

2. Que una vez terminado el contrato de concesión, se suscribió un contrato laboral con fecha de inicio de 20 de noviembre de 1972.

3. Que en el contrato de concesión se pactó una comisión de 2 1/2% y en el contrato laboral fue de 1%.

4. Que la empresa canceló en su totalidad las comisiones correspondientes de acuerdo a lo pactado, durante los períodos señalados.

5. Que el perito, señor Luis A. Ábrego en representación de la firma Peat, Marwick, Mitchell & Co., rindió informe pericial en el cual indica que el trabajador no ha sufrido desmejoramiento económico, sino todo lo contrario, pues, en el contrato laboral se estableció una remuneración fija mensual en concepto de salario, la cual fue superior a los pagos que recibía el sr. Serracín por la concesión mercantil otorgada por Xerox, e incluso sumas adicionales.

Ya hemos estudiado en las infracciones anteriores la opinión de esta Sala con respecto a la evaluación de las pruebas por parte del Tribunal Superior de Trabajo, por lo tanto no volveremos a entrar en analizar esta situación.

Considera la Sala que, aunque no consideramos que existió relación de trabajo con anterioridad a la vigencia del Código de Trabajo de 1972, entraremos a ver el cargo en cuanto a que existió reducción de salario. A este respecto no se nos debe escapar el artículo 142 del Código de Trabajo, según fue subrogado por la Ley 1ª de 1986, el cual regía para la fecha de presentación de la demanda, en su parte pertinente señalaba lo siguiente:

> "El empleador y el trabajador podrán convenir y modificar las condiciones de la remuneración por tareas, piezas, **comisiones** o primas complementarias."

En la actualidad, el citado artículo ha sido subrogado y, en su parte pertinente ha quedado de la siguiente manera:

> "El empleador y el trabajador podrán convenir y modificar las condiciones de la remuneración por tareas, piezas, comisiones".

En el presente caso, cada vez que existía una modificación o alteración a la remuneración percibida por el trabajador ya sea mediante acuerdo mutuo o por

decisión unilateral de la empresa, siempre fue en beneficio del trabajador, aun a pesar de que, por un lado se pactaba la disminución de la remuneración en concepto de comisiones por ventas y por el otro se establecía o se aumentaba el salario base.

De acuerdo al artículo 142 del Código de Trabajo que regía a la fecha y como ha sido subrogado, las partes tienen la potestad de pactar y modificar las comisiones, siempre que no sea en desmejoramiento del trabajador, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

En el caso de haber existido modificación en la remuneración del trabajador y ésta haya sido una decisión unilateral por parte de la empresa, esta Sala se pronunció en sentencia de 17 de diciembre de 1976 de la siguiente manera:

> "A lo anotado se agrega que si el cambio de las condiciones de trabajo ocurrió en el mes de junio de 1972 y la reclamación del trabajador se hizo después de un año y siete meses, el período transcurrido nos indica que tácitamente convino con las nuevas condiciones que le ofreció la empresa".

En este caso en concreto, el reclamo del trabajador, se hace con la presentación de la demanda el 13 de mayo de 1988, la cual consiste en un cambio de las comisiones por ventas del 2 1/5% al 1% que va del año de 1970 a 1982 y las consecuencias derivadas de esta reducción en sus ingresos a partir del año de 1982.

Encontramos entonces que ha transcurrido en exceso un tiempo prudencial **para que el actor reclamara y manifestara no estar de acuerdo con esta modificación salarial a su favor** y por lo tanto, ha existido una tácita aceptación por parte del demandante de la modificación del salario.

De todo lo anterior podemos concluir que el Tribunal Superior de Trabajo analizó y tomó en cuenta las pruebas presentadas de manera objetiva, dado que no sólo consideró los contratos, las notas, las declaraciones de los peritos y otros documentos que reposan en el expediente presentados por el propio demandante. Por otro lado, vemos que aun en caso de que hubiera existido relación de trabajo con anterioridad a 1972, las modificaciones acordadas a la remuneración total percibida por el trabajador, siempre fueron en aumento a favor de el trabajador y nunca en detrimento de él. Por lo tanto, considera la Sala que no prosperan los cargos endilgados a la sentencia de segunda instancia.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 22 de septiembre de 1995, dentro del proceso laboral entablado por ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR. -vs- XEROX DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA

Dentro del Recurso de Casación interpuesto por licenciado **Julio Antonio Candanedo** en nombre y representación de **ARISTIDES SERRACÍN Jr.** contra la sentencia de 22 de septiembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: **Abel Aristides Serracín Jr. -vs- Xerox de Panamá, S. A.** salvo mi voto, por las consideraciones que expongo a continuación, y que se plasma en el proyecto inicial, que no tuvo la acogida por parte del resto de los Magistrados que integran la mayoría de la Sala:

Este recurso tiene su génesis en un proceso común instaurado en el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección, en reclamo de salarios por comisiones dejados de pagar por Xerox de Panamá, S. A., más los intereses laborales, los cuales asciende a la suma de B/.104,595.43.

El juzgador de primera instancia, mediante sentencia N° 6 de 30 de julio de 1992, condenó a la empresa demandada a que pagara al trabajador **Serracín**, la suma de B/.86,745.43, más las costas tasada en un 15%, y además los gastos ocasionados que derivan de la diferencia de las comisiones por cobro de 2 1/2% al 1% del período 1970 a agosto de 1982 y de los salarios derivados por no pago de las comisiones por cobro realizados por el demandante y que corresponden al período de 1 de septiembre de 1982 al 25 de abril de 1988. La empresa Xerox de Panamá, S. A. fue absuelta del pago de comisiones por venta.

Posteriormente la parte afectada con la sentencia citada, interpuso recurso de apelación contra la misma ante el Tribunal Superior de Trabajo. Este Tribunal Colegiado al resolver la alzada revocó la Resolución N° 6 de 30 de julio de 1992 y en su lugar absolvió a la empresa de todas las reclamaciones interpuesta en su contra, al dictar su decisión el 22 de septiembre de 1995.

Las consideraciones que sostuvo el Tribunal de Segunda instancia para absolver a **Xerox de Panamá, S. A.**, fueron las siguientes:

1. Que la relación laboral existente entre el demandante y la empresa surge a partir de la suscripción del Contrato de Trabajo, es decir el 20 de noviembre de 1972, ya que con anterioridad lo que existía era un contrato de concesión mercantil;

2. Que el pago de cuotas de Seguro Social no es prueba idónea para determinar la existencia de la relación de trabajo;

3. Que no existe la obligación por parte de Xerox de Panamá, S. A. al pago de una comisión de cobro del 2 1/2% ya que lo pactado en el contrato laboral fue de un salario de B/.250.00 mensual, que fue aumentando en el transcurso del tiempo hasta B/.1,132.00 más una comisión de 1% por los cobros, según adición hecha a partir del 1° de octubre de 1985.

4. Que el cobro de comisiones de 2 1/2% fue con anterioridad a la suscripción del contrato de trabajo, cuando la relación que mantenían las partes era producto de una concesión comercial;

5. Que a partir del contrato de trabajo que se verificó el 20 de noviembre de 1972, nunca se pactó pago de comisiones del 2 1/2%, y que además es evidente de que el trabajador no sufrió desmejoramiento económico alguno, ya que la remuneración fija superaba los pagos que recibió con anterioridad bajo la concesión mercantil, antes de la suscripción del Contrato de Trabajo.

De la sentencia de 22 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, el trabajador mediante su procurador judicial interpuso recurso de casación, en el cual señala que el Tribunal de segunda instancia ha violado los artículos 732, 62, 63, 64 y 159 del Código de Trabajo.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de Casación Laboral entran a resolver la presente controversia:

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 732 del Código de Trabajo, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 732. Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.
>
> El Juez expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponda."

Según el recurrente el Tribunal de Segunda Instancia estaba en la obligación de ponderar y evaluar todas las pruebas existentes en autos para que a través de las mismas se encontrara la verdad objetiva que de ellas se desprende por medio de un razonamiento lógico y equitativo. Ese razonamiento lógico y equitativo consistía en reconocer que el señor **Serracín Jr.** laboraba con la empresa demandada desde el 7 de noviembre de 1966, tal como pudo probarse con la certificación del pago de cuotas del Seguro Social, cuatro libretas contentivas de reportes técnicos efectuados por el señor **ABEL ARISTIDES SERRACÍN JR.** para **Xerox de Panamá, S. A.**, entre otras pruebas.

Frente al argumento esgrimido por el casacionista, para este Tribunal es importante señalar, que en reiterada jurisprudencia se ha indicado que no es procedente en esta etapa judicial entrar a conocer normas procesales o adjetivas, de manera aislada y que en este caso se trata de una disposición de valoración de pruebas. Esto es que sólo el Tribunal de Casación conoce **de errores in judicando** y no de errores in procedendo.

Sin embargo a pesar de que esta ha sido la posición de la Sala Tercera en los casos de casación laboral, también hemos manifestado que si se ha verificado un error de hecho en la valoración de prueba por parte del Tribunal Superior de Trabajo, es dable entrar a conocer de tales errores (Ver Sentencias de 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Por lo anterior, creemos conveniente estudiar los argumentos, pruebas y la norma que se indica que ha sido violada, puesto que a nuestro concepto las apreciaciones del Tribunal Superior de Trabajo, se quedan cortas al analizar el caso que nos ocupa.

En primer lugar, es de suma importancia establecer, la fecha de inicio de la relación de trabajo entre el señor **SERRACÍN JR.** y la **Xerox de Panamá, S. A.** ya que es aquí de donde pudiera derivar una serie de obligaciones por parte de la empresa demandada, y que el Tribunal Superior de Trabajo pasó por alto al sólo circunscribirse a lo señalado por la empresa. Según lo expresado por el Tribunal de Segunda Instancia el contrato de 1966 era una concesión mercantil, y adicionó que la relación de trabajo se inicia en 1972 con la entrada en vigencia del Código de Trabajo y la suscripción de un contrato de trabajo.

Según manifiesta el casacionista inició las relaciones laborales con **Xerox de Panamá, S. A.** el 7 de noviembre de 1966. Como dijéramos en líneas anteriores, estima la empresa, y el Tribunal Superior, que la relación existente desde 1966 a 1972 era comercial, puesto que se trataba de un contrato de concesión mercantil.

El contrato que obra a foja 108 de uno de los antecedentes de este proceso, trata del contrato de concesión que suscribiera el señor **SERRACíN JR.** y la **Xerox de Panamá, S. A.** el 7 de noviembre de 1966.

Este documento mantiene dentro de sus cláusulas una serie de reglamentaciones que en principio dan la impresión que la actividad del señor **SERRACÍN** era independiente, es decir una concesión mercantil, tal y como lo ha afirmado la empresa. Y señalamos que en principio, ya que luego de que se cotejara el contrato con otros documentos que obran en los antecedentes a que hemos hecho referencia, todo indica de manera ineludible que la evaluación que hiciera el Tribunal Superior de Trabajo no es acorde con el contenido de los mismos.

En primer lugar, hacemos referencia a lo manifestado por la empresa, quien señala que el señor **ABEL ARISTIDES SERRACÍN** y **Xerox de Panamá, S. A.** iniciaron una relación de naturaleza comercial recogida en un **contrato de concesión**, y que las concesiones a que se refiere el demandante fueron pagadas a partir del 7 de mayo de 1969, mediante anexo o adición al referido **Contrato Mercantil.**

En lo que respecta a los contratos de concesión de naturaleza mercantil, la doctrina laboral ha indicado que "en algunos países del mundo, es frecuente que algunos sectores de la producción, especialmente en la venta de ciertos

productos alimenticios de distribución masiva, los trabajadores sean colocados mediante mecanismos de artificio, en un status diferente al que legalmente le corresponde, logrando de esta forma evadir la aplicación de las normas laborales. Se trata de trabajadores cuya relación de trabajo es ocultada mediante la apariencia de una relación jurídica de otro tipo, civil o mercantil, que excluye la aplicación de las normas laborales y de seguridad social y deja a dichos trabajadores fuera del alcance del amparo jurídico que estas normas presentan". **(HERNAN DE ÁLVAREZ, Oscar. La Prestación de Trabajo en los casos de fraude y simulación en Derecho Laboral, Revista de doctrina jurisprudencia e informaciones sociales. Tomo XXIX-N° 141, Enero - Marzo 1986 Pág. 51)** (Subrayado es nuestro).

Tal como se ha reproducido el comentario anterior, esta Sala es de la impresión fundada, que el caso sub-júdice reviste características propias de una relación de trabajo, que a pesar de la existencia de un contrato de concesión mercantil, que mantiene cláusulas que dan la impresión que el concesionario, en su nombre, o sea **SERRACÍN**, debe alquilar línea telefónica personal y local para la atención inmediata de los servicios correspondientes que sean requeridos, la realidad es otra.

En este punto queremos incluir otro comentario de Oscar Hernan De Alvarez, muy apropiado para este caso quien ha indicado que "para obtener su empleo, el trabajador suele ser obligado a firmar un contrato de `concesión para la distribución del producto y a veces de `arrendamiento , del vehículo que utiliza para transportarlos. En algunos casos, se exige además al trabajador que constituya una firma mercantil inscrita en el Registro de Comercio, con lo cual se pretende sustentar la calificación jurídica de `comerciante autónomo. **(HERNÁN DE ÁLVAREZ, Oscar op. cit. pág. 52).**

Nosotros agregaríamos que no sólo se arrienda vehículos, sino también locales, líneas telefónicas, e instalación del servicio de agua y electricidad del supuesto comerciante, tal como ocurrió en este caso.

A partir del contrato de concesión antes mencionado, la empresa **Xerox de Panamá, S. A.** mantuvo una serie de comunicaciones que deja entrever claramente que la relación de naturaleza mercantil, era esencialmente laboral. Se colige de esas comunicaciones, la subordinación jurídica, y la dependencia económica elementos éstos que caracterizan la relación de trabajo, tal como lo preceptuaba el artículo 7 del Código de Trabajo de 1947, aplicable a la relación de trabajo que va de 1966 al 2 de abril de 1972. Para mayor claridad a continuación trascribiremos dicha normas.

> "Artículo 7. Contrato individual de trabajo es el convenio verbal o escrito, mediante el cual una persona se obliga a prestarle a otra sus servicios o ejecutarle una obra bajo su dependencia continua y por una remuneración y salario.
>
> Parágrafo. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo a lo que se refiera a trabajo". **(Subrayado es nuestro).**

Si bien es cierto la empresa adujo que la relación de trabajo se inició en 1972, al entrar en vigencia el Código de Trabajo, no es menos cierto que por ello, debe considerarse las relaciones antes de 1972, meramente comercial. Confirma nuestra apreciación el hecho que a foja 178 de los antecedentes de este proceso, la empresa, junto con el trabajador firmaron en mutuo acuerdo en la que ambas partes aceptaron que la relación de trabajo fue iniciada el día 20 de noviembre de 1968. Esta declaración desvirtúa lo afirmado por la empresa, en el sentido de que la relación de trabajo con **SERRACÍN** se inició en 1972. En lo que respecta al trabajador, aún que este manifiesta que la relación de trabajo se inició el 20 de noviembre de 1968, su declaración en este acuerdo no limita los derechos adquiridos antes y durante la ejecución de este acuerdo, pues los mismos son irrenunciables.

En 1968, para el señor **SERRACÍN** subsistían las mismas condiciones que se

pactaran por medio del contrato de concesión antes mencionado. Por ello estamos convencidos de que desde un principio, es decir desde el 7 de noviembre de 1966, tal como se desprende de las pruebas documentales, se verificó la relación de trabajo desvirtuándose así el argumento de que entre las partes existía un nexo comercial. Muestra de lo comentado tenemos, a fojas 112 de los antecedentes, correspondencia interna de la **Xerox** de 13 de diciembre de 1966, cuyo contenido revela entre otras cosas, la obligación de **SERRACÍN** de enviar reportes técnicos todos los viernes. También reposa a foja 113 otra nota de 6 de abril de 1967, por medio del cual el Gerente Técnico de **Xerox**, le enumera ciertas indicaciones para el mantenimiento y servicios de las máquinas de esa compañía, que textualmente dice lo siguiente:

"Sr. Abel A. Serracín
David, Chiriquí

Estimado Sr. Serracín,

Con el propósito de mantener el mejor control posible del servicio y mantenimiento de nuestras máquinas, por favor sírvase hacer lo siguiente:

1. Visitar, por lo menos, una vez al mes cada cliente.

2. Durante esta visita, hacer una limpieza general de dicha máquina, por ejemplo, ajuste y limpieza de corotrones, limpieza del sistema óptico, etc.

3. Hacer un reporte y copia de prueba, ambas firmadas por el cliente. Estos reportes y copias de prueba deberán ser enviados a Panamá a más tardar el 25 de cada mes.

Espero su cooperación de siempre. Saludos a todos y muchas gracias.

Atentamente,

XEROX DE PANAMÁ, S. A.
A. Chong
Gerente Técnico".

Además, a folio 114, con fecha de 15 de marzo de 1948, el Gerente de Ventas de aquel entonces, se dirige directamente a un cliente de la Provincia de Chiriquí (recordar que el señor **SERRACÍN** era el concesionario de esta área y quien tenía que velar personalmente por las máquinas Xerox), para anunciarle que el contrato de alquiler de una máquina fotocopiadora no sería renovado, entre otras cosas.

Por último cabe agregar, y no menos importante, que de igual manera el señor **SERRACÍN** estaba inscrito en el Régimen del Seguro Social a partir del día 1° de febrero de 1968, bajo el numero patronal de la empresa **Xerox de Panamá, S. A.**, tal como puede verificarse a foja 62 del expediente. Todo lo expresado anteriormente nos lleva a la conclusión inequívoca de que efectivamente el señor **SERRACÍN** laboraba para **Xerox de Panamá, S. A.** antes de 1972.

Determinada la relación de trabajo en el año 1966, que desconociera el Tribunal Superior de Trabajo, nos toca ahora establecer si efectivamente el trabajador demandante le asiste el derecho a las comisiones reclamadas.

Las comisiones que reclama **SERRACÍN**, están calculadas al 2 1\2% pactadas en el anexo que se le hiciera al "contrato de concesión" de 29 de mayo de 1969 que ya hemos señalado que se trata más bien de un contrato de trabajo. (Ver foja 5 de los antecedentes).

El período que según el casacionista debe aplicarse el cobro de estas comisiones del 2 1\2% que no le fueron canceladas, van de 1970 a 1982, ya que

sólo le pagaron el 1% de comisiones por cobro; y que a partir del 1° de septiembre de 1982 no se le pagó suma alguna en concepto de comisiones.

Creemos que la confusión por parte del Tribunal de Segunda Instancia, estriba en que ha asimilado el concepto de salario base con el pago de comisiones, y uno no excluye al otro. El hecho de que el salario base fuese aumentado considerablemente, esto no significa que el trabajador no tenga derecho a las comisiones que se pactaron desde 1969, y que al ser reformada al 1%, demuestran una alteración en las condiciones de trabajo, tal y como los propios abogados de aquel entonces de la **Xerox** se lo manifestaran al Gerente de Finanzas de esta empresa (ver foja 46).

Efectivamente el salario base a que tenía derecho el trabajador **SERRACÍN** fue variando, es decir le fue aumentado, sin que se reformara lo atinente a las comisiones.

Por ello no podemos aceptar el argumento de que el salario que devengaba **SERRACÍN** era superior a las comisiones pactadas y que no le fueron pagadas durante cierto tiempo.

En ningún momento la empresa, al variar el salario base de **SERRACÍN**, especificó que esto reemplazaría las comisiones por cobro pactados desde 1969, sólo se limitaba a alabar la gestión del trabajador.

A foja 43 de los antecedentes de esta casación laboral, consta Nota de septiembre 18 de 1975, que habla por sí sola:

> **"Después de haber conversado con el Sr. Miranda en relación con el servicio en cobros y administrativos que presta a la empresa el Sr. Serracín en la provincia de David, hemos creído conveniente solicitarle se apruebe para este señor la suma de B/.50.00 mensuales por los gastos de representación y el 1% de los cobros que realice a partir del 1° de octubre\75."**

En lo que concierne a las comisiones por venta que reclama el trabajador, es importante indicar que las comisiones por venta no fueron pactadas, sino sólo por cobro, por lo que este Tribunal no acepta esta pretensión.

En lo referente al mutuo acuerdo a que ha hecho referencia el Tribunal Superior para desechar la reclamación del Sr. **SERRACÍN**, en este punto es pertinente acotar que el mutuo acuerdo no incluye los derechos adquiridos (que son irrenunciables), que obviamente han sido alteradas en menoscabo del trabajador al omitirse la inclusión de las comisiones exigidas.

Lo expresado en líneas anteriores, nos conduce a señalar que le asiste la razón al casacionista de que se verificó de 1970 a 1988 alteración de las condiciones de trabajo, desde el momento en que no se le cancelaron las comisiones pactadas y que asciende a la suma de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON CUARENTA Y TRES CENTÉSIMOS (B/.86,745.43) más los recargos e intereses de acuerdo a los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo.

Las normas que han sido señaladas como violadas por parte del Tribunal Superior de Trabajo como lo son los artículos 62, 63, 64 del Código de Trabajo los cuales trata de la subordinación jurídica y dependencia económica, no fueron analizados por esta Superioridad, dado que la pretensión que se procuraba establecer, como es la relación de trabajo antes del 1972, esta última se verificó con el Código de Trabajo de 1947 vigente a la fecha de inicio de dicha relación laboral entre las partes en este proceso. Por lo demás, prosperan los cargos en relación a los artículos 159 y 732 del Código de Trabajo.

Por las anteriores consideraciones, reitero respetuosamente que nos apartamos del criterio sustentado por el resto de los Magistrados que integran la mayoría de este Tribunal Colegiado, y por lo tanto SALVAMOS NUESTRO VOTO.

Panamá, 29 de marzo de 1996.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DEMANDA DE PERJUICIOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN, CONTRA EL MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, LICENCIADO NELSON RUIZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Samuel E. Marín, actuando en su propio nombre y representación, promovió Recurso de Apelación contra el auto de 9 de febrero de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso-administrativa de indemnización para que se condene al Magistrado del Primer Tribunal Superior, Nelson Ruiz, por los supuestos daños y perjuicios que le causara al recurrente como ponente de la Sentencia de 20 de septiembre de 1994.

Una vez anunciada la impugnación, el Sustanciador, mediante providencia de 16 de febrero de 1996, concedió el recurso de apelación y por providencia de 5 de marzo de 1996, se señaló un término de 3 días para que el apelante sustentara su recurso y 3 días adicionales para las objeciones de rigor.

Vencidos los términos señalados, según el informe secretarial fechado el 19 de marzo de 1996, que se lee a foja 135, ninguna de las partes compareció a hacer valer sus derechos, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial, debe declararse desierto el recurso de apelación promovido.

Por las consideraciones anteriores, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación promovido por el licenciado Samuel E. Marín, contra el auto de 9 de febrero de 1996, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de indemnización interpuesta contra el Magistrado del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, licenciado Nelson Ruiz.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

MARZO 1996

CARTA ROGATORIA

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL, REPÚBLICA DE ARGENTINA, RELATIVO A LOS AUTOS CARATULADOS "STOLTA, FEDERICO S/DENUNCIA FALSIFICACIÓN Y ESTAFA". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho por segunda ocasión el cuaderno contentivo de la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, República de Argentina, relativo a los autos caratulados "STOLTA, FEDERICO S/DENUNCIA FALSIFICACIÓN Y ESTAFA.

El propósito de la carta rogatoria tiene como objetivo obtener documentación corporativa de la sociedad GRAPHY PRESS INTERNATIONAL FINANCIAL, con domicilio en Apartado 6831 Zona 5 de Panamá y de igual forma obtener del señor Mario O'Connor, vicepresidente de la referida sociedad, una declaración testimonial a tenor del interrogatorio que aparece a foja 4 del expediente.

Ya con anterioridad esta Sala de Negocios Generales se pronunció sobre el particular mediante resolución de ocho (8) de agosto de 1995 y declaró no viable la Comisión Rogatoria en mención, en virtud de lo que dispone la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, la cual señala que los exhortos o cartas rogatorias que tuvieran como objeto la obtención de pruebas en el extranjero se refieren a procedimientos en materia civil o comercial.

A pesar que el exhorto en análisis trata de la obtención de pruebas dentro de un proceso penal, las autoridades argentinas han solicitado nuevamente a esta Sala que en base a un principio de reciprocidad se atienda el suplicatorio y se realicen las diligencias.

Resulta de suma importancia indicarles a las autoridades jurisdiccionales argentinas que tal como señala la Convención a efectos que el país requerido realice una diligencia, se deben poner a disposición del órgano jurisdiccional requerido la mayor información para el diligenciamiento de la prueba solicitada.

Por otra parte constituye una facultad discrecional de este Órgano jurisdiccional el tramitar comisiones rogatorias en materias ajenas a lo regulado por la Convención, por lo cual resulta innecesario de parte de las autoridades argentinas citar precedentes en los cuales las autoridades panameñas han tramitado comisiones en materia penal. Ha de recordarse que el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria no implica en definitiva el compromiso de proceder con lo solicitado.

No obstante, luego de las anteriores consideraciones, y en virtud de un principio de reciprocidad esta Superioridad acoge la solicitud de las autoridades judiciales argentinas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Carta Rogatoria proveniente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, República de Argentina, relativo a los autos caratulados "STOLTA, FEDERICO S/DENUNCIA FALSIFICACIÓN Y ESTAFA y ORDENA a la Dirección del Registro Público expedir certificación sobre la sociedad GRAPHY PRESS INTERNATIONAL FINANTIAL, S. A.

Para la práctica de la diligencia relacionada con el interrogatorio, SE COMISIONA al Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá de conformidad con las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente y una vez efectuada las diligencias pertinentes, remítase a esta Sala para su posterior devolución a las autoridades argentinas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DE LA ALCALDÍA PRIMERA DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO DE PENSIÓN ALIMENTICIA ENTABLADO POR LA SEÑORA DORIS FRANCO SÁNCHEZ CONTRA SAYED DUMANI VANEGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue enviado el suplicatorio proveniente de la Alcaldía Primera de Pensiones Alimenticias de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso de pensión alimenticia entablado por la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ contra el señor SAYED DUMANI VANEGAS. El mismo fue remitido por la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta Superioridad mediante Nota DGPE/DCL/052/96 el 25 de enero de 1996.

El objetivo del presente exhorto es "localizar a la señora Doris Franco Sánchez, en el Seguro Social (Sur), Panamá de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, teléfono 229-3800, a fin que absuelva cuestionario propuesto por la autoridad requiriente, en este caso, la Alcaldía Primera de Pensiones Alimenticias de San José, Costa Rica.

El interrogatorio que solicita la autoridad costarricense se detalla a foja 1 y reverso del expediente. Sin embargo, la autoridad requiriente solicita a la Corte Suprema de Justicia que se tome confesión a la señora Doris Franco Sánchez.

La Sala de Negocios Generales estima que de acuerdo al artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, los exhortos o cartas rogatorias deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento que entre los cuales destacan:

a) Una indicación clara sobre el objeto de la prueba solicitada.

b) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documentos necesarios para su cumplimiento.

c) Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.

d)Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba.

e) Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requiriente solicite en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo primero y en el Artículo 6.

Del estudio del expediente se aprecia, sin lugar a dudas, que el proceso de pensión alimenticia fue entablado por la señora Doris Franco Sánchez, por lo cual al ser la señora Franco Sánchez la parte actora tiene conocimiento del proceso.

La documentación ha sido presentada por la vía diplomática a través del Consulado de Costa Rica aquí en la ciudad de panamá, razón por la cual se hace

innecesario el requisito de la legalización de firmas de acuerdo al artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, aprobada por la República de Panamá mediante Ley 13 de 23 de octubre de 1975.

Se observa que el interrogatorio está redactado como hechos ciertos o aseveraciones y no preguntas que la citada debe absolver.

Nuestra legislación contempla la figura de la declaración de parte, tal cual se establece en los artículos 803, 890 y ss. De allí que sólo en virtud de un principio de reciprocidad, la Sala de Negocios Generales como órgano jurisdiccional del Estado requerido, acepta realizar la diligencia solicitada por las autoridades costarricenses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 numeral 3, del Código Judicial se determina que la diligencia sea realizada por un Juzgado Municipal, instancia competente para conocer de estos negocios.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional de la Comisión Rogatoria procedente de la Alcaldía Primera de Pensiones Alimenticias de San José, República de Costa Rica, dentro del proceso de pensión alimenticia entablado por la señora DORIS FRANCO SÁNCHEZ contra el señor SAYED DUMANI VANEGAS y SE ORDENA que el Juzgado Primero Municipal, Ramo Civil, realice el interrogatorio solicitado por las autoridades costarricenses.

Una vez realizada la diligencia, SE ORDENA remitir el expediente nuevamente a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales para su posterior devolución a través de la Cancillería, a las autoridades costarricenses.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA A CARGO DEL JUZGADO N° 1 DEL FUERO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "NABISCO, INC. CONTRA PRODUCTOS STANI S. AI. C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS". MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Juzgado N° 1 del Fuero Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina dentro de los autos caratulados NABISCO, INC. c/PRODUCTOS STANI S. A. I. C. s/OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS", expediente N° 17.779/94.

El propósito del exhorto expedido por las autoridades argentinas, es solicitar mediante oficio a la autoridad del Registro de Marcas, en este caso, Dirección General de Registros la Propiedad Industrial, que **informe si la marca GUMMI SAVERS ha sido registrada en ese país y, en caso afirmativo, informe a nombre de quien consta inscrita, así como su número y fecha de registro**.

El juez argentino indica que el licenciado Roy Durling de la firma forense Arias, Fábrega & Fábrega y/o quien este designe, están autorizados para correr con el diligenciamiento del presente exhorto.

La documentación procedente del Juzgado N° 1 del Fuero Civil y Comercial Federal de Buenos Aires ha sido remitida a esta Sala de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que claramente indica que cuando el exhorto sea enviado por la vía consular o diplomática, como en este caso en particular, o por conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización de firmas.

La solicitud ha sido presentada conforme lo regula la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, por lo que no viola nuestro orden público interno y la práctica de prueba que exige del Tribunal Panameño es perfectamente viable en nuestro territorio, por lo que es permisible darle curso al exhorto, dentro del proceso que ahora nos ocupa.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado N° 1 del Fuero Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, dentro de los autos caratulados NABISCO, INC. c/PRODUCTOS STANI S. A. I. C. s/OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCAS", expediente N° N17.779/94 a fin que se produzca prueba informativa relativa a la marca GUMMI SAVERS y ORDENA a la Dirección de Registros de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias que expida la certificación solicitada por las autoridades argentinas en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizada la diligencia a través de la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, REMÍTASE el expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales argentinas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA PROCEDENTE DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° TRES DE MADRID, RELACIONADA A LAS OPERACIONES BANCARIAS REALIZADAS POR JOHN FREDERITZ FITZGIBSON EN EL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a este Despacho cuaderno contentivo de la Comisión rogatoria librada por el Juzgado Central de Instrucción N° Tres de la Audiencia Nacional de Madrid, España, relacionadas a las operaciones bancarias realizadas por JOHN FREDERIZ FITZGIBSON en el Banco Exterior de España.

En base al principio de reciprocidad las autoridades del Juzgado central de Instrucción de Madrid, España solicitan en primer lugar **"información acerca del titular, firmas autorizadas de las cuentas y destinatario final en caso de posterior transferencia o disposición, de las siguientes remesas de dólares USA cobradas a través de las entidades, por los importes y en las fechas que se indican, con retención, en su caso, de un saldo igual al importe del talón".** De foja 3 a 5 se observan la numeración de los cheques sobre los cuales recae el objeto de la presente solicitud, así como la forma en que fueron cambiados a través de diferentes bancos nacionales. En segundo término solicitan **"indicar quien sea la persona o la entidad titular de la cuenta 021-00360-3 del Banco**

Ganadero, S. A. de Panamá".

La petición del Juzgado Central de Instrucción N° Tres, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, se realiza en base a que se trata de una investigación que se efectúa en relación a un delito blanqueo de dinero procedente del tráfico ilegal de drogas.

Una vez visto en qué consiste el pedido efectuado por las autoridades españolas, la Sala de Negocios Generales considera lo siguiente:

Le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, el conocimiento de estos negocios para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

La Convención Interamericana establece dentro de sus Normas Generales, artículo XVII que el **Estado requerido podrá rehusar el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria cuando sea manifiestamente contrario a su orden público**. Al respecto, esta Magistratura observa normas de Derecho Interno que es necesario aplicar, al estudiar lo pedido por el Juzgado de Instrucción Central de Madrid, España.

El Código Judicial Panameño en el Libro II, Titulo VII, Capítulo VII **"de la Inspección Judicial y Reconstrucción"**, en el artículo 941 concede facultades al Juez para que de oficio ordene la inspección de determinados documentos. Transcribimos el artículo 941 a la letra:

> **"Artículo 941:** A solicitud de parte o de oficio, el Juez puede ordenar que se verifiquen inspecciones o reconocimientos de lugares, cosas documentos, bienes muebles o inmuebles, semovientes o de personas."
>
> "La parte que solicita la inspección deberá indicar la materia u objeto sobre la que ha de recaer."
>
> "Sin embargo, en caso de que no fuere suficientemente explícito el escrito, si el propósito de la prueba fuere claro, de acuerdo con la demanda y su contestación, el Juez la decretará en la respectiva resolución y señalará el punto o los puntos sobre los cuales ha de versar la diligencia."
>
> Si para la realización de la prueba fuere menester la colaboración personal de una de las partes y ésta se negare, sin fundamento a prestarla, el Juez la intimará a que la preste. Si a pesar de ello continuare su injustificada renuencia, el Juez podrá disponer que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretarse la negativa injustificada como un indicio en su contra, respecto al objeto de la prueba, o ejercer la facultad de interponer las sanciones las sanciones conminatorias previstas en este Código.
>
> Si la diligencia de inspección personal fuere de alguien que no es parte en el proceso y afecte su dignidad, al árbitro del Juez, no será obligado a permitirla."

El Texto Único de la Ley de Drogas contiene normas referentes a la cooperación internacional en cuanto a la investigación de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, en los artículos 33 y 34, los cuales transcribimos a la letra:

> **"Artículo 33:** Las investigaciones de los delitos enumerados en el artículo 261 del Código Penal, también podrán ser iniciadas en cooperación o por petición del Estado en el que se hayan cometido tales delitos".
> ...
> **"Artículo 34:** En los delitos que trata la presente Ley especial, **los**

> **tribunales panameños serán competentes aun cuando el hecho ilícito por el cual se proceda, se haya cometido en el extranjero, siempre y cuando el producto del ilícito o cualquier elemento constitutivo de éste se haya realizado o produzca sus efectos totales o parciales en territorio panameño, y en los demás casos en que sea aplicable el artículo 9 del Código Penal".**

En cuanto a los efectos parciales a los que se refiere el artículo 34, se observa de la relación de los hechos que los cheques fueron cambiados a través de bancos panameños.

En éste mismo orden de ideas, el Capítulo V de los Delitos contra la Salud Pública, en el artículo 261 establece cuando es aplicable la Ley panameña, en delitos cometidos en el extranjero:

> Artículo 261: **Se aplicará la ley penal panameña en los casos** contemplados en los artículos 255, 257, 258, 259, 260 y 262 de éste Código, **cometidos en el extranjero, siempre que dentro del territorio panameño se hubiesen realizado los actos encaminados a su consumación o cualesquiera transacciones con bienes provenientes de dichos delitos relacionados con drogas.**

En concordancia, el artículo 9 numeral 1 y el artículo 261 de nuestro Código Penal establece lo siguiente:

> **"Artículo 9**: Se aplicará la Ley penal panameña por los hechos punibles cometidos en el extranjero cuando:
>
> 1. Producen o debieran producir sus resultados, en todo o en parte, en el territorio panameño". ...

A tenor de los dispuesto en el artículo 74 en el capítulo IX de la Inspección Bancaria del decreto de Gabinete 238 de 2 de julio de 1970, el examen de cuentas bancarias de particulares pueden ser sujetas a examen, siempre y cuando medie una orden judicial.

> **Artículo 74**: Se prohíbe a la Comisión realizar u ordenar investigaciones acerca de los asuntos particulares de ningún cliente de un banco. las informaciones obtenidas por la Comisión en el ejercicio de sus funciones no podrán ser reveladas a ninguna persona o autoridad, salvo si le fuere exigida judicialmente conforme a las disposiciones legales vigentes o fueren datos consolidados con cifras globales. La violación de este precepto será sancionada de acuerdo con lo señalado en el artículo 101 de este Decreto de Gabinete. ...

En virtud de que el presente suplicatorio consiste en la investigación de actos constitutivos del delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico ilegal de drogas, que como ya hemos señalado en líneas anteriores está tipificado en nuestras leyes penales internas y en virtud que el mismo cumple con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento interno, es posible conceder la viabilidad al presente exhorto.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado Central de Instrucción Número Tres, de la Audiencia Nacional de Madrid, España, relacionada a las operaciones bancarias realizas por John Frederiz Fitzgibson en el Banco Exterior de España. Se ORDENA que el mismo sea diligenciado por el Juzgado Tercero del Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente, y una vez efectuadas las diligencias pertinentes del exhorto que nos ocupa remítase a esta Sala para ser enviado a la Cancillería Panameña para la aplicación de los ulteriores trámites procesales aplicables a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

IRMA IBETH ROMERO DE BEST, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR EL CONDADO DE CURRY, ESTADO DE NUEVO MÉJICO, EL 5 DE FEBRERO DE 1991, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR DONALD JOHN BEST. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

IRMA IBETH ROMERO DE BEST, a través de su Representante Legal la licenciada Alexia Ogando, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio dictada por la Novena Corte Distrital del Condado de Curry, Estado de Nuevo México, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre la peticionaria y el señor **DONALD JOHN BEST**.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "**PRIMERO**: Que la señora IRMA IBETH ROMERO de BEST y el señor DONALD JOHN BEST, están formalmente divorciados mediante sentencia expedida por la Corte Distrital del Condado de Curry, Estado de Nuevo Méjico, el 5 de febrero de 1991.
>
> **SEGUNDO**: Que si bien es cierto que la copia de la sentencia final de divorcio que adjuntamos con el presente escrito, debidamente autenticada, no especifica si el demandado fue notificado de la demanda, el mismo es mi poderdante, y por ende está de acuerdo con la sentencia final de divorcio y solicita su ejecución.
>
> **TERCERO**: Que mi poderdante, IRMA IBETH ROMERO de BEST, desea inscribir dicha sentencia de divorcio en el registro civil, y así cumplir con las leyes panameñas para tales efectos".

Además, la peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma y su correspondiente traducción al idioma Español, así como certificado de matrimonio expedido por la Dirección General del Registro Civil.

Admitida la solicitud presentada ante esta Sala, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 8 de 14 de febrero de 1996, señala que la sentencia ha cumplido con los requisitos de ley por lo que debe accederse a la petición.

El texto de la sentencia visible a foja 4 del expediente, pone de manifiesto que la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, puesto que en el caso particular, es la demandada quien solicita la ejecución.

Por otra parte, la sentencia no transgrede el ordenamiento jurídico nacional, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial,

requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio, dictada por la Novena Corte Distrital del Condado de Curry, Estado de Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre IRMA IBETH ROMERO Y DONALD JOHN BEST.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN CARLOS MORENO CONDASSIN Y GINA TUULANIA MONTEZA MORALES, SOLICITAN EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE GWINNETT, ESTADO DE GEORGIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1995, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LOS UNÍA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Juan Carlos Moreno Condassin y Gina Tuulania Monteza Morales, a través de su apoderado especial Rodrigo Julio Molina Ortega, han presentado ante esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio de fecha 29 de septiembre de 1995, proferida por la Corte Superior del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia, que declara disuelto el matrimonio de fecha 29 de abril de 1988, efectuado en la Provincia de Panamá.

Como quiera que los documentos que se adjuntan con la solicitud, reúnen las formalidades de ley, pues en ellos se aprecian las autenticaciones correspondientes, así como la debida traducción de los documentos al español, se admitió la solicitud y se corrió traslado al Procurador General quién en su vista N° 9 de 15 de febrero de 1996 señala lo siguiente:

> "La presente relación de aspectos que configuran la petición de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera, hace ver que la misma cumple con los extremos requeridos por la normativa citada, razón por la cual nos inclinamos a opinar que **debe accederse a la presente petición**."

Una vez vista la opinión del Procurado General de la Nación, se observa que la sentencia cuyo exequátur se solicita ha sido dictada como consecuencia de una pretensión personal, no fue dictada en rebeldía pues ambos cónyuges otorgan poder especial al licenciado Rodrigo Julio Molina, en consecuencia están en conocimiento de la demanda y posterior sentencia de divorcio; y ambos están de acuerdo en proceder con el reconocimiento, en nuestro país, de la sentencia extranjera de divorcio, que disuelve el vínculo que los unía.

La sentencia de divorcio que nos ocupa, cumple con el requisito de autenticación establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que la misma es aportada con la respectiva autenticación del vice-cónsul panameño acreditado en Atlanta, Estado de Georgia y su firma es certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia de divorcio proferido por la Corte Superior del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio librada por la Corte Superior del Condado de Gwinnett, Estado de Georgia de fecha 29 de septiembre de 1995, que disuelve el vínculo matrimonial que unía a Juan Carlos Moreno Condassin y Gina Tuulania Monteza Morales.

AUTORIZA la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIOLETA VALENCIA MENA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUEZ DE CIRCUITO, DEL CONDADO DE HENDRY. CORRECCIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En la resolución de fecha 26 de enero de 1996 que declara ejecutable de sentencia extranjera de divorcio proferida por el Juez de Circuito, del Condado de Hendry, Estado de la Florida de fecha 1° (primero) de julio de 1991 (mil novecientos noventa y uno), la parte resolutiva incurre en un error que consiste en la omisión de la fecha de la sentencia de divorcio. Por lo tanto y en atención a lo dispuesto en el artículo 986, párrafo tercero, se modifica y queda de la siguiente manera:

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio de fecha 1° de julio de 1991, proferida por el Tribunal de Circuito del Vigésimo Circuito Judicial en y por el Condado de Hendry, Florida, Estados Unidos, Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre VIOLETA VALENCIA MENA y el señor ROY E. BURGESS Jr. y Autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE G. ELEANOR WAGNER DE EVANS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DEL CONDADO DE BELL TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CUAL SE DETERMINA EL DIVORCIO ENTRE ELANOR WAGNER DE EVANS Y ENRIQUE FLORENTINO EVANS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ELEANOR DE EVANS, mediante apoderado especial solicita a la Sala Cuarta de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Distrito de Bell, Texas, Estados Unidos, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente con el señor **ENRIQUE FLORENTINO EVANS**.

El apoderado de la peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> PRIMERO: Que mediante el certificado de matrimonio expedido en Panamá el 25 de noviembre de 1985 confirma que en el tomo 10 de matrimonios en el exterior se encuentra inscrita la partida N° 157 que dice que contrajeron matrimonio los señoras ENRIQUE FLORENTINO EVANS y la señora ELEANOR WAGNER, panameña ante Herbert Ryan, Primer Asistente oficial, el día 14 de agosto de 1984, en el distrito de Nueva York, Estados Unidos.
>
> SEGUNDO: Que el 21 de mayo de 1987, el señor ENRIQUE FLORENTINO EVANS demandó la anulación del vínculo matrimonial que lo unía con la señora ELEANOR WAGNER DE EVANS.
>
> **TERCERO**: Que dentro del seno familiar entre el señor ENRIQUE FLORENTINO EVANS y la señora ELEANOR WAGNER DE EVANS no hay hijo habido dentro del matrimonio.
>
> **CUARTO**: Que la sentencia no fue dictada en rebeldía, ya que las partes fueron debidamente notificadas según consta en el acta N° 114, 492-B, proferida por el Condado de Bell de Texas, Estados Unidos.
>
> **QUINTO**: Que mediante la Resolución N° 114, 492 B), expedida por la Corte del Distrito del Condado de Bell, Texas en los Estados Unidos, se decreta la disolución del vínculo matrimonial que existía entre ENRIQUE FLORENTINO EVANS (demandante) y ELEANOR WAGNER DE EVANS (demandado).

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: original de la resolución de divorcio, debidamente autenticada por el Cónsul General de Panamá en Nueva York y el certificado de matrimonio de los señores Enrique Florentino Evans y Eleanor Wagner, emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 10 de 7 de marzo de 1996 señala que debe accederse a lo solicitado, toda vez que se cumplen las exigencias contempladas en el artículo 1409 del Código Judicial.

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que, efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. No se presenta la rebeldía en virtud que es la propia demandada quien solicita el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera.

Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Distrito del Condado de Bell, Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre ELEANOR WAGNER y ENRIQUE FLORENTINO EVANS.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

G. SURVIVOR CREDIT CORP., SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA FECHADA 3 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK, POR MEDIO DEL CUAL SE CONDENA A NESSIM DABAK Y A GYPSY IMPORTS, INC. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. (IMPEDIMENTO). PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, en nombre y representación de la Sociedad Anónima **G.G. SURVIVOR CREDIT CORP.**, solicita la ejecución de sentencia extranjera, fechada 3 de febrero de 1995, dictada por el Juez de Distrito de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, por medio del cual se condena a **NESSIM DABAH y a GYPSY IMPORTS, INC.**

Los peticionarios fundamentan su solicitud en los siguientes hechos:

> **"PRIMERO:** Mediante sentencia de 3 de febrero de 1995, el Juez de Distrito de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, dictó sentencia condenatoria contra: (i) NESSIM DABAH a pagar a G.G. SURVIVOR CORP. la suma de US$1,753,586 dólares de Estados Unidos de América, más intereses simples a la tasa de 8% anual desde el 1° de febrero de 1991 al 26 de enero de 1995 por monto de US$599,199.09 para un total de US$2,321,785.09; (ii) a GYPSY IMPORTS, INC. a pagar a G.G. SURVIVOR CREDIT CORP. la suma de US$853,586.00 más intereses simples a la tasa de 8% anual desde el 1° de febrero de 1991 hasta el 26 de enero de 1995 por monto de US$272,199.09 para un total de US$1,125,785.09; y a ambos conjunta y solidariamente la suma de US$120.00 de costos.
>
> **SEGUNDO:** La sentencia fue dictada a causa del ejercicio de una pretensión personal, consistente en el pago de sumas de dinero adeudadas a la demandante en concepto de capital e intereses.
>
> **TERCERO:** La demanda fue notificada personalmente a Prentice-Hall System, Inc. en calidad de gestor para notificación de procesos por

los demandados NESSIM DABAH y GYPSY IMPORTS, INC. dentro de la jurisdicción de la causa.

CUARTO: La obligación es lícita en Panamá y la sentencia cuyo cumplimiento se solicita es auténtica."

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio a la parte que debe cumplir la sentencia en la República de Panamá, en este caso al señor NESSIM DABAH, y a la Sociedad GYPSY IMPORTS, INC., quienes a través de su apoderado judicial SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS presentaron, dentro del término concedido por la ley, escrito de oposición e Incidente de Nulidad de la notificación; dicho Incidente fue "**RECHAZADO DE PLANO**" mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 1995.

Una vez resuelto el incidente de nulidad de la notificación, se corrió traslado al Procurador General de la Nación con el fin de que emitiera concepto quien, en Vista N°5 de fecha 23 de enero de 1996, consideró que se han cumplido en este caso los requisitos que exige el artículo 1409 para adjudicar el reconocimiento y ordenar la ejecución de las sentencias provenientes de tribunales extranjeros. Por lo expuesto, dejó dicho el Señor Procurador, que debe accederse a la presente solicitud de exequátur.

El escrito de oposición a la solicitud de ejecución de sentencia extranjera presentado por la firma de abogados SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS, se fundamenta de esta forma:

"**PRIMERO:** Durante la semana del 12 al 16 de noviembre de 1995 (aparentemente el día 15), un notificador de la Corte Suprema de Justicia, dejó en el edificio denominado Condominio Bay Shore, el Edicto N°157 de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se notifica en puerta a la sociedad GYPSY IMPORTS INC. de la solicitud de sentencia extranjera presentada por parte de SURVIVOR CREDIT CORP.

SEGUNDO: Cualquiera que haya sido la demanda presentada en el extranjero por SURVIVOR CREDIT CORP., la misma nunca fue notificada personalmente a los representantes legales de nuestra Poderdante GYPSY IMPORTS.

TERCERO: Nuestro Código Judicial claramente establece en su Artículo 1409, Numeral 2, que ninguna sentencia extranjera es ejecutable en Panamá, a menos que la demanda que da origen a aquella haya sido personalmente notificada".

Surtido el procedimiento de notificación a la parte que debe cumplir la sentencia extranjera en la República de Panamá establecido en el artículo 1410 del Código Judicial, la Sala de Negocios Generales pasa a emitir sus consideraciones con respecto a la sentencia extranjera de fecha 3 de febrero de 1995.

En lo concerniente a lo expuesto en el escrito de oposición, la Sala sostiene que se ha cumplido con el requisito de la notificación al señor NESSIM DABAH y a la Sociedad GYPSY IMPORTS, INC. Ello consta a fojas 7 y 15 del presente expediente (sentencia extranjera y su correspondiente traducción). La demanda fue notificada por conducto de PRENTICE-HALL SYSTEM, INC. en su calidad de gestor para la notificación de procesos de los demandados NESSIM DABAH y GYPSY IMPORTS, INC., dentro de la jurisdicción de la causa; y, en la República de Panamá, al representante legal de la Sociedad GYPSY IMPORTS, INC. y al señor NESSIM DABAH. Por lo anteriormente expuesto, la Sala sostiene el criterio de que la parte demandada fue notificada en los términos exigidos por la ley panameña, cumpliéndose con los requisitos establecidos en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial.

Esta Superioridad está de acuerdo con el concepto emitido por el señor Procurador General de la Nación, ya que se puede apreciar que la sentencia de fecha 3 de febrero de 1995 está traducida al idioma castellano, el objeto para

cuyo cumplimiento se ha procedido es lícito, presenta todas las autenticaciones requeridas y cumple con el requisito de la notificación de la parte demandada, es decir, no se produce la figura de la rebeldía.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá, la sentencia extranjera de fecha 3 de febrero de 1995, dictada por el Juez del Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, mediante la cual se ORDENA, ADJUDICA y DECRETA que el demandante recupere de los demandados, respectivamente, (i) contra el demandado Nessim Dabah la suma de $1,753.586 más interés simple a la tasa de 8% anual (computada en base el número real de días transcurridos y, a un año de 360 días), del 1° de febrero de 1991 al 26 de enero de 1995, el monto de $599.199.09 para un total de $2,312.785.09; y (ii) contra el demandado Gypsy Imports, INC. el monto de $853.586.00 más interés simple a la tasa de 8% anual (computada en base al número real de días transcurridos y a un año de 360 días), del 1° de febrero de 1991 al 26 de enero de 1995 el monto de $272.199.09 para un total de $1,125,785.09; y (iii) $120.00 de costos por interponer esta demanda contra los demandados Nessim Dabah y Gypsy Imports, INC. conjunta y solidariamente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RUFINA LAMBRAÑO S. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 78 DEMANDANTES RESIDENTES EN CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA, DECRETADA POR LA CORTE DEL DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, PARA EL DISTRITO SUREÑO DE TEXAS, DIVISIÓN DE HOUSTON DE FECHA 11 DE JULIO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La licenciada Rufina Lambraño como apoderada judicial de 78 demandantes residentes en su mayoría en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro y en Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí, ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida y ejecutada en la República de Panamá, la sentencia extranjera decretada por la Corte de Distrito de Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito de Texas, División de Houston de fecha 11 de julio de 1995.

La licenciada Lambraño como apoderada judicial de los peticionarios fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: En virtud de varios procesos en el Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya que se trata de empresas norteamericanas domiciliadas allá, cientos de trabajadores de empresas bananeras en todo el mundo (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Costa de Marfil y Panamá, para citar unos pocos), solicitaron el reconocimiento de daños y perjuicios causados con la exposición del agroquímico DIBROMOCLOROPROPANO o DBCP, ingrediente activo en productos comerciales denominados Nemagón y Fumazone.
>
> SEGUNDO: Las empresas demandadas interpusieron una solicitud para que los tribunales americanos denegaran el ejercicio de su jurisdicción sobre dichos procesos, en virtud de la doctrina del FORUM NON CONVINIENS.
>
> TERCERO: De esta manera, el Juez Sim Lake, de la Corte de Distrito,

> del Distrito Sureño de Texas, en sentencia de 11 de julio de 1995, declina condicionalmente la competencia de su tribunal a favor del ejercicio de la jurisdicción en cada uno de los países a los que pertenecen las partes demandantes, y le da un término perentorio de 30 días para que las partes interpongan su demanda en cada país donde están domiciliados o donde ocurrió el daño causado por el agroquímico.
>
> CUARTO: El juez americano ante el cual se surte el caso, ha ordenado a las partes en conflicto, que sometan sus controversias a la jurisdicción de cada país, por lo (sic) debemos solicitar a la augusta Sala cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, determinar si procede la ejecución de la sentencia decretada por un tribunal extranjero, ordenando a los nacionales y residentes panameños sometan sus controversias con las empresas americanas a la jurisdicción panameña, pesar de que las demandadas habían elegido un foro distinto para solucionar sus conflictos con las sociedades extranjeras."

ANTECEDENTES DEL CASO

La solicitud de exequátur surge de una consolidación de diversas demandas presentadas en varias Cortes de Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en el Estado de Texas, por miles de ciudadanos de diversas nacionalidades, en la mayoría trabajadores en fincas bananeras, entre ellos, costarricenses, panameños, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, filipinos y otros del continente africano.

Estos demandantes persiguen indemnizaciones por un monto de tres millones novecientos mil balboas (B/.3,900,000.00) por daños procedentes de un alegada exposición a un nematocida denominado Dibromocloropropano conocido por siglas como DBCP, el cual se inyectaba en la tierra de zonas bananeras para protegerla contra organismos microscópicos llamados nemátodos.

El agroquímico en mención, constituye el ingrediente activo en productos comerciales plaguicidas conocidos como el Nemagón y Fumazone, fabricado y/o utilizado por las empresas demandadas.

Dichas empresas están constituidas por las Transnacionales SHELL OIL COMPANY, DOW CHEMICAL COMPANY, OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION, AMVAC CHEMICAL CORPORATION CHIQUITA BRANDS, INC., CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC., DEAD SEA BROMINE CO., AMERIBROM, INC., BROMINE COMPOUNDS, LTD., todas domiciliadas en Houston, Texas., de allí pues el porqué de los varios procesos instaurados en el estado de Texas.

En la demanda por daños y perjuicios interpuesta en el tribunal norteamericano, las compañías demandadas, solicitaron a la Corte de Distrito de Texas que declinara su competencia a favor del ejercicio de la jurisdicción de cada país de donde proceden los demandantes.

Por su parte, el juez norteamericano accedió a la petición de las compañía demandadas, se abstuvo de conocer el caso y declinó condicionalmente la competencia a cada país donde ocurrió el daño, o donde estaban domiciliados los demandantes.

Luego de esta decisión, el abogado de la parte actora en Texas, licenciado Charles Siegel, otorgó poder conforme a la ley a la licenciada Rufina Lambraño para que sometiera a la Sala de Negocios Generales la sentencia de 11 de julio de 1995, con el objeto que determine si procede su ejecución, aún a pesar que los demandantes eligieron el foro norteamericano para interponer sus demandas, considerando que todas las empresas se encontraban domiciliadas en Estados Unidos.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le

corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Por su parte, el Procurador General de la Nación en su Vista N° 40 de 17 de noviembre de 1995, visible a fojas 243 a 247 del expediente, estimó que la resolución judicial en estudio no constituye una decisión que resuelve el mérito de la controversia, pues no tiene un carácter final o definitivo. Constituye una decisión del tribunal al inicio del proceso, sin entrar al fondo del negocio, por lo que no es susceptible del trámite del exequátur.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la resolución extranjera es susceptible de ser reconocida mediante el trámite del exequátur.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, se advierte que sólo son objeto de reconocimiento y ejecución las sentencias pronunciadas por Tribunales extranjeros o fallos arbitrales extranjeros. La norma es clara al señalar que se entiende por sentencia aquella decisión que decide la pretensión.

Si bien es cierto la resolución extranjera en estudio es autentica, pues ha sido apostillada de acuerdo a la Ley 6 de 25 de junio de 1990, no se trata de un fallo arbitral en el cual ambas partes han acordado previamente ante una controversia, someterse al procedimiento del arbitraje, ni tampoco de una resolución que decide la pretensión que en el caso particular, resulta la indemnización por daños y perjuicios ocurridos por el contacto con el plagicida DBCP.

Resulta evidente que la pretensión de los demandantes no ha sido decidida por el tribunal norteamericano. Un examen del expediente permite comprobar que el juez norteamericano se abstuvo de conocer el caso, basado en la doctrina norteamericana del "Forum non conviniens" por tanto la pretensión de los demandantes no ha sido decidida.

El tribunal norteamericano decidió al inicio del proceso no entrar al fondo del negocio y manifestó que reasumiría la jurisdicción en el evento que la Cortes de los países extranjeros, en el caso que nos ocupa, Panamá, indicara que carecía de jurisdicción para conocer del caso.

La situación expuesta a juicio de la Sala, incumple diáfanamente con el requisito de orden formal que contempla el artículo 1409, numeral 4 del Código Judicial, en cuanto a que la sentencia objeto de reconocimiento se entiende como aquella decisión que decidió la pretensión. Es importante señalar que la resolución en estudio no es propiamente una sentencia, sino una mera declinatoria de competencia que en definitiva no es objeto del trámite del exequátur.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO EJECUTABLE en la República de Panamá la resolución judicial extranjera de 17 de noviembre de 1995 proferida por la Corte del Distrito Sur del Estado de Texas, División de Houston mediante la cual se declinó condicionalmente la competencia del tribunal en favor de la jurisdicción de cada uno de los países a los que pertenecen las partes demandadas dentro de la demanda interpuesta por SANTOS ÁBREGO MORALES Y OTROS contra las compañías SHELL OIL COMPANY, DOW CHEMICAL COMPANY, OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION, AMVAC CHEMICAL CORPORATION, CHIQUITA BRANDS, INC., CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC., DEAD SEA BROMINE CO. LTD., AMERIBROM, INC., y BROMINE COMPOUNDS, LTD.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO, SALA DE SAN JUAN QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO Y GREGORIO H. NIEVES RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO, a través de su apoderado judicial, licenciado Guillermo Quintero, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre la peticionaria y el señor **GREGORIO H. NIEVES RUIZ.**

El apoderado judicial fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "**PRIMERO:** Mi poderdante contrajo nupcias con el señor Gregorio H. Nieves Ruiz el día 27 de octubre de 1989, en el distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, tal como consta en el tomo 201, Asiento 645 del Libro de Matrimonio.
>
> **SEGUNDO:** Mediante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan el 28 de agosto de 1992, se disolvió el vínculo matrimonial que unía a mi poderdante con el señor Gregorio H. Nieves Ruiz.
>
> **TERCERO:** Las partes acordaron su disolución mediante mutuo consentimiento conforme lo establece la legislación de Puerto Rico.
>
> **CUARTO:** Toda la documentación se encuentra en idioma español y ha sido certificada tanto por las autoridades del tribunal como por los funcionarios panameños competentes".

Conjuntamente con la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, han sido presentadas como pruebas, copia autenticada de la sentencia, así como certificado de matrimonio expedido por la Dirección General del Registro Civil.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 11 de 8 de marzo de 1996, visible a foja 9 del expediente señala lo siguiente:

> "... observa este despacho que el peticionario le ha dado cumplimiento a todas las exigencias de la norma procesal en comento ya que, la sentencia, objeto de este exequátur, fue dictada como consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, pues resolvió un divorcio por mutuo consentimiento.
>
> Asimismo, tratándose de un proceso presentado conjuntamente por ambas partes no se configura la rebeldía. Finalmente, la obligación contenida en la resolución judicial extranjera es lícita en Panamá, en atención a que la causal de divorcio por mutuo consentimiento también está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y del Certificado de Matrimonio (foja 6 y vuelta) se aprecia que entre la fecha de matrimonio y la presentación de la demanda de divorcio transcurrieron más de dos años situación que se asimila a la causal de mutuo consentimiento que contempla el numeral 10 del artículo 212

del Código de la Familia panameño. Además, en cuanto a la eficacia probatoria y autenticidad de las resoluciones judiciales extranjeras, la copia de la sentencia se encuentra autenticada (Cfr. foja 5 y vuelta) y a foja 6 aparece el documento denominado "APOSTILLE" (Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, de la cual nuestro país es también signatario), en el cual se certifica la firma del funcionario que autentica la sentencia en cuestión.

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, en virtud que se trata de un divorcio por mutuo consentimiento, por lo que resulta irrelevante quien solicita el reconocimiento y ejecución de la sentencia en la República de Panamá.

La sentencia luego de ser examinada, se encuentra debidamente legalizada a través del sello de apostilla, razón por la cual se hace innecesaria la autenticación consular.

Coincide la Sala con el criterio vertido por el señor Procurador, cuando señala que la obligación contenida en la resolución judicial extranjera es lícita en Panamá, en virtud que la figura del mutuo consentimiento se asimila a la causal que contempla el Código de la Familia en el artículo 212, numeral 10. De igual forma se aprecia a foja 5 del expediente que han transcurrido más de los dos años exigidos por nuestra legislación para invocar esta causal, por lo cual la peticionaria cumple a su vez con este requisito.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio, dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre GRETNA ELIZABETH HANDY BARRETO y GREGORIO H. NIEVES RUIZ.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 10, SECRETARIA N° 19 DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, LIBRADO EN LOS AUTOS CARATULADOS "RICCIARDI UBER S/QUIEBRA C/PARAISAN INVESTIMENT, S. A. (DE PANAMÁ) S/ORDINARIO". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por vía diplomática fue remitido a esta Sala de Negocios Generales el exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 19, dentro de los autos caratulados RICCIARDI UBER S/QUIEBRA C/PARISAN INVESTMENT, S. A. S/ORDINARIO N° 57.756.

El presente exhorto tiene como propósito la notificación de la sociedad PARISAN INVESTMENT, S. A. con domicilio en Plaza Regency, Vía España 195, 1° Alto, de la ciudad de Panamá, República de Panamá, de la demanda en su contra por simulación y revocatoria pauliana por la operación de compra y venta de las acciones de la Joyería Ricciardi, S. A. realizada con el señor Uber Ricciardi.

Las autoridades argentinas han utilizado los formularios del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Analizada la cuestión planteada observa la Sala que tanto la República de Panamá como la de Argentina son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, ratificada por en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 12 de 23 de octubre de 1975.

El artículo N° 6 de la Convención interamericana sobre exhortos o Cartas Rogatorias dispone que, cuando los exhortos o cartas rogatorias sean remitidos por vía diplomática, se exime del requisito de la legalización. De igual forma se han cumplido con los requisitos dispuestos en el artículo 8 de la Convención Interamericana, ya que se brinda información sobre la Defensoría de Oficio y además se adjuntan los siguientes documentos:

1. Copia auténtica de la demanda por la cual se inició el procedimiento.

2. Copia autentica de los documento que se han adjuntado a la demanda.

2. La resolución judicial que ordenó el libramiento del presente exhorto.

En virtud que el presente exhorto consiste en la notificación de la demanda, y que este es un acto procesal de mero trámite, no se observan vicios que vulneren el orden público panameño, aspecto primordial que debe tomar en consideración esta máxima Corporación de Justicia para el cumplimiento de un exhorto, más aun cuando se trata de un Estado ratificante de este convenio, es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el Territorio Nacional del exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10, Secretaría N° 19 de la capital Federal de la República de Argentina, dentro de los autos caratulados RICCIARDI UBER S/QUIEBRA C/PARISAN INVESTMENT, S. A. (DE PANAMÁ) S/ORDINARIO mediante la cual se solicita la notificación del representante legal de la sociedad Parisan Investment, S. A. y ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA, LIBRADO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO N° 400-93 PROMOVIDO POR NICARAGUA QUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRA SUR QUÍMICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Juzgado Primero Civil de San José, República de Costa Rica dentro

del proceso ordinario N° 400-93 promovido por NICARAGUA QUÍMICA SOCIEDAD ANÓNIMA contra SUR QUÍMICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

El propósito del exhorto expedido por las autoridades costarricenses, es solicitar mediante oficio a la autoridad del Registro Mercantil, en este caso, Dirección del Registro Público, que **brinde una certificación sobre la constitución de Sur Química Internacional** en la ciudad de Panamá.

La documentación procedente del Juzgado Primero Civil de Costa Rica ha sido remitida a esta Sala de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que claramente indica que cuando el exhorto sea enviado por la vía consular o diplomática, como en este caso en particular, o por conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización de firmas.

La solicitud ha sido presentada conforme lo regula la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, por lo que no viola nuestro orden público interno y la práctica de prueba que exige del Tribunal Panameño es perfectamente viable en nuestro territorio, por lo que es permisible darle curso al exhorto, dentro del proceso que ahora nos ocupa.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Primero Civil de San José, Costa Rica, dentro del proceso ordinario número 400-93 promovido por Nicaragua Química Sociedad Anónima contra Sur Química Internacional Sociedad Anónima a fin que se produzca prueba informativa relativa a la constitución de Sur Química Internacional y ORDENA a la Dirección de Registro Público que expida la certificación solicitada por las autoridades costarricenses en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realizada la diligencia, REMÍTASE el expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales costarricenses.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

ARIAS FÁBREGA & FÁBREGA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE G. G. SURVIVOR CREDIT CORP. SOLICITA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA FECHADA 3 DE FEBRERO DE 1995, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, DEL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK, POR MEDIO DEL CUAL SE CONDENA A NESSIM DABAH Y A GUPSY IMPORTS, INC. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Honorable Magistrado Rafael González manifestó impedimento para conocer de la solicitud interpuesta por el Lcdo. Octavio Amat, de la firma Arias, Fábrega y Fábrega, actuando en nombre y representación de G. G. SURVIVOR CREDIT CORP. para que se ejecute la sentencia extranjera fechada 3 de febrero de 1995, dictada por el Juez de Distrito de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, por medio del cual se condena a NESSIM DABAH y a GUPSY IMPORTS, INC.

El Magistrado González manifestó su impedimento en los siguientes términos:

> "Aprecio que la demanda está firmada por el Licenciado Octavio Amat, en representación de la firma Arias, Fábrega y Fábrega. Me unen al Licenciado Amat relaciones de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad; por lo tanto, de conformidad con el artículo 749, ord. 1° del Código Judicial, manifiesto estar impedido para conocer del caso ..."

Como fundamento de derecho invoca el Magistrado Rafael González lo establecido en el artículo 749, numeral 1°, del Código Judicial, según el cual es causal de impedimento "el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el Juez o su cónyuge, y alguna de las partes".

De la lectura del impedimento el resto de los Magistrados observan que el mismo se encuadra dentro de lo dispuesto en el numeral 1° del mencionado artículo, por lo que lo procedente es pues, declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Rafael González, lo separa del conocimiento del mismo, y llama al Magistrado Eligio Salas, de la Sala Primera de lo Civil, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA SEÑORITA AURI HERCILIA MORRISON CAMPOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 15-95 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingreso a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia el cuaderno contentivo del recurso de apelación, propuesto por el licenciado Juvenal Rodríguez Brandao, quién actúa en nombre y representación de la señorita AURI H. MORRISON C., en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 15-95 de 14 de noviembre de 1995, la cual resuelve el Concurso N° 279-95 Mixto para la Posición N° 284 de Oficial Mayor del Juzgado Primero de Circuito, Ramo Civil, Veraguas.

El único punto en el que se apoya el escrito de apelación se puede apreciar diáfanamente en el siguiente hecho y que a continuación extraemos:

> "Honorables miembros de la Comisión del Personal, pido que se evalúe el documento de Certificación expedido por la Universidad Latina de Panamá, extensión de Santiago, Veraguas en el cual consta que soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y curso el sexto cuatrimestre en el cual finaliza el día 22 de diciembre de este año en curso, por tanto solicitó que reconsidere dicha resolución que se me incluya entre los seleccionados."

Una vez transcrita la parte medular del reclamo presentado por la recurrente, es menester pasar a analizar lo resuelto por la autoridad que conoció del recurso de reconsideración en primera instancia.

La Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial -Penonomé- Provincia de Coclé, resolvió el recurso de reconsideración mediante Resolución N° 01-96 de 2 de enero de 1996 en la que se decide mantener en todas sus partes la Resolución N° 15-95 de 14 de noviembre de 1995, y concedió al atacante subsidiariamente ante esta Superioridad el recurso de apelación, previo los trámites de notificación.

Al ponderar la Sala, los argumentos aportados por la parte recurrente contra la resolución dictada por la Comisión de Personal, ésta manifiesta que coincide con lo actuado en primera instancia en el sentido que no es posible integrarla a la lista de elegibles u otorgarle una puntuación adicional a la parte afectada con fundamento a los documentos aportados en el expediente, una vez que esta Alta Magistratura al examinar detalladamente cada una de las piezas probatorias que componen el expediente de marras, manifiesta con suficiencia que efectivamente, cada una de ellas fue debidamente revisada y valorada por la Comisión de Personal y oportunamente también por los analistas de personal que laboran en el Departamento de Carrera Judicial, que para el caso concreto vienen a constituir los técnicos en dicha materia.

Tanto es así que, de acuerdo a la Resolución N° 15-95 de la Comisión de Personal del Distrito Judicial -Penonomé- Coclé se hace constar que la atacante Morrison C., "no es estudiante de la Facultad de Derecho de los dos últimos años" este dictamen obliga a esta Sala ha expresar lo siguiente: A) Que la recurrente al presentar sus documentos entrega los créditos universitarios oficiales (registro de estudiante) en los cuales se puede apreciar que cursa el sexto cuatrimestre (fs. 18), por ende, no se puede determinar que es una estudiante que cumple con el requisito exigido por el Aviso de Convocatoria que consiste en cursar los dos últimos años de la carrera. En este mismo orden de ideas señalaremos que ser estudiante regular de los dos últimos años según el propio estatuto universitario, es aquel estudiante que cursa todas las materias correspondientes al pensum del plan de estudio del semestre correspondiente y las aprueba con la nota mínima de "C" que le permite continuar al año o semestre siguiente sin materias pendientes.

Con relación al punto anterior, la Sala argumenta que este criterio viene a complementar lo esgrimido tanto por la Dirección de Recursos Humanos y la Comisión de Personal, en el sentido que con respecto a dicho reparo no le asiste la razón a la atacante en virtud que consta en autos que la señorita Morrison "cursa el quinto (5) cuatrimestre, no cumpliendo así con uno de los requisitos mínimos que establece el Aviso de Convocatoria" cabe destacar además, que los requisitos para ocupar el cargo de Oficial Mayor se encuentran establecidos claramente en el artículo 84 del Código Judicial que a la letra dice: se requiere ser panameño y por lo menos, ser estudiante de derecho de los dos últimos años, es decir si el aspirante es estudiante diurno, deberá estar iniciando el noveno u onceavo cuatrimestre de la carrera. Esto se sostiene tomando en consideración los actuales planes de estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Latina de Costa Rica que se observan en el presente cuaderno (fs. 12); y la concursante al no reunir este requisito de nivel académico evidenciado con los créditos universitarios oficiales por ésta aportados, observamos que los mismos, se constituyen en el único documento que nos permite determinar si es o no el aspirante estudiante de los dos últimos años, y en base a todo lo anteriormente expuesto, se desestima pues este cargo.

Este criterio en fallos anteriores esta Sala lo ha establecido como sano y correcto, además está destinado a lograr la integridad procesal y formal de los Concursos de Carrera Judicial; de allí que por razones de instrucción didáctica pasemos a transcribir el extracto de algunos de esos resueltos jurisprudenciales:

> "En Resolución de 16 de marzo de 1995, en caso de LUIS EGBERTO CASTILLO DE LEÓN contra la Resolución N° 20-94 de 31 de octubre de 1994, emitida por la Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, la Sala expresó:
>
> Observa la Sala que en relación a los requisitos mínimos del caso que nos ocupa, conforme al artículo 15 del Reglamento de Carrera Judicial se establecen las descripciones o especificaciones inherentes al cargo, de allí pues, que surjan los Avisos de

Convocatoria que reúnen tales requisitos de forma tal, que la Dirección de Recursos Humanos no puede cambiar, alterar o modificar lo establecido, y todas aquellas personas que aspiran a dicho cargo, deben ajustarse y cumplir con lo exigido".

"En Resolución de 1° de junio de 1995, en caso de FABIÁN E. RUIZ S. contra la Resolución 60-94 de 14 de septiembre de 1994, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, la Sala exteriorizó:

De ahí, que surjan los Avisos de Convocatoria que reúnen requisitos tomando en consideración la naturaleza del cargo, de forma tal, que la Dirección de Recursos Humanos no puede cambiar, alterar o modificar lo establecido para favorecer al individuo que se desempeña en la posición, sometida a concurso; en función que éste se encuentra efectuando una eficiente labor en el desempeño del cargo".

De esta manera y con fundamento a lo señalado, esta Sala considera con suficiencia que al recurrente no le asiste la razón, puesto que de lo contrario se estaría desvirtuando la naturaleza jurídica y administrativa que intrínsecamente contiene la Carrera Judicial en cada una de las normas que la regulan, tanto a nivel sustantivo como adjetivo.

Luego del estudio de las normas consagradas que regulan la materia de Concursos de Carrera Judicial, se conceptúa definitivamente que tanto la Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial, Penonomé, Provincia de Coclé, así como la Dirección de Recursos Humanos de este ente público, han manifestado acertadamente todos y cada uno de los argumentos necesarios tanto de hecho como de derecho para establecer que lo actuado por ellos ha sido conforme a las pautas establecidas, dentro del concurso ampliamente referido en la presente resolución, lo que lleva a esta colegiatura a concluir que efectivamente ha de confirmarse en todas sus partes la Resolución N° 15-95 de 14 de noviembre de 1995 dictada por la Comisión de Personal del Segundo Distrito Judicial de Penonomé, Provincia de Coclé.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 15-95 de 14 de noviembre de 1995 proferida por la Comisión de Personal del Distrito Judicial -Penonomé- Coclé, y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

°°